



Universidad
Carlos III de Madrid
www.uc3m.es

TESIS DOCTORAL

PLAZO RAZONABLE EN INVESTIGACIONES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Autor:

MARTHA INÉS RESTREPO SAAVEDRA

Director/es:

VICTOR MORENO CATENA

Tutor:

VICTOR MORENO CATENA

DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Leganés/Getafe, Enero de 2017



Universidad
Carlos III de Madrid
www.uc3m.es

TESIS DOCTORAL

PLAZO RAZONABLE EN INVESTIGACIONES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Autor: MARTHA INES RESTREPO SAAVEDRA

Director/es: VICTOR MORENO CATENA

Firma del Tribunal Calificador:

Firma

Presidente: (Nombre y apellidos)

Vocal: (Nombre y apellidos)

Secretario: (Nombre y apellidos)

Calificación:

Leganés/Getafe, de Madrid

Agradecimientos

Un agradecimiento especial al Profesor Víctor Moreno Catena, por la colaboración, paciencia, apoyo y sobre todo por escucharme. Gracias por su tiempo, así como por la sabiduría que me transmitió en el desarrollo de mi formación doctoral, y llegar a la culminación del mismo.

Dedicatoria

Primero y antes que nada agradecer a la vida por tan bella y enriquecedora experiencia y por supuesto a todas aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio.

Agradecer hoy y siempre a mi familia por el esfuerzo realizado en el apoyo en mis estudios, de ser así no hubiese sido posible. A mi amada madre que la llevo en mi corazón, a mi hijo y cómplice de este proyecto, a todos mis familiares que me brindaron el apoyo, la alegría y me dieron la fortaleza necesaria para seguir adelante.

Esperando con anhelo que estas líneas sean de valor para todos aquellos que vemos en los derechos humanos el sentir real de la humanidad.

CONTENIDO

ABREVIATURAS	13
INTRODUCCIÓN.....	15
PROBLEMAS JURIDICOS	25
CAPITULO I.....	27
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS	27
SOBRE EL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE	27
1.1 SENTENCIAS EN MATERIA PENAL.....	29
1.2 SENTENCIAS EN MATERIA LABORAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO	46
CAPITULO II.....	63
ANÁLISIS DEL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE DE ACUERDO A LAS SOLUCIONES DADAS POR EL TEDH	63
2.1 Complejidad del asunto	64
2.2 Actividad del interesado.....	68
2.3 Actuación de las autoridades.....	71
2.4 Transcendencia del asunto para el interesado	77
2.5 Análisis global del procedimiento	78
CAPITULO III.....	81
CONCLUSIONES IMPORTANTES ACERCA DE LAS SOLUCIONES DADAS POR EL TEDH SOBRE EL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE	81
SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA SOBRE EL DERECHO A SER OIDO EN UN PLAZO RAZONABLE.	99
CAPITULO V.....	185
ANÁLISIS DEL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE DE ACUERDO A LAS SOLUCIONES DADAS POR LA CORTE INTERAMERICANA	185
5.1 Complejidad del asunto	192
5.2 Actividad del interesado.....	197
5.3 Conducta de las autoridades judiciales	197
5.4 Análisis global del procedimiento	205
5.5 Afectación de la persona involucrada en el proceso	205
5.6 Efectividad de las investigaciones	206

5.7 Conclusiones importantes para los fines de este trabajo teniendo en cuenta las soluciones dadas por la CIDH	207
CAPITULO VI	227
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS SENTENCIAS DEL TEDH Y LA CIDH EN RELACIÓN CON EL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE	227
CAPITULO VII	235
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA – TJUE SOBRE EL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE	235
7.1 CONSIDERACIONES.....	250
CAPITULO VIII	255
¿QUÉ SOLUCIÓN ADOPTAR CUANDO SE HA VIOLADO EL DERECHO A SER OÍDO EN UN PLAZO RAZONABLE?	255
8.1.- Atenuante	257
8.2.- Preclusión y Sobreseimiento.....	266
8.3.- Nulidad.....	267
8.4.- Indulto	270
8.5.- Prescripción	271
8.6.- Decisión de fondo.....	274
8.7.- Reparación Económica	275
CAPÍTULO IX	279
SOLUCIONES DE LA CIDH EN MATERIA DE REPARACIONES CUANDO ADVIERTE LA VIOLACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE EN GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS	279
CAPITULO X	283
¿QUÉ SOLUCIÓN ADOPTAR CUANDO EL CASO ES COMPLEJO Y HAY DIFICULTADES PARA CUMPLIR LOS PLAZOS EN MATERIA PENAL?	283
CAPITULO XI	297
PROPUESTAS PARA OBTENER UNA DECISIÓN DEFINITIVA QUE RESPETE EL DERECHO A SER OÍDO EN UN PLAZO RAZONABLE, EN MATERIA PENAL, EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA.....	297
11.1 Propuestas para investigaciones asuntos de pequeñas causas	298
11.2 Propuesta de procedimiento para investigaciones de violaciones de derechos humanos.....	304
11.3 Propuestas para procedimiento de investigaciones de graves violaciones de derechos humanos	308

INVESTIGACIONES DE LAS GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA	321
12.1 ACUERDO DE PAZ 26 de septiembre de 2016	321
12.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL PRIMER ACUERDO	331
12.3 ACUERDO FINAL 11 de noviembre 2016	341
CONCLUSIONES DEL TRABAJO	363
BIBLIOGRAFIA.....	373

ABREVIATURAS

CEDH	Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
CADH	Convención Americana sobre Derechos Humanos
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CE	Constitución española
CEPEJ	Comisión Europea Para la Eficacia de la Justicia
CP	Código Penal
CPI	Corte Penal Internacional
CPP	Código de Proceso Penal
DIH	Derecho Internacional Humanitario
DIDH	Derecho Internacional de los Derechos Humanos
DUDH	Declaración Universal de Derechos Humanos
ER	Estatuto de Roma
EMP	Elementos Materiales Probatorios
LECRIM	Ley de Enjuiciamiento Criminal
JCG	Juez de Control de Garantías
JEP	Jurisdicción Especial para la Paz
LO	Ley Orgánica
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PIDCP	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
SIVJNR	Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición,
STEDH	Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TC	Tribunal Constitucional
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación pretende abordar el derecho que tienen los indiciados o acusados a gozar del derecho a que la investigación penal se resuelva en un plazo razonable, o sea, de manera pronta, sin dilaciones indebidas. Igualmente, tendrá en cuenta las incidencias y consecuencias que la vulneración del derecho al plazo razonable genera para la víctima¹, dado que en la práctica los estudios se orientan a considerar más los detrimentos y menoscabos que la violación de este derecho genera en el indiciado o acusado.

Se hará una distinción entre las violaciones de derechos humanos, o sea aquellas que generan la vulneración de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante CADH² o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en adelante PIDCP³, instrumentos que protegen el derecho a la vida; prohíben la tortura u otros tratos crueles inhumanos o degradantes; prohibición de la esclavitud en todas sus formas; protección del derecho a la libertad; del debido proceso; la libertad individual (de movimiento, pensamiento, expresión, conciencia y religión); el derecho a la igualdad; de aquellas violaciones de derechos humanos que se cometen en un contexto de violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos, que son consideradas como graves violaciones de derechos humanos,⁴ como el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra.

¹ Asamblea General. Resolución 40/34: *Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder*. 29-11-1985. En este documento se define el concepto de víctima así: 1. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 2. Podrá considerarse “víctima” a una persona con arreglo a la Declaración independiente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye además, en su caso, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

² San José, Costa Rica. Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Estados Americanos. 7 al 22 de noviembre de 1969. Aprobada en Colombia por la ley 16 de 1972.

³ Asamblea General de Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Naciones Unidas. 16 de diciembre de 1966. Aprobado en Colombia por la ley 74 de 1968.

⁴ El Alto Comisionado para los Derechos Humanos Oficina en Colombia. Intervención de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas. En: *Conversatorio sobre justicia penal militar*. Medellín, 14 septiembre de 2005, se refirió al alcance de grave violación de derechos humanos, “(...) por grave violación de derechos humanos debe entenderse toda acción u omisión

En este tópico es necesario profundizar un poco más en el concepto de las graves violaciones de derechos humanos, dado que, de manera recurrente, abordaremos esta temática.

En palabras de la Comisión Internacional de Juristas, “Bajo el derecho internacional, ciertas violaciones de derechos humanos son calificadas de “graves”, “serias”, “flagrantes” o “manifiestas”. La jurisprudencia y la doctrina concuerdan en que, aun cuando se emplean indistintamente estas nociones, todas apuntan a calificar y caracterizar el mismo tipo de violaciones de derechos humanos. El derecho internacional considera que, entre otros actos, la tortura, las ejecuciones extra judiciales, sumarias o arbitrarias y las desapariciones forzadas son graves violaciones a los derechos humanos. La Asamblea General de Naciones Unidas, en reiteradas oportunidades, ha recordado que las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y la tortura constituyen graves a los derechos humanos. La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas reitera que la desaparición forzada es una violación grave a los derechos humanos. La jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos es coincidente en esta materia. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reiteradamente calificado a la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, entre otros actos, como graves violaciones de derechos humanos. Uno de los elementos que caracteriza como “grave” una violación es el carácter de inderogable de los derechos humanos afectados y/o la violación de normas imperativas del derecho internacional (jus cogens).”⁵.

El preámbulo del Estatuto de Roma hace relación a esas graves violaciones de derechos humanos que han venido azotando a la humanidad de la siguiente manera:

Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento,

Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad,

con la cual servidores públicos (o personas de condición particular que obran bajo la determinación, con el apoyo o con la aquiescencia de agentes del Estado) vulneran o amenazan severamente alguno de los derechos fundamentales enunciados en instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

⁵ Comisión Internacional de Juristas. *Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos – Guía para Profesionales*. Ginebra, 2008, págs. 76 y 77.

Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,

Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia,

Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes.

Es de señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos caracterizó como graves violaciones de derechos humanos aquellos actos “como la tortura, ejecuciones sumarias, extra legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”⁶

El trabajo examinará las soluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en adelante TEDH y de la Corte Interamericana Derechos Humanos, en adelante CIDH, ofrecidas en su jurisprudencia pues a través de estos pronunciamientos se comienza a delimitar el concepto de “plazo razonable”, evidenciando estos órganos judiciales las graves dificultades que aparecen a la hora de definirlo, optando por sentar unos criterios que permitan su comprensión, aplicación e interpretación.

Estos criterios - en este trabajo, tendrán especial interés, pues se presentaran como una herramienta a tener en cuenta, cuando se fije el plazo que debe orientar este tipo de investigaciones de graves violaciones de derechos humanos, en este caso por el Estado colombiano, que es hacia dónde va dirigida la propuesta, pues en estos eventos, dadas las connotaciones internacionales de estas conductas, muchos como crímenes internacionales, algunos de ellos imprescriptibles, hay una exigencia internacional, cual es que tienen que resolverse, pues así lo reclama la comunidad internacional⁷.

⁶ Comisión Internacional de Juristas, *Op, cit*, p, 21.

⁷ En este punto es importante traer a colación los antecedentes de este desarrollo, porque como dijera, FORER, Andreas y LÓPEZ DÍAZ, Claudia (Director AMBOS Kai) *Selección y priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes internacionales. Un estudio comparado*. Ed. GAUG. Montevideo. 2011. págs. 23 - 24. “En las últimas décadas del siglo XX se consolidó la obligación de los Estados de investigar y perseguir a los autores de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, especialmente en lo que respecta a los crímenes internacionales centrales, esto es, el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Esta consolidación es el resultado de una serie de tratados internacionales que

Por otra parte, se evidencia que los organismos internacionales además de los criterios fijados para examinar si ha existido vulneración del derecho al plazo razonable no requieren a los Estados Partes para que consagren en la legislación procesal unos plazos, relativos a la duración de los procedimientos penales porque de ser así, si realmente se establecieran, o si existieran esos plazos en la respectiva legislación, se podría reclamar su cumplimiento, en aras de garantizar la efectividad de este derecho, porque tal como lo sostiene Norberto Bobbio *“Hoy en día el problema central relativo a los derechos humanos no es tanto justificarlos sino protegerlos”*,⁸ de hacerlos realidad, pues no basta que se consagren, sino que haya la seguridad, la certeza de su garantía.

El trabajo plantea la necesidad que los Estados Partes establezcan plazos precisos en materia procesal penal, pero posibilitando a las mismas autoridades, a través de unos jueces designados para ello, establecidos como Jueces de Control de Garantías en Colombia, para que los plazos en un proceso dado, en caso de violaciones de derechos humanos, se puedan prorrogar o ampliar, según sea la necesidad, especialmente cuando se trata de investigaciones de graves violaciones de derechos humanos pero siempre, en todos estos casos, justificando la necesidad de ese término adicional.

Por otra parte, este trabajo realiza un análisis de casos adelantados por la CIDH respecto a las causas reiterativas que han generado en América Latina la violación al derecho del plazo razonable, y de acuerdo a su jurisprudencia, queda evidente que un número muy significativo de estos casos no se resolvieron en un plazo razonable porque desde su iniciación hubo trascendentales errores por parte de las autoridades que asumieron la investigación, por lo cual se destacará estos casos, para posteriormente, a partir de esas deficiencias, proponer algunas soluciones que podrían tomarse, en aras de no seguir incurriendo en esas falencias, que generan retardos y dilaciones injustificadas, en busca de una mayor eficacia y una respuesta más rápida, en la resolución de estas investigaciones.

condenan la comisión de esos crímenes y establecen procedimientos específicos para la lucha eficaz contra la impunidad, del desarrollo del *soft law* y los precedentes judiciales en la materia y sobre todo la creación de tribunales especiales para juzgar esa clase de crímenes, en particular, cuando se cometen en situaciones de guerra. Estos avances en el derecho internacional han comenzado a reemplazar las amnistías y a los indultos legales por procesos penales internacionales, híbridos o nacionales como mecanismo principal para hacer frente a las atrocidades masivas cometidas en conflictos armados o en regímenes autoritarios”.

⁸ Discurso de Norberto Bobbio en la conferencia *“Fundamento de los Derechos Humanos”*, 1964. Vid. BOBBIO, Norberto. *El tiempo de los derechos*. Ed. Sistema. Madrid, 1.991.p. 244.

OBJETO DE ESTUDIO

La violación del plazo razonable en materia penal y en especial en investigaciones de violaciones de derechos humanos.

El estudio aborda la problemática de la violación del plazo razonable en materia penal, pero tendrá especial interés el análisis de la posible vulneración de este derecho en investigaciones de violaciones de derechos humanos y de graves violaciones de derechos humanos; por consiguiente, el objeto de estudio se centra en la materia penal.

De igual manera, tendrá en cuenta la afectación que la violación de este derecho genera para los sujetos procesales, pues el derecho al plazo razonable no solo está consagrado a favor del indiciado o imputado o acusado, para que obtenga una pronta respuesta del Estado, sino que cobija a las víctimas de esas violaciones, quienes igualmente requieren hacer efectivos sus derechos de verdad, justicia y reparación integral, en un “plazo razonable”, para lo cual, a su favor, también se extienden estos instrumentos de derechos humanos.

En primer término, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, en adelante CEDH, cuyo artículo 6º. Derecho a un proceso equitativo, dispone que: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de manera equitativa, públicamente y en un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil, o bien sobre el fundamento de toda acusación penal dirigida contra ella”.

En segundo lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, es un instrumento que de manera literal pareciera que este derecho del plazo razonable solo lo consagrara a favor del indiciado o acusado, pero tendrá que aceptarse que al igual que los otros dos instrumentos citados, debe cobijar también a las víctimas de violaciones del Pacto⁹. Este instrumento dispone en su artículo 14 que “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá, en plena

⁹ GOMEZ SANTAMARIA, Ma. De Los Ángeles. *La reforma del proceso penal. II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas como garantía fundamental en el proceso penal*. Ed. Ministerio de Justicia. Madrid. 1989. p. 694. Determina la autora que el artículo 14.3 circunscribe su aplicación exclusivamente al ámbito del proceso penal, mientras que la constitución española y el Convenio Europeo extienden su ámbito más allá del proceso penal.

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas”.

En tercer lugar, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de 1969, artículo 8. Garantías Judiciales, reconoce en su número 1 que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

Asimismo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aprobada inicialmente en 2000, y luego en vigor desde diciembre de 2009, junto con el Tratado de Lisboa, otorga un reconocimiento y una protección en su artículo 47. II al proceso justo y sin dilaciones, en términos similares al CEDH. La Carta forma parte del derecho originario de la Unión Europea, con la misma fuerza de los tratados, como dispone el artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea.

Por lo tanto, estos instrumentos internacionales consagran derechos para todas las personas del proceso penal (indiciado, acusado, víctimas) a tener derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas o indebidas, lo que se traduce en lograr una resolución definitiva, de manera pronta, en un plazo razonable. Por tanto quedan prohibidas las dilaciones injustificadas o indebidas que es lo contrario a ese derecho, lo adverso a un plazo razonable.

Así pues, uno de los objetivos de este trabajo es presentar el derecho del indiciado o imputado a ser juzgado en un plazo razonable, como también - visibilizar a las víctimas del proceso penal, que gozan del mismo beneficio, en especial, las que han sido objeto de violaciones de derechos humanos o de graves violaciones de derechos humanos, dadas las graves repercusiones que la vulneración del plazo razonable trae consigo para este sujeto procesal, recordando que durante el siglo pasado, millones de seres humanos perecieron como consecuencia de genocidios, crímenes de lesa humanidad y otros crímenes graves reconocidos como tales por el derecho internacional. Pero para romper ese ciclo de violencia e impunidad, surgió un movimiento contra la impunidad y la efectividad de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, generando un consenso sobre la necesidad de crear una instancia internacional de carácter permanente para el juzgamiento de los responsables de los crímenes atroces, consenso que ha quedado manifiesto con la entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacional en el año 2002, en adelante ER, después de haber sido ratificado por más de sesenta Estados, tan sólo

cuatro años después de su suscripción en Roma, el 17 de julio de 1998, por 120 Estados.¹⁰

La nueva posición procesal atribuida a las víctimas en las actuaciones ante la Corte Penal internacional refleja, por tanto, el reconocimiento general del derecho de las víctimas a una tutela judicial efectiva, tal y como subraya el apartado 12 de los principios y directrices básicos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y a obtener reparaciones, así como el principio 8 de las directrices propuestas para combatir la impunidad de los autores de los delitos de derecho internacional.¹¹

En consecuencia, este trabajo va dirigido a presentar la vulneración del derecho al plazo razonable de los sujetos procesales en el proceso penal, pero partiendo de la revisión de la jurisprudencia de los tribunales internacionales, TEDH y CIDH, desde una perspectiva amplia, para examinar cómo se ha abordado este derecho; cómo se define; cuándo comienza a vulnerarse; analizando la definición que cada uno hace del derecho; si aportan una respuesta satisfactoria, en aras de evitar la lesión de este derecho los Estados Partes de las respectivas convenciones.

Se revisará cuál es la posición de estos tribunales cuando se comprueba la lesión del derecho al plazo razonable respecto de los derechos del indiciado o acusado, y el de las víctimas, pero también los compromisos que exigen a los Estados en esta materia, para que tomen medidas que eviten su transgresión. En este trabajo se plantea ante todo evitar la lesión, prevenirla, porque luego de conculcado, no existe ya ningún remedio que permita una restitución “*in natura*” del derecho. Así mismo, el trabajo busca revisar las respuestas que deben recibir del Estado tanto el indiciado o acusado como las víctimas, cuando se ha conculcado el derecho al plazo razonable.

También se presentará una propuesta de cómo orientar las investigaciones en materia penal en el Estado colombiano, indicando desde ya que en este caso se pretenden diferenciar los procedimientos penales: las investigaciones por delitos

¹⁰ Cfr. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. *Compilación de derecho penal internacional*. Bogotá. 1ª Ed. 2003. p. 312.

¹¹ Cfr. OLÁSULO, Alonso Héctor y GALAIN PALERMO, Pablo. *Dialogo jurisprudencial en Derechos Humanos. Entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales*. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. 2013. págs. 1263 y 1264. Vid VEGA GONZÁLEZ, Paulina. “El papel de las víctimas en los procedimientos ante la Corte Penal Internacional: sus derechos y las primeras decisiones de la Corte”. Revista Internacional de Derechos Humanos No 5. 2006, p. 21.

comunes o de poca trascendencia social, tendrán que gozar de unos plazos y de unos procedimientos más simplificados¹², mientras que procedimientos relacionados con violaciones de derechos humanos, en particular las de mayor gravedad, tendrán que establecer unos plazos más amplios, que se puedan prorrogar a petición del funcionario instructor, pero con la obligación de demostrar la necesidad de su ampliación, como se verá en el capítulo VII.

Ahí se plantea que la ley, al señalar los plazos, prevea, en caso de violaciones de derechos humanos, la aplicación de los criterios fijados por el TEDH y la CIDH, en cuanto a los parámetros relacionados con la complejidad del asunto, de tal manera que anticipadamente se especifique que en un asunto con más de tres indiciados y/o una gran cantidad de delitos que por naturaleza son considerados como graves, y/o gran cantidad de elementos materiales probatorios por practicar, y/o en investigaciones donde estén involucrados agentes del Estado, relacionados con violaciones de derechos humanos, o de delitos transnacionales, redes criminales, o una gran cantidad de víctimas, además de existir la diferenciación respecto al procedimiento, también que los plazos, sean más amplios, porque es reconocido por estos organismos que existe mayor dificultad en la investigación, en cuanto a identificar e individualizar a los responsables y la recopilación de los elementos probatorios para llevarlos a juicio.

Otra propuesta va encaminada a que el Estado colombiano establezca en la legislación procesal penal la obligación de aplicar estrictamente protocolos internacionales, como el de Minnesota¹³ o el de Estambul¹⁴; técnicas para la inspección técnica de cadáveres; protocolos para realizar las necropsias, etc.,

¹² Está idea de abreviar los procedimientos en aras de obtener una respuesta rápida para esta clase de conductas se ha desarrollado en España, y así lo destaca, MORENO CATENA, Víctor. *Los nuevos procesos penales. El procedimiento abreviado*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004. Págs. 17 y 18. “El modelo de justicia implementado en la ley de enjuiciamiento criminal de 1982 hace una división entre delitos y faltas, dividiendo los procesos en ordinarios y especiales, un proceso simplificado para casos de flagrante delito. De otra parte que las modificaciones a la LECRIM de 1982, en el año 2002 tienen como finalidad reordenar el proceso abreviado, instaurar el enjuiciamiento rápido de delitos, regular el juicio de faltas, pretendiendo una decisión inmediata sobre algunas infracciones menores”. Vid. COLUMNA HERRERA, Luis Miguel. *Juicios rápidos por delitos y faltas*. Ed. Instituto de Estudios Almerienses. Almería. 2004, p. 16. “Las modificaciones a la Ley de enjuiciamiento criminal van en busca de una justicia más rápida y ágil, que pueda dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, que se ven obligados a acudir con más frecuencia a los Tribunales, además de implementar procedimientos más sencillos y eficaces”.

¹³ Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, Naciones Unidas o Protocolo de Minnesota. 1991.

¹⁴ El Protocolo de Estambul de la Organización de Naciones Unidas (ONU), presentada el 9 de agosto de 1999, con la finalidad de combatir a tortura, se le llama Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

principios en caso de muertes violentas, orientaciones dadas en caso de delitos sexuales, tener en cuenta la perspectiva de género, que permiten avanzar en el esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos en un plazo razonable, pues así se garantiza su efectividad desde su inicio, obligando a seguir una serie de pautas que permitirán un buen direccionamiento de la investigación, y se obvian las falencias atribuidas a las autoridades, que de acuerdo a este estudio, son las mayores responsables de la violación del derecho a ser oído en un plazo razonable.

Se tendrá en cuenta otra propuesta dada por la CIDH sobre la obligación que tienen los funcionarios judiciales de investigar el contexto social, político, económico, geográfico, etc., en que se realizaron los hechos en casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos, porque ello permite perseguir a todos los actores, especialmente a los máximos responsables.

En aquellas investigaciones relacionadas con graves violaciones de derechos humanos, por tratarse de eventos que afectan a la comunidad internacional, la ley procesal debe prever la obligación de vincular fiscales, jueces e investigadores expertos en temas de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, en adelante DIH, como una garantía que permitirá que desde la iniciación de la investigación exista una orientación que defina claras líneas investigativas, en aras de lograr la eficiencia en acusar y sancionar a los responsables, y el cumplimiento del derecho del plazo razonable para los actores y para las víctimas de esas violaciones de derechos humanos.

En consecuencia, la investigación abordará la problemática en torno a la violación del derecho al plazo razonable, partiendo primero de un número significativo de sentencias del TEDH y de la CIDH, lo que permitirá evaluar los desarrollos jurisprudenciales de ambos tribunales, las dificultades que ambos enfrentan para definir y sentar bases claras en aras de proteger este derecho.

También es importante señalar que para el TEDH y la CIDH tratándose de casos en materia penal, el derecho al plazo razonable tiene aplicación durante el tiempo que una persona debe durar privada de su libertad, tal como lo reclama el CEDH en su artículo 5.3 cuando establece que “toda persona detenida preventivamente o internada en las condiciones previstas en el párrafo 1.c), del presente artículo, deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento...” La CADH en su artículo 7.5 que establece “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado

por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad...”; el PIDCP, en el artículo 9.3 indica que “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”. Se trata de plazos diferentes, un plazo para tramitar el proceso penal en su totalidad y un plazo relacionado con la prisión preventiva, los cuales en un momento dado pueden coincidir o no.

En este trabajo, tras abordar toda la problemática en torno al derecho al plazo razonable se ha intentado definir como “el plazo fijado por la ley procesal en un asunto de naturaleza, civil, laboral, penal, administrativo, etc., como garantía de cumplimiento del derecho al plazo razonable dentro de la respectiva actuación judicial”.

De igual forma, que tras revisar la jurisprudencia de la Corte Interamericana podría definirse el derecho al plazo razonable como “la adopción de una sentencia definitiva o en firme contra el responsable (s) de las violaciones de derechos humanos, para de esta forma posibilitar los derechos de las víctimas y/o familiares, de conocer la verdad de lo que sucedió, sanción a los responsables, efectivizando el derecho señalado en la Convención América, de ser oídas y que en un plazo adecuado, justo, de conformidad con las complejidades del caso, las autoridades lo hayan resuelto de manera definitiva, lo que presupone por tanto la posibilidad de acceder a la justicia e interponer los recursos de ley.

PROBLEMAS JURIDICOS

- 1.- ¿Cuál debe ser el término para adelantar una investigación penal?
- 2.- ¿Es necesario delimitar y clasificar qué tipo de investigación (de acuerdo a los delitos investigados) para determinar un determinado plazo?
- 3.- ¿Se garantiza el derecho al plazo razonable cuando se fija un mismo plazo en una investigación penal para todos los delitos, sin tener en cuenta la complejidad del asunto?
- 4.- ¿En violaciones de derechos humanos, se compadece con el derecho al plazo razonable el que se fijen otros plazos, atendiendo el factor previsto por el TEDH y CIDH, relacionado con la complejidad del asunto, entre ellos, la dificultad de identificar e individualizar a los responsables y de acopiar Elementos Materiales Probatorios, en adelante (EMP)?
- 5.- ¿La investigación adelantada en un tiempo muy corto garantiza el derecho al plazo razonable para el indiciado o acusado o víctima?
- 6.- ¿Su prolongación en el tiempo conlleva para el imputado o acusado vulneración del principio de inocencia? O ¿Derecho de defensa?
7. ¿La violación del plazo razonable vulnera los derechos de las víctimas de obtener verdad, justicia y reparación integral?¹⁵
- 8.- ¿Si en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en adelante (DIDH) se justifica sacrificar el derecho a ser oído en un plazo razonable Vs. acceso a la justicia, en pro de conocer la verdad, que haya justicia y reparación integral para las víctimas?

¹⁵ CARNELUTTI, Francisco *“Como se hace un Proceso”*. 3ra reimpresión, trad. Ed. Legis, Bogotá, 2002, p. 202, está de acuerdo que la garantía de justicia no se traduce en rapidez, así sustentó: “(...) la fórmula justicia rápida debe tomarse con beneficio de inventario pues el problema de la justicia rápida plantea un problema análogo a la cuadratura del círculo. La justicia si es segura no es rápida y si es rápida no es segura”, y agregaba en su obra “(...) hay que tener el valor de decir del proceso que quién va despacio va bien y va lejos. Señalaba que el proceso deriva de proceder -dar un paso después del otro- y se ocupa, no tanto para castigar cuanto para saber si se debe castigar”.

CAPITULO I

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

SOBRE EL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE

Antes de entrar a revisar y analizar las sentencias del TEDH, es importante hacer una pequeña introducción sobre el nacimiento y desarrollo del derecho al plazo razonable. Lo primero, señalar que el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable es una conquista reciente. El problema de la excesiva duración del proceso sólo fue objeto de una regulación jurídica positiva específica y decidida después de la Segunda Guerra Mundial cuando entre los derechos fundamentales de las personas comenzaron a ser incluidos.¹⁶

Figura en el CEDH, que es el primer instrumento internacional de derechos humanos que lo consagró, art. 6.1 y en la CADH, art. 8.1, en ambos como derecho al plazo razonable, pero también en algunos países se le denomina como el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas, como en España, artículo 24.2 de la Constitución, Colombia, artículo 29 inciso final, debido proceso sin dilaciones injustificadas, los cuales siguen la denominación dada en el PIDCP, en el art 14.3.

Por tanto, podemos indicar que las expresiones “el derecho a un plazo razonable, sin dilaciones indebidas o injustificadas”, se refieren al mismo derecho. Este derecho está consagrado en el Estatuto de Yugoslavia en el artículo 21.4, en el Estatuto de Ruanda en el artículo 20.4, en el artículo 67.1.c del ER, Carta Africana artículo 7.1.d, usando estos instrumentos la denominación “dilaciones indebidas”.

El derecho al plazo razonable hace parte de debido proceso, constituido como un derecho humano fundamental a un juicio justo. Proviene del artículo séptimo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, así como de las enmiendas cuarta a séptima de la Constitución estadounidense de 1776, adoptadas en 1791. Pertenecen a los derechos civiles y políticos o de primera generación, y consiste en el conjunto de garantías procesales que protege al individuo cuando se convierte en sujeto pasivo de la justicia del Estado.¹⁷

¹⁶ Cfr. PASTOR, Daniel R. *El plazo razonable en el proceso del estado de derecho*. Ed. AD- HOC. 1ª Edición, Argentina. 2002, p. 54.

¹⁷ Cfr. HUERTAS DÍAZ, Omar; TRUJILLO LONDOÑO, Francisco Javier; LOZANO PACHECO, Luis Gonzalo y SANABRIA RINCÓN, José Alfredo. *El Derecho Al Debido Proceso Y A Las Garantías Judiciales En la Dimensión Internacional de los Derechos Humanos*. Ed. Ibañez. Bogotá. 2004, p. 29

Que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es un derecho fundamental y una garantía procesal; es un derecho público y subjetivo; la naturaleza del derecho es prestacional, reaccional y autónoma, aunque instrumental del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión; y que el sujeto pasivo son los órganos jurisdiccionales¹⁸.

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es un derecho fundamental autónomo y distinto de los demás derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24.2 C.E, en particular es un derecho distinto del derecho a la tutela judicial efectiva; en cuanto a su ámbito de aplicación, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas despliega su eficacia en todo tipo de procesos – y no sólo en el proceso penal; el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es prácticamente idéntico al derecho a que la causa sea oída en un plazo razonable, recogido en el artículo 6.1 C.E.D.H¹⁹.

Para Zaffaroni desde un punto de vista dogmático un proceso penal cuya tramitación supera el plazo razonable, esto es, de duración excesiva, no sólo lesiona el derecho del imputado a ser juzgado rápidamente sino que también afecta a todos y cada uno de sus derechos fundamentales y sus garantías procesales reconocidas en la Constitución. Como consecuencia, si el proceso se prolonga indebidamente todas sus reglas de funcionamiento acabarán distorsionando su derecho a un juicio rápido y los principios elementales de la actuación legítima del Estado²⁰

Como ya se ha dicho la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de Roma de 1950, aparece como el primer instrumento internacional que consagró el derecho del imputado a que su causa se resuelva prontamente, estipulando en el artículo 6º una gama de derechos en donde aparece el derecho al plazo razonable.

Este instrumento internacional crea tres órganos: La Comisión Europea de los Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y el Comité

¹⁸ Cfr. RODÉS MATEU, Adriá. *El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Estudio de su configuración constitucional y de su restablecimiento en el ordenamiento jurídico español*. Ed. Atelier. Barcelona 2009. Págs.27 y 28

¹⁹ Cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, IGNACIO “y otros” dirigidos por ALZAGA VILLAAMIL, Oscar. *Comentarios A La Constitución Española De 1978*. Tomo III. Artículos 24 a 38. EDESA, Madrid.1996. Págs. 38 y 45.

²⁰ ZAFFARONI, ALAGIA,SLOKAR. *Derecho Penal. Parte General*, “La violación del principio de inocencia avanza con la duración del proceso”, 2º edición, ed. Ediar, Buenos Aires. 2002, p. 859. Vid CAFFERATA NORES, José I. *Proceso penal y derechos humanos. La influencia de la normativa supranacional sobre derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal argentino*. 2ª edición. Editores del Puerto. Argentina. 2008.

de Ministros. La función de la Comisión era definir la admisión de las demandas; buscar arreglos amistosos, y de no existir un acuerdo, presentar el caso al Tribunal, previo concepto sobre la violación o no del Convenio. El Tribunal nace con la finalidad de conocer los asuntos sometidos a su consideración, ya fuera por la Comisión o por un Estado interesado, emitiendo la respectiva sentencia. Por su parte el Comité de Ministros es el encargado de supervisar las sentencias por parte de los Estados Partes.

Este esquema cambió radicalmente a través del Protocolo número 11 en mayo de 1994, en donde se decidió eliminar la Comisión Europea, correspondiéndole al Tribunal recibir demandas de cualquier persona física, organización no gubernamental o grupos de individuos que se consideren víctima de una violación por parte de una de las Altas Partes Contratantes de los derechos reconocidos en la Convención o en sus Protocolos.

Por tanto, el TEDH es el primer órgano internacional que comenzó a sentar su jurisprudencia sobre el alcance y contenido del derecho a que el proceso se resuelva en un plazo razonable, desarrollos que posteriormente fueron recogidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por los tribunales nacionales de otros países.

Para nuestro estudio es pertinente analizar algunas de las sentencias del TEDH, con la finalidad de conocer los planteamientos sobre el tema; cómo se va desarrollando la jurisprudencia; definición del derecho al plazo razonable; que soluciones ofrece para evitar su vulneración, y así mismo, una vez establecido que ha conculcado este derecho, qué exigencias u obligaciones se imponen a los Estados Partes para evitar futuras lesiones.

1.1 SENTENCIAS EN MATERIA PENAL

CASO WEMHOFF VS. ALEMANIA (1968)²¹

En este caso la Comisión planteó la doctrina de los “siete criterios”, en aras a solucionar la problemática en torno a la definición del plazo razonable relacionado con la prisión preventiva. Estos son: a) la duración de la detención en sí misma. b)

²¹ Sentencia de 27 de junio de 1968. Wemhoff es un ciudadano alemán que es investigado en su país por los delitos de abuso de confianza, fraudes, con consecuencias a nivel nacional e internacional. Estuvo privado de la libertad por espacio de tres años y cinco meses.

la duración de la prisión preventiva con relación a la naturaleza del delito, a la pena señalada y a la pena que debe esperarse en caso de condena, c) los efectos personales sobre el detenido, tanto de orden material como moral entre otros, d) la conducta del imputado en cuanto haya podido influir en el retraso del proceso, e) las dificultades para la investigación del caso (complejidad de los hechos, cantidad de testigos e inculpados, dificultades probatorias, etc.), f) la manera en que la investigación ha sido conducida, g) la conducta de las autoridades judiciales.

Para la Comisión los criterios a), b) y c) indicaban que los términos de privación de la libertad, para el señor Wemhoff, habían sido violatorios del CEDH, en su artículo 5.3, en cuanto la norma dispone que *“toda persona perseguida penalmente tiene derecho a que la duración de la detención provisional no exceda un plazo razonable”*, a la vez que determinó que el plazo del procedimiento sí fue razonable, porque valorando los criterios d, f, y g, la complejidad del asunto provocó que se prolongara el término.

Estos criterios no fueron admitidos por el TEDH, rechazando esa metodología, considerándolos como una *“medida de disciplina intelectual”*, pero pese a ello, en su jurisprudencia, recoge los criterios relacionados con la conducta del imputado, para ver si tuvo que ver con el retraso, la complejidad del caso y la conducta de las autoridades.

En este asunto primó lo relacionado con la complejidad del proceso y la conducta de las autoridades y concluyó que a pesar de que el tiempo de duración fue excesivo, no hubo violación del plazo razonable, porque las autoridades lo dirigieron con diligencia, dada la complejidad del caso. Tampoco encontró que el plazo de la prisión preventiva hubiese sido irrazonable, porque igualmente el caso era complejo y hubo igualmente diligencia de las autoridades.

Lo más importante de la sentencia del TEDH sobre este punto es que pone en claro por primera vez que el plazo de duración razonable del procedimiento penal se computa desde las primeras indicaciones o denuncias formuladas oficialmente contra el imputado. En cambio, en cuanto al momento final del plazo la sentencia no arroja mucha luz. Deja establecido que la razonabilidad de la de la duración debe extenderse “al menos” hasta la decisión de absolución (también sobreseimiento) o condena, aunque ésta se alcance en segunda instancia, pero deja en las sombras “si la duración del procedimiento en casación debe ser tomada en consideración”,

aunque, a juicio de reflexiones anteriores, pareciera que para el Tribunal el plazo de duración razonable penal comprende únicamente al de la primera instancia.²²

Conclusiones: (i) Se delimitan dos plazos en el proceso penal, uno el relacionado con la prisión preventiva y otro el relacionado con la resolución del proceso, demandándose en ambos casos que se respete el plazo razonable. (ii) También en esta sentencia se indica cuándo comienza a contarse el plazo razonable en relación con la duración del proceso penal, determinándose que es a partir de las primeras indicaciones o denuncias formuladas inicialmente contra el imputado.

CASO NEUMEISTER VS. AUSTRIA (1968)²³

En lo que respecta al término de duración del proceso el TEDH considero que en este caso a pesar de que habían transcurrido siete años desde que se abrió la instrucción preparatoria contra Neumeister, ese tiempo representa una duración extraordinaria, pero tuvo en cuenta que las autoridades austriacas en todo ese tiempo tan largo pusieron toda la diligencia en la tramitación de la causa, destacando lo compleja de la misma, dado que no hubo cooperación extranjera de manera eficiente para desarrollar numerosas investigaciones, de modo que el Convenio no fue violado en lo que tiene que ver con la duración razonable del proceso penal. De acuerdo a lo anterior, para el TEDH, la cooperación internacional es un factor que en un momento dado genera complejidad en un asunto, tal como ocurrió en el presente, porque esa falta de asistencia judicial, fue el criterio del TEDH para decidir que el derecho no fue vulnerado. Por el contrario, encontró que efectivamente hubo violación del plazo razonable respecto de la prisión preventiva,

²² Cfr. PASTOR, Daniel. *Op. cit.*, p. 115. En este punto el autor refiere también “que es tan problemática la cuestión de la interpretación del sentido de la expresión “plazo razonable” que en el caso tratado se llegó a discutir, a los fines del cómputo del momento de finalización de él, una diferencia entre los textos oficiales del Convenio en inglés y francés. De acuerdo con el texto inglés – tesis sostenida por el gobierno alemán- el plazo finalizaba al comenzar el juicio contra el acusado. En cambio, según la versión francesa, defendida por la Comisión, el plazo comprendía todos los actos de procedimiento, esto es, los previos al juicio y también los posteriores. Como se ha visto, el Tribunal adoptó la posición de la Comisión, aunque dejó sin resolver – o mal resuelto – el problema del tiempo insumido por la tramitación del recurso de casación. El tribunal también reconoció que la opinión contraria ciertamente estaba sugerida por el texto en inglés (puntos 6 a 9 del capítulo citado supra, de esta sentencia).

²³ Sentencia de 27 de junio de 1968. Fritz Neumeister, es un austríaco investigado por delitos relacionados con fraude fiscal en donde estaban involucradas 21 personas más. El caso inició el 11 de agosto de 1959 y tras nueve años no había sido posible que se resolviera con una sentencia condenatoria, pese a que estuvo privado de la libertad en dos oportunidades, discutiéndose el excesivo término de duración del proceso.

porque no obstante las autoridades le dieron la oportunidad de gozar ese derecho, le fijaron una caución tan elevada que al final representó una negación del mismo. Así las cosas, el plazo de duración del procedimiento fue considerado razonable mientras que el de la prisión no.

No obstante lo anterior, hubo dos votos disidentes, de acuerdo a los cuales hubo violación del plazo razonable, por excesiva duración, el de la juez Zekia, no admitió que una situación de estas tenga razón de ser en una sociedad democrática, dada la incertidumbre, inquietud y la angustia que causa la ignorancia tanto para él como para su familia durante ese tiempo.

Conclusiones: (i) En este caso, donde estaba de por medio la asistencia judicial entre Estados y en consideración a la naturaleza del delito²⁴, fraude fiscal, el TEDH debió hacer prevalecer el derecho a que la persona fuera investigada en un plazo razonable, pues aceptada la no violación, por la complejidad del asunto, pero por razones que eran de la competencia de otro Estado, dejó en una verdadera incertidumbre a una persona investigada, por lo que debe compartirse en su totalidad el voto disidente. (ii) Estableció que en el proceso penal existen dos plazos, uno relacionado con la prisión y otro para el proceso penal, que en un momento dado pueden coincidir o no.

CASO STÖGMÜLLER VS. AUSTRIA (1969)²⁵

En este caso el TEDH hace una distinción entre la excesiva duración de la detención preventiva y del procedimiento en su totalidad, y en sus consideraciones establece que hay eventos en los cuales el término de la prisión preventiva puede tornarse en irrazonable, mientras que el tiempo para finiquitar el proceso puede ser razonable, así, en el caso de Stögmüller, entendió que la detención preventiva fue excesiva porque los motivos eran injustificados, dado que la detención no era necesaria, conforme a lo que establece el artículo 5.3 del CEDH.

Esta sentencia reviste mucha importancia porque el TEDH no fijó el término que debía utilizar el gobierno austriaco para mantener en prisión preventiva a una persona, ni para finiquitar el proceso, posición que se mantiene hasta la actualidad,

²⁵ Sentencia de 10 de noviembre de 1969. Se trata de un ciudadano austriaco, Ernest Stögmüller, investigado en varias causas penales, relacionadas con operaciones inmobiliarias y financieras, donde era gerente de una sociedad, y se le atribuían delitos de fraude, estafa, usuras. Fue condenado a cuatro meses de prisión. Se había celebrado otro proceso que duró más de diez años, donde fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión.

lo que significa que en cada caso se debe realizar la valoración respectiva para establecer si el plazo ha sido razonable o no; por el contrario, advirtió las dificultades que se tienen al momento de establecer y de precisar un término razonable, de ahí que sustentó que (...) “Se reconoce por todos la imposibilidad de traducir este concepto en un número fijo de días, de semanas, de meses o de años o en variar la duración según la gravedad de la infracción”²⁶.

Conclusión: En esta sentencia el TEDH reiteró su posición respecto de que en el proceso penal pueden existir dos plazos, uno relacionado con la prisión preventiva y el otro para el procedimiento en su totalidad; el primero puede ser irrazonable, pero el segundo razonable respecto a la duración del procedimiento.

CASO REINGEISEN VS. AUSTRIA (1971)²⁷

Sometido el asunto ante el TEDH, consideró que hubo violación del plazo razonable para la duración de la prisión preventiva porque para mantener a una persona en prisión, las autoridades tienen que examinar los motivos que justifiquen que la medida prosiga, con razones pertinentes y suficientes para ello, de ahí que el TEDH, además de verificar dichas situaciones, examina detenidamente si las autoridades nacionales han sido “*especialmente diligentes*” en el desarrollo del procedimiento. Estos criterios se mantendrán en la jurisprudencia del TEDH en esta materia. En este caso consideró que la duración de la prisión fue razonable conforme al 5.1 del Convenio.

Nuevamente ratifica su jurisprudencia, del caso Stögmüller Vs. Austria, respecto de que en un proceso penal donde hay una persona privada de la libertad, corren dos plazos, el de la privación de la libertad y el del proceso, pero puede el primero ser irrazonable y el del proceso no, dadas las características especiales de éste, relacionada con su complejidad; por tanto, estos dos plazos no tienen que ser los mismos, en esta situación.

Igualmente se debe destacar que de acuerdo a este pronunciamiento, el plazo para mantener a una persona privada de la libertad se rige por otros criterios,

²⁶ Punto 4

²⁷ Sentencia de 16 de julio de 1971. Michel Ringeisen, ciudadano austriaco es investigado por delitos de estafas, abusos de confianza, quiebra fraudulenta, siendo objeto de prisión preventiva en dos oportunidades, en dos investigaciones que se llevaron en su contra, una de ellas duró cinco años y la segunda, cuatro años.

en este caso la justificación de las autoridades para demostrar la necesidad que una persona se encuentre en esa situación.

Conclusión: Así pues, el término para mantener provisionalmente a una persona privada de la libertad se rige por criterios diferentes a los que el TEDH ha desarrollado para la duración del proceso, lo que significa que no se evalúa el término de duración de la prisión.²⁸

CASO ECKLE VS. ALEMANIA (1982)²⁹

Examinado el caso por el TEDH, este comienza por fijar la fecha en que corre el plazo razonable para el gobierno de Alemania, y lo establece partiendo de la acusación, que según el mismo organismo corre desde *“la notificación oficial, emanada de la autoridad competente, la apertura de investigación preliminar o del reproche, por haber cometido una infracción penal”*. En cuanto al término final estimó que comprende *“el total del procedimiento a examen, comprendidos los procedimientos de apelación”*.

Así el plazo razonable inicia desde la acusación o notificación oficial, emanada de autoridad competente, lo que a modo de ejemplo puede ser: la fecha de arresto, la fecha de inculpación, la primera fecha de citación del inculpado. En cuanto a la terminación del mismo habrá que sustentar, que se produce cuando exista una sentencia definitiva, de acuerdo a su pronunciamiento, respecto que en *“En caso de condena no habrá sido “decidido” el fundamento de una acusación en materia penal” en el sentido del artículo 6, párrafo 1, en tanto en cuanto la pena no se encuentre definitivamente*³⁰.

²⁸, PASTOR, Daniel R. *Op. cit.*, 2002, p134. “Nuevamente el TEDH, en su decisión mayoritaria, no ha resuelto el problema del encarcelamiento preventivo en cuestión desde la perspectiva de su duración en sí, sino desde el punto de vista de los motivos para imponerlo, aunque se recurra al eufemismo de que la prolongación, desaparecidos los motivos, era irrazonable. El artículo 5.2 del Convenio, aunque el Tribunal no lo advierta, se previene contra la duración irrazonable de detenciones motivadas y constitucionalmente legítimas, a pesar de que en las ilegítimas también cada minuto de su duración sea, por definición “no razonable”.

²⁹ Sentencia de 15 de julio de 1982. Se trata de los esposos Hans Eckle y Marianne, quienes explotaban una empresa de construcción y hierro, pero a raíz de problemas financieros no pagaron a los acreedores y se hicieron merecedores de tres procesos penales, en tres ciudades de Alemania, todos los cuales duraron varios años, pues el que menos, tomó ocho años.

³⁰ punto 77 de la sentencia.

Esto ya significa en materia penal una delimitación del término que las autoridades deben considerar para comenzar a computar el tiempo de la actuación, y establecer si fue razonable o no.

En este caso el TEDH reconoce que han pasado varios años de duración de los procedimientos, pero este factor de por sí no fue la causa para determinar la vulneración, sino que examinó sus criterios sobre plazo razonable, como son: la complejidad del caso, la actividad del interesado y la actuación de las autoridades. Determinó que el caso era complejo en atención a que se trataba de delitos financieros y no era fácil una tramitación rápida; el número de imputados y a su vez el caso estaba conectado con el extranjero; se trataba de una criminalidad desconocida para las autoridades. Así las cosas, tuvo en cuenta como factores de complejidad, las siguientes situaciones: delitos financieros, número de imputados, conexión con otro país, criminalidad desconocida por las autoridades.

Sobre la actividad de los interesados llamó la atención por los incidentes que usaron, al punto de considerar que ese exceso en la utilización de incidentes de manera sistemática dejaba entrever una obstrucción deliberada. Entonces para el TEDH el inculpado o acusado no está obligado a colaborar con las autoridades, pero la actividad de este sujeto procesal que sea notoriamente dilatoria de los procedimientos, debe considerarse como *“obstrucción deliberada”* y por tanto, examinarse si dio lugar a la violación del plazo razonable.

A las autoridades les criticó el retardo para llevar a cabo algunas diligencias, porque no había sobrecarga de trabajo como se alegaba, ante lo cual la dilación la propiciaron los funcionarios judiciales, por falta de diligencia y celeridad, además que tuvo en cuenta que las investigaciones no estuvieron bien direccionadas por falta de criterio de selectividad para perseguir algunos hechos, no todos, pues con ello, la instrucción se tornó inacabable. Por tanto, las autoridades direccionaron mal dichas investigaciones generando con ello vulneración del plazo razonable.

Conclusiones: (i) Para el TEDH no basta el solo paso del tiempo o el excesivo retardo en la resolución de un proceso, que ya representa, una causal objetiva, sino que unido a ello, se requiere la valoración de los criterios fijados por su jurisprudencia. (ii) En materia penal para el TEDH el inculpado o acusado no está obligado a colaborar con las autoridades, pero la actividad de este sujeto procesal que sea notoriamente dilatoria de los procedimientos, debe considerarse como *“obstrucción deliberada”* y por tanto, examinarse si dio lugar a la violación del plazo razonable.

CASO FOTI Y OTROS VS. ITALIA (1982)³¹

En esta sentencia el TEDH determina que el término comienza a computarse desde la acusación, la inculpación, la apertura de investigación preliminar o la notificación oficial de haber cometido una infracción penal, reiterando su posición del caso *Eckle*.

En cuanto a la fecha para cumplirse el plazo sentó que esto sucede el día en que la sentencia quedó en firme o adquiere fuerza de cosa juzgada. Estos criterios serán entonces los derroteros a tener en cuenta para comenzar a contabilizar el plazo y establecer la terminación del mismo en materia penal.

Valorados los criterios sentados por el TEDH determinó que se trataba de un caso sencillo que se vio complicado por la situación política y social del momento. Se tiene en cuenta en esta sentencia el contexto en que se desarrollaron los hechos, como uno de los criterios de complejidad del asunto.

En cuanto al retraso, señaló que no era imputable a los imputados, mientras que con respecto a la actuación de las autoridades observó que en todos los casos, los plazos de duración fueron lo suficientemente prolongados, por tanto fundamentó que hubo largos lapsos “muertos”, en los cuales sin justificación, las autoridades no ejercieron ninguna actividad, concluyendo que hubo violación del plazo razonable.

Conclusiones: (i) Toma el contexto social y político en que ocurrieron los hechos como un factor de complejidad. (ii) Cuando hay plazos muertos no justificados la causa de la vulneración del plazo razonable es imputable a las autoridades.

CASO MILASI VS. ITALIA (1987)³²

Para evaluar el tiempo razonable, señaló el TEDH que este comenzó cuando se informó oficialmente al señor Milasi que existía un proceso penal en su contra, lo

³¹ Sentencia de 10 de diciembre de 1982. Los señores Benito Foti y otros tres fueron investigados penalmente por el delito de rebelión popular por hechos entre los años 1970 y 1973. Los procedimientos que se adelantaron para cada una de estas personas tomaron varios años, pero el TEDH, solo debió partir del año 1973 para comenzar a computar el plazo, fecha en que Italia aceptó el derecho a un recurso individual.

³² Sentencia de 25 de junio de 1987. El señor Elio Milasi, de nacionalidad italiana, alegó la excesiva duración del proceso penal seguido en su contra, en tres causas, hechos que se enmarcaron entre octubre de 1969 hasta mayo de 1973, obteniendo sentencia absolutoria el 4 de agosto de 1978. Por esos mismos hechos fue investigado por otras dos autoridades.

que ratifica otra vez que en materia penal, el término comienza a correr cuando una persona se entera formalmente que se adelanta una investigación en su contra. Consideró que finalizó cuando se dictó sentencia, sin precisar, si tenía que estar ejecutoriada, de modo que fijo un plazo de nueve años y siete meses, sin embargo en el caso Deumeland, ya se había precisado que el término abarca el que tomen los Tribunales para resolver los recursos, por tanto, hasta que haya una decisión definitiva del asunto.

Sobre la complejidad halló que no existían cuestiones jurídicas delicadas, aunque el hecho de que los investigados fueran treinta y siete, generaba inconvenientes en la investigación, lo que lleva a tener como un factor de complejidad del asunto el elevado número de inculpados. No evaluó el comportamiento del interesado porque no fue objeto de discusión, pero en torno a la actuación de las autoridades, reiteró que igual que en el caso Foti y Baggetta, la sobrecarga de trabajo alegada por las autoridades, no exonera al Estado, en la medida que están obligados a buscar medidas para cumplir las obligaciones que emanan del Convenio, y las que tomó el Estado italiano fueron insuficientes para superar la crisis, no justificando la duración del procedimiento, y por ende, hubo violación del 6.1 del CEDH.

Conclusión: En este evento si bien el caso pudo resultar complejo por el número de personas que estaban comprometidas, esto no generó que el plazo se considera irrazonable, dado que hubo otro factor decisivo, y fue la falta de justificación de las autoridades para tomarse tanto tiempo en resolver el asunto, sin que el TEDH aceptara una sobrecarga laboral, exigiendo que en esas situaciones los Estados Partes organicen su sistema judicial a efectos de que sea eficiente y cumpla con las obligaciones impuesta en el Convenio.

CASO BAGGETTA VS. ITALIA (1987)³³

El TEDH consideró que habían pasado trece años y cuatro meses de duración del plazo. En el análisis se centró en el comportamiento de las autoridades competentes y sobre el particular señaló que el CEDH obliga a los Estados

³³ Sentencia de 25 de junio de 1987. El investigado fue Giuseppe Baggetta, ciudadano italiano, a quien se le siguieron tres procesos por delitos de tenencia de armas, daño seguido de incendio, saqueo. En el año 1982 fue condenado a la pena de un año y ocho meses, pero tras un recurso de casación, la Corte italiana señaló que la acción contra esta persona había prescrito. En otro proceso seguido en su contra, en la etapa del juicio, fue declarado no culpable. El tercer proceso termino a su favor porque ya por esos hechos, había sido investigado.

contratantes a organizar la jurisdicción penal para cumplir las exigencias de este instrumento en lo relacionado con el plazo razonable de duración del procedimiento, estimando que se violó el artículo 6.1, reiterando el compromiso de los Estados Partes de tomar medidas para que el sistema judicial sea eficiente y garantice de esa manera el cumplimiento de las obligaciones contraídas al ratificar el Convenio, pero esto debe realizarse de manera pronta. No tuvo en cuenta el contexto social y conmoción política como factor que justificara el retraso del plazo por parte de las autoridades.

Conclusiones: (i) Las deficiencias estructurales del sistema judicial no legitiman la vulneración del derecho al plazo razonable. (ii) No obstante que el contexto social y político puede constituir un factor de complejidad del asunto, esto de por sí no

CASO MOREIRA DE AZEVEDO VS. PORTUGAL (1990).³⁴

El periodo a considerar por el Tribunal no se remitió a la fecha de los hechos dado que no estaba en vigor el Convenio para Portugal, sin embargo, para determinar el carácter de razonable, indicó que hay que tener en cuenta el estado en que el asunto se encontraba.

Halló que no era complejo, tampoco encontró que el interesado estuviera obligado a tomar medidas para acelerar el procedimiento, pero el reproche fue para las autoridades, porque el Convenio, al exigir el cumplimiento del plazo razonable, subraya la importancia de que se administre justicia sin retrasos que puedan comprometer su eficacia, dado que hubo demoras en el procedimiento, por el tiempo dedicado a los exámenes médicos del demandante, tiempo excesivo, porque pese a las dificultades que generen retrasos por distintas causas, reclamó que ellos deben ser removidos por el Estado Parte, para acelerar los procedimientos, significando la violación del 6.1 del Convenio.

Conclusión: Es responsabilidad de las autoridades usar sus poderes correccionales, disciplinarios, para remover las dificultades que puedan presentarse en la actuación en aras de hacer efectivo el derecho.

³⁴ Sentencia de 23 de octubre de 1990. Se refiere a unos hechos donde el señor Manuel Moreira de Azevedo, de nacionalidad portugués, recibió una herida en la cabeza, el 23 de enero de 1977.

CASO ABDOELLA VS. PAISES BAJOS (1992)³⁵

En la decisión el TEDH valoró los recursos que a lo largo de (4 años, 4 meses y 1 día) usó el interesado, ante cinco instancias, lo que podría tornar este tiempo en razonable, sin embargo, hizo un examen del término que las autoridades tomaron en resolver cada uno de los recursos y encontró que el tiempo para resolver el de casación, fue irrazonable, porque demoró más de 10 meses entre un auto y el envío del expediente y, luego se demoran las autoridades 11 meses en resolverlo, para un total de 21 meses, los que resultan inaceptables, y más, cuando una persona esta privada de la libertad; por consiguiente, hubo infracción del artículo 6.1.

Conclusión: El plazo comprende desde que se notifica oficialmente a una persona que está siendo investigada penalmente hasta que hace efectivos los recursos que le concede la ley, además del análisis global de todo el procedimiento realizado, en la medida que se evaluó hasta el tiempo que demandó cada uno de los recursos, especialmente ante los máximos tribunales, quienes igualmente están obligados a respetar el derecho al plazo razonable, máxime si está de por medio el derecho a la libertad.

CASO ACQUAVIVA VS. FRANCIA (1995)³⁶

El TEDH examinó si se violó el artículo 6.1 sobre plazo razonable en este procedimiento. Revisó los tres criterios que ya se han indicado, encontrando que sobre la complejidad del caso no había especiales dificultades, aunque tuvo en cuenta el contexto político en que se desarrollaron los hechos en Córcega, por lo cual el proceso tuvo que ser reasignado y enviado a Versalles, donde hubo retrasos inevitables. En cuanto al comportamiento de los demandantes observó que éstos contribuyeron a prolongar el procedimiento. Sobre el comportamiento de las autoridades judiciales nuevamente tuvo en cuenta el contexto político en que se desencadenaron los hechos, por ello, considerando el procedimiento de instrucción

³⁵ Sentencia de 25 de noviembre de 1992. El señor Abdoella fue arrestado y acusado de incitación al homicidio y privado de su libertad, siendo condenado a doce años, sentencia que fue confirmada por el Tribunal de apelación de la Haya. Interpuso recurso de casación y ahí nuevamente se ratificó la condena. Ante ello, recurrió en casación por segunda vez y fue desestimado el recurso, y por último, presentó recurso de gracia y el tribunal de casación lo declaró inadmisibile. Llevó el caso al TEDH alegando que su caso no se resolvió en un plazo razonable.

³⁶ Sentencia de 21 de noviembre de 1995 contra Francia. Los hechos determinan que el 15 de noviembre de 1987, Jean Baptiste Acquaviva fue asesinado y el Frente de Liberación Nacional de Córcega (Francia) lo presentó como mártir de la causa nacionalista. Adelantada la investigación el acusado recibió a su favor sobreseimiento al considerar que actuó en legítima defensa.

en su conjunto, o el análisis global del caso, concluyó que no se había superado el plazo razonable y, en consecuencia, no se violó el artículo 6.1 del Convenio.

Conclusión: Éste es un caso en el cual el TEDH tiene en cuenta el contexto político como parámetro a favor de las autoridades, cuando en otras ocasiones se toma como un factor de complejidad, como en el caso Unión Alimentaria Sanders S.A.

CASO ALLENET DE RIBEMONT VS. FRANCIA (1995)³⁷

El Tribunal señaló que el término a considerar en este asunto fue de 11 años y 8 meses aproximadamente. En lo que tiene que ver con la duración del procedimiento nuevamente reiteró que hay que tener en cuenta las circunstancias del caso y los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal, pero atendiendo lo que se encuentra en juego para el interesado. Indicó que el caso era complejo, pero esto no puede justificar el retraso. Igualmente que en relación con la actuación del demandante se podía considerar responsable de un retraso de 3 años y 4 meses, pero sigue existiendo un plazo de 8 años sin justificar.

Encontró que las autoridades tuvieron varios periodos de inactividad a lo largo del procedimiento, en este caso las autoridades administrativas obstaculizaron la presentación de una prueba, y ahí radicó la lentitud del procedimiento, además del tiempo que se tomaron para declararse incompetentes, de lo cual derivó la violación del artículo 6.1.

Conclusiones: (i) Es un caso administrativo en donde se criticó que hubo periodos muy largos de inactividad, pese a que estaban llamadas las autoridades a tomar las medidas para agilizar el procedimiento. (ii) Se reitera que el interesado tenía interés sustancial en que se resolviera, porque estaba de por medio su buen nombre, por tanto, en esta, como en otras sentencias, el TEDH, pide que en procedimientos en que están en juego derechos como la salud, el trabajo, el buen nombre, la vida, entre otros, las autoridades deben ser más diligentes y cuidadosas para que se resuelva más prontamente.

³⁷ Sentencia de 10 de febrero de 1995. El señor Allenet presentó demanda por violación a su buen nombre porque fue acusado públicamente por un ministro de haber sido el instigador de un asesinato, pero las autoridades tardaron años en resolverlo, desestimado la acusación por falta de pruebas.

CASO YAGGI Y SARGIN VS. TURQUIA (1995)³⁸

En este caso el Tribunal solo tuvo en cuenta tres meses y trece días en virtud a la presentación turca reconociendo la jurisdicción obligatoria de ese Estado, pero a pesar de ello examinó si era necesario mantener el estado de prisión en que se hallaban los interesados, ahí sí, examinando todo el tiempo de privación de libertad. En lo que tiene que ver con la complejidad del caso indicó que el Tribunal de Seguridad celebró 20 audiencias, 16 de las cuales se dedicaron casi en su totalidad a la lectura de elementos de prueba, hecho que no puede considerarse como complejo. En el comportamiento de los actores recordó que el artículo 6 del Convenio no exige la cooperación activa del acusado con las autoridades judiciales ni tampoco se puede censurar que usaran los recursos de ley, ni el hecho de que hubo un elevado número de abogados que pudieron hacer más lenta la actuación. En el comportamiento de las autoridades encontró que tomaron demasiado tiempo, seis meses, para resolver las acusaciones formuladas contra los actores, todo lo cual llevó a que se violara el artículo 6.1 de la Convención.

Conclusión: Este asunto muestra la evaluación de las circunstancias del caso, porque a pesar de la gestión de las autoridades, en donde realizaron varias audiencias, ello no fue criterio para exonerarlas de responsabilidad en la violación del plazo razonable, porque estas audiencias no se ocuparon de asuntos relevantes dentro de la actuación judicial. Se trate de, una sentencia que fija unas pautas importantes respecto a que no es suficiente que las autoridades realicen actividades en el caso, sino que el tiempo que tomen en esas actuaciones, tenga como finalidad debatir asuntos sustanciales dentro de la misma, en aras de resolverlo prontamente.

CASO MINJAT VS. SUIZA (2003)³⁹

El TEDH dio aplicación a su jurisprudencia y conforme a ello encontró que el caso era complejo, por el número de documentos que las autoridades tenían que examinar, también por la emisión de varios informes periciales, el número de personas comprometidas, en este asunto, dos, y porque además se modificó el el Código procesal penal, que tuvo lugar durante la instrucción, o sea que se conjugaron varios factores que generaron la complejidad del caso; a pesar de todas

³⁸ Sentencia de 8 de junio de 1995. Nbi Yagci y Nhat Sargin eran secretarios generales del partido obrero turco y partido comunista turco, siendo arrestados el día 16 de noviembre de 1987, permaneciendo en cautiverio por espacio de dos años y cinco meses y medio.

³⁹ Sentencia de 28 de octubre de 2003. El señor Minjat en el año 1995 fue acusado de abuso de confianza siendo arrestado y detenido, alegando éste una prolongación ilegal de su libertad.

esas circunstancias, no se justificó una duración tan prolongada. En cuanto a la actuación del demandante no encontró reparos. Finalmente concluyó que de acuerdo con la duración global del procedimiento, ésta no fue razonable, y que hubo vulneración del artículo 6.1 del Convenio.

Conclusiones: (i) La complejidad se tradujo en el número de documentos a examinar, la cantidad de informes periciales a practicar, el número de personas comprometidas, y la modificación de la ley procesal penal, o sea que se conjugaron varios factores. (ii) La sola complejidad del caso, como en este evento no justifica la violación del derecho al plazo razonable.

CASO MORENO CARDONA VS. ESPAÑA (2009)⁴⁰

En este caso el Tribunal recordó que en el sistema español, toda persona que estime que en el proceso donde es parte sufre dilaciones excesivas, puede, tras haberse quejado en vano ante la jurisdicción correspondiente, formular un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, con el objeto de impedir la continuación de la violación alegada y cuando termine el procedimiento, presentar ante el Ministerio de Justicia una solicitud de reparación por anormal funcionamiento de la administración de justicia.

Recordó su jurisprudencia⁴¹, según la cual la duración poco razonable del proceso se asimila a un funcionamiento anormal de la administración de justicia y que esa vía de derecho permitía en principio remediar una violación del derecho a que la causa sea oída en un plazo razonable. Señaló como momento de inicio del plazo, cuando una persona resultara imputada, en este caso cuando fue privada de la libertad. Con respecto a la complejidad del asunto no hubo alegación. En cuanto a la actividad del denunciante éste no parece haber contribuido a la duración del procedimiento, a pesar que no intentó agilizarlo. En cuanto a la actuación de las autoridades observó que hubo unos periodos largos de inactividad procesal que generó que el plazo fuera irrazonable, llamando la atención al Estado para que organice el sistema judicial y de esa forma resolver los asuntos en un plazo razonable. En este caso la violación es como consecuencia del mal funcionamiento

⁴⁰ Sentencia de 9 de junio de 2009. Don Agustín Moreno el 1º de febrero de 1985 fue arrestado por el delito de robo, pero el 22 de diciembre de 1986 recobro su libertad bajo fianza, y el 30 de julio de 1998, se dictó sobreseimiento definitivo, por prescripción de la acción penal. Por lo anterior el 5 de marzo de 1999 presentó reclamación ante el Ministerio de Justicia invocando una indemnización por todo el tiempo que estuvo privado de la libertad y por la duración del procedimiento.

⁴¹ Marín C. España 39521/98

del sistema judicial, lo que no tiene la virtud de exonerar al Estado, aplicando una vez más su jurisprudencia, encaminada a que el Estado organice el sistema judicial y cumpla las obligaciones adquiridas al ratificar el CEDH.

Conclusiones: (i) Se cuestionó la actividad de las autoridades porque hubo unos periodos largos de inactividad procesal que derivó en que el plazo fuera irrazonable. (ii) Es otro asunto donde el Tribunal reclama el cumplimiento del Convenio en cuanto el Estado está obligado a garantizar el buen funcionamiento del sistema judicial y, a organizarlo para garantizar la efectividad del derecho al plazo razonable.

CASO BENDAYAN AZCANTOT Y BENALAL BENDAYAN VS. ESPAÑA (2009)⁴²

En esta oportunidad el Tribunal llama la atención respecto a que *el artículo 6.1 del Convenio exige que en todas las fases de los procesos de “litigios sobre derechos y obligaciones de carácter civil” finalicen en un plazo razonable, sin que se puedan excluir las fases posteriores a las resoluciones sobre el fondo. Por tanto, la ejecución de una resolución o sentencia, con independencia de la jurisdicción a la que pertenezca, debe considerarse como parte integrante del proceso, de acuerdo al artículo 6.1⁴³*

Indicó que en este caso como se trataba de una sentencia que imponía la obligación de abonar daños y perjuicios en concepto de responsabilidad civil, resultante de una infracción penal, así como los gastos y costos de un proceso penal, era necesario preservar los derechos de las víctimas en los casos penales y en la fase de la ejecución de una sentencia penal favorable a sus intereses, porque es en este último trámite cuando se hace efectiva la reparación pecuniaria a favor de las víctimas. Señaló como periodo a considerar la fecha en que la sentencia penal quedó ejecutoriada, o sea más de siete años. Encontró que, pese a que los demandantes interpusieron varios recursos, ello no es criticable porque estaban haciendo uso de sus derechos. Que a raíz de la muerte de M.L.R, el asunto revistió cierta complejidad, porque surgió un proceso testamentario, lo que demandaba de las autoridades mayor diligencia para favorecer a los demandantes. Así las cosas,

⁴² Sentencia de 9 de junio de 2009. Los señores Gimol Violenta Bendayan Azcantot y Samuel Benalal Bendayan denunciaron a M.L.R por los delitos de estafa, falsificación y aumento fraudulento de los precios, siendo condenados a una pena de un año y tres meses e igualmente al pago de gastos y costas, pero el procedimiento de la ejecución de la sentencia para el pago de esos gastos y costas fue excesivo, por lo cual presentaron recurso de amparo y acciones civiles para hacer valer sus derechos.

⁴³ Punto 68.

el análisis global que demandó el caso, en un término de más de siete años para hacer efectiva la ejecución de la sentencia penal, no son razonable.

Conclusiones. (i) En esta sentencia el TEDH destacó los derechos de las víctimas, quienes al igual que el imputado o acusado tienen el derecho a que el procedimiento se resuelva en un término razonable; por ello criticó la actitud de las autoridades, quienes que tenían que tomar todas las medidas para que se hicieran efectivos, teniendo en cuenta los problemas testamentarios que surgieron, que no permitían avanzar. (ii) Es importante la decisión porque rescata también la diligencia y prontitud en resolver los asuntos que se derivan de una sentencia.

CASO SERRANO CONTRERAS VS. ESPAÑA (2012)⁴⁴

Para estimar la fecha no tomó desde que ocurrieron los hechos, sino desde el inicio del procedimiento de instrucción. Admitió que el caso revestía cierta complejidad por el número de documentos que debían ser examinados, que había varios acusados y que se requería la intervención del Estado italiano, pero todo eso, por sí solo, no justifica la duración que tomó. Con respecto al demandante no encontró que hubiera causado retrasos, reprochando la actuación de las autoridades, y no reconoció que el atasco de un tribunal fuera razón válida para retardar la toma de decisiones, dado que incumbe a los Estados organizar su sistema judicial para que el órgano jurisdiccional pueda garantizar a todos el derecho a obtener una resolución definitiva en un plazo razonable. *“Para el Tribunal, exigir el cumplimiento del plazo razonable, es indispensable para que la justicia no sea administrada con retrasos que comprometan su eficacia y credibilidad”⁴⁵*. Estableció que las autoridades fueron responsables de la violación del plazo razonable porque no justificaron unos periodos de tiempo en que el caso estuvo inactivo.

Conclusiones: (i) Reitera su jurisprudencia en torno a la obligación de los Estados de organizar su sistema judicial, interconectando el derecho a un juicio rápido con el derecho al acceso a la administración de justicia, porque para el Tribunal los retrasos comprometen la eficacia y credibilidad de la misma. (ii) Así

⁴⁴ Sentencia de 20 de marzo de 2012. El señor Bernardo Serrano Contreras fue absuelto de los delitos de estafa falsedad oficial y documento mercantil, en la comercialización de una variedad de semillas de trigo, siendo acusado que usó etiquetas falsas para obtener una subvención de la Unión Europea. A través de un recurso de casación el Tribunal Supremo de España lo condenó por los delitos de estafa y falsedad, interponiendo los recursos de ley, y acudiendo al TEDH, alegando entre otros, la violación del plazo razonable.

⁴⁵ Punto 58.

mismo las dificultades y complejidad del asunto por el número de documentos, acusados e intervención de otro Estado en su resolución.

CASO MENENDEZ GARCÍA Y ÁLVAREZ GONZÁLEZ VS. ESPAÑA (2016)⁴⁶

El TEDH delimitó el término a partir del cual aplicaba el plazo razonable, determinando que comenzó desde que a los demandantes se les notificó oficialmente la denuncia sobre la comisión de un delito penal y se extiende a la fecha en que se profirió la sentencia, recordando como referente en su jurisprudencia el caso Deweer c. Bélgica, Neumeister c. Austria, concluyendo que estos procesos demoraron alrededor de ocho años y un mes en una sola instancia.

Reiteró el tribunal que la proporcionalidad en la duración de los procedimientos debe lograrse a la vista de las circunstancias del caso y en referencia a los siguientes criterios: la complejidad del caso, el comportamiento de los demandantes y las autoridades pertinentes.

Reconoció que el caso era bastante complejo porque se trataba de un proceso penal por los delitos de fraude y falsedad, como resultado de la compra de automóviles en donde aparecían involucrados tres demandantes y diez demandados, sin embargo, los procesos no presentaban problemas o dificultades excepcionales. Por su parte, con respecto al comportamiento de los demandantes, el hecho de que los abogados se hubieran demorado al presentar los escritos no provocó demoras concretas en los procesos que pudieran justificar su duración total. Encontró que no hubo justificación en las demoras en la fase de instrucción y la del

⁴⁶ Sentencia de 15 de marzo de 2016. Se trató de dos demandas interpuestas contra el Reino de España por D. Gerardo Menéndez García y D. Sigifredo Álvarez González, en demandas independientes, que fueron tramitadas bajo una misma cuerda porque se trataba de unos mismos hechos, de un proceso penal en donde estas personas eran investigadas, al igual que otras más, por los delitos de fraude y falsedad documental, desde el año 2000, siendo objeto de condenas en el año 2009. En atención a la demora en el procedimiento solicitaron a la Audiencia Provincial de Asturias la reducción de las penas impuestas, solicitud que fue rechazada indicándose que si bien los procesos fueron “inusualmente” largos se debió a la complejidad del caso, en concreto la dificultad de reunir pruebas entre las diferentes jurisdicciones, el elevado número de partes implicadas, la dificultad de intentar notificar a los acusados, así como la falta de celeridad por parte de los abogados de los demandantes en presentar sus alegaciones. Los demandantes interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo, quien falló parcialmente a favor reduciendo las penas, pero no aceptó las demandas por la demora injustificada de los procesos, señalando que la Audiencia Provincial de Asturias había aportado una sólida y detallada justificación respecto a la duración de los procesos. Ambos demandantes interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero no fueron admitidos los recursos por falta de trascendencia constitucional conforme a los supuestos del artículo 50.1.b de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

juicio. En consecuencia, el TEDH, consideró que no hubo justificación y que si hubo violación del artículo 6.1 del Convenio.

Conclusiones: (i) Delimita el TEDH el plazo inicial para contabilizar el plazo, el cual está dado por la fecha en que los demandantes fueron notificados oficialmente de la denuncia en su contra por la comisión de un delito. (ii) El plazo final lo constituye la fecha de la sentencia. (iii) El análisis global del caso, en las etapas de instrucción y juicio demuestra que hubo exceso en el plazo que tomaron las autoridades para fallar. (iii) Es una sentencia que sienta un buen precedente para las autoridades españolas, en la medida en que el derecho al plazo razonable no fue reconocido por ellas, pese a los recursos que interpusieron los demandantes, porque hicieron valer uno de los criterios sentados por el TEDH, relacionado con la complejidad del caso, pero desconociendo que, a pesar de que revestía cierta complejidad, eso no justificaba la vulneración del derecho, ni que tal circunstancia de por sí, como dice la sentencia, abre la vía para la arbitrariedad.

1.2 SENTENCIAS EN MATERIA LABORAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO

CASO KÖNIG VS. ALEMANIA (1978)⁴⁷

El TEDH al aplicar sus criterios para valorar la duración de las actuaciones tuvo en cuenta lo relativo a la complejidad de la causa, porque a pesar de que no era compleja, por cuestiones de hecho ni de derecho, lo era en cuanto al objeto del enjuiciamiento, en la medida que hubo dificultades para ubicar algunos testigos. En lo que tuvo que ver con el demandante, destacó que éste cambió de abogado en reiteradas ocasiones, agotó todos los recursos otorgados por la ley e hizo uso de varias demandas de recusación. Finalmente radicó la prolongación de la duración del procedimiento en las autoridades, porque éstas no actuaron de manera diligente y por ello dieron lugar a la violación del plazo razonable.

Censuró la actividad de las autoridades, reclamando que “*los Estados organicen su sistema judicial*” para que el procedimiento procesal no esté viciado

⁴⁷ Sentencia de 28 de junio de 1978. Los hechos se refieren a la denuncia del doctor Eberhard König en contra de las autoridades contencioso administrativas por haberle cancelado la licencia de médico, dadas las sanciones disciplinarias que le impusieron, por mal ejercicio de su profesión, todo lo cual tuvo una duración de más de diez años.

de retardos, y criticó, que el sistema alemán, en aras de reforzar el respeto de las garantías judiciales, ha generado que los procedimientos se tornen en complejos, por lo que solicitó tomar medidas para simplificar el sistema y de esa forma responder a los requerimientos del artículo 6º del Convenio⁴⁸.

Conclusiones: (i) El TEDH no aceptará a través de su jurisprudencia que el retardo de la actuación sea justificable por fallas atribuidas al sistema judicial, en este caso, por “*exceso de garantías*” que a la postre dificultan la buena marcha de la actuación judicial. Más adelante también se verá que la “*congestión o atasco de los Tribunales*” no es causal de justificación para la violación del plazo razonable y exige por ello tomar las medidas para reorganizar el aparato judicial. (ii) La simplicidad del procedimiento garantiza la efectividad del derecho al plazo razonable, de modo que este presupuesto debe tenerse en cuenta, como una propuesta en este trabajo.

CASO BUCHHOLZ VS. ALEMANIA (1981)⁴⁹

El TEDH hizo uso de los tres criterios que fue desarrollando en su jurisprudencia a) complejidad del asunto, b) comportamiento del interesado y c) actividad de las autoridades, sustentando que estos también son aplicables a los procedimientos civiles, no obstante que este se rige por un régimen del llamado “*proceso de partes*”, es obligación de las autoridades velar por el cumplimiento del derecho al plazo razonable en cada actuación.

Por tanto, el derecho al plazo razonable rige para todos los procedimientos, civiles, penales, laborales, y en el caso civil opera, no obstante que es un proceso de partes, porque el Estado está obligado a impulsar los procedimientos.

En este evento examinó el TEDH que efectivamente en los dos procesos que activó el señor Buchholz, tuvieron una duración excepcional y extraordinaria. Que

⁴⁸ “El Tribunal quiere subrayar que no le incumbe emitir un juicio sobre el sistema alemán de procedimiento ante los Tribunales administrativos. Sin duda el sistema actual puede parecer complejo a causa del número de las instancias y de los recursos, pero el Tribunal no ignora que esta situación se explica por la preocupación muy respetable de reforzar las garantías de los derechos individuales. Si el resultado llega a constituir un laberinto procedimental es el Estado el que debe sacar las consecuencias y si fuera necesario simplificar el sistema con el fin de responder al artículo 6º. del párrafo 1, del Convenio”. Capítulo fundamentos de derecho, 1, B.

⁴⁹ Sentencia de 6 de mayo de 1981. El señor Buchholz trabajó 25 años en una empresa en Hamburgo siendo despedido por motivos de reorganización de la misma, generando que el precitado presentara la respectiva denuncia laboral, pero la sentencia definitiva tomó más de cuatro años.

el denunciante contribuyó en gran medida a que los procedimientos fueran demorados, dada la forma como dirigió su defensa.

En cuanto a las autoridades, comprobó que de acuerdo a las estadísticas, los tribunales laborales tuvieron aumento considerable de trabajo, pero el gobierno tomó medidas para superar la crisis, entre ellas, aumento de juzgados, iniciativa de reforma legislativa para acelerar los procedimientos, una nueva sala para el Tribunal Laboral, todo ello en pos de dar respuesta al aumento de causas, ante la recesión económica, concluyendo que no hubo violación del artículo 6.1 del Convenio, porque a pesar de la prolongación, fue la actitud del interesado quien dio lugar al retraso, y por ende, tenía que asumir las consecuencias⁵⁰.

Conclusiones: (i) Si el Estado toma medidas para superar el atasco o la congestión, a través de reformas legislativas que aceleren el procedimiento, no es responsable de la vulneración. (ii) De otra parte, si el interesado en un proceso de partes prolonga el procedimiento, debe asumir las consecuencias de la vulneración del plazo razonable. (iii) Importante destacar que en materia laboral, administrativa, civil, el TEDH reclama igualmente la aplicación del artículo 6.1 del Convenio, no obstante que se trate de un *“proceso de partes”*, como lo ha llamado, inclinándose en este evento a no considerar vulnerado el Convenio, por la actitud del interesado, y aceptando que las autoridades, en especial el gobierno, tomó todas las diligencias pertinentes para solventar la situación que generó la congestión en los juzgados laborales. (iv) Se considera como factor para evaluar el plazo razonable, los factores socio - económicos del país que pueden generar congestión en los despachos judiciales.

CASO ZIMMERMANN Y STEINER VS. SUIZA (1983)⁵¹

Examinado el caso conforme a los criterios del TEDH, estableció que no era complejo el caso y los demandantes no eran responsables de los retrasos. Por el contrario halló que durante tres años el Estado suizo estuvo pasivo esperando respuesta del recurso por parte del Tribunal Federal.

⁵⁰ Puntos 55 y 61.

⁵¹ Sentencia de 13 de julio de 1983. Los señores Werner Zimmermann y Johann Steiner vivían cerca al aeropuerto de Zurith – Kloten y reclamaron una indemnización económica por daños y contaminación, pero les rechazaron la demanda, ante lo cual instauraron un recurso, sin obtener ningún tipo de respuesta.

No aceptó el TEDH que los retrasos puedan justificarse por sobrecarga laboral. No basta con alegar sobrecarga de trabajo cuando se evidencia que ello no es un problema temporal, sino que obedece a situaciones permanentes, de ahí la obligación de los Estados para reorganizar el aparato judicial de manera pronta, sin retardos en esta materia, porque de lo contrario, como en este caso, se presenta la vulneración para el TEDH del derecho al plazo razonable.

Conclusión: Existe una obligación de los Estados Partes de organizar el aparato judicial en pro de tomar medidas legislativas, ejecutivas o administrativas que permitan que las autoridades resuelvan los casos puestos a su conocimiento en un plazo razonable, por tanto, cuando estas medidas son oportunas no hay violación del derecho, como en el caso Buchholz, donde ante un aumento considerable de casos de carácter laboral el Estado reaccionó tomando las medidas para acelerar dichos procedimientos.

CASO PRETTO VS. ITALIA (1984)⁵²

Examinados los criterios que rigen la jurisprudencia determinó la complejidad del caso porque tenía que ver con una ley nueva y aún no existía jurisprudencia para interpretarla. Sobre la actuación del interesado adujo que éste activó todos los recursos de ley, lo que hizo demorar el procedimiento, pero estaba haciendo uso de su derecho, lo que significa que así utilice todos los recursos de ley, nunca ello es causal que pueda tenerse en su contra, por el contrario, está haciendo uso de los derechos otorgados a su favor. Halló que la actuación de las autoridades estuvo ajustada a las exigencias del artículo 6.1 del Convenio, al adicionar un punto nuevo a su doctrina de los tres criterios: complejidad del asunto, actividad del interesado y actuación de las autoridades, relacionado con el análisis global del procedimiento, o sea que tuvo en cuenta la duración de todo el proceso.⁵³

Conclusiones: (i) En cuanto a la complejidad del asunto se crea un nuevo factor que la genera como es la interpretación de una ley nueva por falta de jurisprudencia sobre el particular. (ii) Tiene el inculpado derecho de activar todos los recursos que consagre la ley, no obstante, su uso reiterado genere dilación de la actividad procesal.

⁵² Sentencia de 8 de diciembre de 1984. El señor Rodolfo Pretto instauró una acción civil, la cual en primera instancia fue favorable, pero en segunda le fue revocada, presentando un recurso de casación, el cual demoró un tiempo considerable en resolverse.

⁵³ Puntos 31 a 37 de la sentencia.

CASO H. VS. FRANCIA (1984)⁵⁴.

Estableció el TEDH que el término a considerar es de 7 años y 7 meses. Reiteró que el carácter razonable de la duración de un procedimiento se aprecia según las circunstancias del caso, y teniendo en cuenta los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal, como son la particularidad del asunto, el comportamiento del demandante y el de las autoridades competentes. Respecto a la complejidad del asunto estableció que las autoridades administrativas no tomaron ninguna medida para esclarecer los hechos y las cuestiones de derecho no presentaban dificultades especiales. Sobre el comportamiento de las autoridades recordó que en materia civil se le exige a las partes una “*diligencia normal*”⁵⁵ determinando que solamente las demoras imputables al Estado llevan a la conclusión que se ha violado el plazo razonable.

Admitió que el abogado retrasó en parte el procedimiento, pero cuando examinó el comportamiento de los órganos judiciales verificó que en el tiempo en que el asunto estuvo pendiente de resolverlo se presentaron retrasos que generaron la violación del artículo 6.1 del Convenio, exigiendo entonces que en materia civil las autoridades también resuelvan los litigios en un plazo razonable, destacando que el Convenio reclama que se administre justicia sin demoras que puedan comprometer su eficacia y su crédito, así que examinando el conjunto de las circunstancias del caso concluyó que se sobrepasó el plazo y, por tanto, se produjo la violación del artículo.

Conclusión: Reitera su jurisprudencia que en materia civil aplica también el derecho al plazo razonable, todo ello en busca de una justicia pronta, por tanto, pese a ser una justicia “rogada o de partes”, las autoridades no pueden desatender las obligaciones que emanan del Convenio en materia de plazo razonable porque la justicia tiene que ser eficiente y pronta.

⁵⁴ Sentencia de 24 de octubre de 1984. El demandante ocultó su identidad y se hizo llamar señor H, quien a raíz de un procedimiento medico sufrió graves consecuencias en su salud, de modo que presentó las reclamaciones de ley, debiendo acudir al TEDH porque su caso no se resolvió en un plazo razonable.

⁵⁵ Sentencia Pretto y otros de 8 de diciembre de 1983, serie A, nú. 71, págs. 14 y 15, apartado 33.

CASO DEUMELAND VS. ALEMANIA (1986)⁵⁶

Para contabilizar el término el TEDH tomó en cuenta la fecha que inició el proceso hasta que el recurso fue rechazado por el Tribunal Constitucional Federal, ampliando de esta manera el término que debe abarcar el plazo razonable. Nuevamente aplicó los criterios, ante lo cual estableció que el caso no era complejo. Sobre la actuación de la interesada manifestó que en parte contribuyó a retrasar el procedimiento porque no colaboró aportando documentos necesarios. La actuación de las autoridades no estuvo ajustada a derecho porque tomaron casi once años para resolver el caso, y algunas autoridades no fueron diligentes, dando lugar a los retrasos en temas tan especiales como la seguridad social.

Conclusión. Pese a comprobarse dilaciones atribuibles al interesado reitera la jurisprudencia respecto a que en toda clase de actuaciones debe respetarse el derecho a ser oído en un plazo razonable, más aún, en casos en donde debe definirse temas que son tan fundamentales como la seguridad social, porque en esos eventos, esta reforzada la obligación de aplicarse el derecho.

CASO UNIÓN ALIMENTARIA SANDERS S.A. VS. ESPAÑA (1989)⁵⁷

El TEDH primero delimita la fecha de iniciación del plazo y la fecha final, observando que se debe partir de dos fases: una, la fecha en que se notifica a las partes la sentencia, y otra, la que corresponde al proceso de ejecución. Parte para su análisis del año 1986, donde aún no se profiere una sentencia. Señaló que el plazo razonable gira en torno a las circunstancias del asunto, pero especialmente a los tres criterios varias veces mencionados. Sobre el tema en cuestión halló que el caso no era complejo porque no presentaba dificultades de hecho ni de derecho. Con relación a la actuación de la sociedad demandante, destacó que conforme al derecho civil, por tratarse de una justicia de partes, la obligación del interesado *“únicamente está obligado a cumplir con diligencia los actos que le corresponden, abstenerse de maniobras dilatorias y aprovechar las posibilidades ofrecidas por el derecho interno para abreviar el proceso; nada le obliga a emprender actuaciones*

⁵⁶ Sentencia de 29 de mayo de 1986. La señora Klaus Dieter Deumeland instauró una acción laboral con el objeto de obtener una pensión complementaria por la muerte de su marido, agotando todos los recursos de ley, dado que la decisión no le era favorable, pero en ese transcurso, la señora perdió la vida y su hijo prosiguió ejercitando la acción.

⁵⁷ Sentencia de 7 de julio de 1989. La sociedad antes mencionada suscribió un contrato con la empresa Linconin, S.A, relacionado con la cría de unos cerdos, pero por problemas financieros no pudo cumplir sus obligaciones, de ahí que la empresa unión Alimentaria Sanders S.A se vio obligada a presentar la respectiva demanda pero hubo dilación de las autoridades en resolver el caso.

que no sean adecuadas a estos efectos”⁵⁸. Ante ello, encontró que el demandante actuó con diligencia y recurrió en amparo para constatar la violación de la constitución, pero el recurso le fue negado. Para el TEDH, este acto, indirectamente ayudó a acelerar el proceso pero no era un medio ordinario para conseguirlo. En el criterio relacionado con la actuación de las autoridades reconoce que hubo periodos largos de inactividad judicial, un retraso de más de tres años y medio, que solamente se justificarían en “*circunstancias muy excepcionales*”, por lo cual valoró el contexto social y político por el cual atravesaba España en aquella época e igualmente los esfuerzos para superar la crisis judicial y las medidas que tomó para ello, sin que para el TEDH, un atasco temporal no implica responsabilidad internacional de un Estado Parte, siempre que tome con rapidez las medidas para solucionarlo, pero en este caso, se trata de un problema estructural, porque viene desde hace años, y las medidas que tomaron no fueron suficientes para resolverlo, por lo cual, concluyó que “*a la luz de las circunstancias del caso, considera excesiva duración del litigio; las innegables dificultades con las que la sociedad demandante se topó en España no podían privarla de su derecho al respeto del “plazo razonable”*”.⁵⁹

Conclusión: El contexto se examina como factor de complejidad del asunto, pero pese a su reconocimiento este criterio no es suficiente si el aparato estatal no se organiza de tal forma que haga efectivos los derechos, no obstante se trate de un asunto civil.

CASO OBERMEIER VS. AUSTRIA (1990)⁶⁰

El TEDH trae a colación que su jurisprudencia sobre el plazo razonable se atiene a un principio fundamental: “*el carácter razonable de la duración de un procedimiento se determina de acuerdo a las especiales circunstancias del caso. En este evento concreto se necesitaba una valoración en conjunto y por ello no es útil el examen de esas cuestiones en detalle*”⁶¹.

⁵⁸ Punto 35.

⁵⁹ Punto 42.

⁶⁰ Sentencia de 28 de junio de 1990. El señor Karl Obermeier ciudadano de Austria trabajaba en una compañía de seguros privados, hubo problemas laborales que generaron que presentara un procedimiento ante el Tribunal de trabajo de Viena, lo que generó que fuera suspendido de su trabajo, realizando el señor Karl acciones laborales y administrativas para conseguir revocar la suspensión. Finalmente acudió al TEDH alegando la violación de la tutela judicial y del plazo razonable, en este último caso porque después de nueve años, no se le ha resuelto sobre la legalidad de la suspensión.

⁶¹ Punto 72.

El TEDH examinó cada una de las fases del procedimiento sobre la suspensión y sobre todos los procedimientos que tuvo que seguir para ejercitar sus derechos laborales. Revisados éstos uno por uno y la normatividad laboral, llamó la atención en la medida que el interesado tenía un interés personal importante en que prontamente hubiera una resolución judicial sobre la legalidad de la medida. No desconoció que el caso era complejo porque se daba una influencia recíproca entre los temas administrativos y judiciales sobre el despido de los incapacitados, y se sucedieron numerosas actuaciones; pero un plazo de nueve años, sin dictarse resolución en firme, sobre la legalidad de su suspensión, sobrepasa el plazo razonable estableciendo la violación del artículo 6.1.

Conclusiones: (i) Otro factor de complejidad está dado por la influencia recíproca entre temas o asuntos administrativos con otra (s) ramas judiciales, o sea cuando el proceso laboral, administrativo, penal, depende también de otra decisión, es decir, la— prejudicialidad. (ii) En este tema administrativo y laboral, criticó que no se hubiera producido todavía una sentencia, porque también estaban en juego derechos que incidían directamente en el bienestar del quejoso.

CASO RUIZ MATEOS VS. España (1993)⁶²

En este caso, se planteó por parte del TEDH que el plazo razonable comprendía no solamente el tomado por las autoridades judiciales en resolver el litigio, sino el tomado por el Tribunal Constitucional en resolver la exequibilidad o no

⁶² Sentencia de 23 de junio de 1993. José María Ruiz Mateos y sus cinco hermanos eran dueños del 100% de las acciones de la compañía Rumasa S.A, sociedad matriz del grupo Rumasa, formado por más de 200 empresas. Mediante el real decreto ley 2/1983, de 23 de febrero, se produjo la expropiación por razones de utilidad pública e interés social, de los bancos y sociedades que componen el grupo Rumasa. El real decreto ley fue convalidado por el congreso de diputados el 3 de marzo de ese mismo año. Un grupo de diputados presentaron demanda de inconstitucionalidad de este real decreto ley. Se expidió la ley 7/1983 del 29 de junio de 1983 que ordenó la expropiación de los bancos y otras sociedades que conformaban el grupo Rumasa S.A. Previamente a la expedición de esta segunda ley, el señor José María Ruíz Mateos presentó una demanda de interdicto por recobrar los bienes expropiados, lo mismo hicieron sus hermanos, todas las cuales fueron acumuladas. En la demanda el señor Ruíz Mateos planteaba una excepción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional la cual fue presentada por el juzgado de conocimiento. Mediante sentencia 166/1986 del 19 de diciembre, el Tribunal decidió que la normatividad cuestionada era compatible con la Constitución, por tal motivo el Juzgado de 1ª instancia 18 de Madrid rechazó la demanda. El 27 de diciembre de 1986 los anteriores propietarios de la empresa Rumasa presentaron demanda ante la Audiencia Provincial de Madrid para que formulara ante el Tribunal Constitucional una pretensión de inconstitucionalidad artículos 1 y 2 de la ley 7/1983 respecto de los artículos 14 y 33.3 de la Constitución. El día 15 de enero el Tribunal Constitucional profirió la sentencia 6/1991 considerando compatibles los artículos con la Constitución. El 25 de enero/1991 la Audiencia de Madrid rechazó la demanda.

de las leyes que aprobaban la expropiación⁶³, o sea nueve años y siete meses, iniciando desde que se interpusieron las demandas de inconstitucionalidad y finiquitando cuando se dicta sentencia definitiva, o sea que comprende el tiempo en que un asunto es resuelto por todas las instancias, no obstante, que en este caso se trataba de asuntos independientes, pero coetáneamente vinculados por un mismo origen, y de ser así, dada la correspondencia entre ambos, es aceptable la decisión del TEDH, aunque no fue bien acogida por todos los magistrados.

En este caso el TEDH concluyó que se dio la violación del plazo razonable al aplicar sus tres criterios jurisprudenciales, así que con respecto a la complejidad, indicó que las demandas de inconstitucionalidad presentaban una innegable dificultad, aunque el procedimiento no implicaba actos que lo prolongaran, por lo cual no era razonable su violación. Con respecto a la actitud de los demandantes, la encontró ajustada, aduciendo que los recursos y actuaciones que realizaron fue en pro de beneficiar sus intereses. Con relación a la actuación de las autoridades admite que en una de sus etapas no hubo dilaciones injustificadas pero posteriormente se presentaron cuando se interpuso el recurso de apelación, sin admitir las alegaciones respecto a que los retrasos en esta etapa se generaron ante la reestructuración del sistema judicial español, por la ley orgánica del poder judicial, pero ello no es causal válida de acuerdo a su jurisprudencia, además que en este caso los retrasos fueron generados fundamentalmente en el Tribunal Constitucional al resolver las cuestiones de inconstitucionalidad de las leyes que ordenaban la expropiación.

Conclusiones: (i) Es un caso de un asunto civil en el cual se debatía la inconstitucionalidad de una ley. (ii) El TEDH compromete la debida diligencia de los máximos tribunales de justicia, en este caso del tribunal constitucional. (iii) Denota el interés patrimonial que exigía una pronta resolución, porque de declararse inexecutable, el resultado favorecía al peticionario. En esta sentencia, como en otras, el TEDH destaca otro criterio que en algunas sentencias ha hecho valer, cual es el interés que está en juego para el demandante, y en este caso para la sociedad española.⁶⁴ Este criterio implica mayor diligencia y actuación de las autoridades, por

⁶³ El TEDH tiene en cuenta el periodo en que se desarrolle el procedimiento ante instancias políticas o ante órganos o servicios administrativos. Punto 36.

⁶⁴ Caso Ruiz Mateos Vs. España. Sentencia de fecha 23 de junio de 1993." El asunto tenía considerable importancia, no solo para los demandantes, sino también para la sociedad española en general, por sus vastas incidencias sociales y económicas. El gran número de personas implicadas, asalariados, accionistas y terceros, y el volumen de los capitales afectados exigían una pronta solución del litigio". Punto 51.

tanto, en la jurisprudencia se evalúa como un factor que obliga a acelerar el término, lo que implica estricto cumplimiento del derecho del plazo razonable.

CASO SCOPELLITI VS. ITALIA (1993)⁶⁵

El TEDH consideró que el periodo fue menos de ocho años y tres meses para obtener una sentencia definitiva. Sobre el carácter del plazo razonable en la duración del procedimiento examinó los criterios que ha desarrollado en su jurisprudencia y la atención a las circunstancias del caso concreto. Por eso, en este evento verificó que se presentaron tres etapas. En la primera de ellas, como era necesario un peritaje técnico, éste ofrecía algunas dificultades, pero no tanto como para que tomara 16 meses ni tampoco la denunciante estaba obligada a pedirle al juez que cambiara al perito. En la segunda fase relacionada con las actas de visita, determinó que hubo intervalos de tiempo considerables. El resto del tiempo era para la ejecutoria de la sentencia. Si bien, es un caso de naturaleza civil, el TEDH consideró por unanimidad la vulneración del plazo razonable, porque recordó que el principio dispositivo que rige en Italia para el procedimiento civil, donde las partes tienen la iniciativa y el impulso, no dispensa a los jueces a garantizar el respeto de las exigencias del artículo 6 en materia de “plazo razonable.

Conforme a lo anterior, reitera el TEDH su jurisprudencia en materia civil, en torno a que también en este sistema las autoridades tienen la obligación de dar cumplimiento al derecho del plazo razonable, debiendo entonces subsanar las irregularidades que se presenten en cada caso, pese a que los interesados tienen la disposición de la acción civil, porque una vez activada, también los jueces deben usar sus facultades jurisdiccionales, para que se cumpla.

Conclusiones: (i) En materia civil pese a ser una justicia rogada o de partes, las autoridades tienen que usar sus facultades jurisdiccionales para impedir dilaciones injustificadas en pro del cumplimiento del derecho de ser oído en un plazo razonable. (ii) En algunos asuntos, dependiendo de los peritajes a realizar, éstos pueden generar que un caso se torne complejo.

⁶⁵ Sentencia de 23 de noviembre de 1993. La señora Scopelliti solicitó la reparación de los perjuicios por la ocupación de 1.000 metros cuadrados de su terreno para mejorar una carretera nacional, alegando violación del plazo razonable en los procedimientos llevados a cabo.

CASO KARAKAYA VS. FRANCIA (1994)⁶⁶

Examinado el caso determinó que el periodo a considerar fue de cuatro años y tres meses, relacionado entre la fecha de la demanda de indemnización y la fecha de la sentencia del Tribunal Administrativo. En materia administrativa el TEDH delimita cuándo comienza a correr el término que las autoridades tenían para resolver conforme al artículo 6.1 del CEDH. Establecido el mismo, aplicó su jurisprudencia para concretar el carácter razonable de la duración del procedimiento. En cuanto a la complejidad del caso consideró que no revestía cierta complejidad porque los datos para establecer la responsabilidad del Estado estaban disponibles. En cuanto al comportamiento del demandante aduce que suponiendo que éste hubiera tardado en presentar su memorial de alegaciones, de todas maneras pasaron tres años y cinco meses entre la presentación de éste y el final del procedimiento. Sobre el comportamiento de las autoridades administrativas llamó la atención, en la medida que se trataba de un proceso de trascendencia y además revestía una “*importancia extrema*” para el demandante, por el mal incurable y su esperanza de vida reducida, ello suponía por tanto una “*diligencia extrema*”; a pesar de ello, el Tribunal Administrativo no usó sus poderes conminatorios para acelerar la marcha del proceso, por tanto la duración del procedimiento, por más de cuatro años para obtener una sentencia de 1ª instancia, sobrepasó el plazo razonable y de contera la violación del 6.1.

Conclusiones: (i) En este evento de tipo administrativo, también se debe destacar el alcance y connotaciones que el TEDH derivó del caso, pues adiciona un punto más a su jurisprudencia, y es el relativo al “*interés que el interesado tiene en que se resuelva el asunto*”, exigiendo una “*diligencia extrema*” a las autoridades, lo que significa que deben encaminar sus esfuerzos a que el término del procedimiento sea el menor posible, porque está de por medio otro derecho consagrado en el CEDH, cual es el derecho a la vida, íntimamente relacionado con el de la salud. (ii) Deben las autoridades evaluar en todo momento el interés que arriesga el interesado, lo que se traduce en una “*diligencia extrema*”.

⁶⁶ Sentencia de 26 de agosto de 1994. El señor Karakaya sufría de VIH, adquirido por transfusiones de sangre, por lo cual presentó una demanda de indemnización ante el Tribunal de Sanidad, la cual fue rechazada. Acudió al Tribunal Administrativo interponiendo un recurso, el cual fue enviado al Consejo de Estado, y luego reenviado ante el Tribunal Administrativo.

CASO KATTE KLITSCHKE DE LA GRANDE VS. ITALIA (1994)⁶⁷

El TEDH estimó que el plazo a considerar era de más de 8 años e hizo un análisis sobre el carácter razonable de la duración del procedimiento. En lo que respecta a la complejidad del caso anotó que era “complejo de hecho y de derecho” porque las jurisdicciones llamadas a resolverlo tocaban cuestiones delicadas que demandaban un examen atento y una evolución prudente de los hechos. En cuanto al comportamiento del demandante no hubo ningún reparo. Sobre el comportamiento de las autoridades judiciales tuvo en cuenta las circunstancias del caso y su complejidad, tanto de hecho como de derecho y por tanto los plazos no eran excesivos, máxime cuando que las decisiones debían ser tomadas dentro de un ámbito tan sensible como el urbanismo y el medio ambiente. Concluyó que no hubo violación del artículo 6.1 de la Convención.

Conclusión: Cuando se conjugan factores de hecho y de derecho es un elemento que torna complejo el asunto para las autoridades y por ello un mayor tiempo para resolverlo.

CASO BEAUMARTIN VS. FRANCIA (1994)⁶⁸

Examinado el procedimiento el TEDH, encontró que hubo violación del artículo 6.1, porque, a pesar de que los demandantes pudieron dar lugar a la duración final del procedimiento, valoró que el caso en sí, comportaba dificultades, dada la aplicación del artículo 1 del Protocolo de acuerdo franco-marroquí, y el procedimiento que se necesitaba para obtener la interpretación oficial del mismo relacionado con el derecho de propiedad de los interesados, sin embargo, examinado todo el procedimiento, verificó que hubo largos períodos de estancamiento en el Consejo de Estado sin que hubiese justificación alguna para ello, lo que significó la vulneración del artículo 6.1 del Convenio. En este caso civil también el TEDH, estimó que a pesar del origen del litigio y la competencia de las

⁶⁷ Sentencia de 27 de octubre de 1994. Los hechos tienen que ver con un caso civil, donde el señor Katte como propietario de unos terreros en el municipio de Tolfa (Roma,) en 1968 firmó un convenio de parcelación. Posteriormente salió la ley número 43 de 15 de mayo de 1979 que calificó esos terrenos como protegidos, lo que significó la prohibición de construir. El 14 de julio de 1984 el precitado inició una acción administrativa. Finalmente acudió al TEDH alegando infracción artículo 1 del protocolo número 1 y artículo 6.1 del Convenio.

⁶⁸ Sentencia de 24 de noviembre de 1994. El gobierno marroquí le quitó la propiedad de unas tierras a la sociedad inmobiliaria del Karmat El Hadh, por lo que sus principales accionistas de nacionalidad francesa, interpusieron los recursos de ley, acudiendo al TEDH, alegando una violación del artículo 6.1 del Convenio europeo.

autoridades, éstas tenían que agilizar el procedimiento, porque estaba de por medio un interés patrimonial de los interesados.

Conclusión: Otro factor de complejidad puede venir dado por la aplicación de protocolos entre Estados cuando no son fáciles de interpretar.

CASO A. Y OTROS VS. DINAMARCA (1996)⁶⁹.

En este caso el Tribunal tuvo en cuenta que hubo retrasos debido a los cambios relativos a la identidad de los demandantes, por lo cual el periodo que considero para tener en cuenta la violación del plazo razonable lo fijó en más de seis años.

Respecto a la complejidad del caso observó que éste tenía cuestiones de hecho y de derecho de cierta complejidad, pero ello en sí no justificaba la duración excesiva del caso. En cuanto al comportamiento de los recurrentes consideró que permitieron con su actuación que en buena medida se prolongara el proceso. Sobre la actuación de las autoridades observó que era difícil tratar de conciliar los diferentes intereses de todos, pero esa circunstancia no los eximía de su obligación de garantizar el respeto del plazo razonable, más cuando el tema a resolver revestía mucha importancia para algunos de los peticionarios, porque estaba en juego su esperanza de vida, lo cual en virtud del artículo 6.1; los obligaba a actuar con la diligencia que reclama la jurisprudencia del Tribunal en litigios con esas connotaciones, porque no pudieron haber aceptado los aplazamientos requeridos por los demandantes, sino actuar con una *“diligencia excepcional”*, así que concluyó, que respecto de algunos de ellos hubo violación, por falta de esa diligencia, mientras que para otros se habría respetado la misma.

Conclusión: Es importante el concepto utilizado por el TEDH relacionado con la *“diligencia excepcional”* que las autoridades tenían que tomar en este caso, porque estaba en juego el derecho a la salud de varias personas, lo que demandaba actuar con todo el cuidado y prontitud, al punto que no los eximió de violación del plazo razonable, pese a que los mismos interesados contribuyeron a dilatar el

⁶⁹ Sentencia de 8 de febrero de 1996, Se trata de 10 demandantes quienes fueron designados como A, hemofílicos y viudas de hemofílicos, quienes recurrieron ante las autoridades para hacer valer el derecho a la salud, porque fueron contaminados con el VIH, dado que no se siguieron los procedimientos respectivos antes de recibir productos sanguíneos.

término para resolver de fondo, exigiendo que en esos eventos no se pueden aceptar maniobras artificiosas de los interesados.

CASO PASKHALIDIS Y OTROS VS. GRECIA (1997)⁷⁰

Examinada la violación del plazo razonable el TEDH consideró que el caso no era complejo pues se dirigía a determinar el plazo en que los interesados estaban autorizados a presentar demandas para hacer valer derechos laborales. Reprochó la actitud de las autoridades en demorarse en resolver los litigios, dadas las circunstancias especiales del caso, en la medida que se derivaban importantes consecuencias para los demandantes, quienes también generaron dilación, pero a pesar de esto, fueron las autoridades las que propiciaron la violación del plazo razonable.

Conclusión: Es otro caso en donde el TEDH reitera su jurisprudencia respecto a que las autoridades están llamadas a resolver prontamente casos laborales, en donde está de por medio el derecho al bienestar personal, porque hay en juego derechos fundamentales del interesado.

CASO RICHARD VS. FRANCIA (1998)⁷¹

En este caso el TEDH primero resolvió una excepción del gobierno, relacionada a la inadmisibilidad de la demanda, por arreglo amistoso ante la comisión, aduciendo que no se puede renunciar a un derecho garantizado en el Convenio pero “el Tribunal recuerda a este respecto su jurisprudencia reiterada según la cual la renuncia de un derecho garantizado por el Convenio – aunque sea lícita – debe acreditarse de manera inequívoca y contar con un mínimo de garantías correspondiente a su gravedad, lo que no es en el caso que se trata”.

Examinada la violación del plazo razonable determinó que para apreciar si se dio o no, debe considerarse la duración efectiva del procedimiento hasta el día de la aprobación del informe o la sentencia, y para este caso lo estimó en dos años

⁷⁰ Sentencia de 19 de marzo de 1997. Los demandantes invocaban el derecho a una pensión de jubilación o viudez pero finalmente, después de muchos años se les negó ese derecho.

⁷¹ Sentencia de 22 de abril de 1998, El señor Michel Richard recibió constantes transfusiones de sangre porque es hemofílico, siendo contagiado con el virus VIH, presentando una solicitud de indemnización al Ministro de Sanidad, la que fuera denegada, acudiendo ante las autoridades administrativas.

y dos meses. Nuevamente determinó que ese carácter razonable de la duración del procedimiento se aprecia en función de las circunstancias de la causa y teniendo en cuenta los criterios consagrados por la jurisprudencia del Tribunal, como son la complejidad del caso, el comportamiento del demandante y de las autoridades competentes. Estableció que el asunto revestía cierta complejidad, pero ello por sí solo no justifica la lentitud del procedimiento, más aún porque estaba en juego que el litigio era de importancia extrema para el demandante por la enfermedad que tenía y ese aspecto no se podía ignorar, sin que a pesar de ello, el caso se resolviera aún ante los tribunales de ese país. Por tanto, dadas esas especiales circunstancias de la causa, en particular la situación del interesado, no consideró razonable el plazo que había transcurrido.

Conclusión: Es importante destacar cómo el TEDH desconoció el arreglo amistoso del caso ante la Comisión, en virtud de los intereses que estaban en juego para el interesado, que es el derecho a la salud, de tal manera que ante eventos de esta naturaleza, los funcionarios no pueden dilatar los procedimientos y tienen la obligación de actuar de manera diligente y pronta.

CASO ORTUÑO ORTUÑO VS. ESPAÑA (2011)⁷²

En este caso el TEDH reiteró su jurisprudencia respecto que el artículo 6.1 del Convenio exige que los procedimientos judiciales para resolver las controversias sobre derechos y obligaciones de carácter civil, que también se lleven a cabo en un plazo razonable, en todas las fases, sin que se puedan excluir las fases posteriores a las resoluciones sobre el fondo.⁷³ *Además la ejecución de una sentencia, cualquiera que sea su jurisdicción, debe considerarse como parte integrante del proceso, conforme al artículo 6 del Convenio.*⁷⁴

Para estimar la duración del tiempo, tomó la fecha de la sentencia que ordenaba la liquidación del régimen económico matrimonial, que todavía no ha concluido, señalando que habían pasado más de once años en una sola instancia, de ahí que recordó que el carácter razonable de la duración de un procedimiento se

⁷² Sentencia de 27 de septiembre de 2011, Los hechos tienen que ver con la demanda presentada por la señora Asunción Ortuño Ortuño por la excesiva demora en la resolución del trámite que tomaron las autoridades civiles para llevar a cabo el procedimiento relacionado con la ejecución de la sentencia que ordenaba la liquidación del régimen económico matrimonial, por lo cual debió interponer varias quejas al juzgado, presento dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional que fueron desestimados.

⁷³ Punto 58.

⁷⁴ *Ibídem*

aprecia según las circunstancias del caso y de acuerdo a los criterios fijados en su jurisprudencia.

Para el Tribunal el asunto revestía cierta complejidad debido a la disolución de la comunidad de gananciales y las dificultades para proceder a su disolución, pero recriminó la actitud de las autoridades porque no actuaron con diligencia frente a los actos obstruccionistas del esposo, que no permitían la aceleración del procedimiento. Indicó que era necesario hacer una valoración global del caso; sin embargo, un tiempo de once años y un día en la ejecución de una sentencia, no puede considerarse como razonable y por ello encontró que hubo violación del artículo 6.1 del Convenio.

Conclusiones: (i) Nuevamente el TEDH hace valer los derechos económicos que el interesado tiene en un asunto civil y (ii) la obligación para las autoridades de tomar medidas correctivas para evitar actos que impidan el goce del derecho, en este caso ante actividades obstruccionistas de la contraparte que impedían que el juez tomara una decisión final.

CASO ELEFThERIOS G. KOKKINAKIS - DILOS KYKLOFORIAKI A.T.E. VS. GRECIA (2016)⁷⁵

Los solicitantes se quejaron de que la duración de las actuaciones ante los Tribunales administrativos desconoció el derecho al plazo razonable. El TEDH examinó cada una de las etapas del proceso, en las tres etapas en que se sustanció. Nuevamente el TEDH recordó que la razonabilidad de la duración de un procedimiento depende de las circunstancias del caso y de los criterios establecidos en su jurisprudencia, en particular, la complejidad del caso, la conducta del solicitante y de las autoridades competentes, así como el tema de las repercusiones para los interesados. Evaluados estos criterios admitió que la duración del

⁷⁵ Sentencia de 20 de octubre de 2016. sentencia el 20 de octubre de 2016. El que el grupo empresarial formado por el ciudadano Eleftherios Kokkinakis y la sociedad limitada Dilos Kykloforiaki A.T.E. reclamaban la vulneración de su derecho a la propiedad y la vulneración de su derecho a un proceso equitativo dentro de un plazo razonable. Al grupo demandante se le adjudicó en 1996 un contrato público para la instalación de parquímetros en la ciudad de Atenas, y en 1998 el Tribunal Supremo Administrativo de Grecia anuló dicho contrato. Entonces, el grupo adjudicatario demandó al Ayuntamiento de Atenas para reclamar una indemnización por daños y perjuicios, siendo finalmente desestimada su demanda por sentencia de 2011. Partiendo de ello, el grupo empresarial solicitó al TEDH que en base al art. 1 (Protocolo 1) CEDH se declarara la vulneración de su derecho a la propiedad por no verse compensado por los daños sufridos, y en base al art. 6.1 CEDH se declarara la vulneración del derecho a un proceso equitativo por la dilación excesiva del procedimiento.

procedimiento fue excesiva porque la duración de doce años en tres instancias ha sido excesiva y no cumple con el plazo razonable.

Conclusiones: (i) El TEDH mantiene su jurisprudencia relacionada con la aplicación de los criterios relacionados con la complejidad del caso, la conducta del interesado, de las autoridades y el interés del caso para el solicitante. (ii) Persiste en el análisis global del caso, revisando el tiempo que toma cada una de las etapas, sin examinar si la ley determinó plazos, para revisar el cumplimiento de los mismos.

CAPITULO II

ANÁLISIS DEL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE DE ACUERDO A LAS SOLUCIONES DADAS POR EL TEDH

El TEDH en la jurisprudencia en torno al artículo 6.1 del CEDH, en lo que tiene que ver con el plazo razonable, se encontró con el problema de que la norma, por ser un instrumento internacional, no determina el tiempo que las autoridades estatales tienen para resolver o finiquitar de manera definitiva un caso, y por tal motivo no ha podido definir el concepto por encontrarlo difícil, haciendo hincapié en la complejidad de su definición, ya sea en materia laboral, civil, administrativa o penal. El TEDH ha tenido que ir desarrollando criterios que le ayuden a establecer cuál es el plazo a tener en cuenta, para concluir si hubo violación o no del derecho al plazo razonable; cuándo comienza a operar; qué estándares se deben aplicar para fijar el plazo razonable que debió utilizarse⁷⁶, lo que equivale a estudiar caso por caso, y se traduce en definitiva en una indefinición del concepto “plazo razonable”.

Del análisis de las sentencias ya indicadas se observa que el TEDH no determina el plazo en que los Estados deben resolver una actuación judicial: sea ésta de carácter penal, civil, laboral o administrativo, así que desde el caso *Wemhoff*⁷⁷ desarrolló unas herramientas que le ayudan en la tarea de delimitar el derecho al plazo razonable; son los criterios de “complejidad del asunto; actividad del interesado y actuación de las autoridades”, agregando posteriormente el análisis global del caso y el interés que arriesga el interesado. Partiendo de ellos pasa a indicar si el plazo fue razonable o no.

Por ello podemos afirmar que el TEDH sienta su jurisprudencia sobre la falta de determinación de un plazo, porque de acuerdo a la jurisprudencia el plazo razonable no puede medirse en días, semanas, meses o años⁷⁸, porque hay que examinar cada caso y aplicar los criterios ya señalados.

⁷⁶BACIGALUPO, Enrique. *El debido proceso penal*. Ed. Hammulabi. Buenos Aires. 2005, p. 31, para quien “el TEDH ha establecido, en la aplicación del art. 6º de la CEDH un conjunto de principios del proceso penal que configuran el *standard mínimo* de derechos fundamentales en el debido proceso penal europeo”.

⁷⁷ Sentencia de 27 de junio de 1968.

⁷⁸ Citada en las primeras sentencias del TEDH, casos *Stögmüller*, *Neumeister* y *Ringeisen*.

Esta doctrina, planteada de esta manera, cuando se aplica la jurisdicción penal no resulta muy garante del derecho establecido en el artículo 6.1 del CEDH para el imputado o acusado, y menos para las víctimas, y en especial, a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, pues la indeterminación de los plazos, quiérase o no, conlleva para estos sujetos procesales una inseguridad jurídica y la falta de concreción del derecho, lo que a la postre riñe con los mismos postulados expuestos por el Tribunal, en cuanto reclama que *“el cumplimiento del plazo razonable es indispensable para que la justicia no sea administrada con retrasos que comprometan su eficacia y credibilidad.”*⁷⁹

Así las cosas, dado que no existen plazos tasados y predeterminados, realizaremos el análisis de los respectivos criterios en aras de evidenciar si aportan elementos que contribuyan a garantizar el derecho al plazo razonable.

2.1 Complejidad del asunto

Lo primero que hay que indicar a este respecto es que no hay un parámetro claro o definido, por parte del TEDH, de cuándo un caso es complejo o no, pues para establecer la complejidad se parte de una gama de situaciones que se presentan en cada caso, o sea que debemos asumir la casuística, lo que por otra parte permite agregar nuevas alternativas de las circunstancias que tornan un proceso complejo, por lo que se puede concluir sin temor a equívocos que no hay una lista taxativa, de los casos que implican complejidad, sino una simple enunciación.

El Tribunal tampoco hace una definición del concepto de complejidad que permita clasificar un caso como complejo o no, de tal manera que para aplicar este criterio habrá que recurrir a la casuística del TEDH, pues no se aportan parámetros precisos para clasificar la causa como compleja.⁸⁰ Así podemos destacar las siguientes situaciones como complejas según el TEDH:

a. Cuestiones de hecho⁸¹

⁷⁹ Caso Serrano Contreras Vs. España, punto 58.

⁸⁰ FERNANDEZ – VIAGAS BARTOLOMÉ, Plácido. *El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas*. Ed. Civitas. Madrid. 1994, p. 87. Según afirma el autor “este factor es tenido en cuenta constantemente en orden a determinar si se han cumplido o no las exigencias del plazo razonable. Sin embargo, es cierto, la jurisprudencia no contiene ningún intento de delimitación exacta de lo que deba entenderse por tal “complejidad”, lo que en ocasiones ha podido crear la confusión”.

⁸¹ Caso König Vs. Alemania, sentencia de 28 de junio de 1978; caso Katte Klische de la Grande Vs. Italia, sentencia de 27 de octubre de 1994; caso A Vs. Dinamarca, sentencia de 8 de febrero de 1996.

- b. Cuestiones de derecho o dificultad de la materia del litigio⁸²
- c. Objeto del juzgamiento⁸³
- d. Dificultad para ubicar testigos⁸⁴
- e. Número de testigos⁸⁵
- f. Número de acusados⁸⁶
- g. Número de documentos a examinar⁸⁷
- h. Número de informes periciales⁸⁸ y naturaleza del informe pericial⁸⁹
- i. Cambio de ley relacionada con la investigación o procesal⁹⁰
- j. Número de personas comprometidas en el asunto⁹¹
- k. Situación política y social o contexto en que se desarrollan los hechos.⁹²
- l. Ley nueva, porque aún no existe jurisprudencia para interpretarla.⁹³
- m. Falta de cooperación extranjera⁹⁴
- n. Dificultades en la instrucción por la naturaleza de las acusaciones⁹⁵

Vid. COBO DEL ROSAL, Manuel; QUINTANAR DÍEZ, Manuel; LÓPEZ-GÓMEZ, Carlos Zabala. *Derecho Procesal Penal Español*. Ed. Cesej, Madrid. 2006, p. 98 Para estos autores “en la complejidad del objeto del proceso, tanto desde el punto de vista fáctico, como desde un punto de vista jurídico, se debe tener en cuenta la dificultad o no de la toma de declaración de testigos, las implicaciones internacionales del caso- comisiones rogatorias-, el número de imputados y acusaciones, etc”.

⁸² Caso König Vs. Alemania, sentencia de 28 de junio de 1978; Caso H Vs. Francia, sentencia de 24 de octubre de 1984; caso Milasi Vs. Italia, sentencia de 25 de junio de 1987; caso Katte Klische de la Grande Vs. Italia, sentencia de 27 de octubre de 1994, donde se indicaba que “era “complejo de hecho y de derecho” porque las jurisdicciones llamadas a resolverlo tocaban cuestiones delicadas que demandaban un examen atento y una evolución prudente de los hechos”. Caso A. Vs. Dinamarca sentencia de 8 de febrero de 1996. Caso Zimmermann y Steiner Vs. Suiza, sentencia de fecha 13 de julio de 1983.

⁸³ Caso König Vs. Alemania, sentencia de 28 de junio de 1978.

⁸⁴ Caso König Vs. Alemania, sentencia de 28 de junio de 1978.

⁸⁵ Caso König Vs. Alemania, sentencia de 28 de junio de 1978.

⁸⁶ Caso Serrano Contreras Vs. España, sentencia de 20 de marzo de 2012, en donde se indicó lo siguiente: “El TEDH se ha pronunciado en relación a los procesos con múltiples imputados en el sentido que la separación de sus causas, aun agilizando la instrucción y acelerando el proceso, no es consecuencia obligada del derecho al plazo razonable, si dada la conexión de los hechos, puede generar problemas en la búsqueda de la verdad”

⁸⁷ Caso Minjat Vs. Suiza, sentencia de 28 de octubre de 2003; Caso Serrano Contreras Vs. España, sentencia de 20 de marzo de 2012.

⁸⁸ Caso Minjat Vs. Suiza, sentencia de 28 de octubre de 2003.

⁸⁹ Caso Scopelli Vs. Italia, sentencia de 23 de noviembre de 1993.

⁹⁰ Caso Minjat Vs. Suiza, sentencia de 28 de octubre de 2003.

⁹¹ Caso Milasi Vs. Italia, sentencia de 25 de junio de 1987; caso Minjat Vs. Suiza, sentencia de 28 de octubre de 2003.

⁹² Caso Foti y otros Vs. Italia, sentencia de 10 de diciembre de 1982; caso Acquaviva Vs. Francia, sentencia de 21 de noviembre de 1995.

⁹³ Caso Pretto Vs. Italia, sentencia de 8 de diciembre de 1984.

⁹⁴ Caso Neumeister Vs. Austria, sentencia de 28 de junio de 1988.

⁹⁵ Caso B. Vs. Austria, sentencia de 28 de marzo de 1999.

- o. Influencia del caso en asuntos que corresponden a otras jurisdicciones⁹⁶
- p. Demandas de inconstitucionalidad relacionadas con el tema de litigio⁹⁷
- q. Dificultades para hallar pruebas de responsabilidad⁹⁸
- r. Aplicación de instrumentos internacionales entre países⁹⁹
- s. Cuestiones extra- procesales dentro de las actuaciones¹⁰⁰
- t. Intervención de varios Estados¹⁰¹
- u. Cuando se conjugan a la vez cuestiones de hecho y de derecho¹⁰²

La jurisprudencia no determina todos los factores que generan la complejidad del asunto¹⁰³ o, lo que es lo mismo, la dificultad que éste reviste¹⁰⁴, de ahí que conforme a los lineamientos jurisprudenciales surge como conclusión obligada que si no concurren ninguno de estos criterios, la actuación se debiera resolver prontamente¹⁰⁵, porque no hay justificación de ninguna naturaleza para dilatar el

⁹⁶ Caso Obermeier Vs. Austria, sentencia de 28 de junio de 1990.

⁹⁷ Caso Mateos Vs. España, sentencia de 23 de junio de 1993.

⁹⁸ Caso Karakaya Vs. Francia, sentencia de 26 de agosto de 1994.

⁹⁹ Caso Beaumartin Vs. Francia, sentencia de 24 de noviembre de 1994.

¹⁰⁰ Caso Bendayan Azcantot y Benalal Bendayan Vs. España, sentencia de 9 de junio de 2009.

¹⁰¹ Caso Serrano Contreras Vs. España, sentencia de 20 de marzo de 2012.

¹⁰² Caso A. Vs. Dinamarca, sentencia de 8 de febrero de 1996.

¹⁰³ LÓPEZ MUÑOZ, Riánsares. *Dilaciones indebidas y responsabilidad patrimonial de la administración de justicia*. Ed. Comares. Granada. 1996. págs. 87 y 88, para quien este factor es tenido en cuenta constantemente en orden a determinar si se han cumplido o no las exigencias del plazo razonable. (...) “Sin embargo, es cierto que la jurisprudencia no contiene ningún intento de delimitación exacta de lo que deba entenderse por tal “complejidad”, lo que en ocasiones ha podido propiciar la confusión. De hecho, en su apreciación han llegado a considerarse factores de índole extraprocesal. Por ejemplo, en el caso Milasi, sentencia de 25 de junio de 1987, el Gobierno demandado alegó que la complejidad derivaba de tres razones: “la naturaleza de las acusaciones, el número de acusados y la situación política y social que prevalecía en Reggio Calabria en aquel período”. No obstante, y con buen criterio, el Tribunal ha analizado esta última cuestión en el factor relativo al “comportamiento de las autoridades”, sometiéndolo por tanto a un análisis distinto. Desde la precisión conceptual, es evidente que una circunstancia de esta naturaleza puede condicionar gravemente el desarrollo y la gravedad de la causa pero no, estrictamente hablando, a su dificultad procesal”.

¹⁰⁴ PUYOL MONTERO Francisco Javier. *Enjuiciamiento criminal. Ley y legislación complementaria. Doctrina y jurisprudencia*. Ed. Edigrafos. Madrid. 1998., p. 85. Para Puyol Montero, “la complejidad del asunto en la jurisprudencia del TEDH evidencia que la propia complejidad, extensión y dificultad del asunto, no justifique una duración de su tramitación, resolución o ejecución, por más tiempo que el que un procedimiento de igual clase merezca habitualmente”.

¹⁰⁵ LANZAROTE MARTÍNEZ, Pablo. *La vulneración del plazo razonable en el proceso penal*. Ed. Comares. Granada. 2005. Págs. 23 y 24 Lanzarote también se refiere a la complejidad, así: “En definitiva, como indica Bandrés Sánchez Cruzat, un litigio de escasa dificultad en la precisión de sus hechos o fundamentos jurídicos requiere una respuesta rápida en su tramitación, directamente proporcional al grado de sencillez que denote, mientras que la solución de un proceso complejo requiere una atención y esfuerzo mayor de la autoridad judicial en su desarrollo que se traduce en una mayor necesidad de tiempo, sosteniendo Gimeno Sendra que, en determinadas ocasiones, la complejidad fáctica, jurídica o las propias deficiencias del ordenamiento puede ocasionar el

procedimiento, aunque queda el vacío jurídico, en el supuesto de que la ley no establezca plazos, sobre qué tiempo será el razonable, y será la valoración subjetiva del funcionario el que lo determine, lo que coloca al derecho a ser oído en un plazo razonable en un campo de incertidumbre.

Con base en los criterios desarrollados por la jurisprudencia del TEDH, relacionados con la complejidad, podemos atrevernos a definir que un asunto es complejo en su aspecto fáctico, atendiendo a situaciones difíciles como el número de personas interesadas (en asuntos de naturaleza civil, administrativa o laboral) o comprometidas (naturaleza penal); el número de testigos en declarar; problemas para ubicarlos; el número de documentos que se tienen que examinar; número de peritajes a practicar y naturaleza de estos peritajes (contables, urbanísticos, médicos, etc.); el contexto social y político; los problemas para encontrar las pruebas de responsabilidad (penal, civil, laboral, administrativo) o las dificultades probatorias; la colaboración o no, cuando se demanda la intervención de varios Estados; o cuando se conjugan a la vez cuestiones de hecho y de derecho.

De otra parte, un asunto será complejo, en el aspecto jurídico, cuando presenta dificultades por la naturaleza u objeto del caso, atendiendo al delito o delitos a investigar (penal) o a la materia litigiosa (civil, laboral, administrativo); la aplicación de una ley nueva o de instrumentos internacionales.

Los elementos relacionados con la complejidad del asunto que desarrolla el TEDH considero que son de mucha importancia a los fines de este trabajo, como factores a tener en cuenta a la hora de aplicarlos los procedimientos penales, que es hacia donde nos enfocamos; por ello, ante la ausencia de alguno de los elementos indicados, podremos señalar sin lugar a dudas que el asunto es simple y por tanto los plazos para llevar a cabo la actuación con sentencia definitiva deben ser cortos y de estricto cumplimiento para las autoridades.

A contrario sensu, las actuaciones que involucren varios elementos relacionados por el TEDH sobre complejidad de un asunto tendrán que prever otros plazos judiciales; así en materia penal, se propondrá en este trabajo hacer la diferenciación de los procedimientos de acuerdo a la naturaleza del delito, número de indiciados, número de víctimas, planteando desde ya que se clasifiquen los procedimientos relacionados con violaciones de derechos humanos y otros delitos de connotación nacional e internacional, respecto de los procedimientos

transcurso de los plazos legales, sin que tales dilaciones merezcan el carácter de indebidas. Se trata, en suma, con el criterio que analizamos, de valorar si la duración temporal del proceso está o no justificada en atención a la mayor o menor complejidad que presente el asunto”.

relacionados con graves violaciones de derechos humanos, dada la alta criminalidad en esta materia en Colombia, encontrando que los elementos aportados por el TEDH para definir si un caso es complejo o no es de gran significación e importancia a la hora de establecer los plazos de todo el procedimiento, y lo que es más aún, bien significativa, si en un momento dado se requiere ampliarlos o prorrogarlos, en aras de cumplir el derecho del plazo razonable para los sujetos procesales en el proceso penal.

2.2 Actividad del interesado

En este punto el TEDH delimita si se trata de una actuación civil, laboral, administrativa o penal, situación bien relevante pues destaca claramente los compromisos y deberes de cada sujeto procesal.

Es importante que el TEDH le recuerde a las autoridades, porque suele pasarse por alto esta situación, que en materia penal la carga de la prueba y la celeridad de la actuación corren a cargo del Estado; no le corresponde entonces al interesado agilizar el procedimiento¹⁰⁶, ni se le puede exigir que coopere con las autoridades, ni tampoco puede ser censurado por el hecho de que utilice todos los recursos legales, ni porque haga uso excesivo de los recursos que permita la ley¹⁰⁷, delimitando claramente que la finalidad del indiciado o acusado es defenderse de las imputaciones en su contra, o sea, hacer efectivo su derecho de defensa y la presunción de inocencia; por tanto, el cumplimiento al derecho del plazo razonable es competencia exclusiva de las autoridades.

Es apreciable que el TEDH consagre los derechos de las partes interesadas en aras a no requerir que éstas sean las que agilicen la actuación y que las autoridades, como ocurre en ciertas ocasiones, no pueden considerar que la inactividad del interesado, sea entendida como renuncia de sus derechos y constituya la justificación para no acelerar los procedimientos, dejando el proceso condenado a la prescripción.

Otro aspecto supremamente importante en este análisis de la actividad del interesado es que el TEDH atribuye otra carga más a las autoridades, al reconocer el Tribunal que este sujeto puede realizar maniobras dilatorias, obstruccionistas, debiendo los Estados Partes introducir herramientas procesales salir al paso de

¹⁰⁶ Caso Moreira Vs. Portugal, sentencia de 23 de octubre de 1990.

¹⁰⁷ Caso Yaggi y Sargin Vs. Turquía, sentencia de 8 de junio de 1995; caso Bendayan Azcantot y Benalot Vs. España, sentencia de 9 de junio de 2009.

tales maniobras, que también constituyen factor importante de violación del plazo razonable, justamente al evidenciarse esa falta de actividad de las autoridades para limitar y frenar esos abusos¹⁰⁸.

Igualmente es de destacar que cuando el interesado hace uso de todas las herramientas que la ley le concede, de todos los recursos¹⁰⁹, el deber impuesto es el de actuar prontamente, en la medida que está ejerciendo sus derechos; por ese motivo no puede alegarse que ha generado, con su actitud, retrasos injustificados¹¹⁰, sino que hay que reconocer, como lo hace el Tribunal, que está activando sus derechos.

¹⁰⁸ La Corte Suprema de Justicia de Colombia corroboró las facultades que deben usar los Jueces de Control de Garantías en contra de todos los sujetos procesales, en este caso de un Fiscal, quien por no atender su orden de presentarle unos policías para verificar si habían usado la fuerza contra un detenido, le dio un día de arresto en uso de las facultades conferidas por el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal inciso 3º El juez dispondrá de ampliar facultades en la forma prevista en este código para sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos, en concordancia con el artículo 139 de la misma obra, “1. Evitar las maniobras dilatorias y todos aquellos actos que sean manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos, mediante el rechazo de plano de los mismos. 2. Ejercer los poderes disciplinarios y aplicar las medidas correccionales atribuidas por este código y demás normas aplicables, con el fin de asegurar la eficiencia y transparencia de la administración de justicia. Fue denunciada por el fiscal por el delito de detención ilegal, adelantándose en su contra el proceso penal, obteniendo sentencia absolutoria por atipicidad de la conducta, siendo confirmada por la Corte Suprema, al reconocer los poderes correccionales de la juez, dado que el Fiscal se negó a presentar los testigos solicitados. CSJ, sala de Casación penal, proceso 30813, M.P. Dr. Sigifredo Espinoza Pérez. 18 de marzo de 2009. En esta sentencia igualmente se reconocen dichos poderes correccionales referidos por la Corte Constitucional en sentencia C-218 de 1996. Estas decisiones tienen relevancia a los fines de este trabajo, porque se invocará la aplicación de los mismos en aras de hacer efectivo el derecho al plazo razonable.

¹⁰⁹ PUYOL MONTERO, Francisco Javier, *Op. cit.*, p. 86, se refiere a esta situación de esta manera: “A veces debe imputarse a la parte, cuya queja por la dilación se expresa, la única responsabilidad como consecuencia de la excesiva duración del procedimiento judicial, toda vez que la provocación de incidentes, recursos, o debates innecesarios para la resolución de la causa, o la satisfacción de la pretensión puede motivar un retraso ciertamente infrecuente o anormal en dicha tramitación procesal”.

¹¹⁰ Sobre este tema, *Op. cit.*, p. 91. Sostiene que: “Analizar este criterio supone entrar de lleno en la propia concepción del “proceso” en los ordenamientos jurídicos occidentales, en la tensión entre la búsqueda objetiva de la verdad y la utilización del mecanismo procesal como instrumento, a veces descarnadamente interesado, de defensa de los propios derechos. Y es cierto que el reforzamiento de las técnicas de garantía, y de los recursos, pudiera ser entendido como impeditivo de la resolución de fondo, lo que nos haría plantear la vieja pregunta: ¿Para qué conceder derechos a quienes los utilizan torticeramente o para enmascarar la realidad? Sin embargo nuestra cultura procesal está centrada esencialmente en la duda, alentando todas las aportaciones de parte que pudieran ser significativas para esclarecerla. Dicho espíritu es inevitable que fomenta actitudes obstaculizadoras y, como consecuencia el retraso y la falta de eficacia. Pero esto no es más que la consecuencia de una posición intelectual previa. El proceso, en cuanto transformación en contienda intelectual del conflicto concreto de la vida real, no puede desarrollarse adecuadamente sin total libertad para exponer los propios planteamientos. Las partes podrán utilizar legítimamente todos los medios

Es trascendental que el TEDH también reconozca el derecho al plazo razonable en materia civil o laboral, porque a pesar de tratarse de una justicia de “partes” o “rogada”, donde sí depende del demandante agilizar el trámite, colaborar con las autoridades, aportando pruebas, documentos, etc., ello no es óbice para vulnerarles este derecho, pues los funcionarios judiciales están obligados a darle aplicación conforme lo establecido en el artículo 6.1 del CEDH¹¹¹.

En esta materia también, y con sobrada razón, el TEDH valoró el comportamiento del interesado, por la misma naturaleza del procedimiento rogado, para determinar si su comportamiento generó la dilación, la vulneración del plazo, revisando su comportamiento, si ha actuado de manera diligente y colaboradora con las autoridades, pidiéndole una diligencia normal¹¹², lealtad dentro de la actuación, o si por el contrario ha tratado de entorpecer, obstruir o dilatar el procedimiento.

Para el TEDH, el interesado en materia civil, laboral o administrativa, únicamente está obligado a cumplir con diligencia los actos que le corresponden, abstenerse de maniobras dilatorias y aprovechar las posibilidades ofrecidas por el derecho interno para abreviar el proceso; nada le obliga a emprender actuaciones que no sean adecuadas a estos efectos, porque también en los casos en que las autoridades observen estas conductas dilatorias, están llamadas a actuar de manera pronta, tomando las medidas necesarias para evitar dichas prácticas, reiterándose entonces que estos llamados del TEDH van en pro de que las autoridades cumplan con los compromisos del cargo, porque puede evidenciarse que suelen pasar por alto estas obligaciones.

Es pertinente para efectos de evitar las prácticas dilatorias del interesado tener en cuenta la jurisprudencia del TEDH:

a- Cambio de abogado en reiteradas ocasiones¹¹³

puestos a su disposición por el ordenamiento procesal de que se trate. No estarán haciendo otra cosa que llenando de contenido su derecho a que el Tribunal pueda “oír” con exactitud, los diversos matices de su “causa”. La única excepción, iría en contra de la finalidad perseguida, se encontraría con la manipulación claramente abusiva de las propias técnicas de defensa que solo podrá ser deducida, evidentemente con gran dificultad, de la carencia racional de finalidad del propio actuar procesal”.

¹¹¹ Caso H. Vs. Francia, sentencia de 24 de octubre de 1984; caso Scopelli Vs. Italia, sentencia de 23 de noviembre de 1993; caso Bcaumartir Vs. Francia, sentencia de 24 de noviembre de 1994; caso Ortuño Ortuño Vs. España, sentencia de 27 de septiembre de 2011.

¹¹² Caso H. Vs. Francia, sentencia de 24 de octubre de 1984.

¹¹³ Caso Köning Vs. Alemania, sentencia 8 de junio de 1978.

- b- Abuso de los recursos de ley¹¹⁴, cuando éstos tienen una finalidad de obstrucción, de dilatar el procedimiento, diferente a cuando el uso de los recursos tiene por objeto beneficiar sus intereses¹¹⁵
- c- La forma como se utiliza la defensa¹¹⁶
- d- Reiteradas peticiones de libertad y recusaciones de los jueces¹¹⁷
- e- Falta de colaboración con las autoridades¹¹⁸
- f- Demora en el uso de los derechos que le asisten en el proceso¹¹⁹
- g- Actos obstruccionistas¹²⁰

2.3 Actuación de las autoridades

En lo que atañe a la actuación de las autoridades se hacen varios planteamientos que consideramos de suma importancia, en la medida que puede concluirse que en muchos casos las autoridades han sacrificado el derecho del plazo razonable, así que la jurisprudencia tendrá que ser atendida en aras de evitar los actos que contribuyen a ello.

En primer lugar, indicar que habrá que hacer diferencias respecto de casos penales, frente a las actuaciones civiles, laborales, administrativas, que como el mismo TEDH ha indicado se rigen por una actuación de partes o rogada, lo que no ocurre en el campo penal, porque las autoridades son las llamadas a impulsarla, recoger elementos de prueba, etc.

En materia penal

Con respecto al tema relacionado con la libertad de las personas, exige el TEDH que no se parta de modelos estereotipados para mantener la privación de la libertad, sino que, por el contrario, se justifique la necesidad de imponer la medida, pues no basta con privar de la libertad a una persona, sino que dicha medida tiene que justificarse también con el transcurso del tiempo, pues de lo contrario se torna

¹¹⁴ Caso Köning Vs. Alemania, sentencia de 28 de junio de 1978.

¹¹⁵ Caso Ruiz Mateos Vs. España, sentencia de 23 de junio de 1993.

¹¹⁶ Caso Bucholz Vs. Alemania, sentencia de 6 de mayo de 1982.

¹¹⁷ Caso Reingeiser Vs. Austria, sentencia de 6 de julio de 1971; caso Eckle contra Alemania, sentencia de 15 de julio de 1982.

¹¹⁸ Caso Deumeland Vs. Alemania, sentencia de 29 de mayo de 1986.

¹¹⁹ Caso Karakaya Vs. Francia, sentencia de 26 de agosto de 1994.

¹²⁰ Caso Ortuño Ortuño Vs. España, sentencia de 27 de septiembre de 2011.

en irrazonable¹²¹. El TEDH hace valoraciones respecto a la imposición de la medida de detención o de prisión provisional, reclamando que sea la excepción.

Al evaluar la actuación de las autoridades el TEDH hace la distinción del término relacionado con la privación de la libertad y el término relacionado con todo el procedimiento, permitiendo que en un caso dado sea irrazonable el plazo de la privación de la libertad, cuando las autoridades no justifican las causas de la privación en el tiempo, mientras que por otro lado el plazo del procedimiento puede ser razonable¹²², tras la aplicación de los criterios señalados en su jurisprudencia.

Por tanto, según el TEDH son diferentes el plazo razonable para la privación de la libertad y el término que debe durar todo el procedimiento¹²³, de suerte que las autoridades tendrán que justificar su imposición y permanencia en el tiempo para que el TEDH no considere violado el plazo razonable.

En todas las materias, civil, laboral, administrativa y penal, se han de evaluar los tiempos muertos o sin actividad judicial, en donde no se practicó diligencia alguna en el procedimiento, teniendo en cuenta no solamente el tiempo que se demora en el trámite de la primera instancia, sino también el que tiene que ver con la tramitación de los recursos. Es preciso evaluar cuál fue la actividad judicial en todas las instancias y, además, cuando un litigio está sometido a la jurisdicción de un tribunal pero depende a su vez, o está interconectado con una decisión de otras instancias superiores, el TEDH tiene en cuenta también el tiempo que demore en resolverse¹²⁴. Este punto es importante, puesto que como las autoridades han de procurar que el procedimiento avance en todas sus etapas, es bien rescatable la posición del TEDH de exigirles el cumplimiento a todas ellas, porque en la práctica se observa que donde los términos se dilatan mayormente es ante las instancias comprometidas con resolver los recursos. Así pues, la obligación es de todos, y por

¹²¹ Caso Stömüller Vs. Austria, sentencia de 10 de noviembre de 1969; caso Reingeiser Vs. Austria, sentencia de 6 de julio de 1971; caso Demerel Vs. Turquía, sentencia de 28 de enero de 2003, entre otros.

¹²² LÓPEZ MUÑOZ, Riánsares, *Op. cit.*, p. 114. Para quien, “Debería agregarse otro asunto para la evaluación del análisis en relación con el plazo razonable, que tendría que ir acompañado de la buena administración de justicia. En algunos procesos no puede hablarse de incumplimiento de plazos, simplemente porque estos no existen, como ocurre en la instrucción del proceso penal. En estos supuestos cabe hablar de otro criterio: el de hacer compatible las exigencias del plazo razonable con la de una buena Administración de Justicia. Aquí sí cabría hablar de estándares de duración media y de adecuación de la duración a la realidad que viene impuesta por lo que es posible hacer”.

¹²³ Caso Stögmüller, sentencia de 10 de noviembre de 1969.

¹²⁴ Caso Mateos Vs. España, sentencia de 23 de junio de 1993.

esto cada uno desde su competencia debe realizar los actos que le corresponden con la mayor agilidad y prontitud.

Hay un punto importante que replica una y otra vez el TEDH, y es que no admite que las fallas estructurales en el sistema judicial o en otros entes del Estado justifiquen la prolongación para resolver un caso¹²⁵, especialmente cuando son permanentes y no se han solucionado¹²⁶. El Tribunal demanda siempre que estas falencias sean subsanadas por el Estado Parte, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos al ratificar el CEDH¹²⁷; por esto, cuando el Estado ha realizado diligencias para afrontar el caso falló favorablemente.¹²⁸

Este tópico es relevante en aras de satisfacer el derecho del plazo razonable, porque no puede desatenderse dicha realidad judicial; hay fallas estructurales que imposibilitan su cumplimiento, dadas por falta de jueces, fiscales, asistentes

¹²⁵ COBO DEL ROSAL, Manuel, “y otros”. *Op. cit.*, p. 99. Es acertada la crítica que hacen a decisiones españolas que dejan sin efectividad el derecho en atención a las fallas estructurales del sistema, así han sustentado: “Algunas sentencias emanadas de los tribunales españoles, al tratar las dilaciones indebidas se refieren a ellas, básicamente, como defectos estructurales del sistema judicial, exponiendo que no se trata en este caso de dilaciones indebidas por no existir ningún tipo de “culpa” por parte del órgano jurisdiccional concreto. Nosotros, sin embargo, pensamos que ningún órgano jurisdiccional puede hacer valer tan vago argumento de los “defectos estructurales” para sobrepasar el plazo legal de la detención o el de la prisión provisional. Es claro que esta prohibición de violación del derecho fundamental a la libertad en tales casos, contenidos en el art. 17 CE, no puede tener un tratamiento distinto a la prohibición de quebrantar el derecho fundamental a ser enjuiciado sin dilaciones indebidas, en tanto en cuanto en ambos casos se trata, sin distinción alguna de derechos fundamentales, unos recogidos en el art. 17 y otros en el art. 24 CE. El único problema sería la indeterminación del concepto “dilación” o “indebida”.

¹²⁶ Caso Unión Alimentaria Sanders S.A., sentencia de 7 de julio de 1989, en el punto 40 señaló “Un atasco pasajero de un Tribunal no compromete la responsabilidad internacional de un Estado contratante si éste aplica, con la prontitud requerida, medidas aptas para remediarlo”.

¹²⁷ LANZAROTE MARTÍNEZ, *Op. cit.*, Págs.26 y 27. Sobre este punto, ha indicado: “Contempla, pues, este criterio las dilaciones que pueden proceder bien de la inactividad judicial que sin justificación alguna deja transcurrir el tiempo sin impulsar el proceso, bien de la sobrecarga momentánea de trabajo que puede sorprender a un órgano en un momento determinado, habiendo sentado como doctrina el TEDH en diversas ocasiones que el Convenio obliga a los Estados contratantes a que organicen sus órganos jurisdiccionales de manera que le permitan cumplir con las exigencias del artículo 6.1, incluida la que se refiere a la tramitación del proceso en un plazo razonable, con la sola dispensa de acumulaciones pasajeras, debiendo el Estado cuando la situación se prolonga y afecta la estructura del aparato judicial adoptar medidas que sean eficaces (STEDH 15 de julio de 1982 caso Eckle) 10 de diciembre de 1981n(caso Foti y otros), 27 de junio de 1987 (caso Baggetta), 24 de abril de 1988, caso Mavronichi, 12 de mayo de 1999, caso Saccomano) pues, como afirmó el TC (S223/1988) excluir del derecho al proceso sin dilaciones indebidas las que vengan ocasionadas en defectos de estructuras de la organización judicial sería tanto como dejar sin contenido al citado derecho”.

¹²⁸ Caso Wemhoff Vs. Alemania, sentencia de 10 de noviembre de 1969; caso Buchholz Vs. Alemania, sentencia de 6 de mayo de 1982; caso Neumeister Vs. Austria, sentencia de 28 de junio de 1988; caso Pretto Vs. Italia, sentencia de 8 de diciembre de 1984, entre otros.

judiciales, peritos, investigadores, defensores, material logístico, etc., que unidas en su conjunto impiden el cumplimiento de este derecho.

Así pues, la exigencia del TEDH para que ello sea corregido contribuye (i) a que, de una parte, se visibilice el problema de la rama judicial; (ii) de otro lado, a que el ejecutivo reconozca que debe tomar medidas conforme a los compromisos que el CEDH le impone, (iii) por último a que las autoridades tengan como herramienta las sentencias del TEDH para reclamar que se tomen las medidas del caso para dar satisfacción al derecho. De igual manera se reitera, y es un punto que deben desempeñar las autoridades, que no hay justificación en los casos en que éstas no hacen uso de sus potestades direccionales o discrecionales para encaminar la actuación, para corregir o exigir que se lleven a cabo actividades que sean precisas, en pro de la agilidad del proceso.¹²⁹

En la jurisprudencia del TEDH se puede observar que la violación del plazo razonable es atribuible en la mayoría de los casos a las autoridades judiciales, por retrasos imputables a éstas, o a fallas estructurales del sistema, por congestión de los despachos judiciales, falta de funcionarios, o porque éstos no han actuado de manera diligente en la conducción del proceso; porque no hay un direccionamiento correcto de la investigación; o porque no han utilizado sus potestades discrecionales o sus facultades correccionales para dirigir la actuación, lo que implica que en la mayoría de las ocasiones las dilaciones o retrasos se generan por la omisión o inoperancia de los funcionarios, por falta de diligencia o de cuidado, de ahí que ante alguna de esas situaciones se impuso una condena al Estado en la medida en que estaba obligado a cumplir los compromisos adquiridos en el CEDH, entre ellos tomar todas las medidas de orden judicial, administrativo o legislativo para garantizar que en un tiempo razonable sus funcionarios resuelvan los casos, dentro de unos plazos que, conforme a éstos criterios fijados por el TEDH, den satisfacción al derecho previsto en el artículo 6.1

Se destacan algunas causas atribuidas a las autoridades por parte del Tribunal:

¹²⁹ Caso Karakaya Vs. Francia, sentencia de 26 de agosto de 1994; caso Ortuño Ortuño Vs. España, sentencia de 27 de agosto de 2011 entre otros. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, Araceli. *La atenuante analógica de dilaciones indebidas*. Ed. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad. Madrid. 2007, p. 230. Según el criterio de Araceli Manjón, “Aunque el juez no haya provocado la dilación con su inactividad, puede haber consentido la tardanza causada por una parte o por quienes están llamados a colaborar en el procedimiento (peritos, testigos, organismos oficiales, etc.), lo que no le excusa de su obligación de impulsar, dirigir y recabar las actuaciones requeridas o de renunciar a ellas en caso de imposibilidad”.

- a- Falta de diligencia¹³⁰. Ésta es una constante en muchas actuaciones de los funcionarios y es importante que el Estado adopte las medidas correspondientes para evitar que se incurra en ella, y de ningún modo se justifica que pueda darse esta causa, porque desde que se asume el cargo deberían interiorizarse los compromisos y las obligaciones adquiridas. Tendrán que tomarse las acciones disciplinarias para evitar que la falta de diligencia sea reiterativa.
- b- Plazos muertos o sin ninguna actividad judicial, o retardos¹³¹. Esto solo podrá obedecer a una excesiva carga procesal que impida evacuar todos los casos con prontitud; de lo contrario, también el Estado tendrá que hacer valer sus potestades disciplinarias para corregir estos defectos.
- c- Sobrecarga laboral o congestión judicial¹³². En este tópico se impone cumplir las obligaciones que el Convenio establece al Estado, tomando las medidas necesarias como creación de más cargos de jueces, fiscales, asistentes judiciales, investigadores, etc.
- d- Priorización de casos¹³³. Siempre habrá que partir de la priorización de los casos; en materia penal los casos que tienen una persona detenida han de tener prelación; los de mayor reproche social en materia penal igualmente exigen mayor atención, o requieren una diligencia extrema aquellos donde se afecten derechos fundamentales.

¹³⁰ Caso Köning Vs. Alemania, sentencia de fecha 28 de junio de 1978; caso Deumeland Vs. Alemania, sentencia de fecha 29 de mayo de 1986; caso A Vs. Francia, sentencia de fecha 8 de febrero de 1996; caso Bendayan Azcantot y Benalal Bendayan Vs. España, sentencia de fecha 9 de junio de 2009.

¹³¹ Caso Eckle Vs. Alemania, sentencia de 15 de julio de 1982; caso Foti y otros Vs. Italia, sentencia de 10 de diciembre de 1982; caso H. Vs. Francia, sentencia de 24 de octubre de 1984; caso Unión alimentaria Sanders S.A Vs. España, sentencia de 7 de julio de 1989; caso Obermeier Vs. Austria, sentencia de 28 de junio de 1990; caso Beaumartin Vs. Francia, sentencia de 24 de noviembre de 1994; caso Yaggu Vs. Turquía, sentencia de 8 de junio de 1995; caso Giuseppe Terranova Vs. Francia, sentencia de 4 de diciembre de 1995; caso Paskhalidis Vs. Grecia, sentencia de 19 de marzo de 1997; caso Garyfallou Vs. Grecia, sentencia de 22 de octubre de 1997; caso Richard Vs. Francia, sentencia de 22 de abril de 1998; caso Meztger Vs. Alemania, sentencia de 31 de mayo de 2001; caso Minjat Vs. Suiza, sentencia de 28 de octubre de 2003; caso Moreno Vs. España, sentencia de 9 de junio de 2009.

¹³² Caso Zimmermann y Steiner Vs. Suiza, sentencia de 13 de julio de 1983; caso Milasi Vs. Italia, sentencia de 25 de junio de 1987; caso B Vs. Austria, sentencia de 28 de marzo de 1990; caso Serrano Contreras Vs. España, sentencia de 20 de marzo de 2012.

¹³³ Caso Zimmermann y Steiner Vs. Suiza, sentencia de 13 de julio de 1983.

- e- Problemas estructurales del sistema judicial¹³⁴. No se justifica que las autoridades extiendan el plazo para resolver un asunto, aduciendo atascos o congestión de los tribunales, porque de acuerdo a la jurisprudencia del TEDH los Estados Parte están obligados a tomar medidas para que los Tribunales resuelvan los casos en un plazo razonable, dado que así se exige en el CEDH¹³⁵; por tanto, frente a este problema la obligación del Estado es tomar las medidas para conjurarlo.
- f- Falta de gestión para remover retrasos en el procedimiento generados por causas diferentes al propio funcionario¹³⁶. Evidenciado este proceder se imponen medidas disciplinarias como correctivos que, ante las omisiones del funcionario, le obligan a actuar.
- g- Demoras en decidir recursos¹³⁷. Como ha quedado dicho, las instancias superiores deben acatar también las directrices del TEDH.
- h- Obstáculos para aceptar pruebas¹³⁸. Es obligación de los funcionarios decidir prontamente respecto de las pruebas solicitadas, o las nulidades pedidas, etc., porque ello agiliza el procedimiento.

¹³⁴ Caso Baggetta Vs. Italia, sentencia de 25 de junio de 1987; caso Unión alimentaria Sanders S.A Vs. España, sentencia de 7 de julio de 1989; caso Serrano Contreras Vs. España, sentencia de 20 de marzo de 2012. Vid. CABEZA OLMEDA Araceli Manjón, *Op. cit.*, págs. 239 y 240. Quien con relación a los problemas estructurales de la justicia ha indicado: "Siguiendo la jurisprudencia del TEDH y alguna resolución del TC, el TS ha manifestado en distintas ocasiones que las deficiencias estructurales de los órganos judiciales o la mala organización causante de la acumulación y retraso en la tramitación de las causas no sirven para justificar las dilaciones procesales y para negar la vulneración del derecho fundamental. Así, la STS 226/2004, de 27 de febrero, entiende que "es un derecho fundamental y como tal no puede depender de que la organización estructural de los órganos judiciales permita su ejercicio o no. Constituye una tergiversación de la noción misma del derecho fundamental considerar que su ejercicio solo se reconocerá si la situación lo permite. En este sentido los derechos fundamentales constituyen una fuente de obligaciones para el Estado que los debe respetar en todo caso. Lo anterior es consecuencia de la consideración de que el CEDH obliga a los Estados a una organización judicial idónea para cumplir los mandatos del art. 6.1 cuando se refiere al derecho a un juicio en plazo razonable no sólo a los jueces a respetarlo. En la jurisprudencia del TEDH como ya hemos visto, sólo se admite una excepción: la acumulación coyuntural y pasajera de asuntos por razones imposibles de prever y rápidamente subsanada".

¹³⁵ Caso Baggetta Vs. Italia, sentencia de 25 de junio de 1987; caso B Vs. Austria, sentencia de 28 de marzo de 1990; caso Mateos Vs. España, sentencia de 23 de junio de 1993, entre otros.

¹³⁶ Caso Moreira Vs. Portugal, sentencia de 23 de octubre de 1990; caso Karakaya Vs. Francia, sentencia de 26 de agosto de 1994; caso Matheus Vs. Francia, sentencia de 31 de marzo de 2005; caso Ortuño Ortuño Vs. España, sentencia de 27 de septiembre de 2011.

¹³⁷ Caso Abdoella Vs. Países Bajos, sentencia de 25 de noviembre de 1992.

¹³⁸ Caso Allenet de Ribemont Vs. Francia, sentencia de 10 febrero de 1995.

- i- Demoras para pronunciarse sobre la competencia¹³⁹. En la práctica se observa que esta situación genera dilaciones injustificadas por lo que debe revisarse su aplicación, y también deberán tomarse medidas disciplinarias.
- j- Falta de direccionamiento en la investigación. Éste es otro de los graves problemas que observó el TEDH; por ello, en el caso colombiano, deberá exigirse en todos los procedimientos la elaboración del programa metodológico, atendiendo a la respectiva denuncia penal y a las normas penales sobre tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, en consonancia con la normatividad procesal penal (herramienta investigativa para direccionarlo)¹⁴⁰, lo que permitirá hacer una efectiva evaluación del caso¹⁴¹.
- k- Tampoco justifica la violación del derecho al plazo razonable las situaciones relacionadas con problemas socio-económicos; contextos relacionados con conflictos internos que generan congestión en los despachos judiciales, pues en esos casos deben los Estados tomar medidas para conjurar esas circunstancias, pero las medidas tienen que tomarse a tiempo, de manera rápida, porque no son válidas cuando ya son insuficientes para satisfacer el derecho.

2.4 Transcendencia del asunto para el interesado

El otro criterio que utiliza el TEDH para establecer si se ha garantizado el derecho al plazo razonable es el interés del interesado en que se resuelva el asunto o la trascendencia del asunto para él. En este punto debemos indicar que para un ciudadano corriente no es comprensible que las autoridades no tengan este criterio como pauta para guiar las investigaciones y que el Tribunal tenga que hacer un reiterativo llamado de atención conforme a los bienes jurídicos puestos en juego, como la salud, la libertad de las personas, la seguridad pública, la vida, etc. Llama la atención que así sea, por eso se valora que el TEDH exija de las autoridades mayor diligencia, prontitud y agilidad, teniendo en cuenta los bienes jurídicos

¹³⁹ Caso *Allenet de Ribemont Vs. Francia*, sentencia de 10 de febrero de 1995.

¹⁴⁰ ARTÍCULO 207. Programa metodológico. Recibido el informe de que trata el artículo 205, el fiscal encargado de coordinar la investigación dispondrá, si fuere el caso, la ratificación de los actos de investigación y la realización de reunión de trabajo con los miembros de la policía judicial. Si la complejidad del asunto lo amerita, el fiscal dispondrá, previa autorización del jefe de la unidad a que se encuentre adscrito, la ampliación del equipo investigativo.

¹⁴¹ En Colombia con la embajada americana se realizaban capacitaciones del sistema acusatorio, comenzando por la evaluación del caso, herramienta muy útil para direccionar correctamente las investigaciones, desafortunadamente el programa terminó y no llegó a la totalidad de los Fiscales.

debatidos¹⁴², requiriendo en casos como éstos diligencia extrema de los funcionarios¹⁴³, criterio que ha denominado lo que arriesga el interesado, exigiendo una diligencia excepcional en resolverlos.

Ante esas circunstancias es oportuno señalar, como se hará en este trabajo, que los funcionarios judiciales deben ser personas con muy altas calidades humanas, quienes especialmente deberán conocer los instrumentos internacionales de derechos humanos y la protección que a ellos se les brindan en las respectivas constituciones políticas.

2.5 Análisis global del procedimiento

También es otro parámetro que utiliza el TEDH para establecer si se ha violado el derecho del plazo razonable, y a través de él examina todo el procedimiento en su integridad, revisa cada una de las etapas hasta la decisión final, cada acto procesal y el término transcurrido, hasta que se haya dictado la sentencia definitiva. Este parámetro de control permite establecer si todos los funcionarios comprometidos en las diferentes actuaciones civiles, penales, laborales, etc., cumplieron a cabalidad con todas las directrices que en cada materia ha elaborado el TEDH, y por ello es una buena herramienta.

Comienzo del término: En el campo penal

¹⁴² TÉLLEZ AGUILERA, Abel. *Los juicios rápidos e inmediatos. Comentarios a la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal sobre juicios rápidos e inmediatos y del procedimiento abreviado*. p. 33. Sobre el tema ha indicado: “La trascendencia del asunto para el recurrente”: la dilación indebida debe tener una mínima trascendencia para el recurrente para que pueda hablarse de afectación del derecho fundamental, habiendo señalado nuestro Tribunal Constitucional, como antes dijimos, que no puede identificarse, tampoco, todo incumplimiento de una norma procesal con la producción de la indefensión proscrita constitucionalmente, pues ésta sólo se produce, por un lado, cuando se priva al justiciable de alguno de los instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a su alcance para la defensa de sus derechos con el consiguiente perjuicio, y por otro, cuando tal vulneración de la norma no es puramente formal sino que la misma supone una real y efectiva indefensión, un menoscabo real y efectivo del derecho de defensa”.

¹⁴³ FERNÁNDEZ VIAGAS BARTOLOMÉ, Plácido *Op. cit.*, p. 85, sobre el tema refiere: “El valor de los bienes puestos en juego en el proceso penal determina una actitud de rechazo, casi apriorística, a la excesiva duración del procedimiento. Creemos necesario conectar este tema con el de la necesidad, en una sociedad democrática, de garantizar a los acusados la totalidad de los elementos de defensa, asegurándoles especialmente la posibilidad de mantener, para ello su integridad intelectual y psíquica”.

En torno al plazo para llevar a cabo las actuaciones penales, el TEDH no es muy preciso, y comienza a computar el plazo a partir de la fecha en que se notifica al interesado que en su contra se adelanta un proceso penal, o que se le acusa, o al inicio de las diligencias preliminares, y termina cuando en su contra se dicta una sentencia, de modo que el TEDH tampoco establece un momento para comenzar a computar el plazo razonable¹⁴⁴; de ahí que en aras de armonizar y garantizar igualmente el derecho de defensa, debemos partir de que el inicio del plazo se compute a partir del momento en que una persona se encuentra plenamente identificada e individualizada como presunto (a) responsable de un delito.

Para el Tribunal el plazo razonable en materia penal tiene por objeto proteger a todos los justiciables contra la excesiva lentitud del procedimiento, de modo que el plazo razonable se propone evitar la incertidumbre del inculpado, que su situación no se mantenga demasiado tiempo sin resolver, siendo las autoridades las que tienen la carga de impulsar y resolver el caso, de asumir y demostrar su responsabilidad.

La persona investigada está exonerada del deber de impulsar la actuación, reconociéndose por tanto que su actividad se dirige a defenderse de las imputaciones en su contra y hacer efectivo su derecho de “presunción de inocencia”. Agreguemos a lo anterior que va dirigido también a proteger a las víctimas, para que sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral se resuelvan en un plazo

¹⁴⁴ FERNÁNDEZ-VIAGAS BARTOLOMÉ, Plácido, *Op. cit.*, p. 102. Según Plácido Fernández, “En esta materia el Tribunal, como ha hecho con otros conceptos en aras de mayor flexibilidad, parece haber optado por atribuir “carácter autónomo” a la noción extraída del texto francés “accusation”, considerando que debe entenderse en el sentido del Convenio, lo que le ha permitido llegar a una interpretación amplia y curiosamente antiprocesalista”. Vid. LANZAROTE MARTÍNEZ, *Op. cit.*, págs.33 y 34. Por su parte, para Lanzarote Martínez, “El periodo inicial en el cómputo del plazo razonable en materia penal comienza, según jurisprudencia del TEDH (caso Eckle, STEDH 15 de julio 1982), en el instante en que una persona se encuentra acusada, pudiendo tratarse de una fecha anterior al inicio del proceso, como concretamente la fecha del arresto, de la inculpación o de la apertura de las diligencias preliminares, definiendo la acusación como la notificación emanada de autoridad competente del reproche por haber cometido una infracción penal, no coincidiendo estrictamente con el inicio de la causa penal, pues debe extenderse a todo el tiempo en que el sujeto se ha visto sometido a la duda sobre su culpabilidad o inocencia. El momento inicial que ha de ser tomado en consideración desde la perspectiva del derecho consagrado en el art. 6.1 CEDH ha de ser interpretado de forma extensiva. De este modo, aunque pudiera definirse en términos generales dicho momento inicial haciéndolo coincidir con el de la acusación, es decir, la notificación oficial, dictada por la autoridad competente, de la acusación de haber cometido una infracción penal, sin embargo, la misma puede revestir en ciertos casos la forma de otras medidas que impliquen tal acusación y entrañen, también, repercusiones importantes sobre la situación del acusado (sentencia Corigliano, 10 de diciembre de 1982). En el caso López Solé Vs. España, 28 de octubre, 2003, el tiempo comienza a contar desde que una persona se encuentra formalmente acusada o cuando las sospechas en su contra tienen repercusiones importantes, en razón de las medidas de las autoridades encargadas de perseguir los delitos”.

razonable. Para la víctima, como para indiciado o acusado, ese plazo razonable dependerá de cada caso, de conformidad con los criterios que ha desarrollado el propio TEDH.

Se computa entonces el plazo desde el inicio de la actuación hasta el momento en que las autoridades dicten una sentencia definitiva.

Plazo en materia civil, laboral o administrativa

Cuando se trata de un asunto civil se parte de la fecha en que el demandante presenta la respectiva demanda y se extiende hasta que haya una sentencia, teniendo en cuenta el tiempo que tardan en resolverse los recursos.

Si es un caso contencioso administrativo cuenta desde la fecha en que el interesado se opuso al acto administrativo, dado que es un presupuesto para interponer la respectiva demanda, y hasta que se dicte la sentencia definitiva.

En materia laboral tiene en cuenta el término que tardan en resolverse las cuestiones que demanden actos previos y obligatorios para acceder al sistema judicial.

CAPITULO III

CONCLUSIONES IMPORTANTES ACERCA DE LAS SOLUCIONES DADAS POR EL TEDH SOBRE EL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE

Como primera conclusión del examen de la jurisprudencia revisada se puede indicar que el TEDH no definió el concepto de plazo razonable¹⁴⁵; el Tribunal se limita a ofrecer unos parámetros que sirven para analizar si el derecho se ha violado o no, aplicando los criterios de complejidad, actividad del interesado, actuación de las autoridades, análisis global del procedimiento, como también el interés que está en juego para el implicado o lo que arriesga. Con esta perspectiva va fijando pautas al revisar cada caso, sin precisar cuál debe ser el plazo razonable en todos los procesos, y cuando trató el criterio de la complejidad no indicó una lista taxativa de las circunstancias a través de las cuales poderla apreciar. Por todo ello se debe concluir que es un concepto indeterminado, pues el mismo Tribunal sostiene que no se puede señalar en días, meses, semanas o años.¹⁴⁶

Por ende, conforme al desarrollo de la jurisprudencia del TEDH, la garantía del cumplimiento del derecho al plazo razonable es indefinida; depende de cada caso, y tendrán que tenerse en cuenta situaciones muy concretas, lo que indica que en unos procesos el término sea justificado, pero injustificado en otros, dependiendo de varias circunstancias y factores que no han sido específicamente definidos.

¹⁴⁵ CATALATA I BAS, Alexandre H. *La Jurisprudencia del TEDH Sobre El Derecho A Un Proceso Sin Dilaciones Indebidas Y Su Recepción Por El Tribunal Constitucional*. Dereito. Vol. 11. No. 1: 25-60, 2002, p. 32. Respecto a este tópico, se pronuncia así: “El TEDH no se preocupa por dar definiciones acabadas de cada uno de los derechos. En cambio, el Tribunal constitucional se preocupa más por las cuestiones doctrinales y ello lo lleva a ser más meticoloso en este aspecto. De esta manera la sentencia STC 43 /1985, de 2 de octubre, nos proporciona una definición del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas en los siguientes términos: “Por proceso sin dilaciones indebidas” hay que entender el proceso que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción”

¹⁴⁶ MORELLO, Augusto M. *El proceso justo, del garantismo formal a la tutela efectiva de los derechos*. Ed. Librería Platense. Argentina. 1995, p. 370. Sobre este concepto indeterminado ha señalado: “Conviene reparar en que la formula plazo razonable, traduce lo que en teoría se denomina un concepto jurídico indeterminado, que debe ir recortándose en su flexible y ajustable adaptabilidad a distintos parámetros sociológicos y jurídicos dentro de los cuales cobra relieve la manifestación de un proceso específico y la consecuente respuesta jurisdiccional”. Vid. LANDA ARROYO, César. *El derecho al debido proceso en la jurisprudencia: Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Tribunal Constitucional de Perú. Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Volumen I. Colección Cuadernos de la Jurisprudencia. Perú. 2012. Págs. 34, 35. “Para el Tribunal Constitucional español en las sentencias 36/984, 5/1985, 133/1988 y 81/1989 también “el concepto de dilaciones indebidas es manifiestamente un concepto indeterminado o abierto que ha de ser dotado de contenido concreto en cada caso atendiendo a criterios objetivos congruentes con su enunciado genérico”.

Es de criticar que el TEDH no determine en qué fecha debe comenzar a operar la demora o dilación, y que tampoco sienta bases taxativas con relación a cada uno de los criterios establecidos, lo que permite que en un caso dado se considere violado el plazo razonable y en otro no. La jurisprudencia no resuelve de manera categórica y precisa cuándo se puede dar la violación del derecho, lo que da lugar a imprecisiones, incertidumbre, inseguridad jurídica, y un vacío en esta materia, por la falta de claridad respecto de los plazos en razón de la materia o del proceso de que se trate.

Cuando el TEDH evalúa el contexto en ocasiones lo toma como un factor de complejidad del asunto, pero en otros, lo valora como una circunstancia que impide a las autoridades resolver el caso en un plazo razonable.¹⁴⁷

Atendiendo a toda la casuística que considera el TEDH, la situación estará enfocada en determinar si dicha complejidad necesariamente tiene que justificar una violación del derecho del plazo razonable. Tenemos que señalar que no, porque la complejidad no determina necesariamente esa vulneración, y se impone la obligación de cumplir la garantía del derecho al plazo razonable. Por ello, no toda situación que genere complejidad del asunto podrá autorizar a los funcionarios judiciales a extender los términos de manera irrazonada.

En lo que tiene que ver con la actividad del interesado podemos indicar que el TEDH tampoco ha enunciado los casos en que comprenden esa circunstancia, lo que también requiere de un análisis caso por caso; siempre tendrá que valorarse que cuando el interesado hace uso de los recursos de ley simplemente está ejerciendo sus derechos, siendo siempre obligación de las autoridades resolverlos prontamente. Por tanto, solamente serán conductas obstruccionistas, dilatorias, de este sujeto procesal las que determinen su actitud de causar moras injustificadas en la actuación, pero sin que el TEDH precise desde cuándo se da la dilación o la violación del plazo razonable.

Como se ha sostenido, en materia penal, como lo reclama el TEDH, no puede exigírsele o pedírsele al indiciado o acusado colaboración con las autoridades ni

¹⁴⁷ Una situación que se incluyó por el TEDH a favor de las autoridades, lo constituyó el aspecto socio- económico, caso Buchholz, pues este factor se tenía como una de las circunstancias que tornaban un caso complejo, y así debe ser, pues de verdad que su existencia implica dificultades para resolver un asunto, más nunca puede ser tenido como causa o circunstancia que autorice a las autoridades dilatar los términos o vulnerar un derecho que está protegido por el CEDH, ello generaría la desprotección de esta garantía, por ello no debe evaluarse como factor que justifique la actuación de las autoridades.

celeridad en el procedimiento, porque será derecho de este sujeto procesal buscar la mejor estrategia en pro de defender sus intereses, de tal suerte que una persona seriamente comprometida en una actuación, muy seguramente lo menos que quiere es que se realice prontamente; muy por el contrario, la mayoría de las veces su pretensión estará direccionada al retardo, a la dilación, porque cada día que transcurra hay más dificultades para la acusación en conseguir una sentencia condenatoria y el transcurso del tiempo también permite obtener la prescripción de la acción penal.

El punto que tocaría revisar es el de la parte civil, la víctima, cuando se decide la pretensión civil conjuntamente en el proceso penal, a quien le interesa que el proceso se resuelva prontamente, de ahí que estará buscando evitar las dilaciones y la demora que puede generar el indiciado, imputado o acusado. En este punto se observa que cada interesado estará luchando por su derecho; por ello las víctimas en el caso penal buscan obtener una sentencia condenatoria, mientras que el acusado usa sus herramientas defensivas para obtener el reconocimiento de su inocencia, de tal suerte que en ese afán aparecen los actos dilatorios, pero es acertada la jurisprudencia, que es ahí donde debe actuar el funcionario judicial, evitándolos, resolviendo los recursos interpuestos de manera pronta.

Los demandantes en el proceso laboral, administrativo o civil, deben contribuir con todos aquellos actos que demanda el proceso, actuando igualmente con rectitud, lealtad, aportando los datos, documentos y demás elementos que requieran las autoridades para llegar a una sentencia definitiva, pero sin desconocer que es la contraparte la que estará dilatando, obstaculizando la labor, en aras de no ser condenado. Sobre este aspecto el TEDH hace prevalecer el derecho que tiene la parte interesada evitando que se le coloquen cargas que no debe asumir.

Hay un buen punto a favor del TEDH cuando en su jurisprudencia evidencia que muchas actuaciones presentan demoras y dilaciones injustificadas por culpa de la misma ley procesal, porque está cargada de garantías o trámites innecesarios, que entorpecen su cabal desarrollo. En este punto tendrán que examinarse los procedimientos, tanto civiles, laborales, administrativos o penales, en aras de suprimir o abolir muchos actos que pueden generar dilación de la actuación, relacionados con autos o resoluciones de trámite innecesarios, recursos contra autos o resoluciones que no resuelven situaciones sustanciales en la actuación y generan entorpecimiento; esto lo destacó el mismo TEDH en el caso Köning contra de Alemania, en la medida en que el exceso de garantías procesales generó retardo de las actuaciones, y que por esa circunstancia se tornaron complejas.

Si el procedimiento penal no es simplificado porque está rodeado de mucho ritualismo, formalismo, esto se traduce en retardos injustificados de la actuación judicial, exigiendo el TEDH suprimirlos, como obligación a cargo de los Estados Partes para tener agilidad en los procedimientos. Ese ritualismo va en contra de la efectividad del derecho sustancial, porque prevalece la forma.¹⁴⁸

Queda claro que para el TEDH el comportamiento de las autoridades siempre debe estar fundado en el respecto del derecho al plazo razonable, no solo para acciones penales, sino también para las laborales, administrativas o civiles, donde igualmente es exigible dar cumplimiento a esta obligación, conforme al requerimiento del CEDH.

De la jurisprudencia del TEDH queda como tarea a los Estados, y especialmente para la rama judicial, resolver los problemas estructurales relacionados con la falta de jueces, peritos, investigadores, medios logísticos, etc., para cumplir la obligación asumida por el respectivo Estado, cuando ratificó el CEDH.

Para el TEDH los problemas estructurales que son de carácter permanente no justifican la violación del derecho al plazo razonable, aceptando que haya una justificación cuando son transitorios. En este punto, razón le asiste a CATALA I BAS cuando crítica al TEDH, al sustentar “qué criterios utiliza el TEDH para señalar que un retraso es debido a causas estructurales o temporales. El TEDH no resuelve la cuestión de que en qué momento y bajo qué circunstancias, el retraso en la administración de justicia es debido a causa permanentes o circunstanciales. Por otra parte, cabe plantearse la duda sobre la conveniencia de esta distinción en la medida que sean unas u otras causas, el resultado es el mismo: la vulneración de un derecho por parte de las autoridades nacionales. En este sentido el carácter temporal de las circunstancias que han provocado el retraso no puede jugar como causa eximente de la responsabilidad de éstas”¹⁴⁹.

Hay un punto muy importante indicado por el TEDH, y que tendrá que revisarse una y otra vez por los diferentes Estados: son las falencias que pueden provocar la violación del derecho al plazo razonable; no son cuestiones relacionadas con problemas estructurales del sistema, sino conectadas con otras circunstancias como son la falta de diligencia, de eficacia, de direccionamiento, de eficiencia de los funcionarios judiciales, la falta de uso de herramientas correctivas, errores en el

¹⁴⁸ *Ibídem*.

¹⁴⁹ CATALA I BAS, Alexandre, *Op. cit.*, págs. 40 y 41..

ingreso del personal (por su falta de competencia y habilidades para desarrollar su trabajo de manera eficaz)¹⁵⁰, etc.

Ante ello se propondrá en este trabajo que la judicatura desarrolle sistemas de ingreso que permitan calificar al personal más idóneo, lo que supone inicialmente conocer muy bien las funciones a desarrollar, conocimientos de los instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan al Estado respectivo, las habilidades, destrezas, perfiles, compromisos, etc., en aras de vincular personal muy calificado y sobre todo con mucha dedicación en el trabajo, con alto sentido de humanidad, entendiendo que los plazos se deben cumplir con diligencia¹⁵¹.

Para el TEDH las autoridades para hacer eficaz el derecho a la recta administración de justicia tienen que conducir los procesos de manera diligente para dar aplicación al derecho del plazo razonable, contribuyendo a que la causa se puede resolver más prontamente; por ello al examinar el procedimiento deberá verificarse la diligencia de las autoridades, comprendiendo necesariamente una correcta dirección de la investigación, especialmente en materia penal, porque esencialmente en esta materia se pueden observar las mayores fallas y las más graves consecuencias.

Muy oportuno destacar que en esa dirección se incluyen igualmente la aplicación de medidas correctivas en aras de evitar que los sujetos procesales puedan dilatar el procedimiento, comprendiendo así mismo a otros actores, como son los peritos, autoridades penitenciarias, entidades de salud, empresas privadas, etc., en pro que den cumplimiento de manera pronta a los requerimientos que se hagan en el proceso penal¹⁵².

¹⁵⁰ MORELLO, Augusto M *Op. cit.*, p. 366. "Para la maduración del proceso es necesario pagar ciertos peajes: tiempo, costo, la falibilidad de los jueces, etc; no es posible sacar de quicio el punto de inflexión entre la espera y la esperanza. La defensa y el consejo profesional al cliente ansioso, urgido, que nos requiere que la respuesta de la jurisdicción sea inmediata(el ya, no más adelante o después) demandan que con paciencia, se asuman esos condicionantes de los que sólo algunos se pueden ajustar o mejorar: selección de los jueces, imparcialidad, formación especializada, reciclaje en la escuela judicial, modernización de los sistemas procesales, reducción de los obstáculos en el trámite y el abuso de los recursos, factores culturales, igualación económica, etc."

¹⁵¹ Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.

¹⁵² "El juez es el sujeto principal de la relación jurídica procesal y del proceso, y en tal virtud, a él le corresponde dirigirlo efectivamente e impulsarlo de tal forma, que pase por las distintas etapas con la mayor celeridad y sin estancamientos. Y en ese sentido debe controlar la conducta de las partes, investigando y sancionando cualquier acto contrario a la dignidad de la justicia. Así mismo, el juez

Ante ello es importante ese reclamo y obligación de las autoridades para que hagan uso de esas facultades que la ley concede para dirigir el comportamiento de los sujetos procesales, para que no dilaten los plazos judiciales ni obstruyan el normal desarrollo de la investigación. Lo cierto es que en la práctica las autoridades poco utilizan dichos poderes; muy al contrario, en la mayoría de las veces se permite las prácticas dilatorias por parte de algún sujeto procesal o interviniente, de manera que si hubiese rigurosidad en el cumplimiento de esos deberes que la ley impone, gran parte de las actuaciones se podrían resolver en un plazo razonable.

No puede pasarse por alto que el TEDH demandó un criterio de prioridades soportado en varios aspectos: de una parte, el interés que arriesga el demandante, ya se trate del derecho a la vida, a la salud, seguridad social, etc. y, de otra parte, que una vez establecido que el plazo se ha superado de manera razonable, debe darse otro criterio de priorización, cual es el trato preferente para resolverlo. También la priorización va enmarcada respecto a la selección de casos, pues el Estado no tiene capacidad de resolver todos los asuntos, lo que implica una priorización de ellos.

Esta propuesta del TEDH deberá ser estudiada porque son herramientas que dinamizan la resolución de las investigaciones, no desconociendo en este punto la incapacidad para abordar todos los asuntos; por tanto, debe ir acompañada con propuestas y alternativas de los Estados en su legislación, como el principio de oportunidad, es decir, aquella facultad del Estado para renunciar en ciertos eventos y bajo ciertas circunstancias a la persecución de la acción penal¹⁵³.

cuenta con el poder de coerción, el cual incluye el poder disciplinario, que le permite sancionar con multas a los particulares que sin justa causa incumplan las ordenes que les imparta en el ejercicio de sus funciones, o demoren su ejecución. Corte Constitucional colombiana. Sentencia de tutela 577 de 1998. Artículo 10 ley 906 de 2004. Actuación procesal. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respecto por a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios harán prevalecer el derecho sustancial. (...) inciso 3°. El juez dispondrá de amplias facultades en la forma prevista en este código para sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos. Código penal artículo 414. Prevaricato por omisión. El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión...

¹⁵³ CASTILLEJO MANZANARES, Raquel. *Hacia un nuevo proceso penal. Cambios necesarios*. Editorial la ley. Madrid, 2010, p. 41. Acertadamente Raquel Castillejo sostiene que el principio de oportunidad debe ser utilizado en una legislación entre otras cosas para favorecer el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. “El principio de oportunidad permite a la Fiscalía en Colombia disponer de la acción penal, bajo algunos supuestos, como desarticular estructuras criminales dedicadas a cometer delitos de alto reproche social, o usar esta figura en casos de poca transcendencia, o por falta de lesividad o daño social”.

Igualmente usar otros instrumentos que permitan descongestionar el aparato judicial, con figuras jurídicas como la conciliación, desistimiento, mediación, todo ello, en caso de delitos menores. De otra parte, alternativas como preacuerdos, para culminar rápidamente los procedimientos, como medida para conocer la verdad, hacer justicia y obtener rápidamente una indemnización integral.

O acudir a otras medidas como la deflación penal en delitos de poca entidad o lesividad¹⁵⁴, descriminalización, porque el Estado día a día abusa del derecho penal como medida necesaria para responder frente a vacíos y deficiencias que no ha cumplido; para regular problemáticas sociales, económicas, etc., existiendo una tendencia hacia la criminalización de conductas y uso de la prisión preventiva, versus derecho penal mínimo o ultima ratio. Debe igualmente propenderse por el uso racional de la prisión preventiva para cierto tipo de conductas, evitándola en aquellos casos que no revisten tanto reproche social versus aquellas que por su gravedad, consecuencias para la comunidad, víctima, etc., permiten el uso de la prisión preventiva.

Los principales problemas estructurales del sistema están relacionados con la congestión y la mora judicial, por la insuficiencia de jueces, fiscales, investigadores de todo orden, asistentes judiciales, etc., situación que se traduce en dilaciones en la investigación penal.

Totalmente de acuerdo con la postura del TEDH¹⁵⁵, respecto que la preocupación no vaya tan enfocada hacia la premura o celeridad en que el caso se

¹⁵⁴ ARNALDO BRUERA, Hugo; BRUERA Matilde Marina. *Derecho Penal y Garantías Individuales*. Editorial Juris. Argentina. 1997, p. 51. En este punto es pertinente citar lo expuesto por estos autores sobre el tópico: “El derecho penal moderno, se orienta por el principio político criminal de la mínima intervención, que debió tenerse en cuenta para evitar los mecanismos burocráticos que intervinieron en la “fabricación” de este supuesto delito. Supone el mencionado principio de la deflación penal, en el ámbito legislativo y jurisdiccional.” Vid. FERRAJOLI, Luigi. *Derecho y razón, Teoría del garantismo penal*. Ed. Trotta, Madrid. 1997. Págs. 76, 79 y 80. Según Ferrajoli: “Asistimos en todos los países de Occidente, a una crisis de sobreproducción del derecho penal, o incluso del derecho en general, que está produciendo el colapso de su capacidad regulativa. Las leyes se cuentan actualmente, en todos los países, por decenas de millares, hasta el punto de que nuestros ordenamientos han regresado – a causa del caos normativo, de la multiplicación de las fuentes y de la superposición de las competencias – a la incertidumbre y a la arbitrariedad propia del derecho jurisprudencial pre-moderno. Y sin embargo, con aparente paradoja, a la inflación legislativa se corresponde la ausencia de reglas, de límites y controles a los grandes poderes económicos transnacionales y sobre los poderes políticos que los alientan. (...) Frente a esa crisis regresiva del derecho penal es hoy necesaria y urgente una batalla política y cultural en torno a un derecho penal garantista. Un programa de ese tipo que he llamado derecho penal mínimo debería intentar restituir el derecho penal su naturaleza de instrumento costoso, como extrema ratio, y por otro lado su papel de ley del más débil dirigida a la minimización de la violencia y a la tutela de bienes fundamentales”.

¹⁵⁵ SARMIENTO Daniel; MIERES MIERES, Luis Javier Y PRESNO LINERA, Miguel. *Las sentencias básicas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estudio y jurisprudencia*. Editorial Thomson

resuelva, sino por el contrario, que tomen las autoridades el tiempo estrictamente necesario, según su complejidad; de ahí que el punto de atención se enfoca más en la eficacia o recta administración de justicia, lo que es muy favorable y de buen recibo, porque al realizar un test de proporcionalidad, donde están en juego dos derechos fundamentales, el derecho al plazo razonable y el derecho a la recta administración de justicia, la balanza tiene que inclinarse a favor de este último, en la medida en que también favorece los intereses de todos los sujetos procesales, entre ellos la víctima.

En cuanto al plazo razonable de la prisión preventiva los criterios del TEDH se enmarcan en contemplar aspectos relacionados con la necesidad para imponerla, su justificación, de tal manera que tampoco aquí se hace un pronunciamiento acerca del plazo que debería considerarse, partiendo en ese caso del delito investigado. En consecuencia, en materia de plazo razonable de la prisión preventiva no se aborda la solución de la violación del derecho, porque se parte de un análisis constitucional de su imposición, y exige el TEDH que para mantener la medida estos motivos persistan, pero no se precisa en qué tiempo las autoridades tendrán que renovar o justificar que la privación de la libertad se mantenga¹⁵⁶.

En esta materia lo aconsejable sería que el TEDH exigiera o sugiriera a los Estados Partes que el tiempo en el cual una persona debe permanecer en prisión preventiva esté determinado por la ley, porque una cosa es que se cumplan los presupuestos constitucionales para imponerla y otro muy diferente es el tiempo en que una persona debe mantenerse en esa situación, dado que es una medida provisional, cautelar; de ahí que lo pertinente es señalar un plazo, que debería

Civitas. Madrid. 2007, p. 55. Según estos autores “La naturaleza abierta del artículo 6º del CEDH ha permitido que el TEDH maneje cierta flexibilidad mostrando a lo largo de su jurisprudencia que lo importante no es la “celeridad” en sí misma, sino que el proceso se desarrolle sin anomalías”.

¹⁵⁶HERRENDORF, Daniel E. *Los Derechos Humanos ante la justicia. Garantía de la libertad innominada*. Ed. Abeledo – Perrot. Buenos Aires. 1998, p.30. sobre la justificación de la restricción de la libertad, ha señalado: “La persistencia del peligro de fuga no podría justificar una detención que se ha prolongado ya más allá de los límites razonables. De igual manera tampoco tiene justificación la libertad cuando una persona ha permanecido bastante tiempo sin que le definan jurídicamente su proceso, así que es cierto que (...) la libertad de un procesado después de un tiempo razonable de prisión preventiva no constituye para el ordenamiento jurídico vigente, siempre y en todos los casos, un problema de moralidad pública en cuanto *minimun* de moralidad ético acogido por el Derecho, sino que la vulneración de ese *minimun* exige valorar las circunstancias concurrentes, muy especialmente tratándose de una restricción fundamental. (...) el recto funcionamiento de una sociedad democrática implica que cada institución asuma el cumplimiento de la función que le es propia. La justicia ha de abocarse a determinar si el principio de proporcionalidad ha quedado infringido en el caso de eternas prisiones preventivas, desde la perspectiva del derecho fundamental y del bien jurídico que ha venido a limitar el ejercicio de la libertad ambulatoria, por ser la medida adoptada desproporcionada para la defensa del bien que da origen a la restricción”.

atender a criterios relacionados con la complejidad del asunto, que estuviera profundamente estudiado por la jurisprudencia del Tribunal, donde entraría en juego factores como el número de personas detenidas en un mismo asunto, número de delitos, naturaleza del delito, etc., todo ello para fijar plazos más o menos amplios de duración de la privación de la libertad preventiva, según se trate de un caso complejo o no, como por ejemplo con varios acusados y delitos considerados en la legislación como graves ya sea a nivel nacional e internacional.

Para la prisión preventiva el TEDH tiene en cuenta la necesidad de imponer la medida y si el tiempo en que la persona estuvo detenida era el razonable. No se toma en consideración si la legislación estableció o no un plazo para esa duración, con lo cual no se exige o recomienda su reglamentación en aras del cumplimiento de ese derecho.

Ante la omisión por el TEDH se pueden producir arbitrariedades, porque cada juzgador, y no la ley, tiene la facultad de establecer el plazo de acuerdo a cada caso, propiciándose que sean los jueces quienes establezcan las normas en esta materia.

En consecuencia, en materia de plazo razonable para la detención preventiva no hay definición del plazo que deben aplicar las autoridades para que una persona esté privada de la libertad, porque el Tribunal no evalúa los plazos que en un caso dado ha fijado la ley procesal, ni exige que se fijen legalmente esos plazos; por el contrario examina los contenidos constitucionales que permiten su imposición y la persistencia de los mismos en el tiempo, pero no esclarece cuál es el plazo máximo durante el que puede mantenerse, generando incertidumbre en este campo, quedando al arbitrio del funcionario judicial su valoración, cuando se debería establecer en la ley para garantizar su efectividad, de modo tal que si se sobrepasa la consecuencia obligada sea que el afectado recobre la libertad, salvo que la dilación la genere la parte interesada, porque en tal situación se descontaría el tiempo que ha dilatado para contabilizar los respectivos plazos.

Por lo tanto, existen dos plazos diferentes en el proceso penal como lo prevé el TEDH: uno para la duración de la prisión preventiva y otro para la duración del proceso; el primero de ellos, necesariamente como lo reclama el Tribunal, se rige por unos criterios más estrictos y es mucho más corto. Es de criticar que en el caso del plazo para la duración total del procedimiento, tampoco el TEDH realice una valoración con respecto a si la legislación consagró un tiempo máximo para finalizar las actuaciones, ni menos aún que exista a no alguna exigencia para la regulación de dichos plazos.

Así las cosas, se comparte totalmente la crítica que hace Daniel R. Pastor al TEDH¹⁵⁷, pues la investigación sobre la razonabilidad del tiempo debería restringirse a examinar si las legislaciones nacionales cumplen con los plazos legales, es decir, controlar si los plazos son razonables o no, en vez de establecer criterios abiertos que se tornan arbitrarios, y no exigir su consagración legislativa, ni examinar su razonabilidad en los Estados Partes que los tienen; de esta manera se genera incertidumbre, inseguridad jurídica y decisiones contradictorias, pues siempre tendrá que revisarse caso a caso, partiendo del análisis global del procedimiento para decidir si una garantía de rango constitucional, que procede de un instrumento internacional, se ha vulnerado o no. Esto se evidencia también en el hecho de que el TEDH ante términos ostensiblemente irrazonables, no considera esta circunstancia en sí como una vulneración del derecho al plazo razonable, sino que examina si hubo vulneración aplicando los criterios que se han esbozado.

El TEDH, en cumplimiento de los derechos previstos en el CEDH, artículo 6.1, debería exigir a los Estados Partes que regulen los plazos, tanto para la duración de la prisión preventiva como los plazos de las etapas del proceso penal, para que cada legislación analice varios aspectos. (i) Si han reglamentado los plazos en estas materias, verificar su razonabilidad, en atención al criterio de la complejidad, para establecer unos plazos más breves en asuntos de poca trascendencia penal y el uso muy restringido de la prisión preventiva. (ii) En casos complejos tener en cuenta las situaciones de hecho y de derecho que prevé el Tribunal, para reglamentar unos plazos más prolongados. (iii) Establecer plazos máximos de la prisión preventiva para estos casos más complejos. (iv) La posibilidad de prorrogar esos plazos por un término determinado. (v) De no existir en la legislación procesal penal estos plazos ni para el procedimiento penal ni para la duración de la prisión preventiva, el TEDH debería recomendar establecerlos, y que para ello el Estado tenga en cuenta los criterios señalados por el Tribunal en su enriquecedora jurisprudencia, pues eso permitiría diferenciar unos plazos de otros,

¹⁵⁷ Cfr. PASTOR, Daniel R. *Op. cit.*, 2002, págs. 116 y 117. Sobre la indeterminación del término se pronuncia Pastor, y sobre la misma necesidad de reglamentarlos, estableciendo que “El intento del TEDH por mantener el plazo razonable de duración penal como concepto jurídico indeterminado, que debe ser definido en cada caso concreto, no ha sido más que una excusa para justificar la propia arbitrariedad del Tribunal y un puente de oro para que los Estados escapen de su compromiso de regular plazos determinados y puedan ejercer, a través de sus tribunales – especialmente de los superiores, la misma arbitrariedad, sometida al único control externo de exponerse a la arbitrariedad del TEDH”. Vid. ESPARZA LEIBAR, Iñaki. *El principio del debido proceso*. Editorial J.M. Bosch Editor, S.A. 1995, p. 214. Sobre este aspecto, añade que “Para que la actividad jurisdiccional alcance sus objetivos de justicia es preciso que el proceso se tramite con celeridad y para ello como no es posible tramitar un proceso instantáneo, el cumplimiento de los plazos procedimentales establecidos por las leyes”.

además de que atendería las necesidades de cada Estado, conforme a su contexto político, social, económico, etc.¹⁵⁸

En este orden de ideas, el hecho de no existir plazos, o de existir pero sin que se exija su cumplimiento¹⁵⁹ da lugar a interpretaciones casuísticas y provoca incertidumbre que genera inseguridad jurídica, como sucede con el criterio de la complejidad, pues en esta materia el Tribunal va estableciendo nuevos elementos de ponderación; de modo que si existieran plazos la primera evaluación estaría dirigida a examinar su cumplimiento o las circunstancias que demandaron la extensión del plazo legal. Si se atiende al criterio de complejidad el plazo razonable será el que demande cierto tipo de delitos, teniendo en cuenta su naturaleza, gravedad o el número de indiciados y pruebas a practicar, etc.; por ello la ley, deberá definir estos plazos atendiendo a variados factores, permitiendo y exigiendo el cumplimiento de los mismos¹⁶⁰.

De igual forma cabe preguntarse qué sucede ante el incumplimiento de los plazos procesales establecidos en la ley. En este aspecto no hay pronunciamiento del TEDH, pues no exige su cumplimiento, ante lo cual, su señalización no tiene incidencia, cuando se debería partir de esos plazos como primer presupuesto de

¹⁵⁸ MANCILLA OVANDO, Jorge Alberto. *Las garantías individuales y su aplicación en el proceso penal*. Edición Porrúa. México, 2000, págs. 288 y 289. Es de destacar la legislación mexicana, que reclama el cumplimiento de unos términos procesales de manera estricta, lo que significa que se parte de los mismos para determinar su cumplimiento o no, así indica el autor: “En cuanto a su duración, los juicios penales se rigen por dictados del artículo 20, fracción VII dela Constitución Federal, que al respecto indica: Art. 20 – En todo proceso penal, tendrá el inculpado las siguientes garantías... VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Esta disposición constitucional, es garantía de los gobernados de naturaleza procesal, que reviste la calidad de formalidad esencial del procedimiento, constituye un límite insuperable a la actividad del juzgador, pues le obliga a dictar justicia en los plazos que se consagran. (...) La garantía procesal consiste en que el proceso penal debe ser resuelto por sentencia de fondo, en los plazos máximos que se señalan, sin que se justifique la omisión del juzgador por virtud de estar pendientes de resolverse recursos ordinarios o cualquier obstáculo procesal: es una obligación expresa, cuya insatisfacción constituye un exceso de poder del juez”.

¹⁵⁹ CORDÓN MORENO, Faustino. *Las Garantías Constitucionales del Proceso Penal*. 2ª edición. Editorial Aranzadi. Navarra. 2001, p. 187.

¹⁶⁰ Estos eventos deben ser previstos por el legislador a la hora de precisar los términos procesales, no como ocurrió en Colombia con la Ley 906 de 2004, a través de la cual se reglamentaba el sistema acusatorio, en donde no se fijaron términos para la indagación por lo cual podía dar lugar hasta la prescripción, pero cuando se hacía la imputación se interrumpía la prescripción, y el Fiscal tenía 30 días para acusar, sin distinción de ninguna clase, lo que tornaba este término en irracional por lo restringido. Afortunadamente, con la reforma de la Ley 1153 de 2011, se corrige el yerro y se parte de una clasificación que hizo razonables los términos en la instrucción.

análisis, para posteriormente revisar los factores de complejidad que pudieron generar su no cumplimiento.

Recapitulando, dado que el TEDH obliga a que los Estados Partes acomoden sus sistemas jurídicos a los parámetros del CEDH, porque ni la congestión judicial ni las normas reguladoras de la actividad judicial pueden justificar la vulneración del derecho del plazo razonable, podría también proponer o plantear que si la ley no ha determinado esos plazos, se establezcan para tramitar los procedimientos civiles, administrativos, laborales, penales, etc., comprendiendo todas las etapas del proceso¹⁶¹, proponiendo a su vez que el poder legislativo tenga en cuenta la jurisprudencia del Tribunal¹⁶² respecto a la complejidad de un asunto, para que se

¹⁶¹ RAMÍREZ ORTIZ, José Luis. “Jueces y Policías. *Algunas razones de una relación disfuncional*”. Revista del poder judicial No. 88. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2010. Ramírez Ortiz, comparte igualmente la posición adoptada en este trabajo, respecto que “Efectivamente sería deseable racionalizar el proceso, modificar el disfuncional sistema de investigación, establecer plazos de caducidad”.

¹⁶² QUERALT JIMÉNEZ, Argelia. *La interpretación de los derechos: del Tribunal de Estrasburgo al Tribunal Constitucional*. Ed. Centro de estudios políticos y constitucionales. Madrid. 2008, págs. 10, 97 y 98. “Ahora bien, la naturaleza obligatoria de las sentencias del TEDH viene claramente establecida en el artículo 46.1 CEDH. En virtud de este precepto los Estados quedan jurídicamente obligados a acatar las sentencias firmes del TEDH. Esta obligación jurídica prevista en el artículo 46.1 CEDH no debe ser entendida de ningún modo como una mera cláusula de estilo en la redacción del CEDH, sino que esta obligatoriedad es real y efectiva, tal y como demuestra el hecho de que viene acompañada, además, de un mecanismo de supervisión por el que pretende garantizarse su efectivo cumplimiento (art. 46.2 CEDH), función que desempeña el Comité de Ministros. Así pues, estas sentencias, en tanto que decisiones jurídicamente vinculantes se transforman, en el plano internacional, en una serie de obligaciones de los Estados. Además, y pese a su naturaleza declarativa, las sentencias del TEDH desde sus orígenes se han caracterizado por generar una efectividad que rebasa notablemente las fronteras del Derecho Internacional y de las relaciones entre los Estados. Las sentencias del TEDH cuando declaran que se ha vulnerado el CEDH, inician una cadena de efectos que variará en su cantidad, intensidad e inmediatez temporal y que pueden aglutinarse en torno a dos grandes categorías, efectos directos e indirectos. La razón por la que las sentencias declarativas de una violación del CEDH generan todos estos efectos se debe precisamente a su carácter obligatorio y no a su carácter ejecutivo. (...) En las páginas anteriores se ha observado la función de desarrollo del CEDH y del *acquis conventionnel* que desempeña el TEDH a través de su jurisprudencia. En los siguientes apartados se muestra como se ven obligadas las autoridades nacionales a seguir la jurisprudencia del TEDH, obligación de seguimiento que viene condicionada absolutamente por la vocación armonizadora del sistema europeo de garantía. Respecto de esta última afirmación debe añadirse que el importante dato de que los tribunales nacionales cuando utilizan la jurisprudencia de Estrasburgo como herramienta hermenéutica lo hacen tanto para determinar el alcance y contenido de los derechos fundamentales como para utilizar los criterios interpretativos utilizados por el Tribunal Europeo para, por ejemplo, determinar la legitimidad o ilegitimidad de una injerencia del poder público en el derecho de una persona o para resolver un conflicto entre derechos”. Vid. Sentencia corte constitucional colombiana No C- 355 de 2006 MP Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas, donde se trata sobre la obligatoriedad de las sentencias de las instancias internacionales. “De conformidad con el artículo 93 constitucional, los tratados internacionales de derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad, bien sea esta figura entendida en sentido estricto o en sentido lato. La jurisprudencia de las instancias internacionales constituye una pauta relevante para la interpretación de los enunciados normativos

asuman estos criterios a la hora de establecerlos, lo que podría significar una clasificación de los procedimientos, en cada una de las materias enunciadas.

Del mismo modo para los plazos relacionados con la prisión preventiva, la jurisprudencia relacionada con la complejidad del caso permitirá a los Estados establecer los respectivos plazos para las etapas de instrucción y juicio en el proceso penal.

Sin duda es muy importante el trabajo jurisprudencial desarrollado por el TEDH para que los legisladores nacionales puedan hacer una ponderación, un test de razonabilidad o proporcionalidad¹⁶³, cuando definen o establecen los plazos procesales y el de la prisión preventiva.

La existencia de unos plazos, y en especial la diferenciación de procedimientos de acuerdo a la complejidad de los mismos, determina que los funcionarios judiciales tengan que cumplirlos. Si se han incumplido, a partir de ese momento deberá establecerse que ha comenzado el retraso, la dilación, la mora, lo

contenidos en instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, cosa diferente atribuirle a la jurisprudencia directamente el carácter de bloque de constitucionalidad.. “Bloque de constitucionalidad es aquella unidad jurídica compuesta por normas y principios que sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros de control constitucional de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional *strictu sensu*”. Vid. Sentencia C-067 de 2003 MP Marco Gerardo Monroy Cabra- Colombia. Vid. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos. *Compilación de Jurisprudencia y Doctrina Nacional e Internacional*. Segunda edición. Bogotá: Oficina en Colombia Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2002, p. 137. Vol. I. (...) Hoy en Colombia, conforme a la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional, los convenios de derecho humanitario y gran parte de otros tratados de derechos humanos tienen rango constitucional, y hacen parte del bloque en sentido estricto. igualmente es claro que la jurisprudencia de las instancias internacionales, como la Corte Interamericana o el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tiene una cierta fuerza jurídica interna, en la medida que constituyen pautas relevantes sobre la interpretación de los derechos constitucionales”.

¹⁶³ PERELLO DOMENECH, Isabel. Revista “*Jueces para la democracia*”. No 28, año 1977, p. 74. “La proporcionalidad se configura como un instrumento jurídico eficaz, tanto para el control de los poderes discrecionales de la Administración, en las medidas administrativas restrictivas o impeditivas de derechos fundamentales,- como un elemento de ponderación de bienes y derechos constitucionalmente protegidos”. Vid VIDAL FUEYO, Camilo. El principio de proporcionalidad como parámetro de constitucionalidad de la actividad del juez. Revista Anuario de derecho constitucional latinoamericano. 2005, p.443 y 444 Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/R21745.pdf>. (...) En resumen, cualquier injerencia en el contenido de los derechos fundamentales ha de someterse al “test de proporcionalidad” que dimana del propio Estado de derecho y del principio de unidad de la Constitución y, en consecuencia, sólo es posible limitar el contenido de un derecho fundamental cuando sea necesario para la protección de otros derechos fundamentales, o de bienes constitucionalmente reconocidos”.

que desde ya significa que el plazo razonable se incumplió, para que se tomen las respectivas acciones, con el fin de subsanar la violación, lo que sería más fácil, tanto para el Tribunal, como para las personas que tienen que pronunciarse respecto de si se dio o no la violación del derecho del plazo razonable, y aún para el TEDH, pues ya hay unos plazos, y sería examinar, si los plazos se cumplieron con el respeto debido.

Por otra parte, esto contribuiría de alguna manera a descongestionar al mismo Tribunal, en la medida en que un número significativo de los casos resueltos tienen que ver justamente con la problemática de la violación del plazo razonable, pudiéndose desde los tribunales nacionales evidenciar la trasgresión del derecho, permitiendo tomar acciones rápidas para no continuar la lesión, como es la toma de las decisiones definitivas en cada caso¹⁶⁴.

Si bien los tratados internacionales cuando se refieren al derecho al plazo razonable no determinan cuál es el plazo, los Estados, con el objeto de garantizar el cumplimiento del derecho, deberían establecer los plazos máximos de duración del proceso penal en sus leyes procesales, lo que permitiría al TEDH reclamar el

¹⁶⁴ SALINAS ALCEGA, Sergio. *El Sistema Europeo De Protección De los Derechos Humanos En El Siglo XXI*. Ed. Lustel 1ª edición. Madrid. 2009. págs. 62, 273 y 274. Al respecto se destaca lo señalado frente al tópico y las recomendaciones existentes en torno al establecimiento de los términos procesales. “Así, el funcionamiento adecuado de los sistemas nacionales juega como mecanismo preventivo que reduce el número de asuntos que pueden llegar a Estrasburgo desde el momento en que muchos supuestos de violación de derechos encuentren satisfacción en el plano interno. Pero además, incluso en aquellos casos que, conforme al principio de subsidiaridad, el sistema europeo entra en juego para remediar supuestos que no han tenido solución a nivel interno, la cuestión vuelve a este plano, donde deben adoptarse las medidas necesarias para conformarse con la sentencia adoptada por el Tribunal Europeo, siempre bajo la supervisión del Comité de Ministros del Consejo de Europa.” (...) Un supuesto especial de asunto repetitivo, es como ya se apuntó anteriormente, el que se refiere a la duración excesiva del procedimiento, puesto que las demandas por vulneración del artículo 6 del Convenio concentran una buena parte del esfuerzo del Tribunal. El tratamiento de esta cuestión en los Estados del Consejo de Europa es, como describe el CDDH, muy heterogéneo; así, diversos Estados Parte prevén mecanismos internos de reacción, como por ejemplo, la determinación de plazos máximos para cada fase del procedimiento, que si no se respetan o la duración del mismo no es razonable abren la puerta a una demanda de aceleración del procedimiento que puede conducir a una decisión que fije un plazo en el que el tribunal debe adoptar una medida procesal determina, como el cierre de la instrucción o la fijación de una fecha para la audiencia de las partes. Por su parte, en aquellos que tienen un recurso general ante el Tribunal Constitucional se puede plantear una demanda en ciertas circunstancias antes incluso de que los otros recursos internos se hayan agotado. Además en la mayor parte de los Estados existen acciones indemnizatorias para reparar los perjuicios causados por la duración no razonable de los procesos en curso o ya concluido. (...) mientras en otros casos, en materia penal, la sanción puede reducirse por el hecho de que el procedimiento haya superado el plazo razonable”.

cumplimiento de dicha obligación, en vez de plantear la doctrina del no plazo. Lo mismo se predica para la Corte interamericana de derechos humanos, que debería replantear su jurisprudencia antes de seguir al pie de la letra al TEDH en esta materia de plazo razonable, como se verá seguidamente.

En cuanto a la solución en los supuestos de violación del plazo razonable estamos de acuerdo con el TEDH: la vulneración no debe resolverse solo por la vía de la indemnización, sino por una resolución efectiva del caso, ésta tiene que ser la primera alternativa, y que además las autoridades cumplan con las obligaciones que les impone el CEDH garantizando la aplicación del derecho del plazo razonable previsto en el artículo 6.1, tanto de futuras actuaciones como de las que están en curso, para no seguir en el mismo círculo vicioso.

En consecuencia, el derecho del plazo razonable demanda ante todo que el asunto se resuelva; de ahí que la principal forma de reparación cuando se ha vulnerado será necesariamente la definición total del asunto, especificándose más adelante, de acuerdo a cada clase de proceso, cuál deberá ser la opción más adecuada. Esa resolución final debe comprender necesariamente que todos los recursos se hayan decidido.

La segunda forma de reparación para el Tribunal es que exista una reparación económica por fallas del sistema de justicia. Esta segunda opción también es pertinente, pero lo ideal es no acudir a esta medida, sino que la ley busque alternativas para dar cumplimiento al derecho dentro del respectivo proceso, previniendo su lesión, y una de ellas será la fijación de plazos judiciales y el control de las actividades judiciales para evitar los actos que generan su incumplimiento.

Finalmente indicar que el mismo Tribunal incurre en dilaciones y vulnera el derecho al plazo razonable, pues examinadas las fechas en que se presentan las demandas con respecto a la fecha en que el TEDH dicta la respectiva sentencia, ha pasado un término considerable, a veces irrazonable, especialmente cuando se había de seguir el trámite ante la hoy extinta Comisión, como se verá a continuación solo tomando algunos casos:

- caso ZIMMERMANN y STEINER Vs. Suiza. Demanda 30 de agosto de 1975, la Comisión la presentó el 17 de mayo y 8 de julio de 1982. Sentencia 13 de julio de 1983. En este asunto pasaron más de siete años.
- Caso H. Vs. Francia. Demanda 21 de junio de 1982. La Comisión lo presentó al Tribunal 11 de mayo de 1988. Sentencia 24 de octubre de 1989. Transcurrieron en este asunto más de siete años.

- Caso Unión Alimentaria Sanders S.A. Vs. España. Demanda 5 de julio de 1985. La Comisión lo presentó 20 de enero 1989. Sentencia de 7 de julio 1989. En ese evento pasaron cuatro años.
- Caso Obermeier Vs. Austria. Demanda ante la Comisión 24 de septiembre de 1985, la Comisión la sometió al Tribunal 16 de marzo y 7 de abril de 1989, la sentencia es de 28 de junio de 1990. En este asunto pasaron más de cuatro años.
- Caso B. Vs. Austria. Demanda presentada ante la Comisión 10 de enero de 1986, la Comisión la presentó al Tribunal el 16 de marzo de 1989 y la sentencia es de 28 de marzo de 1990. En este evento transcurrieron más de cuatro años.
- Caso Katte Klitsche De La Grande Vs. Italia. Demanda 10 de noviembre de 1986, la Comisión la admitió parcialmente el 20 de octubre de 1992 y la sentencia es de 27 de octubre de 1994. En este asunto transcurrieron más de ocho años.
- Caso Acquaviva Vs. Francia. Demanda el 16 de diciembre 1991, la Comisión trasladó el caso el 9 de septiembre de 1994. La sentencia el 21 de noviembre 1995. En este caso transcurrieron más de dos años.
- Caso A. y otros Vs. Dinamarca. La demanda se presentó el 27 de agosto de 1992, la admite la Comisión el 30 de noviembre de 1994. La sentencia es de 8 de febrero de 1996. En este caso transcurrieron más de tres años.
- Caso Karakaya Vs. Francia. La demanda se presentó el 30 de septiembre de 1993, la Comisión admitió el trámite el 19 de enero de 1994, la sentencia es de 26 de agosto de 1994. Este caso se resolvió más prontamente, en menos de un año.
- Caso Bellet Vs. Francia. Demanda ante la Comisión 24 de marzo de 1994, la Comisión lo presentó el 1º de marzo de 1995, la sentencia es de 4 de diciembre de 1995. El término transcurrido más de un año.
- Caso Beaumartin Vs. Francia. La demanda se presentó el 19 de julio de 1989, la Comisión admitió a trámite el 5 de noviembre de 1990. La sentencia es de 24 de noviembre de 1994. En este asunto transcurrió más de cuatro años.

- Caso Moreno Carmona Vs. España. Demanda el 21 de julio de 2004. Sentencia de 9 de junio de 2009. En este asunto transcurrió más de cuatro años.
- Caso Bendayan Azcanntot y Benalal Bendayan Vs. España. Demanda del 26 de julio de 2004. Sentencia de 9 de junio de 2009. En este asunto transcurrió más de cuatro años.

Esta pequeña muestra permite sustentar que ni el mismo TEDH puede dar cumplimiento al derecho del plazo razonable, dado que hay casos donde existen dilaciones en el plazo para dictar la respectiva sentencia por el Tribunal que igualmente son injustificadas teniendo en cuenta el fin y objeto del CEDH, y la protección por el propio Tribunal de los derechos ahí establecidos- Por lo tanto, hubo vulneración ante este mismo organismo, lo que nos lleva a plantearnos cuál debe ser entonces el plazo que debe esperar una persona para que finalmente las autoridades, incluyendo el mismo TEDH, resuelvan su derecho a ser oído en un plazo razonable.

Por ello, se insiste en este trabajo que deben existir plazos procesales tanto para la prisión como para el procedimiento, dado que podría ser una fórmula para minimizar los tiempos para resolver la controversia, tanto en el ámbito nacional como para el mismo TEDH quien, partiendo de tal presupuesto como base inicial, podría de manera más expedita resolver la controversia respecto a la violación o no del derecho al plazo razonable.

CAPITULO IV

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA SOBRE EL DERECHO A SER OIDO EN UN PLAZO RAZONABLE.

Inicialmente destacaremos algunas sentencias de este tribunal, para poder llevar a cabo el análisis de la jurisprudencia.

CASO VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ VS. HONDURAS (1988)¹⁶⁵

En esta sentencia la CIDH no refiere para nada la lesión del derecho al plazo razonable a pesar del tiempo transcurrido desde la desaparición del señor Manfredo Velásquez, y la falta de resultado del Estado. Empero lo anterior, en la parte del análisis se destacará su importancia, especialmente para los fines de este trabajo, por el énfasis que coloca la Corte en pro de las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos, y que a partir de esta sentencia realiza un estudio muy valioso respecto de las connotaciones de estas investigaciones, lo que se traduce favorablemente en pro del derecho al plazo razonable.

CASO GODÍNEZ CRUZ VS. HONDURAS (1989)¹⁶⁶

En esta sentencia sigue el mismo lineamiento que en el caso Velásquez Rodríguez, pues a pesar de probarse la violación del derecho al plazo razonable la Comisión no pidió la condena, mientras que la Corte por su parte consideró que esa omisión de investigar la desaparición forzada, como en el caso anterior, se enmarcó en el 1.1 de la Convención, relacionada con el deber de investigar los hechos, ubicar el paradero de la víctima y sancionar a los responsables.

¹⁶⁵ Sentencia de 29 de julio de 1988. Los hechos se refieren a la desaparición forzada de Manfredo Velásquez Rodríguez, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, retenido sin mediar orden de captura, por miembros del Estado en Tegucigalpa, el 12 de septiembre de 1981 en horas de la tarde.

¹⁶⁶ Sentencia de 20 de enero de 1989. Los hechos también tienen que ver con la desaparición de Saúl Godínez Cruz, el 22 de julio de 1982, después de haber salido de su casa a las 6:20 a.m. rumbo al Instituto Prevocacional "Julia Zelaya" en Monjarás de Choluteca, donde trabajaba como profesor.

CASO CABALLERO DELGADO Y SANTANA VS. COLOMBIA (1995)¹⁶⁷

La sentencia adolece de varias fallas e inconsistencias que posteriormente la Corte superará exitosamente en el avance de su jurisprudencia. En este caso la Corte, para examinar la violación o no de las garantías judiciales contenidas en el artículo 8.1, parte del tiempo transcurrido entre la captura ilegal y la presunta muerte de Isidro Caballero Calderón y María del Carmen Santana, que conforme a los hechos era de seis años, parámetro que llevó a concluir, (...) *que por ese corto tiempo entre la captura y la muerte no fue necesario la aplicación de las garantías judiciales y por ende no hubo violación (...)*¹⁶⁸. Es contradictoria esta sentencia con respecto a las venideras porque no tuvo en cuenta los hechos comprobados en el caso, como es que (...) *Colombia realizó una investigación prolongada, no exenta de deficiencias para encontrar y sancionar a los responsables y que aún el caso no ha terminado(...)*¹⁶⁹, donde no existe condena alguna, ni menos se tiene noticias del paradero y suerte de estas personas, pese a la implicación de agentes del Estado en la detención ilegal y desaparición; al punto que por el tiempo transcurrido supuso la Corte que estas personas están muertas.

Conclusiones: (i) Estas falencias estuvieron en contra de los familiares de las víctimas de Caballero Calderón y María del Carmen Santana, dado el alcance restringido que la Corte dio al derecho del plazo razonable contenido en el artículo 8.1 de la Convención, pero como se denotará seguidamente fueron corregidas por la Corte, avanzando así de manera decidida a favor de las víctimas y familiares de las violaciones de derechos humanos.

¹⁶⁷ Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Los hechos se presentaron el día 7 de febrero de 1989, en la vereda Guaduas, jurisdicción del Municipio de San Alberto, Departamento de El Cesar, Colombia, donde Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana fueron capturados por una patrulla militar conformada por unidades del ejército de Colombia acantonadas en la base militar Líbano (jurisdicción de San Alberto) adscrita a la Quinta Brigada con sede en Bucaramanga. Posterior a eso desaparecieron y las autoridades militares negaron la aprehensión de estas dos personas.

¹⁶⁸ “Dado el corto tiempo transcurrido entre la captura de las personas a que se refiere este caso y su presunta muerte, la Corte considera que no ha habido lugar a la aplicación de las garantías judiciales contenidas en el artículo 8 de la Convención y que, en consecuencia, no existe la violación de ese artículo”. Párrafo 64.

¹⁶⁹ *Ibíd*em, párrafo 57

CASO GARRIDO Y BAIGORRIA VS. ARGENTINA (1996)¹⁷⁰

En el caso Garrido Vs. Argentina la Corte acepta la responsabilidad del Estado por violación del derecho al plazo razonable. En este evento, tal como sucederá en varias decisiones, la Corte toma en cuenta el reconocimiento de responsabilidad internacional y determina por tanto, que no continúa la controversia jurídica sobre la responsabilidad del Estado. En esta sentencia, como en otras, decide sobre las reparaciones y costas¹⁷¹, y obliga al Estado Parte a seguir realizando las investigaciones penales para sancionar a todos los responsables; solicitando la búsqueda de la víctima o de sus restos óseos. En otros eventos se evidencia que, a pesar del reconocimiento de responsabilidad del Estado, la Corte decide seguir examinando las pruebas, verifica el contexto y hace todo un análisis de la violación del plazo razonable¹⁷². En otras oportunidades ese análisis lo ha realizado a pesar del reconocimiento de responsabilidad, para fundamentar la decisión relacionada con reparaciones y costas.

¹⁷⁰ Sentencia de 2 de febrero de 1996. Un nuevo hecho de desaparición forzada el 28 de abril de 1990, a las 16 horas aproximadamente, cuando los señores Adolfo Argentino Garrido Calderón y Raúl Baigorria Balmaceda fueron detenidos por personal uniformado de la Policía de Mendoza, cuando circulaban en un vehículo.

¹⁷¹ Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998; caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008; caso Del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2002, párrafo 117; Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 29 de abril de 2004, párrafos 46, 47; caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 4 de mayo de 2004, párrafos 42, 43 y 78; caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre de 2005, párrafo 52; caso Huilca Tecse Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 03 de marzo de 2005, párrafo 79; caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párrafo 74; caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2005, párrafo 61; caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006, párrafos 108 y 109. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008, párrafo 54; caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012, entre otros.

¹⁷² Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, párrafos 112 a 121; caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007, párrafos 111 a 115; caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998, párrafos 89 a 97; caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, 136 párrafos 81 a 86; caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005, párrafos 162, 166; caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006, párrafos 138 a 169; caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párrafo 153; caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párrafo 144 a 161, entre otros.

Conclusión: Debe decirse que la Corte en este punto no es uniforme, porque en ocasiones realiza el análisis sobre violación o no del plazo razonable no obstante que el Estado admite su responsabilidad¹⁷³, enriqueciendo su jurisprudencia, denotando todos los aspectos que generaron la violación del plazo razonable¹⁷⁴ y en otras no lo hace.

CASO GENIE LACAYO VS. NICARAGUA (1997)¹⁷⁵

Examinada la actuación judicial por la Corte quedo probado que las autoridades militares obstaculizaron el desarrollo del proceso, al punto que el juez tuvo que declararse incompetente constituyendo esto una violación del artículo 8.1 de la Convención. Reconoció que las investigaciones judiciales fueron extensas y las pruebas muy amplias y justificaron que el proceso tuviera en sus primeras etapas una mayor duración que otros asuntos que no tenían las características del caso Genie Lacayo. Inicialmente el padre de la víctima no pudo intervenir porque no se lo permitía la ley, pero luego cuando lo hizo no realizó actos que obstaculizaran o dilataran la actuación; así mismo la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, a pesar del considerable tiempo transcurrido y las diversas solicitudes, no ha decidido el recurso de casación interpuesto.

En esta sentencia la Corte hace precisiones muy importantes respecto al concepto de plazo razonable, indicando que no es un concepto de sencilla definición, y por ello por primera vez acude a los criterios que ha señalado la Corte

¹⁷³ Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párrafos 148 a 155; caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006, párrafos 123 a 133; caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007, párrafos 102 y 103; caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007, párrafos 69 a 160; caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, 170 párrafos 160 y 161; caso Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007, párrafo 71; caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008, párrafo 97.

¹⁷⁴ Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, párrafos 112 a 121; caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párrafos 212 a 215; caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007, párrafos 107 a 115; caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008, párrafos 153 a 169.

¹⁷⁵ Sentencia de 29 de enero de 1997. El 28 de octubre de 1990 el joven Jean Paul Genie Lacayo, de 16 años de edad, fue objeto de un atentado que le costó la vida por parte de agentes del Estado, cuando Genie Lacayo pretendió sobrepasar en su automóvil a los dos vehículos en que se desplazaban los agentes.

Europea de Derechos Humanos, encontrando que el artículo 8.1 de la Convención Americana es equivalente en lo esencial al 6 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Por tanto, indicó que se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales.

La complejidad del asunto la sustenta en la gran repercusión de la muerte del joven Genie Lacayo, lo que implicó que las investigaciones fueran muy extensas y las pruebas muy amplias, lo que a su vez para la Corte podría justificar que el proceso, dado los muchos incidentes e instancias, se haya prolongado más que otros. El segundo aspecto demostró que el padre no dilató el procedimiento sino que hizo uso racional de los recursos que le facilitaba la ley; también la conducta de las autoridades judiciales en el desarrollo de las etapas se enmarcaron en un plazo razonable, pero la falencia se la atribuyó a la Corte Suprema de Justicia, porque al resolver el recurso de casación excedió el plazo razonable, ya que a pesar de la complejidad del asunto, las excusas, los impedimentos y la sustitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el plazo de más de dos años que transcurrió desde la admisión del recurso de casación no es razonable y por ello lo consideró violatorio del artículo 8.1 de la Convención.

Conclusiones. (i) No pudo la Corte definir el concepto de plazo razonable al establecer que no era de sencilla definición. (ii) Debió tomar los criterios desarrollados por el TEDH para determinar si hubo violación o no del derecho al plazo razonable.

CASO SUÁREZ ROSERO VS. ECUADOR (1997)¹⁷⁶

En este asunto el Tribunal concluyó que hubo una detención arbitraria en la medida en que no fue capturado el señor Rosero en flagrancia ni había en su contra orden de captura, la cual procedió un mes después de su aprehensión, ni fue colocado a disposición de una autoridad judicial durante el proceso, con violación del artículo 7.5 de la Convención. Con respecto a la vulneración del artículo 8.1, la Corte sostuvo lo siguiente: *“El principio de “plazo razonable” al que hacen referencia*

¹⁷⁶ Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Los hechos tienen que ver con el arresto y detención del Sr. Suárez el día 23 de junio de 1992, quien no fue presentado oportunamente a las autoridades judiciales de Ecuador, siendo objeto de golpes, permaneciendo privado de su libertad por espacio de cuatro años.

los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente. En el presente caso, el primer acto del procedimiento lo constituye la aprehensión del señor Suárez Rosero el 23 de junio de 1992 y, por lo tanto, a partir de ese momento debe comenzar a apreciarse el plazo”¹⁷⁷. Considera la Corte que el proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción (cf. Cour eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, párrafo. 29) y que, particularmente en materia penal, dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse¹⁷⁸.

Queda claro que cuando hay una persona detenida el primer acto del procedimiento lo constituye la aprehensión y desde ahí debe comenzar a apreciarse el plazo; por ello en materia penal el plazo debe comprender todo el procedimiento hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Para determinar la razonabilidad o no del plazo enuncia los tres criterios desarrollados por el TEDH, y la Corte aplicó el criterio del análisis global, también desarrollado por el Tribunal europeo, revisando toda la actuación; esta investigación tomó una duración de 50 meses, considerando que ese periodo excede el principio del plazo razonable consagrado en la Convención.

Conclusiones. (i) Hay una confusión de la Corte en la medida que el derecho al plazo razonable lo considera como un principio¹⁷⁹, a pesar de que se trata de un derecho reconocido universalmente a todos, mientras que un principio es un mandato que puede cumplirse o no. (ii) Se delimita el término de inicio y de culminación para definir el plazo razonable cuando una persona está privada de la libertad, y el plazo comprende desde la fecha de la aprehensión hasta que se profiera una sentencia definitiva. (iii) En esta sentencia la Corte se atiene al criterio de análisis global para definir la violación o no del plazo razonable, lo que significa la revisión de toda la actuación.

¹⁷⁷ Párrafo 70.

¹⁷⁸ Párrafo 71.

¹⁷⁹ROBERT Alexis. *Sistemas jurídicos, principios jurídicos y razón práctica*. Ed. Universidad de Alicante. 1998. págs. 5 y 6. “Los principios son mandatos de optimización que se caracterizan porque pueden ser cumplidos en diversos grados y porque la medida obligada de su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades fácticas, sino también de las posibilidades jurídicas. El campo de las posibilidades jurídicas está determinado a través de principios y reglas que juegan en sentido contrario. Si se exige la mayor medida de cumplimiento posible con las posibilidades jurídicas y fácticas, se trata de un principio”. Vid. FERRAJOLI, Luigi. *Derechos y garantías*. Ed. Trotta. Madrid. 1999, p.37.

CASO LOS “NIÑOS DE LA CALLE” (VILLAGRÁN MORALES Y OTROS) VS. GUATEMALA (1999)¹⁸⁰

+La Corte sigue los lineamientos del TEDH en cuanto *“ha señalado que se deben considerar los procedimientos como un todo, incluyendo las decisiones de los tribunales de apelación, y que la función del tribunal internacional es determinar si la integralidad de los procedimientos, así como la forma en que fue producida la prueba, fueron justos”*¹⁸¹.

Destacó los derechos de las víctimas cuando significó: *“Por otra parte, del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación”*¹⁸².

Cuando realizó el análisis global del procedimiento mediante un examen en conjunto de las actuaciones judiciales internas verificó que no se había logrado identificar ni sancionar a los responsables de los hechos y que por tanto se encontraban en la impunidad, no obstante que fueron agentes del Estado los que ejecutaron las conductas delictivas y que de acuerdo al contexto en que se desarrollaron los hechos era una práctica que ellos realizaban contra niños y adolescentes de la calle. Esa sola consideración, *“basta para concluir que el Estado ha violado el artículo 1.1 de la Convención, pues no ha castigado a los autores de los correspondientes delitos”*. Para la Corte la discusión no va dirigida a determinar si las personas acusadas debieron ser absueltas o no; independiente de ello fija como criterio *“que lo importante es que, con independencia de si fueron o no ellas las responsables de los ilícitos, el Estado ha debido identificar y castigar a quienes en realidad lo fueron, y no lo hizo”*¹⁸³.

¹⁸⁰ Sentencia de 19 de noviembre 1999. Los hechos se relacionan con el secuestro, la tortura y el asesinato de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes menores de edad y el asesinato de Anstrum Aman Villagrán Morales, por agentes del Estado, quienes previamente habían sido privados de la libertad ilegalmente, estableciéndose que las víctimas eran habitantes de la calle y que los hechos se produjeron en un contexto de violencia contra niños y adolescentes que vivían en la calle por agentes del Estado.

¹⁸¹ *Ibidem*, párrafo 222.

¹⁸² Sentencia Los niños de la Calle (Villagrán Morales y Otros) Vs. Guatemala (1999). *Op. cit.*, párrafo 227.

¹⁸³ *Ibidem*, párrafo 228.

Revisadas las actuaciones concluyó que hubo omisiones y fallas de los jueces porque no valoraron las pruebas de manera integral, fueron fragmentadas; no se examinaron en conjunto, contraviniendo los principios de valoración de la prueba, y algunas investigaciones no comprendieron la totalidad de los delitos, pues no se investigaron los delitos de tortura y secuestro; tampoco se ordenaron y practicaron pruebas conducentes y útiles, ni se estimaron pruebas importantes para el esclarecimiento de los homicidios, destacando con respecto a este delito las fallas relacionadas con: (i) La práctica de las necropsias. (ii) Falta de conservación de pruebas. (iii) No escucharon a testigos que podían esclarecer los hechos. (iv) No se ordenaron peritajes que eran necesarios. (v) No se practicó la reconstrucción de los hechos, etc. Por tanto, fueron las autoridades judiciales las que propiciaron la violación del derecho al plazo razonable.

Conclusiones. (i) En este caso la Corte desarrolló uno de los criterios tomados del Tribunal europeo, relacionado con el análisis global del caso. (ii) Destaca el contexto en que sucedieron los hechos, relacionado con prácticas de agentes del Estado en contra de niños de la calle. (iii) Por otro lado, señaló las fallas de las autoridades, relacionadas con mal direccionamiento de la investigación por no haber comprendido todos los delitos; la valoración de las pruebas en contra de los principios de la sana crítica probatoria; la vinculación de personas que no eran responsables, todo lo cual dio lugar a la violación del derecho al plazo razonable por parte de las autoridades judiciales.

CASO TRUJILLO OROZA VS. BOLIVIA (2000)¹⁸⁴

En este caso la Corte admitió la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración de la Convención en varias de sus normas, entre ellas el artículo 8.1, dado el allanamiento del Estado, pero no hizo un análisis de los hechos que generaron la violación del artículo 8.1 de la Convención.

Es en la sentencia de reparaciones en donde el Tribunal encontró que no estaba tipificado en Bolivia el delito de desaparición forzada, y entonces hace un análisis respecto a la obligación de los Estados Partes en investigarlo, lo que no fue posible por falta de consagración legal, permitiendo la impunidad. Bajo esa circunstancia nuevamente reafirmó que en reiteradas ocasiones el Tribunal ha

¹⁸⁴ Sentencia de 26 de enero de 2000. Los hechos tienen que ver con la detención, tortura y posterior desaparición forzada del señor José Carlos Trujillo Oroza, el 23 de diciembre de 1971, en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.

insistido en el derecho que asiste a los familiares de las víctimas de conocer lo que sucedió y de saber quiénes fueron los agentes del Estado responsables de los hechos, porque se constituye en una obligación para el Estado siempre que ocurra una violación de los derechos humanos, debiendo ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad.

Examinados los hechos en su conjunto, y partiendo de un análisis del contexto en que se presentaron, la Corte concluyó que los principales obstáculos que impidieron esclarecer los hechos fueron: a) El transcurso del tiempo. b) La falta de tipificación del delito de desaparición forzada. c) La aplicación de la prescripción de la acción en el proceso penal. d) Las irregularidades cometidas en la tramitación del proceso penal.

La Corte rechaza las leyes de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas.

Resaltó la continua obstrucción que tuvieron los familiares de la víctima por parte de las autoridades para poder conocer la verdad de los hechos y encontrar el paradero del precitado, debido a impedimentos como la falta de tipificación del delito de desaparición forzada, la negativa de diversas autoridades públicas de brindar información y la omisión, durante 30 años, de realizar una investigación efectiva.

Conclusiones: (i) Se observa que la jurisprudencia confirma una vez más que las autoridades tienen que hacer efectivo el derecho que el artículo 8.1 otorga a la víctima y sus familiares, para que en un plazo razonable sean escuchados. (ii) La Corte resalta que los familiares pueden aportar pruebas que permitan el esclarecimiento de los hechos, pero sin que les corresponda la carga de la prueba, todo esto en pro de conocer la verdad, que haya una sanción y reparación integral. (iii) La Corte exige que el Estado consagre en su legislación penal el delito de desaparición forzada.

CASO BARRIOS ALTOS VS. PERÚ (2001)¹⁸⁵

¹⁸⁵ Sentencia de 14 de marzo de 2001. Se presentó a conocimiento de la Corte los hechos relacionados con las ejecuciones extrajudiciales, perpetradas el 3 de noviembre de 1991, cuando seis individuos armados llegaron hasta el inmueble del vecindario conocido como Barrios Altos de la

Reitera su jurisprudencia respecto a la “prohibición de aplicar leyes amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”¹⁸⁶ (...) A la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención. Es por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía, incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1(1) y 2, todos de la Convención. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones de derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente”¹⁸⁷.

Reconoce que no ha sido posible el esclarecimiento de los hechos ni se ha establecido la responsabilidad de los autores por la aplicación de una ley de amnistía por parte del Estado, generando con esa disposición de por sí una violación de los artículos 8.1 y 25, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención, la impunidad y negación los derechos de las víctimas.

El Estado aceptó su responsabilidad por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con las garantías judiciales y la protección judicial. La Corte al aceptar este allanamiento, entre las obligaciones le impone la de investigar y sancionar a los responsables, al considerar que la amnistía, por ser contraria a la Convención no produce efectos jurídicos, imponiendo al Estado la obligación de dejar esas leyes sin efecto, porque no pueden seguir siendo un obstáculo para la investigación de los hechos y la sanción de los responsables. Reconoce que en

ciudad de Lima, donde había una fiesta, allí obligaron a los residentes a arrojar al suelo, les dispararon, perdiendo la vida 15 personas e hiriendo gravemente a otras cuatro.

¹⁸⁶ Párrafo 41.

¹⁸⁷ Párrafo 44.

virtud de estas leyes los familiares de las víctimas no pudieron ser oídos con violación del artículo 8.1 de la Convención.

Se establece que los hechos ocurren en un contexto de ejecuciones extrajudiciales cometidas por parte de agentes del Estado que actuaban de forma clandestina e ilegal, pero de otra parte también desde el propio gobierno existió una política para evitar las respectivas investigaciones, a través de mecanismos legislativos y judiciales, impidiendo el conocimiento de los hechos y la sanción de los responsables, con el único fin de obtener la impunidad.

Conclusiones. (i) No obstante que se admite el allanamiento del Estado por violación de varias normas de la Convención, la Corte dicta una sentencia que permite avanzar en la protección de las víctimas y familiares de graves violaciones de derechos humanos. (ii) Hizo un estudio del contexto en que se desarrollaron los hechos, lo que le permitió concluir que se ejecutaron por parte de agentes del Estado que de otra parte tenían la protección del gobierno y por eso se expidieron mecanismos legislativos y judiciales para impedir la investigación y la sanción de los responsables. (iv) Resulta muy importante que al examinar las leyes de amnistía determine que son incompatibles con la Convención (v) Pero lo más relevante es que exigió que las leyes tienen que dejarse sin efecto para que se inicien las respectivas investigaciones y la sanción a los responsables. Esto es un avance destacable, y por ello compartimos el reconocimiento que sobre este tópico hizo el juez A. A. CANÇADO TRINDADE, en su voto concurrente, quien expresó que *“(…) estas ponderaciones de la Corte Interamericana constituyen un nuevo y gran salto cualitativo en su jurisprudencia, en el sentido de buscar superar un obstáculo que los órganos internacionales de supervisión de los derechos humanos todavía no han logrado transponer: la impunidad, con la consecuente erosión de la confianza de la población en las instituciones públicas. Además, atienden a un clamor que en nuestros días es verdaderamente universal. Recuérdese, al respecto, que el principal documento adoptado por la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993) exhortó a los Estados a “derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, (...) y sancionar esas violaciones (...)”*

CASO LAS PALMERAS VS. COLOMBIA (2001)¹⁸⁸

¹⁸⁸ Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Los hechos sucedieron el 23 de enero de 1991, cuando se produjo el homicidio de Julio Milciades Cerón Gómez, Artemio Pantoja, los hermanos William

La Corte para analizar el plazo razonable en que debe concluirse una investigación hace un análisis de conjunto de todo el desarrollo del procedimiento: siete años en la justicia penal militar y luego pasó a la justicia ordinaria, donde no hubo mayores avances, solo apertura de instrucción e indagatoria, sin personas condenadas.

La Corte señaló que un término de cinco años, entre los hechos y el auto de apertura, resulta irrazonable y se remite a la sentencia de Genie Lacayo, donde tuvo en cuenta este tiempo para darle un alcance al artículo 8.1 de la Convención y considerar la violación del plazo razonable.

Es importante señalar que la Corte destacó que la violación del término razonable podría generar prescripción de la acción penal e hizo la salvedad que se suspende la prescripción en un caso que esté pendiente ante una instancia de los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, por lo cual es significativo este pronunciamiento en la medida que la Corte limita esta figura de la prescripción respecto de casos que estén siendo revisados ante estas instancias.

Conclusiones. (i) La Corte establece un estándar para determinar la violación pues trae a colación el caso Genie Lacayo, donde las autoridades habían tomado cinco años en definir el asunto, considerando que esa duración entre la iniciación y la apertura, sin sentencias condenatorias, es violatorio del artículo 8.1. (ii) Es importante que la Corte, en aras de impedir la prescripción en caso de graves violaciones de derechos, desarrolle su jurisprudencia con el fin de proteger a las víctimas y familiares, declarando que la prescripción no opera en casos de graves violaciones de derechos humanos cuando estén siendo revisados por órganos del sistema interamericano.

CASO CANTOS VS. ARGENTINA (2002)¹⁸⁹

Hamilton y Edebraes Norverto, Cerón Rojas, Hernán Javier Cuarán Muchavisoy, y de una persona sin identificar, como también lesiones a un menor de edad.

¹⁸⁹ Sentencia de 28 de noviembre de 2002. El señor Cantos era dueño de un importante grupo empresarial siendo allanadas algunas dependencias por parte de la Dirección General de Rentas de la provincia en marzo de 1972, secuestrando sin inventariar la totalidad de la documentación contable. Por el perjuicio económico inició varias acciones judiciales, pero esto le generó persecuciones y hostilidades de agentes del Estado, fue objeto de 17 investigaciones penales y en todas ellas fue sobreesfuerzo. Acudió al sistema interamericano ante la omisión de las autoridades de repararle los perjuicios causados por agentes del Estado.

La Corte examinó si hubo violación del plazo razonable en la aplicación de una ley que condenaba al señor Cantos a cancelar una determinada suma de dinero por concepto de tasa de justicia y la correspondiente multa. Al respecto considero que el monto por cobrar no guarda relación entre el medio empleado y el fin perseguido por la legislación Argentina, con lo cual obstruye, evidentemente, el acceso a la justicia del señor Cantos, y viola los artículos 8 y 25 de la Convención. *“Este Tribunal estima que para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no basta que en el respectivo proceso se produzca una decisión judicial definitiva. También se requiere que quienes participan en el proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o excesivas a causa de haber recurrido a los tribunales. Esta última situación se agrava en la medida en que para forzar el pago procedan las autoridades a embargar los bienes del deudor o a quitarle la posibilidad de ejercer el comercio”.*¹⁹⁰

Al momento de valorar la presunta violación la Corte comienza por establecer el contenido del artículo 8.1 y artículo 25 de la Convención, para verificar el plazo utilizado en el proceso y a su vez si la persona contó con un recurso efectivo o acceso a la justicia, de modo tal que pueda utilizar los derechos que la Convención reconoce, encontrando que ambos artículos se complementan pues están interrelacionados. Así las cosas, hubo vulneración del artículo 8.1 respecto del cobro de la multa y la imposibilidad que tenía de ejercer la actividad comercial, pero también admitió que esta persona sufrió otro detrimento cuando la Corte Suprema le aplicó una ley que lo obligaba a pagar honorarios a los abogados con base en el monto de la demanda mediante una carga para él desmedida, convirtiéndose en una obstrucción para la efectiva administración de justicia.

Otra situación que tuvo en cuenta fue el procedimiento que adelantó el señor Cantos ante la Corte Suprema de Justicia a efectos de revisar si se respetó el plazo razonable. Por ello indicó que en principio los diez años transcurridos entre la presentación de la demanda del señor Cantos ante la Corte Suprema de Justicia y la expedición de la sentencia que puso fin al proceso interno, implican una violación de la norma sobre plazo razonable por parte del Estado; sin embargo, a efectos de definir su vulneración o no, tuvo en cuenta los siguientes parámetros: a) Si el Estado o el señor Cantos incurrieron en comportamientos que por acción u omisión incidieron en la prolongación de la actuación judicial. b) Si la conducta procesal del propio interesado en obtener justicia contribuyó en algún grado a prolongar

¹⁹⁰Caso Cantos Vs. Argentina, sentencia de 28 de noviembre de 2002. *op. cit.*, párrafo 55.

indebidamente la duración del proceso, porque de ser así no habría violación del plazo razonable c) La complejidad del asunto y el desinterés del actor.

Revisados estos puntos la Corte concluyó que *“En todo caso, teniendo en cuenta la complejidad del asunto y el desinterés del actor, entre otros factores, la duración global del proceso litigioso no revestiría la importancia necesaria para declarar la violación de los artículos que protegen el derecho al acceso a la justicia y a las garantías judiciales. A la luz de ello este Tribunal encuentra que carece de elementos para declarar que el Estado de Argentina ha violado, en la especie, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en cuanto consagran el derecho de obtener respuesta, dentro de un plazo razonable, a las demandas y solicitudes planteadas a las autoridades judiciales”*¹⁹¹.

Conclusiones: (i) La Corte examinó tres situaciones que afectaban al señor Cantos, la primera relacionada con el cobro de una tasa de justicia y una multa, respecto de la cual encontró que hubo violación del artículo 8.1, porque a pesar de existir una sentencia definitiva, el hecho de cobrarle unas sumas excesivas y no dejarle ejercer el comercio, le impedía acceder a una justicia efectiva; en consecuencia, la violación al derecho al plazo razonable se generó por la interrelación que existe entre el artículo 8.1 y artículo 25 de la Convención. (ii) La misma situación ocurrió respecto a otra situación que afectó al señor Cantos, y fue la relacionada con el cobro excesivo de honorarios, en donde la Corte igualmente hizo valer esa interrelación de esas dos normas para proteger el derecho al plazo razonable. (iii) Con respecto a las demandas presentadas por el señor Cantos ante la Corte Suprema, pese a que tomaron una demora de 10 años, la Corte no consideró que se hubiera producido la violación al derecho, al afirmar que hubo desinterés del actor, lo que lleva a sustentar que en asuntos litigiosos el impulso de la actuación judicial está a cargo del interesado, y a pesar del plazo transcurrido no se vulnera el derecho estudiado.

CASO JUAN HUMBERTO SÁNCHEZ VS. HONDURAS (2003)¹⁹²

¹⁹¹ Párrafo 57.

¹⁹² Sentencia de 7 de junio de 2003. Los hechos tienen que ver con la vulneración del derecho a la libertad del señor Juan Humberto Sánchez, detenido en dos ocasiones por las fuerzas armadas hondureñas por su presunta vinculación con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, torturado y ejecutado posteriormente. La Corte examinó el contexto en que se desarrollaron los hechos y encuentra que estas detenciones del señor Juan Humberto Sánchez se enmarcaron en un cuadro de abuso de poder, que tenía como objetivo interrogar, torturar y, eventualmente, ejecutar impunemente a la presunta víctima, situación que corresponde a un patrón

La Corte examina el contexto en que ocurrieron los hechos, en una época en donde el sistema judicial y las investigaciones de los delitos quedaron a cargo de las fuerzas militares, ya que el Estado para combatir la insurgencia creó cuerpos clandestinos sin ningún control judicial, que tenían el derecho de señalar a personas que para ellos eran peligrosas, torturarlas, ejecutarlas y desaparecerlas; por tanto en la década del 80 hasta el 90 en Honduras existía un patrón de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas, lo que significó que dominaran el sistema judicial y que éste fuera totalmente ineficaz.

En cuanto a las investigaciones por estos hechos la Corte verificó que se presentaron varias situaciones que vulneraron el derecho del plazo razonable como fueron: (i) Solo investigaron a una persona que no fue posible que compareciera, lo que representó el archivo del proceso. (ii) La no vinculación de otros militares que debían responder, pero no los identificaron. (iii) Omitieron el delito de detención arbitraria y tortura, centrándose únicamente en el delito de homicidio. (iv) Se presentó una acción de habeas corpus y fue tardíamente resuelta, sin indicar el sitio de reclusión de la víctima, impidiendo el acceso a la justicia, no obstante que fue ilegalmente capturado, llevado a un sitio de reclusión clandestino donde fue torturado y asesinado.

Por otra parte, la Corte destacó las falencias que se presentaron a la hora de investigar el homicidio: (i) no se hizo autopsia, (ii) no tomaron fotografías del sitio donde fue hallado el cadáver, todo lo cual impedía adelantar una investigación seria y eficaz.

Los familiares no tuvieron acceso a un recurso efectivo; el procedimiento para investigar la muerte excedió el plazo razonable, fue ineficaz, y rodeado de irregularidades que obstaculizaron la justicia. En lo relativo a las actuaciones del demandante, nuevamente reitera su jurisprudencia respecto de la actuación del Estado en este tipo de investigaciones, pues no se puede atribuir la responsabilidad de la investigación a los familiares o la víctima y exigió actuar conforme a todos los lineamientos ya trazados con respecto a los delitos de ejecuciones extrajudiciales. *“El Estado deberá adoptar una investigación seria, imparcial y efectiva de lo acaecido. En este sentido el Protocolo de Naciones Unidas para la Investigación Legal de las Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias o Protocolo de Minnesota ha sentado algunos lineamientos básicos para llevar a cabo las*

de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la época de los hechos, y ese mismo contexto le impedía interponer por sus propios medios un recurso sencillo y efectivo que le permitiera hacer valer su derecho a la libertad personal, por el contrario fue objeto de tortura y ejecución extrajudicial.

investigaciones correspondientes y determinar si las ejecuciones han sido extrajudiciales, sumarias y arbitrarias. El Protocolo ha señalado como requisitos mínimos de la investigación: la identificación de la víctima, la recolección y preservación de pruebas relacionadas con la muerte con el fin de ayudar en el potencial procesamiento de los responsables, la identificación de posibles testigos y la obtención de sus declaraciones en relación con la muerte, la determinación de la causa, manera, lugar y tiempo de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber provocado la muerte, la distinción entre muerte natural, suicidio y homicidio, la identificación y aprehensión de la o las personas involucradas en la muerte y la presentación de los presuntos perpetradores ante un tribunal competente establecido por ley”¹⁹³.

Conclusiones: (i) El contexto en que ocurrieron los hechos permitió a la Corte establecer la responsabilidad de altos funcionarios del Estado que crearon una política de exterminio a través de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas que se creían estaban en contra del sistema imperante. Este contexto sirvió para demostrar la inoperancia del sistema judicial por temor de las mismas fuerzas militares. Por consiguiente, establecer este contexto es un factor decisivo cuando se trata de investigar graves violaciones de derechos humanos. (ii) La importancia de destacar las fallas de las autoridades desde el inicio de la investigación, exigiendo de ellas que apliquen los protocolos internacionales para poder obtener investigaciones eficaces cuando se trata de delitos de ejecuciones extrajudiciales. (iii) Una vez más ratifica que las autoridades no pueden delegar en las víctimas el impulso de las diligencias.

CASO BULACIO VS. ARGENTINA (2003)¹⁹⁴

En este evento el Estado aceptó su responsabilidad por violación del Convenio, entre ellas las del art. 8.1 relacionadas con la violación del derecho al plazo razonable porque no había concluido el proceso penal en contra de todos los responsables del homicidio del joven Bulacio. La Corte admitió dicho reconocimiento, pero hizo un análisis de las obligaciones a cargo del Estado cuando

¹⁹³ Párrafo 127.

¹⁹⁴ Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Hace relación a la detención de Walter David Bulacio, el día 19 de abril de 1991, junto con otras personas, quien fue objeto de lesiones y muerte por parte de autoridades del Estado, pero las actuaciones judiciales han sido objeto de dilaciones, por eso no se ha condenado a ninguna persona.

se presentan violaciones de los derechos humanos, entre ellas investigar y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones.

Reitera en esta sentencia, y será una constante en su jurisprudencia, que los derechos de las víctimas se deben resolver en un plazo razonable, porque la obligación de investigar debe cumplirse *“con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”*¹⁹⁵. Esta orientación se reafirma una y otra vez en todas las decisiones proferidas por la Corte en todos los casos de violaciones de derechos humanos que tienen que ver con el proceso penal, correspondiéndole a las autoridades y no a las víctimas dirigir la actuación; decretar y practicar las pruebas pertinentes, conducentes y útiles que lleven a determinar los responsables de los hechos y la consiguiente condena de los mismos. Revisados los presupuestos que generaron la falta de condena de los responsables, la Corte examinó todo el procedimiento y encontró que hubo maniobras dilatorias relacionadas con impugnaciones, recusaciones, colisión de competencia, separación y reunificación de la causa, sobreseimiento de la causa, todo ello en busca de que prescriba la acción penal.

Conforme a lo anterior, la Corte hace importantes consideraciones respecto al papel del defensor *“es tarea del funcionario judicial hacer efectivo los derechos de la víctima, equilibrando entonces los derechos que aparecen en el 8.1, no solo a favor del perpetrador, pues no solo se debe garantizar un debido proceso para el actor, sino que igualmente están los derechos de las víctimas o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y que se sancione a los eventuales responsables”*¹⁹⁶.

Recuerda la Corte que el papel de los jueces es evitar las dilaciones y entorpecimientos indebidos en pro de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Con relación a la prescripción de los hechos, dado que han transcurrido más de 12 años, nuevamente la Corte recuerda que no es permitido usar institutos jurídicos como la prescripción en casos de conocimiento de la Corte, porque ello significaría la desprotección de los derechos consagrados en la Convención.

¹⁹⁵ (...) La investigación que el Estado lleve a cabo en cumplimiento de esta obligación “debe tener un sentido y ser asumida por el mismo como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.

¹⁹⁶ Párrafo 114.

Conclusiones: (i) La sentencia sienta un precedente porque obliga a los funcionarios judiciales (Fiscales o Ministerio Público y Jueces) que, en aras de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva¹⁹⁷, dirijan el proceso y eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos, que puedan permitir la impunidad. (ii) Que estén bien direccionadas las investigaciones. (iii) En esta decisión, como en casi todas las sentencias que se han proferido en materia de violaciones de derechos humanos, la Corte llama la atención sobre la no aplicabilidad de la pretensión de prescripción en el derecho interno, máxime en un caso de conocimiento del sistema interamericano porque ello equivaldría a negar los derechos consagrados en la Convención¹⁹⁸. (iv) Otra constante en las decisiones de la Corte, al concluir que se vulneró el derecho al plazo razonable, es exigir (...) *Que el Estado prosiga y concluya la investigación del conjunto de los hechos y sancione a los responsables de los mismos*¹⁹⁹.

CASO MYRNA MACK CHANG VS. GUATEMALA (2003)²⁰⁰

¹⁹⁷ MORENO CATENA, Víctor, Introducción al Derecho Procesal, 7ª ed., Valencia, En el mismo sentido, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Ignacio, *Op.cit.*, 1996. Págs. 38 y 45. Para el autor “el derecho a la tutela judicial efectiva es el derecho a obtener una sentencia de fondo, sea favorable o desfavorable a los intereses de quien insta la acción jurisdiccional. Pero este derecho comprende también que una vez la resolución es dictada, sea ejecutada”.

¹⁹⁸ (...) Este Tribunal ha señalado que son inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos. La Corte considera que las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana requieren de los Estados Partes la pronta adopción de providencias de toda índole para que nadie sea sustraído del derecho a la protección judicial, consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana (...) Para la Corte esta obligación parte de la letra y al espíritu de la Convención y de los principios generales del derecho, refiriéndose al “*pacta sunt servanda*”, el cual requiere que a las disposiciones de un tratado le sea asegurado el efecto útil en el plano del derecho interno de los Estados Partes, como también tiene en cuenta los principios generales del derecho, artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, “*las decisiones de los órganos de protección internacional de derechos humanos no pueden encontrar obstáculo alguno en las reglas o institutos de derecho interno para su plena aplicación*”.

¹⁹⁹ (...) Los familiares de la víctima deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. Los resultados de las investigaciones antes aludidas deberán ser públicamente divulgados, para que la sociedad argentina conozca la verdad sobre los hechos”.

²⁰⁰ Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Los hechos tienen que ver el asesinato de Myrna Mack Chang el día 11 de septiembre de 1990, como parte de una operación de inteligencia militar, elaborada por el alto mando del Estado Mayor Presidencial, encaminado también a encubrir a los autores materiales e intelectuales del asesinato, entorpecer la investigación judicial y lograr la impunidad.

La Corte examinó el contexto en que se presentaron estos hechos verificando que no existía voluntad de los jueces en investigar los hechos, ni voluntad de las personas en colaborar porque eran objeto de intimidaciones, hostigamientos, amenazas y asesinatos, tal como le ocurrió a un juez y a muchos testigos y funcionarios encargados de esclarecer la muerte. Dado lo anterior, demandó del Estado que para garantizar un debido proceso debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso y evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.

Al examinar en conjunto la actuación quedó de manifiesto la falta de diligencia y voluntad de las autoridades para impulsar y esclarecer todos los hechos de la muerte de Myrna Mack Chang y sancionar a todos los responsables. De otra parte llamó la atención porque las autoridades al momento de sustanciar el proceso tienen el deber de direccionarlo y así evitar acciones que tiendan a dilatarlo, porque son actos que atentan contra el debido proceso y el derecho al plazo razonable, pues hubo actuaciones de tribunales que atentaron contra la debida diligencia ante pedidos de amparo, inconstitucionalidad, recusaciones, incompetencias o nulidades. Indicó que los recursos que se interpongan con esa misma finalidad dilatoria deben ser resueltos prontamente, cumpliendo los plazos legales para no generar parálisis del proceso penal, impunidad e indebida protección judicial de los derechos humanos; en este caso los jueces propiciaron la violación, al omitir la obligación internacional de prevenir y proteger los derechos humanos.

Tomó de la Corte Europea de Derechos Humanos la idea de que *“el hecho de retener evidencia relevante argumentando el interés público, sin notificar al juez de la causa, no cumple con los requisitos del artículo 6 del Convenio Europeo, el cual es equivalente al artículo 8 de la Convención Americana. La Corte considera que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes”*²⁰¹. Por tanto, los poderes públicos no pueden hacer uso del secreto de Estado para dificultar o evitar una investigación donde los actores son agentes del Estado.

²⁰¹ Párrafos 179 y 180.

Conclusiones: (i) La Corte hace un llamado a las autoridades para que tomen acciones correctivas cuando verifiquen que se están dilatando los términos. Además es importante porque reclamó que ellas atiendan los plazos establecidos por la ley cuando se trate de resolver los recursos. (ii) Exigió una actuación diligente por parte de los tribunales y que omitan presentar recursos de amparo, incompetencia, nulidades, incidentes que van en contra del debido proceso y contrario sensu dilatan los términos. (iii) Destaca las dificultades que pueden tener las autoridades cuando los actores son agentes del Estado, siendo un factor de complejidad del asunto, en la medida que se evidenció que las personas que investigaban fueron objeto de amenazas de muerte, hubo un investigador muerto, y amenazas a los testigos y a los familiares de las víctimas (vi) Subraya la obligación del Estado de proteger a funcionarios judiciales, investigadores, testigos y familiares de las víctimas para garantizar un debido proceso. (iv) Desconoce la Corte el secreto de Estado para impedir el avance de las investigaciones, tomando decisiones del Tribunal Europeo, que en esos casos determina la obligatoriedad de entregar la respectiva evidencia.

CASO MASACRE PLAN DE SÁNCHEZ VS. GUATEMALA (2004) ²⁰²

De acuerdo al contexto histórico en que se desarrollaron los hechos, se enmarcaron en el conflicto armado interno que vivió Guatemala durante varios años y donde el Estado dio aplicación a la Doctrina de Seguridad Nacional contra el movimiento insurgente, y con base en ella realizaron masacres y operaciones de tierra arrasada, siendo considerado el pueblo indígena maya enemigo del Estado, entre ellos, los habitantes de Plan de Sánchez; éstos presentaron denuncias ante el Juez de Paz, pero no fueron atendidos, siendo posteriormente ejecutados 268 miembros de esta comunidad. Los sobrevivientes debieron desplazarse del lugar por temor a sufrir la misma suerte. Las investigaciones permanecen en la impunidad porque se iniciaron años después, y no se han identificado ni sancionado a los agentes del Estado que participaron en ella.

La Corte admitió el reconocimiento de responsabilidad internacional por las violaciones que le atribuyeron al Estado, entre ellas la relacionada con el artículo 8.1, por violación del plazo razonable. En esta sentencia no analizó las violaciones reconocidas por el Estado, no teniendo en cuenta que la Comisión y familiares de

²⁰² Sentencia de 29 de abril de 2004. Los hechos tienen que ver con la masacre de 268 personas, casi todos miembros del pueblo indígena maya en la aldea Plan de Sánchez, Municipio de Rabinal, Departamento de Baja Verapaz, ejecutada por miembros del Ejército de Guatemala y colaboradores civiles del ejército, el día 18 de julio de 1982.

las víctimas indicaban que se trató de un genocidio, señalando que en materia contenciosa sólo tiene competencia para declarar violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos del sistema interamericano de protección de derechos humanos y que ese aspecto se tomará en cuenta al momento de resolver sobre reparaciones.

Conclusiones: (i) El contexto determina que la masacre fue una respuesta a una política del Estado. (ii) Los hechos llevan a señalar que la masacre formaba parte de un plan de exterminio contra la comunidad indígena; por esto la Comisión y las víctimas los enmarcaron en el delito de genocidio. (iii) Se echa de menos que en esta sentencia la Corte no haya realizado un análisis de un crimen internacional aduciendo no tener competencia para ello, habiendo sido un momento histórico, lo que hubiese significado un avance en el desarrollo del DIDH. (iv) Si bien no tenía competencia, la Convención contempla la violación del derecho a la vida, por tanto se complementa la CADH con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948.

CASO 19 COMERCIANTES VS. COLOMBIA (2004)²⁰³

Conforme al contexto en que ocurrieron los hechos el Estado colombiano creó los grupos de autodefensa entre la población civil para ayudar a las fuerzas militares en operaciones antisubversivas y para defenderse de grupos guerrilleros, pero posteriormente, cuando estos grupos desbordaron sus fines, se convirtieron en grupos de delincuencia, llamados paramilitares, responsables de gran cantidad de masacres y asesinatos, viéndose el Estado obligado a tomar medidas para contrarrestarlos, siendo uno de ellos el responsable de la masacre de los 19 comerciantes, con la participación de agentes del Estado.

En este caso el primer llamado de atención tuvo que ver con la competencia de la justicia militar, en cuanto solo puede investigar y juzgar delitos que son de su naturaleza, o sea conductas que tengan relación directa con una tarea militar, por ello si asume casos que no tienen esta connotación hay violación del debido proceso porque se afecta el derecho al juez natural y el derecho al acceso a la justicia, y en

²⁰³ Sentencia de 5 de julio de 2004. Los hechos indican que para el día 6 de octubre de 1987 se produjo la desaparición y posterior ejecución de los comerciantes Alvaro Lobo Pacheco, Gerson Rodríguez, Israel Pundor, Angel Barrera, Antonio Florez Contreras, Carlos Arturo Riatiga, Victor Ayala, Alirio Chaparro, Huber Pérez, Alvaro Camargo, Rubén Pineda, Gilberto Ortiz, Reinaldo Corso Vargas, Hernán Jáuregui, Juan Bautista, Alberto Gómez, Luis Sauza, Juan Montero y Ferney Fernández, en el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, región del Magdalena Medio, realizada por miembros del ejército nacional y un grupo paramilitar.

éste caso la justicia militar investigó a cuatro militares, a quienes favoreció con cesación de procedimiento. Así que con respecto a las investigaciones ante la justicia penal militar encontró que hubo violación del artículo 8.1 y 25 de la Convención.

En cuanto a las investigaciones ante la justicia ordinaria ratificó que el proceso termina cuando se dicta sentencia en firme; además el plazo razonable debe comprender todo el procedimiento y los recursos que eventualmente puedan interponerse. Recordó los criterios para hacer la evaluación y además el hecho de que una demora tan prolongada puede constituir en sí misma, en algunos casos, una violación de las garantías judiciales.

Encontró que Colombia no cumplió los estándares internacionales establecidos en el artículo 8.1 respecto al derecho al plazo razonable, porque la primera sentencia condenatoria demoró más de 14 años de ocurrencia de los hechos, a los 9 años se iniciaron dos procesos, que concluyeron a los seis años, posteriormente hubo otra condena en un proceso que duró 4 años. Reconoció el Tribunal que el caso era complejo, pero a pesar de ello desde un inicio se allegaron importantes elementos probatorios que permitían una actuación diligente y rápida de las autoridades y el paradero de los 19 comerciantes y la sanción de los responsables. Por tanto, con respecto a la primera investigación que adelantó la justicia ordinaria hubo desconocimiento del principio al plazo razonable. Del mismo modo al hacer un estudio global de los otros procedimientos adelantados concluyó la violación del principio del plazo razonable en cuanto no se identificaron y sancionaron los responsables ni han sido efectivos en la búsqueda de los 19 restos mortales.

Conclusiones: (i) Ratifica que la justicia penal militar no puede conocer casos relacionados con violaciones de la Convención Americana porque solamente están sujetos a investigar casos vinculados con el servicio militar. (ii) Destacó las falencias de las autoridades colombianas porque a pesar de tratarse de un asunto complejo, habían elementos que permitían identificar los responsables, sancionarlos y además ubicar los restos mortales de los 19 comerciantes. (iii) Evaluó la efectividad de las investigaciones, así que en casos de graves violaciones de derechos humanos es un factor a tener en cuenta para definir la violación o no del derecho al plazo razonable, porque a pesar de conseguir unas sentencias, éstas se han producido con exceso del plazo razonable. (iv) La no persecución de agentes del Estado que participan en delitos relacionados con graves violaciones de derechos humanos. (v) Nuevamente la Corte trata el derecho al plazo razonable como principio.

CASO HERMANAS SERRANO CRUZ VS. EL SALVADOR (2005)²⁰⁴

Lo primero que tuvo en cuenta la Corte fue el contexto en que sucedieron los hechos, cuando imperaba en El Salvador un conflicto armado interno, que dio lugar al secuestro de las hermanas Serrano Cruz.

Aplicó los tres criterios sobre razonabilidad del plazo, así que verificó que el proceso desde su inicio permaneció en la fase de instrucción durante aproximadamente 7 años y 10 meses. Que estuvo archivado durante un año y no se ha emitido una acusación. Ratificó su ya reiterada jurisprudencia respecto a que una demora prolongada constituye en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Concluyó que el asunto es complejo basándose en el contexto de los hechos, pero del examen en conjunto de la actuación comprobó que la demora no se debe a este hecho, sino a una inactividad injustificada de los órganos judiciales. La misma situación se predica respecto de las acciones para dar con el paradero de las niñas. En cuanto a la actividad de los interesados señaló que desde el inicio estuvieron colaborando y no han obstaculizado la actuación; por tanto, la violación del derecho al plazo razonable se le atribuyó al Estado.

En cuanto a la efectividad del recurso de habeas corpus y del proceso penal no hubo resultados por negligencia del funcionario judicial, porque no adelantó las diligencias conducentes para localizar a las niñas, reclamando el direccionamiento de las investigaciones por parte de los jueces, quienes tendrán que examinar el contexto en que se desarrollan los hechos, para que de una forma diligente puedan determinar lo sucedido, establecer responsabilidades y las reparaciones a que haya lugar, evitando las dilaciones y omisiones, como también evitar que el impulso de la actuación corra por cuenta de los familiares de las víctimas, como en este caso. La Corte por otra parte enuncia uno a uno los errores que se cometieron por parte de las autoridades, como son: (i) Negligencia. (ii) Descuido, (ii) Falta de direccionamiento, (iv) No se practicaron pruebas que permitieran dar con el paradero de las niñas. (v) Identificación y sanción de los responsables. Estos comportamientos los señaló como una falta de voluntad de los fiscales y jueces para solicitar y ordenar las pruebas conducentes y el diligenciamiento de la acción de habeas corpus, en contra de los derechos de acceso a la justicia y el debido

²⁰⁴ Sentencia de 1 de marzo de 2005. El día 2 de junio de 1982 las niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz fueron objeto de captura, secuestro y desaparición forzada por parte de militares durante un operativo llamado como Operación Limpieza en Salvador.

proceso. Concluyó que el Estado no observó el principio del plazo razonable en el proceso penal.

Conclusiones: (i) Se tiene en cuenta el contexto en que ocurren los hechos para determinar si el asunto es complejo o no, y a la vez si hay responsabilidad de agentes del Estado. (ii) Queda muy claro para la Corte que a pesar de la complejidad del caso, porque ocurre en el conflicto armado interno que vivía el Salvador, esto no fue la causa de la vulneración del derecho, sino muy por el contrario fue la falta de voluntad de los fiscales y jueces, quienes no ordenaron ni practicaron las pruebas conducentes, quedando clara la negligencia, omisión, falta de direccionamiento de las investigaciones y la efectividad de la acción de habeas corpus (iii) Es otro caso en donde la Corte trata el contenido del artículo 8.1 como principio y no como derecho.

CASO COMUNIDAD MOIWANA VS. SURINAM (2005) ²⁰⁵

Inicialmente la Corte comienza reconstruyendo el contexto en que se desarrollaron los hechos destacando que desde el ataque a la aldea Moiwana las tierras quedaron abandonadas y los familiares no pudieron recuperar los restos mortales y no han podido realizar los rituales para que puedan descansar en paz.

Para la Corte la razonabilidad del plazo, pasados 18 años sin que se haya desarrollado una investigación seria y efectiva de los responsables, constituye *per se* una violación de las garantías judiciales, que difícilmente podría ser justificada por el Estado. Examinó si la demora se debió a la complejidad del caso o a la conducta de las partes, pero sobre ello indicó que las víctimas y sus representantes frecuentemente habían solicitado con urgencia una investigación penal sobre el ataque a la aldea de Moiwana, y en ocasiones habían favorecido directamente los esfuerzos del Estado. Admitió la complejidad del caso porque el ataque involucró las acciones de un régimen militar poderoso, comprendió un gran número de víctimas que fallecieron o fueron desplazadas, los testigos fueron amenazados y se presentó la muerte del inspector.

Examinadas las actuaciones estableció que en casos de ejecuciones extrajudiciales las autoridades tienen la obligación de adelantar una investigación en donde para identificar y sancionar a los responsables es necesario: a) identificar

²⁰⁵ Sentencia de 15 de junio de 2005. El 29 de noviembre de 1986 miembros de las fuerzas armadas de Surinam atacaron la comunidad N'djuka Maroon de Moiwana. En la masacre murieron más de 40 hombres, mujeres y niños, y arrasaron la comunidad y muchos salieron desplazados.

a la víctima b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar a identificar los responsables c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio; asimismo, f) se debe investigar exhaustivamente la escena del crimen, y g) profesionales competentes deben llevar a cabo autopsias de forma rigurosa, así como análisis de restos humanos, empleando los procedimientos más apropiados.

Reconoció los graves problemas del Estado en su lucha por la democracia, pero este factor no legitima la vulneración del derecho al plazo razonable, ante su obligación de investigar las ejecuciones extrajudiciales y sancionar a los responsables.

Para la Corte el ataque involucró las acciones de un régimen militar poderoso, comprendió un gran número de víctimas que fallecieron o fueron desplazadas y tuvo lugar en una región remota del país, entre otros factores, pero no hubo voluntad para investigar hechos posteriores que se desarrollaron, como fue la muerte del inspector, las acciones militares de obstrucción y la falta de iniciativa por parte del Fiscal General. Colofón: el excesivo tiempo significó la vulneración del principio del plazo razonable en esta investigación.

Conclusiones: (i) Una vez más el contexto en que se desarrollaron los hechos demuestra la responsabilidad de agentes de Estado. (ii) Se evidencia la complejidad del asunto en consideración a ese contexto. (iii) A pesar de ello, no justificó la vulneración del derecho al plazo razonable, exigiéndole a las autoridades la sanción de los responsables. (iv) Ratifica que hubo amenazas y muerte de personas que ayudaban en el esclarecimiento de la masacre, pero fue la falta de voluntad de las autoridades la que generó la violación. (v) Nuevamente la Corte trata el derecho al plazo razonable como principio.

CASO GUTIÉRREZ SOLER VS. COLOMBIA (2005)²⁰⁶

²⁰⁶ Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Los hechos tuvieron lugar el día 24 de agosto de 1994, el señor Wilson Gutiérrez Soler fue detenido y posteriormente sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Posteriormente, fue coaccionado para dar una declaración no ajustada a la realidad y sometido a un proceso penal por el delito de extorsión, sin las garantías judiciales. Los perpetradores eran agentes del Estado.

La Corte reconoce que hubo violación del artículo 8.1 de la Convención, del derecho al plazo razonable, porque después de once años no existe ninguna sentencia condenatoria contra los responsables. Por el contrario, se dictaron decisiones favorables, recordando el artículo 192 de la ley 906 de 2004 de Procedimiento Penal colombiano, que permite que cuando se profieran sentencias absolutorias, en casos que están siendo supervisados por un organismo internacional, opere la revisión de esas decisiones, con el fin de dejar sin efecto la decisión y proceder a la sanción de los responsables.

Consideró la Corte que se trató de la cosa juzgada fraudulenta, que resultó de un juicio donde no se respetaron las reglas del debido proceso, pero no puede el Estado alegar que en esos eventos está exento de realizar la investigación y sancionar a los responsables, en tanto las sentencias emanadas no cumplieron los estándares de la Convención Americana, y no hacen tránsito a cosa juzgada.

Reconoció que la Corte Constitucional colombiana trató ese tema en la sentencia C-004\2003, permitiendo la revisión de decisiones favorables por preclusión y las sentencias absolutorias cuando se trata de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario.

De igual modo, admitió los avances de la misma Corte Constitucional colombiana en materia de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, en donde aparecen involucradas personas con fuero militar, pues la sentencia C-358 de 1997, rechazó la extensión del beneficio para que los militares sean investigados por la justicia castrense en caso de violaciones de derechos humanos, de tal modo que la investigación corre a cargo de la justicia ordinaria.

Adicionalmente llamó la atención a los funcionarios encargados de la investigación porque deben aplicar los procedimientos previstos en el Protocolo de Estambul, cuando se presenten víctimas que han sido torturadas, lo cual va a permitir que la investigación sea conducida de manera eficiente y eficaz a favor de las víctimas de esas violaciones, y no que haya fallas que redunden en beneficio de los perpetradores. Obligó la Corte que se realicen las respectivas investigaciones para sancionar a los responsables, entre ellos a los agentes de Estado que participaron en los hechos.

Conclusiones: (i) Reconoce la relatividad de la cosa juzgada cuando se está ante situaciones fraudulentas, siendo viable la revisión en Colombia de sentencias absolutorias en donde se ha vulnerado el debido proceso, como es el caso de las sentencias absolutorias de algunos militares en la justicia militar, cuando en esos casos no aplicaba el fuero militar y correspondía a la justicia ordinaria la

investigación. (ii) La exigencia de aplicar el Protocolo de Estambul cuando se trata de una investigación de tortura, en aras de garantizar su efectividad y la condena de los responsables.

CASO MASACRE DE MAPIRIPÁN VS. COLOMBIA (2005)²⁰⁷

La Corte evaluó los tres criterios para determinar la razonabilidad del plazo, indicando como lo hace reiteradamente que la pertinencia de aplicarlos depende de las circunstancias de cada caso, así que constató que se adelantaron investigaciones penales (justicia ordinaria y militar), administrativas y disciplinarias.

Respecto a las actuaciones militares destacó su jurisprudencia respecto que no son tribunales llamados a resolver casos de violaciones de derechos humanos, reconociendo la labor de la Corte Constitucional, que resolvió conceder una tutela por desconocimiento del juez natural, dejando sin efecto lo actuado en la jurisdicción penal militar.

Recordó que se trata de un caso de ejecuciones extrajudiciales donde el Estado tiene el deber de iniciar *ex officio* y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva. *“Sin embargo, la búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus familiares o de su aportación de elementos probatorios. En este caso, algunos de los imputados han sido juzgados y condenados en ausencia. Además, la reducida participación de los familiares en los procesos penales, ya sea como parte civil o como testigos, es consecuencia de las amenazas sufridas durante y después de la masacre, la situación de desplazamiento que enfrentaron y el temor a participar en dichos procesos. Por tanto, mal podría sostenerse que en un caso como el presente deba considerarse la actividad procesal del interesado como un criterio determinante para definir la razonabilidad del plazo”*²⁰⁸.

Determinó que (...) *El caso es complejo pero a pesar de ello hay resultados concretos en las investigaciones y en el proceso penal, que si bien son insuficientes, han derivado en la condenatoria de varios miembros del ejército, así como de varios miembros de grupos paramilitares, por su participación en los hechos, resaltando*

²⁰⁷ Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Esta masacre ocurrió, entre el 15 y 20 de julio de 1997 donde un número considerable de personas pertenecientes a Autodefensas Unidas de Colombia llevaron a cabo actos en contra de por lo menos 49 personas en Mapiripán - Departamento del Meta, a quienes privaron de la libertad, torturaron y asesinaron. Éstos hechos fueron planificados, acordados y ejecutados con la colaboración de miembros del Ejército Nacional.

²⁰⁸ Párrafo 219.

para ello que la masacre fue perpetrada en el contexto del conflicto armado que vive internamente Colombia; comprendió un gran número de víctimas – que fueron ejecutados o fueron desplazadas – y tuvo lugar en una región remota y de difícil acceso del país, entre otros factores”, entre otros factores.”²⁰⁹

Para la Corte la complejidad del asunto la generaron las propias autoridades, en razón a las conductas activas y omisivas, por ello no justificó que las limitaciones de recursos financieros y técnicos, ni la situación de orden público donde se debían realizar las pruebas, tuvieran incidencia en el plazo razonable.

Así las cosas, denotó que, si bien han transcurrido más de ocho años desde que sucedieron los hechos, el proceso penal permanece abierto y no obstante las dilaciones han producido ciertos resultados que deben ser tomados en cuenta. En razón de ello, la Corte estima que, más que un análisis acerca de la razonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la responsabilidad del Estado a la luz de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, debe ser establecida mediante una evaluación del desarrollo y de los resultados del proceso penal, es decir, de la efectividad frente al deber de investigar los hechos para la determinación de la verdad de lo sucedido, la sanción de los responsables y la reparación de las violaciones cometidas en perjuicio de las víctimas.

Conclusiones. (i) Se examina el contexto en que ocurren los hechos. (ii) Ratifica la Corte la incompetencia de la justicia militar para conocer casos relacionados con violaciones de la Convención. (iii) Estudia y desarrolla el criterio de complejidad del asunto, en cuanto sin desconocer el contexto en que se desarrollaron los hechos y las dificultades para la recolección de las pruebas, esto no fue el factor que generó la violación, sino las conductas activas y omisivas de las autoridades judiciales y administrativas. (iv) Preocupa que la Corte tome el concepto de complejidad de la actitud de las autoridades por las conductas activas y omisivas, porque este punto genera confusión, pues es un factor que debe pesar en contra de la actitud de las autoridades, pero no como elemento que marque la complejidad o no de un asunto. (v) Es otro evento en donde la Corte tiene en cuenta el factor de efectividad de las investigaciones para establecer la violación o no del derecho al plazo razonable.

²⁰⁹ Ibídem párrafo 221.

CASO MASACRE DE PUEBLO BELLO VS. COLOMBIA (2006)²¹⁰

Analizó los varios procesos que se abrieron en varias jurisdicciones para examinar si en un plazo razonable constituyeron un recurso efectivo para asegurar los derechos de acceso a la justicia, la verdad de los hechos y la reparación de los familiares. Reiteró que la razonabilidad del plazo y el derecho de acceso a la justicia no se agotan con el trámite de procesos internos, sino que debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancionen a los eventuales responsables.

Verificó la negligencia de las autoridades encargadas de las exhumaciones y reconocimiento de cadáveres y la no aplicación del Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas en la recolección oportuna de pruebas *in situ*, existiendo por tanto una impunidad parcial.

La Corte concluyó que los procesos y procedimientos internos no han constituido, ni individualmente ni en conjunto, recursos efectivos para garantizar el acceso a la justicia, la determinación del paradero de las personas desaparecidas, la verdad de los hechos, la investigación y sanción de los responsables y la reparación de las consecuencias de las violaciones. Por ende, el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida.

Conclusiones: (i) La violación del plazo razonable se enmarcó en el análisis global del caso. (ii) Es otro asunto donde se atribuye responsabilidad a las autoridades por el mal direccionamiento del asunto, por actuar de una manera negligente. (iii) La obligación de aplicar los protocolos desarrollados por Naciones Unidas cuando se investigan casos de ejecuciones extrajudiciales.

CASO XIMENES LOPES VS. BRASIL (2006) ²¹¹

²¹⁰ Sentencia de 31 de enero de 2006. Se refiere a la desaparición forzada de 37 personas y ejecución extrajudicial de seis campesinos de la población de Pueblo Bello en enero de 1990 por parte de las AUC, en el Departamento de Córdoba.

²¹¹ Sentencia de 4 de julio de 2006. Los hechos se relacionan con los tratos inhumanos, degradantes y las condiciones inhumanas, a que fue sometido el señor Damião Ximenes Lopes, quien sufría discapacidad mental en la Casa de Reposo Guararapes, y le sobrevino la muerte.

Determina la Corte que para valorar si se vulneró el artículo 8.1 y 25 de la Convención se deben considerar los procedimientos internos como un todo. En este caso deberá resaltarse una de las orientaciones de la Corte dirigidas a los funcionarios judiciales, que cuando emprendan investigaciones relacionadas con muertes violentas apliquen las reglas similares a las contenidas en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de las Naciones Unidas²¹². Este punto será valorado para revisar la seriedad y eficacia de las investigaciones.

Al valorar el plazo razonable la Corte hace una precisión importante en lo que tiene que ver con el momento en que comienza a correr el término en materia penal, señalando que comienza cuando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de cierto delito y termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme.

En esta sentencia la Corte vuelve a los tres criterios para examinar si el plazo fue razonable, y consideró que el caso no era complejo, para ello tuvo en cuenta que se trató de una sola víctima, plenamente identificada y que murió en una institución hospitalaria, lo que posibilitaba actuar contra los presuntos responsables.

No hubo actuación de la familia que entorpeciera el trámite, por el contrario cooperó para el esclarecimiento de los hechos. Concluyó que la demora del proceso fue atribuible únicamente a la conducta de las autoridades judiciales, por ello, después de 6 años no se han sancionado a los responsables, de ahí que el Estado no dispuso de un recurso efectivo para garantizar, en un plazo razonable, el derecho de acceso a la justicia, con plena observancia de las garantías judiciales para los familiares de la víctima.

Conclusiones: (i) En materia penal, cuando no hay persona identificada ni individualizada, el plazo razonable se valorará con relación a todo el proceso, o sea desde que inició con la noticia criminal; pero cuando hay persona identificada como

²¹² Las autoridades estatales que conducen una investigación deben, inter alia: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con su muerte, con el fin de ayudar en cualquier investigación; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, y se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados (...). Examinado el procedimiento se comprobó que las autoridades no fueron diligentes desde el inicio de la investigación, porque no hubo preservación y recolección de la prueba e identificación de testigos presenciales, falta de investigación, pese a las denuncias de los familiares.

probable responsable, ese término cuenta desde el primer acto que se dirija contra ésta hasta que exista una sentencia en firme. (ii) No obstante que se está ante un delito contra la vida, para la Corte no se trata de un caso complejo porque era una sola víctima, identificada y sucedió en una institución que permitía la identificación de los responsables. (iii) Es otro caso donde por la negligencia de las autoridades se viola el derecho al plazo razonable.

CASO BALDEÓN GARCÍA VS. PERÚ (2006)²¹³

En este caso hubo allanamiento del Estado al aceptar que fueron militares los responsables de la detención y posterior ejecución del señor Bernabé Baldeón, pero a pesar de la aceptación de responsabilidad la Corte procede a analizar los hechos del caso en la medida en que se trató de una ejecución extrajudicial, ante lo cual recordó las obligaciones que le asisten al Estado, máxime cuando fueron agentes del Estado los responsables, entre ellas las de investigar y sancionar para evitar la impunidad, porque de mantenerse se dan las condiciones para que se repitan estos acontecimientos, reiterando nuevamente la obligación de aplicar del Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas.

Reiteró su jurisprudencia respecto a que la razonabilidad del plazo se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento penal, el cual comienza con el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de cierto delito y termina cuando se dicta sentencia y está en firme.

El caso no lo consideró complejo no obstante que la misma Corte reconoció que los hechos se desarrollaron entre la década de los 80 y 90 cuando en Perú existía un conflicto entre grupos armados y miembros de la fuerza policial y militar, cuando existía una práctica sistemática de violaciones de derechos humanos implementada por el mismo Estado, como lucha antisubversiva. Señaló que no era complejo porque se trataba de una sola víctima claramente identificada, y había suficientes indicios que permitirían la realización de un proceso penal en contra de los presuntos responsables.

²¹³ Sentencia de 6 de abril de 2006. En este caso la Corte entra a valorar si los procedimientos realizados por las autoridades de Perú, con respecto al esclarecimiento de los responsables detención, tortura y muerte extrajudicial del señor Bernabé Baldeón García, se realizaron en un plazo razonable.

La actividad procesal del interesado la halló conforme con el papel que le asistía, de ahí que la violación radicó en la conducta de las autoridades judiciales quienes incurrieron en conductas omisivas relacionadas con la necesidad de recuperar y preservar la prueba. No se le hizo necropsia al cuerpo y en el acta de inspección técnica del cadáver se indicó como causa probable de la muerte paro cardíaco, lo que dificultó establecer la causa de la muerte. Por otra parte, a pesar que la familia presentó varias denuncias, las autoridades no las adelantaron y solo en el año 2000 se reactivó la investigación, denotando por esas circunstancias la negligencia de las autoridades.

Criticó que después de quince años de ocurridos los hechos el procedimiento se encuentra en la fase de instrucción, plazo claramente irrazonable, ratificando lo dicho en otras sentencias, respecto de que la demora en exceso prolongada constituye per se una violación del debido proceso.

Concluyó que los procesos y procedimientos internos no han constituido recursos efectivos para garantizar el acceso a la justicia; la determinación de la verdad de los hechos; la investigación y sanción de los responsables y la reparación de las consecuencias de las violaciones. Por ende, el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.

Conclusiones: (i) Nuevamente el contexto permite establecer las violaciones sistemáticas que se generaron en Perú, las cuales fueron ordenadas por agentes del Estado peruano. (ii) No obstante que se trató de un caso que se generó en ese contexto, la Corte no lo calificó como complejo, a pesar de que se dio otra situación complicada, cual fue que hubo omisiones de las autoridades y no se había definido claramente la causa de la muerte. Todo esto, siguiendo la misma jurisprudencia, y que los actores eran agentes del Estado, llevaban a clasificar el caso como complejo. (iii) Reitera la Corte nuevamente el deber de aplicar el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas por tratarse de una ejecución extrajudicial. (iv) Conforme a la aplicación de los criterios, la responsabilidad en la violación del plazo razonable es atribuida a las autoridades, por la negligencia y falta de voluntad en adelantar las respectivas investigaciones. (v) Es importante que la Corte encuentre que la sola demora constituya per se una violación del derecho al plazo razonable.

CASO MASACRE DE ITUANGO VS. COLOMBIA (2006)²¹⁴

En este caso hubo reconocimiento parcial de responsabilidad por parte del Estado colombiano, no aceptando la vulneración del artículo 8.1. Los hechos se desarrollaron en el contexto de conflicto armado interno que sufre Colombia que generó que se creara por el gobierno las Autodefensas Unidas de Colombia, las que posteriormente se convirtieron en grupos ilegales responsables de homicidios, masacres, etc., con el apoyo de agentes del Estado, entre ellos la masacre de la Granja y la masacre del Aro, que comprendieron un gran número de víctimas, que perdieron sus vidas, bienes, y en el caso del Aro fueron obligadas a desplazarse.

Hizo relación a los criterios para evaluar la razonabilidad del plazo, reiterando que la pertinencia de su aplicación depende de las circunstancias de cada caso, dirigiéndose a revisar los procedimientos. Nuevamente hizo una evaluación del desarrollo y los resultados de los diferentes procesos penales, para verificar su efectividad sobre la determinación de la verdad de lo sucedido, la sanción de los responsables y la reparación de las violaciones cometidas en perjuicio de las presuntas víctimas, todo esto con resultados negativos para el Estado.

Examinados los procedimientos que se han adelantado con ocasión de cada una de las masacres del Aro y la Granja reconoció la complejidad de los asuntos, denotando que a pesar de esa circunstancia hay resultados, pero los catalogó de insuficientes, porque si bien hay condenas contra miembros del ejército, de los paramilitares, y hubo algunas personas juzgadas en ausencia; sin embargo, por la magnitud de los acontecimientos, el número de personas involucradas y los medios utilizados, los resultados no fueron suficientes para cumplir los requerimientos de la Convención. Para la Corte, además de examinar la razonabilidad del plazo transcurrido, también debe realizarse una evaluación del desarrollo y de los resultados de los diferentes procesos penales para determinar la efectividad de las investigaciones en la determinación de la verdad de los hechos, la sanción de los responsables y la reparación de las violaciones.

Para la Corte indudablemente el caso es complejo porque además de los factores relacionados con el gran número de víctimas, los delitos ejecutados, homicidios, ejecuciones, desplazamiento forzado y hurto de sus bienes, se une otra circunstancia relacionada con macrocriminalidad de los hechos. Respecto a la

²¹⁴ Sentencia de 1 de julio de 2006. Los hechos ocurrieron entre junio de 1996 y octubre de 1997, en los corregimientos de La Granja y El Aro, ubicados en el Municipio de Ituango, Departamento de Antioquia, Colombia, donde igualmente miembros de las AUC ingresaron en varias oportunidades, asesinando a la población civil, despojándola de sus bienes, causando en la población terror y desplazamiento forzado.

actividad del interesado señaló que ellos no han dificultado el trámite porque la participación ha sido escasa, indicando que ello se debió al desplazamiento forzado y el temor de muerte o amenazas de muerte que sufrieron algunas de las personas que intervinieron en la investigación, como un defensor de derechos humanos y algunos fiscales. Aprovecha para recordar que la obligación del Estado es iniciar de oficio estas investigaciones y las víctimas no son las llamadas a la búsqueda efectiva de la verdad.

De otra parte, llama una vez más la atención para que las autoridades en estos casos apliquen el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, y los principios rectores, cuando se crea que hay una ejecución extrajudicial, que son los mismos que se deben aplicar cuando hay una muerte violenta.

Pese a reconocer las circunstancias especiales del conflicto interno que vive Colombia, esta situación no la eximía de cumplir las obligaciones emanadas de la Convención, entre ellas las estipuladas en el artículo 8.1, porque no puede el Estado tolerar acciones encaminadas a realizar ejecuciones extrajudiciales y a desatender la obligación de investigar y sancionar a los responsables.

En el examen de los procedimientos señaló que en el caso de la Granja incursionaron 20 personas con el apoyo de agentes del Estado, pero los resultados investigativos obtenidos después de diez años son la condena de 4 personas y vinculación de 16, denotando un retardo injustificado, al punto que la apertura de instrucción se dio a los tres años de los hechos, teniendo las autoridades indicios de los autores. Todo ello determina que el procedimiento no se desarrolló respetando el debido proceso, el plazo razonable y no constituyó un recurso efectivo para conocer la verdad y reparación de víctimas y familiares.

Respecto al caso del Aro estableció que participaron 30 personas y después de ocho años de ocurrida la masacre solo hay siete personas vinculadas y 3 civiles condenados, indicando que hay una ostensible demora, negligencia de las autoridades en la recolección de pruebas in situ, omisiones que son calificadas como graves faltas al deber de investigar estos hechos, además que no se han vinculado a los agentes del Estado que participaron. Por estas razones consideró la vulneración del plazo razonable, la falta de un recurso efectivo para las víctimas y familiares, coadyuvando en ambos casos a la impunidad de los actores.

Valoró de otra parte los procedimientos disciplinarios, que a pesar de ser igualmente tardíos pueden complementar pero no sustituir a cabalidad la función penal en casos de graves violaciones de derechos humanos.

Conclusiones. (i) El contexto en que se desarrollaron los hechos es tenido como un factor de complejidad de las investigaciones (ii) La Corte destacó que era complejo por muchos factores, entre ellos por la macrocriminalidad, pero no por ello justificó las fallas de las autoridades, ni la tardanza en la resolución de los procesos (iii) La Corte revisó los criterios pero en especial los procedimientos para establecer la efectividad, en la medida que en cada proceso los actores eran un número muy grande y estaban vinculados agentes del Estado. (iv) El factor de efectividad es muy importante para la Corte en estos casos de graves violaciones de derechos humanos; por ello examina qué avances se han realizado con respecto a la condena de los responsables, en especial los máximos representantes y agentes del Estado cuando tienen responsabilidad en los hechos. (ii) Para la Corte la falta de efectividad obedece a causas atribuibles a las autoridades, porque fueron negligentes en la recolección de las pruebas en el sitio de los hechos y no han actuado contra los agentes del Estado a pesar de que desde el principio se tenían indicios; así pues, se trata de otro caso en donde la violación del derecho al plazo razonable se le atribuye a las autoridades.

CASO MONTERO ARANGUREN Y OTROS (RETÉN DE CATIA) VS. VENEZUELA (2006).²¹⁵

En este caso Venezuela reconoció los hechos relacionados con las ejecuciones extrajudiciales, el retardo y denegación de justicia y a los cuatro años rechazó el acuerdo, pero la Corte no aceptó esta postura porque ya se habían producido unos efectos jurídicos en virtud del principio de estoppel, doctrina de los actos propios, por lo cual admitió el reconocimiento de responsabilidad, entre otras cosas, la violación del plazo razonable, por la falta de debida diligencia en el proceso de investigación de los hechos y por los obstáculos para acceder a los expedientes judiciales internos.

Analizó el contexto de los hechos e indicó que se desarrollaron en el marco de una situación de extrema inestabilidad política y las condiciones carcelarias se enmarcaban dentro de la problemática penitenciaria en Venezuela por hacinamiento, etc.

La Corte refiere las falencias que hubo por espacio de 13 años por parte de las autoridades en el esclarecimiento de los hechos y dado que la investigación no

²¹⁵ Sentencia de 5 de julio de 2006. Los hechos se refieren a la ejecución extrajudicial de 37 reclusos del Retén de Catia, el 27 de noviembre de 1992.

se realizó de manera seria y responsable, ni se tomaron en cuenta procedimientos y normas técnicas, se remite nuevamente a que en estos casos se deben aplicar las normas establecidas en el Manual de Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias.

Conclusiones: (i) Se relaciona el contexto político que imperaba para la fecha de los hechos y además los problemas graves en la población carcelaria. (ii) Las falencias de las autoridades porque no realizaron una investigación seria y responsable que proyectara vocación de éxito, al punto que no se aplicaron protocolos de Naciones Unidas, como es el Manual de Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, que es el reclamado una y otra vez por la Corte cuando se presenta este delito.

CASO SERVELLÓN GARCÍA Y OTROS VS. HONDURAS (2006)²¹⁶

En este caso, como en otros relacionados con ejecuciones extrajudiciales, la Corte reiteró las obligaciones a cargo de los funcionarios de aplicar las normas internacionales previstas en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas e iniciar de oficio de manera inmediata la investigación, todo ello para evitar la impunidad, pues en este caso habían transcurrido más de 11 años y la investigación se caracterizaba por la negligencia e inoperancia de las autoridades.

Tuvo en cuenta el reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado, artículos 7.6, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, y que el proceso penal no había arrojado ninguna sentencia después de once años, denotando la falta de diligencia en el impulso de los procedimientos orientados a investigar, procesar y, sancionar a todos los responsables, vulnerando el plazo razonable, lo que implicó a su vez que no se hubiera ofrecido un recurso efectivo a los familiares, para posibilitar el reconocimiento de sus derechos de verdad, justicia y reparación.

De igual modo, hay que destacar que en este caso como en otros donde las víctimas son niños, existe una advertencia constante para que el Estado combata

²¹⁶ Sentencia de 21 de septiembre de 2006. La Corte examinó los hechos relacionados con las ejecuciones extrajudiciales de los niños Marco Antonio Servellón García, Rony Alexis Betancourth Vásquez, Orlando Álvarez Ríos y Diomedes Obed García Sánchez, entre el 15 y 16 de septiembre de 1995, cuando se encontraban privados de la libertad.

la impunidad, indicando que en esos eventos la obligación se ve acentuada cuando se trata de violaciones cuyas víctimas son niños.

Conclusiones: (i) Es otro caso donde a pesar del reconocimiento de responsabilidad la Corte analizó los hechos que generaron la vulneración del derecho al plazo razonable. (ii) Por el comportamiento negligente de las autoridades se comprometió la responsabilidad internacional del Estado, por el hecho de no adelantar una investigación eficaz que hubiese generado la condena de los responsables. (iii) Es importantísimo que además de verificar los fracasos investigativos, llamó la atención respecto de las obligaciones acentuadas cuando las violaciones afectan a niños o niñas, existiendo el deber de atacar la impunidad.

CASO GOIBURÚ Y OTROS VS. PARAGUAY (2006) ²¹⁷

En esta sentencia la Corte verifica el contexto en que se desarrollaron los hechos relacionados con la dictadura del General Alfredo Stroessner Matiauda, en la cual existió una práctica sistemática de detenciones arbitrarias, detención prolongada sin juicio, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, muertes bajo tortura y asesinato político de personas señaladas como subversivos o contrarias al régimen, entre ellos Agustín Goiburú Giménez, medico paraguayo.

De otra parte, en esta dictadura existió una violación de las garantías del debido proceso para investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos, en la medida en que los tribunales de justicia normalmente se negaban a recibir y tramitar recursos de habeas corpus, de modo que en los 30 años que duró la dictadura se propició la impunidad.

Para la Corte el Estado no justificó el retardo de los procesos, no obstante que hay condenas para algunos responsables, pero continúan abiertas las investigaciones respecto de otras personas, al punto que algunos han muerto, por lo que el Estado es responsable por la impunidad parcial en que se encuentran esos casos. Las autoridades no iniciaron de oficio las investigaciones, fueron retardadas. Con respecto a las dificultades del sistema judicial paraguayo, se las imputó al propio Estado. Los procesos fueron iniciados hace 17 años, pero no se cuenta con las sentencias judiciales en firme contra los responsables, de ahí que el Estado

²¹⁷ Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Los hechos se refieren al secuestro, tortura y desaparición forzada de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro y de los hermanos Rodolfo Feliciano y Benjamín de Jesús Ramírez Villalba, por parte de agentes del Estado.

aceptó la existencia de un retardo judicial grave o la existencia de una demora judicial para dictar sentencia y se allanó parcialmente.

Aunado a lo anterior, la Corte destacó en contra del Estado lo siguiente: (i) Que los procesos penales no pudieron ser iniciados sino después de la caída del régimen dictatorial. (ii) El Estado no ha demostrado diligencia en las acciones oficiales de investigación. (iii) Las investigaciones no fueron activadas de oficio sino por denuncia o querella interpuestas por los familiares de las víctimas, (iv) No constan acciones encaminadas a determinar el paradero de las víctimas o buscar sus restos mortales. (V) Tampoco se dictaron las órdenes de prisión preventiva con fines de extradición, o se solicitó la extradición contra los principales responsables, entre ellos de Alfredo Stroessner.²¹⁸

Sienta una jurisprudencia importante que va en pro del derecho del plazo razonable en este tipo de violaciones de derechos humanos porque la inexistencia de tratados de extradición no justifica que no se tramite la solicitud, reclamando que en este tipo de crímenes, si no existen tratados de extradición entre los Estados, éstos, en aras de evitar la impunidad, deben colaborar entre sí para erradicar la impunidad de las violaciones, permitiendo la extradición a pesar de que no exista tratado, y reclamó además que un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a los procesados por crímenes de violaciones de los derechos humanos mediante la aplicación indebida de figuras legales que atenten contra las obligaciones internacionales, aduciendo que *“la Convención establece un mecanismo de garantía colectiva, unido al conjunto de obligaciones internacionales regionales y universales que vinculan a los Estados de la región a colaborar de buena fe en ese sentido, ya sea mediante la extradición o el juzgamiento en su territorio de los responsables de los hechos del presente caso”*²¹⁹.

²¹⁸ Llama la atención el Tribunal, porque los funcionarios no han atendido la gravedad de los delitos investigados, donde las normas de derecho internacional consuetudinario y convencional establecen el deber de juzgar a sus responsables y que en este caso adquiere especial relevancia, pues los hechos se dieron en un contexto de vulneración sistemática de derechos humanos –constituyendo el delito de desaparición forzada y tortura, crímenes contra la humanidad, lo que genera para los Estados la obligación de asegurar que estas conductas sean perseguidas penalmente y sancionados sus autores.

²¹⁹ PHILIPPE, Xavier. *Los principios de jurisdicción Universal y complementariedad: su interconexión*. Revista Internacional Review. 2006. No 862, p. 3. Disponible en: https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/irrc_862_philippe.pdf. En resumen lo que solicita la CIDH es que los Estados apliquen en su territorio la jurisdicción universal por ello es pertinente traer a colación su definición según Xavier: “El principio de jurisdicción universal suele definirse como “un principio jurídico que permite o exige a un Estado enjuiciar penalmente ciertos crímenes independientemente del lugar donde se haya cometido el crimen y de la nacionalidad del autor o de la víctima.”

Conclusiones: (i) La Corte impone la obligación de extraditar a los responsables de violaciones de derechos humanos a pesar de no existir tratado entre los Estados. (ii) La Corte impone también el deber de colaboración entre sí de los Estados para combatir la impunidad en estos casos. (iii) No deben los Estados proteger a los perpetradores de violaciones de crímenes internacionales. (iv) La aplicación de la jurisdicción universal conocida y del principio *aut dedere aut judicare*; por tanto, si el Estado originario no juzga y sanciona, lo debe hacer otro. (v) Es otro caso donde la violación del derecho al plazo razonable es atribuido a las autoridades por la negligencia en iniciar de oficio las investigaciones y en investigar de manera seria y efectiva en pro de obtener la sentencia condenatoria para los responsables.

CASO ALMONACID ARELLANO Y OTROS VS. CHILE (2006)²²⁰

La Corte destacó que los hechos sucedieron en un contexto en donde en Chile existía un régimen militar que había derrocado al gobierno del presidente Salvador Allende, donde los institutos armados, a través de una junta de gobierno, asumieron los tres poderes; fue declarado el estado de sitio por conmoción interior, declarándose una persecución generalizada de personas que el régimen consideraba como opositores, política de estado que operó desde el inicio del régimen hasta que culminó el gobierno militar, el 10 de marzo de 1990. Esa represión estuvo caracterizada por una práctica masiva y generalizada de fusilamientos, ejecuciones sumarias, torturas (incluida la violación sexual principalmente de mujeres) privaciones ilegales de la libertad en recintos al margen del escrutinio de la ley, desapariciones forzadas y demás violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, asistidos a veces por civiles, represión que se extendió a todo el país. Determinó la Corte que las víctimas de estas violaciones fueron funcionarios destacados del régimen depuesto, figuras de izquierda, jefes y dirigentes políticos, sindicalistas, estudiantes e indígenas.

Lo primero que hizo la Corte fue examinar si dicha ejecución se enmarcó en un crimen de lesa humanidad²²¹ (...) *“La Corte reconoce que los crímenes contra la*

²²⁰ Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Los hechos se refieren a la falta de investigación y sanción de los responsables de la ejecución extrajudicial del señor Almonacid Arellano, el 17 de septiembre de 1973, cuando fuera detenido en su residencia por carabineros, quienes le dispararon en presencia de su familia, a la salida de la casa.

²²¹ Determinó la CIDH que “El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907 (Convenio núm. IV) las potencias contratantes establecieron que “las

*humanidad incluyen la comisión de actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso Prosecutor v. Dusko Tadic, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable”. Todos estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado”. (...) “Dicha prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad es una norma de ius cogens, y la penalización de estos crímenes es obligatoria conforme al derecho internacional general”. (...) “Este criterio fue corroborado por el artículo 7 del Estatuto de Roma (17 de julio de 1998) que creó la Corte Penal Internacional”.*²²²

Precisado que se cometió un delito de lesa humanidad, concreta que los Estados tienen la obligación de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad; por tanto, no se puede conceder

poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del Derecho de Gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública”. Asimismo, el término “crímenes contra la humanidad y la civilización” fue usado por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia el 28 de mayo de 1915 para denunciar la masacre de armenios en Turquía. El asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, el cual fue anexo al Acuerdo para el establecimiento de un Tribunal Militar Internacional encargado del juicio y castigo de los principales criminales de guerra del Eje Europeo, firmado en Londres el 8 de agosto de 1945 (el “Acuerdo de Londres”). Poco después, el 20 de diciembre de 1945, la Ley del Consejo de Control No.10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa humanidad en su artículo II.c. De forma similar, el delito de asesinato fue codificado en el artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (Estatuto de Tokyo), adoptada el 19 de enero de 1946. Párrafos 94 y 95. Vid. AGUILAR CAVALLO, Gonzalo y AGUILERA PORTALES, Rafael Enrique. Coordinador. *Nuevas Perspectivas De Los Derechos Humanos*. Universidad Nacional Autónoma de México. México.2011. p. 90. “Los crímenes contra la humanidad constituyen hechos atroces que pisotean la dignidad del individuo y especialmente de la humanidad, entendida como el colectivo de individuos, grupos y pueblos. La gravedad de un crimen contra la humanidad viene dada, entre otras cosas, porque atenta contra la dignidad humana, que se considera como un supuesto básico de valor absoluto”. Vid. QUISPE REMÓN, Florabel y BUSTAMANTE Alarcón Reynaldo. Coordinadores. *Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad. El caso Fujimori*. Editorial Dykinson S.L. Perú. 2011, p. 116. “Los crímenes de lesa humanidad son aquellos que ofenden los principios generales del derecho y se convierten en una preocupación de la comunidad internacional. Párrafo 710 de la sentencia contra Fujimori”.

²²² Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. *Op. cit.*, párrafos 96, 99 y 101.

una amnistía, tal como ocurrió en este evento. Reitera su jurisprudencia respecto de que los funcionarios deben hacer un control de las normas internas a efectos de que estén en consonancia con la Convención, demandando la inaplicabilidad de una ley por ser violatoria de la Convención. Así pues, ratifica su jurisprudencia en lo que ha denominado control de convencionalidad por parte de las autoridades judiciales, porque no obstante los jueces están sometidos al imperio de la ley, cuando el Estado ratifica la Convención, les obliga a realizar un examen de las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la consonancia con la CADH, y para este caso en especial, a raíz de la ley de autoamnistía, que impidió la investigación de los hechos, tenía que desconocerse la misma, por ser contraria a la Convención.

Por tanto, desestima la ley 2.191, al considerar que carece de efectos jurídicos y no puede seguir constituyendo un obstáculo para la investigación de los hechos, ni para la identificación y castigo de los responsables, porque al ser aplicada cesaron las investigaciones y se archivó el expediente, dejando en la impunidad a los responsables e impidiendo a los familiares que pudieran ser escuchados ante un tribunal independiente, competente e imparcial, a través de un recurso efectivo y adecuado que repare las violaciones cometidas. Unido a lo anterior, los hechos fueron investigados por un tribunal militar aduciendo que tenían fuero los presuntos responsables, y posteriormente favorecidos por la ley de amnistía. Esta circunstancia también fue valorada, indicando que la violación del juez natural va en contra del derecho previsto en el artículo 8.1 de la Convención.

Conclusiones: (i) La Corte avanza en el estudio de los crímenes internacionales, en este caso en el crimen de lesa humanidad, haciendo un detallado estudio de los hechos para adecuarlos a este delito, del cual señaló sus consecuencias internacionales, las exigencias de ser esclarecido porque afecta a toda la humanidad y la imposibilidad que quede en la impunidad. (ii) de otro lado, ratifica el compromiso de los funcionarios judiciales en hacer prevalecer las normas de la Convención frente aquellas que le son contrarias, lo que ha denominado control de convencionalidad. (iii) La prohibición de aplicar leyes de amnistía, indulto o prescripción en estos eventos. (iv) Dejó sin efecto la ley de amnistía y ordenó proseguir la investigación en pro de identificar, juzgar y sancionar a los responsables. (vii) La violación del juez natural va en contra del derecho previsto en el artículo 8.1 de la Convención.

CASO PENAL MIGUEL CASTRO CASTRO VS. PERÚ (2006)²²³

El contexto en que se desarrollaron los hechos tiene que ver con las prácticas que el Estado implementó en las prisiones, incompatibles con la efectiva protección del derecho a la vida y otros derechos, tales como ejecuciones extrajudiciales y tratos crueles e inhumanos, así como el uso desproporcionado de la fuerza. Estableció la Corte que el objetivo real del operativo no fue el traslado de personal, sino que se trató de un ataque premeditado, un operativo diseñado para atacar contra la vida y la integridad de quienes se encontraban en los pabellones 1A (había 135 mujeres y 50 hombres) y 4B (400 hombres). Esos actos de violencia fueron dirigidos contra dichos pabellones, ocupados en el momento de los hechos por personas acusadas o sentenciadas por delitos de terrorismo y traición a la patria y eran calificados como terroristas, en contra de la versión oficial de que el objetivo era trasladar a las internas a otro centro de reclusión.

El Estado tenía que cumplir las obligaciones impuestas por la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o Convención Belém Do Pará, disposiciones que como ha reiterado en la jurisprudencia, complementan las obligaciones contraídas por el Estado, y también reiteró la aplicación del Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas.

Revisadas las actuaciones observó que el primer proceso penal se abrió aproximadamente 13 años después de ocurridos los hechos y hay 13 personas en calidad de imputados, entre ellos Alberto Fujimori Fujimori. Visto lo anterior, ya la Corte determinó que el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal sobrepasa el plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas que le permitan tener elementos necesarios para formular una acusación penal, porque a este tiempo hay que sumar el que tome la realización del proceso hasta la sentencia en firme.

Además de ello hizo conocer las fallas en que incurrieron las autoridades, entre ellas: (i) No se hicieron actas de levantamiento de cadáveres. (ii) Los certificados de necropsia e informes médicos forenses se limitaban a describir las heridas sufridas por las víctimas mortales y las lesiones encontradas en algunos de

²²³ Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Los hechos presentados a la Corte tienen que ver con ejecución del Operativo Mudanza 1, dentro del Penal Miguel Castro Castro, produciendo la muerte 42 internos, y lesiones a 175 internos, sin que se les prestara atención médica adecuada, recibiendo los familiares de estas personas tratos crueles e inhumanos de las autoridades.

los heridos. (iii) En dichos informes no se da cuenta de los proyectiles recuperados en los cuerpos de las víctimas. (iv) Incurrieron en graves omisiones en la recolección, preservación y análisis de la prueba porque no se hicieron pruebas toxicológicas; no se recolectaron evidencias como casquillos de balas o fragmentos de metal; no se recolectaron huellas digitales, ni la ropa de los fallecidos. (v) Los protocolos de necropsia y los dictámenes periciales de balística forense practicados en los occisos fueron realizados de forma incompleta. (vi) No se preservaron las armas incautadas en el operativo ni los proyectiles de armas de fuego extraídos de los cadáveres, así como los encontrados en los pabellones.

Denotó la Corte que esta falta de investigación en este periodo tan largo configura una violación del derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por falta de investigación de las violaciones, sanción y reparación a las víctimas y sus familiares.

Conclusiones. (i) En este caso, además de considerar de por sí la irracionalidad del término, hizo un análisis a futuro del que tendría que transcurrir para que haya sentencia en firme contra los responsables, confirmando entonces que sería excesivo; por tanto, tiene en cuenta no solo el tiempo que ha pasado sino el que tiene que pasar para lograr una sentencia en firme contra los responsables. (ii) Reitera una vez más la aplicación de los protocolos internacionales en esta clase de investigaciones. (iii) Igualmente la obligación de cumplir con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o Convención Belém Do Pará. (iv) Es otro caso donde se dejan de manifiesto las graves fallas en que incurrieron las autoridades, que son las responsables directas de la violación del derecho al plazo razonable.

CASO LA CANTUTA VS. PERÚ (2006) ²²⁴

Una vez más la Corte hizo un extenso análisis del contexto histórico en que se desarrollaron los hechos, envuelto en una práctica sistemática de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, perpetrados por las fuerzas de seguridad e inteligencia estatales, en

²²⁴ Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Los hechos se refieren a la violación de los derechos humanos del profesor Hugo Muñoz Sánchez y de los estudiantes Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa, por el secuestro que sufrieron en la universidad La Cantuta, Lima, el 18 de julio de 1992, por parte de agentes del Estado.

operaciones del denominado Grupo Colina, lo que revela la gravedad de los hechos, por la estructura de poder organizado y de procedimientos codificados mediante los cuales operaba la práctica de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, direccionados desde el Presidente de la República, unido a la existencia de un plan sistemático para promover la impunidad en materia de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que comprendió el juzgamiento de delitos comunes por órganos militares y la expedición de las leyes de amnistía.

Denotó que tras la caída del régimen del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori, fueron abiertas al menos cinco nuevas causas, las cuales han tenido diversos resultados parciales contra los más altos mandos del gobierno pero hay falta de persecución de los autores materiales.²²⁵

Admitió la complejidad de las investigaciones partiendo de la naturaleza de los hechos, el número de víctimas, procesados y las dilaciones causadas por éstos, incluyendo los casos antes de la caída del régimen. Señaló que los obstáculos produjeron que las investigaciones y procesos hayan durado más de 14 años desde la perpetración, lo cual, en conjunto, ha sobrepasado excesivamente el plazo que pueda considerarse razonable para estos efectos. Llamó la atención porque no se han reabierto investigaciones en causas con fuero común donde existen condenas sin ejecutar y causas favorables con sobreseimiento, por lo que el fuero militar ha continuado obstaculizando la investigación y eventual enjuiciamiento y sanción de todos los responsables²²⁶. También su preocupación por la aplicación de la figura de la cosa juzgada²²⁷.

Conclusiones. (i)) La Corte tiene en cuenta el contexto en que se ejecutaron los hechos, lo que es importante establecer en estos casos de graves violaciones de derechos humanos a efectos de poder identificar y perseguir a los máximos

²²⁵ Puntualizó y reitera su jurisprudencia la CIDH, respecto que “en relación con la duración de las investigaciones y procesos, este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite formal de procesos internos, sino que éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables”.

²²⁶ Recordó la CIDH la jurisprudencia del caso Barrios Altos, respecto que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos.

²²⁷ Resaltó también la CIDH el carácter relativo, no absoluto del principio non bis in ídem, el cual no resulta aplicable en el sobreseimiento de la causa o la absolución del responsable, donde ha existido una infracción al derecho internacional, por la sustracción del acusado de su responsabilidad penal, o cuando el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, aplicando para esa sentencia el concepto de cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta”.

responsables. (ii) Estableció la complejidad del asunto por la naturaleza de los hechos, el número de víctimas, procesados y las dilaciones causadas por éstos. (iii) Queda claro que para la Corte la amnistía, el fuero militar, los sobreseimientos y la aplicación de la cosa juzgada aparente o fraudulenta son mecanismos que obstaculizan las investigaciones y van en contra del derecho al plazo razonable.

CASO MASACRE DE LA ROCHELA VS. COLOMBIA (2007) ²²⁸

Hubo un reconocimiento de responsabilidad por el Estado colombiano de varias violaciones de la Convención, pero respecto al artículo 8.1 y 25 hizo un reconocimiento parcial. Admitió el allanamiento, aceptando que subsiste la controversia respecto al contexto en que se desarrolló la masacre, dado que el Estado se opuso a la prueba relacionada con el contexto, en donde se determinó que el fenómeno paramilitar fue producto de una política generalizada del Estado colombiano.

En este evento la Corte reconoce que el Estado confesó que el 18 de enero de 1988 por lo menos 40 miembros del grupo paramilitar Los Masetos, contando con la cooperación y aquiescencia de agentes estatales, inicialmente retuvieron a 15 personas que conformaban una comisión judicial, compuesta por 2 jueces, dos secretarios y 11 miembros del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, y posteriormente ejecutaron a doce de ellos, donde sobrevivieron tres personas.

Determinó que no puede la Corte obviar el contexto en que ocurrieron los hechos, pues en los casos sometidos a su conocimiento se requiere tener en cuenta el contexto político e histórico para el establecimiento de las consecuencias jurídicas. Por ello, en este evento, destacó que uno de los principales factores que determinan la gravedad de los hechos es que fue una masacre perpetrada contra sus propios funcionarios judiciales cuando cumplían con su deber de investigar graves violaciones de derechos humanos, con la participación de agentes estatales pertenecientes a las fuerzas armadas, comisión que investigaba la desaparición de los 19 comerciantes ejecutada por el grupo paramilitar ACDEGAM, el cual contaba con el apoyo y vínculos con altos mandos de la Fuerza Pública.

Este estudio le permitió establecer que los hechos se enmarcaron en un contexto de violencia contra funcionarios judiciales para impedir sus labores,

²²⁸ Sentencia de 11 de mayo de 2007. Los hechos ocurrieron el 18 de enero de 1989, por parte de miembros de las Autodefensas quienes ejecutaron a una comisión de la administración de justicia, en el corregimiento de la Rochela, en el Bajo Simacota, Departamento de Santander, Colombia.

intimidarlos, amedrentarlos y lograr la impunidad de graves violaciones de derechos humanos, existiendo una omisión del Estado para protegerlos. Que para esta época existían los grupos de autodefensa, creados por el Estado, a quienes les otorgaba permiso para porte de armas de fuego y apoyo logístico, y que entre ellos estaban los Masetos. Señaló que fue a los tres meses después de la masacre la Rochela cuando el Estado dejó sin efecto el marco legal de la creación de los grupos de autodefensa.

Destacó que posteriormente los procesos judiciales relacionados con la masacre la Rochela estuvieron caracterizados por la falta de efectividad judicial, hecho reconocido por el mismo Estado, y como resultado de ello se derivaron las siguientes situaciones: (i) La duración total de los procesos supera los 17 años y en algunos no se ha llegado a una conclusión definitiva que permita conocer toda la verdad. (ii) No se ha sancionado a todos los sujetos vinculados con la masacre. (iii) Hubo prolongados periodos de inactividad procesal. (iv) Han surgido problemas jurídico-procesales para continuar adelante con las investigaciones por fenómenos como la prescripción o la cosa juzgada. (v) Aún existen procesos judiciales pendientes de establecer autores intelectuales y materiales.

En este caso la Corte llamó la atención porque las investigaciones por estas violaciones debieron ser adelantadas con el más estricto apego a la debida diligencia, no solo por tratarse de una masacre sino porque fue dirigida a funcionarios judiciales que estaban en desempeño de sus labores con el objetivo de adelantar una investigación de graves violaciones de derechos humanos donde habían participado paramilitares y altos mandos del Estado, con un claro mensaje para que no se investigara este tipo de crímenes.

Realizó la Corte un análisis de las investigaciones, denotando que en principio los jueces destacados fueron objeto de amenazas e intimidaciones, por lo cual debieron ser designados unos de sede diferente a donde ocurrieron los hechos, quienes produjeron sentencias condenatorias, absolutorias y nulidades con respecto a 28 de por lo menos 40 personas partícipes de los hechos. Hubo un periodo de inactividad procesal por aproximadamente seis años. Entre 2001 y 2003 se dictó una sentencia contra una persona y se extinguió la acción penal para otro. Del año 2003 a la fecha de revisión de la Corte las investigaciones están en la Unidad de Derechos Humanos y DIH, en donde se han emitido algunas resoluciones, entre ellas una acusación, pendiente de establecer la responsabilidad de integrantes de la Policía Nacional y del Ejército y calificar el proceso para 8 sindicados.

Así las cosas, respecto a la efectividad de los procedimientos solo hay 8 personas condenadas y solo un agente estatal, tres condenadas por homicidio, secuestro, concierto para delinquir, con penas de 29 y 30 años, otras 4 condenas por el delito de concierto para delinquir y una condena por encubrimiento, 14 personas han sido absueltas, para 3 personas se dictó preclusión de la investigación, y se dictó una resolución inhibitoria para un congresista que aparecía como la persona que planeó la masacre.

Con base en los anteriores resultados estimó que hay ineffectividad de los procesos penales ante la falta de debida diligencia en la conducción de la investigación, que se traduce en la manifiesta irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de las actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. Para la Corte el eje central de análisis de la efectividad de los procesos es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia, la cual adquirió particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. Por ello, en ese sentido, debieron adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de derechos humanos.

La debida diligencia en la determinación de todos los responsables de la masacre la Rochela incluía los siguientes factores: i) número de personas que participaron en la masacre, la cooperación y aquiescencia de agentes del Estado; ii) móvil de la masacre; iii) La relación directa entre el grupo paramilitar Los Masetos y el grupo paramilitar ACDEGAM y sus vínculos con altos mandos de la fuerza pública de la zona; iv) durante la investigación por la masacre la Rochela miembros de la fuerza pública obstaculizaron la ejecución de algunas capturas y obstruyeron la investigación.

Por consiguiente, que la debida diligencia de este caso exigía que la investigación fuera conducida tomando en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, evitando omisiones en la recaudación de la prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación; eso hizo que las autoridades a lo largo de 18 años se dirigieran a identificar e individualizar aproximadamente a 100 personas señaladas por sus alias cuyo papel en la operatividad paramilitar era incierto. De otra parte los intentos de identificación de miembros de la fuerza pública se centraron en personas de bajo

rango, dejando de lado a comandantes militares y paramilitares que estaban plenamente identificados.

Por otra parte, se advirtió que el patrón de violencia y amenazas contra funcionarios judiciales, víctimas y testigos en este caso tuvo un efecto amedrentador e intimidante para que desistieran de colaborar en la búsqueda de la verdad y obstruir el avance del proceso, siendo ello agravado porque no se tomaron las medidas de seguridad, afectando el ejercicio de la función judicial y el funcionamiento de la administración de justicia, existiendo una omisión del Estado con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso.

En conclusión, para la Corte a pesar de la complejidad de los factores que reviste la investigación de esta masacre, debido a la naturaleza y gravedad de los acontecimientos, el número de partícipes involucrados (entre ellos grupos paramilitares que actuaban con el apoyo de la fuerza pública), los medios utilizados y los resultados alcanzados, no son suficientes para garantizar un efectivo acceso a la justicia, porque si bien hay algunas condenas subsiste la impunidad, porque no se ha establecido toda la verdad de los hechos ni la responsabilidad de los mismos, advirtiendo que en este caso, como en otros en contra de Colombia, prevalece un alto índice de impunidad en hechos cometidos por paramilitares con la aquiescencia y colaboración de miembros de la fuerza pública, de tal modo que las actuaciones judiciales no han sido desarrollados en un plazo razonable, ni han constituido un recurso efectivo para asegurar los derechos de acceso a la justicia, determinación de la verdad y reparación integral a víctimas y familiares.

Conclusiones: (i) Es de resaltar nuevamente cómo la Corte en la construcción del contexto determina la importancia de definir líneas de investigación de las cuales se deriva que el Estado fue el creador del grupo de autodefensas, y que pese a conocer que estas personas contaban con el apoyo de agentes del Estado, porque así lo permitía la ley, desbordaron su objetivo y se volvieron paramilitares, cometiendo masacres y otras graves violaciones de derechos humanos, con total permisividad de agentes del Estado. (ii) Queda claro que el Estado conocía las graves violaciones de derechos humanos que ejecutaban estos grupos de autodefensa y que omitió el deber de tomar acciones para impedir que siguieran actuando. (iii) Que es una exigencia para las autoridades judiciales analizar y tomar en cuenta el contexto en que ocurren los hechos de graves violaciones de derechos humanos para poder abarcar todas las líneas investigativas, porque de haber sido así en este caso se hubiese identificado que existía un contexto de violencia contra operadores judiciales para evitar que investigaran graves violaciones de derechos humanos, donde aparecían comprometidos agentes del Estado; se hubieran

investigado y sancionado a altos mandos de la Policía y del Ejército y no se hubiesen desgastado las autoridades en identificar a personas por sus alias donde su participación era incierta. (iv) Determinó la obligación reforzada de mayor diligencia en la investigación de esta masacre porque sus víctimas eran funcionarios judiciales que estaban investigando una masacre donde estaban comprometidos agentes del Estado, pero pese a ello no se actuó conforme a esa exigencia²²⁹. (v) En este caso a pesar que la comisión fue ejecutada por investigar graves violaciones de derechos humanos, criticó que el Estado no hubiese asumido las acciones para impedir que prosiguieran las amenazas e intimidaciones contra los funcionarios, testigos y víctimas que investigaban a su vez la masacre la Rochela, de modo que éste fue un factor que obstaculizó e impidió la efectividad de las investigaciones y por ende provocó la violación del derecho al plazo razonable. (vi) Aplicó la Corte el criterio de efectividad de las investigaciones, y por ello concluyó que las investigaciones no fueron un recurso efectivo para las víctimas para conocer la verdad, justicia y reparación integral, no obstante que se dieron algunos resultados, pero tuvo en cuenta que participaron un número considerable de personas, la gravedad de los hechos y que no se han sancionado a los máximos responsables, pese a estar identificados. (vi) El contexto de los hechos permitió a la Corte determinar que en Colombia opera la impunidad en la mayoría de los casos donde están involucrados paramilitares y agentes del Estado.

CASO BUENO ALVES VS. ARGENTINA (2007)²³⁰

En este caso hubo aceptación de responsabilidad del Estado Argentino, entre otras cosas por la violación del artículo 8.1, pero pesar de ello examinó la Corte los procedimientos relacionados con la investigación judicial por los hechos de tortura. Reitera su línea jurisprudencial de que, en casos de investigaciones de tortura, para cumplir con el derecho del plazo razonable, aplican los siguientes principios: independencia, imparcialidad, competencia, diligencia y acuciosidad. Por otra parte, llama la atención a los funcionarios judiciales para que en procesos de tortura

²²⁹ La sentencia reviste una gran importancia porque ese patrón reconocido por la Corte contra funcionarios judiciales se impone la obligación reforzada respecto de estas investigaciones.

²³⁰ Sentencia de 11 de mayo de 2007. Los hechos se relacionan con la causa penal seguida contra el señor Bueno Alves, por los delitos de estafa y extorsión elevada por la señora Norma Lage y a su vez el proceso penal que contra la citada elevó el señor Bueno Alves. En el trámite de conciliación de estas acciones el señor Bueno Alves y su abogado, el señor Carlos Alberto Pérez Galindo, fueron detenidos, recibiendo el señor Bueno Alves torturas con el fin de que declarase contra él y su abogado. La causa por el delito de torturas finiquitó pero no se identificaron ni sancionaron a los responsables de las torturas.

actúen con prontitud, con la finalidad de asegurar los elementos materiales probatorios, entre ellos los exámenes médicos que documenten las lesiones infringidas a la víctima.

Revisada la actuación la Corte concluyó que los funcionarios judiciales no condujeron la investigación con diligencia y delegaron en la víctima la actividad procesal, por lo cual no se lograron resultados durante los 9 años en que se desarrolló.

Con relación a las fallas de las autoridades destacó las siguientes: (i) No investigaron los hechos con diligencia y la carga procesal recayó en gran parte sobre el señor Bueno Alves. (ii) El rol que jugaron el Ministerio Público y el Juez fue notoriamente pasivo. (iii) Se dejaron de lado las investigaciones pertinentes por la denuncia de golpes en el estómago y la privación de medicamentos. (iv) Las personas identificadas como responsables de los golpes en contra del señor Bueno Alves no fueron vinculadas al proceso sino hasta mucho tiempo después de iniciado el mismo. (v) No se identificó a un tercer individuo responsable de la tortura.

Conclusiones: (i) Siempre la Corte destaca la connotación de este delito de tortura exigiendo la mayor diligencia y atención, así que además de aplicarse el Protocolo de Estambul, también pide que se tengan en cuenta los principios que rigen este tipo de investigación, entre ellos los de diligencia y acuciosidad. (ii) Es otro caso donde las autoridades fallaron en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, descubriéndose una a una las falencias en que incurrieron.

CASO ESCUÉ ZAPATA VS. COLOMBIA (2008)²³¹

Hubo reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de varios derechos de la Convención, entre ellos los derechos a las garantías judiciales, artículo 8.1, y a la protección judicial, artículo 25.1, respecto de la víctima y sus familiares, por cuanto había transcurrido un tiempo excesivo desde el momento de la muerte del señor Escué Zapata sin haberse resuelto el caso. A pesar de dicho reconocimiento la Corte estableció que se mantiene la controversia respecto a los hechos relativos al supuesto patrón de

²³¹ Sentencia de 4 de julio de 2007. Estos hechos se presentaron el 1 de febrero de 1988 cuando funcionarios del ejército colombiano, entraron a la fuerza a la casa del señor Germán Escué Zapata, se lo llevaron de manera violenta y posteriormente lo ejecutaron. La víctima era gobernador del resguardo indígena de Jambaló, en el departamento del Cauca. Estos hechos fueron atribuidos a militares, quienes antes de ejecutarlo querían que él reconociera que era guerrillero y que estaba en posesión de armas de fuego. El cuerpo de la víctima fue hallado con señales de tortura.

violencia contra los pueblos indígenas en el departamento del Cauca y sus líderes, así como de los hechos de hurto y destrucción de bienes de la familia y de la tienda o empresa comunitaria.

Utilizó los tres criterios para establecer la razonabilidad del plazo y con base en los mismos, así como la confesión del Estado, declaró que el lapso de 19 años que había demorado la justicia es notoriamente irrazonable y constituye una violación al derecho consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana en perjuicio del señor Escué Zapata y sus familiares. Por otra parte, estableció que la investigación de este caso estuvo por un tiempo en la justicia militar, reiterando su jurisprudencia respecto de que los tribunales militares no son jueces naturales en casos de violaciones de derechos humanos para investigar, juzgar y sancionar a los autores, de tal modo que mientras estuvo en la justicia penal militar se violó el artículo 8.1. Reconoció que posteriormente se subsanó tal situación y pasó a la justicia ordinaria, pero a pesar de ello persiste la violación, en la medida en que la investigación debe adelantarse con todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad, persecución, captura, enjuiciamiento del caso, cualquiera sea la participación. Una vez más reitera que la debida diligencia en los procesos investigativos requiere que se tenga en cuenta lo siguiente: i) La complejidad de los hechos. ii) El contexto y las circunstancias en que ocurrieron iii) Los patrones que explican su comisión. iv) Seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. v) La aplicación de los principios mínimos que rigen cuando se trata de muertes violentas.

Respecto de la efectividad de los procedimientos judiciales iniciados por el Estado, resaltó las fallas presentadas en la actuación, que han estado dadas en: (i) Cuando se hicieron las primeras diligencias, solo recogieron declaración a cinco militares. (ii) La escena del crimen permaneció sin investigación y no se realizó la autopsia del cadáver. (iii) No se recogieron evidencias en el sitio de los hechos. (iv) No hubo prueba balística para confrontar la autoría de los disparos. (v) La pérdida del expediente. (vi) La investigación estuvo en la justicia penal militar desde el año 1992 hasta 1998 y solo se orientaron a la reconstrucción del procedimiento sin realizarse nuevas pruebas. (vii) Hubo largos periodos de inactividad. (viii) No se investigó a los responsables de la pérdida del expediente y cuando se inició su reconstrucción se perdieron pruebas claves como el acta de levantamiento y el registro de depósito de armamento. (vi) La investigación no comprendió todos los delitos, como el de detención ilegal; las lesiones corporales que sufrió la víctima; el allanamiento ilegal; la colaboración de ex soldados; el encubrimiento de los hechos; la supuesta participación de indígenas y/o terratenientes y de militares. Solo a partir del año 2002 se produjeron los primeros resultados, aunque no hay sentencias

condenatorias, confirmando su jurisprudencia, es decir, que esa actividad no ha constituido un recurso efectivo para garantizar el acceso a la justicia, la investigación y sanción de los responsables y la reparación integral de las consecuencias de las violaciones.

Conclusión. (i) Nuevamente para la Corte el elemento de la efectividad de las investigaciones es tenido en cuenta para determinar la violación. (ii) La Corte hace el ejercicio de mostrar las fallas investigativas atribuibles a los funcionarios judiciales para determinar que fueron los factores que generaron la violación del plazo razonable. (iii) La Corte tuvo en cuenta el tiempo en que el proceso estuvo en la jurisdicción penal militar, determinó las fallas probatorias en que incurrieron las autoridades y estableció que por no ser el juez natural hubo violación del artículo 8.1.

CASO BAYARRI VS. ARGENTINA (2008)²³²

Examinado el trámite relacionado con la duración de la prisión preventiva, concluyó que no sólo se sobrepasó el límite máximo legal establecido, sino que fue a todas luces excesiva, siendo irrazonable el tiempo que éste estuvo a la espera de una decisión judicial, hasta que fue absuelto. Aquí la Corte hace valoraciones en torno al plazo razonable que opera en materia de la restricción a la libertad de las personas, el cual tiene que ser adecuado, proporcional y dentro de los límites fijados en la ley y la razón, porque en el evento que ello no ocurra la persona afectada debe recobrar la libertad²³³.

En esta sentencia reitera su jurisprudencia sobre la obligación de los Estados de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o

²³² Sentencia de 30 de octubre de 2008. El señor Juan Carlos Bayarri fue detenido ilegalmente el 18 de noviembre de 1991 en la provincia de Buenos Aires, Argentina, sometido a tortura, prisión preventiva excesiva que duro 13 años.

²³³ “La Corte considera que la duración de la prisión preventiva impuesta al señor Bayarri no sólo sobrepasó el límite máximo legal establecido, sino fue a todas luces excesiva. Este Tribunal no encuentra razonable que la presunta víctima haya permanecido 13 años privados de la libertad en espera de una decisión judicial definitiva en su caso, la cual finalmente lo absolvió de los cargos imputados. El Tribunal resalta que, además, el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absoluta para que una persona detenida recupere su libertad, sino debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe”. Puntos 75 y 76 de la sentencia.

degradantes y será una constante en todos estos casos, donde indicará la naturaleza e implicaciones de este crimen.

En este pronunciamiento indicó que el plazo razonable se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento penal que se desarrolla en contra de cierto imputado, hasta que se dicta sentencia definitiva y que en esta materia el plazo comienza cuando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de cierto delito.

Conclusiones: (i) Es importante que entre las argumentaciones la Corte haya considerado el plazo que la ley establece para que una persona esté privada de la libertad, porque bajo esa circunstancia la reglamentación de los plazos en lo relacionado con la libertad de las personas sí es un parámetro para poder establecer la razonabilidad o no del plazo; claro que éste debería ser el único, salvo que se pueda revisar en el tiempo su necesidad y proporcionalidad, como lo indica la Corte, a menos que se requiera prorrogar dicho plazo. (iii) Reitera la jurisprudencia en torno a las obligaciones que se derivan de la Convención frente al delito de tortura.

CASO TICONA ESTRADA Y OTROS VS. BOLIVIA (2008)²³⁴

Sea lo primero señalar que los hechos se produjeron en la dictadura de Luis García Meza quien desarrolló una política de intimidación, acoso y exterminio contra los miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y cualquier grupo de personas, organización política o sindical que se opusiera de cualquier modo a los propósitos de la Junta Militar; por tanto, una gran cantidad de personas fueron detenidas ilegalmente y se desarrolló una práctica sistemática de capturas ilegales y torturas especialmente en interrogatorios a quienes eran detenidos.

En torno a la violación de los artículos 8.1 y 25.1, la Corte parte del hecho de que se deben tener en cuenta las actuaciones y omisiones y los alcances del principio de generación de responsabilidad por los actos de cualquiera de los órganos del Estado, frente al deber de garantía. Reitera que el plazo razonable al

²³⁴ Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Este caso tiene que ver con la desaparición forzada de Renato Ticona Estrada el 22 de julio de 1980, cuando fue detenido por miembros del ejército, en compañía de su hermano Hugo Ticona Estrada, recibiendo torturas de agentes del Estado. En este evento hubo un reconocimiento parcial de responsabilidad por parte del Estado en lo que tiene que ver con los hechos relacionados con la desaparición forzada de Renato Ticona Estrada, por lo que la controversia fue resuelta con respecto a la detención de Hugo Ticona.

que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento hasta que se dicta sentencia definitiva.

Tiene en cuenta la efectividad en el desarrollo de la investigación para valorar si han violado las autoridades los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en el extenso término transcurrido, pues el procedimiento inició hace más de veinticinco años y permaneció archivado once años, sin que el proceso penal aún haya concluido con una sentencia firme, tiempo que para la Corte habrá que sumarle el que pase hasta que se dicte la sentencia, existiendo una evidente denegación de justicia, considerando que constituye una violación al derecho de acceso a la justicia de los familiares de la víctima.

Conclusiones: (i) El cómputo del plazo razonable se relaciona con toda la duración de todo el procedimiento. (ii) Aplicó el criterio de efectividad de las investigaciones (iii) Es importante que la Corte revise el plazo transcurrido y el que eventualmente se debe proyectar hacia un futuro hasta que se dicte una sentencia condenatoria en firme para señalar, desde ya, la vulneración del derecho al plazo razonable.

CASO VALLE JARAMILLO Y OTROS VS. COLOMBIA (2008)²³⁵

El Estado colombiano hizo un reconocimiento de responsabilidad internacional de varias normas de la Convención, siendo parcial respecto del artículo 8.1 y 25.1, en conexión con el artículo 1.1, dado que todavía existen procesos judiciales para sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, conocer la verdad de lo ocurrido y reparar algunas víctimas ante la Justicia Contencioso Administrativa. Así las cosas, no obstante ese reconocimiento parcial, la Corte consideró que era necesario dictar una sentencia en donde se determinen todos los hechos y todos los elementos del fondo del asunto, así como sus consecuencias, porque constituye una forma de reparación para las víctimas y familiares, contribuye a la memoria histórica, evita que se repitan estos hechos, y satisface los fines de la jurisdicción interamericana de derechos humanos.

²³⁵ Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Los hechos se relacionan con la muerte del señor Jesús María Valle Jaramillo, defensor de derechos humanos, el día 27 de febrero de 1998, cuando se encontraba en su oficina junto con los señores Carlos Fernando Jaramillo Correa y Nelly Valle Jaramillo. Esta persona venía denunciando las graves violaciones cometidas por paramilitares en el departamento de Antioquia, especialmente en Ituango.

Como en otras sentencias la tarea de la Corte fue la examinar el contexto en que se desarrollaron los hechos, reconociendo nuevamente el fenómeno del paramilitarismo, los crímenes similares que han ejecutado, la participación de agentes del Estado en estos grupos, y la omisión de agentes de Estado frente a las acciones de esos grupos. Recordó que ya en otras oportunidades ha señalado que, (...) *“al haber propiciado la creación de estos grupos de autodefensas, el Estado creó objetivamente una situación de riesgo para sus habitantes y no adoptó todas las medidas necesarias ni suficientes para evitar que éstos siguieran cometiendo hechos como los del presente caso”*. La Corte reconoce, como lo ha hecho en otras ocasiones, que si bien el Estado ha adoptado determinadas medidas legislativas para prohibir, prevenir y castigar las actividades de los grupos de autodefensa o paramilitares, esas medidas no se vieron traducidas en la desactivación concreta y efectiva del riesgo que el propio Estado había contribuido a crear. Por tanto, dicho riesgo, mientras subsista, *“acentúa los deberes especiales de prevención y protección a cargo del Estado en las zonas en que exista presencia de grupos paramilitares. (...) “El Tribunal considera que dicho riesgo generado por el Estado agravó la situación de vulnerabilidad de las defensoras y defensores de derechos humanos que, como Jesús María Valle Jaramillo, denunciaban las violaciones cometidas por paramilitares y la fuerza pública”*²³⁶

Dada la situación de vulnerabilidad de los defensores y defensoras de derechos humanos la Corte Constitucional colombiana en la sentencia T- 590, declaró el estado de cosas inconstitucional con base en informes de organismos internacionales. De otra parte, tomó otra serie de medidas el Estado, pero a pesar de ello, la sentencia resalta que la propia Corte Constitucional reconoció que el ataque hacia ellos persistía, lo mismo que las conductas omisivas de las autoridades para su protección.

Por ello, en este caso la muerte del defensor Jesús María Valle Jaramillo tenía un efecto amedrentador sobre los otros compañeros, porque el temor frente a ese hecho podía influir directamente para que esas personas ejercieran su derecho de defender los derechos humanos, de ahí que las amenazas y ataques a la integridad de los defensores de derechos humanos y la impunidad son muy graves porque tienen un efecto no solo individual sino colectivo, y la sociedad no puede conocer la verdad de los hechos.

²³⁶ Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. *Op. cit.*, párrafos 80 y 81.

La Corte comienza por indicar los tres criterios para examinar la razonabilidad del plazo que han tomado las investigaciones, agregando un nuevo criterio que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta, *“la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve”*²³⁷.

Reconoció que la investigación trata de tres víctimas, derivando la complejidad en lo que respecta a la detención de los inculpados, que fueron juzgados en la clandestinidad. Así mismo recuerda que en su jurisprudencia ha tenido en cuenta las dificultades del Estado para cumplir los compromisos cuando debe investigar a miembros de grupos alzados en armas, no obstante, esa circunstancia no lo exime de los compromisos que le impone la Convención. Respecto a la actuación de los interesados no halló ninguna actitud dilatoria. La actuación de las autoridades estuvo conforme a los criterios de diligencia y razonabilidad con respecto de dos de sus autores, existiendo un retardo injustificado respecto a la identificación de otros autores y no todos los procesos han concluido. Respecto al proceso disciplinario reiteró su jurisprudencia en el sentido que sirve para complementar pero no sustituir el proceso penal, admitiendo su función de corrección y control de los funcionarios públicos.

Conclusiones. (i) Hay un nuevo criterio para evaluar el plazo razonable y es *“la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo”*. (ii) La violación del plazo razonable nuevamente la generan las autoridades porque las investigaciones penales y disciplinarias no comprenden a todos los responsables. (iii) Aplica nuevamente el criterio de la efectividad de las investigaciones. (iv) Como factores de complejidad tuvo en cuenta la detención de los inculpados porque fueron juzgados en la clandestinidad y que los actores fueran miembros de grupos alzados en armas.

CASO KAWAS FERNÁNDEZ VS. HONDURAS (2009)²³⁸

²³⁷ Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. *Op. cit.*, párrafo 155.

²³⁸ Sentencia de 3 de abril de 2009. El 6 de febrero de 1995, Blanca Jeannette Kawas Fernández fue asesinada por un disparo de arma de fuego mientras se encontraba en su casa de habitación. La señora Kawas Fernández era presidenta de la Fundación “PROLANSATE”, organización creada con

Es un caso en donde el Estado aceptó su responsabilidad internacional por violación del artículo 8.1 y 25 de la Convención, porque no realizó una investigación seria, que diera como resultado la condena de los responsables. Es importante que la Corte una y otra vez, en casos de muertes violentas, destaca “los principios rectores que es preciso observar como mínimo, *inter alia*: a) *identificar a la víctima*; b) *recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables*; c) *identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga*; d) *determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados*²³⁹.

Cuando aplicó los criterios encontró que el caso no era complejo, se trata de una sola víctima claramente identificada, y desde el inicio de la investigación surgieron indicios sobre la autoría del crimen. No hubo actos dilatorios de los familiares, pero sobre la actividad de las autoridades examinado el proceso observó las siguientes situaciones: (i) Que no se habían identificado a los autores de su asesinato. (ii) La actuación se caracterizó por irregularidades de las personas encargadas de la investigación. (iii) Falta de custodia de las evidencias de la escena del crimen. (iv) No se practicó autopsia. (v) No se han vinculado a los responsables a pesar de haber señalamientos directos. (vi) Hubo un plazo muerto de más de ocho años y luego cuando se volvió a reactivar la investigación la desviaron. (vii) No tomaron medidas para proteger a testigos. (viii) Denotó negligencia en la recolección de elementos probatorios e impulso de la actuación por espacio de 14 años.

Aplicó su cuarto criterio relacionado con la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando que era necesario realizar el análisis para determinar la razonabilidad del plazo. Por estas circunstancias, unidas al hecho del allanamiento, la Corte concluyó que el lapso de 14 años, solo en la etapa de instrucción, sobrepasa un plazo que pueda considerarse razonable.

el objeto de “mejorar la calidad de vida de los pobladores de las cuencas hidrográficas de la Bahía de Tela, Departamento de Atlántida, Honduras”.

²³⁹ Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Sentencia de 3 de abril de 2009. *Op. cit.*, Párrafos 101 y 102.

Conclusiones. (i) No obstante el allanamiento del Estado, la Corte realiza aportes valiosos respecto a las causas que generaron la violación del derecho al plazo razonable. (ii) Reitera los principios mínimos que deben aplicar las autoridades cuando deben investigarse muertes violentas. (iii) Quedan las autoridades nuevamente comprometidas en la violación del derecho al plazo razonable en la medida en que desde el inicio no realizaron todas las actuaciones que se orientaran a obtener una sentencia condenatoria contra todos los responsables, *contrario sensu*, fueron omisivas, tuvieron el caso paralizado por muchos años y no realizaron acciones que impidieran las amenazas en contra de los testigos; por todo ello la Corte las señaló como negligentes.

CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO ALGODONERO”) VS. MÉXICO (2009)²⁴⁰

Revisado el contexto en que se desarrollan los hechos, la Corte concluyó que desde 1993 existe en ciudad Juárez un aumento de homicidios de mujeres, por lo menos 264 víctimas, caracterizados algunos por altos grados de violencia, incluyendo violencia sexual, e influenciados, como lo acepta el Estado, por una cultura de discriminación contra la mujer y la ineficiencia de las investigaciones de los crímenes, que en concepto de la Corte *parecen haber permitido que se haya perpetuado la violencia contra la mujer en ciudad Juárez*.

Así mismo aceptó el reconocimiento de responsabilidad del Estado por las irregularidades cometidas en la primera etapa de las investigaciones, pero también concluyó que muchas de ellas no se subsanaron en la segunda etapa. El Tribunal señaló que en el presente caso existía impunidad y que ella es causa y a la vez consecuencia de la serie de homicidios de mujeres por razones de género que ha sido acreditada en el presente caso. La Corte demandó del Estado que conduzca eficazmente el proceso penal y, de ser el caso, los que se llegasen a abrir, para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes González, Herrera y Ramos, pero dio una serie de directrices que se deben cumplir para ello, algunas reiterativas, como remover todos los obstáculos *de iure* o *de facto* y usar todos los medios disponibles.

²⁴⁰ Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Los hechos tienen que ver con la desaparición y posterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonerero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. Dos de las víctimas eran menores de edad.

Reitera la obligación respecto de que la investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación específicas respecto a la violencia sexual, para lo cual se deben involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona; aplicar los protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos de esta sentencia; proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, así como realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género.

De igual modo, avanza en la protección de los derechos de las víctimas en aras de hacer efectiva la investigación en un plazo razonable, de modo que exigió como forma de combatir la impunidad que el Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables.

Así mismo, la sentencia continúa reafirmando otro precedente jurisprudencial respecto a la obligación que tienen los funcionarios judiciales conforme a los estándares internacionales de utilizar los parámetros para investigar y juzgar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género.

Conclusiones. (i) Es una sentencia bien importante donde se verifica la total impunidad en la investigación de las muertes de 264 mujeres. (ii) Determina que las autoridades han excedido el derecho al plazo razonable en unas investigaciones donde no se definieron líneas investigativas que generaran resultados eficientes; (iii) No aplicaron los protocolos internacionales, como el Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas. (iv) No hubo directrices para investigar los crímenes desde una perspectiva de género. (iv) Así mismo es muy importante porque obliga a que el Estado realice las respectivas investigaciones penales o disciplinarias a los funcionarios que han generado la impunidad, siendo una herramienta que contribuye a que las autoridades no sigan ejecutando prácticas dilatorias, negligentes, omisivas, etc.

CASO MASACRE DE LAS DOS ERRES VS. GUATEMALA (2009)²⁴¹

Hubo reconocimiento del Estado de la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, pero la Corte estimó que en consideración a la gravedad de los hechos y de las violaciones generadas era necesario hacer algunas precisiones sobre la determinación de los hechos, la falta de investigación y la impunidad.

Conforme a lo anterior hace un análisis del contexto histórico en que se presentaron, enmarcándolos en un conflicto armado interno que provocó muertos y desaparecidos, en cuantía de más de doscientas mil personas, se ejecutaron muchas masacres, entre ellas la Masacre del Parcelamiento de Las Dos Erres. La Corte reitera toda la jurisprudencia en torno a las obligaciones y deberes de los Estados frente a las víctimas, entre ellos acceder a la justicia en tiempo razonable, para conocer la verdad de lo sucedido y conseguir la sanción a los responsables. Comprobó que el esclarecimiento de la masacre se ha caracterizado por una ostensible dilación en la tramitación y resolución de los recursos interpuestos, por tanto se ha propiciado una demora excesiva y se había paralizado la justicia, excediendo los plazos establecidos por la ley, existiendo además tolerancia por parte de los tribunales al momento de tramitar los recursos, permitido el uso abusivo del recurso de amparo como práctica dilatoria en el proceso, así que transcurridos más de 15 años de iniciado el proceso penal y 27 años de ocurridos los hechos, se encuentra aún en la etapa inicial.

La sentencia denota cómo el propio Estado usó a las mujeres como armas de guerra, dado que en el conflicto armado las mujeres fueron particularmente seleccionadas como víctimas de violencia sexual, la violación de las mujeres fue una práctica del Estado, ejecutada en el contexto de las masacres, dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar e individual; las mujeres embarazadas fueron víctimas de abortos inducidos y otros actos de barbarie, y no obstante la gravedad de estos hechos ha existido falta de voluntad para investigarlos, contraviniendo las normas inderogables (*jus cogens*) y las obligaciones para los Estados que deben investigar y sancionar dichas prácticas.

²⁴¹ Sentencia de 24 de noviembre de 2009. La demanda se relaciona con la supuesta falta de debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la masacre de 251 habitantes del Parcelamiento de Las Dos Erres, ocurrida entre los días 6 a 8 de diciembre de 1982, siendo ejecutada por agentes del Estado. La masacre comprendió niños, niñas, mujeres, algunas fueron violadas y golpeadas, algunas embarazadas sufrieron abortos.

Llamó la atención del sistema judicial porque a pesar de que los hechos se desarrollaron en un patrón de ejecuciones extrajudiciales selectivas impulsadas por el Estado, no han habido mecanismos judiciales efectivos ni para investigar las violaciones de los derechos humanos ni para sancionar a todos los responsables, siendo entonces el actuar de la judicatura, la falta de voluntad y el desinterés de las autoridades lo que ha impedido el acceso a la justicia de las víctimas, y convertido el aparato judicial en un sistema indiferente ante la impunidad.

Entre las faltas atribuidas a las autoridades reveló las siguientes: (i) El retardo injustificado en el proceso penal por más de 15 años, durante los cuales los imputados hicieron uso indiscriminado de recursos. (ii) Hubo desinterés y falta de voluntad de las autoridades para adelantar la investigación, entre ellas no han tramitado debidamente numerosos recursos. (iii) No tomaron decisiones de fondo dando como resultado un retardo excesivo. (iv) No se tuvo en cuenta la aplicación de la Convención Americana, ni posteriormente se aplicó la Convención de Belém do Pará del 4 de abril de 1995, ratificada por el Estado; que complementan las normas de la Convención y son de obligatorio cumplimiento por hacer parte del “*el corpus juris*”²⁴² internacional en materia de protección de la integridad personal”.

Conclusiones: (i) La Corte tuvo en cuenta el contexto para evidenciar la existencia de una política de Estado en contra de las mujeres como arma de guerra siendo accedidas sexualmente, sometidas a torturas, abortos, etc. (ii) La participación de agentes del Estado en estos hechos. (iii) La inoperancia del sistema judicial en este caso, dado el desinterés, la falta de voluntad en adelantar el esclarecimiento de la masacre, por ello señaló una a una las irregularidades en que incurrieron, al punto de concluir que el aparato judicial se convirtió en un sistema indiferente ante la impunidad. (iv) Se destaca el derecho de las víctimas para que accedan a la justicia y el compromiso de las autoridades de aplicar los Convenios que complementan la Convención Americana en la protección reforzada a favor de las mujeres, como es la Convención Belém do Pará. (vi) Muy importante destacar que la Corte llama la atención sobre el no cumplimiento de los plazos procesales.

²⁴² O'DONELL, Daniel. *Derecho internacional de los derechos humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano*. Editado por Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 1ª Edición. Bogotá, 2004, p. 55. “La expresión “*corpus juris* de los derechos humanos” es un aporte de la Corte Interamericana a la doctrina internacional. En su opinión Consultiva OC-16/19999, la Corte Internacional manifestó que “El *corpus juris*” del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está conformado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones)”.

CASO MANUEL CEPEDA VARGAS VS. COLOMBIA (2010)²⁴³

Hubo un reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado colombiano de algunas normas de la Convención y en el caso de las garantías judiciales admitió que se excedió en el plazo razonable en la investigación sin que hasta el momento se hayan podido identificar los autores intelectuales del homicidio del señor Manuel Cepeda. La Corte consideró que subsiste la controversia entre las partes por la ineficacia de los procesos disciplinarios y contenciosos administrativos, la debida diligencia en las investigaciones penales y los obstáculos en la investigación por la desmovilización de paramilitares.

La construcción del contexto le permitió a la Corte estimar que el homicidio fue perpetrado por miembros del Ejército junto con miembros de grupos paramilitares, demandándose una compleja organización, lo que se ha expresado también en la dificultad para develar a la totalidad de sus perpetradores, tanto intelectuales como materiales, siendo esa división de tareas lo que dificulta el esclarecimiento de los vínculos entre ellos y, por otra parte, las características de la planificación y ejecución del crimen tienden a dificultar la conexión entre los dos niveles de perpetradores.

Para avanzar en esta clase de investigaciones ofrece como soluciones las siguientes: i) Las autoridades estatales deben determinar procesalmente los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades. ii) No basta el conocimiento de la escena y circunstancias materiales del crimen, sino que resulta imprescindible analizar el conocimiento de las estructuras de poder que lo permitieron, diseñaron y ejecutaron intelectual y materialmente. iii) Se deben identificar las personas o grupos que estaban interesados o se beneficiarían del crimen. iv) Esto puede permitir, a su vez, la generación de hipótesis y líneas de investigación. v) El análisis de documentos clasificados o reservados. vi) Análisis de

²⁴³ Sentencia de 26 de mayo de 2010. El señor Manuel Cepeda Vargas se desempeñaba como senador de la República, y fue ejecutado el día 9 de agosto de 1994, en la ciudad de Bogotá. La sentencia advierte la falta de diligencia de la justicia colombiana porque pese a las amenazas que recibió el senador, nada se hizo por determinar los autores de las mismas. De ahí que, esa falta de actividad desencadenó su muerte, criticando que no se hiciera una investigación seria ni responsable para descubrir el plan de una organización criminal, en contra de los miembros de la Unión Patriótica y el Partido Político - Unión Patriótica. Aun después de ocurrido el homicidio, no hubo el esclarecimiento de los hechos, de tal modo que esa dilación impidió que pudieran establecerse hasta la fecha, los determinadores del homicidio y las estructuras criminales subyacentes que lo impulsaron.

la escena del crimen, ubicación de testigos, y demás elementos probatorios, pero sin confiar totalmente en la eficacia de mecanismos técnicos como éstos para desarticular la complejidad del crimen, dado que pueden resultar insuficientes. v) No partir sólo del análisis de un crimen de manera aislada, sino inserto en un contexto que proporcione los elementos necesarios para comprender su estructura de operación.

En este caso la Corte tuvo en cuenta que habían transcurrido 16 años de ocurridos los hechos y el proceso penal continuaba abierto, sin que se haya procesado y eventualmente sancionado a todos los responsables, lo cual ha sobrepasado excesivamente el plazo que puede considerarse razonable.

Conclusiones: (i) La vulneración del derecho al plazo razonable es atribuida a las autoridades porque existían amenazas de muerte, que de haberse investigado el contexto hubiera revelado un plan criminal para darle muerte a al senador y a miembros de la Unión Patriótica, pero desatendieron esta obligación. (ii) Con respecto a la investigación por el homicidio tampoco, a pesar del transcurso del tiempo, se ha logrado identificar y sancionar las estructuras criminales que lo ordenaron. (iii) Se aplicó el criterio de efectividad, reconociendo que ha habido avances pero no los suficientes. iv) Le indicó a las autoridades las pautas que debió adelantar para el desarrollo del programa metodológico.

CASO COMUNIDAD INDÍGENA XÁKMOK KÁSEK VS. PARAGUAY (2010) ²⁴⁴

Pese a que el Estado dijo allanarse la Corte desestimó tal acto porque no hubo reconocimiento de los hechos. Examinado el trámite administrativo iniciado en 1990, determinó que han pasado más de 17 años de duración. Es un caso complejo pero las demoras en el proceso administrativo no se produjeron por esto, sino por lo siguiente: (i) La actuación deficiente y demorada de las autoridades estatales, de tal modo que muchas de las actividades se iniciaron a instancia de la comunidad. (ii) El procedimiento se caracterizó por la pasividad. (iii) Hubo largos periodos de inactividad. (iv) Poca diligencia y falta de respuesta de las autoridades estatales. (v) Hubo pérdida del expediente y debió ser reconstruido.

²⁴⁴ Sentencia de 24 de agosto de 2010. Los hechos se relacionan con falta respuesta por el Estado derecho de propiedad ancestral de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek y sus miembros, ya que desde 1990 presentaron una solicitud de reivindicación territorial de la Comunidad, sin que el Estado resuelva.

La actividad procesal del interesado fue proactiva, siendo la comunidad la que impulsó las pocas diligencias que realizó el Estado. Aplicó el cuarto criterio relacionado con la afectación del interesado por el transcurso del tiempo, evidenciando que la demora en la obtención de una solución definitiva al problema de la tierra de los miembros de la comunidad ha incidido directamente en su estado de vida. Por otra parte, tuvo en cuenta su jurisprudencia relacionada con los casos Yakye Axa y Sawhoyamaya, contra Paraguay, en donde consideró que un plazo de 11 y 13 años, que respectivamente duraron los procedimientos, no compaginaban con el principio de plazo razonable, llegando a la misma conclusión en este asunto.

Conclusiones. (i) Las autoridades aparecen como responsables de la violación del derecho al plazo razonable por su comportamiento deficiente, demorado y negligente. (ii) Se reconoció la proactividad de los interesados, quienes colaboraron todo el tiempo con las autoridades. (iii) Se tuvo en cuenta el cuarto criterio relacionado con la afectación que la violación del plazo razonable ha generado en la comunidad, porque ha incidido directamente en su vida diaria. (iv) Es un caso en donde se resuelve un conflicto administrativo y donde igualmente se demandó de las autoridades el cumplimiento del derecho al plazo razonable. (v) Nuevamente la Corte le da al derecho al plazo razonable la significación de principio.

CASO FERNÁNDEZ ORTEGA Y OTROS VS. MÉXICO (2010)²⁴⁵

Hubo un reconocimiento internacional del Estado de México respecto de algunas violaciones de la Convención, y parcial respecto de las garantías judiciales, por lo cual la Corte evaluó todos los hechos, los elementos de fondo y sus consecuencias.

Como siempre la Corte estableció el contexto en que se desarrollaron los hechos y conforme a ello consideró que había importante presencia militar en el estado de Guerrero, con el objeto de atacar la delincuencia organizada. Por otro lado, hizo conocer que la población que ahí reside es indígena, sometida a una situación de vulnerabilidad en diferentes ámbitos, como el judicial, salud, falta de conocimiento del idioma español, falta de intérpretes y por ello no se les garantiza el derecho al debido proceso, además de las barreras que enfrentan, y en el caso de las mujeres, cuando denuncian algunos hechos, han enfrentado hasta el rechazo

²⁴⁵ Sentencia de 30 de agosto de 2010. Los hechos tienen que ver con la violación sexual y tortura en contra de la señora Fernández Ortega, el 22 de marzo de 2002, por parte de agentes del Estado, quienes entraron a su residencia y abusaron de ella.

por parte de su comunidad y otras prácticas dañinas tradicionales. Por esa presencia militar las mujeres fueron objeto de violencia sexual y los procesos han sido de conocimiento de la justicia penal militar, tal como ocurrió en el presente, cuando la señora Fernández Ortega fue violentada sexualmente por militares.

Recordó la sentencia, de acuerdo a la *“Convención de Belém do Pará, que la violencia contra la mujer no sólo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, que “trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”*²⁴⁶.

Es otro caso donde la Corte reitera que la justicia penal militar no es competente para investigar violaciones de derechos humanos, porque estas conductas no tienen conexión con la disciplina militar, menos en este caso en el que se trató de un acceso carnal, quedando por tanto excluida de la competencia de los tribunales militares. Hubo violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Fernández Ortega.

Hace un análisis global del caso y encontró graves falencias en la recolección, conducción y diligencia que imprimieron los funcionarios, así que llamó la atención para que en casos de violencia sexual se debe cumplir como mínimo con las siguientes actuaciones y condiciones en la investigación: i) *la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza;* ii) *la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición;* iii) *se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación;* iv) *se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea;* v) *se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos*

²⁴⁶ Párrafo 118.

*y garantizando la correcta cadena de custodia, y vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso*²⁴⁷.

Detectó varias falencias por omisión de las autoridades relacionadas con lo siguiente: (i) Omisión de recibir la denuncia debiendo intervenir otro funcionario para que se cumpliera. (ii) No se le asistió con un intérprete. (iii) No se garantizaron las condiciones de cuidado y privacidad al presentar la denuncia la víctima. (iv) No se adelantó inspección al lugar de los hechos rápidamente sino a los días. (v) No tuvo atención médica y psicológica. (vi) No se protegió la prueba pericial; (vii) Hubo revictimización de la víctima quien era llamada constantemente a declarar.

Por todas estas circunstancias la Corte estableció que no hubo la debida diligencia excediendo el plazo razonable con violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, e incumplió el deber establecido en el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención Belém do Pará, en perjuicio de la señora Fernández Ortega.

Conclusiones: (i) Mediante el análisis global pudo detectar las fallas en que incurrieron los funcionarios judiciales en la recolección, conducción y diligencia, impidiendo una investigación eficaz. (ii) Ratificó su jurisprudencia respecto de que la justicia militar no es competente para conocer casos de violaciones de derechos humanos y menos de abuso sexual que no tienen ninguna vinculación con el servicio. (iii) Nuevamente reclamó que en las investigaciones donde son víctimas mujeres debe haber un compromiso mayor respecto a la sanción de los responsables porque además de las obligaciones que impone la convención, ellas se “complementan y refuerzan”, con las obligaciones derivadas en la Convención de Belém do Pará. (iv) Aporta herramientas para que las autoridades en caso de violencia sexual, mínimamente desarrollen unas actividades investigativas en pro de la efectividad del caso.

CASO IBSEN CÁRDENAS E IBSEN PEÑA VS. BOLIVIA (2010)²⁴⁸

²⁴⁷ Párrafo 194.

²⁴⁸ Sentencia de 1º de septiembre 2010. Los hechos tratan la desaparición forzada de los señores Rainer Ibsen Cárdenas José Luis Ibsen Peña] en octubre de 1971 y febrero de 1973 respectivamente, en el marco de la dictadura militar liderada por Hugo Banzer Suárez.

A efectos de verificar las violaciones alegadas, la Corte comienza por analizar el contexto en el que ocurrieron los hechos, considerando de manera reiterada en estas decisiones que éste puede ser determinante para el establecimiento de las consecuencias jurídicas, tanto en lo relativo a la naturaleza de las violaciones de derechos humanos como en materia de reparaciones.

Reitera los alcances, consecuencias y obligaciones que tienen los Estados cuando se presentan violaciones relacionadas con desapariciones forzadas y en especial la necesidad de considerar el contexto en que ocurrieron los hechos, a fin de analizar sus efectos prolongados en el tiempo y enfocar integralmente sus consecuencias, porque es un delito que hace parte del *corpus juris* de protección, tanto interamericano como internacional.

Confirma su jurisprudencia en torno a que en casos de desaparición forzada, para evaluar el tiempo razonable, dado la característica especial del delito, se deben garantizar los derechos de las personas perjudicadas, porque para la Corte una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Por otro lado, como interrelaciona el art. 8.1 con el art. 25 de la Convención, exige además que por tratarse de una desaparición forzada, el derecho de acceso a la justicia incluye que en la investigación de los hechos se procure determinar la suerte o paradero de las víctimas.

En este caso la Corte confirma su jurisprudencia en el sentido de que las garantías del artículo 8.1 de la Convención no se aplican solamente a la actividad judicial, sino que igualmente comprende la efectividad desplegada en la actuación, y entre esto determinó que cuando se presenten patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos las autoridades encargadas de la investigación tienen el deber de asegurar que en el curso de la misma se valoren esas circunstancias para lograr la efectividad, lo que implica que se tenga en cuenta la complejidad de este tipo de hechos y la estructura a que pertenecen las personas posiblemente vinculadas, para evitar omisiones en la recaudación de pruebas y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación.

Criticó a las autoridades porque incurrieron en las siguientes fallas: (i) No tuvieron en cuenta el contexto de los hechos y las estructuras a las que pertenecían las personas indiciadas, por lo cual no hubo líneas de investigación claras y lógicas. (ii) La falta de diligencia imposibilitó obtener pruebas, contribuyendo a mantener la impunidad. (iii) No hubo una investigación seria de los hechos concernientes a la detención y posterior desaparición forzada de Rainer Ibsen Cárdenas y José Luis Ibsen Peña. (iv) La actuación de las autoridades se caracterizó por los obstáculos

de parte de los funcionarios judiciales, que interpusieron excusas para eludir el conocimiento de la investigación, lo que generó una dilación total, dejándose de manifiesto la falta de seriedad en el trámite del proceso.

Conclusiones: (i) Es muy importante la exigencia de la Corte de que se estudie el contexto en que ocurrieron los hechos para poder definir claras líneas investigativas en pro de lograr la efectividad de la investigación, lo que es una constante en su jurisprudencia y un aporte enriquecedor en este tipo de macrocriminalidad, donde se comprometen graves violaciones de derechos humanos. (ii) Igualmente deja al descubierto maniobras dilatorias de los funcionarios encargados de la actuación al desconocer el deber de investigar so pretexto de falta de competencia. (iii) Como en otras sentencias y siguiendo su línea jurisprudencial, la Corte interrelaciona el derecho al plazo razonable con el derecho de acceso a la justicia. (iv) Reitera su posición respecto de que una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales, lo que puede significar que no admitiría una explicación o justificación del Estado ante ese tipo de dilaciones. (v) El delito de desaparición forzada que proviene de estructuras organizadas de poder determina la complejidad del caso y genera tenerlo en cuenta para dirigir la investigación. (vi) La violación al derecho al plazo razonable es también atribuible a las autoridades. (vii) Los compromisos no solo nacionales sino internacionales frente a las investigaciones relacionadas con desapariciones forzadas, porque es un delito que hace parte del *corpus juris* de protección, tanto interamericano como internacional.

CASO GOMES LUND Y OTROS VS. BRASIL (2010)²⁴⁹

Una vez más la Corte hace un extenso estudio de las obligaciones que tienen los Estados en casos de desaparición forzada sobre el deber de investigar de oficio, sin dilación, de una manera seria, imparcial y efectiva, lo que conlleva la tipificación de esta conducta cumpliendo los estándares internacionales y garantizando que no existan obstáculos normativos o de otro tipo que impidan la investigación y la sanción de sus responsables.

²⁴⁹ Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Los hechos tienen que ver con la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de 70 personas, entre miembros del Partido Comunista de Brasil y campesinos de la región, a raíz de operaciones del Ejército brasileño realizadas entre 1972 y 1975, todo ello con el objeto de erradicar a la Guerrilha do Araguaia, en la dictadura militar de Brasil (1964–1985).

Consideró que el delito de desaparición forzada es de carácter continuado o permanente, y que sus consecuencias acarrearán una pluriofensividad a los derechos de las personas reconocidos en la Convención Americana hasta tanto no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos.

La Corte en los casos sometidos a su revisión realiza un análisis del contexto en que los hechos se desarrollaron, punto importante a tener en cuenta por parte de los funcionarios judiciales en casos de investigaciones de violaciones de derechos humanos, porque permite examinar los hechos acaecidos en un determinado momento de manera integral, no aislada, para una mejor comprensión y esclarecimiento.

Hace una precisión importante a tener en cuenta en casos de desapariciones forzadas, en la medida en que se tomó en cuenta el momento de la desaparición para contabilizar el término que han tenido las autoridades para obtener los resultados que demanda este tipo de delito y para valorar el plazo razonable²⁵⁰.

²⁵⁰ Llama la atención la Corte a los Estados Partes, al determinar que desde que profirió la primera sentencia (...) “ha destacado la importancia del deber estatal de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos (...), así mismo que esa obligación de investigar y, en su caso, enjuiciar y sancionar, adquiere particular importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados, especialmente en casos de desaparición forzada de personas, porque esta conducta ha alcanzado el carácter de *jus cogens*”. Toca otro punto que reiterará en muchas decisiones respecto que la obligación que surge del derecho internacional, relacionada con procesar, sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, se desprende de la obligación de garantía consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Así mismo que (...) “esta obligación implica el deber de los Estados Parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de derechos humanos. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablece, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción (...). Hace un amplio análisis de dicha obligación de investigar y sancionar, para lo cual trae a colación los pronunciamientos que sobre este particular se han realizado en otros sistemas internacionales de protección de derechos humanos, los cuales coinciden con la Corte en este tópico, como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones; el Comité contra la Tortura; El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; el Tribunal Especial para Sierra Leona; así mismo tanto los Acuerdos de las Naciones Unidas con la República del Líbano y con el reino de Camboya, como los Estatutos que crean el Tribunal Especial para el Líbano, el Tribunal Especial para Sierra Leona y las Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya, todos estos organismos han sido uniformes respecto que las amnistías que sean concedidas no constituirán un impedimento para el procesamiento de las personas responsables de los delitos que se encuentren dentro de la competencia de dichos tribunales”.

Por ello reitera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”²⁵¹.

Tuvo en cuenta la Ley de Amnistía adoptada por Brasil para indicar que su aplicación afectó el deber internacional del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos al impedir que los familiares de las víctimas fueran oídos por un juez, y violó el derecho a la protección judicial por la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos.

En este punto aparece otro tema importante a evaluar por parte de las autoridades al momento de adelantar las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, el cual tiene que ver con el ejercicio del control de convencionalidad de las leyes nacionales, para determinar que estén en consonancia con la CADH, de modo que en casos en que el Estado Parte dicte una Amnistía para delitos que violen la Convención Americana, deben éstos considerar las obligaciones internacionales derivadas del derecho internacional, particularmente aquellas establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, para no aplicar estas leyes (Esto lo reiterará la Corte una y otra vez en varios casos donde se ha acogido esta figura para crímenes internacionales).

Conclusiones: (i) La Corte es muy enfática e incisiva en requerir de los funcionarios judiciales todos los esfuerzos para investigar un delito de desaparición

²⁵¹GROS ESPIELL, Héctor. *Derechos Humanos y Vida Internacional*. Ed. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 1993, p. 235. Es importante destacar el contenido y alcance del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por ello traemos lo que sobre el tema ha establecido Héctor Gros. “La obligatoriedad universal y regional del respeto de los Derechos Humanos resulta de la Carta de Naciones Unidas que es cierto que es un tratado multilateral, pero que lo es también la constitución de la comunidad internacional; de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Estos dos últimos instrumentos no son tratados, no son convenciones multilaterales, pero su obligatoriedad, hoy indiscutible, resulta de su carácter declarativo de obligaciones aceptadas por la comunidad internacional, a los niveles universal y regional. La idea de que solo establecen principios políticos u obligaciones morales y no deberes jurídicos, es algo ya obsoleto e inaceptable. Son documentos que cristalizan una obligatoriedad, emanada de los principios fundamentales que proclaman y de una aceptación general y reiterada, que se le ha dado fuerza consuetudinaria, como fuentes no convencionales de Derecho Internacional”.

forzada, por ello excluye cualquier norma o maniobra que pretenda dejar a los perpetradores sin la respectiva sanción, denotando los alcances de este crimen. (ii) También hay un parámetro relacionado con la iniciación del término para obtener las respectivas sentencias definitivas y lo constituye el día que se produce la desaparición. (iii) Reitera la necesidad de elaborar el contexto social, político, económico, etc., en el cual se desarrollaron los hechos en pro de avanzar en la definición de las líneas investigativas. (iv) Solicita aplicar el control convencional de las leyes nacionales, en este caso de una amnistía, porque es contraria a las normas de la Convención Americana, lo que implica que no pueda aplicarse, debiendo no surtir efectos jurídicos.

CASO GELMAN VS. URUGUAY (2011)²⁵²

Cuestionó la aplicación de la ley de caducidad adoptada en Uruguay, porque su aplicación ha afectado la obligación internacional del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos referidas a la desaparición forzada de María Claudia García y su hija, porque ha impedido que los familiares de las víctimas fueran oídos por un juez, determinando que la ley en sí no fue un obstáculo que impidió la investigación y eventual sanción de los responsables, sino que el Estado no atendió la necesidad de dejarla sin efecto. Concluyó que las investigaciones han sobrepasado cualquier parámetro de razonabilidad en la duración de los procedimientos, aunado a que, pese a que se trata de una desaparición forzada, no ha primado el principio de efectividad en la investigación de los hechos y en su caso sanción de los responsables, teniendo en cuenta únicamente el excesivo término en que las autoridades no han dado una respuesta definitiva y los obstáculos que hay frente a la ley de caducidad, para concluir que hubo violación del derecho al plazo razonable

Conclusiones. (i) Es importante que la Corte solamente tenga en cuenta el término transcurrido sin que se haya generado una respuesta definitiva para reconocer la vulneración, o sea, que no revise los criterios, sino que aplique su jurisprudencia respecto de que una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. (ii) También es importante que exige desconocer la ley de caducidad por parte de las autoridades en aplicación

²⁵² Sentencia de 24 de febrero de 2011. La Corte examinó las investigaciones que se adelantaron con respecto a la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman desde finales del año 1976, quien en ese momento se encontraba en avanzado estado de embarazo, quien habría dado luz a una niña, quien fue entregada a una familia uruguaya.

del control convencional de la misma frente a las normas de la Convención Americana. (iii) Es un caso en donde las autoridades son las responsables de la violación del derecho al plazo razonable porque no han conducido la investigación de manera eficaz; el direccionamiento no fue dirigido a la investigación y sanción de los responsables.

CASO TORRES MILLACURA Y OTROS VS. ARGENTINA (2011)²⁵³

La Corte reitera su jurisprudencia constante en torno a las obligaciones que tienen las autoridades en casos donde se presente una desaparición forzada de personas. Pese al reconocimiento de responsabilidad respecto a que el señor Torres Millacura fue víctima de desaparición forzada a manos de agentes del Estado, sustentó la necesidad de realizar un análisis abarcando el conjunto de los hechos, porque solo así se demuestra la violación compleja de derechos humanos, el carácter continuado o permanente del delito, los abusos policiales, a fin de analizar sus efectos prolongados en el tiempo y enfocar integralmente sus consecuencias. Por este motivo reitera nuevamente todos los compromisos y obligaciones del Estado en casos donde se investigue una desaparición forzada.

Hizo un análisis global y en conjunto de toda la actuación, lo que le permitió sustentar que las autoridades no emprendieron de manera pronta y efectiva la investigación relacionada con la detención y desaparición del señor Torres Millacura ni contra los presuntos responsables, existiendo por ende un retardo; de ahí que indicó que la investigación no ha sido llevada a cabo de forma diligente y dentro de un plazo razonable.

Las falencias anteriores consistieron en: (i) La omisión inicial en investigar la desaparición. (ii) Tampoco de manera pronta y efectiva las autoridades ordenaron las pruebas que permitieran la identificación de los responsables, a pesar de la información aportada por los familiares de la víctima, amigos y conocidos. (iii) El juez que conocía el caso retardó injustificadamente la investigación. (iv) Los testigos eran amenazados por los perpetradores de la desaparición y no se tomaron ningún tipo de medidas a su favor. (v) No se procuró establecer el paradero de la víctima pese a que era un delito de desaparición forzada.

²⁵³ Sentencia de 26 de agosto de 2011. Los hechos tienen relación con la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de Iván Eladio Torres Millacura, el 3 de octubre de 2003 en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, y la falta de investigación de estos hechos.

Conclusiones: (i) La Corte examinó los hechos a pesar del reconocimiento de responsabilidad del Estado por tratarse de un delito de desaparición forzada, pero también aprovechó esa revisión para denotar las falencias de las autoridades en busca de marcar pautas que generen en el futuro la no ocurrencia. (ii) La violación del derecho al plazo razonable es atribuido a las autoridades que desatendieron claros mandatos que le imponía la Convención Americana y que fueron descubiertos por la Corte.

CASO FORNERON E HIJA VS. ARGENTINA (2012)²⁵⁴

Examinados los hechos y los procedimientos que se llevaron a cabo para que el señor Fornerón pudiera recuperar a su hija, la Corte examinó ampliamente la Convención de los derechos de los niños, abordando posteriormente lo concerniente al plazo razonable. Reiteró que la falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales.

Respecto de la complejidad estimó que los procesos, a pesar de manejar temas relevantes y de cuidado, no eran complejos porque se trataba de la guarda de una niña que estaba siendo reclamada por su padre biológico y reclamando el establecimiento de un régimen de visitas para crear vínculos entre ambos; por ello, en su sentir, a pesar que esas cuestiones, si bien son de gran relevancia y requieren de un cuidado especial, están enmarcados en procesos que no presentan especiales complejidades y que no son inusuales para los Estados. Las actividades desplegadas por el quejoso no obstaculizaron los procesos; todo lo contrario colaboró para que se hubieran resuelto. Valoradas en su conjunto cada una de las actuaciones de las autoridades, la Corte concluyó que el retardo injustificado se debía atribuir a ellas, quienes tenían la responsabilidad de acelerar el procedimiento dado el deber de especial protección que deben brindar a la niña por su condición de menor de edad.

Las falencias de las autoridades estuvieron dadas en: (i) La demora del juez en solicitar una prueba de ADN. (ii) Requerir un informe pericial psicológico de la niña, el cual se recibió pasados dos meses, generando retrasos porque la sentencia de primera instancia fue revocada por estas fallas, con una demora de dos años para definir el derecho del señor Fornerón. (iii) En el proceso de regulación de las

²⁵⁴ Sentencia de 27 de abril de 2012. Los hechos se relacionan con la violación del derecho a la protección a la familia del señor Fornerón y de su hija biológica, porque la niña fue entregada por su madre a un matrimonio sin el consentimiento de su padre biológico y después de muchos años no ha logrado la protección judicial, existiendo un retardo injustificado para ello.

visitas del padre a la menor pasaron tres años para que un juez se declarara competente de conocer el asunto, (iv) Se demoraron más de un año para realizar una audiencia, (v) y más de diez años sin que se hubiera establecido un régimen de visitas.

Las justificaciones de las autoridades estuvieron dadas en la morosidad del poder judicial, situaciones que la Corte de manera reiterada ha descartado, acogiendo en ese aspecto la posición del TEDH respecto que no es posible alegar obstáculos internos, tales como falta de infraestructura o personal para conducir los procesos judiciales, para eximirse de una obligación internacional. En este caso la Corte tuvo en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, exigiendo en esos casos que el procedimiento avance con mayor diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve.

Concluyó, y este es un aspecto a tener en cuenta en este trabajo porque es una constante jurisprudencial, que (...) *La denegación del acceso a la justicia tiene una relación con la efectividad de los recursos, ya que no es posible afirmar que un recurso existente dentro del ordenamiento jurídico de un Estado, mediante el cual no se resuelve el litigio planteado por una demora injustificada en el procedimiento, pueda ser considerado como un recurso efectivo (...)*²⁵⁵

Conclusiones: (i) En esta sentencia la Corte destaca el valor superior de los derechos de los niños, lo que obligaba a que las autoridades definieran prontamente las investigaciones, máxime cuando se trataba de resolver aspectos sustanciales para su desarrollo tanto físico como psicológico, pero ello no fue observado. (ii) Las autoridades son las responsables de la violación del derecho al plazo razonable, situación que fue bien establecida por la Corte al relacionar cada una de las irregularidades que cometieron. (iii) La Corte hizo valer el cuarto criterio, en cuanto la violación del plazo afectaba la situación jurídica de la persona involucrada, reclamando diligencia y celeridad. (iv) Como punto importante a los fines de esta investigación, tendrá que valorarse que la Corte no justifica obstáculos internos, tales como la falta de infraestructura o de personal para conducir los procesos judiciales y así eximirse de una obligación internacional.

²⁵⁵ Párrafo 110.

CASO VÉLEZ RESTREPO Y FAMILIARES VS. COLOMBIA (2012)²⁵⁶

Colombia reconoció parcialmente su responsabilidad porque no existió una investigación seria que permitiera determinar y eventualmente sancionar penalmente a los presuntos autores de la agresión y las amenazas que sufrió la víctima, además de que hubo una violación del plazo razonable en la investigación que se seguía por el presunto intento de secuestro. La Corte, a pesar del reconocimiento de Colombia, determina que debe confrontar la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares del caso concreto, la actitud y posición de las partes, para de ser posible, precisar la verdad de lo ocurrido, y en este caso encontró que hay controversia respecto a una parte de los hechos.

Realizado el análisis global lo primero que criticó es que fuera la justicia militar la que realizara la investigación en primera instancia; por ello ratifica todo lo dicho en este tema respecto a la negativa de los tribunales militares como juez competente²⁵⁷. Evaluado el comportamiento de las autoridades comprobó que ninguna de las varias investigaciones fue adelantada de manera seria y responsable, por el contrario, advirtió falencias relacionadas con una debida diligencia, lo que implícitamente fue aceptado por el Estado, ya que éste es uno de los criterios para determinar la razonabilidad del plazo. Por tanto, para la Corte las investigaciones internas no constituyeron un recurso efectivo para garantizar el acceso a la justicia y la determinación de la verdad, la investigación y la sanción de los responsables y la reparación integral de las consecuencias de las violaciones.

Conclusiones: (i) Nuevamente reitera que la justicia militar no es competente para conocer casos de violaciones de derechos humanos porque no es el juez natural. (ii) La violación del derecho al plazo razonable es atribuido a las falencias de las autoridades al direccionar las investigaciones, pues no se desarrollaron de manera seria y responsable, sino que actuaron con negligencia.

²⁵⁶ Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Los hechos hacen referencia a la violación de los derechos a la libre expresión, intimidaciones personales e intento de secuestro que sufrió el señor Richard Vélez Restrepo por parte de agentes del Estado, en el momento que como reportero de televisión cubría unos desordenes públicos por parte de unos manifestantes, en donde quedó gravado el uso de la fuerza de militares. Por estos hechos recibió constantes amenazas de muerte, las cuales se hicieron extensivas a su familia, hasta fue objeto de un intento de secuestro.

²⁵⁷ “La Corte resalta que ha sido a través del análisis de los distintos casos contenciosos que le han sido sometidos a su conocimiento, que ha podido ir construyendo el criterio jurisprudencial restrictivo que está desarrollado actualmente de forma completa”. (...) Ello confirma lo indicado en el sentido de que la obligación de no juzgar violaciones de derechos humanos a través de la jurisdicción militar es una garantía del debido proceso que se deriva de las obligaciones mismas contenidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana”.

CASO MASACRE DE SANTO DOMINGO VS. COLOMBIA (2012)²⁵⁸

Hubo reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado respecto a la violación del artículo 8.1 de la Convención, al admitir que hubo algunas falencias probatorias en las investigaciones adelantadas; a pesar de eso la Corte lo tuvo como insubsistente, sin efectos jurídicos, porque el Estado no hizo un reconocimiento de los hechos presentados por la Comisión y las víctimas.

Así las cosas, revisó todo el procedimiento encontrando que la masacre fue inicialmente investigada ante el tribunal militar, retrasando el plazo, recordando su jurisprudencia en esa materia, respecto de que no son competentes los tribunales militares para conocer violaciones de derechos humanos, siendo importante el reconocimiento que hizo a la Corte Constitucional colombiana, en cuanto ordenó que la competencia para la investigación de esta masacre estuviera radicada en la justicia ordinaria.

Realizó el análisis global de las diligencias ante la justicia ordinaria, encontrando que desde que se iniciaron éstas han sido efectivas y numerosas, presentando resultados positivos en cuanto a los avances en la acusación y condena a tres agentes del Estado. No aceptó la posición de los representantes de víctimas con respecto a la violación de las garantías judiciales por una falta de investigación de otros posibles autores militares y la participación de empresas transnacionales, dado que no aportaron elementos de prueba que así lo determinara.

Revisó los criterios señalados en la jurisprudencia. Reconoció que el caso era complejo, principalmente por todos los aspectos técnicos que involucraba una investigación efectiva, así como por la pluralidad de víctimas y la cantidad de actores de la Fuerza Aérea Colombiana y del Ejército que tuvieron participación en ese contexto específico de conflicto armado en la zona. Admitió que la Fiscalía realizó numerosas diligencias de investigación que denotaban una actividad constante en el esclarecimiento de los hechos y direccionamiento de líneas lógicas de investigación, aunque estuviera pendiente de resultados. Indicó que las víctimas han intervenido activamente en la investigación. No evaluó el cuarto criterio

²⁵⁸ Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Los días 12 y 14 de diciembre de 1998 en Santo Domingo, resultaron muertas 17 personas, de las cuales 6 eran niños y niñas, y resultaron heridas 27 personas, entre ellas 10 niñas y niños. Como consecuencia de los hechos la población de Santo Domingo tuvo que abandonar sus residencias y movilizarse al corregimiento de Betoyes en el municipio de Tame, y a las ciudades de Tame y Saravena.

atendiendo las circunstancias del caso. Concluyó que las autoridades han cumplido y admitió que no ha sido demostrado que el Estado incurriera en violación del artículo 8 de la Convención por exceder el plazo razonable en las investigaciones. También valoró los avances en el proceso disciplinario, admitiendo que es una herramienta de corrección y control de los funcionarios públicos, que puede complementar pero no sustituir la jurisdicción penal en casos de graves violaciones de derechos humanos.

Conclusiones. (i) En este caso la Corte reconoció a favor de las autoridades que cuando el caso estuvo en la justicia ordinaria hubo un correcto direccionamiento de la investigación y se han dado resultados. (ii) No consideró el plazo total que tomó la investigación cuando estuvo en la justicia militar; muy por el contrario, en la sentencia tuvo en cuenta el tiempo que la actuación estuvo a cargo de las autoridades judiciales y que la dirección de la investigación ha sido seria, diligente, exhaustiva y en un plazo razonable. En este evento no indicó, como en otras sentencias, que mientras estuvo en la justicia penal militar hubo violación del derecho al plazo razonable. (iii) Como factor de complejidad tuvo en cuenta el relacionado con investigaciones donde están comprometidos agentes del Estado. (iv) Se destaca la trascendencia que la Corte le da al avance de los procesos disciplinarios porque sirve como medio para corregir y controlar a los funcionarios públicos, pudiendo complementar pero no sustituir la jurisdicción penal en casos de graves violaciones de derechos humanos.

CASO GARCÍA LUCERO Y OTRAS VS. CHILE (2013)²⁵⁹

Examinado el contexto verificó que los hechos ocurrieron cuando en Chile se presentaba graves y masivas violaciones de derechos humanos a raíz de la dictadura militar imperante. En este caso, no obstante que la víctima denunció el delito de tortura, las autoridades no iniciaron la respectiva investigación penal. De otra parte, en este caso la ley 2.191, ley de amnistía, no se aplicó porque como se indicó las autoridades no cumplieron la obligación de iniciar la respectiva acción penal. No obstante lo anterior, la Corte ratificó que su jurisprudencia relacionada

²⁵⁹ Sentencia de 28 de agosto de 2013. Los hechos se presentaron el 16 de septiembre de 1973, cuando el señor García Lucero fue detenido en Santiago de Chile. Fue mantenido incomunicado y sin cargos. Fue torturado de diversas maneras. En diciembre de 1973 fue trasladado al campo de concentración “Chacabuco”, ubicado en Antofagasta, donde permaneció recluso 13 meses. Después el señor García Lucero fue trasladado a Ritoque, y de allí a Tres Álamos, en donde estuvo detenido por tres meses.

con el caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile respecto que este decreto ley 2.191 carece de efectos jurídicos y no puede significar un impedimento para la investigación de los hechos respecto de este caso ni de otros que se presentaron en ese contexto de violencia en Chile.

Queda evidenciada la falta de investigación del delito de tortura, recordando la Corte toda la jurisprudencia respecto a este tema. Para tomar la decisión tuvo en cuenta la excesiva demora del Estado en iniciar una investigación desde la fecha en que tuvo conocimiento de los hechos de tortura.

Conclusión: No se evaluaron los criterios sino el excesivo término de las autoridades en iniciar la respectiva investigación penal.

CASO COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DESPLAZADAS DE LA CUENCA DEL RÍO CACARICA (OPERACIÓN GÉNESIS) VS. COLOMBIA (2013)²⁶⁰

La complejidad del caso se consideró en razón a la naturaleza del delito –un caso de desplazamiento forzado–, teniendo en cuenta la cantidad de derechos humanos que afecta o pone en riesgo, las circunstancias de especial vulnerabilidad e indefensión en que generalmente se encuentran los desplazados, que puede ser entendida como una condición de facto de desprotección.

El Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, porque existió una violación del plazo razonable sin que hasta el momento se haya podido determinar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de dichas conductas delictivas. No obstante lo anterior, la Corte hace una revisión de los criterios. Admite que se trata de un caso complejo donde tenía que considerarse una debida diligencia en los procesos dado el contexto en que ocurrieron, los patrones que explican su comisión, las omisiones en la práctica de las pruebas y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. Es importante para los fines del trabajo el llamamiento a los Estados Partes para que en aras de garantizar un debido proceso faciliten todos los medios necesarios

²⁶⁰ Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Los hechos se presentaron en el marco o desarrollo de la operación militar denominada “Génesis” llevada a cabo en febrero de 1997, así como de incursiones de grupos paramilitares o de Autodefensas Unidas de Colombia realizadas simultáneamente en la cuenca del Cacarica (llamada también operación “Cacarica”). Por ello se dieron desplazamientos forzados de comunidades afrodescendientes que han habitado ancestralmente territorios de la cuenca del Cacarica. También se presentó la muerte de Marino López.

para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas, de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso y evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.

Concede mucha importancia a los procedimientos en el ámbito disciplinario, al considerar que además de que pueden ayudar en el esclarecimiento de los hechos, es relevante por el valor simbólico del mensaje de reproche que puede significar ese tipo de sanciones para funcionarios públicos y miembros de instituciones públicas y a la protección de la función administrativa, ya que se orienta esencialmente a la corrección y control de los funcionarios públicos.

La Corte considera que el Estado es responsable por no haber actuado con la debida diligencia en las investigaciones en donde los actores eran integrantes de la fuerza pública y miembros de estructuras paramilitares, en violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las comunidades desplazadas del Cacarica por los hechos de febrero de 1997. Hace consideraciones sobre el plazo razonable respecto al criterio de complejidad, estableciendo que el caso es de una “enorme complejidad” teniendo en cuenta la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, las características del recurso consagradas en la legislación interna y el contexto en el que ocurrió la violación, así como la naturaleza de las acusaciones, el número de acusados y la situación política y social reinante en el lugar y tiempo de la ocurrencia de los hechos.

Conclusiones: (i) La Corte hace un importante estudio del delito de desplazamiento forzado, las implicaciones para el afectado y su condición de vulnerabilidad, lo que trae aparejado un trato diferencial. (ii) Nuevamente reitera la necesidad de establecer el contexto en que han ocurrido los hechos. (iii) Destaca la trascendencia de tomar correctivos disciplinarios en contra de los funcionarios que incumplen sus deberes como medida disuasiva y como herramienta que dinamiza la resolución pronta de las investigaciones. (iv) Reconoce que se conjugan varios factores que tornaron la investigación de una “enorme complejidad”, concepto éste que será tomado en cuenta para los fines de este trabajo.

CASO VELÁSQUEZ PAIZ Y OTROS VS. GUATEMALA (2015)²⁶¹

²⁶¹ Sentencia de 19 de noviembre de 2015. El día 12 de agosto de 2005, Claudina Isabel Velásquez Paiz no llegó a su casa y sus padres acudieron a denunciar su desaparición, pero no les recibieron

En este caso nuevamente recuerda la Corte que en casos de violencia contra la mujer las obligaciones generales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de Belém do Pará, porque en el artículo 7.b se obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar la normativa necesaria para investigar y sancionar la violencia contra la mujer, lo que significa que las autoridades deben iniciar *ex officio* y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva. De otra parte, el deber de investigar si el acto de agresión violento contra una mujer ha sido perpetrado por razón de género, especialmente cuando existen indicios concretos de violencia sexual de algún tipo o evidencias de ensañamiento contra el cuerpo de la mujer (por ejemplo, mutilaciones), o bien cuando dicho acto se enmarca dentro de un contexto de violencia contra la mujer que se da en un país o región determinada. Asimismo, la investigación penal debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género.

Por ello llamó la atención para que la investigación sobre un supuesto homicidio por razón de género no se limite a la muerte de la víctima, sino que debe examinar si hubo atentados contra la integridad personal, como torturas y actos de violencia sexual. Resaltó que en una investigación penal por violencia sexual es necesario que se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, la investigación inmediata del lugar de los hechos y el manejo correcto de la cadena de custodia. En relación con la escena del crimen los investigadores deben, como mínimo, fotografiar dicha escena, cualquier otra evidencia física y el cuerpo como se encontró y después de moverlo; todas las muestras de sangre, cabello, fibras, hilos u otras pistas deben ser recogidas y conservadas; examinar el área en busca de huellas de zapatos o cualquier otra que tenga naturaleza de evidencia, y hacer un informe detallando cualquier observación de la escena, las acciones de los investigadores y la disposición de toda la evidencia coleccionada.

la denuncia porque era necesario esperar 24 horas. A pesar del conocimiento por parte de las autoridades estatales de la existencia de un contexto de violencia contra las mujeres que la ubicaba en una clara situación de riesgo inminente, el Estado no adoptó medidas inmediatas y exhaustivas de búsqueda y protección a su favor durante las primeras horas tras tener conocimiento de la desaparición. El cuerpo sin vida de la presunta víctima fue encontrado al día siguiente con señales de haber sido sometida presuntamente a actos de extrema violencia, incluida violencia sexual.

En cuanto a las autopsias en un contexto de homicidio por razón de género se debe recolectar, como mínimo, información para identificar a la persona muerta, la hora, la fecha, causa y forma de muerte. Se deben respetar ciertas formalidades básicas, como indicar la fecha y hora de inicio y finalización, el lugar donde se realiza y el nombre del funcionario que la ejecuta. Asimismo, se debe, *inter alia*, fotografiar adecuadamente el cuerpo; tomar radiografías del cadáver, de su bolsa o envoltorio y, después de desvestirlo, documentar toda lesión. Se debe documentar la ausencia, soltura o daño de los dientes, así como cualquier trabajo dental, y examinar cuidadosamente las áreas genitales y para-genital en búsqueda de señales de abuso sexual, así como preservar líquido oral, vaginal y rectal, y vello externo y púbico de la víctima, aplicando los protocolos relacionados con muerte violenta. Asimismo, el Manual de Naciones Unidas indica que en los protocolos de autopsia se debe anotar la posición del cuerpo y sus condiciones, incluyendo si está tibio o frío, ligero o rígido; proteger las manos del cadáver, registrar la temperatura del ambiente y recoger cualquier insecto.

Cuando la Corte examinó los actos investigativos comprobó sustanciales fallas de las autoridades como son: (i) Falta de un registro policial sobre el hallazgo del cuerpo. (ii) Falta de investigación en los indicios de manipulación del cadáver (iii) Incorrecto manejo de la escena del crimen. (iv) Irregularidades en la documentación y preservación de la evidencia. (v) Falta de recaudación y preservación de evidencia. (vi) Irregularidades respecto a la práctica de la necropsia y su documentación. (vii) Irregularidades y falta de determinación de la hora de la muerte. (viii) Referencia a la víctima como “XX” en informes de investigación elaborados con posterioridad a su identificación. (ix) Irregularidades en el reconocimiento médico forense y su informe respectivo. (x) Falta de debida diligencia en relación con las líneas lógicas de investigación. (xi) Falta de diligencia en la recaudación y práctica de prueba. (xii) Las diligencias de investigación fueron tardías y repetitivas, afectando con ello los resultados de la misma y plazo razonable; por ese motivo transcurrieron más de 10 años y aún no se había determinado la verdad de lo ocurrido. (xiii). Hubo práctica de pruebas inconducentes. (xiv) No se tuvo en cuenta desarrollar la investigación con perspectiva de género atendiendo las obligaciones impuestas por la Convención de Belém do Pará. Por todas estas falencias consideró la Corte que se vulneró por parte de las autoridades el derecho al plazo razonable

Conclusiones: (i) En este caso la Corte detalla una a una las irregularidades cometidas por parte de las autoridades que generaron la violación del derecho al plazo razonable. (ii) Es muy importante la sentencia porque desarrolla un programa metodológico a las autoridades con relación a las muertes violentas de mujeres,

obligando a realizar las investigaciones bajo una perspectiva de género, lo que se traduce en una mayor efectividad del derecho. (iii) Delimita los compromisos para aplicar la Convención Belén Do Pará o Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. (iv) Llama la atención para eliminar los estereotipos cuando se investigan delitos donde las víctimas son mujeres.

CASO QUISPALAYA VILCAPOMA VS. PERÚ (2015)²⁶²

La Corte, al examinar el contexto en que se desarrollaron los hechos, no tuvo elementos para establecer la existencia de un patrón organizado o una política estatal de violencia, tortura y malos tratos contra reclutas del Ejército peruano, aunque sí determinó que esos comportamientos representan un contexto de maltratos físicos y psicológicos en el ámbito del servicio militar provenientes de una arraigada cultura de violencia y abusos en aplicación de la disciplina y la autoridad militar. Dado que se trata de un delito de tortura la Corte, además de indicar el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, denotó que la obligación de investigar se ve reforzada por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en la medida que esas disposiciones especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado relativas al respeto y garantía de los derechos consagrados en la Convención Americana, así como el *corpus iuris* internacional en materia de protección de la integridad personal.

La Corte analizó si la justicia penal militar podía investigar los hechos y al respecto concluyó que la circunstancia de que las personas comprometidas pertenecieran a las fuerzas armadas y que los sucesos hubieran ocurrido en instalaciones militares no significa que sean los competentes teniendo en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, dado que el fuero no se extiende para investigar, juzgar y sancionar autores de violaciones de derechos humanos; solo pueden juzgar a militares en servicio activo y por delitos o faltas que atenten contra el orden militar, con lo cual vulneró el principio del juez natural, al

²⁶² Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Los hechos se relacionan con la afectación a la integridad personal del señor Valdemir Quispialaya Vilcapoma, como consecuencia de un golpe en su frente y ojo derecho, recibido el 26 de enero de 2001, por parte de un Suboficial del Ejército Peruano, en respuesta a los errores que habría cometido el señor Quispialaya durante una práctica de tiro, mientras prestaba el servicio militar. Según la Comisión estos hechos respondieron a un presunto patrón de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que ocurrían al interior de las dependencias militares, originados en una arraigada y errónea interpretación de la disciplina militar, y a raíz de la denuncia recibió amenazas lo mismo que los testigos.

extralimitarse la esfera de la justicia castrense, constituyéndose en aquel momento en una violación del artículo 8.1 de la Convención, en relación con el deber de respetar y garantizar los derechos establecido en el artículo 1.1 de este instrumento.

Para la Corte la razonabilidad del plazo debe apreciarse en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos que pudieran eventualmente presentarse. El derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades penales en tiempo razonable, por lo que, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma una violación de las garantías judiciales.

En esta sentencia la Corte indicó que ha tenido en cuenta diversos criterios para determinar la complejidad del asunto; entre ellos, la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde el hecho violatorio, las características del recurso consagradas en la legislación interna y el contexto en el que ocurrió la violación. Trajo a colación los criterios del Tribunal Europeo, quien en ese sentido ha tomado la naturaleza de las acusaciones, el número de acusados y la situación política y social reinante en el lugar y tiempo de la ocurrencia de los hechos. Conforme al criterio de complejidad destacó que el caso no era complejo porque los medios probatorios no generaban dificultad, tuvieron lugar en una instalación del Ejército y la víctima recibió asistencia médica en hospitales públicos, así que la prueba se encontraba en poder del Estado. Los sucesos ocurrieron durante la práctica de tiro, en horas del día y donde participaban otras personas, así que hubo numerosos testigos que presenciaron la agresión sufrida por el señor Quispiala. Unido a ello, esta persona fue la única víctima y el Suboficial Hilaquita Quispe era el agresor identificado, pero no obstante estas circunstancias las investigaciones administrativas y penales después de 14 años no habían arrojado una decisión definitiva.

Destacó cuáles fueron esas falencias y están dadas en: (i) El período de inhibición de aproximadamente cinco años de la jurisdicción ordinaria para la investigación de los hechos en virtud de la atribución de competencia al fuero militar. (ii) La omisión de iniciar una investigación imparcial independiente y de oficio. (iii) La contienda de competencia entre los fueros militar y ordinario. (iv) La demora de aproximadamente un año en la remisión del expediente de una autoridad a otra. (v) La falta de diligencias por parte del Ministerio Público en constatar la lesión de la víctima. (vi) El archivo de las actuaciones por la falta de contacto con el señor

Quispialaya y de notificación a sus abogados. (vii) El transcurso de aproximadamente seis años y medio para que el Estado iniciara una nueva investigación.

La actividad procesal del interesado fue proactiva y no entorpeció el trabajo de las autoridades, sino que colaboró. Al evaluar el cuarto criterio consideró la Corte que no es necesario realizar el análisis del mismo para determinar la razonabilidad del plazo de las investigaciones aquí referidas, concluyendo que el Estado ha incurrido en una falta de razonabilidad del plazo para llevar a cabo una investigación independiente e imparcial, en violación del artículo 8.1 y 1.1 de la Convención.

Conclusiones: (i) La Corte estableció que los hechos ocurrieron en un contexto de maltratos físicos y psicológicos en el ámbito del servicio militar provenientes de una arraigada cultura de violencia y abusos en aplicación de la disciplina y la autoridad militar, pero a pesar de ello no consideró el caso complejo en atención a que los elementos de prueba estaban a disposición del Estado, porque se trataba de una sola víctima, un victimario, muchos testigos y sucedieron en un establecimiento del ejército. (ii) Clarifica la Corte que el solo hecho de que sucedan los hechos en un cantón militar, si no son hechos relacionados con el servicio militar, sino con violaciones de derechos humanos, activa la competencia de la justicia ordinaria, no de la militar. (iii) Establece cuáles son los elementos para determinar la complejidad del asunto que ha desarrollado en su jurisprudencia: a) la complejidad de la prueba, b) la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, c) el tiempo transcurrido desde el hecho violatorio, d) las características del recurso consagradas en la legislación interna y e) el contexto en el que ocurrió la violación. (iv) El tiempo transcurrido desde el hecho violatorio es un criterio que lleva a confusiones, pues no debería ser tenido en cuenta para establecer la complejidad del asunto, sino por el contrario para estimar la violación. (v) Las características del recurso consagradas en la legislación interna tampoco debe ser consideradas para evaluar la complejidad del asunto porque igualmente lleva a confusiones.

CASO HERRERA ESPINOZA Y OTROS VS. ECUADOR (2016)²⁶³

²⁶³ Sentencia 1 de septiembre de 2016. Los hechos se refieren a un operativo policial, denominado “Operación Linda”, donde se capturaron a varias personas comprometidos con el delito de tráfico de estupefacientes, dictándose prisión preventiva a los señores Herrera Espinoza, Jaramillo González, Revelles y Cano. A los días se practicaron otros operativos para capturar a otras personas, que se decía hacían parte de una organización criminal internacional, para un total de doce. Fueron

En esta jurisprudencia reciente la Corte Interamericana reiteró los criterios que ha tomado para considerar el plazo razonable, que están dados en: 1) la complejidad del asunto; 2) la actividad procesal del interesado; 3) la conducta de las autoridades judiciales, y 4) la afectación de la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Valorados todos ellos, la Corte encontró que el cuarto elemento es el que tiene especial relevancia, porque el señor Revelles permaneció un tiempo detenido de manera preventiva, más de cuatro años, circunstancia que imponía a las autoridades judiciales actuar con especial diligencia y premura, pero hubo una duración irrazonable de la prisión preventiva.

También tuvo en cuenta que el factor de complejidad, destacando que el proceso pudo presentar elementos de complejidad, pero el examen del proceso arrojó que las autoridades no llevaron a cabo *“acciones sustantivas de investigación o actos procesales que generasen la necesidad de una demora que excediera los plazos legalmente establecidos, pues de acuerdo a las normas procesales vigentes el proceso, hasta la sentencia condenatoria, debía durar un máximo de 180 días. Además, advierte que desde los primeros momentos del proceso se contaba con los elementos probatorios (el informe policial y la declaración preprocesal del señor Revelles) que se tuvieron en cuenta al dictar la sentencia condenatoria el 1 de abril de 1998, más de cuatro años después de iniciado el proceso. Finalmente, la Corte advierte que no consta actuaciones del señor Revelles tendientes a entorpecer el proceso”*.²⁶⁴ Concluyó estableciendo que las autoridades no actuaron en este caso con la celeridad y diligencia debida dentro de un plazo razonable, porque tardaron cuatro años y tres meses para dictar la sentencia condenatoria, generando el Estado la violación del artículo 8.1.

Conclusiones: (i) La Corte mantiene los criterios que a través de su jurisprudencia ha desarrollado para establecer la razonabilidad del plazo. (ii) Importante es que valoró el término que las leyes ecuatorianas han establecido en materia de libertad, para a partir de estos plazos determinar la razonabilidad o no del plazo.

sometidos a rendir indagatorias, las que fueron obtenidas de manera ilegal, por medio de coacción, porque previamente habían sido torturados por parte de los policiales cuando se encontraban detenidos en las dependencias policiales, para que se declararan culpables. El delito de tortura no fue objeto de investigación. Entre las violaciones alegadas, está el artículo 8.1 de la CADH.

²⁶⁴ Punto 205.

CAPITULO V

ANÁLISIS DEL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE DE ACUERDO A LAS SOLUCIONES DADAS POR LA CORTE INTERAMERICANA

Se debe comenzar por destacar la sentencia Velásquez Rodríguez Vs. Honduras²⁶⁵, porque a pesar del considerable tiempo transcurrido, la Corte no se detuvo en este caso a examinar la violación del plazo razonable por la desaparición del señor Manfredo Velásquez, pero es importante esta sentencia porque denotó la falta de voluntad del Estado para investigar a los agentes estatales comprometidos con la desaparición forzada, no sancionando por la violación del artículo 8.1, sino por las obligaciones contenidas en el artículo 1.1 de la Convención. No obstante, esta sentencia marcará la pauta en todo el desarrollo jurisprudencial, de ahí que es referenciada constantemente por parte de la Corte Interamericana.²⁶⁶

Es trascendental a los fines de este trabajo porque desde este primer caso Velásquez Vs. Honduras la Corte delimitó y precisó, cuál es su propio papel en el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que viene enmarcado por la protección de las víctimas, a efectos de que las autoridades dirijan su actividad a permitir que éstas conozcan la verdad del porqué se produjeron las violaciones de derechos humanos; que se investiguen y sancionen a los responsables y ordenar la reparación integral por los daños causados.

Esta primera delimitación es fundamental, dada su claridad respecto de que los derechos establecidos en la CADH comprenden a las víctimas, y para el tema de estudio, relacionado con el derecho al plazo razonable, que no solo ampara a la persona indiciada, acusada, sino que es igualmente aplicable a las víctimas, y está relacionado con la obligación que tienen las autoridades para investigar, juzgar y

²⁶⁵ Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988.

²⁶⁶ La Corte en el párrafo 166 de la sentencia de fondo caso *Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*, acude al principio general del derecho *iura novit curia*, utilizado reiteradamente por la jurisprudencia internacional, según el cual “el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente, pero en este caso pese a que lo invoca y que estableció las falencias del Estado de Honduras en no investigar la desaparición forzada ni a los agentes del estado responsables de esa violación, pasados más de siete años de esos hechos, no sancionó por la vulneración del plazo razonable”.

sancionar a los responsables, en un plazo razonable, conforme a los términos del artículo 8.1 de la Convención²⁶⁷.

La Corte deja de lado la vieja tendencia de los Estados Partes, donde las garantías procesales están dadas para las personas investigadas o acusadas de las violaciones, y la víctima se tenía únicamente vinculada con una pretensión económica.

Así las cosas, la Corte Interamericana desde esta sentencia demostrará su tendencia a resolver la tensión que se presenta entre la violación del derecho al plazo razonable, de un lado, y de otro lado, el derecho de acceso a la justicia, porque siempre demandará que se investiguen los hechos a pesar del tiempo transcurrido y, lo que es más importante aún, la sanción a los responsables de las violaciones de derechos humanos, reconociendo la gravedad de una gama de casos que llegaron a su conocimiento.

Para ello se sustentará en los artículos 1.1 y 2 de la Convención, de ahí que en su jurisprudencia reiterará una y otra vez las obligaciones contraídas por el Estado; las consecuencias que se derivan de ellas y cuándo se presenta una violación o no de la Convención²⁶⁸, de modo tal que en lo que atañe al derecho al

²⁶⁷ La Corte señaló en el *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Párrafos 164 a 177: “El Derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños que les hayan sido causados por los Estados responsables de tales acciones”. En otras decisiones precisó: “Esta garantía de protección de los derechos de los individuos no supone sólo el resguardo directo a la persona vulnerada sino, además, a los familiares, quienes por los acontecimientos y circunstancias particulares del caso, son quienes ejercen la reclamación en el orden interno. Al respecto, este Tribunal también ha señalado que “el artículo 8.1 de la Convención debe interpretarse de manera amplia de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de esa norma como en su espíritu”.

(...) El artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte. En efecto, dicho artículo pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención. La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. Como ya lo ha dicho la Corte en otra ocasión,... la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal.

La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparte la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

(...) La obligación a cargo de los Estados es, así, mucho más inmediata que la que resulta del artículo 2, que dice: Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

(...) Conforme al artículo 1.1 es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. En tal sentido, en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en ese artículo.

Esa conclusión es independiente de que el órgano o funcionario haya actuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordado los límites de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno.

El mencionado principio se adecua perfectamente a la naturaleza de la Convención, que se viola en toda situación en la cual el poder público sea utilizado para lesionar los derechos humanos en ella reconocidos. Si se considerara que no compromete al Estado quien se prevale del poder público para violar tales derechos a través de actos que desbordan su competencia o que son ilegales, se tornaría ilusorio el sistema de protección previsto en la Convención.

Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención.

Las infracciones a la Convención no pueden ser juzgadas aplicando reglas que tengan en cuenta elementos de naturaleza psicológica, orientados a calificar la culpabilidad individual de sus autores. A los efectos del análisis, es irrelevante la intención o motivación del agente que materialmente haya violado los derechos reconocidos por la Convención, hasta el punto que la infracción a la misma puede establecerse incluso si dicho agente no está individualmente identificado. Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente. En definitiva, de lo que

plazo razonable desarrollará esa obligación de investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención; restableciendo si es posible el derecho conculcado o reparando los daños causados por la violación, y además de ello comenzará a marcarle pautas a los funcionarios judiciales en torno a cómo se deben adelantar estas investigaciones, en especial cuando se trata de crímenes internacionales, como desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, delitos sexuales, desplazamiento forzado, especialmente cuando son cometidos en un contexto de violaciones sistemáticas y generalizadas.

se trata es de determinar si la violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de la Convención.

El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.

El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. No es posible hacer una enumeración detallada de esas medidas, que varían según el derecho de que se trate y según las condiciones propias de cada Estado Parte. Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado. Pero sí es obvio, en cambio, que el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales que impunemente practiquen la tortura y el asesinato representa, por sí mismo, una infracción al deber de prevención de violaciones a los derechos a la integridad física y a la vida, aun en el supuesto de que una persona dada no haya sufrido torturas o no haya sido ultimada, o si esos hechos no pueden demostrarse en el caso concreto.

El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención.

En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.

Desde esta sentencia, y en las futuras, indica las faltas en que incurren los funcionarios judiciales cuando se presentan omisiones, acciones dilatorias, retardos injustificados, que impiden el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado y en pro de la impunidad, y que vulnera el derecho al plazo razonable. Este desarrollo de la Corte es realmente significativo porque no solo detecta las fallas, sino que también presenta las soluciones para que en el futuro no se vuelvan a presentar, por ello es tan valiosa la jurisprudencia, enriquece y aporta avances que ante todo tienen en cuenta el papel de la víctima y sus familiares.

En esta sentencia y en las próximas sentará su jurisprudencia en torno a la prohibición que tienen los Estados de permitir la impunidad de las violaciones a la Convención Americana, y por ello afirma que en casos en que no se dé cumplimiento a esta obligación y la violación quede impune, y no se restablezca a la víctima, de ser posible, se ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.

No obstante lo anterior, admite que no siempre será fácil la labor de investigar y condenar a los responsables, pues habrá casos difíciles; a pesar de ello exige en esta sentencia y en su jurisprudencia unificada que esas investigaciones se emprendan con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa; asimismo, recordará a los Estados Partes que es un deber propio, que no depende de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios, sino que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.

Desde esta primera sentencia se indican las implicaciones, alcances, naturaleza y obligaciones en torno a las violaciones relacionadas con el delito de desaparición forzada, todo ello enfocado a que estas investigaciones penales sean dirigidas de oficio, con seriedad y compromiso, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrollan los hechos; para establecer si se trata o no de un contexto relacionado con prácticas sistemáticas y generalizadas de violaciones de derechos humanos.

El análisis del contexto sirve para definir la complejidad o no del asunto; que se puedan concretar claras líneas investigativas, para que en un plazo razonable se puedan investigar y sancionar a todos los responsables. Todos estos lineamientos de la Corte engrandecen su trabajo, y lo más importante es que de cumplirse con dichas pautas se podría augurar una investigación eficiente, y el cumplimiento de las garantías para indiciados o acusados, así como para las víctimas, de hacer exigibles sus derechos.

La pauta sobre los criterios que enmarcan la violación del derecho al plazo razonable fueron señalados por la Corte en la sentencia *Genie Lacayo Vs. Nicaragua*, año 1997²⁶⁹, que es la fecha en que realmente se produce una orientación clara y firme del Tribunal sobre el tema objeto de examen.

A partir de esta sentencia la Corte sustentará la violación del artículo 8.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, dado que este último contiene la obligación general de respetar la Convención relacionada con el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en este instrumento de derechos humanos, y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. Más adelante esta violación del artículo 8.1 estará interconectada con el artículo 25.1 de la Convención.

En la sentencia *Genie Lacayo* comienza el Tribunal por sustentar el primer problema jurídico que se le presenta para establecer la violación del artículo 8.1 de la Convención y tiene que ver con la definición de “*plazo razonable*”²⁷⁰. Determinó que éste no es un concepto de sencilla definición. Para precisarlo, dada la dificultad que existe, pues en la Convención, artículo 8.1, no se define ni se indica qué plazos tienen las autoridades para investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos, tomó los criterios establecidos por la Corte Europea de Derechos Humanos en varias de sus decisiones, y llegó a la conclusión de que el artículo 8 de la Convención Americana es equivalente en lo esencial al artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Los criterios tomados del TEDH para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso son: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) análisis global del procedimiento. Estos parámetros los aplicará en varias decisiones, aunque no en todos los casos.²⁷¹

²⁶⁹ Caso *Genie Lacayo Vs. Nicaragua*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997.

²⁷⁰ *Ibidem*, párrafo 77.

²⁷¹ Caso *Bayarri Vs. Argentina*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008, párrafo 107; caso *Ximenes Lopes Vs. Brasil*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006, párrafo 196; caso de la Masacre de Mapiripán *Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párrafo 217; caso *López Álvarez Vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006, párrafo 132; caso de las Masacres de Ituango *Vs. Colombia*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006, párrafos 285 a 325; caso de los 19 Comerciantes *Vs. Colombia*.

La Corte se orienta por el TEDH para establecer la violación del plazo razonable, aunque en algunas sentencias hace una salvedad para limitar la aplicación de estos criterios, al sustentar que (...) *para la Corte la pertinencia de aplicar esos tres criterios para determinar la razonabilidad del plazo de un proceso depende de las circunstancias de cada caso* (...) ²⁷²

En otras oportunidades no se refiere a estos criterios, y solo toma en cuenta el procedimiento seguido en la actuación judicial, o sea, el análisis global del procedimiento y con base en ese solo criterio define si hubo violación o no del plazo razonable ²⁷³, relacionado con examinar el proceso en su totalidad y revisar los plazos que tomaron las autoridades en cada etapa del mismo.

Debe destacarse que existen casos donde la demora tan prolongada en resolver el caso por parte de las autoridades, para la Corte ya es un factor para considerar de por sí la violación del plazo razonable, (...) *“una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales* (...)” ²⁷⁴; por ello en ocasiones hace un estudio global de todo el procedimiento de

Excepción Preliminar. Sentencia de 12 de junio de 2002, párrafos 190 a 194; caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006, párrafos 171 a 188; caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafos 102 a 110; caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007, párrafo 102; caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008, 179 párrafos 78 a 118; caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008, párrafos 172 a 181; caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, párrafos 149 a 159; caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008, párrafo 107.

²⁷² Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párrafos 218; caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006, párrafo 289; caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006, párr. 171; caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009, párrafo 156.

²⁷³ Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001, párrafo 48; caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006, párrafos 97, 98; caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011, párrafos 86 a 88; caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2011, párrafos 114 a 133.

²⁷⁴ Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001, párrafo 48; caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006, párrafos 97, 98; caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011, párrafos 86 a 88; caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2011, párrafos 114 a 133; caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.

las autoridades y en otros casos, a pesar de esa circunstancia, valora los criterios para establecer la razonabilidad o no del plazo²⁷⁵.

En cuanto al desarrollo de cada uno de estos criterios en muchos casos se asemeja al TEDH, y en otros, en mi concepto, su jurisprudencia, por estar relacionada con graves violaciones de derechos humanos, progresa más en beneficio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Miremos cómo ha desarrollado estos criterios.

5.1 Complejidad del asunto

La Corte no es unánime al definir los factores de complejidad, porque en ocasiones un caso lo considera complejo cuando no debería ser catalogado así, como ocurrió con el asunto de Genie Lacayo, en donde el factor de complejidad se enmarcó en la gran repercusión de la muerte del joven Genie Lacayo, pero este precedente no se tiene posteriormente en cuenta para esta clase de delitos, como sucedió con el homicidio de los señores Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras²⁷⁶; Baldeón García Vs. Perú, o en el caso de la muerte de Blanca Jeannette Kawas Fernández Vs. Honduras²⁷⁷.

Sentencia de fecha 15 de septiembre de 2005, párrafo 218; caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006, párrafo 171; caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párrafo 149.

²⁷⁵ Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004, párrafos 190 a 194; caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de fecha 4 de julio de 2006, párrafo 196; caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006, párrafos 171 a 188; caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006, párrafo 132; caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006, párrafos 285 a 325; caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafos 102 a 110; caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007, párrafo 102; caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008, párrafos 78 a 118; caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008, párrafos 172 a 181; caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, párrafos 149 a 159; caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008, párrafo 107.

²⁷⁶ Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de noviembre de 2003, párrafos 80 a 85.

²⁷⁷ Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006.

Debe señalarse que en el caso Genie Lacayo reconoce como factor de complejidad la violación al derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas con motivo del sufrimiento adicional que éstos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos”²⁷⁸, pero en el caso de Baldeón García²⁷⁹ y Juan Humberto Sánchez, a pesar que se trataba de muertes violentas, no le dio la misma connotación para considerar los casos como complejos, pese a que ambos se desarrollaron en un contexto de violaciones generalizadas y sistemáticas, que ha sido otro aspecto que ha tenido en cuenta la Corte para definir un asunto como complejo, pero señaló que no revestían complejidad²⁸⁰.

En el de Juan Humberto consideró que la causa no era compleja en el fondo y que así lo fuera no hubo prontitud de las autoridades”²⁸¹, y en el caso Baldeón García Vs. Perú la argumentación se basó en los antecedentes expuestos en el capítulo sobre hechos probados, así como en el allanamiento del Estado, para establecer que no es complejo”²⁸².

²⁷⁸ Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006, párrafo 128; caso de la “Masacre de Mapiripán”, párrafos. 144 y 146.

²⁷⁹ Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006, párrafo 129. El Tribunal ha valorado la gravedad de las circunstancias del presente caso, particularmente la forma en que fue llevada a cabo la detención, las torturas sufridas por el señor Bernabé Baldeón García durante su detención, el entierro de forma inmediata del cadáver de la víctima por parte de los efectivos militares que participaron en su muerte, la proximidad del vínculo afectivo de los familiares con el señor Bernabé Baldeón García, así como la obstrucción a los esfuerzos de dichos familiares por conocer la verdad de los hechos. Con base en dichas circunstancias, la Corte ha tenido por probado que los familiares de la víctima han padecido grandes sufrimientos e impotencia ante las autoridades estatales en detrimento de su integridad psíquica y moral, a raíz de la detención, torturas y posterior ejecución extrajudicial de la víctima.

²⁸⁰ (...) Por el contrario, en el caso en estudio ha quedado demostrado que la muerte del señor Juan Humberto Sánchez se encuadró dentro de un patrón de ejecuciones extrajudiciales (*supra* 70.1), las cuales se caracterizan por ir acompañadas a su vez de impunidad (*infra* 143), en la cual los recursos judiciales no son efectivos, las investigaciones judiciales tienen graves falencias y el transcurso del tiempo juega un papel fundamental en borrar todos los rastros del delito, haciéndose de esta manera ilusorio el derecho a la defensa y protección judicial en los términos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana”. *Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras*. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de fecha 26 de noviembre de 2003, párrafo 135.

²⁸¹ Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de noviembre de 2003, párrafo 130.

²⁸² Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006, párrafo 152.

En el caso de Caso Kawas Fernández Vs. Honduras²⁸³, pese a que se trató de un homicidio contra la presidenta de la Fundación “PROLANSATE”, organización creada con el objeto de mejorar la calidad de vida de los pobladores de las cuencas hidrográficas de la Bahía de Tela -Departamento de Atlántida, Honduras- su homicidio en este contexto tampoco fue determinante para estimar que el caso era complejo²⁸⁴, pues tuvo en cuenta que se trataba de una sola víctima, claramente identificada, y desde el inicio de la investigación surgieron indicios sobre la autoría del crimen.

Consecuente con ello, la primera crítica que se evidencia es la falta de unanimidad o uniformidad de la Corte Interamericana para fundamentar los factores relacionados con la complejidad de un asunto, lo que a la postre genera incertidumbre para los propios funcionarios judiciales que deben seguir su jurisprudencia y a la vez falta de coherencia en sus pronunciamientos al desatender sus propias líneas de fundamentación.

No obstante lo anterior, ya en el caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile²⁸⁵, la Corte avanza en su jurisprudencia, y a pesar de determinar que el caso era complejo, al examinar el contexto en que se desarrollaron los hechos llegó a la conclusión de que se presentó un delito de lesa humanidad, haciendo un valioso estudio que desde el punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos representa un avance muy significativo. Así debieron quedar enmarcados los homicidios de los señores Juan Humberto y Baldeón García, porque se dieron en un contexto similar.

Sobre la complejidad del asunto, tal como quedó establecido, la Corte no es muy uniforme, pues habrá decisiones en que no atiende su propia jurisprudencia, así que del desarrollo de ésta se extrae que la complejidad está dada por:

- a) Las repercusiones graves que genere un hecho
- b) Lo extenso de las investigaciones
- c) El número de pruebas a practicar y la dificultad de las mismas
- d) Los recursos interpuestos y las características del recurso consagradas en la legislación interna
- e) Clase de delito, número de delitos, naturaleza de los delitos
- f) Identificación; ubicación de la víctima; número de víctimas

²⁸³ Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009.

²⁸⁴ *Ibíd*em, párrafo 57.

²⁸⁵ Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006.

- g) Número de testigos
- h) Facilidad o no en la identificación de los responsables
- i) El contexto en que se desarrollaron los hechos, porque si se trata de un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, de manera generalizada y sistemática, se podrá catalogar como una investigación compleja²⁸⁶
- j) Participación de agentes del Estado
- k) Naturaleza de las acusaciones
- l) Asistencia jurídica entre Estados
- m) El tiempo transcurrido desde el hecho violatorio
- n) Las características del recurso consagradas en la legislación interna

²⁸⁶ Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005, párrafo 71; caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005, párrafo 162; caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párrafo 221; caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005, párrafo 167; caso de la Masacre de Pueblo Bello, párr. 170; caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006, párrafo 293; caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párrafo 149; caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007, párrafo 158; caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, párrafo 150; caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008, párrafo 156; caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009, párrafo 157; caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010, párrafo 166; caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Excepción Preliminar. Sentencia de 30 de noviembre de 2005, párrafo 197; caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006, párrafo 132; caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006, párrafo 133; caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 103; caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009, párrafo 113.

²⁸⁶ Caso Garibaldi Vs Brasil. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 134.

²⁸⁶ Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005, párrafo 71; caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005, párrafo 162; caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párrafo 221; caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006, párrafo 293; caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párrafo 149; caso Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007, párrafo 158; caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011, párrafo 150.

El criterio de la complejidad será muy sustancial a los efectos de este estudio porque marca el derrotero para que una investigación sobre violación de derechos humanos pueda resolverse de manera pronta o no, lo que a su vez significa que casos complejos necesariamente requieren más plazo para resolverse, con la finalidad de poder hacer efectivos los derechos de las víctimas, pues de tomarse un plazo extremadamente corto, podría significar una violación del plazo razonable, porque es muy seguro que por la complejidad del asunto, en un término tan limitado, no se harían realidad sus derechos de verdad, justicia y reparación integral y se propicia la impunidad para los perpetradores. Para los indiciados o acusados, también se puede traducir en una violación del derecho a su defensa, pues no podrán tener un plazo razonable para recoger los elementos probatorios para probar su inocencia.

Es relevante que en el caso de comunidades desplazadas del Cacarica Vs. Colombia admite que hay casos que verdaderamente son complejos, lo que significa que son de extrema complejidad, porque se conjugan muchos factores que la jurisprudencia considera que hacen complejo un asunto, así que cuando se evidencian, se califica el asunto como de una “enorme complejidad”. Por tanto, entre los planteamientos para avanzar en el cumplimiento del derecho al plazo razonable, surge la necesidad de consagrar un procedimiento especial a estas investigaciones de graves violaciones de derechos humanos respecto de aquellas investigaciones que no reúnen estas características.

Al igual que el TEDH dirige su jurisprudencia a valorar las situaciones que pueden generar complejidad del asunto, a enunciarlas, creando una casuística respecto de ese tópico, que pueden clasificarse como fácticas y jurídicas. Debe hacerse la misma observación en cuanto que la jurisprudencia enuncia los casos que pueden ser complejos y además no es uniforme, aunque como se ha indicado en el camino ha ido corrigiendo esas inexactitudes que confunden en la praxis judicial.

En el caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú la Corte señaló cuales eran los elementos para determinar la complejidad de un caso, concretándolos en: (i) La complejidad de la prueba. (ii) La pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas. (iii) El tiempo transcurrido desde el hecho violatorio. (iv) Las características del recurso consagradas en la legislación interna. (v) El contexto en el que ocurrió la violación. Con respecto a los mismos debería no ser factor de complejidad el tiempo transcurrido desde el hecho violatorio porque antes de caracterizar el asunto como complejo debería considerarse como una circunstancia para evaluar la violación del derecho al plazo razonable, dado que en toda legislación y con

fundamento en las exigencias del Convenio, y siendo consecuente con toda la jurisprudencia de la Corte, el Estado debe iniciar inmediatamente la investigación de los hechos que son violatorios de la Convención Americana.

Respecto del criterio relacionado con las características del recurso consagrado en la legislación interna tampoco debería ser considerado como un factor para evaluar la complejidad del caso. En este tópico la misma Corte destaca los criterios del TEDH para considerar la complejidad del asunto así: (i) La naturaleza de las acusaciones. (ii) El número de acusados. (iii) La situación política y social reinante en el lugar y (iv) tiempo de la ocurrencia de los hechos. De los mismos se evidencia que no se incluyen a) el tiempo transcurrido desde el hecho violatorio, (b) las características del recurso consagradas en la legislación interna, por lo que en ese sentido es más claro el TEDH, aunque debe criticársele que se incluya el tiempo de ocurrencia de los hechos como factor de complejidad, porque el mismo debe estar dado como un parámetro para comenzar a contabilizar los plazos, no como una situación que pueda generar complejidad.

5.2 Actividad del interesado

En lo que respecta a la actividad del interesado, siempre en este tema será uniforme la jurisprudencia, y está dada en:

a) Revisar si la actuación del afectado ha entorpecido la actividad de las autoridades, por lo cual examinará la proporcionalidad, racionalidad de los medios legales utilizados, y si se usaron para dilatar la investigación o no.

b) Si no ha obstaculizado la actividad judicial.

5.3 Conducta de las autoridades judiciales

Con el tercer criterio se podrá determinar que la Corte enriquece cada vez más su jurisprudencia y comienza a ser más rigurosa con las autoridades judiciales, lo que brilló por su ausencia en el caso Caballero Calderón.

Para estimar la razonabilidad, atendiendo la actividad de las autoridades, tendrá en cuenta las acciones y omisiones realizadas por ellas, como:

- a) Iniciación inmediata y de oficio de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos²⁸⁷. Es importante este aporte al evidenciarse que muchos casos de esta naturaleza no se iniciaron por parte de las autoridades por falta de la respectiva denuncia penal.
- b) La iniciación, aporte de pruebas y celeridad en la investigación no debe ser delegada en la víctima o sus familiares²⁸⁸. Este punto es trascendental porque la Corte hace ver todas las falencias de las autoridades, quienes la mayoría de las veces dejaron que los interesados fueran los encargados de aportar pruebas de responsabilidad, invirtiendo la carga de la prueba. Es un desatino muy común en muchos casos latinoamericanos y a través de la jurisprudencia se tendrá que corregir.

²⁸⁷ Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006, párrafo 118; caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010, párrafo 167; caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011, párrafo 135.

²⁸⁸ Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párrafo 219; caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006, párrafo 144; caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de fecha 6 de abril de 2006, párrafo 93; caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006, párrafo 296; caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006, párrafos 189 a 190; caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007, párrafo 111 a 113.

- c) La diligencia y razonabilidad²⁸⁹ en la conducción de las investigaciones de violaciones de derechos humanos. ²⁹⁰ Una circunstancia que también opera en Latinoamérica, y lastimosamente muchos casos no han sido resueltos por estas situaciones. La orientación de la jurisprudencia es una herramienta que de acogerse, especialmente en Colombia, arrojará excelentes resultados, sobre todo en materia de derechos humanos y de graves violaciones de ellos.

²⁸⁹ Por tanto, transcurrido poco más de tres años entre el desarrollo de los hechos, su investigación, la aplicación de la normativa vigente y la posterior determinación de dos responsables materiales en el caso, la Corte considera que en lo que atañe específicamente a dicho procedimiento, la actuación de las autoridades fiscales y judiciales del Estado colombiano resulta conforme con criterios de diligencia y razonabilidad". "De esta manera, y según el allanamiento parcial del Estado, la Corte observa que, si bien el proceso penal mediante el cual se condenó a dos autores de los hechos se llevó a cabo en un plazo razonable, se puede advertir la existencia de un retardo judicial injustificado en las investigaciones dirigidas a identificar a otros posibles autores de tales hechos." Aun teniendo en cuenta que tales procesos siguen abiertos, no se desprende del expediente ante la Corte que actualmente se esté investigando activamente la posibilidad de que, además de la participación de particulares, agentes estatales también hayan tenido alguna intervención en la planificación o ejecución de los hechos materia del presente caso. "Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Tribunal considera que si bien se han llevado a cabo investigaciones penales, como consecuencia de lo cual en algunas de ellas han sido condenados algunos particulares, subsiste una impunidad parcial en el presente caso, tal y como lo ha reconocido el Estado, en la medida en que no ha sido determinada toda la verdad de los hechos ni la totalidad de las responsabilidades por los mismos. Además, la impunidad se refleja en el juicio y condena en ausencia de paramilitares que se han visto beneficiados con la ineffectividad de la sanción por no haberse hecho efectivas las órdenes de captura libradas en su contra". *Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de fecha 27 de noviembre de 2008. párrafos 158, 159, 161-165.

²⁹⁰ Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004, párrafo 146; caso Huilca Tecse Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 03 de marzo de 2005, párrafo 79; caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párrafo 85.

- d) Prontitud, que no haya retardo²⁹¹, negligencia de las autoridades²⁹², con la finalidad de asegurar todos los elementos materiales probatorios, especialmente en casos de tortura, desapariciones forzadas, muertes violentas, violencia sexual, crímenes de género, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, etc.²⁹³ Este es un llamado constante de la Corte y muy significativo para que las autoridades comprendan los alcances y obligaciones en la investigación y esclarecimiento de estos crímenes en la comunidad internacional.
- e) Aplicación de protocolos; así, en caso de en ejecuciones extrajudiciales, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de las Naciones Unidas (Protocolo de Minnesota)²⁹⁴; en caso de tortura, el Manual para la investigación y

²⁹¹ Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005, párrafo 71; caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005; caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005, párrafos 106 a 108; caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005, párrafos 168 a 172; caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006, párrafo 308, 315, 316; caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafos 104 a 106; caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008, párrafos 114 a 117; caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009, párrafos 112 a 116; caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párrafo 245; caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010, párrafo 157; caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, párrafos 134 a 136; caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010, párrafo 190; caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2011, párrafos 114 a 133; caso Forneron e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012, párrafos 70 a 74.

²⁹² Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párrafo 228; caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006, párrafo 178; caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párrafos 151 a 154.

²⁹³ Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párrafo 227; caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006, párrafo 160; caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006, párrafo 385; caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párrafo 135; caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007, párrafos 155 a 158.

²⁹⁴ Manual Sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de las Naciones Unidas, Doc. E/ST/CSDHA/12 (1991).

documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul)²⁹⁵; en casos de violencia de género, se apliquen los protocolos por el personal de salud y el Ministerio Público²⁹⁶, y que se tenga en cuenta en casos de violaciones donde las víctimas sean mujeres una perspectiva de género y la obligación para que estos casos sean conocidos por personal especialmente capacitado; además, aplicar en esos casos las normas de la Convención de Belém Do Pará o Convención para la Prevención y Sanción de la Tortura y de la Violencia contra la Mujer, que complementan las normas de la Convención y son de obligatorio cumplimiento. Estas medidas solicitadas por la Corte contribuyen de manera eficaz en el avance y resultados de estas investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales, muertes violentas donde hay víctimas mujeres, de modo que lo trascendental es que estas directrices sean acogidas y aplicadas por las autoridades judiciales.

- f) Lo anterior se complementa con los principios mínimos que se deben tener en caso de muerte violenta, como son: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con su muerte, con el fin de ayudar en cualquier investigación; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, y se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados²⁹⁷. Dichas diligencias en muchos casos brillan por su ausencia, por tanto, este requerimiento tendrá que ser una constante en este tipo de investigaciones; el cumplimiento tiene que ser estricto.
- g) Verificar que las investigaciones hayan sido conducidas de manera seria, responsable, independiente e imparcial²⁹⁸. Ese aporte igualmente es de mucha

²⁹⁵ Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1999).

²⁹⁶ Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010, párrafo 181.

²⁹⁷ Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 julio de 2006, párrafos 179 a 190; caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006, párrafo 175, 177; caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, párrafo 502.

²⁹⁸ Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003, párrafo 126; caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003, párrafo 119; caso Ximenes Lopes

trascendencia en la investigación, no solo penal, sino civil, laboral, etc. La tarea de las autoridades es que estos postulados se cumplan a cabalidad, rigurosamente.

- h) Que los funcionarios hayan observado claras líneas investigativas, donde se haya atendido el contexto en que se desarrollaron los hechos²⁹⁹. Este desarrollo jurisprudencial marcará una pauta muy sustancial en el esclarecimiento de las graves violaciones de derechos humanos; por ello, se reclama que la ley lo prevea como obligatorio para el caso colombiano, como una propuesta para investigaciones de violaciones de derechos humanos y de investigaciones de graves violaciones de derechos humanos.
- i) Que las autoridades impidan las acciones dilatorias usadas por los defensores dirigidas a conseguir la impunidad³⁰⁰, porque esa acción omisiva es una carga negativa que la Corte aplica en contra del Estado Parte. El Tribunal en este aspecto deja ver los problemas dilatorios que se generan por la defensa, ya no encaminados a hacer uso de sus derechos, sino a entorpecer, dilatar, obstruir, sin que los funcionarios judiciales lo impidan. En este punto existen varias sentencias en donde reclama que el Estado tome medidas disciplinarias contra los funcionarios que permiten estas prácticas, o cuando los abogados ejecutan acciones u omisiones que finalmente permiten la impunidad o la vulneración del derecho al plazo razonable, deben las autoridades judiciales impedir dichas acciones u omisiones conforme a los poderes que le otorga la ley.

Vs. Brasil. Excepción Preliminar. Sentencia de 30 de noviembre de 2005, párrafo 179; caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006, párrafos 161 y 162; caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, párrafo 157; caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009, párrafo 140; caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010, párrafos 207 a 209; caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011, párrafo 155. Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011 párrafo 110.

²⁹⁹Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007, párrafos 158 a 164; caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, párrafos 455 a 460; caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 1 de septiembre de 2010, párrafo 174; caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011, párrafo 150 y 153; caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012, párrafo 226 a 237.

³⁰⁰ Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, párrafo 119; caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párrafo 207.

- j) El retardo injustificado debido a problemas de falta de personal para conducir los procesos judiciales³⁰¹. Esta justificación se toma negativamente porque no lo exime del cumplimiento de las obligaciones internacionales establecidas en la Convención y adquiridas por el Estado Parte³⁰². Con respecto a este tema habrá que anotar igualmente que es muy importante que la Corte visibilice la problemática de la justicia, los problemas estructurales que tiene y la obligación del Estado Parte en tomar las medidas para resolverlos, porque de lo contrario el derecho al plazo razonable pierde efectividad si los funcionarios judiciales no pueden resolver los asuntos por la cantidad de investigaciones que tienen a su conocimiento, o por otras causas relacionadas con personal o logísticas.
- k) Irregularidades cometidas en el desarrollo del proceso penal relacionadas con nulidades al debido proceso; el abuso de los impedimentos; obstáculos en el procedimiento, etc.³⁰³ Esas fallas son otra constante en las investigaciones y constituyen una forma de dilatar la investigación para no asumir su definición, por esto es muy trascendente que la Corte destaque este factor, que ha de ser remediado por la judicatura a través de sanciones disciplinarias.
- l) Exige a las autoridades judiciales aplicar el control convencional, según el cual, los funcionarios judiciales no pueden aplicar leyes contrarias a la Convención Americana, relacionadas con amnistías, indultos, prescripción, que comprendan graves violaciones de derechos humanos³⁰⁴. Ese control de convencional será

³⁰¹ Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009, párrafo 136; caso Aritz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008, párrafo 180. Caso Forneron e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012, párrafo 74.

³⁰² Como punto importante a los fines de esta investigación, tendrá que valorarse un aspecto que es reiterado por la jurisprudencia de la Corte, cual es (...) esta Corte ha establecido que no es posible alegar obstáculos internos, tales como la falta de infraestructura o personal para conducir los procesos judiciales para eximirse de una obligación internacional(...) Se apoyó la Corte en pronunciamientos del Tribunal Europeo, al sustentar (...) En similar sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que una sobrecarga crónica de casos pendientes no es una justificación válida del retraso excesivo (...) Caso Forneron e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012, párrafo 74.

³⁰³ Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006, párrafo 135; caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009 párrafos 137 a 141.

³⁰⁴ Como la Corte ha indicado una y otra vez, son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas. Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado

una herramienta que deben usar los funcionarios contra los actos del ejecutivo y legislativo, en aras de hacer prevalecer esas obligaciones internacionales en este tipo de criminalidad frente a decisiones contrarias a la Convención.

- m) Obstaculización de las autoridades en el desarrollo de la investigación³⁰⁵. Bien evidenciadas quedan esas fallas por parte de autoridades que tienen que prestar sus servicios a los funcionarios judiciales, como peritos, testigos, etc., por ello es importante conocerlas para impedir las en la praxis judicial.
- n) Tolerancia o retardo por parte de los tribunales al momento de tramitar los recursos³⁰⁶. Esa falencia de las instancias superiores es un llamado para que se corrija pues todos los funcionarios tienen las mismas obligaciones de hacer valer el derecho al plazo razonable en todas las etapas de la investigación.
- o) Falta de voluntad y desinterés de las autoridades³⁰⁷. La Corte destaca este punto y es muy importante porque aplica especialmente en casos de graves

internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. El Poder Judicial, en tal sentido, está internacionalmente obligado a ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010, párrafo 171 entre otros.

³⁰⁵ Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párrafos 149, 150; caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007, párrafo 157.

³⁰⁶ “tolerancia por parte de los tribunales al momento de tramitar los recursos, permitido el uso abusivo del amparo como práctica dilatoria en el proceso, así que transcurridos más de 15 años de iniciado el proceso penal y 27 años de ocurridos los hechos, se encuentra aún en la etapa inicial, en perjuicio de los derechos de las víctimas a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y eventualmente se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones”. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009, párrafos 120 a 124.

³⁰⁷ “El actuar de la judicatura del Estado y la falta de voluntad y desinterés de las autoridades han impedido el acceso a la justicia de las víctimas, y convertido el aparato judicial en un sistema indiferente ante la impunidad” Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009, párrafo 153.

violaciones de derechos humanos en donde la mayoría de veces están comprometidos agentes del Estado.

5.4 Análisis global del procedimiento

También a partir de la sentencia *Genie Lacayo Vs. Nicaragua* la Corte examina todo el procedimiento, para determinar la razonabilidad del plazo en todo su trámite³⁰⁸, y es igualmente aplicado por el Tribunal europeo, lo que es conocido como análisis global del procedimiento.

La revisión de todo el procedimiento se ha constituido como una herramienta muy trascendental para el desarrollo del DIDH en pro de las víctimas, dado que la Corte hará un examen integral de toda la actuación para establecer si se ajustó a los estándares internacionales, a los efectos de determinar si la integralidad de los procedimientos estuvo conforme a las disposiciones internacionales.

La Corte hace importantes estudios y avances, especialmente en delitos considerados como crímenes internacionales, como tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, homicidio, delitos sexuales, desplazamiento forzado, en la medida que va direccionando a las autoridades judiciales y de policía para que apliquen protocolos internacionales de manera inmediata, seria, responsable, desde el mismo momento de la comisión de la conducta delictiva, y a definir líneas investigativas de acuerdo al contexto, etc. Por ello ese análisis global ha permitido que la Corte destaque una y otra vez cómo deben desarrollarse investigaciones de graves violaciones de derechos humanos, y de contera exija la aplicación de protocolos, estudio del contexto, que aplicados todos en su conjunto facilitan la investigación, y que en un plazo razonable se dicte sentencia en firme contra los responsables.

5.5 Afectación de la persona involucrada en el proceso

³⁰⁸ “Adicionalmente al estudio de las eventuales demoras en las diversas etapas del proceso, la Corte Europea ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo en el conjunto de su trámite lo que llama “*análisis global del procedimiento*” (*Motta, supra* 77, párr. 24; Eur. Court H.R., *Vernillo* judgment of 20 February 1991, Series A no. 198 y Eur. Court H.R., *Unión Alimentaria Sanders S.A.* judgment of 7 July 1989, Series A, no. 157). Caso *Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 81.

Desde el caso Jaramillo Valle Vs. Colombia³⁰⁹ aplica un criterio que suma a los criterios tomados del TEDH, como son: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; d) análisis global, y e) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso³¹⁰. De presentarse la última situación la Corte reclama que, si el tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve.

Este nuevo criterio que desarrolló la Corte complementa los anteriores y permite afianzar más la garantía que la CIDH ha generado a través de su jurisprudencia en pro de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, de tal modo que representa una evolución muy significativa para éstos, evidenciando que el tiempo excesivo que por lo general toman las investigaciones de violaciones de derechos humanos, va en contra de los derechos de las víctimas en conocer la verdad, obtener la justicia y hacer realidad una reparación integral.

5.6 Efectividad de las investigaciones

Otro criterio desarrollado por la CIDH, a partir del caso Mapiripan Vs. Colombia³¹¹, es el relacionado con la efectividad de las investigaciones, hecho que tiene incidencia en el momento de valorar si el plazo ha sido razonable o no³¹². Por

³⁰⁹ Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008.

³¹⁰ Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008, párrafo 155; caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009, párrafo 112; caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009, párrafos 156 a 157; Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009, párrafos 113 a 141; caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párrafo 244; caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, párrafos 133 a 136; caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012, párrafo 255; caso Forneron e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012; párrafos 68 a 110; caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012, párrafos 255.

³¹¹ Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005.

³¹² “Si bien han transcurrido más de ocho años desde que sucedieron los hechos, el proceso penal permanece abierto y, a pesar de las dilaciones señaladas, ha producido ciertos resultados que deben ser tomados en cuenta. En razón de ello, la Corte estima que, más que con base en un análisis

tanto, el análisis sobre la violación del plazo razonable gira en torno a la efectividad en los resultados arrojados en el proceso penal frente a los derechos de las víctimas para conocer la verdad, obtener justicia y reparación integral, para lo cual tendrá en cuenta el contexto; el aspecto fáctico; desarrollo de las actividades judiciales; líneas investigativas y los resultados obtenidos por las autoridades, en especial si los perpetradores han sido sancionados o no, máxime cuando hay agentes del Estado involucrados, y si la sentencia es firme³¹³.

Es un criterio que constituye una pauta de progreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dado que la Corte reclama efectividad en las investigaciones y hacia allá tienen que orientar las autoridades su actuación, por lo cual desde el inicio de las investigaciones se tendrán que desarrollar todas las directrices encaminadas a resolver los casos de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas el estudio del contexto, aplicación de los protocolos, definición de las líneas investigativas, aplicación de perspectiva de género etc.

5.7 Conclusiones importantes para los fines de este trabajo teniendo en cuenta las soluciones dadas por la CIDH

Como ha quedado indicado la Corte Interamericana toma todos los criterios fijados por el TEDH para hacer el respectivo análisis de la violación del derecho al plazo razonable. Desarrolla la afectación que el transcurso del tiempo causa en el interesado, exigiendo en esos eventos mayor celeridad en la definición del caso mediante una sentencia definitiva. Otros avances que sirven para revisar si se ha vulnerado el derecho o no al plazo razonable son los de la efectividad de las investigaciones. Y suma otro factor, pues para la Corte Interamericana el excesivo lapso del tiempo de por sí puede significar la violación del plazo razonable.

acerca de la razonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la responsabilidad del Estado a la luz de los artículos 8.1 y 25 de la Convención debe ser establecida mediante una evaluación del desarrollo y los resultados del proceso penal, es decir, de la efectividad del deber de investigar los hechos para la determinación de la verdad de lo sucedido, la sanción de los responsables y la reparación de las violaciones cometidas en perjuicio de las víctimas”. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párrafo 222 a 241.

³¹³Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006, párrafos 187, 188, 211 a 212.; caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006, párrafo 293, 315 a 325; caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007, párrafos 155 a 157; caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párrafo 202.

En lo relacionado con la complejidad hay un aspecto que permitirá determinar que los casos de graves violaciones de derechos humanos son complejos y, si se conjugan muchos factores señalados por la jurisprudencia, estamos ante un caso de “enorme complejidad”, aspecto relevante para significar que este tipo de investigación tiene que orientarse de un modo diferente, lo que de antemano implica consagrar plazos más amplios y con posibilidad de prorrogarlos, si se atiende esta jurisprudencia. En ese punto se reitera que lo importante no es que el caso se resuelva en un corto plazo, porque puede suceder que los sujetos procesales no dispongan del tiempo suficiente para hacer efectivos sus derechos, así que el plazo debe garantizar que se cumplan varios derechos, de una parte, a las personas sometidas como presuntos responsables, pero también los derechos de las víctimas, especialmente en estos delitos.

De igual manera, la efectividad de las investigaciones será un parámetro destacable y aplicable, pues siempre marcará las pautas que deben orientar este tipo de investigaciones de graves violaciones de derechos humanos, todo ello direccionado a obtener una sentencia condenatoria en contra de los perpetradores, para de esta manera hacer efectivos los derechos de las víctimas.

Se tendrá también que aceptar que el análisis del contexto en que se desarrollaron los hechos puede marcar la complejidad, pero que debe ser una exigencia o presupuesto para dirigir las investigaciones, en especial las de graves violaciones de derechos humanos, porque conduce a que las autoridades, partiendo de ese presupuesto, aseguren lo siguiente: (i) La eficacia de la investigación, ya que se direccionará principalmente hacia los máximos responsables, comprendiendo entre ellos a los agentes del Estado y a todas las personas que hayan tenido una participación en los hechos. (ii) De otra parte, el cumplimiento del derecho al plazo razonable, porque trazará las líneas investigativas que se deben ejecutar, los protocolos que deben aplicarse, los instrumentos internacionales, etc., significando que el funcionario tendrá claridad en el trabajo de investigación que debe desarrollar y no como sucede en la práctica en que generalmente se ordenan actos investigativos impertinentes, inconducentes o inútiles. Por consiguiente, el contexto que se elabora para investigaciones de graves violaciones de derechos humanos será un factor que marcará la complejidad del caso, pero también permitirá que la investigación cumpla las obligaciones señaladas por el Convenio, por ello se toma como una propuesta para que estas situaciones se prevean en los procedimientos relacionados con violaciones de derechos humanos y de graves violaciones de derechos humanos, ya que si el direccionamiento es claro y bien definido la investigación se resolverá en un plazo razonable.

Así pues, puede indicarse que el contexto en el cual se desarrollaron las violaciones de derechos humanos marcará siempre una pauta muy sustancial para la efectividad del derecho al plazo razonable, en la medida en que permitirá definir si la investigación es compleja o no; las líneas investigativas a definir y aplicar por las autoridades judiciales; la efectividad de las investigaciones; si se trata de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos; las pruebas a practicar, etc.³¹⁴ Así las cosas, este criterio debemos tenerlo como un aporte muy valioso en pro de hacer efectivas estas investigaciones en un plazo razonable.

³¹⁴ La Directiva 01 del 4 de octubre de 2012 expedida por el Fiscal Eduardo Montealegre, en Colombia, recogió los criterios fijados por la CIDH respecto a la forma de investigar, por constituir un “criterio relevante de interpretación” en aras de obtener resultados y eficacia en las investigaciones, especialmente relacionadas con graves violaciones de derechos humanos, por ello adoptó unos criterios de priorización de situaciones y casos. En mi sentir es una muy buena herramienta de trabajo, que aplicada demuestra su efectividad, en la medida que se ha usado para combatir el crimen organizado, conocido como Bacrim, luego de la desmovilización de las autodefensas, pues ha logrado la desarticulación de grandes estructuras criminales como Rastrojos (que era la más grande del país, hoy con muy pocas personas en su interior), Los Rolos, Cordillera, Erpac, entre otros. La dificultad ha estado en que todos los funcionarios no la aplican, existiendo resistencia al cambio de la mayoría de los funcionarios, siendo por tanto una tarea de la Fiscalía que se conozca y aplique esta directiva.

En principio delimita conceptos importantes a tener en cuenta para estos fines. Así se define el análisis como el estudio sistemático e interdisciplinario del delito y de los factores problemáticos que alteran la convivencia social e interesan a la investigación (sociodemográficos, espaciales y temporales, entre otros) para apoyar la función constitucional asignada a la Fiscalía General de la Nación y propender por la garantía de los derechos fundamentales de las víctimas de verdad, justicia y reparación y la garantía de no repetición. Se ilustra el plan criminal como una situación fáctica representativa de los patrones de conducta delictiva característicos de determinada organización criminal, por ello para ello considera que se debe: (i) construir el respectivo contexto; (ii) acumular las actuaciones a cargo de la Fiscalía General que evidencien la existencia de la organización criminal y la ejecución de conductas ilícitas que le puedan ser atribuidas a sus presuntos miembros, se trate o no de la misma clase de delito; (iii) emplear los esquemas de imputación penal que resulten legalmente idóneos para investigar, y acusar a los presuntos máximos responsables, colaboradores y financiadores.

Otro concepto es el de caso priorizado no imputable a una organización delictiva, conducta punible cuya realización no corresponde al accionar de una organización delictiva, pero que presenta un elevado impacto social, tomando en consideración su gravedad en términos de afectación de los derechos fundamentales de la víctima, de los bienes jurídicamente amparados o igualmente su capacidad para develar la existencia de patrones culturales discriminatorios. En cuanto al contexto se define: marco de referencia contentivo de aspectos esenciales, acerca de elementos de orden geográfico, político, económico, histórico y social, en el cual se han perpetrado delitos por parte de grupos criminales, incluidos aquellos en los que servidores públicos y particulares colaboran con aquellos. Debe igualmente comprender una descripción de la estrategia de la organización delictiva, sus dinámicas regionales, aspectos logísticos esenciales, redes de comunicaciones y mantenimiento de las redes de apoyo, entre otros. No bastará con la descripción de la estructura criminal o una enunciación de sus víctimas, sino que se deberá analizar su funcionamiento.

Otro concepto es el criterio de priorización. Es el parámetro lógico que sirve para focalizar la acción investigativa de la Fiscalía General hacia determinadas situaciones y casos, con el fin de asegurar un mayor impacto y un mejor aprovechamiento de los recursos administrativos y logísticos. En cuanto

En consecuencia, la jurisprudencia uniforme y constante de la Corte sobre este punto tiene que ser atendida por las autoridades desde el inicio de la investigación, y en todo el desarrollo de la misma éstas tendrán que estar atentas al contexto de los hechos para hacer efectivo el derecho a ser oído en un plazo razonable.

En líneas anteriores ya quedó establecido que para la Corte no es fácil definir el concepto de plazo razonable, y que en virtud a ello acude a varios criterios establecidos por el TEDH, para así poder determinar cuándo hay violación o no de este derecho, agregando otros aspectos como es la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso y la efectividad de las investigaciones.

a la política de priorización, la concibe como las directrices y orientaciones encaminadas a introducir un cambio en la manera de cumplir las obligaciones constitucionales y legales a cargo de la Fiscalía General que maximice el uso de la información y los recursos a su cargo. Respecto a los Fines de la priorización, los define como la política de priorización que busca alcanzar los siguientes fines: 1. Seguridad ciudadana, permitiendo asociar casos a partir de elementos comunes, combatiendo de manera eficaz la criminalidad organizada. 2. Conocimiento del contexto de conflicto armado. Facilita la construcción de los escenarios delictivos en todas sus dimensiones y abordar de esa manera los procesos de justicia transicional. 3. Legitimidad y eficacia en la administración de justicia. La racionalización de los recursos de la Fiscalía General permitiendo que se administre justicia con eficacia y transparencia hacia la ciudadanía, lo que a su vez posibilita reducir la impunidad. 4. Atender exigencias de la sociedad civil. Los representantes de los distintos sectores de la sociedad han planteado la necesidad de estudiar la criminalidad en su contexto, para así desarticular de manera más efectiva a los grupos que vulneran gravemente los derechos humanos y que atentan contra sus defensores y defensoras. Estos criterios bajo ninguna circunstancia serán interpretados y aplicados como meros instrumentos de descongestión judicial. Define al Máximo Responsable, determinando que este concepto se aplica respecto a dos categorías diferentes, (i) aquel que dentro de la estructura de mando y control de la organización delictiva sabía o podía prever razonablemente la perpetración de crímenes en desarrollo de la ejecución de planes operativos; y (ii) de manera excepcional, se trata de aquellas personas que han cometido delitos particularmente notorios, con independencia de la posición que ocupaban en la organización delictiva. Patrones Criminales. Es el conjunto de actividades, medios logísticos, de comunicación y modus operandi delictivo, desarrollados en un área y periodo de tiempo determinados, de los cuales se puede extraer conclusiones respecto a los diversos niveles de mando y control de la organización criminal. Su determinación ayuda a establecer el grado de responsabilidad penal de sus integrantes y hace parte fundamental de la construcción del contexto. Priorizar. Es la técnica de gestión de la investigación penal que permite establecer un orden de atención entre los reclamos ciudadanos de justicia equivalentes, con el fin de garantizar, en la mayor medida posible, el goce del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. De manera alguna la priorización equivalente a una extinción de la acción penal en relación con los casos no priorizados o una renuncia al deber de investigar y sancionar las conductas delictivas. Regla de Priorización. Significa que bajo ninguna circunstancia la viabilidad probatoria del caso podrá ser el único criterio que justifique su priorización. Situación Priorizable. Conjunto de casos con elementos comunes sin que necesariamente se confunda con la existencia de los fenómenos dogmáticos del derecho penal tales como los delitos masa o las necesarias conexidades procesales que se presentan. Test de Priorización. Juicio que permite realizar una ponderación entre los diversos criterios de priorización a efectos de recomendar o decidir sobre una situación o caso.

También se agrega a estos presupuestos otra circunstancia que también el Tribunal ha considerado para establecer la violación del derecho al plazo razonable, y está dada por la demora prolongada, que puede llegar a constituir por sí misma, en ciertos casos, una violación de las garantías judiciales³¹⁵.

Valorando todas las circunstancias apreciadas por la Corte, podría traducirse que el concepto de plazo razonable se ajusta en materia penal a la adopción de una sentencia definitiva o en firme contra el responsable(s) de las violaciones de derechos humanos, para así satisfacer los derechos de las víctimas y/o familiares de conocer la verdad de lo que sucedió y la sanción a los responsables, dando efectividad al derecho señalado en la Convención Americana de ser oídas en un plazo adecuado, justo, de conformidad con las complejidades del caso, y dentro de ese plazo las autoridades lo han debido resolver de manera definitiva, lo que supone la posibilidad de acceder a la justicia e interponer los recursos de ley.

La Corte Interamericana no determinó en sus resoluciones un tiempo preciso para finalizar una investigación penal, menos de violaciones de derechos humanos, y en especial aquellas que tratan sobre graves violaciones y que comprenden crímenes internacionales; por tanto, el término para que el plazo sea razonable o no está dado en cada caso, y para ello se evaluará principalmente la complejidad del asunto; de ahí que en un momento dado en un caso sencillo se puede actuar con más prontitud, pero un caso complejo no es razonable terminarlo o concluirlo en un plazo corto, en la medida en que no se permite al funcionario resolverlo conforme a todos los estándares internacionales y los parámetros fijados por la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana.

Podemos concluir que igualmente para la Corte el derecho no se traduce en la celeridad y prontitud de los plazos, sino en la efectividad y conducción de las investigaciones, especialmente en los casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos.

Al igual que el TEDH, y claro está por seguir sus orientaciones, no aporta la Corte Interamericana cuáles son los casos específicos relacionados con la complejidad del asunto; no hay una lista taxativa, sino que dependerán del estudio

³¹⁵ Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004, párrafo 191; caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005, párrafo 69; caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 86; caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006, párrafo 97; caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006, párrafo 153.

de cada caso. Lo mismo debemos indicar respecto a los presupuestos relacionados con la actividad del interesado y la actividad de las autoridades.

Para la Corte el plazo razonable en materia penal es un derecho que protege tanto al perpetrador como a la víctima, estableciéndose unas pautas o límites relacionados con el plazo en que tiene que resolverse de manera definitiva una investigación sobre violación de derechos humanos, con una sentencia definitiva o en firme, contra los responsables del crimen, pero no dice cuál debe ser el plazo o si se deben establecer plazos por el Estado para garantizar el derecho, de modo que sigue creando la misma incertidumbre que el TEDH, porque todo queda supeditado al análisis muy subjetivo de un funcionario judicial o de un tribunal al aplicar los criterios, aunque se le abona a la Corte que en ocasiones reconoce que los plazos que se han estipulado en la respectiva normatividad no se han cumplido.

Puntualiza en su jurisprudencia que el principio del plazo razonable forma parte del debido proceso, incurriendo en ocasiones en confusiones sobre los conceptos: principios y derecho, aduciendo que así es porque es una de las garantías previstas en el artículo 8 de la Convención Americana³¹⁶.

La Corte marca a los funcionarios pautas, derroteros para que se respete el derecho al plazo razonable y se haga válido en la actuación penal, de dar cumplimiento a lo siguiente: (i) Iniciación de oficio de la actuación. (ii) Inmediatez de la práctica de las diligencias judiciales. (iii) Desarrollo de líneas investigativas. (iv) Examen y análisis del contexto. (vi) Aplicación de protocolos, etc. Todas estas preocupaciones de la Corte deben destacarse dadas las fallas comprobadas de las autoridades, de tal modo que estos rumbos deberán ser atendidos en el futuro porque contrarrestarían esas falencias, permitiendo efectivizar el derecho al plazo razonable. Ante ello se reconoce este esfuerzo y lo que se espera de las autoridades es que corrijan esas actuaciones irregulares y sigan estas orientaciones.

Por otro lado, el derecho al plazo razonable lo interconecta con otro derecho, el de protección judicial, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana³¹⁷,

³¹⁶ GONZÁLEZ MORALES, Felipe. *Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Transformaciones y Desafíos*. Ed. Tirant lo Blanch – Valencia. 2013, p. 309. “La Corte ha señalado que el artículo 8 (garantías judiciales) puede inducir a confusión porque en ella no se consagra un medio de esa naturaleza en sentido estricto. En efecto, añade el Tribunal, el artículo 8 no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención. La Corte agrega que lo que hace la mencionada disposición es consagrar el derecho a un debido proceso legal, que es aplicable a todas las garantías judiciales, incluso bajo los estados de excepción.

³¹⁷ Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Protección judicial.

permitiendo tutelar el derecho de acceso a la justicia para las víctimas de las violaciones de derechos humanos y garantizar a su vez el principio de efectividad que debe regir las investigaciones³¹⁸, de tal suerte que la Corte siempre estará velando porque las investigaciones sean efectivas; de ser así, podrá cumplirse para este Tribunal con este derecho. Punto también importante porque la Corte enfatiza las obligaciones que existen en esta materia en el DIDH.

La Corte Interamericana, al momento de ponderar el derecho al plazo razonable y el de acceso a la justicia, determina que “(...) *el deber del Estado de satisfacer plenamente los requerimientos de la justicia prevalece sobre la garantía del plazo razonable*”³¹⁹. Por este motivo siempre resolverá dicha tensión dando primacía al derecho de justicia sobre el derecho del plazo razonable; por ello una y otra vez obliga a que las investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos, a pesar del tiempo transcurrido, continúen hasta que se investiguen y se sancionen a todos los responsables.

En ocasiones, cuando los casos se han dejado para que sean esclarecidos por comisiones de la verdad, considera que es obligación de los Estados investigar

Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

- a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
- b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
- c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

³¹⁸ Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, párrafo 116; caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Excepción Preliminar. Sentencia de 30 de noviembre de 2005, párrafo 175; caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, párrafo 156; caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008, párrafo 79; caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009, párrafo 206; caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009, párrafo 124; caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009, párrafo 132; caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010, párrafo 129; caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010, párrafo 195; caso Forneron e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012, párrafo 65.

³¹⁹ Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párrafo 149; caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009, párrafo 136.

y sancionar a los responsables a través de las autoridades judiciales, de tal suerte que el derecho a la justicia no se satisface a través de la comisión de la verdad³²⁰.

Siempre se resalta esta primacía del derecho de justicia en investigaciones de violaciones de derechos humanos, y especialmente de graves violaciones de derechos humanos, aunque conectado con el derecho a ser oído en un plazo razonable, artículos 25.1 y 8.1.³²¹

Para los fines de este trabajo compartimos la primacía del derecho a la justicia por ser afín a los desarrollos del DIDH en materia de graves violaciones de derechos humanos.

Hay situaciones relevantes que condicionan la violación de los derechos humanos para la Corte Interamericana, y se determinan principalmente en todas aquellas acciones y omisiones en que incurrieron las autoridades judiciales, porque

³²⁰ Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007, párrafo 129; caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párrafo 74, caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010, párrafo 297. La Corte Interamericana en el caso Valle Jaramillo respecto al derecho a la verdad a favor de víctimas y familiares, está dado así “exigir la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible, la cual incluye la determinación judicial de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades”. Párrafo 102.

³²¹ ACOSTA ALVARADO, Paola Andrea. *El derecho de acceso a la justicia en la jurisprudencia interamericana*. Instituto de estudios constitucionales. Madrid. 2007, p. 54. “Sobre el punto relacionado con el alcance dado por la Corte a los artículos 8º y 25, existe una discusión que se traduce en la necesidad de delimitar el alcance que les ha dado la Convención, en el entendido que de ellos no se desprende el deber de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos radicado en cabeza del Estado, pues, en realidad, tal obligación encuentra fundamento en el artículo 1.1 de la Convención en relación con el derecho violado en cada caso, además que la Corte maneja como sinónimos varios derechos. (...) desde hace unos años la Corte ha señalado que el artículo 25 de la Convención se desprende la obligación de garantizar un recurso efectivo que permita a los individuos defenderse ante las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la Corte también ha empleado el artículo 25 como fundamento del derecho de acceso a la justicia en un sentido más amplio, en el que se incluye la garantía de todo mecanismo que, junto con la salvaguarda de las garantías del debido proceso, asegure a los individuos la protección de sus derechos e intereses legítimos. (...) en el numeral 1º del art. 8 se encuentra la piedra angular del derecho de acceso a la justicia: el derecho a ser oído. No son sinónimos debido proceso, garantías judiciales, protección judicial y acceso a la justicia. El acceso a la justicia es el género previsto art. 8.1 de la Convención, y el derecho a la protección judicial art. 25 es la especie, en la medida que se refiere al escenario de los derechos fundamentales. El derecho a la justicia no puede confundirse con el acceso a la justicia: este sirve como herramienta para la salvaguardia de aquel”.

en la mayoría³²² de los casos conocidos por la Corte en materia penal fueron las autoridades las responsables de esa violación³²³.

Muy importante para los fines de este trabajo es destacar que la Corte desde la primera sentencia, caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, desarrolla su jurisprudencia con la mira puesta en salvaguardar los derechos de las víctimas y/o sus familiares para que tengan conocimiento de la verdad de los hechos y lograr el enjuiciamiento de todos los responsables (autores materiales e intelectuales) mediante una sentencia condenatoria en firme, a efectos que puedan gozar de reparación integral. Por tal motivo, en todas las sentencias en donde se conocen de graves violaciones de derechos humanos se ataca la impunidad, que se produce justamente en la omisión de las autoridades en tomar decisiones, en progresar en las investigaciones, resaltando la Corte que de acuerdo al desarrollo del DIDH se debe combatir la impunidad, pues apareja a su vez la violación del derecho al plazo razonable, especialmente en los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Hay un ataque constante del Tribunal hacia la figura de la impunidad.

Es relevante, especialmente para este trabajo, que en las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos no haya impunidad, porque la impunidad es casi sinónimo de violación del derecho al plazo razonable, por tanto, hay que destacar que de manera constante la Corte recuerda que son imprescriptibles los delitos que comprenden graves violaciones de derechos humanos, buscando que los funcionarios combatan la impunidad, haciendo valer el derecho al plazo razonable, destacando los compromisos relacionados con la sanción de los responsables, también en casos de crímenes de lesa humanidad así como en delitos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, masacres, desaparición forzada o desplazamiento forzado.

Del estudio de la jurisprudencia de la Corte se desprende que para que esos derechos de las víctimas puedan efectivizarse, especialmente el relacionado con el derecho a ser oído en un plazo razonable, es necesario que los Estados combatan la impunidad³²⁴, que no debe ser permitido que los crímenes que vulneran el

³²² Caso Nogueira de Carvalho y otro Vs. Brasil. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 28 de Noviembre de 2006, párrafo 79; caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009, párrafos 149 a 151.

³²³ Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de marzo 2005, párrafo 111.

³²⁴ Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006, párrafo 299, entre otras. "La Corte entiende como impunidad la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles

derecho a vida, como el homicidio, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, o los que atenten contra los derechos sexuales, queden impunes, pues con ello se afectan los derechos de las víctimas.

La Corte desarrolló en principio todo un estudio jurídico del delito de desaparición forzada, comenzando por el caso Velásquez Rodríguez, y ya desde el caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile estos crímenes los catalogó como delitos de lesa humanidad³²⁵, lo que supone la imprescriptibilidad de los mismos y la exigencia que se investiguen en un plazo razonable. Este criterio, desarrollado por el TEDH y tomado de la Corte Interamericana, debiera integrarse a las legislaciones para clasificar el procedimiento que se debe aplicar a esta clase de investigaciones con la regulación de los respectivos plazos.

Es de elogiar el trabajo de la Corte que para impedir la impunidad de esas graves violaciones de derechos humanos ha estudiado varias figuras jurídicas utilizadas por los Estados con el fin de atacarlas, al observar que han sido creadas con el fin de beneficiar al perpetrador, para que sus crímenes no sean investigados y de contera no respondan de los mismos. Esas figuras son amnistías, indultos, prescripción, excluyentes de responsabilidad, entre otras.

Desde el caso Barrios Altos Vs. Perú la Corte puntualizó la prohibición de conceder amnistías en caso de graves violaciones derechos humanos porque se incurre en vulneración del artículo 8 y del artículo 25 de la Convención, de ahí en adelante ha indicado: *“Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones*

ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, párrafo 116.

³²⁵ Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 105. “Los crímenes de lesa humanidad son serios actos de violencia que dañan a los seres humanos al golpear lo más esencial para ellos: su vida, su libertad, su bienestar físico, su salud y/o su dignidad. Son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo. Pero los crímenes de lesa humanidad también trascienden al individuo, porque cuando el individuo es agredido, se ataca y se niega a la humanidad toda. Por eso lo que caracteriza esencialmente al crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima”.

*forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*³²⁶.

En el desarrollo jurisprudencial ha destacado que en la protección de los derechos consagrados en la Convención Americana hay unos derechos que gozan de más protección, teniendo en cuenta su connotación y el daño que causan, no solo a quien los sufre, sino a toda la humanidad y para ese catálogo de derechos se hace necesario que los Estados trabajen más para que las acciones y omisiones de las autoridades, en casos de violaciones como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, las desapariciones forzadas o los delitos sexuales, no se propicie la impunidad de las investigaciones, no solo por la negligencia, descuido, retardo, por no aplicar los estándares internacionales, sino igualmente por aplicar leyes de amnistía, indulto, prescripción y eximentes de responsabilidad.

Es tan exigente la Corte, y en ello estamos totalmente de acuerdo que así sea y elogiamos su trabajo, que en el caso de que el Estado apruebe una ley de amnistía³²⁷ o de caducidad, en los casos de graves violaciones de derechos humanos como los ya referidos, compromete a las autoridades judiciales a realizar

³²⁶ Caso Barrios Alto Vs. Perú. Sentencia de 14 de marzo de 2001, párr. 41; caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003, párrafo 116; caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 20, párrafo 171; caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafos 123, 124; caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003, párrafo 129.

³²⁷ Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 127. “Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal: A la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención. Es por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía, incurrir en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente”.

un control³²⁸ de la respectiva ley con las normas de la Convención y, de resultar contraria, no puede aplicarse³²⁹.

Es una evolución muy trascendental de la Corte respecto a los derechos de las víctimas y de sus familiares, además de hacer efectivo el derecho estudiado, porque en todos esos eventos las víctimas tendrán asegurado que se investiguen los hechos y que sean oídas en un plazo razonable. De igual manera, una vez más se pone de presente que en caso de violaciones de derechos humanos, especialmente de graves violaciones, es obligatorio respetar el plazo razonable para las víctimas, al impedirse que los Estados puedan favorecer al responsable con una amnistía. En este punto la Corte da prelación a los derechos de las víctimas y familiares frente a los derechos de los responsables, aunque gocen de una figura jurídica a su favor.

Lo mismo tiene que predicarse respecto de la prescripción. La Corte, destacando la obligación de investigar y sancionar a los responsables dentro de un plazo razonable, se encuentra con situaciones donde éstos pueden gozar de impunidad, en aplicación de la prescripción. Por eso impidió tal posibilidad, al sustentar que dicho término se suspende (...) *"Mientras un caso esté pendiente ante una instancia de los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos"*³³⁰. La prescripción frente a la impunidad son figuras que se contraponen con el derecho al plazo razonable, de tal suerte que hay que reconocer todos los esfuerzos de la Corte Interamericana para combatirlas y demandar de las autoridades que asuman las responsabilidades que les impone la Convención.

En este desarrollo jurisprudencial la Corte encontró que también pueden entrar en juego otras instituciones jurídicas como la cosa juzgada, que denominó como "cosa juzgada fraudulenta", que puede ir en contra de los derechos de las víctimas a conocer la verdad, a la justicia y reparación integral, por haberse sustraído al infractor de su responsabilidad mediante una decisión que se fundamentó en un procedimiento irregular, que no fue independiente o imparcial y culminó con una decisión favorable. En esos casos, el Tribunal ha denominado a

³²⁸ Vid. REY CANTOR, Ernesto. *Control De Convencionalidad De Las Leyes Y Derechos Humanos*. Ed. Porrúa. Argentina. 2008.

³²⁹ Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Excepción Preliminar. Sentencia de 30 de noviembre de 2005, párrafos a 19; caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafos 123, 124; caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010, párrafo 128, 176 a 178.

³³⁰ Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001, párrafo 68.

esa sentencia como cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta”³³¹, y contiene un adelanto muy significativo con estas decisiones en el desarrollo de los derechos de las víctimas, en la medida en que no se permite que esos pronunciamientos fraudulentos pasen en autoridad de cosa juzgada, por lo cual el principio del *non bis in idem*³³² se relativiza, permitiendo que nuevamente esta persona sea juzgada por los mismos hechos, dado que la sentencia o decisión dictada a su favor se basó en situaciones irregulares, atacando la Corte las herramientas jurídicas que los mismos Estados han establecido, cuando han sido utilizadas de manera fraudulenta en contra de los derechos de las víctimas y/o sus familiares, y de la misma comunidad internacional, dado que estos crímenes internacionales hacen parte del *ius cogens*³³³.

Otro punto que se examina en las sentencias tiene que ver con la vulneración del derecho al plazo razonable mediante el trámite de procedimientos que se adelantan ante un juez diferente al que le corresponde, especialmente en procesos

³³¹ Citado en la obra, ARROYO ZAPATERO, Luis y NIETO MARTÍN, Adán. *El Principio de ne bis in idem en el Derecho Penal europeo e internacional*. Coordinadores: Ediciones de la Universidad Castilla - la Mancha. Castilla. 2007, p. 96. Respecto al tema señalan: “Específicamente en relación con la figura de la cosa juzgada, recientemente la Corte precisó que el principio non bis in idem no resulta aplicable cuando el procedimiento que culmina con el sobreseimiento de la causa o la absolución del responsable de una violación a los derechos humanos, constitutiva de una infracción al derecho internacional, ha sustraído al acusado de su responsabilidad penal, o cuando el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta”, Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párrafo 153.

³³² Artículo 8.4 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 4. El inculcado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Así mismo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

³³³ “Según fue señalado anteriormente (supra párr. 93), los hechos del presente caso han infringido normas inderogables de derecho internacional (*ius cogens*), en particular las prohibiciones de la tortura y de las desapariciones forzadas de personas. Estas prohibiciones son contempladas en la definición de conductas que se considera afectan valores o bienes trascendentales de la comunidad internacional, y hacen necesaria la activación de medios, instrumentos y mecanismos nacionales e internacionales para la persecución efectiva de tales conductas y la sanción de sus autores, con el fin de prevenirlas y evitar que queden en la impunidad. Es así como, ante la gravedad de determinados delitos, las normas de derecho internacional consuetudinario y convencional establecen el deber de juzgar a sus responsables. En casos como el presente, esto adquiere especial relevancia pues los hechos se dieron en un contexto de vulneración sistemática de derechos humanos –constituyendo ambos crímenes contra la humanidad– lo que genera para los Estados la obligación de asegurar que estas conductas sean perseguidas penalmente y sancionados sus autores”. Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de fecha 22 de septiembre de 2006, párrafo 128. Vid. GROS ESPIELL, Héctor *Op. cit.*, p. 235 “el carácter de *ius cogens*, de Derecho Imperativo, que posee el deber de respetar y garantizar los Derechos Humanos”.

por graves violaciones de derechos humanos, cuando sus presuntos responsables son investigados por tribunales militares, porque puede ser una fórmula o alternativa para negar los derechos de las víctimas, porque ante la justicia militar las víctimas: (i) no tienen representación, (ii) no pueden ser oídas, (iii) las investigaciones se demoran, (iv) se facilita la prescripción y por tanto la impunidad de estas investigaciones, (vi) hay falta de garantías, especialmente la imparcialidad de los jueces y (vii) existe posibilidad de obtener decisiones fraudulentas.

La Corte en el caso Genie Lacayo no destacó la prohibición que debe existir en torno a que el fuero militar se aplique en casos que no tienen relación con el servicio, y que no era la justicia militar la competente para realizar la investigación, sólo se detuvo a examinar que los familiares de Genie Lacayo pudieron intervenir e interponer recursos ante la justicia militar y, examinado esto, encontró que no se le violó su derecho a la igualdad porque no estuvo en condiciones de inferioridad, de modo que no consideró la afectación del proceso por falta de imparcialidad e independencia de los jueces militares.³³⁴

Esta posición fue evolucionando y hoy en día ya la Corte le da un alcance restrictivo y excepcional, de suerte que la justicia militar solo debe juzgar a militares por hechos relacionados con el servicio militar³³⁵, no es competente para conocer

³³⁴ Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997, párrafos 85 a 88.

³³⁵ (...) Al respecto, el Tribunal ya ha establecido que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. A su vez, esta Corte estima pertinente recordar, que la jurisdicción militar se establece por diversas legislaciones con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. Inclusive, esta jurisdicción funcional reserva su aplicación a los militares que hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias por lo que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, *a fortiori*, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. Como se ha dicho con anterioridad, el juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, independiente e imparcial. En el caso *sub judice*, las propias fuerzas armadas involucradas en el combate contra los grupos insurgentes, son los encargados de juzgar a sus mismos pares por la ejecución de civiles, tal y como lo ha reconocido el propio Estado. En consecuencia, la investigación y sanción de los responsables debió recaer, desde un principio, en la justicia ordinaria, independientemente de que los supuestos autores hayan sido policías en servicio activo. Pese a lo anterior, el Estado dispuso que la justicia militar fuera la encargada de la investigación de los hechos acaecidos en Las Palmeras, la cual llevó adelante dicha investigación durante más de 7 años -hasta el traslado de la causa a la justicia ordinaria- sin obtener resultados positivos respecto de la individualización y condena de los responsables. En conclusión, la aplicación de la jurisdicción militar en este caso no garantizó el debido proceso en los términos del artículo 8.1 de la Convención Americana, que regula el derecho de acceso a la justicia de los familiares de las víctimas del caso". Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones

casos de violaciones de derechos humanos. En este aspecto la jurisprudencia evolucionó considerablemente en beneficio de las garantías de las víctimas de violaciones de derechos humanos, especialmente para que puedan ser oídas en un plazo razonable y ante un juez imparcial, en pos de justicia por violaciones de agentes del Estado.

Pero debemos señalar que la Corte cada vez realiza significativas conquistas en favor de que este derecho sea una realidad, y al advertir que los Estados utilizan las mismas herramientas jurídicas para vulnerar este derecho, y que pueden existir dificultades como en el caso *Goiburú y otros Vs. Paraguay*³³⁶, desarrolló las herramientas estatales e interestatales para obligar a que las investigaciones se resuelvan prontamente, obligando a que los Estados colaboren entre sí, y a pesar de no existir tratados de extradición que entre ellos se presente una colaboración en la asistencia judicial con el fin de que no se vulnere el derecho, y en casos de crímenes internacionales, a efectos de impedir la impunidad y que las investigaciones sobre estas graves violaciones de derechos humanos se realicen en un plazo razonable, haciendo valer la figura jurídica de la extradición³³⁷ y la colaboración entre Estados.

y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008, párrafos 51 a 53 y 114. Vid. Caso *Almonacid Arellano y otros Vs. Chile*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 91; caso *La Cantuta Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párrafo 131; caso *Radilla Pacheco Vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009, párrafo 115 a 118.

³³⁶ Caso *Goiburú y otros Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006; caso *La Cantuta Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006.

³³⁷ “En tales términos, la extradición se presenta como un importante instrumento para estos fines por lo que la Corte considera pertinente declarar que los Estados Partes en la Convención deben colaborar entre sí para erradicar la impunidad de las violaciones cometidas en este caso, mediante el juzgamiento y, en su caso, sanción de sus responsables. Además, en virtud de los principios mencionados, un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a los procesados por crímenes contra los derechos humanos mediante la aplicación indebida de figuras legales que atenten contra las obligaciones internacionales pertinentes. En consecuencia, el mecanismo de garantía colectiva establecido bajo la Convención Americana, en conjunto con las obligaciones internacionales regionales y universales en la materia, vinculan a los Estados de la región a colaborar de buena fe en ese sentido, ya sea mediante la extradición o el juzgamiento en su territorio de los responsables de los hechos del presente caso. Corte IDH. Caso *Goiburú y otros Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006, párrafo 132. Vid. GROS ESPIELL, Héctor. *Op. cit.*, p. 237. Es importante también destacar que la Corte parte del hecho de que hoy en día la soberanía de los Estados es relativa, no absoluta en materia de Derechos Humanos tal como lo hace ver Héctor Gros. “La soberanía no es ya el poder estatal absoluto e ilimitado. La soberanía es el carácter del poder estático que lo hace supremo en el ámbito espacial del Estado que ejerce, pero sometido al Derecho y a la justicia. La soberanía de cada estado coexiste y está limitada por la soberanía de los otros Estados, integrantes todos de una comunidad, y está

Siendo así, lo primero que le exige al Estado donde se cometió la violación de este tipo de crímenes es que cumplan con el deber inexcusable de solicitar, con la debida diligencia y oportunidad, esto es, en un plazo razonable, la extradición de los procesados que se encuentren en otro país, aunque no exista tratados de extradición, situación muy significativa, porque impide que por esa omisión se dilaten los términos, indicando que ello *“no constituye una base o justificación suficiente para dejar de impulsar una solicitud en ese sentido”*.³³⁸

Por otro lado, atendiendo también a *“la naturaleza y gravedad de los hechos, más aun tratándose de un contexto de violación sistemática de derechos humanos, la necesidad de erradicar la impunidad se presenta ante la comunidad internacional como un deber de cooperación inter-estatal para estos efectos”*,³³⁹ lo que se traduce en la obligación de cooperación, extraditando o prestando asistencia judicial. Exige la cooperación internacional para erradicar la impunidad en esas violaciones que comprometan crímenes internacionales, mediante la figura jurídica de la extradición, y a la vez tácitamente invoca el principio de jurisdicción universal para erradicar la impunidad al señalar: *“La impunidad no será erradicada sin la consecuente determinación de las responsabilidades generales –del Estado- y particulares –penales de sus agentes o particulares-, complementarias entre sí. El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su derecho interno y el derecho internacional para juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, o colaborando con otros Estados que lo hagan o procuren hacerlo”*³⁴⁰.

Son desarrollos muy significativos de la Corte Interamericana, en la medida que vincula a los Estados a extraditar a las personas comprometidas con graves violaciones de derechos humanos, de manera rápida, no obstante que no haya el tratado de extradición, así como la obligación de cooperación entre los Estados para

condicionada y regulada por el Derecho Internacional. (...) Los derechos humanos, en el estado actual de evolución del Derecho Internacional y de la realidad no forman parte del dominio reservado o no de la jurisdicción exclusiva o esencial interna, constituyen una materia en que coexisten la jurisdicción interna y la internacional, en función de su mejor garantía y protección (...) Los Estados tienen ante el Derecho Internacional, el deber jurídico de garantizar y proteger los Derechos Humanos.”

³³⁸ Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párrafo 130.

³³⁹ Ibídem párrafo 131.

³⁴⁰ Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párrafo 131.

sacar adelante estas investigaciones, que también se traduce en una mayor garantía del derecho al plazo razonable, especialmente donde surgen situaciones que como las planteadas por la Corte, van generando dilaciones de los términos y vulneración del derecho.

Es muy trascendental en ese despliegue de los derechos de las víctimas porque a través de él se puede indicar que permite avances en varios tópicos: (i) Desarrolla principios contra la impunidad de los crímenes internacionales. (ii) Determina la obligación de los Estados de colaborar entre sí. (iii) Aplica el principio de la jurisdicción universal, al sustentar que *“un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a los procesados por crímenes contra los derechos humanos mediante la aplicación indebida de figuras legales que atenten contra las obligaciones internacionales pertinentes. En consecuencia, el mecanismo de garantía colectiva establecido bajo la Convención Americana, en conjunto con las obligaciones internacionales regionales y universales en la materia, vinculan a los Estados de la región a colaborar de buena fe en ese sentido, ya sea mediante la extradición o el juzgamiento en su territorio de los responsables de los hechos del presente caso”*.³⁴¹

En caso de graves violaciones de derechos humanos en donde estén comprendidos personas de dos o más Estados, exige la Corte que las autoridades acudan igualmente a la cooperación interestatal³⁴², para que esas investigaciones se resuelvan dentro del término razonable, siempre que sea necesaria esa cooperación³⁴³. El Tribunal desarrolló un concepto relacionado con la ejecución de

³⁴¹Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006.

³⁴² “En este caso la Corte destaca que las autoridades debieron acudir a la cooperación inter-estatal a efectos de utilizar las herramientas jurídicas adecuadas para el análisis del caso, por tratarse de un patrón sistemático donde múltiples autoridades pudieron estar implicadas, incluyendo movimientos transfronterizos, aspecto este que surge importante a tener en cuenta por las autoridades cuando investiguen este tipo de violaciones. “El presente caso reviste una particular trascendencia histórica: los hechos ocurrieron en un contexto de práctica sistemática de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones perpetrada por las fuerzas de seguridad e inteligencia de la dictadura de Alfredo Stroessner, en el marco de la Operación Cóndor, cuyas características y dinámica han sido esbozadas en los hechos probados (supra párrs. 61.1 a 61.14). Es decir, los graves hechos se enmarcan en el carácter flagrante, masivo y sistemático de la represión a que fue sometida la población a escala inter-estatal, pues las estructuras de seguridad estatales fueron coordinadamente desatadas contra las naciones a nivel trans-fronterizo por los gobiernos dictatoriales involucrados”. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006, párrafo 62.

³⁴³ (...) “Los agentes estatales no sólo faltaron gravemente a sus deberes de prevención y protección de los derechos de las presuntas víctimas, consagrados en el artículo 1.1 de la Convención Americana, sino que utilizaron la investidura oficial y recursos otorgados por el Estado para cometer las violaciones. En tanto Estado, sus instituciones, mecanismos y poderes debieron funcionar como

crímenes internacionales por autoridades del mismo Estado, al que llamó “terrorismo de Estado”, que es un avance significativo y de elogiar, que obedece a una actitud muy decidida del Tribunal y es una herramienta muy importante en esta tarea de investigar graves violaciones de derechos humanos.

En ese afán de evitar la dilación y demoras injustificadas por parte de las autoridades, especialmente en las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos, dejó el Tribunal sentado que tampoco puede constituir un obstáculo y retraso de las investigaciones, en contra del derecho al plazo razonable, el hecho que la información y documentos se encuentren en poder de agentes del Estado, exigiendo que las autoridades judiciales tengan acceso a esos documentos para que permitan esclarecer los hechos. Negó que se puedan escudar en el secreto de Estado o confiabilidad de la información para impedir que se esclarezcan en un plazo razonable las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos.³⁴⁴ De esta manera concede a los funcionarios judiciales valiosas herramientas para poder perseguir este tipo de crímenes donde la investigación es compleja y se requiere un resultado.

En resumen, pese a la indefinición respecto a tópicos relacionados con el derecho al plazo razonable, por la no sustentación (i) de cuándo comienza la

garantía de protección contra el accionar criminal de sus agentes. No obstante, se verificó una instrumentalización del poder estatal como medio y recurso para cometer la violación de los derechos que debieron respetar y garantizar, ejecutada mediante la colaboración inter-estatal señalada. Es decir, el Estado se constituyó en factor principal de los graves crímenes cometidos, configurándose una clara situación de terrorismo de Estado”. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006, párrafo 66; caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011, párrafo 155.

³⁴⁴ (...) Las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para alcanzar los objetivos de la investigación y abstenerse de realizar actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. Del mismo modo, resulta esencial que los órganos a cargo de las investigaciones estén dotados, formal y sustancialmente, de las facultades y garantías adecuadas y necesarias para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener pleno acceso tanto a la documentación en manos del Estado, así como a los lugares de detención. (...) “En caso de violaciones de derechos humanos, el Tribunal ya ha señalado que “las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes”. Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011, párrafo 171; caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párrafo 180; caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008, párrafo 77; caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010, párrafo 211.

dilación; (ii) qué plazos deben aplicarse; (iii) qué se debe entender por complejidad; (iv) cuáles deben ser los términos de la prisión preventiva; hace trascendentales y muy significativos desarrollos en pro del derecho al plazo razonable en materia de violaciones de derechos humanos, especialmente de graves violaciones de derechos humanos³⁴⁵.

³⁴⁵ Se reconoce por la doctrina dichos avances y por ello se destaca la posición de GONZÁLEZ MORALES, Felipe, *Op. cit.*, págs. 290, 291 y 318., cuando señaló: “la evolución recién descrita en el Sistema Interamericano desempeñó una influencia central en el desarrollo del Derecho Internacional – acerca del tratamiento de las violaciones masivas y sistemáticas de Derechos Humanos. En especial, las bases sentadas en el Sistema regional americano contribuyeron al desarrollo de estándares a nivel de Naciones Unidas”. (...) el tratamiento de las violaciones de Derechos Humanos ha experimentado una significativa evolución en los últimos 15 años a nivel de los órganos internacionales especializados en la protección de tales derechos. Los mecanismos del Sistema Interamericano jugaron un papel decisivo en ello. Esta evolución ha ido en la dirección de establecer de manera perentoria una serie de obligaciones de los Estados en relación con dichos tipos de abusos, en oposición al criterio que prevalecía anteriormente, según el cual los Estados democráticos poseían una amplia discreción en esta materia”.

CAPITULO VI

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS SENTENCIAS DEL TEDH Y LA CIDH EN RELACIÓN CON EL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE

Ni El TEDH ni la CIDH aportan un concepto preciso de plazo razonable, no establecen en qué término deben las autoridades judiciales resolver un asunto civil, penal, laboral o administrativo. La Corte Interamericana cuando abordó el tema adujo que era de difícil definición y se orientó por la jurisprudencia del TEDH, que fue la primera en señalar la dificultad de definir el concepto, y determinó que no se podía precisar en días, meses o años.

En materia penal y especialmente en los casos colombianos, la CIDH agrega otro ingrediente, relacionado con la efectividad de las investigaciones, porque si bien hay resultados parciales en los procesos penales, examinados todos ellos en su contexto, y haciendo un análisis global de todo el procedimiento, para la CIDH se produce la violación al derecho al plazo razonable, a pesar de que haya sentencias condenatorias en contra de alguno de los responsables de las violaciones de derechos humanos, pues la crítica va especialmente por la no vinculación de los máximos responsables, cuando en la mayoría de los casos estas personas están identificadas, o no se hace ningún esfuerzo para identificarlas en la investigación.

Destaca otro parámetro la Corte Interamericana, que si bien está relacionado con la complejidad del asunto, tendrá que atenderse por los funcionarios judiciales, relacionado con el contexto económico, social y cultural en que se desarrollaron los hechos, para que partiendo del mismo se tracen líneas investigativas que permitan resolver el caso dentro de los límites del derecho estudiado. Por tanto, es muy importante el trabajo de la CIDH en materia penal, porque se ha encargado de señalar a los funcionarios judiciales la necesidad de abordar las investigaciones desde su contexto en materia de violaciones de derechos humanos. Establece la obligatoriedad de aplicar los protocolos e Instrumentos internacionales de derechos humanos en el desarrollo de las investigaciones, con miras a lograr su efectividad. El TEDH toma el contexto social, económico y político como aspecto de complejidad del asunto, aunque en ocasiones lo ha considerado a favor de las autoridades.

Evidentemente hay que señalar que la CIDH ha desarrollado su jurisprudencia sobre el derecho al plazo razonable principalmente en el campo penal, a diferencia del TEDH, que tiene abundante jurisprudencia en materia civil, laboral y administrativa, por lo cual el TEDH hace valer en todas estas áreas el

derecho establecido en el artículo 6.1, pese a tratarse de una justicia rogada o de partes.

Se debe destacar cómo la CIDH ha desarrollado una importante jurisprudencia en materia de graves violaciones de los derechos humanos, teniendo en cuenta las dictaduras que han existido en América Latina, avanzando en conceptos relacionados con los crímenes de lesa humanidad; tortura; desaparición forzada; ejecuciones extrajudiciales; desplazamiento forzado; perspectiva de género o enfoque diferencial, destacando principalmente la complejidad de esos casos, algunos de enorme complicación y las obligaciones relacionadas con su investigación en un plazo razonable, haciendo visibles los inconvenientes y falencias para desarrollar la investigación, trazando lineamientos investigativos, pautas y orientaciones a la hora de enfrentarse a esta clase de investigaciones, lo que no se observa por parte del TEDH, seguramente en atención a que los casos sometidos a su conocimiento no tienen esta connotación.

La mayoría de los casos resueltos por la CIDH versan sobre graves violaciones de derechos humanos y la violación del plazo razonable se atribuye generalmente a las autoridades, porque desde el inicio de las investigaciones no se delimitaron líneas investigativas, lo que generó que al final las investigaciones no estuvieran bien direccionadas y por ende no cumplieran con la finalidad de sancionar a los responsables, sin contar con otros aspectos como son la negligencia, falta de interés, incompetencias, nulidades, etc. En el caso del TEDH, también la vulneración al plazo razonable en la mayoría de los casos se generó por culpa de las autoridades, revelándose también fallas relacionadas con la negligencia, el desinterés, etc.

Tanto el TEDH como la CIDH en materia penal destacan que el derecho al plazo razonable aplica tanto al imputado o acusado como a la víctima, pues para ambos se ha reconocido este derecho, tanto en el artículo 6.1 de la CEDH como en el artículo 8.1 de la CIDH.

Reconocen que en materia penal el interesado no está obligado a acelerar los procedimientos, pues éstos corren a cargo del aparato judicial, y en el caso de la CIDH, teniendo en cuenta los casos de graves violaciones que le ha tocado conocer, también ha llamado la atención a las autoridades respecto a que son ellas, y no las víctimas o familiares, quienes deban iniciar las investigaciones y aportar pruebas.

Coinciden igualmente en descartar las justificaciones relacionadas con congestión de los despachos, con problemas estructurales, porque no exoneran de

responsabilidad a las autoridades; por el contrario, es el Estado el llamado a corregir los defectos de la administración de justicia, en aras de cumplir con las obligaciones adquiridas por la ratificación del respectivo instrumento internacional.

El TEDH ha establecido que las dilaciones pueden recaer igualmente en otras instituciones del Estado, tal como ocurrió en el caso Ruiz Mateos Vs. España³⁴⁶, resolución importante porque compromete a todas las autoridades y máximos tribunales en esta protección del derecho.

Respecto del derecho al plazo razonable cuando una persona está privada de la libertad, el TEDH lo supedita a que para su aplicación se establezca la necesidad de dicha medida, agregando otro ingrediente, el relacionado con la justificación por las autoridades de demostrar que la privación debe mantenerse en el tiempo, pues no basta solo con que se decrete la medida privativa de la libertad, sino que al pasar un tiempo se ha de determinar por qué se debe mantener.

La CIDH reclama para su imposición que se demuestra la necesidad de imponerse la medida privativa de la libertad, además de que en el tiempo se revise su necesidad y proporcionalidad, aunque abonando a su favor que tiene en cuenta además de esto el cumplimiento de los plazos previstos en la ley, cuando esta circunstancia solamente debería ser el criterio de evaluación.

Ambos Tribunales han sentado su jurisprudencia respecto a que en el proceso penal pueden existir dos términos perfectamente diferenciados, uno cuando hay persona privada de la libertad y otro muy distinto, que debe aplicarse para el trámite de investigación, clarificando que no necesariamente los dos tienen que coincidir, pues hay eventos en que el término prisión puede ser irrazonable, pero no el del proceso penal.

El TEDH para valorar la razonabilidad de la duración del proceso en asuntos civiles, laborales o administrativos, ha tenido en cuenta los intereses que se debaten y cuál es la importancia de ellos para el demandante, así que si éstos tienen que ver con derechos como la salud, la vida, la subsistencia, etc., reclama una mayor diligencia y cuidado en la resolución de los mismos, sin admitir que en esos casos, aunque la actividad del interesado retrase la actuación, las autoridades lo puedan permitir y no resuelvan con la obligatoriedad y celeridad que impone el artículo 6.1 del CEDH³⁴⁷. Esto es bien rescatable a favor de los interesados, porque se desarrolla un concepto de priorización o prioridad, que debe regir siempre en una

³⁴⁶ Sentencia TEDH de 23 de junio de 1993.

³⁴⁷ Sentencias de los casos Obermeier, Neumeister, entre otros.

sociedad, porque se admite que el Estado no logra abarcar la totalidad de asuntos colocados a su conocimiento.

Es de destacar que para ambos Tribunales en materia penal se exige que las investigaciones sean eficaces; por tanto, es una obligación de medios y no de resultado, como lo aduce la CIDH, de modo que se debe buscar la identificación y el castigo para los responsables, deteniéndose la CIDH a demandar el cumplimiento de protocolos aplicables a la investigación, a exigir que se estudie y establezca el contexto en que sucedieron los hechos para, a partir de ahí, definir claras líneas de investigación, que necesariamente llevarán a que sea eficaz y asegurará la sanción de los responsables, además de que se harán efectivos los derechos de las víctimas de verdad, justicia y reparación integral³⁴⁸. En este punto puede decirse que es más enriquecedora la jurisprudencia de la CIDH, pues se ha nutrido de investigaciones relacionadas con crímenes internacionales, caracterizados por la falta de eficacia y direccionamiento, debiendo entonces dar las pautas para que en lo sucesivo sean correctamente dirigidas esas investigaciones.

El TEDH y la CIDH reclaman la aplicabilidad del derecho al plazo razonable en pos de que haya una eficiente y recta administración de justicia, pero al hacer una ponderación de estos dos derechos, prevalece para ellos la recta administración de justicia; de ahí que sacrifican la celeridad³⁴⁹ en pos de la verdad, justicia y efectividad de los derechos puestos en juego³⁵⁰. En este aspecto se debe hacer un reconocimiento a ambos tribunales porque, colocados en una balanza estos

³⁴⁸ Las falencias en la mayoría de los casos colombianos se presentan por falta de una debida diligencia en el esclarecimiento de los hechos; de una planeación estratégica al desarrollar el programa metodológico, lo que conduce entonces a que se exceda el plazo razonable que debe orientar la investigación, por ello la Corte llama la atención al considerar que si bien el deber de investigar es una obligación de medios, y no de resultados; debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Otra irregularidad en la mayoría de los casos donde aparecen comprometidos agentes del Estado, es la falta de voluntad para sancionar a los altos mandos, a pesar que en muchos casos los identifican o pueden identificar las autoridades judiciales. En conclusión, salvo en los casos Isidro Caballero y Masacre de Santo Domingo, la violación del plazo razonable es atribuida a la conducta de las autoridades, en los casos colombianos conocidos por este organismo internacional.

³⁴⁹ MELERO BOSCH, Lourdes V. Director. REVERÓN PALENZUELA, Benito *La agilización del proceso penal y las garantías de defensa del imputado en la instrucción de los juicios rápidos*. Ed. Universidad de la Laguna. Tenerife. 2006/07, p.12

³⁵⁰ Este aspecto lo comparte CARNELUTTI, Francesco, *Op. cit.*, p. 15. cuando afirma que “La justicia si es segura no es rápida y si es rápida no es segura”. Vid. En este punto se debe destacar el caso Neumeister, en el voto particular juez Zekia: “ciertamente es deseable, y la administración de justicia lo exige, que los tribunales se esfuercen en conocer la verdad y toda la verdad, pero el procedimiento que así lo intente suscitará en grado sumo problemas si se producen grandes retrasos, se deban o no al interés de la justicia. Sería preferible, llegado el caso, zanjar la cuestión, resolviendo las dudas en favor del interesado. En consecuencia, no tengo ninguna duda de que las autoridades austríacas han infringido, en este caso, el artículo 6.1 del Convenio”.

derechos, y tras someterlos a un test de proporcionalidad, también la prelación es la recta administración de justicia, porque celeridad no todas las veces es sinónimo de justicia, ya que depende de que el asunto no sea complejo, sino simple.

La CIDH ha dejado en claro que el término, a pesar de lo prolongado, no aplica incluso en casos de prescripción, cuando el caso es de conocimiento de un órgano del sistema americano, lo que genera un aporte muy significativo para esta clase de investigaciones en las que se han generado graves situaciones de violaciones de derechos humanos, así que en sus providencias ataca la impunidad no permitiendo la prescripción de la acción penal, impidiendo que los Estados Partes acudan también a figuras jurídicas en donde se advierte el interés de sustraer al infractor de su responsabilidad, a través de una sentencia fraudulenta, como el indulto y amnistías, y relativiza el concepto de cosa juzgada; reclama la aplicación de la figura de la extradición entre los Estados para impedir la impunidad y el acceso a bases de datos confidenciales para esclarecer hechos especialmente relacionados con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

La Corte Interamericana coloca más su acento en la protección de las víctimas, buscando a su vez la no repetición de las violaciones, pero debe destacarse que en sus primeras sentencias, como es el caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, específicamente puntualizó esta situación y cuál es su objetivo principal, “El Derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños que les hayan sido causados por los Estados responsables de tales acciones”³⁵¹.

La CIDH extiende ese derecho al plazo razonable no solamente al plazo que se toma en la terminación del caso de manera definitiva, sino que comprende que se garantice en un plazo razonable el derecho a la víctima y sus familiares a conocer toda la verdad y a obtener la sentencia definitiva de todos los responsables.³⁵² Esta

³⁵¹ CIDH, caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, Fondo, párrafo 134.

³⁵² Comparto lo expuesto por AMBOS, Kai “y otros”, *Op. cit.*, págs. 58 a 60, que “para el TEDH no se está protegiendo el derecho individual de la víctima a que se castiguen los ofensores, porque acentúa el rol preventivo del derecho penal, sino que se está protegiendo a todas las personas de una eventual violación de sus derechos humanos, lo que significa una generalización en el alcance de las sentencias dictadas, por ello para él, el TEDH no afirma que las víctimas individualmente consideradas, tengan un derecho protegido por la CEDH, a que sus ofensores sean perseguidos criminalmente, mientras que la CIDH, si considera que tal derecho existe de acuerdo a la CADH. (...) El TEDH ha dicho que no hay un derecho convencionalmente reconocido de la víctima a “que se haga justicia”, es decir, ni el derecho a un juicio justo (que tiene por destinatario al acusado), ni el derecho a la vida pueden tomarse como fuente de aquel. En algunas sentencias expresamente se

situación es muy significativa porque rescata totalmente los derechos de este sujeto procesal, otrora bien olvidado en el proceso penal. El TEDH igualmente determina que el plazo razonable comprende hasta que haya una sentencia definitiva y firme.

Para la CIDH no tiene aplicación este derecho cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos y la investigación es asumida por un tribunal no imparcial, como son los tribunales militares.

El TEDH y la CIDH en su variada jurisprudencia, en los casos en los cuales han reconocido la violación del derecho examinado, no han precisado en qué fecha comenzó a originarse la vulneración³⁵³, aunque de acuerdo al análisis global, ambos tribunales han sustentado en que épocas el proceso se tramitó cumpliendo la razonabilidad de los términos, todo lo cual nuevamente nos lleva a sustentar que este derecho, para conocer cuándo comenzó a conculcarse, tendrá que hacerse un estudio de cada proceso, aplicando los criterios o parámetros señalados por los Tribunales internacionales, por lo cual se parte de situaciones que son meramente interpretativas conforme a los criterios indicados, lo que provoca que en ocasiones ellos mismos no son uniformes en su aplicación, generando a la postre inseguridad jurídica, y que de otra parte, como no se pide la reglamentación de unos plazos, si se demanda ante una instancia internacional para que determine si hubo violación o no del derecho del plazo razonable, tendrá que agotarse todo el procedimiento y cumplirse el requisito de subsidiariedad, generando congestión para el respectivo tribunal, cuando lo viable es que el mismo Estado organice su aparato estatal partiendo de unos plazos para cada proceso, de inicio a fin, estableciendo mecanismos que lleven al funcionario y al interesado a observar su cumplimiento, y en caso de vulnerarse, la misma ley establezca también la forma de reparación, todo ello, en bien de hacer efectivo el derecho.

Es importante destacar que en el estudio de la jurisprudencia del TEDH como en la CIDH cuando aplican los criterios, se determina que la mayoría de las veces la violación del plazo razonable es predicable de las autoridades, porque han generado retrasos injustificados en las actuaciones, y además ninguno de los dos

estipula que la obligación estatal consiste en la investigación (no en la condena) y se rechaza por lo tanto que se trate de un derecho a la "venganza privada". Debe destacarse, sin embargo, que en la doctrina y la jurisprudencia se advierte cierta tendencia hacia el reconocimiento a la víctima de un derecho a juicio justo, incluso dentro del proceso penal".

³⁵³ Caso Stömmgüller, sentencia del TEDH del 10 de noviembre de 1969, queda evidenciado que este tribunal no puede precisar la fecha en que comenzó la violación, como lo pretendía el gobierno de Austria, y al respecto señaló que es imposible traducir este concepto a un número fijo de días, de semanas, de meses o de años o en variar la duración según la gravedad de la trasgresión, lo que se conoce por parte de los doctrinantes como la doctrina del no plazo.

Tribunales acepta que la excesiva carga de trabajo o las deficiencias estructurales del sistema judicial justifiquen la violación del plazo razonable, porque los Estados, al ratificar el respectivo convenio, se comprometieron a adoptar medidas tendientes a lograr una eficiente administración de justicia.

Por otra parte, algunas de las decisiones de la CIDH han sido más determinantes contra los Estados, dado que les marca pautas investigativas, desconoce la facultad para expedir leyes relacionadas con indultos y amnistías, pero va más allá, y en caso de expedirse una de estas leyes obliga a las autoridades a no darles aplicabilidad tras el control de convencionalidad de la CADH; así mismo, la obligación de extraditar; la relatividad de la cosa juzgada; la asistencia judicial entre Estados desarrollando el DIDH, especialmente a favor de las víctimas, mientras que el TEDH, enfrentado solamente a verificar casos donde por lo general se vulneran derechos individuales que no comprenden contextos tan graves como los estudiados por la CIDH, ha sido más cauteloso en sus decisiones, reconociendo la vulneración y en muchos casos ha establecido el origen de la misma, pero no brinda soluciones, herramientas o pautas de cómo corregirlos en lo sucesivo, refiriéndonos especialmente en materia penal.³⁵⁴

Finalmente con base en toda la jurisprudencia estudiada hay que reconocer, como lo sostienen algunos autores, que “nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado o abierto, que ha de interpretarse casuísticamente atendiendo a ciertos criterios objetivos”³⁵⁵, pues para ambos tribunales internacionales no se contempla la posibilidad de que el derecho al plazo razonable se garantice mediante la adopción de unos plazos en el respectivo procedimiento.

La Comisión Europea Para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ)³⁵⁶ en el programa Marco ha señalado que “parece necesario que los sistemas judiciales se doten de un nuevo objetivo: la tramitación de cada procedimiento en un tiempo óptimo y previsible. Nos vemos acostumbrados a referirnos al concepto de “tiempo razonable” previsto en el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos

³⁵⁴Citado en la obra *Dialogo jurisprudencial en Derechos Humanos entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales*. FERRER MAC- GREGOR, Eduardo y HERRERA GARCÍA, Alfonso. coordinadores. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013., p.1058. Al respecto afirma que “la CIDH (Corte IDH) es un Tribunal audaz, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es un Tribunal tímido. La Corte Interamericana es audaz porque sus decisiones tienen un efecto directo, porque la Corte anula normas nacionales (por ej. Amnistías), decide casos importantes (políticamente delicados) y es una institución reciente (no consolidada)”

³⁵⁵ PERELLO DOMENECH, *Op. cit.*, p. 16. Vid. RODÉS MATEU, Adriá. *Op. cit.*, Pág. 41. Vid. RUIZ VADILLO, Enrique. *Algunas breves consideraciones sobre las dilaciones indebidas en el proceso penal español*, *Boletín de información del Ministerio de Justicia*, No 1690, Madrid. 1993, p. 115.

³⁵⁶ Creada el 18 de septiembre de 2002, resolución (2002)

(CEDH). Sin embargo este indicador es un “límite mínimo” que traza la frontera entre vulneración y la no vulneración del convenio y por tanto no debería considerarse como un resultado adecuado cuando se produce”.

Este objetivo podría cumplirse examinando los trámites que deben regir en un procedimiento penal y regulando los términos para cada uno de ellos, porque estamos de acuerdo en que *el concepto de tiempo óptimo debe reflejar el equilibrio entre la celeridad y la justicia del proceso*³⁵⁷. Estos temas se han planteado en este trabajo, porque se evidencia (i) la necesidad de reglamentar los plazos de todo el proceso, en este caso nos referimos al penal (ii) la clasificación de los procedimientos (iii) y para ello se tendrá que reconocer que la celeridad no puede ir en detrimento de los derechos de los acusados ni de las víctimas.

Estos aportes de CEPEJ deberían ser atendidos por ambos Tribunales, dado que tienen la tarea de hacer cumplir los derechos y garantías previstos en los respectivos instrumentos internacionales, lo que a la postre redundaría a favor de todos los sujetos procesales, especialmente las víctimas.

La CIDH hace aportes muy valiosos para los derechos de las víctimas y sus familiares en cuanto al derecho a ser oídos en un plazo razonable. En lo que tiene que ver con violaciones de derechos humanos y especialmente de graves violaciones de derechos humanos, su tarea ha sido decisiva en torno a esa protección, fijando desde su primera sentencia los alcances y derechos de este sujeto procesal. El desarrollo jurisprudencial de la CIDH merece un reconocimiento especial, y se tomarán muchos de estos aportes como propuestas que deben orientar las investigaciones de violaciones de derechos humanos y de graves violaciones de derechos humanos en pro de la efectividad y cumplimiento del derecho a ser oído en un plazo razonable.

³⁵⁷ GARCÍA MALTRÁS DE BLAS, Elsa. *Dilaciones indebidas y duración de los procesos en el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: del tiempo razonable al tiempo óptimo y previsible*. Indret. Revista para el análisis del derecho. 2007. Disponible en: <http://www.indret.com>. Vid RAMÍREZ ORTIZ, José Luis. *Derechos Fundamentales y Derecho Penal: La circunstancia Atenuante de las Dilaciones Indebidas*. Revista Derecho y Proceso Penal No. 27. Ed. Aranzadi S.A. 2012. p. 6. Disponible en: <http://www.juecesdemocracia.es/pdf/dilacionesindebidasJos%C3%A9LuisRam%C3%ADrez.pdf...> Es importante la cita que hace de la CEPEJ respecto que la justicia rápida no puede pugnar con otros derechos del Convenio.

CAPITULO VII

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA – TJUE SOBRE EL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) fue creado en 1952 y su función es garantizar que la legislación de la Unión Europea (en adelante, UE) se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros y las instituciones europeas cumplan la legislación de la UE. Su sede es Luxemburgo. Su estructura es la siguiente:

Tribunal de Justicia está compuesto por un juez de cada país miembro de la Unión Europea, en adelante (UE) y once abogados generales. Resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales, ciertos recursos de anulación y los recursos de casación.

Tribunal General compuesto por un juez de cada país de la UE. Resuelve los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas y en algunos casos los gobiernos nacionales.

Tribunal de la Función Pública. Compuesto por 7 jueces. Resuelve los litigios entre la UE y su personal

Teniendo en cuenta las funciones que adelanta el TJUE consideramos importante examinar algunas sentencias con el objeto de establecer cómo aborda el tema del plazo razonable.

CASO T- 73/95 VS. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS³⁵⁸

La parte demandante interpuso recurso de anulación alegando en una de sus pretensiones violación del principio de seguridad jurídica por no haberse respetado un plazo razonable.

³⁵⁸ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) 19 de marzo de 1997. El objeto es un recurso de anulación parcial de la Decisión C(94) 1410/9 de la Comisión, relativa a una ayuda económica del Fondo Social Europeo

Revisadas las circunstancias determina el Tribunal que en este caso hubo una anulación previa de una Decisión del Tribunal de Primera Instancia, lo que obligó a la Comisión a adoptar una nueva, por lo que el tiempo transcurrido antes de la anulación de la primera carece de toda pertinencia en el contexto respecto a la segunda Decisión; se debe tomar para estos efectos el plazo entre la anulación y la nueva Decisión, o sea, más de tres años.

*“La cuestión de si el plazo en el que se ha cumplido la sentencia anulatoria es razonable debe apreciarse caso por caso. Lo razonable del plazo depende de la naturaleza de las medidas que hayan de adoptarse, así como de las contingencias propias de cada caso. Por consiguiente, en el presente supuesto, hay que tener en cuenta las diferentes etapas que integraron el procedimiento de la decisión”*³⁵⁹ Hay que considerar que por la anulación fue necesario volver a reconstruir los datos del expediente, enviar así mismo una delegación de control a Portugal, los datos recogidos y varias consultas a las autoridades portuguesas, circunstancias particulares que llevan al Tribunal a señalar que no se rebasó el plazo.

*“Clarifica el Tribunal que cuando se trata de un recurso de anulación, un retraso así sea no razonable, no puede, en sí mismo, determinar la ilegalidad de la Decisión objeto del litigio, y de este modo, justificar su anulación en virtud de la violación del principio de seguridad jurídica. Un retraso sufrido en el desarrollo de cumplimiento de una sentencia no puede afectar, por sí solo, a la validez al acto que da lugar, ya que, si dicho acto fuera anulado únicamente en razón de su carácter tardío, se haría imposible adoptar un acto válido, dado que el acto que hubiera a sustituir al anulado no podría ser menos tardío que éste”*³⁶⁰

Conclusiones: (i) Parte el Tribunal de un estándar individual para establecer la razonabilidad del plazo, concretando la necesidad de examinar caso por caso. (ii) A pesar de no abordar el criterio relacionado con la complejidad del asunto, ello se traduce en cuanto predicó que lo razonable del plazo depende de la naturaleza de las medidas que hayan de adoptarse, así como de las contingencias propias de cada caso, o sea la complejidad del mismo. (iii) También hace un análisis global, en la medida en que tiene en cuenta las diferentes etapas que integraron el procedimiento de la decisión. (v) Un punto muy importante que trata el Tribunal tiene que ver con la negativa a sancionar la vulneración del derecho al plazo razonable con anulación de la decisión, porque en su concepto resulta improcedente, y en ello

³⁵⁹ Punto 45

³⁶⁰ Punto 47

tiene toda la razón, pues como bien lo sostiene, ese solo acto, de por sí, no concederá validez a la nueva decisión, porque también va a ser tardío.

CASO T-213/95 y T- 18/96 VS. COMISIÓN DE COMUNIDADES EUROPEAS³⁶¹

Los demandantes invocaron que la Comisión vulneró el artículo 6 del CEDH, argumentando violación a los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima y del derecho de ser oídos.

Para el Tribunal de Justicia la observancia por la Comisión de un plazo razonable para adoptar las decisiones que ponen fin a procedimientos administrativos en materia de política de competencia constituye un principio general del derecho comunitario.

El Tribunal mencionó los criterios que aplica para examinar la razonabilidad del plazo, partiendo de las circunstancias precisas de cada asunto y, en particular, el contexto del mismo, las diferentes fases del procedimiento que debe seguir la Comisión, la complejidad del asunto y la trascendencia para las distintas partes interesadas. En consecuencia, hizo una revisión de cada una de las etapas del procedimiento, estableciendo si en cada una de ellas el plazo fue razonable o no.

Examinadas las mismas concluyó que la Comisión observó el plazo razonable, y respecto al plazo de once meses que tomó la Comisión para preparar una decisión final para todas las lenguas oficiales de la Comunidad, encontró que ello no constituye una violación del principio de observancia de un plazo razonable en un procedimiento administrativo en materia de política de competencia.

Conclusiones: (i) El Tribunal de Justicia toma los criterios que ha establecido el TEDH para establecer la razonabilidad o no del derecho al plazo razonable en una actuación administrativa porque parte de las circunstancias precisas de cada asunto, tal como lo reclama el TEDH; tuvo en cuenta también el contexto, el cual determina las circunstancias políticas, sociales, económicas, etc., en que se desarrollan los hechos; si el caso es complejo o no, atendiendo a circunstancias de hecho y de derecho, y especialmente la trascendencia para las distintas partes interesadas. (ii) igualmente tiene en cuenta, como el TEDH, el análisis global, examinando cada una de las etapas relacionadas en el procedimiento, para de esta

³⁶¹ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala quinta ampliada) 22 de octubre de 1997. Se solicita que se condene a la Comisión a reparar perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de un comportamiento ilegal. También que se anule la Decisión 95/551CE.

forma revisar si en alguna de ellas no se observó el plazo razonable. (iii) En este caso no determinó la vulneración al considerar que primó la complejidad del caso en razón de que la Comisión debió preparar su decisión en varias lenguas oficiales.

CASO T- 190/00 VS. COMISIÓN DE COMUNIDADES EUROPEAS³⁶²

La demandante alegó que la Comisión no concluyó el procedimiento administrativo en un plazo razonable, dado que el régimen de ayudas previsto por la ley regional No 68/95 fue notificado el 8 de agosto de 1995 y que transcurrieron prácticamente dos años entre la Decisión de febrero 13 de 1998 para incoar el procedimiento contemplado en el artículo 88 CE y la Decisión final de 22 de diciembre de 1999.

Frente a estos hechos el Tribunal recordó que la observancia por parte de la Comisión de un plazo razonable al adoptar las decisiones que ponen fin a los procedimientos administrativos en materia de política de competencia constituye un principio de buena administración.

Para conocer si el plazo fue razonable hizo alusión a la necesidad de tener en cuenta las circunstancias precisas de cada asunto y, en particular, el contexto del mismo, las diferentes fases del procedimiento que debe seguir la Comisión, la complejidad del asunto y la trascendencia para las distintas partes interesadas.

Para resolver la controversia el Tribunal no aceptó las argumentaciones de la parte demandante, porque no ofreció ninguna justificación y solo se limitó a predicar la no razonabilidad de los plazos. Por consiguiente, concluyó el Tribunal, que el plazo no fue razonable por causa atribuible a las mismas autoridades italianas, en la medida que respondieron de manera parcial e incompleta las solicitudes de la Comisión.

Con respecto a otro plazo que tenía la Comisión para tomar la Decisión final, el Tribunal determina “*que no cabe considerar poco razonable un plazo de 22 meses*

³⁶² Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala quinta ampliada) 27 de noviembre de 2003. Tiene por objeto la anulación de la Decisión 2000/319/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativa al régimen de ayudas estatales ejecutado por Italia a favor de la producción, transformación y comercialización de los productos incluidos en el anexo I del Tratado CE (DO 2000, L110, p.17), en la medida en que declara que las ayudas estatales previstas por el artículo 6 de la Ley No 68, de 27 de septiembre de 1995, de la región de Sicilia, en favor de empresas del sector de la agricultura y de la pesca son incompatibles con el mercado común, y que Italia no debe otorgar dichas ayudas y debe suprimirlas.

*por el solo hecho que sobrepase el plazo de 18 meses, que si bien constituye un objetivo que debe respetarse, no constituye un plazo imperativo*³⁶³.

Conclusiones: (i) Se siguen los criterios fijados por el TEDH en el tópico de plazo razonable, teniéndose como base las circunstancias particulares de cada caso, y especialmente el contexto de los hechos. (ii) Cuando revisa las fases del procedimiento se equipara al análisis global que realiza el TEDH. (iii) Es preocupante que el Tribunal de Justicia sea el primero en avalar el incumplimiento de los términos del procedimiento que debe seguir la Comisión, aduciendo que a pesar de existir, ello *“no constituye un plazo imperativo”*, comportando esto un mal precedente en la Unión Europea; por el contrario, debe exigir que los términos se cumplan de manera preceptiva, y que justifique que así no sea en atención a circunstancias excepcionales.

CASO T- 144/02 VS. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS³⁶⁴

Una de las alegaciones propuesta por los demandantes es la relacionada con que el artículo 90 del Estatuto no fija un plazo para la presentación de una demanda, y por tanto, no cabe oponerles ninguna prescripción en relación con el momento en que dirigieron su solicitud de indemnización a la Comisión. Sostienen que exigir la observancia de un plazo razonable, no previsto en las disposiciones legales, violaría los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad y que oponer tal plazo, frente a la interposición de un recurso, constituiría una vulneración a un proceso equitativo consagrado en el artículo 6 del CEDH.

El Tribunal reconoce que efectivamente el Estatuto no establece un plazo para la interposición de una demanda, pero no obstante lo anterior, *“la observancia de un plazo razonable se exige en todos los casos en que, ante el silencio de las disposiciones legales, los principios de seguridad jurídica o de protección de la confianza legítima se oponen a que las instituciones comunitarias o las personas físicas o jurídicas actúen sin límite alguno de tiempo, con riesgo de poner así la estabilidad de situaciones jurídicas consolidadas. En las acciones de responsabilidad que puedan dar lugar a una carga pecuniaria para la Comunidad, la observancia de un plazo razonable para presentar una solicitud de indemnización*

³⁶³ Párrafo 139.

³⁶⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de Primera Instancia (Sala Primera) 5 de octubre de 2004. Los demandantes pretendían una indemnización de los perjuicios materiales supuestamente sufridos por el hecho de no haber sido contratados como agentes de las comunidades para ejercer su actividad en el seno de la Empresa Común Joint European Torus (JET).

se inspira también en el interés de proteger las finanzas públicas que se expresa particularmente, para las acciones en materia de responsabilidad extracontractual, en el plazo de prescripción de cinco años establecido en el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia.”³⁶⁵ (...)” Para las instituciones comunitarias la observancia de un plazo razonable constituye un aspecto del principio de buena administración y deriva de la exigencia fundamental de seguridad jurídica”.

Por otro lado, el Tribunal hace una precisión para que las personas físicas o jurídicas, en caso de un recurso de indemnización, aporten pruebas de que obró con una diligencia razonable para limitar la magnitud del perjuicio, si no quiere correr el riesgo de soportar el daño ella sola.

Reclamó que el agente o funcionario ha de observar un plazo razonable para presentar una solicitud ante la institución comunitaria a partir del momento en que tiene conocimiento de un acto o de un hecho nuevo sustancial, haciendo exigible por vía de analogía este mismo requerimiento a una petición de Decisión que emane de personas que no son funcionarios ni agentes, pero que se dirigen a la institución comunitaria y solicitan a ésta que se pronuncie.

Reconoce el Tribunal que la observancia de un plazo razonable impuesta a los particulares para presentar una solicitud de reparación de un perjuicio causado por la Comunidad en el marco de sus relaciones con sus agentes está vinculado a la seguridad jurídica, de evitar exponer el presupuesto comunitario a gastos asociados a un hecho inicial demasiado alejado del tiempo.

Para el Tribunal la exigencia de observar un plazo razonable, lejos de vulnerar el principio de seguridad jurídica, garantiza la seguridad de las relaciones jurídicas. Aduce que los demandantes debieron haber dirigido sus pretensiones de indemnización para que éstas se hubieran considerado en un plazo razonable a partir del momento en que tuvieron conocimiento de la situación. Nuevamente reitera la aplicación de los criterios para considerar el carácter razonable del plazo, que deben apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de la trascendencia del litigio para el interesado, de la complejidad del asunto y del comportamiento de las partes.

Conclusiones: (i) el Tribunal reitera los criterios para considerar la razonabilidad del plazo. (ii) Es importante la decisión a los fines de este trabajo en la medida en que se deja de manifiesto la necesidad de reglamentar los términos en todas las materias, no solo en el campo penal, sino también en el comercial,

³⁶⁵ Párrafos 57 y 58.

administrativo, civil, etc., ello con el fin de ofrecer una seguridad jurídica y no tener que acudir a la analogía que genera problemas, especialmente al derecho al plazo razonable. (iii) El derecho al plazo razonable está vinculado con el principio de la seguridad jurídica, para garantizar la seguridad de las relaciones jurídicas.

CASO T- 347/ 03 VS. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS³⁶⁶

El Tribunal comienza recordando su jurisprudencia con respecto al carácter razonable de la duración de un procedimiento administrativo, que debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, del contexto de éste, de las diferentes fases del procedimiento seguido, de la complejidad del asunto y de su trascendencia para las diferentes partes interesadas.

Examinadas las circunstancias especiales del caso, el contexto, observó que era un caso que estaba conectado con un proceso penal, y que por ello, cuando hubo un archivo de las diligencias penales, la Comisión adoptó la Decisión, que se produjo en un tiempo razonable, siendo las autoridades portuguesas las que demoraron el trámite de la notificación.

Conclusión: Aplicados los criterios que orientan la razonabilidad o no del plazo razonable, primó el comportamiento del interesado como responsable de la vulneración.

CASO T-95/03 VS. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS³⁶⁷

Los demandantes afirmaron que la Comisión violó el principio de buena administración al no proceder a un examen diligente e imparcial de su denuncia, al considerar que realizó una instrucción muy dilatada en el tiempo, más de dos años y medio, con el consiguiente perjuicio para las asociaciones demandantes y sus miembros.

³⁶⁶ Sentencia del Tribunal de Primera Instancias (Sala Quinta) 30 de junio de 2005. El objeto es la anulación de la Decisión de la Comisión C (2002) 3455, por la que se reduce la ayuda económica del Fondo Social Europeo.

³⁶⁷ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala segunda ampliada) 12 de diciembre de 2006. El objeto de los demandantes es la anulación de la Decisión C (2002) 4355, final de la Comisión, de 13 de noviembre de 2002, relativa a la legislación española sobre la apertura de estaciones de servicio por hipermercados.

El Tribunal, para examinar si la duración de un procedimiento de examen preliminar resulta razonable, nuevamente predica la necesidad de tener en cuenta las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, el contexto del mismo, las diferentes fases del procedimiento que debe seguir la Comisión, la complejidad del asunto y su trascendencia para las distintas partes. El Tribunal examinó el contexto en que se desarrollaron los hechos, la complejidad del caso, relacionada con examen de documentos, comunicaciones, el plazo de cada una de las etapas, entre otras cosas, pero a pesar de ello dio la razón a los denunciantes respecto que la comisión tardó 28 meses sin adoptar la decisión impugnada sobrepasando el plazo razonable, y por ello, incumplió su obligación de realizar un examen diligente, concluyendo que solo se presentó la inobservancia del plazo razonable, sin que se aceptaran sus pretensiones por esta argumentación.

Conclusiones: El Tribunal reitera los criterios que a lo largo de su jurisprudencia ha tomado del TEDH para determinar la razonabilidad del plazo. (ii) No obstante, el reconocimiento de la lesión del derecho al plazo razonable, esta situación de por sí no se tradujo en consecuencias favorables para la pretensión de los denunciantes respecto a la anulación de la decisión.

CASO C-385/07 VS. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS³⁶⁸

Ratifica en esta sentencia que el carácter razonable de la duración del procedimiento debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto, como la trascendencia del litigio y el comportamiento de las partes. *“A este respecto, la lista de los criterios pertinentes no es exhaustiva y la apreciación del carácter razonable de dicha duración no exige un examen sistemático de las circunstancias del asunto en función de cada uno de ellos cuando la duración del proceso se revela justificada en función de uno solo. Así, la complejidad del asunto o un comportamiento dilatorio del recurrente pueden tenerse en cuenta para justificar un plazo a primera vista, no sólo para el propio demandante y para sus competidores, sino también para terceros, debido al gran número de personas afectadas y a los intereses económicos en juego, pues se trata un litigio relativo al abuso de posición dominante de una empresa que exige un canon por la utilización, muy generalizada, de su distintivo, y habida cuenta de las posibles consecuencias*

³⁶⁸ Sentencia Tribunal de Justicia (Gran Sala) 16 de julio 2009. El 2 de septiembre de 1992, DSD notificó a la Comisión de las Comunidades Europeas el contrato de utilización del distintivo y el contrato de servicios, con el fin de obtener una declaración negativa o, en su defecto, una decisión de exención.

del resultado de dicho litigio, un procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia que haya durado alrededor de 5 años y 10 meses, cuando no pueda justificarse por ninguna de las circunstancias propias del asunto, como la complejidad del litigio, el comportamiento de las partes o la presencia de incidentes procesales promovidos por las partes, o como la práctica por el Tribunal de Primera Instancia de diligencias de ordenación del procedimiento o de prueba incumple las exigencias derivadas del respeto de una duración razonable del procedimiento”.

“Si bien es cierto que la inobservancia de una duración razonable del proceso por el Tribunal de Primera Instancia constituye una irregularidad de procedimiento, también lo es que el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia siempre debe interpretarse y aplicarse de modo útil. Dado que no existe indicio alguno que deje traslucir que la falta de respeto de una duración razonable del procedimiento pudo tener alguna incidencia sobre el resultado del litigio, la anulación de la sentencia recurrida no repararía la violación del principio de tutela judicial efectiva cometida por el Tribunal de Primera Instancia. Además, dada la necesidad de respetar el Derecho comunitario de la competencia, el Tribunal de Justicia no puede permitir, por la mera falta de respeto de una duración razonable del procedimiento, que la parte recurrente ponga en cuestión la existencia de una infracción, pese a haber sido desestimados por infundados todos los motivos que invocó contra las afirmaciones hechas por el Tribunal de Primera Instancia a propósito de dicha infracción y del correspondiente procedimiento administrativo previo. En cambio, la falta de respeto, por el Tribunal de Primera Instancia, de una duración razonable del procedimiento puede dar lugar a una pretensión de indemnización al amparo de un recurso interpuesto contra la Comunidad con arreglo a los artículos 235 CE y 288 CE, párrafo segundo.”³⁶⁹

Resulta, en particular, que el período transcurrido entre la notificación del final de la fase escrita del procedimiento, en septiembre de 2002 y la apertura de la fase oral, en junio de 2006, fue de 3 años y 9 meses. La duración de este período no puede justificarse por las circunstancias del asunto, se trate de la complejidad del litigio, del comportamiento de las partes o de la presencia de incidentes procesales. En lo relativo, en particular, a la complejidad del litigio, procede señalar que los recursos interpuestos por DSD contra la Decisión controvertida y la Decisión 2001/837, a pesar de exigir un examen en profundidad del Decreto de envases, de los vínculos contractuales de DSD, de las decisiones de la Comisión y de las alegaciones formuladas por DSD, carecían de la suficiente dificultad o envergadura

³⁶⁹ Puntos 6 y 7

*como para impedir que el Tribunal de Primera Instancia sintetizase dichos aspectos y preparase la fase oral del procedimiento en menos de 3 años y 9 meses.*³⁷⁰

Es un caso donde se reconoce la vulneración del derecho al plazo razonable, porque aplicados los criterios la actuación del Tribunal de Primera Instancia no se ajustó al respecto del artículo 6.1 del CE, sin embargo ello no comporta la anulación de la sentencia recurrida, sino que genera el reconocimiento de una indemnización, concluyendo que resulta infundado el argumento según el cual excederse del plazo razonable debe conducir a la anulación de la sentencia recurrida, a fin de reparar dicha irregularidad de procedimiento.

Conclusión: Es un caso donde las autoridades fueron las responsables de la vulneración del derecho, sin que tal circunstancia de por sí conlleve la anulación de todo el procedimiento, sino que admite el Tribunal que la vía para reparar el daño causado con la lesión es la indemnización.

CASO F-124/05 Y F-96/06 VS. COMISIÓN EUROPEA³⁷¹

El demandante consideró que a causa de la excesiva duración del procedimiento en el proceso disciplinario ha sufrido un perjuicio moral.

El Tribunal reconoce que efectivamente frente a una situación de grave incertidumbre cuya duración sobrepasa lo razonable, las personas pueden reaccionar de distinto modo, en función, por ejemplo, de su eventual fragilidad psicológica. Así, las consecuencias de un procedimiento disciplinario con una duración que sobrepase lo razonable pueden ser, bien un sufrimiento psíquico, bien, en los casos más graves, la aparición de una auténtica enfermedad psíquica o el agravamiento de una enfermedad psíquica preexistente.

En este punto hace unas precisiones importantes, *“Así pues, por lo que respecta concretamente al perjuicio moral que la duración excesiva de un procedimiento disciplinario puede provocar, es preciso distinguir, por una parte, el perjuicio moral causado a todo funcionario o agente, independientemente de una eventual enfermedad, y, por otra parte, el perjuicio causado por una eventual enfermedad psíquica —o por el agravamiento de una enfermedad de esta índole—*

³⁷⁰ Puntos 184 y 185

³⁷¹ Sentencia Tribunal de la Función Pública. 13 de enero de 2010. El demandante solicita que se anule la decisión de la Comisión de febrero de 2005 donde solicitaba el archivo del procedimiento disciplinario, pero fue denegado.

*que tenga su origen en la duración excesiva de dicho procedimiento (véase por analogía la sentencia del Tribunal de 2 de mayo de 2007, Giraudy/Comisión, F-23/05, RecFP pp. I-A-1-121 y II-A-1-657, apartados 197 a 202). Por consiguiente, procede declarar la admisibilidad de una pretensión de indemnización en la que se solicite la reparación del primer tipo de perjuicio, sea cual sea la situación en que se encuentre el eventual procedimiento abierto, por otra parte, por el funcionario con arreglo al artículo 73 del Estatuto.*³⁷²

Conclusión: el Tribunal al reconocer la excesiva duración del procedimiento admite una vez más la admisibilidad de la vía indemnizatoria para reparar el respectivo perjuicio.

CASO T- 214/12 VS. COMISIÓN EUROPEA³⁷³

La demandante alegó que, en su conjunto, la duración del procedimiento administrativo y jurisdiccional, va más allá del plazo razonable, especialmente el procedimiento en el Tribunal, entre la terminación de la fase escrita y la apertura de la fase oral.

Como marco jurídico se parte del artículo 6 del CE reconociendo que este principio del plazo razonable, según la jurisprudencia reiterada, es aplicable para los procedimientos administrativos en materia de política de la competencia ante la Comisión, indicándose que fue confirmado este principio por el artículo 41 apartado 1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En este caso el Tribunal llama la atención porque la denunciante no alegó que la duración del procedimiento haya tenido alguna incidencia en el contenido de la decisión impugnada o que haya podido afectar la resolución del litigio o que la duración haya tenido efecto sobre sus posibilidades de defensa, ya sea en el procedimiento administrativo o jurisdiccional, pero invoca la duración del procedimiento para solicitar la reducción de la multa.

Realizado el análisis global se establece que el procedimiento administrativo tomó una duración de siete años y 4 meses. Establecido lo anterior, el Tribunal aplicó los criterios que reiteradamente ha desarrollado en su jurisprudencia, relacionados con las circunstancias propias del caso, la trascendencia del litigio para

³⁷² Puntos 148 a 150

³⁷³ Sentencia del Tribunal General (sala tercera) 5 de junio de 2012. La demandante pretende la anulación de una Decisión final de la Comisión o subsidiariamente la reducción de la multa.

el interesado, la complejidad del asunto, el comportamiento del interesado y de las autoridades. Destacó que en este caso la interesada no manifestó cuál era la trascendencia del asunto para ella, tampoco que pudiera atribuirle un comportamiento que retrasara el procedimiento. Determinó que la duración excesiva del procedimiento está justificada en las circunstancias y complejidad del asunto. Respecto a las circunstancias enfatizó que se incoaron cinco recursos, dos de ellos en lenguas y procedimientos diferentes, recursos que a su vez planteaban un número considerable de cuestiones de hecho y de derecho, demandando del Tribunal una instrucción profunda, lo que condujo a que dictara cinco sentencias. Por consiguiente, encontró que esas circunstancias justificaron el plazo que duró el procedimiento.

Conclusión: el criterio de complejidad se impuso en este caso atendiendo a circunstancias de hecho y de derecho.

CASO T- 267/07 VS. COMISIÓN EUROPEA³⁷⁴

Italia en sus argumentaciones señaló que el artículo 8, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento No. 1663/95 establece que el Estado miembro está obligado a responder en un plazo de dos meses a la comunicación por la que la Comisión le haya informado de los resultados de un control y que la Comisión debe observar ese mismo plazo de dos meses cuando tiene que pronunciarse sobre las comunicaciones transmitidas en virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento No 595/91 y que la inexistencia de un plazo en las normas antes mencionadas no autoriza a que se supere un plazo razonable dentro de los límites indicados por la jurisprudencia, que fue superado ampliamente cuando la Comisión adoptó la decisión 2006/278.

El Tribunal desestimó la argumentación de la República Italiana al sostener que si pretendía reprochar a la Comisión no haber adoptado, en un plazo razonable, una decisión expresa, existía la posibilidad de instar a la Comisión a pronunciarse sobre estos casos y, de ser necesario, de introducir un recurso de conformidad con

³⁷⁴ Sentencia del Tribunal General (Sala octava) 7 de junio de 2013. Los demandantes buscan con su pretensión la anulación parcial de la Decisión 2007/327/CE, de la Comisión, de fecha 27 de abril de 2007, relativa a la liquidación de cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros, correspondientes a los gastos financiados por la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) en el ejercicio financiero 2006.

lo dispuesto en el 232 del CE, apartado 2, a fin de que el juez de la Unión declarara la omisión de la Comisión.

Conclusión: para el Tribunal, pese a que existían unos plazos que debía cumplir la Comisión, no reconoció la violación, descartando la pretensión ante la omisión, por no haber activado los recursos que el CE establece para evitar su lesión; por tanto, las consecuencias de su vulneración las radicó en el mismo interesado.

CASO C-243/12 P VS. COMISIÓN EUROPEA³⁷⁵

El Tribunal comienza recordando que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la inobservancia de un plazo de enjuiciamiento razonable, como vicio de procedimiento constitutivo de una violación de un derecho fundamental, debe dar a la parte afectada la posibilidad de interponer un recurso efectivo que pueda ofrecerle una reparación adecuada.

Pero admite que no obstante lo anterior, y dada la necesidad de hacer que se respeten las normas del Derecho de la Unión en materia de competencia, el Tribunal de Justicia *no puede permitir que, por la mera inobservancia de un plazo de enjuiciamiento razonable, una parte recurrente cuestione el importe de una multa que se le ha impuesto*, pese a haber sido desestimados todos los motivos invocados contra las conclusiones del Tribunal General a propósito del importe de esa multa y de las conductas que sanciona.

En efecto, el Tribunal de Justicia también ha declarado que el incumplimiento, por un órgano jurisdiccional de la Unión, de su obligación derivada del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, de juzgar los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable debe ser sancionado por la vía de un recurso de indemnización interpuesto ante el Tribunal General, por constituir tal recurso un remedio efectivo. De ello se desprende que una pretensión de reparación del daño ocasionado por la inobservancia, por parte del Tribunal General, de un plazo de enjuiciamiento razonable no puede formularse directamente ante el Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, sino que debe plantearse ante el propio Tribunal General (véase, en particular, la sentencia Groupe

³⁷⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) 19 de junio de 2014. El denunciante solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea FLS/Plas/Comisión porque desestimó un recurso que pretendía la anulación de la decisión C (2005) 4634 final de la Comisión o con carácter subsidiario la reducción de la multa.

*Gascogne/Comisión, EU:C:2013:770, apartados 83 y 84). Ello no obstante, resulta obligado observar que la duración del procedimiento ante el Tribunal General y que dio lugar a la sentencia recurrida, que fue de más de seis años, no puede justificarse por ninguna de las circunstancias propias de este asunto.*³⁷⁶

Examinadas las fases del procedimiento, la conclusión final es que el plazo tomado fue de cuatro años y cuatro meses, período que no tiene explicación frente a los criterios de la complejidad del litigio, porque el recurso no presentaba un grado de dificultad particularmente elevado. Con respecto al comportamiento de las partes, a pesar de que eran quince personas las que interpusieron recursos de anulación contra la Decisión ante el Tribunal General, esta circunstancia no pudo impedir a dicho órgano jurisdiccional hacer un compendio de los autos y preparar la fase oral del procedimiento en un lapso inferior a cuatro años y cuatro meses, ni se vislumbró que los recurrentes contribuyeron con su conducta a demorar la tramitación del asunto. Por último, de los autos tampoco resulta que el procedimiento se interrumpiese o se retrasase por la aparición de incidentes procesales que pudieran justificar su duración.

En este caso reconoció que el procedimiento sustanciado ante el Tribunal General vulneró el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta por no haber satisfecho las exigencias derivadas de la observancia de un plazo de enjuiciamiento razonable.

Conclusión: es otro caso donde las autoridades generaron la vulneración, porque el caso no era complejo, así que reitera el Tribunal que la vía frente a esta vulneración es la indemnización.

CASO T-47/10 VS. COMISIÓN EUROPEA³⁷⁷

En este asunto una de las pretensiones de los demandantes era que el Tribunal reconociera las vulneraciones a los principios de diligencia administrativa y de observancia de un plazo razonable, y de manera subsidiaria la reducción de la multa.

³⁷⁶ Puntos 134 y 135.

³⁷⁷ Sentencia del Tribunal General (Sala cuarta). 15 de julio de 2015. El objeto es conseguir la anulación de la decisión C (2009) 8682 final de la Comisión, de 11 de noviembre de 2009 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE y del artículo 53 del acuerdo EEE – espacio económico europeo (asunto COMP/38589- estabilizadores térmicos), o, subsidiariamente, de reducción del importe de multas impuestas. Entre las varias situaciones jurídicas planteadas se sustentó la vulneración de los principios de diligencia administrativa y la inobservancia de un plazo razonable.

Sobre dicha solicitud el Tribunal recordó que aun sin una vulneración al derecho de defensa por la duración del procedimiento administrativo, la infracción al principio de observancia de un plazo razonable permite al Tribunal reducir el importe de las multas impuestas.

Que en el presente asunto la Comisión reconoció la excesiva duración del procedimiento administrativo, reduciendo el importe de las multas impuestas a todas las empresas demandadas, excepto las demandantes, alegando una diferencia de situaciones con respecto a las empresas, situación que el Tribunal encuentra incompatible con el principio de tutela judicial efectiva.

Conclusiones: (i) En este caso el Tribunal parte del hecho que hubo un desconocimiento de la observancia de un plazo razonable. (ii) Al igual que la Corte Interamericana trata este derecho como un principio. (iii) Teniendo en cuenta que la Comisión reconoció la propia infracción a la observancia del plazo razonable, el Tribunal parte de esta admisión para no hacer ninguna consideración al respecto del porqué se violó este derecho.

CASO T- 461/13 VS. COMISIÓN EUROPEA³⁷⁸

Una de las argumentaciones del Reino de España contra la Comisión fue el haber violado normas de procedimiento administrativo porque hubo dilación excesiva.

En este caso el Tribunal señaló que en los casos de ayudas de Estado existe la obligación de actuar dentro de un plazo razonable y no está autorizada a perpetuar un estado de inactividad durante la fase previa de examen. Recordó que ese carácter razonable de la duración del procedimiento debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto, la complejidad de éste y el comportamiento de las partes.

El Tribunal revisó cada una de las etapas del procedimiento, estableciendo que un término de 16 meses en la etapa inicial no es excesivo por las circunstancias del asunto, en consideración a la necesidad de implicar a las autoridades españolas en los niveles central, regional y municipal y el tiempo necesario para aportar información complementaria. En cuanto a la segunda fase, estimó que duró menos

³⁷⁸ Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) 26 de noviembre 2015. Tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 2014/489/UE relativa a una ayuda estatal concedida por el Reino de España para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas.

de 33 meses, término en el cual las autoridades españolas solicitaron prórroga para hacer observaciones, pero también se recibieron observaciones de las Comunidades Autónomas y de empresas interesadas y hubo reuniones entre las autoridades españolas y la Comisión. Este análisis llevó a descartar que el plazo fuera irrazonable, en la medida que encontró que el asunto era complejo.

Conclusión: La complejidad del caso fue el factor que generó la dilación del asunto, por tanto, el plazo resultó ser razonable.

7.1 CONSIDERACIONES

El Tribunal de Justicia sigue las orientaciones o criterios fijados por el TEDH con el fin de establecer la razonabilidad o no del plazo cuando se argumenta la vulneración en las actuaciones sometidas a su consideración. Por ello debemos señalar que en primer lugar reclama que se respete y aplique en la UE el artículo 6.1 del CEDH, el mismo que aparece recogido en la Carta de la UE, y que aplica por consiguiente para todo tipo de investigaciones.

Siempre parte de las circunstancias particulares del caso, revisa el contexto, la complejidad del asunto, el comportamiento del interesado y de las autoridades, pero también, al igual que el TEDH, tiene en cuenta si ese asunto tuvo o no trascendencia para el interesado, porque de ser así, llama la atención, se demanda de las autoridades más agilidad en la resolución del caso. Esa trascendencia, debe probarla el interesado, de ahí que de no ser así el Tribunal no considera tal criterio.

El contexto es importante a la hora de establecer si fue razonable el plazo, el que en un caso dado tendría que estar relacionado con el componente de complejidad, aunque se cita, como un criterio orientador de esa tarea, no como un factor de complejidad. En el contexto cuentan las circunstancias políticas, sociales, económicas, etc., en que se desarrollan los hechos.

Cuando revisa la complejidad del caso ha destacado situaciones de hecho relacionada con el número de personas interesadas, número de diligencias a practicar, las lenguas en que hay que traducir las diferentes fases del procedimiento, las autoridades que deben intervenir, entre otras cosas, así que al igual que el TEDH no parte de una relación taxativa, sino meramente enunciativa. Lo mismo hay que señalar respecto de la complejidad por cuestiones de derecho, donde tiene en cuenta dificultades de la ley, la aplicación, etc.

El Tribunal también tiene en cuenta el análisis global; por ello revisa cada una de las etapas procesales, todo esto para concretar el plazo tomado y si es razonable o no en cada una de esas etapas. En este tópico revisa si hay plazos o no y, de ser así, cuánto tiempo tomaron de más las autoridades para la decisión final, lo que es importante, porque al menos tiene ese referente para realizar el respectivo análisis, siendo este aporte trascendental en la medida que parte de un supuesto preciso, claro, que no deja márgenes de dudas respecto de si cumplió o no con ese plazo.

Es de destacar que en aquellas situaciones en que no hay plazo establecido, el Tribunal determina que debe aplicarse por analogía otros plazos que regulen materias semejantes, lo que significa que para este Tribunal los plazos son un buen punto de partida a la hora de revisar la razonabilidad del tiempo que tomó el procedimiento, ya sea este administrativo, comercial, disciplinario, etc.

No obstante lo anterior, ese avance en materia del respeto del derecho al plazo razonable, pierde todo su valor con manifestaciones que nos desalientan sobre la protección al derecho al plazo razonable, como la siguiente: **“que no cabe considerar poco razonable un plazo de 22 meses por el solo hecho que sobrepase el plazo de 18 meses, que si bien constituye un objetivo que debe respetarse, no constituye un plazo imperativo”**.

En aquellos casos donde los plazos no los han cumplido las autoridades, el Tribunal admite que la lesión debe repararse, considerando que debe ser a través de una indemnización, como opción viable para reparar los daños causados.

Determinada la vulneración del plazo razonable, esto no conlleva la nulidad de la decisión, como en la mayoría de las veces lo pretenden los demandantes; esta solución no la comparte el Tribunal, considerándola improcedente, impertinente. El Tribunal reitera su jurisprudencia que la vía no es la nulidad, porque el vencimiento del plazo no puede aparejar la ilegalidad de la decisión, por ello acertadamente ha establecido que la nueva decisión también será tardía.

Compartimos plenamente esta posición, la nulidad de una decisión que se ha generado dentro de un procedimiento retardado, con violación de los plazos, antes que un remedio, es generar más dilación, en la medida en que se requeriría volver a producir otra decisión que también será tardía, ahí no existe de verdad ninguna discusión.

Por ello, en esas circunstancias el Tribunal realiza un test de ponderación o de razonabilidad cuando advierte que por un lado hay violación del derecho al plazo razonable, pero por otra parte que ello en sí no puede justificar una determinación

que conlleve la ilegalidad de la decisión controvertida, porque de hacerlo atentaría también contra el principio de seguridad jurídica y el principio de tutela judicial efectiva.

Esta posición del Tribunal es muy acertada, porque declarar la nulidad de la decisión no va a reparar la lesión, por el contrario, la nueva también va a ser tardía, porque al plazo ya vencido tendrá que sumarse el que tome la respectiva autoridad para producir otra decisión; por consiguiente, no es una solución acertada.

Consecuente con lo anterior, cuando el Tribunal advierte la violación del derecho al plazo razonable la solución que ha reconocido es la “indemnización”, pero es muy claro en sustentar que la vulneración del plazo, de por sí, no conlleva una nulidad de la sentencia o decisión.

Hay que reconocer que el Tribunal en el análisis de los procedimientos tiene en cuenta los plazos que han sido señalados, y por lo general es a partir de ese plazo que comienza a determinar si se cumplió o no el plazo razonable, pero sin considerar que ese plazo sea imperativo como ya se indicó anteriormente. Cuando el tiempo ha sido excesivo aplica los criterios señalados por el TEDH, partiendo por las circunstancias de cada caso, del contexto, que es examinado de manera independiente, no como un factor de complejidad, en consecuencia, tiene en cuenta también si el asunto era complejo o no, el comportamiento del interesado, de las autoridades, y el interés que arriesga la persona interesada, que debe haber demostrado si fue alegado por la parte demandante.

Podemos señalar que hay por consiguiente avances en la jurisprudencia del TJUE, que examina esos plazos y aduce que cuando no se han fijado por la norma ello no es motivo para no observar el artículo 6.1 del CEDH., aunque haciendo la respectiva crítica que no los toma de manera imperativa.

El hecho de que considere que las decisiones que ponen fin a los procedimientos administrativos en materia de política de competencia constituye un principio de buena administración es un buen precedente en pro del derecho al plazo razonable.

Esperamos que a futuro en cada Estado de la Unión Europea se establezcan siempre los plazos que deben regir todos los procedimientos, pues los vacíos relacionados con su no reglamentación permite arbitrariedades de los funcionarios encargados de hacer aplicar las respectivas leyes; ésta deberá ser siempre la orientación, pues facilita el trabajo que tienen que realizar los funcionarios judiciales, los magistrados, en la labor diaria, con la respectiva exigencia de observarlos de

manera rigurosa, imperativa, y que el no cumplimiento obedezca a razones muy extraordinarias, entre ellas, la complejidad del asunto, porque este criterio no puede desconocerse.

CAPITULO VIII

¿QUÉ SOLUCIÓN ADOPTAR CUANDO SE HA VIOLADO EL DERECHO A SER OÍDO EN UN PLAZO RAZONABLE?

En este capítulo analizaremos las consecuencias cuando se ha producido la violación del derecho a ser oído en un plazo razonable en el proceso penal³⁷⁹, y cabe entonces preguntarse ¿qué decisiones deberán tomarse para hacer frente a dicha vulneración? ¿Aplicación de una atenuante?; ¿la nulidad de los actos?; ¿la preclusión?; ¿el sobreseimiento?; ¿el Indulto?; ¿debe dictarse una decisión de fondo?; ¿debe ordenarse el archivo de las diligencias o dictarse una sentencia absolutoria?; ¿es procedente una indemnización?

El proceso penal está rodeado de una serie de garantías a favor de los sujetos procesales, de modo que su transgresión representa una serie de consecuencias negativas para ellos y que deben replicar en contra del Estado por no haber previsto herramientas para evitarlo. Por ello, se propone que el derecho al plazo razonable se garantice fijándose unos plazos procesales en cada una de sus etapas, en aras de evitar su lesión, para que de esta forma sus secuelas, por la no definición del plazo, no tengan que definirse cuando culmine el proceso penal³⁸⁰; como lo admiten los Tribunales estudiados, así se afectan la situación personal de cada uno, sus proyectos de vida, sus familias, etc., de tal modo que lo pertinente y vinculante conforme a los instrumentos internacionales estudiados es tomar acciones relacionadas con la prevención y corrección, antes que esperar que se superen términos indefinidos, inciertos, imprecisos, para entrar a demandar su

³⁷⁹ FERNANDEZ-VIAGAS BARTOLOMÉ, Plácido. *Op. cit.*, p. 213. “El tema de las dilaciones indebidas en el proceso penal presenta una especificidad con respecto a las que tienen lugar en otros procedimientos, derivada en gran medida de la importancia de los bienes jurídicos que se ponen en cuestión en dicho proceso: sustancialmente la libertad de los sometidos a enjuiciamiento”.

³⁸⁰ PASTOR, Daniel R. *Op. cit.*, págs. 341 a 343. (...) Aun cuando se afirma que la duración ha sido irrazonable, no se menciona en caso alguno, desde cuándo precisamente ha comenzado a ser irrazonable. Tal posición, en lo que toca a las consecuencias de la violación del derecho fundamental en análisis, no puede llevar más que a la compensación o reparación de los daños y molestias ocasionados por la infracción (en moneda siempre sustantiva: indemnización pecuniaria; consideración en la individualización judicial de la pena, modo de ejecución y extensión; juicio de culpabilidad de los culpables de los retrasos; etc). Sólo en casos excesivamente desproporcionados en cuanto a la duración del proceso, se ha querido ver en la violación de este derecho un impedimento para continuar adelante con la persecución penal, llegar a la sentencia y, eventualmente, aplicar la pena”.

violación. Debería invertirse la concepción reinante a la fecha, que permite que se conculque el derecho, a partir de un término indefinido e impreciso, para luego requerir, demandar la reparación, cuando ya no es posible retrotraer sus efectos negativos y dañinos.

Es un contrasentido que el énfasis se coloque en este aspecto y no en medidas cada vez más efectivas para hacerlo realidad, al menos en un porcentaje bien alto, no como ocurre hoy en día en baja proporción. En este tópico traemos a colación las recomendaciones que también ha expresado CEPEJ de establecer términos procesales como medida preventiva para conducir las investigaciones en un término óptimo.

Los Convenios internacionales, en el caso colombiano, la Convención Americana y el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos³⁸¹, obligan a que las investigaciones se realicen en un plazo razonable, lo que implica que se establezcan por el Estado estos plazos con unas consecuencias negativas en caso de vulneración, así que el compromiso debe ser la prevención, la no violación, pues ya producida no hay forma de una reparación *in natura*. Para ello lo más aconsejable es darle cumplimiento estricto a los plazos procesales que la ley contemple, y que además de estipularse esos plazos la ley procesal prevea que en asuntos de “complejidad extrema”, como los denominamos en este trabajo, cuando se conjugan muchos factores que el TEDH y la CIDH han considerado que generan complejidad, los Fiscales puedan presentar solicitud de la prórroga de los plazos, o acordarla de oficio el Juez si se avizora su incumplimiento y hay una causa justificada para acceder a esa pretensión.

Además, tampoco es fácil encontrar una solución cuando se ha vulnerado el derecho, y ahí también se presentan problemas para hallar la mejor solución, por ello el acento y preocupación en este trabajo es sobre la conveniencia de encontrar vías o instrumentos que ofrezcan alternativas viables para su prevención y garantía, para que la violación se produzca solo excepcionalmente. Revisemos entonces las opciones que se han conjugado cuando el derecho se vulneró.

En primer lugar, se cuestiona la legitimidad de la pena que se impone a una persona a quien se le ha violado el derecho al plazo razonable en la definición de

³⁸¹ Colombia ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) Entró en vigor en Colombia 23 de marzo de 1976 en virtud ley 74 de 1968) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Convención Americana. Entró en vigor en Colombia 18 de julio de 1978 en virtud de la ley 16 de 1972 y como Estado Parte asumió los compromisos de respetar y garantizar los derechos reconocidos en estos dos instrumentos internacionales (artículo 2.1 del PIDCP, y artículo 1 de la Convención).

su responsabilidad en el proceso penal, por lo cual se estima que en estos casos no es viable imponer penal alguna³⁸². Otros optan por una atenuante de la pena³⁸³, pero no es pacífica esta solución.

Lo mismo se predica respecto de la nulidad de las diligencias como otra alternativa, dejando sin sustento jurídico las actuaciones practicadas para volver a iniciarlas, o sea, que antes de avanzar, se retrocede. Se plantea el indulto, un perdón para el indiciado o acusado, como castigo para el Estado por no declararle responsable en un plazo razonable. De igual manera el sobreseimiento de las actuaciones y el archivo de las diligencias, sin posibilidad de establecer si fue responsable o no. También, que se decida definitivamente el caso o la indemnización.

Frente a la problemática revisemos cada una de ellas para ver cuál o cuáles serán las respuestas más adecuadas, para el indiciado y para las víctimas, pero sobre todo para las víctimas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos.

8.1.- Atenuante

Es una figura jurídica implementada en España por parte del Tribunal Supremo, como una mejor solución al momento de examinar la problemática en

³⁸² FERNÁNDEZ VIAGAS BARTOLOMÉ, Plácido *Op. cit.*, p. 214. “Desde un punto de vista descriptivo, se hace referencia continuamente al daño personal que genera al imputado la prolongación de las diligencias. Y, en lógica consecuencia, se ha venido especulando con la idea según la cual las dilaciones indebidas modularían el proceso hasta el punto de quedar afectada esencialmente la finalidad de la pena a imponer a través del mismo, llegando a quedar desprovista de sentido. Y es cierto que, sea cual fuere la doctrina que se sostuviere sobre la finalidad de la pena, parece que tanto su faceta retributiva como la preventiva vendrían a quedar sin sentido en el supuesto de las prolongaciones anormales del proceso. El transcurso del tiempo borra el enlace causal entre el crimen y el castigo”.

³⁸³ “. (STS 976/2005, julio 19, M.P, Monterde Ferrer). Sobre la atenuación de la pena, se ha establecido que “si el acusado ha sufrido un mal con la excesiva duración del proceso, este debe ser computado en la pena. Toda circunstancia derivada del proceso y que tenga sobre los derechos del acusado efectos de carácter aflictivo, importa una anticipada retribución, que paralelamente se debe reflejar en la pena que se imponga. Con la atenuante analógica de dilaciones indebidas, se consigue no infringir el principio imperativo de justicia de que el autor no reciba por el delito una pérdida de derechos mayor al equivalente a la gravedad de su culpabilidad”. Vid. RAMÍREZ ORTIZ, José Luis *Op. cit.*, p. 20 “Toda lesión causada injustificadamente en el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas como consecuencia de la dilación irregular del procedimiento, debe ser valorada al efecto de compensar una parte de la culpabilidad por el hecho, de forma análoga a los efectos atenuantes que producen hechos posteriores al delito (21.4 y 21.5 C.P). Y precisamente, en relación a estas causas de atenuación, las dilaciones indebidas deben reconducirse a la atenuante analógica del artículo 21.6 CP”. Vid. RUIZ VADILLO, Enrique. *Op. cit.*, p. 122.

torno al derecho a ser oído en un proceso sin dilaciones indebidas, conforme a las voces del artículo 24.2 de la Constitución española. Para ello acude inicialmente a figuras jurídicas como el indulto³⁸⁴ y la indemnización, pero posteriormente ve una respuesta en la atenuante analógica prevista en el artículo 21.6 del Código Penal, actualmente expresamente contemplada en el artículo 21.7, resultado de la dilación extraordinaria e indebida no atribuible al inculpado y que no guarde relación con la complejidad del asunto³⁸⁵, lo que se traduce en una rebaja de la pena, como compensación por el término que sufrió el acusado en ser sancionado, cuando ese transcurso del tiempo no es imputable a él, lo que implica una forma de contraprestación³⁸⁶ por el tiempo que injustamente esta persona estuvo sub-júdice en un proceso, sin una decisión firme, o sea, que es una medida que beneficia al acusado, aunque para algunos autores no sea así³⁸⁷. Busca disminuir el contenido

³⁸⁴ ASÚA, BATARRITA. Adela. “*Causas de exclusión o restricción de la punibilidad de fundamento constitucional*”, En el Nuevo Código Penal: Presupuestos y Fundamentos. Libro homenaje al profesor Dr. D. Ángel Torío López. Ed. Comares, Granada.1999. p. 164. Según la autora, “en casos flagrantes de extemporaneidad en la condena, en los años 80 comenzaron a ensayarse algunas soluciones, como la “no ejecución de la pena” como forma de paliar *in natura* los efectos lesivos de prolongadas dilaciones indebidas, no llegó a cuajar por su descalificación ante el TS y por el propio TC. Durante un tiempo, a lo largo de los años 90, el único remedio compensatorio en sede penal quedó fijado en la vía del indulto, aparte de la posibilidad de acudir a la tortuosa vía de la indemnización por funcionamiento anormal de la justicia. A partir de 1999, el TS avaló una fórmula “compensación sustitutiva” mediante la atenuación de la pena que ha apaciguado de forma pragmática las denuncias de conculcación del derecho fundamental. La fórmula tomó cuerpo a través de la llamada “atenuante analógica de dilaciones indebidas” que se ha convertido en el expediente casi rutinario de “compensación” de los retrasos indebidos, mediante el “pago” en reducción de pena del “mal” de la dilación”.

³⁸⁵ De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal Artículo 21.

Son circunstancias atenuantes: (...) Inciso 6.- Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores. Actualmente ley orgánica 5/2010 de 22 de junio. Artículo 21.7 “La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa”.

³⁸⁶ HUERTA TOLCIDO, Susana. “*La singularidad de la atenuante de dilaciones indebidas en la causa. En estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat*”, Madrid 2008, p. 1058. “La denuncia respectiva de la dilación abre la puerta del recurso de amparo, y la posterior reclamación indemnizatoria. Es la vía ineludible para las personas perjudicadas por el delito y para quienes sean absueltas de la acusación inculpatoria. Para quienes la acusación tiene visos de terminar en fallo condenatorio, la expectativa de ver reducida su condena a través de la atenuante analógica, la indemnización será un remedio poco atractivo”.

³⁸⁷ PASTOR, Daniel. *Op. cit.*, 2002, págs. 336-337, frente a esta solución plantea lo siguiente: “Lo objetable de esta opinión, que tiene la ventaja de intentar combinar adecuadamente componentes materiales y formales de un sistema inescindible, es, paradójicamente, que se orienta demasiado por los elementos materiales del problema y prescinde de toda respuesta procesal. Esto significa que sólo aquellos imputados que hayan sufrido un proceso excesivamente prolongado y hasta el final, respecto de los cuales no exista duda acerca de que han cometido comprobadamente un ilícito culpable, tendrán derecho a la consideración de esa prolongación indebida, con la finalidad de analizar si todavía subsisten razones preventivas para imponer la pena o sí, por lo contrario, merecen ser absueltos, situación que es “determinada en el momento del dictado de la sentencia”. De esa manera, queda fuera de toda consideración la violación del plazo razonable en los casos que deban

del injusto del hecho, el grado de imputación personal o la conveniencia de la pena³⁸⁸.

El Tribunal Supremo de España, en la sentencia 474/2016, de 2 de junio, aborda de manera muy amplia el tema de la atenuante. A este respecto es importante destacar algunos puntos del pronunciamiento, para mayor claridad del tema. En la sentencia se dice (FD 7º) que *“La "dilación indebida" es considerada por la jurisprudencia como un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si el mismo resulta injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable. Se subraya también su doble faceta prestacional -derecho a que los órganos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable-, y reaccional -traduciéndose en el derecho a que se ordene la inmediata conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones indebidas-. En cuanto al carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse a las circunstancias del caso concreto con arreglo a los criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, los márgenes de duración normal de procesos similares, el interés que en el proceso arriesgue el demandante y las consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes, el comportamiento de estos y el del órgano judicial actuante. Por lo demás, en la práctica la jurisdicción ordinaria ha venido operando para graduar la atenuación punitiva con el criterio de la necesidad de pena en el caso concreto, atendiendo para ello al interés social derivado de la gravedad del delito cometido, al mismo tiempo que han de ponderarse los perjuicios que la dilación haya podido generar al acusado”. (...) “También tiene establecido esta Sala que son dos los aspectos que han de tenerse en consideración a la hora de interpretar esta atenuante. Por un lado, la existencia de un "plazo razonable", a que se refiere el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y*

finalizar en absolución ya por otras razones (atipicidad, p. ej), circunstancia que demuestra la verdadera debilidad de esta postura, compartida por todas las opiniones sustantivas: no resuelve el problema de la excesiva duración del proceso en el momento en que se produce y lo remite a la sentencia, sentencia que, por otra parte, hipotéticamente podría no ser nunca alcanzada, justamente, por la excesiva duración del proceso. Por otra parte, otro inconveniente de esta fórmula es que deja la determinación de la subsistencia de las necesidades preventivas en manos exclusivas de los jueces, con toda renuncia a intentar establecer (o a reclamar que se establezcan) reglas objetivas de carácter absoluto, ello representa, sin duda, una concesión al decisionismo judicial que se ve amplificada por la dificultad de toda demostración empírica, por cierto diabólica, de la subsistencia de las circunstancias (necesidades preventivas) que habrán de determinar si la violación del derecho fundamental a ser juzgado dentro de un plazo razonable tendrá alguna o ninguna consecuencia jurídica”.

³⁸⁸ MIR PUIG, Santiago: *Derecho Penal. Parte General*. Ed. Reppertor, Barcelona. 2002. Sexta edición, p. 607.

de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona el «derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable», y por otro lado, la existencia de dilaciones indebidas, que es el concepto que ofrece nuestra Constitución en su art. 24.2. En realidad, son conceptos confluyentes en la idea de un enjuiciamiento sin demora, pero difieren en sus parámetros interpretativos. Las dilaciones indebidas son una suerte de proscripción de retardos en la tramitación, que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa y los lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales. Por el contrario, el "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que ha de tener como índices referenciales la complejidad de la misma y los avatares procesales de otras de la propia naturaleza, junto a los medios disponibles en la Administración de Justicia". (...) "La doctrina jurisprudencial sostiene que el fundamento de la atenuación consiste en que la pérdida de derechos, es decir, el menoscabo del derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, equivale a una pena natural, que debe compensarse en la pena que vaya a ser judicialmente impuesta por el delito para mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la pena (la pérdida de bienes o derechos derivada del proceso penal) y el mal causado por la conducta delictiva (SSTC 177/2004 y 153/2005). Por lo tanto, esa pérdida de derechos derivada de la vulneración del referido derecho fundamental debe determinar la reducción proporcional de la gravedad de la pena adecuada a la gravedad de la culpabilidad, porque ya ha operado como un equivalente funcional de la pena respecto a la que corresponde por el grado de culpabilidad. Ahora bien, que ello sea así no significa, sin embargo, como precisa la doctrina, que el transcurso del tiempo comporte una extinción, ni siquiera en parte, de la culpabilidad, pues esta es un elemento del delito que como tal concurre en el momento de su comisión y el paso del tiempo no comporta, por lo tanto, que disminuya o se extinga". (...) "Los requisitos para su aplicación serán, pues, los tres siguientes: 1) que la dilación sea indebida; 2) que sea extraordinaria; y 3) que no sea atribuible al propio inculpado. Pues aunque también se requiere que la dilación no guarde proporción con la complejidad de la causa, este requisito se halla comprendido realmente en el de que sea indebida, toda vez que si la complejidad de la causa justifica el tiempo invertido en su tramitación la dilación dejaría de ser indebida en el caso concreto, que es lo verdaderamente relevante".³⁸⁹

Para el Tribunal Constitucional español, un proceso sin dilaciones indebidas es un proceso que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo

³⁸⁹ Sentencia 03/05/2016. Ponente Excmo. Sr. D.: Alberto Jorge Barreiro, punto 7.

requerido en que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción³⁹⁰; sin embargo el art. 24.2 de la CE no ha constitucionalizado el derecho al respeto de los plazos procesales (STC 5/85), por lo que no toda dilación o retraso en el proceso puede identificarse con la violación constitucional de este derecho, sino que las dilaciones indebidas constituyen un supuesto extremo de funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable y, además, imputable a la negligencia o inactividad de los órganos judiciales (STC 133/88)³⁹¹.

La atenuante analógica es planteada en el caso Eckle por parte del Tribunal Supremo Federal Alemán por el excesivo término que tomaron las autoridades en resolver el asunto, pero el TEDH no asumió que la atenuación de las penas, aceptadas por los condenados, pudiera servir de justificante al Estado para evitar la sanción internacional por la vulneración del derecho.

Cuando nos enfrentamos a violaciones de derechos humanos, y especialmente a graves violaciones de derechos humanos, calificados como crímenes internacionales, la propuesta, como solución a la violación del derecho al plazo razonable, tanto para el acusado, como para las víctimas, es la atenuante, pese a las críticas que existen respecto a que la pena ha perdido su sentido o finalidad, porque en estas situaciones tiene otras connotaciones, especialmente para la comunidad internacional, no estando de acuerdo que no tenga sentido su aplicación, pues es un mensaje disuasivo, preventivo, frente a esta clase de criminalidad; por ello no es necesario que las penas sean extraordinariamente altas o desproporcionadas, que superen o desborden inclusive el tiempo de vida de una persona como sucede en los EEUU, pues su imposición ratifica la protección y prevención general³⁹².

³⁹⁰ STC 43/85.

³⁹¹ FERNÁNDEZ AYO, Manuel, *Jurisprudencia Constitucional Penal Del Artículo 24 De La Constitución Española*. Colección doctrina y jurisprudencia. Madrid. 1997, p. 69.

³⁹² GALAIN PALEROMO, Pablo. *¿La reparación del daño como tercera vía punitiva? Especial consideración a la posición de Claus Roxin. En libro homenaje a Claus Roxin. La influencia de la ciencia penal alemana en Iberoamerica*, tomo I. Ed. Redur 3/. México. 2005, p. 187 “La pena desde un punto de vista preventivo general positivo o integrador, debe servir a los efectos de la reafirmación de la norma que ha sido vulnerada por el delito, pero no debe descuidar el mensaje preventivo general negativo, el cual- a nuestro entender- se cumple en forma debida sin necesidad de penas desmesuradas o desproporcionadas”. Vid. DE LA OLIVA SANTOS, Andrés. Director. AGUILERA MORALES, Marien; CUBILLO, Ignacio. Coordinadores. *La Justicia y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea*. Ed. Colex. Madrid. 2008, p. 155 (...) En suma, la proporcionalidad se ha convertido en una máxima jurídica fundamental que impregna prácticamente todos los ámbitos del Derecho, principalmente el ámbito sancionador, como instrumento moderador del poder ejercido por el Estado”. (...) sin lugar a dudas, para la correcta determinación de este

Lo que puede ser diferente es el tema de la rehabilitación, pues la pena impuesta después de años y años de estar una persona sub-júdice a una investigación penal, sin una resolución definitiva, genera que se revise si en ese caso dado se ha rehabilitado, por lo que puede optarse por alternativas como la prisión domiciliaria, uso de medios electrónicos, pero como última solución y ante casos muy excepcionales, sujetos a revisión uno por uno.

Esa alternativa de la atenuante puede constituir una forma de reparación cuando se trata de condenas por delitos de violaciones de derechos humanos o graves violaciones de derechos humanos, en la medida en que repercute favorablemente para ambos sujetos procesales, porque la preocupación relacionada con la reparación de los efectos nocivos de la vulneración debe siempre comprender al acusado y a las víctimas, ya que la tendencia general de los autores se enfoca en el procesado y pasan por alto las afectaciones, las implicaciones que la violación tiene para las víctimas, y que para ellas es trascendental la imposición y el cumplimiento de la pena.

En este punto no puede pasarse por alto que las dilaciones indebidas, tal como lo sostiene Araceli Manjón³⁹³, no solo son un mal para el acusado, sino para las víctimas, y desde esa posición la solución de la atenuante, a través de la cual el acusado recibe una rebaja de pena³⁹⁴, como una forma de reparación, responde a

principio y, lo que es más importante, su delimitación, es necesario tener en cuenta la experiencia del Tribunal Constitucional alemán y el importante debate doctrinal que el principio de proporcionalidad ha suscitado en este país, que ha tenido un evidente efecto expansivo en todos los ordenamientos europeos, a través de la exportación del llamado “test alemán” de proporcionalidad (desglose en reglas aplicativas del principio de proporcionalidad: idoneidad, necesidad y proporcionalidad “*stricto sensu*”)

³⁹³ MANJÓN CABEZA-OLMEDA, Araceli. *Op. cit.*, p. 183.

³⁹⁴ CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio, *Individualización judicial de la pena*. Ed. Colex. Madrid, 1997, p. 187. “Esta concepción del problema, que se corresponde con la idea sostenida de que la pena se destina, entre otros fines, a compensar la culpabilidad, trata de evitar que el penado sufra de hecho un castigo superior al grado máximo de su culpabilidad por la circunstancia de una dilación del proceso indebida e imputable a los órganos judiciales que comporta ya un mal, cuyo origen remoto está en el delito cometido y no en otra causa – para el acusado. Incluso podría justificarse esta solución desde un punto de vista puramente preventivo. El gravamen psíquico sufrido por el acusado como consecuencia de la dilación indebida reduce la necesidad de la pena al disminuir las exigencias de la prevención especial. También la prevención general puede determinar la necesidad de la atenuación de la pena, pues el sentido de vigencia del ordenamiento jurídico debe tener un alcance global, sin fisuras, sin que resulte legítimo reaccionar sólo frente a la vulneración de la norma penal remitiendo al penado que ha sufrido los efectos de la dilación indebida, por infracción del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, a la gracia del indulto”. Vid. Francisco Javier, Puyol Montero, *Op. cit.*, p. 80. Francisco determina que “A pesar de demostrarse la dilación indebida del proceso, no puede traducirse en la ejecución de la sentencia con la que éste haya finalizado, ni tampoco - la responsabilidad criminal debe quedar alterada por la vía de la aplicación de eximientes o atenuantes, porque el mayor o menor retraso en definir el proceso no afecta a ninguno de los

los derechos de la víctima y especialmente de quienes han sufrido graves violaciones de derechos humanos.

Si partimos de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral, concretamos que en una resolución tardía hay verdad porque al llegar hasta la sentencia se ha logrado reconstruir los hechos. Hay justicia porque se condena al responsable, y en este punto tendrá que examinarse que la pena atenuada³⁹⁵ sea realmente proporcional al daño causado a la víctima, y que en casos de graves violaciones de derechos humanos responda a los estándares internacionales, porque la respuesta ya no es individual, sino que se afecta a toda la comunidad en general. Tendría que establecerse en la ley cuál podría ser el quantum de rebaja, para lo que se debe evaluar factores como la naturaleza del delito, las atenuantes, agravantes, etc. Por último, con la sentencia condenatoria, cuando se logra la decisión final, adquieren las víctimas y sus familiares la posibilidad de una reparación integral, una vez establecida la obligación de reparar unos perjuicios materiales y morales.

En el caso chileno, la sanción que se ha impuesto a los responsables de los crímenes de lesa humanidad corresponde a condenas que no superan cinco años y un día de privación de la libertad, accediendo a la libertad vigilada, lo que se ha denominado justicia con clemencia, criticándose que las penas han sido excesivamente bajas atendiendo a la gravedad del delito, porque hacen inoperante la garantía de no repetición.³⁹⁶ Frente a ello, el hecho de que las penas sean tan bajas no significa de por sí que no se garantice la no repetición, que será cuestión confiada al sistema de tratamiento penitenciario. En el caso chileno es rescatable que se haya logrado por parte de la justicia reconstruir ese contexto de violaciones sistemáticas y generalizadas, pero lo más loable aún es la posterior determinación de investigar y sancionar a los máximos responsables, representados por su presidente. Es un caso donde la comunidad internacional demandaba respuestas

extremos en que se fundamenta la condena, ni perjudica a la realidad de la comisión del delito, ni las circunstancias determinantes de la responsabilidad, de ahí que dada la desconexión entre las dilaciones indebidas y la realidad del ilícito y de la responsabilidad, no es dable extraer consecuencias sobre ésta, ni derivar de las dilaciones la inejecución de la sentencia dictada”.

³⁹⁵ FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, R. “*Dilaciones indebidas en el proceso penal y atenuante analógica del artículo 21.6 del cuerpo punitivo*”. Revista del poder judicial No 86. Madrid, 2007, p. 63. “En la atenuante analógica se invoca el principio de culpabilidad como *ratio essendi* y se busca anclaje positivo en dos pilares: las denominadas “compensación constructiva” y compensación destructiva”.

³⁹⁶ GALDÁMEZ ZELADA, Liliana. El deber de prevenir, juzgar y sancionar violaciones de Derechos Humanos: el caso chileno. Ed. Universidad Deusto. Bilbao. 2011, págs. 62 y 63. Vid. MIR PUIG, Santiago, *Introducción a las bases del derecho penal*. Ed. IBdef, Montevideo – Buenos Aires, 2ª edición, 2003, p. 142.

en representación de la multiplicidad de víctimas de esas violaciones. Por tanto, no obstante que las penas sean cortas, ello permite a los afectados de esos delitos hacer efectivos sus derechos, entre ellos, el conocimiento de la verdad, para de esa forma comenzar a realizar el respectivo duelo y el proceso de rehabilitación físico y mental.

En materia de violaciones de derechos humanos, el artículo 1.1 de la CADH contiene la obligación general de garantizar los Derechos Humanos consagrados en la Convención, de donde se deriva la obligación de investigar los casos de violaciones de Derechos Humanos³⁹⁷, y de acuerdo a la jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana, que inicia con el caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, *“Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental, y en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar públicamente el ejercicio de los derechos humanos”*³⁹⁸. Por consiguiente, la pena, así sea atenuada, cumple con estos estándares internacionales, y es una solución adecuada cuando se ha violado el derecho al plazo razonable en estos asuntos.

Por considerar que la atenuante es un mecanismo que solucionaría la vulneración del plazo razonable en casos de violaciones de derechos humanos y de graves violaciones de derechos humanos se propone en este trabajo que la ley penal colombiana adicione el numeral 11 del artículo 55, relacionado con las circunstancias de menor punibilidad, en donde prevea lo siguiente: *11. La reducción de la pena a quien sufrió violación del derecho a ser oído en un plazo razonable en casos de violaciones de derechos humanos o graves violaciones de derechos humanos por causas no atribuibles a él. El Juez tendrá en cuenta los criterios establecidos en el artículo 60, para determinar esta reducción.*

Hay que contemplar la posibilidad de que se presente la vulneración del derecho al plazo razonable y se produzca una sentencia absolutoria, respecto de delitos de violaciones de derechos humanos o de graves violaciones de derechos

³⁹⁷ SALMÓN, Elizabeth y BLANCO Cristina. *El derecho al debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Instituto de democracia y derechos humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 1º edición. Perú. 2012, p. 28. Como sostienen ellas “La obligación de investigar los hechos, juzgar y, en su caso sancionar a los responsables de un delito que constituye una violación de derechos humanos, es un compromiso que emana de la Convención Americana y la responsabilidad penal debe ser determinada por las autoridades judiciales competentes siguiendo estrictamente las normas del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana”.

³⁹⁸ Sentencia de fecha 29 de julio de 1988, párrafo 166.

humanos. Frente a esta situación se presentaría la obligación de compulsar copias para investigar a los verdaderos responsables, siempre tratando de evitar la prescripción de estos delitos, pero deberá el Estado asumir una indemnización, que en este caso tendrá que ser reforzada, a favor de la persona acusada, como contraprestación por el tiempo que sufrió los rigores de un proceso excesivo sin obtener una pronta definición. Con relación a las víctimas se impone la misma obligación, una indemnización reforzada, porque no deberían esperar que pasen otros tantos años de un nuevo proceso, sin una respuesta positiva del Estado.

Ahora bien, habrá que revisarse si esta solución es válida respecto de los casos que no tienen connotación de constituir violaciones de derechos humanos o graves violaciones de derechos humanos. Miremos qué problemas plantea la doctrina sobre esta alternativa.

Uno de ellos es que la atenuación de la pena ya no cumple su función de prevención cuando el proceso se ha prolongado irrazonablemente³⁹⁹. En estos eventos, considerando que no tienen la calidad ni trascendencia de los antes estudiados, la solución no podrá ser la atenuante; debe optarse por otra, no siendo justo que se imponga una pena cuando el Estado fue el responsable de la vulneración, y habrá de perder toda posibilidad de imponer una condena, de modo que la respuesta tendría que ser la absolución del acusado como forma de reparación si se está en la etapa del juicio, o preclusión o sobreseimiento si está en una etapa anterior.

A favor de las víctimas, en procesos donde están acreditadas, la violación tendrá que traducirse en una indemnización por parte del Estado, pues no pueden quedar sin la protección, cuando el responsable de que no se imponga la condena en un término razonable, que es el presupuesto para la reparación, es el propio Estado.

Otra cuestión, y en ello tienen razón los autores, es que la atenuante no aplicaría en casos donde al momento de dictarse sentencia, ésta sea de carácter absolutorio. Es acertada la preocupación porque si después de un tortuoso proceso se dicta una sentencia absolutoria, la atenuante no es ninguna solución a la violación. En estos casos, dado que no puede haber reparación *in natura* con la decisión definitiva, lo aconsejable también sería que el Estado responda con una indemnización, porque en un plazo razonable no pudo desvirtuar el principio de

³⁹⁹FERRAJOLI, Luigi, *Derecho y razón, Teoría del garantismo penal*. Ed. Trotta, Madrid.1997, p. 253. Vid. MEZGER, Edmund. *Derecho penal. Parte General*, (Conrado A.Finzi, Traduc.), Ed. Bibliográfica de Buenos Aires, 6ta. Edición alemana, p. 381.

inocencia, con las consecuencias nefastas que ello pudo haber generado en su proyecto de vida.

A favor de las víctimas de estas violaciones debe surgir para el Estado también la obligación de reparación integral, porque el sujeto procesal luego de enfrentarse a un proceso prolongado, agotador e infamante, la respuesta es que las autoridades no lograron hallar los responsables.

8.2.- Preclusión y Sobreseimiento

En el sistema colombiano la preclusión tiene efectos de cosa juzgada, lo que implica que no puede volverse a investigar a una persona por estos mismos hechos⁴⁰⁰, así que esta fórmula conlleva un beneficio para el indiciado o imputado, mientras que para la víctima apareja un desconocimiento de sus derechos procesales; por tanto, no se propone como medida para beneficiar al imputado o indiciado en las investigaciones de violaciones de derechos humanos, especialmente en la de graves violaciones, porque riñe con la jurisprudencia de la CIDH y con los estándares fijados por el DIDH.

En otros delitos que no tengan este alcance, se plantea como una alternativa a optar a favor del indiciado o imputado en contraprestación por la afectación de una de las garantías del debido proceso, y una solución adecuada a dicha lesión. En caso de que existan víctimas reconocidas en la investigación, se sigue proponiendo que el Estado cargue con las consecuencias relacionadas con la contraprestación económica que estaban a cargo del indiciado o imputado, por no haberle probado su culpabilidad en un plazo razonable.

El sobreseimiento conllevaría una absolución anticipada, previa al juicio, porque significaría que por el paso del tiempo no es viable proseguir la investigación penal, siendo una respuesta favorable al indiciado o acusado por la violación del plazo razonable, pero no puede predicarse lo mismo respecto de las víctimas⁴⁰¹.

⁴⁰⁰ Artículo 331 Ley 906 de 2004.

⁴⁰¹ GALDÁMEZ ZELADA, Liliana *Op. cit.*, págs. 74 y 75. “En este sentido existe prohibición en las decisiones destacadas a continuación. TCE- STC 34/2008, 52/2008, 123/2008, 224/2007 donde se ha alegado la vulneración del derecho a la tutela judicial en relación con decisiones que ordenaban el sobreseimiento de causas penales por delitos de tortura “el derecho a tutela judicial efectiva solo se satisface si se produce una investigación de lo denunciado que sea a su vez suficiente y efectiva, pues la tutela que se solicita consiste en que se indague sobre lo acaecido. Tales eficiencia y efectividad solo pueden evaluarse con las circunstancias concretas de la denuncia y de lo denunciado, y desde la gravedad de lo denunciado y su previa opacidad, rasgos ambos que afectan el grado de esfuerzo judicial exigido por el artículo 24.1 CE. Si la prohibición de tortura exige al

Sobre esta figura debemos indicar que no está consagrada en la Ley 906 de 2004 para Colombia.

Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en casos de graves violaciones de derechos humanos no es viable dar aplicación a estas figuras, en la medida en que este Tribunal ha sentado reiteradamente⁴⁰² que la obligación de investigar adquiere particular intensidad e importancia ante la entidad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *ius cogens*⁴⁰³.

Estas figuras deben constituir un remedio y solución a las violaciones del derecho al plazo razonable en casos en que se investiguen delitos de baja significación jurídica, teniendo en cuenta el objeto jurídico que proteja la normatividad penal, y ahí parece ser una solución justa, como sanción al Estado por no acusar en un plazo razonable, pero nunca podrá adoptarse como medida en procesos por violaciones de derechos humanos y, menos aún, cuando se trate de graves violaciones de derechos humanos⁴⁰⁴.

8.3.- Nulidad

Al igual que Plácido Fernández-Viagas⁴⁰⁵, se comparte que utilizar esta herramienta jurídica de la nulidad sería contrariar la misma finalidad de la garantía procesal, relacionada con que la actuación se resuelva en un plazo razonable, teniendo en consideración que los instrumentos internacionales de derechos humanos, como la CEDH, CADH, PIDCP, reclaman prontitud en los procedimientos;

órgano judicial extremar los cuidados y diligencia para esclarecer los hechos, con menos razón podrá aplicar la amnistía o la prescripción”.

⁴⁰² Caso Perozo y otros Vs. Venezuela.

⁴⁰³ Artículo 53 de la Convención de Viena. Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración este en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.

⁴⁰⁴ Esto ha quedado claramente delimitado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos, en varias de las decisiones analizadas.

⁴⁰⁵ FERNÁNDEZ VIAGAS BARTOLOMÉ, Plácido, *Op. cit.*, p. 224. “Sin embargo, desde un punto de vista teórico, no podemos considerar correcta esta posición sobre todo si atendemos al contenido esencial del derecho analizado. El proceso sin dilaciones indebidas exige una justicia rápida. Por tanto, la sanción de nulidad no puede constituir el instrumento adecuado para protegerlo, entre otras razones porque dejaría intacto el problema que ha movido el litigio, cuya eficaz resolución es lo que pretende garantizar la norma constitucional”.

por lo tanto, usar la nulidad significa retrotraer la investigación a estadios ya superados, traducíendose en dilatar más la actuación, pues la nulidad no conlleva terminar el proceso, sino por el contrario volver a empezar, de ahí que antes de resolver el problema lo agrava terriblemente, pues tanto el indiciado o acusado, como la víctima, siguen sin una respuesta al problema, continuarán el sinuoso camino de volver a empezar.

No puede olvidarse que el instituto procesal de la nulidad se ha creado para servir de remedio o para subsanar actos procesales irregulares que afectan el debido proceso⁴⁰⁶; de ahí que si bien es cierto que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable hace parte del debido proceso, la violación antes de ser solucionada por la vía de la nulidad, lo que hace es contravenir aún más este derecho⁴⁰⁷.

Este estudio además de revisar el problema que enfrenta el indiciado o acusado frente a la violación del plazo razonable, dados los intereses particulares que tienen frente al proceso penal, también busca hallar una respuesta y solución a

⁴⁰⁶ Haciendo relación a esta fórmula de la nulidad, PASTOR, Daniel. *Op. cit.*, págs. 246 y 290 comenta la decisión más emblemática que inició desarrollando el tema de la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable en Argentina, como lo es el caso “Mattie” resuelto por la CSJN el 29 de noviembre de 1968, en donde la Corte determinó que “Los procesos penales no pueden ser retrotraídos a etapas anteriores cuando en su desarrollo se han respetado las llamadas por la Corte “formas sustanciales del juicio” y la anulación que obliga a repetir los actos ya cumplidos está fundada en consideraciones rituales insuficientes, en la inobservancia de solemnidades desprovistas de sentido, pero si se han violado las llamadas “formas sustanciales del juicio” entonces la anulación es válida y también la consecuente retratación del proceso a etapas anteriores con el fin de renovar los actos inválidos. Posteriormente refiere la sentencia 23.3.2993 de la CSJN, en el caso “Martínez de Hoz”, en donde la Corte analiza los alcances de la prescripción de los delitos, invocó la doctrina “Mattie” para establecer la necesidad de ponerle fin al proceso, en razón de que, más allá del aceptable objetivo de impedir la impunidad de un supuesto delito, resulta inadecuado subsanar la eventual morosidad judicial con una sentencia que carece de toda fundamentación objetiva: “el loable objetivo de afianzar la justicia” (conf. Preámbulo de la Constitución Nacional) no autoriza a avasallar las garantías que la misma Constitución asegura a los habitantes de la Nación (confr. Art. 18”) (considerando 14).

⁴⁰⁷ PEDRAZ PENALVA, Ernesto. *Derecho Procesal Penal*. Tomo I. Principios de derecho procesal penal. Ed. Colex. Madrid. 2000, págs. 296 y 297. “Finalmente, y para terminar este aproximado catálogo de problemas, apunto la posibilidad, a meditar, de dar entrada en nuestro sistema a la solución norteamericana según la cual, una vez declarada la dilación indebida, se anula la imputación, sin que se pueda en sede penal, incoar de nuevo el proceso contra ese sujeto que ha sufrido la lesión de ese derecho fundamental, o tal vez la propuesta alemana de tratar de rehabilitar este derecho fundamental vulnerado en el momento de la aplicación de la pena (Strafzumesung) – de algún modo apuntada por la Sala Segunda de nuestro TS al proponer la inserción en el CP de ...una especie de cuasiprescripción que permitiera reducir la pena en proporción al tiempo indebidamente utilizado en el proceso con fijación de unos determinados límites (STS 23.6.1993 R 3572), - o la postura calificada de “intermedia” entre la inejecución de la sentencia condenatoria y la cuasi aplicación del instituto de la prescripción apreciada en beneficio del reo – de aplicar al supuesto de la atenuante analógica del artículo 9.10 CP (ST 4519)”.

los intereses de las víctimas, y como se itera, especialmente a las que sufren graves violaciones de derechos humanos⁴⁰⁸, de hallar la verdad, justicia y reparación integral.

Así las cosas, aceptar que la nulidad sea una herramienta válida para resolver el problema del plazo razonable, significa tanto como condenar a las víctimas a ver fracasados sus derechos y a someterlas a una mayor revictimización, incertidumbre, pues esta solución no sería la adecuada, y en palabras de Araceli Manjón⁴⁰⁹, *“la solución no debería suponer que a una dilación se sume otra, es decir, no puede, para declararse que se ha vulnerado el derecho, darle a la víctima “más de lo mismo”*.

Este instrumento de la nulidad es utilizado en E.E.U.U, donde desde el caso “Barker Vs. Wingo”, se fijaron las reglas para verificar si hubo vulneración del “Speedy trial” o juicio rápido, previsto en la Enmienda 6^{a410}. “En el terreno de las consecuencias la doctrina americana es más categórica, en principio, al prescribir la nulificación de la acusación y de la eventual sentencia, con rechazo de todo intento de compensar la violación del derecho en moneda de abono de pena. Sin embargo, no es segura la consecuencia que ello producirá para la suerte definitiva de la relación imputado con el hecho que se le atribuye, pues para algunos la nulidad no pone fin y conduce, necesariamente a su renovación, sin que pueda invocarse *bis in idem*, alguno, precisamente porque la anulación impediría hablar de un primer juicio⁴¹¹. La nulidad no es una solución, desde luego que si se reiniciara, es evidente que doblemente estaría vulnerándose ese derecho al juicio rápido, siendo una solución gravosa para sus derechos, ya que debe asumir nuevamente las consecuencias de estar sub-judice al proceso penal, con la posibilidad de obtener una sentencia condenatoria.

⁴⁰⁸ En la medida que siempre ha sido la gran olvidada en el proceso penal y que su despertar a nivel internacional ha obedecido a su reivindicación por parte de organismos internacionales como la ONU, a través de resoluciones como y a decisiones del TEDH y especialmente, de la Corte Interamericana de DH, quien ha puesto mayor énfasis, en que las investigaciones que comprenden violaciones graves de derechos humanos se debe atender especialmente a las víctimas, demandando que en un plazo razonable se resuelvan sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral.

⁴⁰⁹ MANJÓN CABEZA-OLMEDA, Araceli, *Op. cit.*, p. 151.

⁴¹⁰ En E.E.U.U para determinar si existió vulneración o no del derecho a ser juzgado en un plazo rápido se realiza un análisis conocido como *balancing test o ponderación*, como son: a) duración del retraso; b) las razones aducidas por el gobierno para justificar el retraso; c) la conducta del imputado; d) el perjuicio personal sufrido por el acusado en virtud del retraso. Cf. PASTOR, Daniel. *Op. cit.*, p. 232.

⁴¹¹ Cfr, PASTOR, Daniel. *Op. cit*, págs. 239 y 240.

En esos casos, el tiempo que corre es la verdad la que huye, y para las víctimas de esas vulneraciones es más grave aún, porque la nulidad conlleva que los actos investigativos ya realizados pierdan su valor, y ante esa circunstancia, el tiempo perdido de alguna manera beneficia al actor, porque los testigos no tienen la misma capacidad de evocación, también puede ser que no estén ubicables, se vuelvan hostiles, etc., así que esta solución nunca beneficia los derechos de las víctimas, y menos las de graves violaciones de derechos humanos. Colofón, la nulidad nunca podrá ser una solución idónea cuando se ha violado el derecho a ser oído en un plazo razonable.

8.4.- Indulto

Es la potestad de un órgano en cuya virtud puede beneficiar discrecionalmente a los individuos respecto de las consecuencias desfavorables que les acarrea la aplicación de normas jurídicas, y que permite, en consonancia con lo anteriormente expuesto, la remisión total o parcial de la pena impuesta o, incluso, la conmutación de la misma por otras menos graves⁴¹². Constituye una excepción al principio de exclusividad jurisdiccional (artículo 117.3 CE), en la medida que, en el ámbito de la ejecución de la pena, cabe dejar sin efecto la condena previamente impuesta por un órgano judicial⁴¹³.

En España se permite su aplicación, artículo 4.4 del Código Penal, en caso de dilaciones indebidas⁴¹⁴; sin embargo en concepto de Araceli Manjón, se trata de

⁴¹² AGUADO RENEDO, C. *Problemas constitucionales del ejercicio de la potestad de gracia*. Ed. Civitas. Madrid. 2001. Citado por Rosario Tur Ausina. *Garantía De Derechos Y Jurisdicción Constitucional. Efectividad Del Amparo Tras La Sentencia Estimativa*. Ed. Tirant. Valencia, 2008. p. 467.

⁴¹³ Cfr. Ramírez Ortiz, José Luis. *Op. cit.*, p. 13.

⁴¹⁴ PUYOL MONTERO, Francisco Javier, *Op. cit.*, p. 80. comparte la aplicación del indulto en caso de dilaciones indebidas en el proceso penal, al estimar que “Si el órgano judicial estima que su ejecución puede producir efectos indeseados de cualquier género, el ordenamiento prevé a estos fines mecanismos como el indulto, apropiado, como se ha dicho antes, para, sin desvirtuar su obligación constitucional de ejecutar lo juzgado y sin desnaturalizar el contenido del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, obtener de una manera jurídicamente correcta el fin de la ejecución de la condena”. No comparte esta posición Vid. MANJÓN CABEZA OLMEDA Araceli, *Op. cit.*, p. 214, para quien “El indulto es una solución parcial, pues no fue diseñado para las dilaciones indebidas, pero que puede servir en un caso dado, el del condenado en el proceso penal. Determina que no es la respuesta al mandato constitucional pero no está legalmente impedido, porque su posibilidad surge del artículo 4 del CP., pero no es la respuesta a las dilaciones indebidas”. Vid. Código penal español. Artículo 4 (...) numeral 4. Si mediara petición de indulto, y el Juez o Tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada. También podrá el Juez o Tribunal suspender la ejecución de la

una solución parcial al problema, porque no es la respuesta al mandato, sino un remedio más para algún caso, porque es un instituto de más amplio y distinto alcance que no ha sido pensado para las dilaciones indebidas, pudiendo servir en un momento dado únicamente para el proceso penal, posibilitándose su aplicación en el Código penal para el condenado, con lo que hay que descartarlo para otros procedimientos, no siendo, por ende, la respuesta al mandato constitucional⁴¹⁵.

En Colombia el indulto es una institución jurídica que permite la exclusión de la aplicación de la pena, pero especialmente se ha usado la figura para conceder el perdón de personajes políticos, comprometidos con actividades ilícitas⁴¹⁶. Esa figura se usó en el año 1985 a través de la Ley 49 concediendo amnistías e indultos al grupo al margen de la ley M-19, por delitos políticos y conexos. La Ley 77/1989, Decreto 206/1990, permitían el indulto para organizaciones de rebeldes que demostraran la voluntad de reincorporarse a la vida civil.

No es la solución para la vulneración al derecho a ser oído en un plazo razonable en investigaciones de violaciones de derechos humanos, y menos de graves violaciones, dado que está plenamente establecido por la CIDH su prohibición para este tipo de criminalidad; de ahí que no puede utilizarse como un mecanismo por parte del Estado, y en Colombia solamente podría ser la solución para delitos de carácter político⁴¹⁷.

8.5.- Prescripción

pena, mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera resultar ilusoria. Vid TUR AUSINA, Rosario, *Op. cit.*, p. 465. “La práctica del TC nos ofrece diversas resoluciones en las que el recurrente, inmerso en una causa penal que ha derivado finalmente en una sentencia condenatoria, acude en amparo ante la supuesta vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas que le ha perjudicado seriamente, pues ha estado procesado durante un tiempo excesivamente dilatado sin haber sido enjuiciado, e incluso le ha sido impuesta una condena cuya utilidad es más que dudosa en el momento en que tiene lugar”.

⁴¹⁵ MANJÓN CABEZA OLMEDA, Araceli, *Op. cit.*, págs. 214, 215.

⁴¹⁶ AGUILERA, Mario. Refundemos la Nación: Perdonemos a delincuentes políticos y comunes. Análisis político No. 76. IEPRI Universidad Nacional de Colombia. 2012. Disponible en: <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/rt/prINTERfriendly/43493/44782> . “En Colombia se expidieron los decretos 2184/1953, 1823/1954 y 2064/1954 cuya finalidad era conceder amnistías e indultos a miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia por delitos políticos y conexos”.

⁴¹⁷ Artículo 201 de la Constitución Política. Corresponde al Gobierno, en relación con la Rama Judicial: Numeral 2. Conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley, e informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad. En ningún caso estos indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares.

Es una figura jurídica que se utiliza para sancionar al Estado por su inoperatividad, pero no en todos los casos coincide con la violación del plazo razonable⁴¹⁸. A pesar de servir como una figura jurídica que sanciona la omisión del poder judicial, solo opera cuando se supera el plazo máximo previsto por la ley para cada delito, no en los eventos en que se ha violado el plazo razonable⁴¹⁹, razón por la cual muchos autores no comparten su aplicación como sanción a las dilaciones indebidas.⁴²⁰

⁴¹⁸, PASTOR, Daniel R. Acerca del derecho fundamental al plazo razonable de duración del proceso penal. Revista Jueces para la Democracia. No 49. 2004. p. 61. Disponible en: http://www.derecho.uchile.cl/cej/recej/recej4/archivos/Articulo%20sobre%20plazo%20razonable%20OPastor_10_.pdf “El hecho que un proceso haya alcanzado su máximo plazo de duración razonable debe ser tratado, técnicamente, como un impedimento procesal, que es el medio a través del cual, se hace efectiva en concreto, la consecuencia que se deriva de la violación de una regla de derecho limitadora del poder penal del Estado, con el fin de impedir la continuación de un juicio que se ha tornado ilegítimo (...) Con independencia de que los hechos generadores de su utilización respondan a razones sustantivas como la (prescripción) o procesales (p. ej., la Litis pendentia) la decisión que los acoge es siempre una resolución procesal. Esto es también lo que justifica que el cumplimiento del plazo razonable de duración del proceso penal deba ser tratado como un impedimento procesal que da lugar al procedimiento previsto para las excepciones con el fin de obtener una declaración judicial formal sobre su existencia y admisibilidad”. Vid. PASTOR, Daniel. *Op. cit.*, p. 340. “En realidad, más allá de los seductores servicios que la prescripción puede brindar de hecho a la necesidad de que el enjuiciamiento penal no se prolongue irrazonablemente, lo cierto es que ello no puede ocurrir más que eventual y casualmente, mientras que el derecho analizado no puede conformarse con la espera de esa suerte. Esto se debe a que prescripción y plazo de duración del proceso obedecen a razones diferentes (hasta el punto que uno opera sin proceso y el otro impensable sin él) y que, por ello, están sometidos a cánones de razonabilidad distintos, de modo que el proceso penal reclama plazos de duración propios e independientes de la prescripción”.

⁴¹⁹ BACIGALUPO, Enrique, *Op. cit.*, p. 90. Para Enrique Bacigalupo, el tiempo de duración de la instrucción en la práctica debe ser motivo de preocupación al señalar. “Una situación como la actual donde la instrucción supera notoriamente el tiempo que lleva el juicio oral muestra una preponderancia de los aspectos inquisitivos del proceso, con las limitaciones de derechos que ello conlleva, que no puede sino inquietar. Se puede decir que la instrucción actual se base en una praxis en la que, a pesar de los importantes cambios producidos por la constitución de 1978 y la jurisprudencia constitucional del proceso penal. En este punto nuestro derecho se encuentra en las mismas necesidades de reforma que se manifiestan en Alemania, en Francia o en Italia, donde después de la reforma procesal de 1989, la cuestión del equilibrio entre la instrucción (*indagare preliminare*) y el juicio oral (*dibattimento*) sigue siendo una preocupación fundamental, lo mismo que en Austria, donde inclusive se señala un “déficit del Estado de Derecho” respecto del procedimiento de instrucción”.

⁴²⁰ PUYOL MONTERO, Francisco Javier *Op. cit.*, p. 79 “El derecho a que el proceso se tramite, resuelva y ejecute en un plazo razonable es plenamente independiente del juego de la prescripción penal. La dilación indebida no puede dar lugar al reconocimiento de un derecho a la prescripción si el procedimiento no ha estado paralizado el tiempo legalmente previsto para que se extinga la responsabilidad penal, por este motivo y este evento es una cuestión que es, por otra parte, una cuestión de legalidad ordinaria que corresponde enjuiciar a los Jueces y Tribunales. Ni la inexecución de la sentencia ni la extinción o atenuación de la responsabilidad criminal pueden deducirse, pues, del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”. Vid. MANCILLA OVANDO, Jorge Alberto. *Op. cit.*, págs. 292 y 293. “En general, en todos los casos, el incumplimiento de la garantía procesal, no produce el efecto jurídico de tener por precluido el derecho de la acción penal que da origen al juicio.

De otra parte, y en caso de violaciones de derechos humanos y de graves violaciones de derechos humanos, la figura jurídica de la prescripción no es la respuesta a la vulneración del plazo razonable, atendiendo de un lado la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que como hemos visto no lo permite⁴²¹, y de otro porque existe un instrumento de derechos humanos que tampoco lo autoriza, y es la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad⁴²². No es una respuesta a la problemática relacionada con la violación del plazo razonable para este tipo de criminalidad.⁴²³

Para otro tipo de delitos de menor significación jurídica no debe ser la solución porque ello significa que tendría que esperarse hasta el tiempo de la prescripción para que tenga aplicación esta medida, y sería más gravosa la situación; lo ideal es que el Estado establezca los términos procesales que deben regir cada etapa, la imposición de su cumplimiento, y de probarse su dilación por incumplimiento de los mismos, conlleve la aplicabilidad de una de las alternativas propuestas, de acuerdo al Estado donde se halle la investigación, como la preclusión, sobreseimiento, archivo de diligencias, absolución, pero no la prescripción porque los términos siempre son más prolongados.

Se insiste, las consecuencias son: la responsabilidad oficial del juzgador y que el acto que denota exceso de poder se tenga por consumado irreparablemente dentro del proceso. Así lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al indicar: Procesos, término para concluirlos. La circunstancia de que el inculcado no haya sido juzgado dentro de los términos previstos por el artículo 20 constitucional no significa necesariamente que la acción penal se encuentre prescrita, pues son dos problemas diversos aunque en algunas ocasiones puedan converger. El hecho de que se le sentenciará casi dos años después de que se le detuvo, significa una violación que entrañaría la necesidad de dictar sentencia inmediata y acaso la correspondiente responsabilidad del juzgador, pero de ninguna manera la prescripción.”

⁴²¹ Como lo plantea en los casos Barrios Altos Vs. Perú, Trujillo Oroza Vs. Bolivia, caso Bulacio Vs Argentina, caso Barrios Altos Vs. Perú, caso Almonacid Arellano y otros Vs Chile, entre otros.

⁴²² Año 1968. También en el Estatuto de Roma se consagra la imprescriptibilidad de estos crímenes.

⁴²³ ARROYO ZAPATERO, Luis; NIETO MARTÍN, Adán. *El Principio de ne bis in Idem en el Derecho Penal europeo e internacional*. Coordinadores: Ediciones de la Universidad Castilla - la Mancha. Año 2007, págs.115 y 116. “La creación del Estatuto de la CPI mediante el Estatuto de Roma en julio de 1998, y su entrada en vigor el 1 de julio de 2002, ha transformado profundamente el panorama de la persecución de los delitos que atentan contra la comunidad internacional. Como su propio Preámbulo lo establece, nace con la finalidad de que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo”. Vid. AGUILAR CAVALLÓ, Gonzalo; AGUILERA PORTALES Rafael Enrique, *Op. cit.*, p. 94. “La prescripción de los crímenes internacionales da lugar a una ineficacia jurídica de estos crímenes y deja a las víctimas y a sus familiares sin ningún recurso judicial a través del cual se pudiera identificar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos para imponerles los castigos correspondientes. En definitiva, en el contexto de los crímenes internacionales, la prescripción favorece la impunidad y rechaza la idea de justicia que se encuentra en el centro del Estado de derecho, el cual es fundamental en el constitucionalismo contemporáneo”.

8.6.- Decisión de fondo

La respuesta más inmediata del Estado, cuando se presenta la vulneración del derecho al plazo razonable en asuntos de violaciones de derechos humanos y de graves violaciones de derechos humanos, necesariamente tiene que ser la terminación del asunto⁴²⁴, debe imprimírsele agilidad, con el objeto de subsanar la tardía resolución del mismo, aunque de contera la lesión al derecho a ser oído en un plazo razonable, tanto para el indiciado o acusado, como para las víctimas, ya se ha generado⁴²⁵.

El TEDH determinó en algunas oportunidades que la sentencia es una forma de reparar los daños inmateriales. En otras decisiones⁴²⁶ condenó al Estado a pagar daños morales como consecuencia del tiempo excesivo en resolverse el caso. Lo mismo se predica de la CIDH, siempre reclamando que se dicte la sentencia respectiva contra los responsables como forma de contraprestación por la vulneración y, en algunos casos, el pago de perjuicios.

Es evidente que el transcurso del tiempo afecta a los dos sujetos procesales, donde cada uno tiene un interés particular, el acusado en que se ponga fin al proceso y se proclame su inocencia, mientras las víctimas tienen interés en conocer la verdad de los hechos, que se produzca la sanción de los responsables y haya la reparación integral al mal causado; por ello, ambos requieren que el Estado resuelva el asunto con una definición de fondo.

⁴²⁴ “Conocida como reparación *in natura*, relacionada en la obligación para el órgano judicial causante de la dilación, en adoptar sin demora la resolución que sea procedente en derecho”. STC 133/1988. Vid. DE LA HERA OCA, Manuel. *Los principios del proceso penal. Cuadernos de derecho judicial*. Ed. Consejo general del poder judicial. Madrid. 1992, p. 338, “Una vez producida la dilación, es de difícil la reparación, la única forma de amparo es retomar la tramitación del proceso con diligencia, siendo deseable una indemnización económica del perjudicado”. Vid. AMADO RIVADENEIRA Alex. *El derecho al plazo razonable como contenido implícito del debido proceso: desarrollo jurisprudencial a nivel internacional y nacional*. Revista internaútica de práctica jurídica. Número 27, año 2011. p. 58. “Para el Tribunal Constitucional de Perú la violación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable no puede significar el archivo definitivo del proceso penal, lo que corresponde es la reparación *in natura* por parte de los órganos jurisdiccionales que consiste en emitir en el plazo más breve el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto y que se declare la inocencia o la responsabilidad del procesado y la consiguiente conclusión del proceso penal”.

⁴²⁵ ASÚA BATARRITA. Adela *Op. cit.*, p. 243. “Lo apropiado para reparar el derecho lesionado es ordenar el inmediato impulso de la causa, o sea, la cesación de la dilación, además de la indemnización por anormal funcionamiento”.

⁴²⁶ Caso Metzger, 31 de mayo de 2001.

Pero en este punto habrá que hacer varias precisiones importantes, de cómo se deben tramitar los procesos, en aras de lograr que el Estado decida de fondo una controversia; que tome medidas enfocadas a que no se presenten las dilaciones.

Como propuesta de trabajo se abordará la problemática sobre el tópico en la legislación colombiana, en aras de presentar algunas soluciones que podrían generar avances en el tema propuesto.

8.7.- Reparación Económica

Esta figura jurídica debe ser una respuesta a la violación del plazo razonable⁴²⁷, no solo en el campo penal, a favor del perpetrador y de la víctima, sino que debe operar para todo tipo de procedimiento, surgiendo una sanción en contra del Estado ante el mal funcionamiento de la administración de justicia, en la medida que está obligado⁴²⁸ a adecuar su sistema judicial para que sea eficiente y cumpla los compromisos internacionales, lo que significa resolver los asuntos en un plazo razonable, disponiendo del número adecuado de jueces, investigadores, defensores, asistentes, logística, etc., en aras de cumplir este requerimiento al que están comprometidos como Altas Partes contratantes, de los respectivos convenios internacionales de derechos humanos⁴²⁹.

⁴²⁷ PICÓ I JUNOY, Joan. *Las garantías constitucionales del proceso*. Ed. Bosh. Barcelona. 2012, págs. 152 y 153. “La cesación de la paralización del curso de un proceso podrá limitar las medidas restablecedoras de este derecho al solo campo de lo indemnizatorio; si esta es la reparación que la violación reclama; pero ello no transforma lo que es contrario a la norma constitucional, esto es, la dilación indebida en algo carente de relevancia constitucional. Por ello si la dilación se encuentra en oposición con el precepto constitucional, no se desvanece la violación cuando se pone fin a tal situación de paralización. Se trata, en tal hipótesis, de buscar los medios reparadores y, en definitiva, de lograr una respuesta a la relación entre la violación de las consecuencias de la acción u omisión de la autoridad”. (...) Al efecto de reparar las dilaciones indebidas el ordenamiento prevé medidas sustitutivas o complementarias para cuando ya no puede restablecerse in natura la integridad del derecho, o su conservación por haber concluido el proceso. Así, además de la eventual exigencia de responsabilidad personal del titular del órgano judicial, puede exigirse la responsabilidad patrimonial del Estado prevista en el artículo 121 C.E. para supuestos de anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, ya que las dilaciones indebidas, son sin duda, una manifestación de ese mal funcionamiento”

⁴²⁸ Convención Europea o Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

⁴²⁹ La reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido (*restitutio in integrum*, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, entre otras) (Caso Loayza Tamayo, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de fecha 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 85; (...) La obligación de reparar establecida por los tribunales internacionales se rige, como ha sido aceptado universalmente, por el derecho

En consecuencia, deben regularse los respectivos plazos procesales⁴³⁰, pero se aconseja que la ley conceda la oportunidad de solicitar la prórroga que sea necesaria, justificada, conforme al procedimiento que maneje, ante la exigencia de su imperativo cumplimiento, como lo demanda la Constitución Política.

En el caso colombiano, la jurisdicción administrativa conoce los procesos relacionados con fallas del sistema judicial, pero lo correcto apunta a que se busquen alternativas para superar los atascos o congestiones de los despachos y los problemas estructurales del sistema⁴³¹; de lo contrario, tendrá que seguir respondiendo el Estado económicamente por las graves falencias que presenta, destacándose las sanciones económicas que le ha impuesto la CIDH, todo lo cual propicia que los jueces administrativos estén sobrecargados de trabajo, y tampoco

internacional en todos sus aspectos: alcance, naturaleza, modalidades y la determinación de los beneficiarios, nada de lo cual puede ser modificado por el Estado obligado, invocando para ello disposiciones de su derecho interno (Caso Garrido y Baigorria, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 42; Caso Loayza Tamayo, Reparaciones, supra 31, párr. 86; Caso Castillo Páez, Reparaciones, supra 31, párr. 49 y Caso Suárez Rosero, Reparaciones, supra 31, párr. 42). (...) La Corte Interamericana señaló que la expresión “justa indemnización” utilizada en el artículo 63.1 de la Convención es “compensatoria y no sancionatoria” y que el Derecho Internacional desconoce la imposición de indemnizaciones “ejemplarizantes o disuasivas”. Igualmente, en el caso Fairén Garbí y Solís Corrales, esta Corte expresó que “el derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños que les hayan sido causados” (Caso Fairén Garbí y Solís Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párr. 136). En el caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones, la Corte invocó la jurisprudencia arbitral para manifestar que, según un principio general de derecho, la indemnización por los perjuicios materiales sufridos comprende lo que en derecho común se entiende como daño emergente y lucro cesante (Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones, supra 40, párr. 50).

⁴³⁰ RODÉS MATEU, Adriá, *Op. cit.*, p. 45. “Totalmente de acuerdo que la norma procesal que fija el lapso temporal de las actuaciones judiciales es, sin duda, el referente principal para acotar el debate constitucional, por cuanto para poder hablar de dilación es necesario un incumplimiento de la norma procesal imputable al órgano judicial, por tanto, el incumplimiento de los plazos por el órgano judicial haría suponer la existencia de una dilación indebida o del plazo razonable por la vulneración de la norma”.

⁴³¹ARDILA TRUJILLO, Mariana. *La prohibición de dilaciones injustificadas en la jurisprudencia constitucional*. Revista derecho el Estado No 23. 2009. p. 68. Disponible en: <https://www.minjusticia.gov.co/InvSocioJuridica/>. “El derecho a que el juez resuelva los asuntos en un término razonable o la prohibición de dilaciones injustificadas ha sido reconocido con suficiencia en el ordenamiento jurídico colombiano y en los tratados internacionales ratificados por nuestro Estado. La mora judicial, la congestión de los despachos y las recurrentes dilaciones en los procesos judiciales marcan el día a día del acceso a la justicia en Colombia; no es por ello extraño que la Constitución colombiana dedique varios artículos a tratar el tema y que las leyes que regulan la administración de justicia sean en gran parte proferidas con la intención de erradicar este problema”.

en un plazo razonable responden los requerimientos de una demanda administrativa⁴³².

En consecuencia, se requieren acciones que ataquen los problemas estructurales de la administración de justicia enfocada a la prevención, donde las demandas administrativas por falencias en la administración de justicia debe ser la excepción, no la regla.⁴³³

Por ello, lo primero será tomar acciones encaminadas a resolver los problemas estructurales, situación que de manera unánime reclama el TEDH y la CIDH, todo para implantar medidas que solucionen los problemas de congestión, atascos y fallas estructurales relacionadas con la falta de personal (fiscales, jueces, asistentes, investigadores, etc.)

Deberá revisarse el sistema de selección del personal; por ello en el campo penal, para investigar violaciones de derechos humanos, deben ser personas muy

⁴³² La Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, presenta herramientas para que los casos se resuelvan en un plazo razonable, pero en la práctica ante una investigación por mora lo que se demuestra es el problema estructural de la congestión de trabajo y la imposibilidad de asumir en un plazo razonable tanto cúmulo de trabajo a efectos de evitar la sanción disciplinaria, conforme a estos artículos: Artículo 4o. Celeridad. La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria. [...] Artículo 7o. Eficiencia. La administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley. Ver sentencia T-966-00 Corte Constitucional. Sentencia del 31 de julio de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia.

⁴³³ Esa es la propuesta de RODÉS, MATEU Adriá. *Op. cit.*, Págs. 168 a 170 "Respecto que la primera línea de defensa del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas debe ser siempre la prevención mediante la realización de juicios rápidos sin dilaciones indebidas. Pero cuando ello no es viable y se ha dado la violación constitucional propone la compensación del daño per se para reparar la vulneración del derecho, en la medida que el tribunal ya no la puede evitar al no dar marcha atrás ni incidir en el paso del tiempo, ni retomar el tiempo de la dilación indebida ni deshacer metafísicamente los daños producidos por la dilación, por lo cual emerge la regla de la responsabilidad (liability rule) del Estado para reparar la violación, considerando que la opción reparadora producirá una óptima y verdadera restitución constitucional del derecho. En su concepto este remedio tiene dos beneficios que superan a todos los demás: por un lado, refuerza el valor constitucional y fundamental del derecho y, por otro lado, restablece la legalidad constitucional vulnerada. Igualmente, la compensación del daño per se puede usarse como instrumento de prevención eficiente para reforzar el cumplimiento del derecho en el futuro. Vid. GARCIA, DE BLAS MALTRAS, Elsa. *Op. cit.* p. 6. Está de acuerdo que los mecanismos de indemnización solo ofrecerían un remedio a posteriori y no servirían para prevenir violaciones, por ello la alternativa para acelerar los procesos y la reparación podrían ser la mejor solución, trayendo a colación la Comisión de Venecia, en donde se propone que para garantizar el derecho del art. 6.1 y no sustituirlo por el pago de una indemnización pecuniaria, se busquen mecanismos procesales para asegurar que los procedimientos se tramiten en un tiempo óptimo.

capacitadas en derechos humanos y en derecho internacional humanitario, con grandes capacidades humanísticas. Los funcionarios relacionados con causas menores deben estar capacitados en resolución de conflictos, y se deben implantar capacitaciones constantes al personal que está laborando, entre ellas que conozcan las sentencias de la CIDH.

Vinculación de estudiantes de universidades para colaborar en los despachos; defensores de último año de derecho para causas menores; clasificación de los procedimientos, unos p

ara casos simples o pequeñas causas, otro para casos de delitos de mayor entidad y otro para graves violaciones de derechos humanos; uso de los mecanismos de terminación anticipada del proceso, entre otras cosas.

CAPÍTULO IX

SOLUCIONES DE LA CIDH EN MATERIA DE REPARACIONES CUANDO ADVIERTE LA VIOLACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE EN GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

La jurisprudencia de la CIDH se destaca por recordar y exigir a los Estados Partes la priorización del recurso humano y logístico para investigar, juzgar y condenar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, especialmente en lo que tiene que ver con crímenes internacionales.

Se reconoce la riqueza de la jurisprudencia en esta materia y la preocupación para que los Estados tomen todas las medidas urgentes, necesarias y adecuadas para resolver estas investigaciones en un plazo razonable, y especialmente que se evite la impunidad en estos procesos⁴³⁴.

Cuando la CIDH ha declarado la violación del derecho al plazo razonable, no plantea en ninguna de sus decisiones el archivo de la actuación; por el contrario, ha sido incisiva y recurrente en exigir a los Estados Partes el cumplimiento de los compromisos adquiridos al suscribir la Convención, esto desde la sentencia que marca el punto de partida a la violación del plazo razonable -caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, año 1997-, reclamando que una vez producida una violación de los derechos humanos protegidos por la Convención, el Estado debe poner todos los medios a su alcance para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y, como consecuencia de esta obligación, debe procurar

⁴³⁴ FERREIRA, Marcelo; PÉREZ SOLLA, María Fernanda; TAMBUSI, Carlos E. Derechos Humanos. Ed. Fundación de derecho administrativo. 4º edición. Buenos Aires. 1999, págs. 20 y 21. “La doctrina mayoritaria en materia de derecho internacional público es coincidente en negar a la jurisprudencia el carácter de fuente de derecho internacional, reservando esa condición exclusivamente a los tratados, la costumbre y los principios generales de derecho. No obstante, se puede advertir una importancia creciente de su incidencia en la interpretación de las normas. (...) la obligatoriedad de los fallos por la Corte IDH tiene fundamento normativo en la jerarquía constitucional de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Al actuar éste Tribunal como órgano de control del Pacto tiene competencia para conocer cualquier caso relativo a la aplicación e interpretación del mismo (art. 62) siendo sus sentencias definitivas, inapelables y encontrándose los Estados obligados a cumplirlas (arts. 67 y 68 CADH)”.

además el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, subsanar la demora objeto de la violación señalada⁴³⁵. Así las cosas, se impone que el funcionario judicial decida sobre el fondo del asunto mediante una decisión de carácter definitivo, de manera ágil, en aras de subsanar la violación del derecho al plazo razonable⁴³⁶.

Se apoya en sus decisiones en el artículo 63.1 de la Convención Americana para reclamar que cuando decida que hubo violación de un derecho protegido por la Convención debe disponer que se garantice ese goce y, de ser procedente, la reparación de las consecuencias y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

La decisión de fondo es la principal exigencia de la Corte Interamericana en lo que respecta a la reparación cuando ha comprobado la violación del derecho al plazo razonable como forma de compensación por la violación; por ello ataca siempre la posibilidad de la prescripción, la impunidad, las amnistías o indultos, como formas que impiden la verdad y la justicia en estas graves violaciones⁴³⁷, y la

⁴³⁵ Sentencia CIDH, 29 de enero de 1997, punto 96.

⁴³⁶ Además, el señor Suárez Rosero señaló que los tribunales ecuatorianos no han resuelto la apelación interpuesta contra la sentencia que lo condenó, aun cuando el plazo respectivo establecido por la ley para este propósito ha vencido. (...) Con respecto a la solicitud de que el Estado presente una disculpa, la Corte considera que la sentencia sobre el fondo del presente caso constituye, en sí misma, una forma de reparación y satisfacción moral de significación e importancia para el señor Suárez Rosero y sus familiares. (...) En su sentencia de 12 de noviembre de 1997, la Corte declaró que en el proceso contra el señor Suárez Rosero se cometieron violaciones de los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma (puntos resolutivos primero, segundo y cuarto de la sentencia referida). De conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, la Corte considera que el Estado tiene el deber de reparar las consecuencias de dichas violaciones, de manera que no se ejecute la multa impuesta al señor Suárez Rosero y no se mantenga su nombre, por esta causa, en el Registro de Antecedentes Penales ni en el Registro que lleva el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Párrafos 70, 72, 76 caso *Suarez Rosero Vs. Ecuador*. (...) El Estado tiene la obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones a la Convención Americana en el presente caso, identificar a sus responsables y sancionarlos y adoptar las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana) (Caso Loayza Tamayo, Reparaciones, supra 40, párr. 171).

⁴³⁷ El Tribunal estima que en una sociedad democrática se debe conocer la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos. Esta es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos y, por el otro, con la divulgación pública de los resultados de los procesos penales e investigativos. Esto exige del Estado la determinación procesal de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades y reparar a las víctimas del caso. (...) Al respecto, la Corte ha considerado que en el marco de los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención las víctimas o sus familiares tienen el derecho, y los Estados la obligación, de que los hechos sean efectivamente investigados por las autoridades del Estado, y a conocer los resultados de la investigación. El Tribunal recuerda que el derecho a conocer la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares

exigencia de que se produzca la sentencia definitiva contra los responsables, situación que revisará cuando supervise el cumplimiento de la sentencia de fondo por parte del Estado responsable.

También podríamos señalar que otra forma de reparación de la Corte es obligar a los Estados Partes para que adecuen su ordenamiento interno realizando las reformas legislativas necesarias conforme a los estándares internacionales para cumplir con la garantía de investigar y sancionar a los responsables en un plazo razonable, como también la exigencia de aplicar protocolos estandarizados y ejercer el control de convencionalidad de sus normas conforme a la normatividad de la CADH.

a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención Sentencia CIDH, caso masacre dos erres Vs. Guatemala, párrafo 149 y 151. Igualmente, la CIDH ha exigido como medidas de reparación que el Estado adopte medidas de carácter simbólico reconociendo la comisión de la violación y ofreciendo garantías de no repetición a las víctimas. Que el reconocimiento sea público, la disculpa a los familiares de las víctimas y a la sociedad, prohibición de utilización de la justicia militar, capacitación funcionarios estatales entre otras.

CAPITULO X

¿QUÉ SOLUCIÓN ADOPTAR CUANDO EL CASO ES COMPLEJO Y HAY DIFICULTADES PARA CUMPLIR LOS PLAZOS EN MATERIA PENAL?

Teniendo en cuenta que se advierte por parte del TEDH y la CIDH que la complejidad de un asunto es una de las grandes causas que generan dilaciones en las investigaciones, al punto que la CIDH reconoce que hay casos de “enorme complejidad”, en este estudio queremos abordar cuáles podrían ser las soluciones que deberían tomarse para ello en la justicia penal colombiana, para poder dar cumplimiento a los plazos procesales establecidos.

La realidad judicial demuestra que aún en los eventos en los cuales existen unos plazos⁴³⁸, hay ocasiones en que por más que las autoridades fueron diligentes y cuidadosas no los pudieron cumplir, por la complejidad del caso, conjugado con el número de personas, de delitos, diligencias a practicar, contexto político, social, etc., o sea, los factores que tornan un caso complejo como lo han previsto los Tribunales estudiados y en muchas ocasiones por la enorme complejidad, o “complejidad extrema”, como se ha denominado en este trabajo, cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos y se conjugan muchos factores que los Tribunales estudiados en su casuística consideran como complejos.

Frente a ello se propone que la misma ley acoja la jurisprudencia de la CIDH en esta materia, que prevea esta circunstancia de enorme complejidad, porque es de común ocurrencia, y no se puede desconocer el contexto político que enfrenta desde hace varios años Colombia, así que deberá reglamentar los plazos que han de regir en el proceso penal desde el inicio hasta el fin, o sea, que comprenda desde la indagación hasta el juicio, porque hoy en día no hay términos para el juicio. La ley ha previsto unos plazos para la indagación o etapa preliminar⁴³⁹, otros para la

⁴³⁸ La ley procesal penal colombiana los prevé, salvo para la etapa del juicio, pero la regla general es que no se cumplen, porque se presentan problemas estructurales del sistema penal, como son recarga laboral, los fiscales y jueces que hay no pueden dar abasto con tantos casos, falta de investigadores, peritos, asistentes judiciales, logística, etc., además que por el conflicto social y político que vive el país, las investigaciones, por lo general, son muy complejas, se conjugan muchos factores en un mismo caso.

⁴³⁹ La Ley 906 de 2004, o sistema acusatorio, llama a esta etapa indagación y no fijaba término para llevarla a cabo, artículo 175, estableciendo que la misma va desde el inicio de la actuación con la noticia criminal, hasta la formulación de imputación, de la Fiscalía. La Ley 1453 de 2011, en el artículo 49, modifica el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, y en el párrafo, retrotrae esa posibilidad y crea

instrucción⁴⁴⁰, pero hay un vacío para el juicio⁴⁴¹. La Ley 906 de 2004, dado que anteriormente se regía por un sistema mixto, Ley 600 de 2000, (hoy en día aplica

una norma que si fija un término en la indagación, de tal modo que, si transcurrido el mismo no hubo imputación se activa entonces el archivo de las diligencias. Por tanto, fijó un término de dos años, contados a partir de la noticia *criminis*, para formular la imputación. Tres años, si se presenta concurso de delitos y, cinco, si se trata de delitos competencia de los jueces penales del circuito especializado. Parágrafo. La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la recepción de la noticia *criminis* para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Este término máximo será de tres años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado el término máximo será de cinco años.

⁴⁴⁰ En la Ley 906 de 2004 se concede a la Fiscalía un término de treinta días (30) contados desde el día siguiente, de la formulación de imputación para presentar la acusación, solicitar la preclusión o el principio de oportunidad. Este término de treinta días se puede extender a sesenta cuando el Fiscal no ha presentado la acusación o la preclusión, pero entonces se designa otro Fiscal, quien, de no presentar la acusación o la preclusión, genera que el detenido recobre su libertad o que el Ministerio Público o la Defensa, soliciten preclusión de la investigación. La Ley 906 de 2004, concedía un término muy reducido (treinta días) para presentar la acusación o solicitar la preclusión, después de la imputación. En el evento de incumplirlo, el funcionario infractor era sancionado tanto disciplinaria como penalmente, lo que significaba que difícilmente se sometiera a superar ese tiempo. La Ley 1453 de 2011, que reformó parcialmente la Ley 906 de 2004, amplió los términos que la Fiscalía dispone para acusar. En el artículo 49, que modificó el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, refiere: Duración de los procedimientos. El término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de noventa (90) días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código. El término será de ciento veinte (120) días cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados o cuando se trate de delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados. La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a más tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la audiencia de formulación de acusación. La audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria. Esta ley a su vez fue modificada por la Ley 1474 de 2011, que introdujo un parágrafo, que indica: Artículo 35. PAR. “En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados, por delitos contra la Administración Pública y por delitos contra el patrimonio económico, que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención preventiva, los anteriores términos se duplicarán cuando sean tres (3) o más los imputados o los delitos objeto de investigación”.

⁴⁴¹ La tercera fase del procedimiento penal, tanto en la Ley 600 de 2000, como en la Ley 906 de 2004, comienza con el juicio. En la ley 600 de 2000, después de acusar e interpuestos todos los recursos de ley, la competencia radica en los jueces encargados del juzgamiento; el Fiscal se convierte en un sujeto procesal. El juez dispone de quince días, que se cuentan desde el día siguiente, al recibo del expediente para que los sujetos procesales en ese tiempo soliciten nulidades y pruebas. Luego, el juez cita la audiencia preparatoria, y después cita para el juicio dentro de los diez días siguientes, salvo que haya pruebas que requieren practicarse fuera de la sede, las que se practican dentro de los quince días hábiles. La ley no establece un término dentro del cual debe resolverse el debate público, sino que estipula que una vez haya culminado el mismo, el juez decidirá dentro de los quince días siguientes. No prevé un término dentro del cual el funcionario judicial deba realizar el debate público, pero cuando existe persona capturada, el juez tiene la obligación de agilizar el debate dentro de los próximos seis meses para llevar a cabo la audiencia pública, término que se amplía hasta en seis meses más si se decretaron pruebas en el exterior. Se estableció que no hay lugar a la libertad, si la audiencia se inició, pero está suspendida por causa justa o razonable, o si se ha fijado fecha para la audiencia y no se ha podido realizar por causa del defensor. Por su parte, la Ley 906 de 2004 prevé que una vez culminada la audiencia de formulación de acusación

para hechos que ocurrieron en su vigencia) donde igualmente existen unos plazos para la indagación o etapa preliminar,⁴⁴² unos para la instrucción,⁴⁴³ y en el juicio no estableció plazos, salvo cuando hay persona detenida o privada de la libertad, en cuyo caso consagró unos plazos, lo que implica que en esas situaciones tales plazos tienen que cumplirse, o de lo contrario la consecuencia obligada es la libertad del acusado.

Eso es de rescatar porque no hay posibilidad de revisar aspectos de complejidad o necesidad de mantener la medida en el tiempo, sino que la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia han sido estrictas en su cumplimiento, ello se les abona y se les reconoce, debiendo indicarse que lo mismo sucede respecto a los plazos que en materia de libertad existen hasta en la Ley 906/2004.

Es importante en este punto destacar los avances que en materia de plazos ha realizado la Corte Constitucional, pues cuando hizo un estudio de los plazos en

debe el juez citar para audiencia preparatoria, la cual debe realizarse en un tiempo no inferior a quince ni mayor de treinta días. Terminada la audiencia preparatoria debe fijarse fecha para iniciación del juicio, dentro los treinta días siguientes a la terminación de la audiencia preparatoria. Cumplido el mismo se inicia el juicio, sin que se le fije término alguno para que el juez finalice el debate, de tal modo que puede señalarse que la ley no estableció un límite de tiempo para que el juez se vea obligado a finiquitar el juicio. El artículo 317 de la Ley 906 fija un término entre la acusación y el inicio de la audiencia del juicio oral, que es de noventa días para cuando existe persona privada de la libertad, de tal modo que si no se inicia el juicio en 90 días es causal de libertad cuando hay persona detenida. Esta norma ha sufrido varias modificaciones, establecidas en la Leyes 1142 de 2007, artículo 30, Ley 1453 de 2011 artículo 61, artículo 38 de la Ley 1744 de 2011. Con las modificaciones ya indicadas en casos de conocimiento de los Jueces Penales del Circuito Especializado, el término para que proceda la libertad es de 240 días después de formulada la acusación si no se ha iniciado el juicio, según lo previsto en la Ley 1453 de 2011, en su artículo 61. Nótese pues, que la ley 906 de 2004 no previó un término para realizar el debate del juicio oral para la persona detenida, ni menos para el que está en libertad, porque le reclama al juez que inicie el juicio para que no proceda la libertad, pero si lo comienza, ya no le establece unos parámetros para culminarlo, ni menos para dictar la respectiva sentencia.

⁴⁴² Artículo 325. Duración de la investigación previa y derecho de defensa. La investigación previa se realizará en el término máximo de seis (6) meses, vencidos los cuales se dictará resolución de apertura de instrucción o resolución inhibitoria (archivo de las diligencias).

⁴⁴³ Artículo 329. Términos para la instrucción. El funcionario judicial que haya dirigido o realizado la investigación previa, si fuere competente, será el mismo que abra y adelante la instrucción, salvo que se haya dispuesto su desplazamiento. El término de instrucción no podrá pasar de 18 meses contados a partir de la fecha de su iniciación. No obstante, si se tratare de tres sindicados o delitos (Es un criterio de complejidad de la investigación que tiene entonces en cuenta el legislador), el término máximo será de 24 meses. Vencido el término de instrucción, la única actuación procedente será la calificación (en este caso colombiano con resolución de acusación o con resolución de preclusión, o sea archivo de las diligencias, art. 395). Pero esta ley tiene un capítulo IV, transitorio, donde se reglamenta la competencia de los jueces penales del circuito especializado, encargados de conocer delitos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, previendo la ley unos términos más flexibles, para la detención preventiva, pues se duplican, en consideración a los delitos investigados.

materia de libertad éste fue extensivo y comprendió todo el procedimiento penal, y ante los vacíos de la Ley 906 de 2004 y normas complementarias, en la sentencia C-390 de 2014⁴⁴⁴ entró a resolver el problema jurídico relacionado con la formulación de la acusación contenida en el numeral 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1453 de 2011, que consagra las causales de libertad, determinando que dicha normatividad es violatoria del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas y al plazo razonable, al derecho a la libertad y a la presunción de inocencia, por cuanto permite que la medida de aseguramiento privativa de la libertad se prolongue de forma indefinida en el periodo comprendido entre la radicación del escrito de acusación y la realización de la audiencia de lectura del mismo. Para la Corte, así como la sanción tiene que estar definida en la ley, quedando prohibida su indeterminación, así debe serlo ineludiblemente sobre las circunstancias que pueden dar lugar a una privación indefinida producto de una medida de aseguramiento, señalando la necesidad de definir los plazos que deben regir su duración, situación bien importante y que resalta la garantía del derecho al plazo razonable frente a la privación de la libertad. Por ello determinó que *“el hecho de hacer producir efectos negativos a una medida de aseguramiento permitiendo su duración indeterminada en alguna etapa del proceso, desvirtúa su naturaleza preventiva y su propósito de salvaguardar los fines del proceso que le dio origen, adquiriendo connotaciones desproporcionadas”*.

En esta resolución la Corte hace unas precisiones muy importantes respecto a la necesidad legal y constitucional de imponerse y respetarse los plazos procesales, por ello, considerando que es muy relevante a los fines de este trabajo se destacan algunos apartes de esta sentencia:

“Por su parte, los jueces se encuentran limitados por determinadas obligaciones que conllevan la observación de los términos procesales consagrados constitucional y legalmente para el cumplimiento de las actuaciones que adelantan. Sin embargo, el problema surge cuando, como en el presente caso, el legislador ha omitido establecer con claridad los términos que pueden extender la privación de la libertad, por demás provisional, de quien se encuentra en un proceso penal. En tal circunstancia, en atención a alguna de las posibles interpretaciones, queda al arbitrio del juez la extensión del mismo, conduciendo a eventuales dilaciones injustificadas que derivan en la afectación de la libertad del procesado.

⁴⁴⁴ Sentencia C- 390 de fecha 26 de junio de 2014. Magistrado Ponente ROJAS RÍOS Alberto.

En particular sobre el derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas en el ámbito penal, la Corte Constitucional ha señalado que el establecimiento de términos de instrucción constituye prenda que garantiza la efectividad del derecho del procesado a que no ocurran durante el transcurso del proceso dilaciones injustificadas o una prolongación indefinida del mismo sin términos procesales perentorios:

“El señalamiento de plazos temporales de carácter perentorio para que se cumpla una actuación o se agote una determinada etapa procesal, como en este caso se hace para la fase instructiva en los procesos a cargo de los jueces regionales y del Tribunal Nacional, constituye prenda que garantiza la efectividad del derecho del procesado a que no ocurran durante el adelantamiento del proceso dilaciones injustificadas o una prolongación indefinida del mismo sin términos procesales perentorios. Es evidente que la naturaleza de los delitos de los cuales conocen los jueces regionales y las circunstancias en que se cometen dichos hechos punibles, implican mayores obstáculos para la recaudación de las pruebas correspondientes, lo cual conduce a la necesidad de prever un lapso mayor que el consagrado para los otros delitos con el fin de adelantar la investigación correspondiente en forma más acertada y completa.

Igualmente, referido a la duración de la privación temporal de la libertad, la Corte Constitucional ha considerado desde sus inicios que:

“El artículo 29 de la C.P., reconoce el "derecho a un debido proceso público sin dilaciones justificadas". Se concreta en el ordenamiento interno, el derecho que con similar formulación se consagra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966 (art. 14.3 c.), suscrito por Colombia.

La recta y pronta administración de justicia, deja de ser un simple designio institucional para convertirse en el contenido de un derecho público subjetivo de carácter prestacional ejercitable frente al Estado en los supuestos de funcionamiento anormal de la jurisdicción.

En ausencia de determinación legal, el concepto indeterminado "dilaciones injustificadas", debe deducirse en cada caso concreto con base en pautas objetivas que tomen en cuenta, entre otros factores, la complejidad del asunto, el tiempo promedio que demanda su trámite, el número de partes, el tipo de interés involucrado, las dificultades probatorias, el comportamiento procesal de los intervinientes, la diligencia de las autoridades judiciales etc. Sin embargo, en ciertos casos, es el propio legislador, en guarda de valores

superiores, el que determina el contenido y alcance del aludido concepto, para lo cual establece términos perentorios cuyo incumplimiento desata consecuencias que bien pueden mirarse como riesgos conscientemente asumidos por el ordenamiento para no lastimar un bien superior. En estos eventos, el derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones injustificadas, adquiere prevalencia sobre consideraciones puramente orgánicas y funcionales propias del aparato de la justicia.

Precisamente, la fijación legal de un término máximo de duración de la detención provisional, obedece al enunciado propósito. La duración de la privación temporal de la libertad, aplicable a las etapas de investigación y juzgamiento, consulta en una sociedad democrática el delicado equilibrio que debe mantenerse entre el interés legítimo del Estado de perseguir eficazmente el delito y sancionar a los culpables y, de otro lado, la necesidad de asegurar la libertad de las personas y la posibilidad de garantizar un proceso justo e imparcial.”

En efecto, el establecimiento de límites temporales a la duración de la detención preventiva parte de los principios de legalidad y proporcionalidad que deben gobernar la medida. A partir del pensamiento liberal, en el que el poder del Estado debe estar controlado, el ius puniendi, como manifestación del mismo, no puede sustraerse a las restricciones constitucionales, una de las cuales es la duración del proceso penal y en particular de las medidas que resulten restrictivas de derechos. Al respecto la Corte Constitucional ha expresado que “no podrán tipificarse conductas que desconozcan los derechos fundamentales, que no resulten idóneas para proteger bienes constitucionales o que resulten desproporcionadas o irrazonables. Lo mismo puede predicarse de las sanciones. Estas restricciones, como se indicó antes, operan frente a toda decisión estatal en materia punitiva” En este sentido se determina la imperiosa necesidad de establecer precisos límites temporales para el encarcelamiento preventivo.

De esta forma, la indefinición de términos, particularmente cuando puedan afectar la libertad personal del procesado, resulta inconstitucional. Así lo ha entendido la Corte en sentencia C-1198 de 2008, cuando al analizar la expresión “justa o” contenida en el parágrafo del artículo 30 de la Ley 1142 de 2007, estableció que ésta era inconstitucional por cuanto dejaba al arbitrio del funcionario judicial el cumplimiento o no de los términos para celebrar el juicio oral. En aquella oportunidad, se dijo que la indeterminación del supuesto fáctico conducía a la ambigüedad de cuándo se realizaba la audiencia de juicio

oral. Esta circunstancia vulneraba tanto la garantía de libertad personal como el derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. Al respecto, la mencionada sentencia consideró que:

“6.4 Encuentra la sala que la expresión “justa o”, dentro del sistema acusatorio que se sustenta en una nueva previsión constitucional, a partir del Acto Legislativo 03 de 2002, no atiende las exigencias referidas en los precedentes, como quiera que el supuesto fáctico allí consagrado no supera el imperativo de ser claro, preciso y unívoco, toda vez que su indeterminación conduce a ambigüedad acerca del momento en el cual se realizará la audiencia de juicio oral, vulnerando así la garantía de la libertad personal consagrada en el artículo 28 superior. Igualmente la preceptiva referida contraviene el imperativo constitucional que se impone a los funcionarios judiciales de observar “con diligencia” los términos procesales, so pena de ser sancionado su incumplimiento (art. 228).

En conclusión, para la Corte existe un vacío legal cuando hay persona privada de la libertad y se ha presentado el escrito de acusación, porque el legislador no planteó concretamente el momento procesal para comenzar a contabilizar los términos del artículo 317, numeral 5, a efectos de gozar de la libertad por vencimiento de términos, al no establecer con exactitud si el plazo para gozar de la libertad iniciaba desde que se presentó el escrito de acusación o desde la celebración de la audiencia de formulación de acusación, lo que en la práctica vulnera la Constitución por la indeterminación del periodo que existe entre la presentación del escrito de acusación y la audiencia de formulación de la acusación.

Lo más importante del caso es que la Corte toma una decisión trascendente para garantizar el derecho al plazo razonable en materia de libertad, declarando la exequibilidad de la expresión “la formulación de la acusación” del numeral 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que esta expresión hace referencia al acto de radicación del escrito de acusación y no al de realización de la audiencia de lectura del mismo, como momento para iniciar la contabilización del término en que una persona puede gozar de libertad si no se ha iniciado el respectivo juicio.

Pero fue mucho más allá este Tribunal, pues estableció que, en aras de no causar colapso, *difirió los efectos de la sentencia de exequibilidad condicionada hasta el 20 de julio de 2015, “mientras el legislador decide, si lo considera conveniente o necesario, regular expresamente el periodo máximo que puede tenerse privada de la libertad a una persona incluyendo en dicho lapso el interregno*

entre la radicación del escrito de acusación y la audiencia de lectura del mismo. Si al cabo del anterior término el legislador no ha adoptado una regulación distinta, y para proteger los derechos de las personas privadas provisionalmente de la libertad, la presente sentencia surtirá todos sus efectos”.

Pues bien, la sentencia produjo efectos positivos viéndose el legislador obligado a expedir la Ley 1760 de 2015, que viene a reglamentar los plazos procesales de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, tanto en la etapa de instrucción como en el juicio, pero hace unas distinciones de los plazos en que una persona debe permanecer privada de la libertad con medida de aseguramiento en la instrucción y en el juicio.

En la etapa de instrucción:

- a. En los casos de investigaciones no complejas, relacionadas con no más de tres imputados y que sean investigadas por los Fiscales delegados ante los Jueces Municipales y los Fiscales Delegados ante los Jueces del Circuito, el término máximo de duración de la medida no puede exceder de un año.
- b. Cuando el proceso se surta ante los Jueces penales del Circuito Especializados, o sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011, dicho término podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial.
- c. Vencido el término anterior, el Juez de Control de Garantías, a petición de la Fiscalía o del apoderado de la víctima, podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se trate, por otra u otras medidas de aseguramiento, por lo cual se entiende que debe ser una medida no restrictiva como mecanismo de vigilancia electrónica, vigilancia de una persona o institución determinada, presentaciones periódicas, prohibición de salir del país, ente otras.

En lo que tiene que ver con la ***etapa del juicio*** la ley reglamenta los plazos máximos que puede permanecer privada de la libertad, así:

- a. Cuando transcurridos ciento cincuenta (150) días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente. Esto en relación con asuntos relacionadas con no más de tres (3) imputados y que sean investigadas por

los Fiscales delegados ante los Jueces Municipales y los Fiscales Delegados ante los Jueces del Circuito.

- b. Este término se incrementará por el mismo término inicial, cuando el proceso se surta ante los Jueces penales del Circuito Especializados, o sean tres (3) o más los imputados o acusados, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de que trata la Ley 1474 de 2011.

La ley prevé la posibilidad que se presenten maniobras dilatorias por parte del interesado para lograr la libertad en la etapa del juicio, así que para impedir esta situación se estableció en el artículo 4 de la citada ley, lo siguiente: Parágrafo 3°. Cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro de los términos contenidos en los numerales 5 y 6 de este artículo, los días empleados en ellas.

Igualmente la ley contempla que puedan darse otras circunstancias externas, y sobre el particular en el mismo artículo se sustenta en el inciso final lo siguiente: “Cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar o terminar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia, la audiencia se iniciará o reanudará cuando haya desaparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no superior a la mitad del término establecido por el legislador en los numerales 5 y 6 del artículo 317”.

En cuanto a su aplicabilidad, la ley prevé que estos términos procesales comiencen a cumplirse a partir un (1) año contado a partir de la fecha de la promulgación de la ley, lo que significa que inician el 6 de julio del año 2016.

Conforme a lo planteado en este trabajo, ésta ley representa un avance significativo en materia de la efectividad del derecho al plazo razonable respecto al derecho de la libertad, en cuanto: (i) El legislador aceptó las recomendaciones dadas por la Corte Constitucional relacionadas en la sentencia C- 390/2014, relativa a la obligación que tiene el Congreso para reglamentar los plazos procesales en materia de libertad, durante la investigación y el juicio, pues su no existencia significa que los jueces sean los que legislen en ese tópico, lo que constituye una arbitrariedad y la vulneración del derecho a la libertad, del derecho al plazo razonable, principio de inocencia. (ii) Avala la tesis de este trabajo sobre la exigencia constitucional y legal que se establezcan los plazos procesales del proceso en todas sus etapas, no solo para la libertad, sino para todo el proceso, que como se dijo, los hay para la indagación e instrucción, pero no para el juicio en este momento. Sin

embargo, al reglamentar los plazos en el juicio, cuando hay persona detenida, ya de por sí significa que se acelere la definición del caso en aras de cumplir los mismos, supliendo el vacío que existía en esa materia cuando hay persona privada de la libertad, aunque como queda dicho, queda pendiente que se establezcan cuando no lo hay en esta etapa del juicio. (iii) También el legislador previó para la etapa del juicio, no para la instrucción, que el interesado pueda dilatar los términos para gozar de la libertad, de ahí que, en ese aspecto, de probarse que es el responsable de la dilación, no procede la causal de libertad, dejando un vacío jurídico en la instrucción, cuando el imputado o por intermedio de su defensor, dilata los términos con el fin de recuperar la libertad. (iv) Contempla otra situación que se ha propuesto en éste trabajo en materia de plazos procesales, en éste caso lo admite para efectos de la libertad, pero atendiendo a situaciones que conforme a lo estudiado pueden resultar complejas, como es que prevé que cuando el proceso se surta ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, o sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011, dicho plazo podrá prorrogarse a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial. Ello representa un avance significativo en la medida que de un lado es una garantía para la persona privada de la libertad, quien podrá estarlo máximo un año si el Fiscal no solicita la respectiva prórroga ante el JCG y por otro, la posibilidad que tiene el Fiscal de pedir la prórroga cuando ésta sea necesaria. (vii) Reconoce por otro parte que los JCG, como se previsto en este trabajo, sean los que determinen la necesidad o no de la prórroga de los plazos judiciales. (viii) También es importante que el legislador acoge en esta ley otra decisión de la Corte Constitucional, significativa a los fines de éste trabajo, relacionada con la sentencia C- 1198 de 2008, en cuanto ahí se declaró la exequibilidad de la expresión “ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa razonable”, en el entendido para este Tribunal de que: a) la justificación de la causa razonable debe fundarse en hechos externos y objetivos constitutivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia y b) en todo caso, la audiencia se iniciará cuando haya desaparecido dicha causa y a más tardar en un plazo que no superior a la mitad del término establecido por el legislador en el numeral 5º del artículo 317 de la ley 906 de 2004. En ésta providencia, la Corte deja sentado que la indeterminación de la expresión “justa o” conduce a una indefinición acerca de cuándo se realizará la audiencia en el juicio oral, lo que vulnera la garantía de la libertad personal (art. 28 CP) y la observancia estricta de los términos procesales (art. 228 CP).

En este orden de ideas, se tienen elementos de soporte, como es esta Ley 1760 de 2015, para formular algunas propuestas, así:

- 1- Establecer plazos procesales en todas las etapas del proceso penal, porque como lo ha establecido la Corte Constitucional colombiana *“no se trata únicamente de velar por el cumplimiento de los términos por sí mismo ya que él no se concibe como fin sino como medio para alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jurídica, sino de asegurar que, a través de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtención de pronta y cumplida justicia”*⁴⁴⁵, en consecuencia, la existencia de los plazos y su observancia es el medio efectivo para la realización del acceso a la justicia material de acuerdo a éste Tribunal y a eso le apuntamos en éste trabajo.⁴⁴⁶
- 2- Que dichos plazos sean diferentes: unos para casos simplificados, otros para casos complejos de acuerdo a la casuística indicada por la jurisprudencia del TEDH y CIDH sobre la complejidad de los asuntos, sumándole, la eventualidad, que se trate de un asunto de una “complejidad extrema” o como ha indicado la CIDH, “enorme complejidad”, que como dijimos operaría para

⁴⁴⁵ Corte Constitucional. Sentencias: Sala Tercera de Revisión. Sentencia de 24 de junio de 1992. Magistrado Ponente: Dr. MARTÍNEZ CABALLERO Alejandro; MORÓN DÍAZ, Fabio. Sentencia. Número T-431-92. Sala Tercera de Revisión, de 24 de junio de 1992. Magistrado Ponente: Dr. MARTÍNEZ CABALLERO, Alejandro & MORÓN DÍAZ, Fabio. Sentencia Número T-292 de 10 de mayo de 1999. Magistrado Ponente: Dr. HERNÁNDEZ GALINDO, José Gregorio.

⁴⁴⁶ MORENO CATENA, Víctor. *El proceso penal español. Algunas alternativas para la reforma. Sistemas penales europeos*. Escuela judicial. Año 2002. Págs. 28 y 29. El profesor Moreno Catena aborda las garantías que rodean al proceso penal y la necesidad de mantenerlas pese al aumento y formas de criminalidad, así que examinando algunos problemas que las limitan propone varias soluciones, varias de ellas propuestas también en este trabajo para el caso colombiano. La propuesta de establecerse un plazo máximo de duración de la instrucción de los procesos penales una vez que ésta se dirige contra una persona determinada, ya existe en Colombia, por ello esta garantía se pide que se extienda al juicio donde no se tiene. La segunda propuesta, es que debería procurarse que se limitaran las informaciones sobre el sometimiento de una persona a un proceso penal, considerando la trascendencia que para el imputado tiene el conocimiento general de esa noticia, puesto que normalmente se da y se lee como equivalente a una sentencia condenatoria. En tercer lugar, que se debería limitar la instrucción a las diligencias imprescindibles y evitar por todos los medios que en el juicio se pueda tener presente cualquier actuación instructora, salvo que se trate de una prueba anticipada o de preconstitución probatoria. En este tercer aspecto estamos totalmente de acuerdo, hacia eso apunta este trabajo dadas las fallas que representa en el proceso un mal direccionamiento del caso, en contra de garantías constitucionales, especialmente con la relacionada con el plazo razonable. Sobre la prueba anticipada se trabaja en este estudio, especialmente para hacerla valer en casos de graves violaciones de derechos humanos.

casos de graves violaciones de derechos humanos, bien abordados por la CIDH.

- 3- Darle herramientas a los funcionarios judiciales (porque en la mayoría de las veces nos enfrentamos a casos donde es imposible cumplir los plazos, pese a toda la diligencia y cuidado) y la legislación no autoriza en esas circunstancias a acudir a otros medios procesales, por lo que se propone, obtener una autorización, previa justificación, para ampliarlos o prorrogarlos, debiendo definir la ley en cuantas ocasiones, atendiendo a un caso de “complejidad extrema” o “enorme complejidad”.⁴⁴⁷
- 4- Que la ley procesal penal establezca unos plazos para el tiempo que debe durar la etapa del juicio.
- 5- Que para establecer esos plazos en el juicio consulte la jurisprudencia de la CIDH relacionada con la complejidad del asunto, y tenga en cuenta que puede generarse casos de enorme complejidad, por tanto los plazos serán diferentes en asuntos de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados.
- 6- Que en esos casos de “enorme complejidad” o “complejidad extrema” también se establezca la prórroga del término, tal como lo establece la Ley 1760 de 2015, y que antes de su vencimiento el fiscal tenga la posibilidad de solicitar la prórroga, ante el Juez de Conocimiento, pero justificando porque se hace necesario más termino para culminar el juicio.⁴⁴⁸

⁴⁴⁷ En el caso colombiano, la misma ley dificulta la labor judicial, pues conociendo los problemas estructurales del sistema, y los graves problemas sociales, políticos, económicos por los que hace más de cincuenta años atraviesa el país, no ajusta su sistema a esta realidad, por el contrario, con la expedición Ley 906 de 2004, redujo los términos en instrucción, tornándose irrazonables, no hizo diferencias entre casos sencillos e investigaciones complejas, pues solo fijó treinta días entre la imputación y la acusación. En el año 2011, corrige el error con la Ley 1153 de 2011. La Corte Constitucional en su jurisprudencia niega una interpretación extensiva de las normas que establecen los términos, exigiendo de los jueces que sean estrictos y cuidadosos en la aplicación de las normas que comportan suspensión de los procesos judiciales. Vid. Sentencias: Sala Quinta de Revisión. Sentencia del 27 de Abril de 1995. Magistrado Ponente: Dr. GREGORIO HERNÁNDEZ, José Galindo. Sentencia. Número T-190-95; Sala Octava de Revisión. Sentencia del 31 de octubre de 2002. Magistrado Ponente: Dr. Tafur Galvis, Álvaro. Sentencia Número T-924-02., Sala Séptima de Revisión. Sentencia del 17 de julio de 2003. Magistrado Ponente: Dr. MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. Sentencia. Número T-589-03; y Sala Plena de la Corte. Sentencia del 27 de octubre de 1999. Magistrado Ponente: Dr. GAVIRIA DÍAZ, Carlos. Sentencia Número C-846-99.

⁴⁴⁸ TRILLO NAVARRO, Jesús Pórfilo. *El fiscal en el nuevo proceso penal. Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal- reforma 2007*. Ed. Comares. Granada. 2008, págs. 80 a 82. “En Italia el artículo 407 del CPP permite que el Juez de las Investigaciones Preliminares decida sobre la petición del Fiscal de prorrogar el plazo de las investigaciones *“Termini di durata massima delle indagini*

- 7- Garantizar la agilidad del sistema acusatorio con figuras relacionadas con conciliación, desistimiento, mediación (casos simples o de poca trascendencia social).
- 8- Preacuerdos y principio de oportunidad para casos de alto impacto nacional e internacional, figura de colaboración eficaz, hoy en día opera en la Ley 600/2000, pero no se reprodujo en el sistema acusatorio, pese a que éste último se implementó con el objeto de dinamizar las investigaciones, que los casos se resolvieran rápidamente, pero en el desarrollo del mismo se fueron creando leyes que impiden su agilidad, volviéndolo lento y obligando en muchos casos a ir a juicio porque no hay ninguna forma de negociación, esto se tiene que replantear, la excepción debe ser el juicio,⁴⁴⁹ pues es mejor obtener una condena así la pena sea menor, en un tiempo razonable, que conlleve celeridad, economía procesal, menos desgaste del aparato judicial tanto logístico, presupuestal y humano; que una condena ejemplar, en tanto que la pena, así sea menor, cumple con los fines para la cual fue creada.
- 9- Garantizar que en los preacuerdos siempre la víctima sea representada por un defensor, que como más adelante se indicará debe ser designado por el Estado, para de esta forma garantizarle el derecho a ser oída en un plazo

preliminari". En Italia artículo 326 del CPP establece un plazo dentro del cual el Ministerio Público debe adoptar una decisión sobre la acción penal, el cual no es siempre el mismo, depende de la gravedad del hipotético ilícito penal y de la complejidad de las investigaciones – art. 405 CPCP. 406- "prórroga del término", 407, "*termini di durata massima delle indagini preliminari*". El código fija un plazo máximo para la duración de las investigaciones preliminares que normalmente es de seis meses desde la inscripción de la noticia del delito en el registro de indagados; plazo que será de un año en caso de investigación referida a uno de los delitos enumerados en el artículo 407, que prevé supuestos de mayor gravedad. Este plazo puede ser prorrogado si el Fiscal lo pide al Juez de Investigaciones Preliminares explicando las razones que no le han permitido concluir las investigaciones y actos que pretenda realizar en la prórroga, pudiendo conceder un aplazamiento de seis meses renovable. En total las investigaciones no podrán dilatarse más de un año y medio, con carácter general, o dos años en las hipótesis del artículo 407 CPP. Si el juez deniega la prórroga obliga al Fiscal a decidir entre la petición de archivar o la formulación de imputación". Vid. Doctor ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. *El proceso penal*. Tomo III. Editorial Edino. 1990, págs 117 a 130. Se destaca que en Ecuador, para el legislador de 1983, los términos constituyen un "principio fundamental", artículo 163, la ley procesal reglamenta unos términos para el desarrollo del proceso, y el artículo 282 permite que se practiquen actos con posterioridad al vencimiento, así el sindicado cuando esta para vencerse el plazo para declarar concluido el sumario, tiene derecho que le concedan 15 días más para su defensa, aunque excedan el previsto por la ley. También le da la facultad al juez de conceder el tiempo que tienen las partes para realizar un acto procesal, pudiendo señalar el máximo fijado por la ley. También existe la facultad que sea el juez quien fije determinados plazos. En consecuencia, el proceso penal se rige por unos términos y se concede al juez la posibilidad de ampliarlo. Hay plazos prorrogables y otros improrrogables".

⁴⁴⁹ Vid. DE DIEGO DíEZ, Luis Alfredo. *Justicia Criminal Consensuada*. Editorial Tirant Monografías. Valencia. 1999."

razonable. Para la víctima los preacuerdos, quiérase o no, son una garantía, porque tienen la posibilidad de hacer valer sus derechos; el juicio siempre genera incertidumbre y la posibilidad de que no haya justicia en caso que la defensa logre demostrar alguna duda probatoria, situación que siempre hay que prever dadas las falencias estructurales del mismo sistema.

- 10-Hacer efectivo el derecho de la libertad provisional como regla general, porque este postulado se predica una y otra vez, pero cuando el Estado pretende resolver problemas sociales o económicos tiende a hacer uso de la medida de prisión provisional. La legislación debe reservar esta medida para casos de alto impacto nacional e internacional en la etapa de la investigación y juicio, o delitos graves que repercutan en la seguridad ciudadana y siempre que exista peligro de fuga o de destrucción de pruebas; utilizando medidas alternativas a la prisión, en caso de delitos de menor entidad, mecanismos como detención domiciliaria, uso de medios electrónicos, pago de caución, trabajo social, etc. Considero que para el cumplimiento de este punto la Ley 1760 de 2015 será una buena herramienta, porque además de reglamentar los plazos de la privación de la libertad en la instrucción y en el juicio, contiene otras disposiciones que restringen el uso de la privación de la libertad, demandando mayor esfuerzo argumentativo y probatorio por parte del Fiscal, para que el JCG imponga la medida de aseguramiento.
- 11-Culturizarse respecto de que lo importante no son la aplicación de penas altas y ejemplarizantes, sino que haya justicia, que se conozca la verdad, y especialmente que la víctima pueda ser reparada integralmente tras la decisión de una sentencia definitiva.

En conclusión, se propone que el Estado colombiano adopte herramientas procesales, especialmente en materia penal, que es donde se hace la propuesta, y donde se afectan especialmente los derechos tanto de los imputados o acusados (derecho de defensa, presunción de inocencia) como de las víctimas (a conocer la verdad, a tener justicia y reparación integral) para garantizar el derecho al plazo razonable.

CAPITULO XI

PROPUESTAS PARA OBTENER UNA DECISIÓN DEFINITIVA QUE RESPETE EL DERECHO A SER OÍDO EN UN PLAZO RAZONABLE, EN MATERIA PENAL, EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA

En este momento, como se ha indicado, el procedimiento penal colombiano se rige por dos sistemas: por un lado, la Ley 600 de 2000 -un sistema mixto, la parte de la indagación e instrucción totalmente inquisitivo, y ya en el juicio con tendencia al acusatorio; por otro lado, la Ley 906 de 2004, que trató de ajustarse a los lineamientos del sistema anglosajón. Como se ha indicado, se han reglamentado unos plazos en ambos sistemas que no han comprendido la totalidad de los procedimientos.

Es de destacar que la instrucción en la Ley 906 de 2004 era limitada a 30 días, sin considerar ninguna circunstancia especial, por lo cual este plazo resultaba contrario a los estándares internacionales previstos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque no se consideraba la complejidad del asunto, estaba midiendo con el mismo rasero los asuntos comunes de aquellos de mayor entidad. En el evento de incumplirlo el funcionario infractor era sancionado tanto disciplinaria como penalmente, pasando a otro Fiscal quien disponía de otros treinta días, lo que significaba que difícilmente se sometiera a superar ese tiempo, que por ser tan corto en asuntos complejos, atentaban contra los intereses de los sujetos procesales⁴⁵⁰.

⁴⁵⁰ Como se explica en la nota 415. El artículo 294 de la Ley 906 de 2004. (Artículo 294. Vencimiento del término. Vencido el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior. En este evento el superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de treinta (30) días, contados a partir del momento en que se le asigne el caso. Vencido el plazo, si la situación permanece sin definición el imputado quedará en libertad inmediata, y la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al juez de conocimiento. El vencimiento de los términos señalados será causal de mala conducta. El superior dará aviso inmediato a la autoridad penal y disciplinaria competente. Este artículo fue demandado ante la Corte Constitucional, al considerar que: (...) Las expresiones acusadas vulneran los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia (art. 228 Superior), al debido proceso (art. 29 de la C.P.), y a la igualdad (art. 13 constitucional), "así como los principios de justicia y verdad en el proceso penal, y además los derechos fundamentales de las víctimas (preámbulo de la Carta Fundamental); también infringe los principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad". Estimó la recurrente que la norma permite una "preclusión-

En una investigación sobre violación de derechos humanos, el término de treinta días previsto anteriormente, inclusive los sesenta días actuales, era casi seguro que podía resultar insuficiente para acusar a una persona; dada la complejidad de las investigaciones de violaciones de derechos humanos y más las de graves violaciones de DH.

La propuesta va encaminada a que la ley procesal penal claramente diferencie tres procedimientos: (i) Uno para causas menores (ii) otro para violaciones de derechos humanos previstos en la CIDH y PIDCP (iii) y finalmente un procedimiento para graves violaciones de derechos humanos.

11.1 Propuestas para investigaciones asuntos de pequeñas causas

La Ley 1153 de 2007 se creó como una alternativa que buscaba descongestionar el sistema penal acusatorio facilitando el acceso a la justicia mediante un procedimiento rápido, sencillo y oral, donde tenía primacía el derecho a la libertad, porque la prisión preventiva se reemplaza con penas alternativas como el trabajo social no remunerado y las multas con el fin de reparar el daño causado a la víctima⁴⁵¹. Por ello muchos delitos se convirtieron en contravención cuando la cuantía no superaba los 10 salarios mínimos legales mensuales.

sanción", o sea la preclusión de la instrucción a favor del imputado si pasados los sesenta días la Fiscalía no presentó el escrito de acusación, lo que significa un premio ya que eso conlleva no solo efectos de absolución y cosa juzgada, sino que no haya justicia y la violación de los derechos de las víctimas y de la comunidad". En su decisión, la Corte Constitucional advirtió que en el sistema acusatorio solo la Fiscalía y el juez de conocimiento están llamados a solicitar la preclusión. De acuerdo al análisis del Tribunal, solo es viable precluir, atendiendo las causales que sobre el particular establece el artículo 332 de la Ley 906 de 2004, entre ellas en el numeral 7°. Allí, se determina como causal de terminación del proceso el vencimiento del término previsto en el artículo 294, en estos eventos no procede automáticamente la causal según la Corte, porque de ser así se desconocerían los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, por cuanto un delito grave quedaría impune, debido a la falta de diligencia del órgano investigador. Sentencia C-806 de 2008. M.P. Dr. SIERRA PORTO, Humberto Antonio D- 7159 (Corte Constitucional Colombiana 20 de agosto de 2008)

⁴⁵¹ COLUMNA HERRERA, Luis Miguel, *Op. cit.*, págs. 20 a 26. "Nótese que en España a través del procedimiento abreviado denominado "Del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos" un 70% de los delitos que se cometan se instruirán por ese procedimiento, con lo que se espera la reducción de los plazos en la etapa de instrucción para pasar al juicio. Lo anterior se prevé para delitos de competencia exclusiva de los juzgados de lo penal, con pena privativa de la libertad no superior a 10 años. Que el procedimiento se haya iniciado en virtud de un atestado policial, y que se haya detenido a una persona y se le haya puesto a disposición judicial excluyendo por ello procedimientos que inician mediante querrela o denuncia. Que se trate de un delito flagrante y que se trate de un hecho punible cuya instrucción se presuma pueda ser sencilla".

Se propone revivir esta ley, subsanando los errores que se cometieron cuando se expidió, dado que se excluyó a la Fiscalía del ejercicio de la acción penal y fue encomendado a la policía judicial⁴⁵², en contravía con el artículo 250 de la Constitución Política que ha radicado en cabeza de la Fiscalía el ejercicio de la acción penal.

La propuesta que se presenta es la siguiente:

1. Otorgarle a la Fiscalía la investigación y acusación de estos procesos de pequeñas causas como lo prevé la Constitución Política.
2. Establecer que las conductas consideradas hoy en día como querellables en el código de procedimiento penal, se tendrán como contravenciones cuando no superen los diez salarios mínimos legales. Cuando pasen ese valor, tendrán el carácter de delitos⁴⁵³.

⁴⁵² “La Ley 1153 de 2007 surge como una respuesta para descongestionar el proceso penal consagrado en la Ley 906 de 2004, para atender los delitos de menor relevancia e impacto social, para lo cual define como contravenciones algunas conductas que en los Códigos Penales y de Procedimiento Penal eran clasificadas como delitos querellables, y establece un procedimiento expedito para su investigación y juzgamiento, no obstante su tratamiento se ubica en la esfera penal y si bien las pequeñas causas, llamadas formalmente contravenciones penales, desde el punto de vista material continúan teniendo todos los elementos de un delito, desde su descripción típica, pasando por el régimen de responsabilidad, hasta llegar a la pena misma, que puede ser privativa de la libertad. De tal manera que solo el nombre, no la sustancia permitiría diferenciar las “pequeñas causas penales” de los delitos. Es cierto que el legislador estimó que dichas pequeñas causas tenían menor grado de lesividad, pero esa apreciación no se tradujo en su despenalización ni en su sometimiento a un régimen distinto al delictual en cuanto a su descripción, responsabilidad y pena. A pesar de que las conductas definidas como pequeñas causas continúan siendo materia penal y tratadas como delitos, y que su sanción puede dar lugar a la privación de la libertad, la Ley 1153 de 2007 excluyó a la Fiscalía General de la Nación de la competencia para la investigación de los hechos, que conforme lo establece de manera clara, expresa e inequívoca el inciso primero del artículo 250 de la Constitución Política, la Fiscalía General no puede renunciar a ejercer la acción penal ni dejar de realizar la investigación penal frente a aquellos hechos que revistan las características de un delito, sin perjuicio de la institución de la querella, asignándole las funciones de investigación e indagación a la Policía Nacional frente a las contravenciones penales, que siguen revistiendo las características de un delito, lo que contraría el artículo 250 Superior. Fue declarada inconstitucional, Sentencia C-879/08. M.P. CEPEDA ESPINOSA, Manuel José. Diez (10) de septiembre de dos mil ocho (2008).

⁴⁵³ Escuela judicial – Consejo General del Poder Judicial. *Sistemas penales europeos*. Cuadernos de Derecho Judicial. Madrid, 2002, págs. 52 y 53. “Sobre los procesos sencillos se habla en la recomendación 18 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 17 de septiembre de 1987, sobre la simplificación de la justicia penal, sugiere para las infracciones menores y más extendidas, entre otras medidas, la adopción del principio de oportunidad, el establecimiento de procedimientos sumarios y simplificados y la transacción, así como la descriminalización de ciertas conductas. En lo que hace al principio de oportunidad, advierte la Recomendación que tal facultad debe estar prevista en la ley y adoptada cuando existan indicios suficientes de culpabilidad, y teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, las circunstancias y consecuencias de la misma, la personalidad del

3. Establecer igualmente que los delitos contra el patrimonio que no superen los 50 salarios mínimos legales mensuales sean cobijados por este procedimiento.
4. Elaborar el programa metodológico para poder llevar a cabo una eficaz evaluación del caso.⁴⁵⁴
 - Como requisito de procedibilidad exigir que en todos los casos se agote previamente al ejercicio de la acción penal la conciliación preprocesal, estimando que sería viable para las contravenciones y delitos que la ley prevé como querellables. Fallada la conciliación, iniciar la respectiva investigación, permitiendo que en cualquiera de las siguientes etapas (indagación, instrucción o juicio) el asunto se resuelva con figuras como la conciliación, desistimiento, indemnización integral, mediación, preacuerdo, principio de oportunidad.
5. Que por intermedio de este procedimiento simplificado se resuelvan todos los delitos que tengan prevista en la legislación penal una pena inferior a seis años de prisión.
6. Que este procedimiento aplique para todos aquellos delitos relacionados con la protección del patrimonio, medio ambiente, salud pública, derechos de autor, entre otros, cuando el indiciado sea capturado en flagrancia, donde no operaría el requisito de conciliación preprocesal.
7. Señalar como plazo para la indagación dos meses, al cabo de los cuales las diligencias se archivarán si se presentan alguna de las siguientes circunstancias:
 - (i) No hay interés de la víctima para proseguir la investigación; (ii) imposibilidad de ubicarla cuando se requiera para practicar

infractor, los efectos de una eventual condena, la situación de la víctima, garantizándole siempre el derecho a la reparación de los daños. Al propio tiempo, previene que el archivo pueda ser incondicionado o sujeto a determinadas condiciones y previa audiencia del imputado”.

⁴⁵⁴ RUIZ VADILLO, Enrique. *Op. cit.*, p. 206. El programa metodológico es sinónimo de eficacia, la misma que reclaman el TEDH y la CIDH, como también muchos doctrinantes para hacer efectivo el derecho a ser oído en un plazo razonable, y la falta de planificación y direccionamiento de la investigación se traduce en tantas faltas en el sistema judicial, como lo revelan varios estudios. (...) una de las tachas más importantes y generalizadas que se ponen al Derecho, o mejor, al Ordenamiento jurídico en su más efectiva realización, es el de su ineficacia, a la que inseparablemente va unida la tardanza, la demora, la llamada dilación indebida. (...) la tardanza, el retraso en resolverse los asuntos de manera definitiva ofrece una muy especial gravedad. Una sentencia en el fondo justa, perfecta, técnica e incluso humanamente, no es nada si le falta la adecuación en el tiempo.

reconocimientos fotográficos, videos, reconocimientos medico legales, etc.; (iii) que se probó que no fue posible identificar o individualizar al responsable(s); (iv) atipicidad de la conducta; (v) causales de justificación; ((vi) muerte del responsable (s); (vii) conciliación; (viii) desistimiento; (ix) indemnización integral; (x) mediación; (xi) preacuerdo, etc.

- Después de los dos meses, el funcionario debe archivar las diligencias o comunicar al indiciado que contra él existe un llamamiento (imputación) por determinado delito o contravención, haciéndole conocer en un escrito dicha comunicación, en donde le señalará los aspectos fácticos y jurídicos del comportamiento, con la finalidad que active su derecho de defensa, para lo cual dispondrá de cinco (5) días para notificarle esta situación.
- En el evento que sea imposible la comunicación, deberá notificarle a través de un edicto.
- No se debe prever para este tipo de delitos medidas restrictivas de la libertad en la etapa de la instrucción ni juicio, hasta que no se dé una sentencia condenatoria ejecutoriada, en donde se hará uso de figuras alternativas como multa, vigilancia electrónica, trabajo fin de semana, caución, etc. La restricción de la libertad debe ser la excepción cuando no se cumpla con las figuras alternativas.
- Instrucción. El término para adelantar estos asuntos debe ser de treinta (30) días, al cabo de los cuales se debe presentar por parte del Fiscal el escrito de acusación, en donde relacionará todos los elementos materiales probatorios de que dispone, los cuales debe descubrir a los tres días siguientes de esta audiencia ante el Juez Penal Municipal, dispuesto para conocer de estas pequeñas causas, o delitos comunes, so pena de que sean excluidos. En esta audiencia solamente se podrán alegar asuntos relacionados con competencia, nulidades, impedimentos, recusaciones⁴⁵⁵, por lo cual se podrá interponer recurso de reposición ante el mismo juez, quien debe resolver en la misma audiencia, o apelación ante un juez superior, quien no podrá demorar más de tres días en resolver, so pena de compulsarse en su contra copias para ser investigado disciplinariamente.

⁴⁵⁵ Artículo 339 de la Ley 906 de 2004.

- Permitir que desde la comunicación hasta que se instale la audiencia de formulación de acusación el imputado tenga derecho a allanarse a los cargos formulados, para lo cual gozará de una rebaja de pena del 50%. De una rebaja de una tercera parte de la pena entre la fecha de la audiencia de acusación y hasta antes de la audiencia preparatoria, y una rebaja de una sexta parte entre la audiencia preparatoria y antes de ser interrogado sobre su inocencia en la audiencia del juicio oral. Estas rebajas deben proceder inclusive para las personas capturadas en flagrancia.
- La audiencia preparatoria debe iniciar a los treinta días después de la audiencia de acusación, donde el Fiscal y el defensor descubrirán todos sus EMP, se dará espacio a las partes para que acuerden si presentan estipulaciones⁴⁵⁶ y el Juez, luego de finiquitado el debate, indicará qué EMP podrán hacer valer en juicio cada uno de los sujetos procesales. Contra esta decisión procederán recursos de reposición ante el mismo funcionario, quien resolverá en la misma audiencia y recurso de apelación ante el superior jerárquico, quien debe resolver en un plazo no mayor de diez días, so pena de compulsarse en su contra copias para ser investigado disciplinariamente. El recurso se concederá en el efecto suspensivo⁴⁵⁷.
- El juicio se iniciará en un plazo no mayor a los quince días de terminada la audiencia preparatoria, donde inicialmente se le concederá la palabra al acusado para que manifieste si se declara culpable o inocente. De no aceptar su responsabilidad se continúa con la teoría del caso por parte de la Fiscalía. La defensa lo hará si lo desea. El debate probatorio deberá ser oral, concentrado, público, contradictorio y no podrá ser superior a quince días, al cabo de los cuales debe dictarse la respectiva sentencia, contra la que procede el recurso de apelación ante el superior jerárquico, quien tendrá un término de quince (15) días para decidir, so pena de compulsarse en su contra copias para ser investigado disciplinariamente.

⁴⁵⁶ Artículo 356 de la Ley 906 de 2004, parágrafo. Se entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados entre la fiscalía y la defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias.

⁴⁵⁷ Artículo 177 de la Ley 906 de 2004. En el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de quien profirió la decisión objeto de recurso se suspenderá desde ese momento hasta cuando la apelación se resuelva.

8. Se deben designar unos Fiscales destacados para investigar este tipo de asuntos, lo mismo que Jueces Municipales, para que solo se dediquen a estas funciones, porque en la práctica los JCG conocen igualmente de tutelas que retrasan los asuntos de su conocimiento.
9. Los Fiscales designados deberán estar capacitados en competencias relacionados con temas de resolución de conflictos de menores causas.
10. La finalidad de este sistema sería la de obtener la resolución de pequeñas causas por medio de figuras como la conciliación, desistimiento, indemnización integral, mediación, para finiquitar definitivamente el asunto, ya sea con archivo de las diligencias, o a través de allanamiento a cargos, preacuerdos, etc. En caso de presentarse allanamientos o preacuerdos se podrán acordar rebajas de pena, teniendo en cuenta la etapa procesal en que se encuentre, y/o degradar la conducta del responsable y/o buscar que la pena pueda consistir en trabajo social y/o ser redimida con multa, u otro tipo de beneficios como trabajo social, vigilancia electrónica, trabajo del fin de semana, caución, etc. También aplicar el principio de oportunidad.
11. En todos los casos, el procedimiento a partir de la formulación de acusación será oral, concentrado, público, se respetará el derecho de defensa y los plazos procesales de manera estricta.
12. El Fiscal deberá tener claro que el sistema busca la resolución de los casos a través de algunas de las figuras jurídicas previstas para su terminación anticipada; por ello, la excepción debe ser la etapa del juicio.
13. Para resolver el problema de falta de Fiscales se podrá autorizar que los estudiantes de último año de derecho puedan adelantar las conciliaciones en estos asuntos, que estos estudiantes realicen prácticas en la Fiscalía a través de sus centros de conciliación, quienes deben estar facultados para llevar a cabo las audiencias de conciliación, mediación, audiencias preprocesales, antes de iniciar la respectiva investigación penal, o en las siguientes etapas si se considera necesario convocar a las partes para resolver de ese modo el conflicto.
14. Con relación a los defensores, estos deberán ser estudiantes de último año de derecho, por la cual la ley debe prever como requisito para que puedan graduarse que realicen prácticas en los centros de conciliación y/o intervengan como defensores en estas pequeñas causas, salvo que el interesado quiera estar asistido por un abogado de confianza. (De esta

manera se resolvería un gran número de casos que no pueden avanzar por falta de defensores públicos, dejando liberados los defensores públicos para causas más complejas).

15. En los eventos en que iniciada la investigación penal exista conciliación o desistimiento, en las etapas de indagación y/o instrucción, sin que se haya realizado la audiencia de acusación, permitir que el Fiscal archive las diligencias directamente, sin necesidad de ir al Juez, en aras de facilitar que culmine rápidamente el caso y se descongestione el aparato judicial.
16. Así mismo, restringir las actuaciones ante el Juez de Control de Garantías, porque en la práctica se saturaron de audiencias en la resolución de asuntos que puede realizar el Fiscal, que no conllevan la vulneración o afectación de derechos fundamentales. Estos jueces deben ser los garantes de las decisiones que deben tomar los fiscales en donde se comprometan derechos fundamentales.
17. Autorizar al Fiscal para hacer entrega de los automotores en los casos de los delitos culposos, cuando se demuestre la propiedad, tenencia, posesión, de quien reclama el bien, sujetando que la entrega sea definitiva si garantiza el pago de perjuicios.
18. En todos los casos el juez hará uso de las facultades correccionales para compulsar las copias a los sujetos procesales que no justifiquen su comparecencia y/o a otras entidades que deban presentarse a la actuación, todo ello para hacer exigible de manera estricta los términos procesales.

11.2 Propuesta de procedimiento para investigaciones de violaciones de derechos humanos.

Con respecto al procedimiento relacionado con investigaciones que afectan derechos fundamentales o derechos humanos previstos en la CADH, pero que no constituyen graves violaciones de derechos humanos, ni se trata de infracciones al DIH, se observa que la Ley 906 de 2004, con sus modificaciones a través de las Leyes 1142 de 2007, 1453 de 2011, 1474 de 2011, constituye una herramienta viable para resolver este tipo de criminalidad, pero sujetándola a varios ajustes, como son:

1. La etapa de la indagación hace distinciones con respecto al número de personas vinculadas, lo que resulta viable, además de que los plazos

previstos resultan muy razonables para que se tome una decisión frente a su archivo o pasar a la etapa de instrucción. Se debe mantener, además de que ahí estarían comprendidas investigaciones de graves violaciones, por la amplitud de los plazos para casos de competencia de la Fiscalía Especializada, hasta cinco años, más que suficientes para decidir si se archivan las diligencias o se prosigue contra determinada persona.

2. Se propone eliminar procedimientos que no permiten avanzar y cumplir términos, como son:

- Autorizar que en los casos previstos en el artículo 100 de la Ley 906 de 2004, el Fiscal pueda hacer entrega de los automotores cuando se demuestre la propiedad, tenencia, posesión, de quien reclama el bien, sujetando que la entrega sea definitiva si garantiza el pago de perjuicios, evitando así que tenga que acudir en todos los casos al JCG, teniendo en cuenta el número reducido de estos funcionarios, pues no se están afectando derechos fundamentales.
- Para pasar a la etapa de instrucción se debe eliminar la audiencia de imputación, porque hoy en día se evidencian las dificultades de los Fiscales para llevarla a cabo; por ello debe ser una comunicación que la Fiscalía realice al indiciado, por medio escrito, donde le dé a conocer los aspectos facticos y jurídicos por los que está vinculado a la investigación.
- Que este acto de notificación no admita recursos de ninguna naturaleza.
- En el evento que no proceda la notificación personal, por imposibilidad de ubicar al indiciado, o renuencia en presentarse, deberá el Fiscal declararlo persona ausente, previos los trámites del edicto, obviando el trámite ante el JCG, pues como consta en la práctica, no es posible llevar la diligencia prontamente, y hay dilación de los plazos por el número reducido de estos funcionarios
- Determinar que para los delitos donde procede la medida de aseguramiento, al cumplirse con los aspectos objetivos y subjetivos, conforme a los lineamientos de los artículos 294, 308, 309, 310, 311, 312, 313 de la Ley 906 de 2004, el Fiscal solicitará la orden de captura ante el JCG, que al momento de hacerse efectiva será objeto de control constitucional por un JCG para determinar la legalidad del procedimiento.

- Solo en estos eventos se hará entonces la imputación a esta persona, ahí sí, ante el JCG, por parte del Fiscal en donde relacionará los aspectos fácticos y jurídicos que tiene la Fiscalía, y luego procederá a solicitar la respectiva medida de aseguramiento.
3. Dinamizar el sistema acusatorio con figuras como el allanamiento a cargos desde la notificación de la imputación, con una rebaja hasta del 50% de la pena si se presenta la aceptación de cargos hasta antes de la realización audiencia de acusación.
 4. Facilitar los preacuerdos desde la indagación, con rebajas hasta del 60% en la indagación, hasta del 50% entre imputación y acusación, de la 3ª parte entre la acusación y la preparatoria y 6ª parte en el juicio.
 5. Eliminar las restricciones que se han previsto en la Ley 1453 de 2011 artículo 57 en su parágrafo, que limitó la posibilidad de que la persona capturada en flagrancia pueda gozar de las rebajas señaladas en la ley, permitiendo una rebaja de ¼ parte del beneficio.
 6. Asimismo eliminar las limitaciones impuestas en la Ley 1121 de 2006 artículo 26, que impide cualquier tipo de negociación en delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos.
 7. Permitir que opere la figura de la colaboración eficaz para condenados, que pueden aportar información de interés, a cambio de rebajas de penas.
 8. Fijarle un plazo al juez para iniciar y culminar el juicio.
 9. Autorizar al Fiscal que, en caso de no poder cumplir los plazos en la etapa de instrucción, antes de su vencimiento, solicite al JCG una prórroga de los mismos, que solamente podrá concederse por una sola vez, justificando la necesidad de dicho término adicional, consultando para ello las decisiones de la Corte Interamericana sobre plazo razonable.
 10. Este plazo que se fije para el juicio también podrá prorrogarse a petición justificada del Fiscal o de la defensa, lo cual será resuelto por el juez que conozca este debate o por el JCG.
 11. Debe indicarse el plazo que tiene el Juez de conocimiento para dictar el respectivo fallo, que podrá prorrogarse de acuerdo a la complejidad del caso.
 12. El Juez de conocimiento deberá compulsarle copias a los sujetos procesales que no justifiquen su asistencia a las audiencias programadas y/o a otros

entes que deban comparecer o presentar testigos, personas privadas de la libertad, etc., con el objeto de dar cumplimiento estricto a los plazos procesales.

13. Se debe prever que los sujetos procesales que no justifiquen su comparecencia al juicio o cuando se evidencie el ánimo de dilatar el juicio, que el juez pueda tener la potestad de sancionarlo con una multa.
14. En aras de dinamizar los plazos a cargo de la Fiscalía y de los Jueces, y para resolver los problemas estructurales del sistema, la ley tiene que prever la posibilidad de vincular a los estudiantes de último año de derecho para que realicen sus prácticas como asistentes en Fiscalía o Juzgados.
15. De igual modo, estas prácticas deben ser obligatorias como una opción en la Fiscalía para estudiantes de psicología, trabajo social, ingenieros en informática, contadores, criminalística, etc., porque podrán prestar sus servicios, dependiendo de sus estudios, en asistencia a víctimas, a los investigadores del CTI, al Fiscal o al Juez, quienes podrán avanzar en el desarrollo de su trabajo; en la práctica los operadores judiciales no tienen el personal suficiente para realizar muchas actuaciones de trámite, de actualización de los sistemas de información, y necesitan personas que puedan colaborar en proyectar, en controlar el seguimiento de términos procesales, etc., que finalmente optimizan la gestión y facilitan la agilidad de los plazos.
16. Los plazos relacionados con búsquedas selectivas para obtener EMP⁴⁵⁸ deben ser más flexibles, en este caso autorizar que sea el funcionario el que indique el término necesario para realizar la búsqueda y que sea posible prorrogarlo, dado que como están establecidos hoy en día, en muchas ocasiones no es viable por la Fiscalía obtener los EMP, porque el legislador no previó que las empresas privadas deben presentar la información y no tienen los medios para brindarla en los plazos muy reducidos que ha establecido; o que la Fiscalía no cuenta con los medios logísticos y de

⁴⁵⁸ El artículo 244 relacionado con búsqueda selectiva en base de datos, remite a su vez al artículo 224 relacionado con el plazo de diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento, donde se prevé que el término es de 30 días en indagación y 15 si hay imputación, el cual se puede prorrogar por una sola vez, pero lo que en la práctica se observa es que ese término es difícil de cumplir cuando hay imputado, porque no se recibe la respuesta dentro del mismo cuando se trata de información que debe aportar empresas privadas como las de telefonía celular y la Fiscalía pierde la oportunidad de presentar esa información. Así mismo el término tampoco logra cumplirse cuando se hace necesario realizar análisis de información contenida en medios magnéticos, etc.

personal para que la respuesta sea en un plazo determinado; o que se requieren análisis especializados de algunos elementos obtenidos pero que en el tiempo concedido no se logra aportar la información, de ahí que, en aras de no dificultar la tarea de la Fiscalía relacionada con sancionar a los responsables, debe el Fiscal indicarle al JCG el término requerido, disponiendo de una prórroga cuando justifique la imposibilidad de obtenerlos. La propuesta es que sea el Fiscal el que establezca el plazo que necesita dependiendo de las dificultades que tenga para obtener la respuesta, o en otro caso, que se establezca el plazo en la ley y que pueda el Fiscal requerir un término adicional, justificando que necesita más tiempo, todo esto solo para llevar a cabo actos investigativos.

17. En caso de muerte violenta que la ley prevea el cumplimiento del siguiente protocolo, porque en la práctica se evidencia que muchas diligencias no abarcan la totalidad de estos puntos: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con su muerte, con el fin de ayudar en cualquier investigación; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, y se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados, para cumplir los lineamientos de la CIDH.
18. Que la ley obligue a que se haga la investigación desde una perspectiva de género en este tipo de delitos.
19. Que el código penal tenga una causal de atenuación de la pena cuando se presente la vulneración al plazo razonable en el caso violaciones de derechos humanos.

11.3 Propuestas para procedimiento de investigaciones de graves violaciones de derechos humanos

Se debe partir del procedimiento antes propuesto para los casos de violaciones de derechos humanos, pero adicionando algunos puntos más, como serían:

1. Que además del deber de elaborar el programa metodológico⁴⁵⁹ desde el momento en que se inicia la investigación, debe adicionarse la norma del código de procedimiento penal, artículo 207, sobre la obligatoriedad de investigar el contexto en que se desarrollaron los hechos, abarcando los aspectos sociales, políticos, económicos, etc., acogiendo en este aspecto la jurisprudencia de la CIDH, pues le permitirá al Fiscal delimitar las líneas investigativas a realizar, con el fin de cumplir el requerimiento de la CIDH respecto de la necesidad de que se lleven a cabo investigaciones *ex officio*, sin dilación, de manera seria, imparcial y efectiva, no como ha ocurrido en muchos casos, en que al cabo del tiempo se observa que la investigación no tiene ningún norte y está destinada al fracaso⁴⁶⁰.

⁴⁵⁹ AVELLA FRANCO, Pedro Oriol. *Programa metodológico en el sistema penal acusatorio*. Fiscalía General de la Nación. Bogotá. 2007, p. 17. En Colombia en el artículo 207 de la Ley 906 de 2004 exige a los Fiscales que al conocer un caso elaboren el programa metodológico que tiene como finalidad examinar las hipótesis delictivas, delito (s) a investigar, presuntos responsables, actos investigativos a practicar. “Es una herramienta de trabajo que permite organizar y explicar la investigación, con el fin de identificar y asegurar los medios cognoscitivos necesarios para demostrar, más allá de duda razonable, la ocurrencia del delito y su autor o partícipe. El programa metodológico debe entenderse como un instrumento para proyectar la actividad investigativa, utilizado por el equipo constituido por el fiscal y los servidores de policía judicial asignados al caso. Por esa razón se constituye en el sistema por el cual se evalúa la información inicial y se identifican, clasifican, priorizan, planean y ordenan los actos de indagación tendientes a determinar si existió la conducta de la cual se tuvo noticia, si la misma tiene las características de un delito y, de ser así, individualizar o identificar a sus autores y partícipes”.

⁴⁶⁰ Caso la Rochela, sentencia, mayo 11 de 2007. “Una debida diligencia en los procesos por los hechos del presente caso exigía que éstos fueran conducidos tomando en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, evitando omisiones en la recabación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. En consecuencia, las autoridades judiciales debían tomar en cuenta los factores indicados en el párrafo anterior, que denotan una compleja estructura de personas involucradas en el planeamiento y ejecución del crimen, en la cual convergen tanto la participación directa de muchas personas como el apoyo o colaboración de otras, incluyendo a agentes estatales, estructura de personas que existe antes del crimen y permanece después de su ejecución, dado que comparten objetivos comunes. Párrafo 158. Masacre de Ituango, 1º de julio de 2006.” Las masacres fueron perpetradas en el contexto del conflicto armado interno que sufre Colombia; comprendieron un gran número de víctimas – que perdieron sus bienes, fueron ejecutadas, y en el caso de El Aro, obligadas a realizar trabajos forzosos o desplazadas – y tuvo lugar en una región remota y de difícil acceso del país, entre otros factores. Sin embargo, aun tomando en cuenta la complejidad del asunto, la efectividad de los procesos se ha visto afectada por varias fallas en la investigación. Párrafo 294. Sentencia caso Manuel Cepeda Vargas, 26 de mayo de 2010.” En efecto, ante el contexto de violencia que enfrentaba la UP y el PCC en Colombia al momento de los hechos, el deber de debida diligencia frente a las denuncias de amenazas de muerte adquirió un carácter especial y más estricto, en tanto exigía del Estado prevenir la vulneración de los derechos del Senador Cepeda Vargas. Esta obligación de medio, al ser más estricta, exigía la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación de los responsables de las amenazas y de los crímenes acontecidos en el mismo

2. Que la ley procesal establezca la obligación de dar aplicación a la Directiva 001 de 2012 expedida por parte del Fiscal general⁴⁶¹, en donde se fijan los criterios para hacer la investigación en contexto, la priorización de los casos, la investigación de los máximos responsables, las orientaciones de la jurisprudencia internacional para llevar a cabo estas investigaciones, de tal manera que constituye una herramienta obligada de trabajo de los Fiscales para poder adelantar investigaciones eficaces⁴⁶².
3. Los plazos hoy en día para indagación e instrucción considero que cumplen los criterios fijados tanto por la Corte Interamericana como por el TEDH, de tal modo que la propuesta una vez más va encaminada a que el Fiscal tenga la posibilidad de ampliarlos o prorrogarlos ante el JCG en un caso dado, siempre argumentando su justificación, facultando al Fiscal que ello sea viable en una o dos oportunidades, pues habrá que colocarle un límite. Así que bajo este presupuesto se cumple con los lineamientos de la Corte Constitucional, respecto a la celeridad y respeto a los plazos procesales,

contexto, esto con respecto a los derechos establecidos en el artículo 4 y 5 de la CADH.” Párrafo 127, entre otras sentencias.

⁴⁶¹ Citada en este trabajo y constituye una herramienta de trabajo eficaz en donde se establecen los criterios de selección, priorización para adelantar las investigaciones relacionadas con graves violaciones de derechos humanos

⁴⁶² AMBOS Kai, “y otros”. *Op. cit.*, p. 25. “Una acumulación de casos de crímenes internacionales centrales implica la existencia de una fila de atrocidades a la espera de tener su día en la Corte. Pero muchas de esas atrocidades posiblemente nunca verán ese día, o sólo lo verán después de que hayan transcurrido años. Esta situación plantea al menos dos cuestiones fundamentales, que son complejas y delicadas. En primer lugar, ¿cómo elegir los casos que la jurisdicción en cuestión realmente perseguirá y juzgará? En segundo lugar, ¿cómo organizar y clasificar los casos seleccionados a fin de determinar el orden de prioridad en el que serán investigados y juzgados? La respuesta a estas preguntas implica necesariamente la existencia y el uso de criterios para la selección y asignación de prioridad de los casos relativos a crímenes internacionales centrales. Igualmente en la obra citada se destaca el trabajo investigativo que sobre graves violaciones de derechos humanos se ha adelantado en Colombia en el marco de la justicia transicional,” (...) “En el desarrollo del Proceso Especial de Justicia y Paz, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz (UJP) se ha enfrentado a diversos desafíos que obedecen a la complejidad del proceso evidenciada, entre otros factores, por el carácter masivo de los crímenes que se investigan y de los victimarios que se procesan. Como prueba de lo anterior, algunas cifras: en este momento, hay más de 4.300 postulados en el proceso de justicia y paz; más de 330.000 delitos han sido documentados por la Fiscalía y más de 69.000, que comprenden desde delitos con trascendencia de crímenes de lesa humanidad, homicidios hasta hurtos y falsedades materiales han sido confesados, de acuerdo página web fiscalía a31 de enero de 2011. Frente a estas enormes cifras, las autoridades judiciales competentes en el proceso de justicia y paz, han logrado solo tres condenas en los seis años de existencia del proceso. (...) Ofrecemos una propuesta para dinamizar el proceso de justicia y paz, basada en criterios trabajados por tribunales internacionales *ad hoc* o por la Corte Penal Internacional, sin concebirlas de manera aislada como única herramienta, sino como parte de una estrategia conjunta con otras medidas alternativas tales como: una comisión de la verdad, una amnistía condicionada para algunos delitos menos graves y también el uso de instrumentos de la justicia procesal penal ordinaria, como el principio de oportunidad”.

relativizando la posición respecto que no pueden ser improrrogables en ciertos casos⁴⁶³.

4. Debe fijarse un plazo para el juicio, pero también concediéndole al Fiscal y al Juez, la posibilidad que estos puedan ser flexibles, atendiendo a los mismos criterios que han definido estos organismos internacionales; por ello, que la ley permita la respectiva prórroga o ampliación, previa justificación de ello, ante el juez de conocimiento o JCG.
5. De otra parte, es muy importante que el procedimiento considere en todas las etapas la participación y la defensa de las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos⁴⁶⁴, porque si bien es cierto que hoy en día así lo establece la ley y la Corte Constitucional ha desarrollado una importante jurisprudencia en esta materia, encontramos que en la práctica si no tienen los recursos para nombrar un defensor de confianza se le debe

⁴⁶³ “[...] si dentro de un asunto la dimensión temporal de una etapa procesal no resulta razonable para definir o resolver una petición a tiempo, debido a una situación imprevisible, ineludible y sobre todo que no sea posible achacar al propio peticionario, será preciso evaluar y ponderar, conforme a las condiciones del caso concreto, la necesidad de decidir los asuntos de fondo aún por fuera del vencimiento del término para ello, para no sacrificar el derecho sustancial, y únicamente utilizando el lapso estrictamente necesario para satisfacer el requerimiento de fondo, pues en este caso se trataría de una dilación justificada”. Sentencia T-171-06 Corte Constitucional de fecha 7 de marzo de 2006. Magistrada Ponente. VARGAS HERNÁNDEZ, Clara Inés. Vid. Sala Novena de Revisión. Sentencia. Número T-558-03 del 10 de julio de 2003. Magistrado Ponente: Dra. VARGAS HERNÁNDEZ, Clara Inés, porque hoy en día ello no es viable e igualmente la Corte Constitucional reclama que “para investigaciones de graves violaciones de derechos humanos el cumplimiento de los términos de manera estricto por su carácter de improrrogables, además de la interpretación restrictiva de las normas que los consagran. “cuando se trate de procesos penales que se adelanten por violaciones graves a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, el principio de celeridad adquiere una relevancia aun mayor no solo por los bienes jurídicos que han sido lesionados, por las hondas repercusiones nacionales e internacionales que conllevan estos crímenes, sino además porque están de por medio los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”.

⁴⁶⁴ Así se ha destacado el derecho de las víctimas en el derecho penal internacional a que la víctima tenga participación activa durante todo el proceso judicial con el objeto de ver satisfecho su derecho a la verdad y a la reparación, la garantía de transparencia y legitimidad del procedimiento. Vid. FORER, Andreas. *Origen y evolución de la participación de las víctimas en proceso penales internacionales. Nuevas Perspectivas del derecho penal. Homenaje a Luis Carlos Perez, Ibáñez*. Bogotá, 2012, p. 189. “Si bien el protagonismo de la víctima es reconocido con carácter general a nivel doctrinal, debe ser objeto de concreción tanto por el ordenamiento como de los órganos del sistema penal. (...) la relación entre víctima y sistema penal debe centrarse preferentemente en la tutela de la posición de la víctima, de tal manera que recupere su protagonismo en la aplicación del *ius puniendi* del Estado. (...) en definitiva, no se trata solamente de la aprobación de una legislación adecuada, sino también de la adopción de medidas destinadas a garantizar la efectividad de estos derechos”. Vid. DELGADO MARTÍN, Joaquín. *La reforma a la justicia. La protección de la víctima por el sistema penal*. Coordinadores. Coral Arangüena. Ed. Lex Nova. Valladolid. 2008, págs. 386 – 388.

nombrar uno de oficio, quienes por lo general no cumplen con una verdadera asistencia técnica, dándose un desequilibrio, porque *contrario sensu*, el imputado o acusado de no tener recursos será representado por un abogado de la Defensoría del Pueblo⁴⁶⁵. No debe admitirse que este derecho de asistencia técnica del defensor solo es para el imputado o acusado, y no comprenda a víctimas de graves violaciones, por lo que se propone que la legislación consagre la obligatoriedad de que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos sean asistidas por abogados pagados por el Estado para equilibrar la balanza.

6. La legislación debe prever que el JCG atienda de manera estricta el cumplimiento de las audiencias que demande la Fiscalía en caso de graves violaciones, así que debe ejercer sus funciones correccionales cuando advierta dilaciones injustificadas por parte del abogado(s), del imputado o acusado, o en su defecto de la Fiscalía, de tal manera que se incremente la cultura y ejercicio del derecho a que el proceso se resuelva en un plazo razonable, teniendo también en cuenta los intereses de las víctimas.
7. Igualmente, la legislación debe exigir a otros entes del Estado que cumplan los requerimientos de los jueces (JCG o de conocimiento) para evitar que por culpa de ellos se genere dilación de los plazos procesales, previendo acciones disciplinarias y penales por el incumplimiento injustificado y la obstrucción a la justicia, cuando adviertan que por su acción u omisión no permiten la realización de alguna audiencia, como es el caso del INPEC, encargado de la custodia de los detenidos⁴⁶⁶.
8. Que la ley le exija al Juez de Conocimiento que en todo momento intervenga para evitar los actos obstruccionistas o dilatorios por parte de la defensa o del acusado, o que puedan ser atribuibles a otras instancias, pues en la práctica y tal como lo deja ver la jurisprudencia del TEDH y de la CIDH, esa falta de dirección por parte del juez está generando la dilación de los plazos, debiéndose reglamentar su obligación en la misma norma penal, a efectos de prevenir su vulneración⁴⁶⁷.

⁴⁶⁵ Artículo 11 numeral h de la Ley 906 de 2004.

⁴⁶⁶ Sentencia número T-966-00 del 31 de Julio de 2000. Magistrado Ponente: Dr. CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo. Sentencia. Sala Novena de Revisión. Corte Constitucional. Sentencia del 10 de julio de 2003. Magistrado Ponente: Dra. VARGAS HERNÁNDEZ, Clara Inés. Sentencia. Número T-558-03 de la Corte Constitucional. A través de ellas se obliga al INPEC a trasladar los reclusos.

⁴⁶⁷ "El juez es el sujeto principal de la relación jurídica procesal y del proceso, y en tal virtud, a él le corresponde dirigirlo efectivamente e impulsarlo de tal forma, que pase por sus distintas etapas con

9. Que la ley prevea como obligación para los funcionarios que éstos apliquen protocolos internacionales para realizar este tipo de investigaciones como el Protocolo de Estambul para casos de torturas (Manual de Naciones Unidas para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes); el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas; los principios en casos de muertes violentas; los principios en caso de delitos sexuales, y las investigaciones con perspectivas de género.
10. Que la legislación reconozca la dificultad que se tiene para acopiar los EMP necesarios para condenar a los responsables, así que en este procedimiento se tiene que flexibilizar la posición de la ley 906 de 2004, respecto a lo estipulado sobre prueba anticipada⁴⁶⁸, lo que fue relativizado por la Ley 1474

la mayor celeridad y sin estancamientos. Y en ese sentido, debe controlar la conducta de las partes, investigando y sancionando cualquier acto contrario a la dignidad de la justicia. Así mismo, el juez cuenta con el poder de coerción, el cual incluye el poder disciplinario, que le permite sancionar con multas a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en el ejercicio de sus funciones, o demoren su ejecución". Corte Constitucional: Sala Primera de Revisión. Sentencia del 15 de octubre de 1998. Magistrado Ponente: Dr. BELTRÁN SIERRA, Alfredo. Sentencia. Número T-577-98.

⁴⁶⁸ Artículo 284 Prueba anticipada. Durante la investigación y hasta antes de la instalación de la audiencia de juicio oral se podrá practicar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que sea practicada ante el juez que cumpla funciones de control de garantías.
2. Que sea solicitada por el Fiscal General o el fiscal delegado, por la defensa o por el Ministerio Público en los casos previstos en el artículo 112. Numeral declarado exequible de manera condicionada, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-209 de 2007, en el entendido de que la víctima también puede solicitar la práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías.
3. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio.
4. Que se practique en audiencia pública y con observancia de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio.

Parágrafo 1°. Si la prueba anticipada es solicitada a partir de la presentación del escrito de acusación, el peticionario deberá informar de esta circunstancia al juez de conocimiento.

Parágrafo 2°. Contra la decisión de practicar la prueba anticipada proceden los recursos ordinarios. Si se negare, la parte interesada podrá de inmediato y por una sola vez, acudir ante otro juez de control de garantías para que este en el acto reconsidere la medida. Su decisión no será objeto de recurso.

Parágrafo 3°. En el evento en que la circunstancia que motivó la práctica de la prueba anticipada, al momento en que se dé comienzo al juicio oral, no se haya cumplido o haya desaparecido, el juez ordenará la repetición de dicha prueba en el desarrollo del juicio oral. Parágrafo 4°. Adicionado por el art. 37, Ley 1474 de 2011 Artículo 37. Pruebas anticipadas. El artículo 284 de la Ley 906 de 2004 tendrá un parágrafo cuarto, el cual quedará así:

Parágrafo 1°. En las investigaciones que versen sobre delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados, por delitos contra la Administración Pública y por delitos contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la

de 2011, dirigiéndose la propuesta a que en estos eventos, la ley permita que la prueba anticipada sea usada en el juicio y tenga valor, no como prueba de referencia, si se demuestra por la Fiscalía alguno de los siguientes presupuestos:

- a- Que la persona que la rindió continúa en riesgo de perder su vida como consecuencia de los hechos investigados y no tiene ella ni su familia protección del Estado.
- b- Su imposibilidad de ubicarse.
- c- Que su testimonio fue rendido ante el JCG cumpliendo todas las ritualidades relacionadas con los principios de oralidad, concentración, publicidad, y que se designó un defensor de la defensoría para que existiera contradicción de los EMP.
- d- Que, para rendir su testimonio, en caso que se esté adelantando un principio de oportunidad con un delator, en calidad de indiciado o imputado o acusado, la ley prevea la posibilidad de que la Fiscalía pueda acudir a un JCG para tener dicho elemento material como prueba anticipada, donde será asistido por un abogado de la defensoría o uno de su confianza y éste tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción.
- e- Que ese testimonio sea recogido en un medio audiovisual, el cual se someta a la respectiva cadena de custodia por parte de la Fiscalía, además que exista registro del mismo en el centro de servicios de los juzgados.

11. La ley debe establecer en su procedimiento la obligación a cargo del Estado de brindarle protección a los testigos y víctimas señalados por la Fiscalía, incluyendo su grupo familiar, con el objeto de garantizar que la investigación sea eficaz y se pronuncie una condena en contra de los responsables, no como sucede hoy en día, que la oficina de protección de víctimas y testigos

detención preventiva, será posible practicar como prueba anticipada el testimonio de quien haya recibido amenazas contra su vida o la de su familia por razón de los hechos que conoce; así mismo, procederá la práctica de dicha prueba anticipada cuando contra el testigo curse un trámite de extradición en el cual se hubiere rendido concepto favorable por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La prueba deberá practicarse antes de que quede en firme la decisión del Presidente de la República de conceder la extradición.

de la Fiscalía no cuenta con los medios para garantizar la vinculación de un número considerable de testigos, ni menos de su grupo familiar.

12. También que la ley en este tipo de investigaciones establezca la posibilidad de cambiar la identidad de testigos; los convenios con otros países para su protección, u otros mecanismos que faciliten a la Fiscalía poder vincular a los testigos y víctimas a un programa de protección con su grupo familiar, porque hoy en día, por los graves riesgos que corren, no se logra llevarlos a juicio, con las dificultades para poder sancionar a los responsables.
13. Que la ley prevea el uso del preacuerdo como herramienta para conocer la verdad de los hechos y como medio para avanzar en el esclarecimiento de las graves violaciones de derechos humanos, o sea, que efectivamente se trate de una negociación donde gane la Fiscalía y el imputado o acusado, porque hoy el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, pese a que se refiere a la negociación, no se exige que la persona entregue nada a cambio, y se ha entendido como un derecho del imputado o acusado el preacuerdo; por tanto, que en este tipo de investigaciones se tenga la obligación del indiciado, imputado o acusado de entregar información, documentos, evidencias, fosas, bienes, etc., que conduzcan a conocer la verdad de los hechos, que haya justicia para que se pueda concertar rebajas hasta del 50%, y posteriormente, tras una sentencia condenatoria, se pueda gozar de la reparación integral.
14. Una herramienta muy importante para resolver este tipo de criminalidad lo constituye el principio de oportunidad⁴⁶⁹; se busca optar por un principio de oportunidad atenuado, que parta de una pena menor, sometido al cumplimiento estricto de varias exigencias para que pueda aplicarse en esta criminalidad, así que en este aspecto se requiere cambios de la ley, y por ello se propone:
 - Que la ley prevea que en este tipo de criminalidad no es viable la terminación de la acción penal a favor del indiciado, imputado o acusado por renuncia, interrupción o suspensión de la acción penal por prohibición expresa del DIDH, pero se puede consagrar que se permita que la persona que colabore eficazmente en pro de avanzar en las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos reciba una pena menor a la que le correspondería si

⁴⁶⁹ El uso de este principio ha permitido desarticular organizaciones criminales de gran magnitud como los Rastrojos, considerada la más grande del país en el año 2012 - 2013, pero gracias a la colaboración de varios ex integrantes, se acopiaron valiosos EMP que permitieron judicializar a todos los cabecillas, bandos medios y bajos.

confiesa todos los delitos que cometió; si brinda información sobre los integrantes de la organización delictiva con el fin de desarticularla, entregar bienes, fosas, etc. Se trata de relativizar el artículo 324 en algunos aspectos, y que se trate este principio de oportunidad en otra norma específica para este procedimiento, en donde se establezca la aplicación de una pena atenuada bajo ciertas circunstancias⁴⁷⁰, como son:

- a- Que el numeral 14 se reforme porque establece *“Cuando la persecución penal de un delito comporte problemas sociales más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una solución alternativa adecuada a los intereses de las víctimas. Quedan excluidos en todo caso los jefes, organizaciones, promotores, y financiadores del delito”*. La reforma va enfocada a que estas personas no sean excluidas totalmente de la posibilidad del principio de oportunidad, sino que haya “un principio de oportunidad atenuado”, o sea que se les aplique una pena mucho menor a la que establece la ley, con los compromisos para estas personas de desarticular las organizaciones criminales, entregar bienes, fosas, denunciar delitos cometidos, ir a juicio contra otras personas, etc., tal como ocurre con la ley 975/2005 (ley de justicia y paz), que ha arrojado buenos resultados, pero solo tiene aplicación para un determinado tiempo, y para ciertas personas, pero puede tomarse parte de su contenido para desarticular organizaciones criminales que afectan gravemente el país y que, como se sabe, son responsables de las graves violaciones de derechos humanos. La propuesta es que el principio de

⁴⁷⁰ MORENO CATENA, Víctor. *Sistemas penales europeos*. Escuela judicial – Consejo General del Poder Judicial. Cuadernos de Derecho Judicial. Madrid, 2002. Págs. 49 y 50. “El entendimiento del principio de oportunidad en los diferentes ordenamientos jurídicos es muy variado; como antes se dijo, se pretende comprender bajo este gran epígrafe todos aquellos casos en que el acusador público, legitimado para el ejercicio de la acción penal, viene autorizado, con motivo legalmente tasado o sin él, para abstenerse de ejercitar la acción penal, o para hacerlo sin sujetarse a los estrictos términos que marca la ley penal. En este último caso los supuestos van desde la solicitud de sobreseimiento de la causa por razones de política criminal, de utilidad pública o de interés social, o bien la posibilidad de instar o finalización del proceso en forma de sobreseimiento bajo condición impuesta al imputado, que se vería entonces obligado al cumplimiento de determinadas condiciones o prestaciones, o bien la solicitud de una condena en términos que previamente se han pactado con el acusado. Así entendido, el principio de oportunidad, con carácter general y sin concesiones a la pura arbitrariedad, supone la satisfacción de la norma del art. 25 de la Constitución española en cuanto a los fines de la pena, aunque pase por encima incluso del principio de seguridad jurídica. Porque sólo la aplicación de la oportunidad entendida correctamente puede permitir a la acusación calibrar las circunstancias que concurren en el caso concreto y proporcional la respuesta penalmente más justa a los hechos delictivos”. Vid. PEDRAZ PENALVA, Ernesto. *Constitución, jurisdicción y proceso*. Ed. Akal, S.A. Madrid 1990, págs. 358 -362.

oportunidad sea atenuado en el sentido de que se aplicará una pena atenuada.

- b- En este mismo sentido se debería reformar el numeral 16 que establece. *“Cuando quien haya prestado su nombre para adquirir o poseer bienes derivados de la actividad de un grupo organizado al margen de la ley o del narcotráfico, los entregue al fondo para Reparación de Víctimas siempre que no se trate de jefes, cabecillas, determinadores, organizadores promotores o directores de la respectiva organización”.*
- c- En el mismo sentido se proponer la reforma del *“parágrafo 1o. En los casos de tráfico de estupefacientes y otras infracciones previstas en el capítulo segundo del título XIII del Código Penal, terrorismo, financiación de terrorismo, y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, solo se podrá aplicar el principio de oportunidad, cuando se den las causales cuarta o quinta del presente artículo, siempre que no se trate de jefes, cabecillas, determinadores, organizadores promotores o directores de organizaciones delictivas.”* Considero que, por el contrario, el principio de oportunidad es una herramienta fundamental para esclarecer este tipo de macrocriminalidad, que dadas sus connotaciones es difícil de resolver, por tanto, se propone un principio de oportunidad que establezca una pena atenuada.
- d- Reformar igualmente el parágrafo 3o. *No se podrá aplicar el principio de oportunidad en investigaciones o acusaciones por hechos constitutivos de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, ni cuando tratándose de conductas dolosas la víctima sea un menor de dieciocho (18) años.* Sobre el particular se deben indicar igualmente las dificultades para enfrentar los delitos relacionados con graves infracciones al DIH, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio; por ello, siendo una realidad que la Ley 975/2005 no resolvió este tipo de criminalidad, sino que hoy seguimos enfrentados a delitos de igual connotación por organizaciones denominadas como Bacrim (grupos que surgieron de personas no desmovilizadas de los paramilitares), como de guerrilla (FARC, ELN, entre otros), pero debiéndolos llevar a juicio con las normas de la Ley 906 de 2004 y sus modificaciones, deberíamos tener herramientas que faciliten esa desarticulación y la investigación de estos crímenes para cumplir los compromisos internacionales. Por ello, la propuesta para flexibilizar el principio de oportunidad, es que en todos

estos casos la pena sea menor, pues no se puede renunciar, suspender ni interrumpir la acción penal por claros mandatos internacionales, por tanto, deberá ser tratado como “principio de oportunidad atenuado”

e- Que en todos los eventos la víctima participe a través de un defensor de confianza, no de oficio, pudiendo a través de esta herramienta exigir el cumplimiento de sus derechos de verdad, justicia y reparación integral.

15. Igualmente, que la ley atienda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, respecto de que la justicia penal militar no es la competente para conocer los casos de violaciones de derechos humanos porque el fuero militar no aplica en esos eventos, siendo la justicia ordinaria donde se aplica la garantía del juez natural y de contera la aplicación del derecho al plazo razonable.

16. También debe posibilitar la ley que para estos casos de graves violaciones de derechos humanos no es viable conceder amnistías ni indultos, ni prescripciones en casos de conocimiento de la CPI.

17. Declarada la responsabilidad mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada, la reparación integral a favor de las víctimas debe pasar a la justicia civil, para dinamizar las actuaciones penales, dado que en la práctica este procedimiento conlleva la congestión de los juzgados penales, que deberían dedicarse al tema penal dejando los asuntos civiles a los Jueces Civiles⁴⁷¹.

18. Que estas investigaciones deben ser asumidas por personal calificado, tanto en la Fiscalía como en los Juzgados, expertas en conocimientos en derechos humanos y en Derecho Internacional Humanitario, dado que la práctica revela que la mayoría de las veces el personal que asume estas investigaciones no tiene esos conocimientos, y tal circunstancia ha quedado plasmada en los casos conocidos por la Corte Interamericana, en los asuntos donde Colombia ha sido condenada⁴⁷², lo cual se traduce en que las

⁴⁷¹ GIMENO SENDRA, Vicente. *Manual de Derecho Procesal Penal*. Editorial Colex. Madrid. 2008, p. 150. “Lo que nace del delito es una pretensión civil de resarcimiento, la cual puede acumularse a un procedimiento penal en curso o separarse de él y reservarse para plantearla en el correspondiente proceso civil declarativo, una vez haya finalizado el correspondiente proceso penal (art. 111)”.

⁴⁷² Caso caballero Delgado y Santana. CIDH, Sentencia de fecha 8 de diciembre 1995. “En el caso que se examina, Colombia ha realizado una investigación judicial prolongada, no exenta de deficiencias, para encontrar y sancionar a los responsables de la detención y desaparición de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana y este proceso no ha terminado. Párrafo 57. Masacre de Pueblo Bello, 31, de enero de 2006 La negligencia de las autoridades judiciales encargadas de examinar las circunstancias de la masacre mediante la recolección oportuna de pruebas in situ, no puede ser subsanada con las tardías diligencias probatorias para buscar y

investigaciones no establezcan inicialmente los contextos en que se desarrollaron estas violaciones, no se apliquen los protocolos, ni menos se definan claras líneas investigativas⁴⁷³, pasando los años sin que el Fiscal logre definir cuáles son los actos investigativos que debe realizar.

19. Que el Código Penal tenga una causal que atenúe la pena por la vulneración al derecho al plazo razonable en el caso de graves violaciones de derechos humanos.
20. Establecer en el Código de Procedimiento Penal la figura de la colaboración eficaz para condenados en aras de lograr rebajas de penas. Esta medida permite poder tener información de personas que han participado de las graves violaciones de derechos humanos, que en el momento de ser investigadas no optaron por preacuerdos tratando de obtener una sentencia absolutoria, pero cuando se enfrentan a una condena quieren colaborar para obtener beneficios de ley. Es por tanto una buena herramienta procesal.

exhumar restos mortales en el cementerio de San Antonio de Montería y en otras localidades, que la Fiscalía General de la Nación reinició a partir de febrero de 2003, es decir, más de 13 años después de ocurridos los hechos. Las insuficiencias señaladas pueden ser calificadas como graves faltas al deber de investigar los hechos, pues han afectado una efectiva o mejor identificación de los cuerpos encontrados y la determinación del paradero de 37 de las 43 presuntas víctimas que permanecen desaparecidas. Párrafo 178. Masacre la Rochela. Sentencia 11 de mayo de 2007.” La Corte estima que la ineffectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación”. Párrafo 158, entre otras sentencias de la Corte Interamericana.

⁴⁷³ MORENO CATENA, Víctor. *Algunas notas sobre la instrucción en el proceso penal y en el juicio por jurados*, p. 38. “La investigación ha de avanzar sin duda por sus correspondientes pasos, pero éstos siempre han de guardar una razón y un orden lógico que los justifique, de modo que no resulten erráticos o arbitrarios, y al ritmo que las concretan circunstancias demanden. Eso exige también una sucesión de diligencias que han de practicarse, siguiendo un razonable hilo conductor en el quehacer del instructor, que responda al designio de las finalidades propias de esta fase del procedimiento. Así las cosas, cuando el juez instructor mantiene abierto un procedimiento penal que se ha dirigido contra un imputado más allá del tiempo absolutamente imprescindible, no se produce una simple dilación de la actividad de la justicia penal; ni siquiera puede decirse que solo tenga lugar la infracción del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, puesto que las consecuencias van mucho más allá del derecho de obtener una pronta justicia: los efectos aflictivos de la instrucción exigen considerar que la continuación innecesaria de las diligencias es una verdadera medida sancionatoria – una sanción encubierta si se quiere –, que se impone sin ninguna de las garantías procesales reconocidas por la Constitución y, por tanto, que carece de respaldo constitucional”.

21. La obligación a cargo del Estado de proteger igualmente a los Fiscales, Jueces, investigadores y peritos, encargados de adelantar este tipo de investigaciones.
22. Crear de manera permanente un grupo de trabajo compuesto por investigadores, personal de criminalística, Fiscales Especializados en Derechos Humanos y DIH, que sea ambulante, cuya tarea sea desplazarse inmediatamente a los sitios donde ocurran estas graves violaciones y realizar todas las diligencias pertinentes, garantizando así que el caso tenga vocación de éxito porque cumplirán todos los protocolos internacionales reclamados por la CIDH; en la práctica muchos casos, por tener ocurrencia en sitios alejados de la ciudad, en zonas rurales, son avocados directamente por inspectores de policía o personal civil, que no tienen ningún conocimiento, con las repercusiones que esto conlleva para la investigación.

CAPITULO XI

INVESTIGACIONES DE LAS GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA

12.1 ACUERDO DE PAZ 26 de septiembre de 2016

Antes de concluir este trabajo no quisiera dejar pasar un tema trascendental que de alguna forma tiene incidencia con el objeto de estudio, relacionado con el proceso de paz que se ha iniciado en Colombia con un grupo al margen de la ley, que ha generado graves violaciones a los derechos humanos desde hace ya más de cincuenta años, conocido como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP)⁴⁷⁴.

El día 26 de agosto de 2012, en la Habana – Cuba, se firmó un documento para iniciar el proceso de paz entre dirigentes de las FARC – EP y miembros del Gobierno Nacional, que contaría con el acompañamiento de varios países como Noruega, Chile, Venezuela y Cuba, además de representantes de víctimas y especialmente el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, organismo que se comprometió a “verificar y vigilar” el fin de la guerra en Colombia.

Finalmente el 26 de septiembre de 2016, en Cartagena – Colombia, se firma entre el representante de las FARC- EP -Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko- y el Presidente de la República -Juan Manuel Santos-, el Acuerdo de Paz, en el cual ambas partes asumen varios compromisos que se cumplirán a corto y largo plazo.

El Acuerdo se pacta en cinco puntos, relacionados con los siguientes tópicos: (i) Agro, (ii) Participación Política, (iii) Fin del Conflicto, (iv) las Drogas Ilícitas y (v) las Víctimas; para el objeto de estudio nos centraremos en este tema, donde se incluye la “Jurisdicción Especial de Paz”, en adelante, JEP, en la medida que se trata de un organismo que se crea con la finalidad de investigar las graves infracciones al DIH y las graves violaciones a los Derechos Humanos como se

⁴⁷⁴ Nace el 18 de mayo de 1964, con el fin de obtener el poder del Estado a través de una guerra de guerrillas, dándose el primer enfrentamiento como un grupo de campesinos encabezados por “Manuel Marulanda Vélez” en Marquetalia Tolima, el 27 de mayo de 1964. <http://www.semanariovoz.com/2014/05/28/los-50-anos-de-las-farc-ep-historia-que-no-puede-ignorarse/> consultado 11 de noviembre de 2016.

menciona en el documento, de manera que se analizará el pacto en aras de verificar cómo se resolverían dichas investigaciones en el marco del “**derecho al plazo razonable**”.

Este Acuerdo estaba sometido a un plebiscito⁴⁷⁵ el día 2 de octubre de 2016 para su implementación, pero fue improbadado, porque fueron más numerosos los votos a favor del no. Empero es importante revisar los puntos relacionados con la JEP, cómo se pretendían investigar y sancionar a los responsables y qué implicaciones puede tener el derecho al plazo razonable de esas graves violaciones a los derechos humanos cometidas por este grupo ilegal y por otras personas que directa e indirectamente cometieron delitos en el conflicto armado interno que vive el país, entre ellos agentes del Estado.

Inicialmente es pertinente contextualizar lo atinente a esta jurisdicción. Sea lo primero señalar que tiene como fundamento para su creación el derecho a la paz, que se impone como un deber jurídico del Estado colombiano en pro de atender los derechos de las víctimas, la obligación de prevenir nuevos hechos de violencia, con la intención de alcanzar la solución al conflicto armado interno. Miremos como se ha estructurado:

1. Se crea el “**Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, en adelante – SIVJRNR**”, que tiene que ver con todo un componente de justicia a favor de las víctimas y “*satisfacer sus derechos de verdad, justicia, reparación integral, con la garantía de no repetición*”, con el objetivo específico de alcanzar la paz y la solución al conflicto armado.
2. **Verdad.** Ofrecer verdad a la sociedad colombiana y también a la comunidad internacional, dada la entidad de los crímenes cometidos y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de una manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, respeto a los hechos cometidos en el mismo que supongan graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de Derechos Humanos⁴⁷⁶.

⁴⁷⁵ Regulado por el artículo 104 de la Constitución Política, como un mecanismo del pueblo a través del cual participa en una decisión que define el destino colectivo de la Nación.

⁴⁷⁶ O'DONIELL, Daniel, UPRIMY, Margarita Inés y VALENCIA VILLA, Alejandro. *Compilación de jurisprudencia y doctrina nacional e internacional*. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 3ª edición, V.I. Bogotá, 2003, págs. 49 - 52. En esta obra se establece la finalidad del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario así: “tienen en términos generales, la misma finalidad: la protección de los derechos fundamentales de la persona. Las diferencias más pertinentes son tres. En primer lugar,

3. El Acuerdo se fundamenta en una “**Justicia Prospectiva**” al considerar que una época influye ineluctablemente sobre las posteriores. Se plantea una “Justicia Prospectiva” respetuosa de los derechos del presente y a la vez preocupada por acabar con conflictos que no se deben perpetuar, en aras de los derechos de futuras generaciones.
4. **Reparación.** La jurisdicción al reconocer los derechos de las víctimas y el sufrimiento por las graves infracciones al DIH y por las violaciones a los Derechos Humanos⁴⁷⁷, establece la necesidad de reparar esos graves daños

mientras que el beneficiario del derecho internacional de los derechos humanos es, en general, toda persona humana, los principales beneficiarios del derecho humanitario son las llamadas “personas protegidas”. Hay diferentes categorías de “personas protegidas”: En primer lugar, la población civil, la cual se define como toda persona que no es combatiente, es decir, que no participa directamente en las hostilidades. En segundo lugar, las personas que siendo partícipes de las hostilidades han quedado por fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa. En tercer lugar, ciertos integrantes de la fuerzas armadas cuyas funciones son de carácter humanitario o religioso, a saber el personal sanitario (médicos, enfermeros y afines) y los capellanes. La segunda diferencia importante reside en las condiciones operativas o el ámbito de aplicación material. El derecho internacional de los derechos humanos se aplica en toda circunstancia, mientras que el derecho humanitario, como se sabe, se aplica únicamente en circunstancia de conflicto armado. La mayor parte de la normativa humanitaria es aplicable a los conflictos internacionales; en los conflictos no internacionales, son aplicables el Protocolo II adicional a los cuatro Convenios de Ginebra y el artículo 3 común de los mismos Convenios. (...) La tercera distinción fundamental entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se refiere a los destinatarios o sujetos de obligaciones. Mientras que la normativa internacional sobre derechos humanos sólo vincula a los Estados, el derecho internacional humanitario es vinculante para todas las partes del conflicto, sean fuerzas del Estado, unidades de las fuerzas armadas en rebeldía, fuerzas insurgentes o milicias organizadas, sean éstas independientes, subordinadas a una u otra de las demás partes o vinculadas a una de las partes por una alianza tácita. (...) Todas las partes en un conflicto, sea cual sea su naturaleza son, en virtud de su condición, destinatarios de las obligaciones plasmadas en los instrumentos y las normas aplicables del derecho humanitario.

⁴⁷⁷ En el Conjunto de Principios para la lucha contra la impunidad, conocidos como principios Joinet, que fueron actualizados por la experta Diane Orentlicher, se determina cuáles son los delitos graves según el derecho internacional así: “A los efectos de estos principios, la frase “delitos graves conforme al derecho internacional” comprende graves violaciones de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y de su Protocolo Adicional I de 1977 y otras violaciones de derecho internacional humanitario que constituyen delitos conforme al derecho internacional: genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de los derechos humanos internacionalmente protegidos que son delitos conforme al derecho internacional y/o respeto de los cuales el derecho internacional exige a los Estados que impongan penas por delitos tales como la tortura, las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y la esclavitud. Cfr. CNMH. *Archivos de graves violaciones a los DD.HH., infracciones al DIH, memoria histórica y conflicto armado. Elementos para una política pública*. Bogotá, CNMH, 2014, p. 61. consultado en noviembre 17 de 2016 <file:///E:/Archivos%20de%20graves%20violaciones%20a%20los%20DDHH.%20infracciones%20al%20DIH.%20memoria%20histórica%20y%20conflicto%20armado%20-%20CNMH.pdf>.

Ver igualmente Resoluciones No. 53/147, “ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”, adoptada el 9 de diciembre de 1998; y la Resolución No. 55/89 “La tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes”, adoptada el 22 de febrero de 2001. Por su parte el Estatuto de Roma, mediante el cual se creó la Corte Penal Internacional, en su artículo 5 determina cuáles son los

causados en el proyecto de vida de cada una de ellas, pero admite que las consecuencias son especialmente más graves cuando las violaciones recaen contra mujeres o víctimas pertenecientes a grupos más vulnerables, sujetos de especial protección, entre ellos los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, grupos étnicamente diferenciados, campesinos, las personas más pobres, las personas en condición de discapacidad, las personas desplazadas y refugiadas, las niñas, los niños, adolescentes, la población LGTBI y las personas de la tercera edad.

5. Surge entonces la **Jurisdicción Especial para la Paz - (JEP)**, que es una jurisdicción que ejercerá funciones jurisdiccionales de manera autónoma y preferente sobre los asuntos de su competencia, especialmente de conductas consideradas graves infracciones al DIH o graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas antes de la entrada en vigor el acuerdo.
6. Las personas que se quieren someter a la JEP deben cumplir ciertas condiciones, entre ellas, “aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición”.
7. Se respetarán los derechos fundamentales de los sometidos, relacionados con el debido proceso, de defensa, asistencia de un abogado, presunción de inocencia, doble instancia, independencia e imparcialidad de los Magistrados.
8. Se reconoce que el Estado colombiano está obligado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones del DIDH y las graves infracciones del DIH, siguiendo en esta materia los compromisos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 1) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 2). Se atienden también las orientaciones y exigencias de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos⁴⁷⁸.

crímenes más graves de trascendencia internacional, así: el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.

⁴⁷⁸ Op. cit., págs. 83 y 84 “Los tratados sobre derechos humanos invariablemente contienen entre sus primeros artículos uno que define en términos generales las obligaciones asumidas por los Estados en virtud de la ratificación del instrumento. El artículo pertinente del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y políticos, contiene tres párrafos. En el primero, los Estados se comprometen a “respetar y garantizar” todos los derechos reconocidos en el Pacto. En el segundo, se comprometen a “adoptar las medidas [...] legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en él”. En el tercero los Estados se comprometen a

9. **Se admite la aplicación de “Amnistías”**, pero únicamente respecto de delitos políticos y conexos, sin que este beneficio exima del derecho a decir la verdad, indicándose como delitos: “la rebelión, sedición, asonada, el porte ilegal de armas, las muertes en combates compatibles con el DIH, el concierto para delinquir con fines de rebelión”, no siendo factible este beneficio para crímenes de lesa humanidad ni para otros crímenes definidos en el Estatuto de Roma; por ello se puede señalar que en este punto el Acuerdo está en consonancia con las reclamaciones y exigencias de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, así como de otros Instrumentos Internacionales, como es la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968 y del mismo ER.
10. Las personas que pueden someterse a esta JEP, son las que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno aunque no hubiesen sido combatientes, pero respecto de los combatientes se reclama que suscriban el Acuerdo de Paz con el Gobierno.
11. En lo concerniente al reconocimiento de la verdad y responsabilidad por la realización de conductas se prevé que puede hacerse de manera individual o colectiva. De forma oral o por escrito, ante la Sala de reconocimiento de Verdad y responsabilidad, en el término de un año (1) después de instalarse la Sala, plazo que se puede prorrogar de forma pública y suficientemente motivada, por periodos sucesivos de tres meses.
12. Se indica que si una persona aparece vinculada en un informe o declaración de reconocimiento, se le notificará para darle la oportunidad de rendir voluntariamente su versión de los hechos.
13. Se fijarán fechas y plazos razonables para recibir informes y colocarlos a disposición de las personas. Así mismo, un plazo razonable y suficiente para las declaraciones, orales o escritas, de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Si surgen elementos para determinar que la conducta existió y que la persona participó, se pondrá a su disposición, para que tome

“garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo [...] Los dos primeros artículos de la Convención Americana establecen obligaciones sustancialmente idénticas a las contenidas en los dos primeros párrafos del artículo 1 del Pacto. El primero contiene un compromiso de respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos consagrados en la Convención y el segundo, un compromiso de adoptar las medidas legislativas u otras necesarias para “hacer efectivos” tales derechos y libertades.

la decisión de comparecer o no a hacer el reconocimiento de verdad y responsabilidad.

14. La JEP tendrá un Tribunal para la Paz, que estará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en la medida en que esta última entidad debe seguir adelantado las investigaciones hasta que la Sala, una vez concluidas las etapas previstas, anuncie públicamente que en tres meses (3) presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate deberán remitir a la Sala la totalidad de las investigaciones sobre esos hechos y conductas. Cuando haya una resolución de la Sala indicará para cuáles conductas, con el fin de que cese la investigación por parte de la Fiscalía o el órgano correspondiente.
15. Se establece un orden de prioridades para el Tribunal para la Paz, en la medida que se solicita que desde un principio se concentre en los casos más graves y en las conductas o prácticas más representativas, para que haya una resolución prontamente. Con este fin tiene facultades la Sala para organizar sus tareas, integrar comisiones de trabajo, fijar prioridades, acumular casos semejantes, definir la secuencia en que los abordará, adoptar criterios de selección y descongestión.
16. El Tribunal para la Paz tendrá varias secciones así: (i) Sección de Primera Instancia en caso de reconocimiento de Verdad y responsabilidad, que proferirá sentencias. (ii) Sección de Primera Instancia para casos de ausencia de Verdad y responsabilidad, donde se celebrarán juicios contradictorios y se proferirá sentencia, que pueden ser absolutorias o condenatorias. (iii) Sección de Revisión de Sentencias. (iv) Sección de Apelación, que solo podrá ser a petición del destinatario de la resolución o sentencia. Si se vulneran derechos fundamentales de las víctimas, podrá solicitar protección mediante un recurso, ante la Sección de Apelaciones.
17. Los órganos de la Jurisdicción de Paz, son los siguientes: (i) Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. (ii) Sala de Amnistía o de Indulto. (iii) Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. (iv) Tribunal para la Paz y (v) Unidad para la Investigación y la Acusación.
18. **Sanciones alternativas de cinco a ocho años.** El fin de la sanción está dado en la satisfacción de los derechos de las víctimas y la consolidación de la paz, debiendo tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, en relación con el grado de reconocimiento de verdad y

responsabilidad, partiendo de una sanción alternativa que oscila en un mínimo de cinco años y un máximo de ocho años, comprendiendo restricciones efectivas de la libertad y derechos, como la libertad de movimiento y residencia, necesarias para la ejecución, pero exigiéndose que se garantice la no repetición.

19. **Sanciones ordinarias de 15 a 20 años.** Fija sanciones ordinarias cuando no hay reconocimiento de verdad y responsabilidad, que oscilan entre 15 a 20 años en caso de conductas graves.
20. Estas sanciones tienen un **contenido restaurativo y reparador** así como restricciones de libertades y derechos, por lo que se puede presentar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad un proyecto detallado, individual o colectivo, de ejecución de los trabajos, obras o actividades reparadoras o restaurativas, señalando obligaciones, objetivos, fases temporales, horarios, lugares de ejecución, personas que los ejecutarán y sitios de residencia. Establecerá el proyecto un mecanismo de consulta con las víctimas residentes en el lugar de ejecución, para conocer su opinión y oposiciones, pero finalmente ello no es obstáculo, porque el Tribunal tendrá plena autonomía para decidir. Por otra parte, la sanción alternativa de 5 a 8 años es reservada para quienes hayan cometido conductas muy graves, dependiendo de los delitos, el grado de reconocimiento de verdad, de responsabilidades y de colaboración.
21. **Reparación.** La reparación es un factor a tener en cuenta para recibir cualquier tratamiento en materia de justicia. Esta reparación puede ser individual o colectiva, para los que participaron de manera directa o indirecta, incluyendo a agentes del Estado. Las FARC–EP se comprometen en acciones de contribución a la reparación de los daños causados, entre las que se incluyen (i) la infraestructura en los territorios más afectados por el conflicto, (ii) la participación en los programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG) (iii) la participación en la sustitución de cultivos de uso ilícito, (iv) la contribución a la búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto y (v) la participación en programas de reparación del daño ambiental.

22. En los programas de reparación colectiva con enfoque territorial se deben incorporar los siguientes elementos: (i) medidas materiales y simbólicas dirigidas a atender el daño de víctimas individuales o colectivas con acciones de dignificación, de memoria, homenajes y conmemoraciones, obras de infraestructura y arquitectura conmemorativa. (ii) Medidas de convivencia y reconciliación dirigidas a atender los daños en el tejido social y promover la convivencia al interior de las comunidades, vinculando a todos los actores y víctimas. (iii) Todos los planes de reparación deben coordinarse. (iv) Planes de acción de reparación colectiva de manera participativa. (v) Los mecanismos de participación de las víctimas serán la base de los planes de reparación colectiva territorial y (vi) medidas de contribución a la reparación por parte de quienes cometieron los daños con ocasión del conflicto.
23. Se tomarán medidas de recuperación emocional a nivel individual y un plan de rehabilitación psico-social para la convivencia y la no repetición. Este punto es muy importante para poder sanar las heridas; que las víctimas que hayan perdido a sus seres queridos hagan el duelo, y la sociedad pueda reconciliarse con los actores de estas graves violaciones de derechos humanos.
24. En la ley de amnistía, en el artículo 22, inciso final se indica lo siguiente: “Se entenderá por “grave crimen de guerra” toda infracción del DIH cometida en forma sistemática o como parte de un plan o política. De esta manera se define lo que debe entenderse por grave crimen de guerra según el DIH.
25. Como complemento de la JEP se crea una **Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales Responsables de Masacres y Homicidios que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo organizaciones sociales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen los Acuerdos y la implementación de la Paz**. Será una jurisdicción ordinaria, que contribuirá al cumplimiento de los objetivos de la Ley de Justicia y Paz y de la JEP. Su finalidad es el fortalecimiento de la justicia y el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, para garantizar la no repetición del fenómeno paramilitar y prevenir la comisión de nuevas violaciones de derechos humanos; por ello se le dota de las siguientes características:

- a. Se creará por fuera de la jurisdicción para la paz. Será parte de la jurisdicción ordinaria y de la Fiscalía General de la Nación.
- b. La unidad aplicará metodologías de análisis de contexto, nuevas metodologías de análisis incluyendo la perspectiva de género.
- c. Dispondrá de recursos y presupuesto suficiente para su funcionamiento.
- d. Tendrá acceso a toda la información judicial disponible que requiera para sus investigaciones.
- e. Implementará planes metodológicos de investigación especializados respecto a los más graves hechos de victimización que ejecuten contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBI.
- f. Se creará un cuerpo de elite de la Policía Nacional para estas investigaciones con enfoque multidimensional.
- g. Igualmente, se pondrán en marcha estrategias e instrumentos eficaces para contribuir a esclarecer el fenómeno del paramilitarismo, entre ellas (i) promover medidas para garantizar la participación de ex-miembros de grupos paramilitares en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que se crea igualmente con el Acuerdo, en adelante la Comisión. (ii) Fortalecer el esclarecimiento del fenómeno en los procesos de Justicia y Paz.

26. Se crea una **“Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y Resolución de Diferencias”** que podrá tener una duración de 10 años con posibilidad de prórroga. Así mismo, con la firma del Acuerdo Final, y para garantizar la implementación de todo lo acordado, la Comisión de Implementación realizará un Plan Marco, dentro de los cuatro meses siguientes a su constitución, para la implementación de los Acuerdos.

27. **Componente Internacional.** También se crea un mecanismo de verificación de los Acuerdos con un Componente Internacional, cuya finalidad es comprobar el estado y avances, o los retrasos y deficiencias, para brindar oportunidades de progreso continuo.

Después de contextualizar uno de los puntos referidos en el Acuerdo de Paz, relacionado con el componente de Justicia, es pertinente revisar cuáles son las

graves violaciones que han cometido las FARC–EP en el ámbito de los derechos humanos y del DIH.

Para ello nos documentaremos de los medios periodísticos, destacándose los hechos más graves, así: (i) Masacre de Bojayá–Chocó, el 2 de mayo de 2002, un enfrentamiento entre las FARC y las AUC dejó 119 muertos, 98 heridos, personas civiles que se refugiaron en la iglesia del pueblo para esconderse del enfrentamiento. Las personas que quedaron vivas salieron desplazadas del pueblo. Gran parte de las víctimas eran menores de edad. (ii) Masacre el Nogal el 7 de febrero de 2003 en Bogotá donde un vehículo cargado con más de 200 kilogramos de explosivos detonó en la edificación, muriendo 36 civiles y 200 personas resultaron heridas. (iii) Masacre de los diputados del Valle el día 11 de abril de 2002, en Cali Valle, cuando los guerrilleros disfrazados de miembros del ejército ingresaron a las instalaciones, simulaban que había una bomba con el fin de poderlos trasladar de su sitio de trabajo y se los llevaron, permaneciendo en cautiverio por más de cinco años, once de ellos ejecutados y solo sobrevivió uno. (iv) julio 28 de 2009, una joven de 20 años fue usada para cargar explosivos contra la estación de Policía de Samaniego Nariño, causándole la muerte y la de 8 agentes heridos. (v) Un paquete bomba a un menor que igualmente perdió la vida y heridas a dos policías. (vi) Se determina que es la responsable de sembrar minas en todos los departamentos del país con un resultado de 10.445 personas muertas. (vii) Cantidad de tomas guerrilleras en varias poblaciones que dejaron como consecuencia muertos, destrucción de bienes y desplazamientos de la población civil, entre las que se destacan la toma de Mitú en Vaupés, 11 civiles murieron, 38 policías secuestrados por años. (viii) Toma en Puerto Saldaña Tolima con 27 muertos, entre ellos menores de edad, la destrucción de 394 casas con cilindros bombas. (ix) La toma de Granada en Antioquia, donde un carro bomba fue detonado en el centro del pueblo, 19 muertos, destrucción de casas, locales comerciales. (x) Toma de Arboleda Caldas usando un carro bomba y lanzamiento de cilindros. La utilización de animales con bombas. (xi) El secuestro de miles de personas por muchos años. (xii) Reclutamiento de menores. (xiii) Desplazamiento forzado y extorsión⁴⁷⁹ entre otros.

⁴⁷⁹ KIENYKE. *“Diez atrocidades por las cuales las Farc no pueden negar ser victimarios”* <http://www.kienyke.com/politica/las-atrocidades-de-las-farc/> consultado 11 de noviembre de 2016, artículo, *“Diez atrocidades por las cuales las Farc no pueden negar ser victimarios”* Julio 24, 2013.

12.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL PRIMER ACUERDO

Así las cosas, son muchos años los que han transcurrido y a la fecha las investigaciones han arrojado escasos resultados, de tal suerte que en este tópico debe admitirse que para muchas de estas investigaciones el derecho al plazo razonable, tanto para las víctimas como para indiciados, está más que vulnerado, existiendo para el TEJ, como meta, esclarecer las más graves violaciones y sancionar especialmente a los máximos responsables, con una pena que no será superior a ocho años, además que puede ocurrir que en un evento dado la pena sea restaurativa y no haya restricción de la libertad, de aprobarse por el Tribunal un proyecto que busque reparar los daños causados a las víctimas.

Consecuente con ello, muchas son las críticas que se han realizado en el país frente a estos beneficios, porque los crímenes cometidos se pueden adecuar a delitos de lesa humanidad⁴⁸⁰, crímenes de guerra que, como se conoce, reclaman

⁴⁸⁰ El ER define en su artículo 7 del crimen de lesa humanidad así: A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; e) Deportación o traslado forzoso de la población; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. 2. A los efectos del párrafo 1:

a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política. b) El "exterminio" comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población; c) Por "esclavitud" se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños; d) Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional; e) Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas; f) Por "embarazo forzado" se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las

normas de derecho interno relativas al embarazo; g) Por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad; h) Por "el crimen de apartheid" se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen; i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado. 3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término "género" se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término "género" no tendrá más acepción que la que antecede.

Artículo 8. Crímenes de guerra 1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. 2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra": a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente: i) El homicidio intencional; ii) La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos; iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la destrucción; iv) La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente; v) El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga; vi) El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente; vii) La deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal; viii) La toma de rehenes; b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades; ii) Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares; iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados; iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea; v) Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares; vi) Causar la muerte o lesiones a un combatiente que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción; vii) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves; viii) El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio; ix) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares; x) Someter a personas que estén en poder de una parte adversa a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud; xi) Matar o herir a traición a personas

pertenecientes a la nación o al ejército enemigo; xii) Declarar que no se dará cuartel; xiii) Destruir o apoderarse de bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo; xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga; xv) Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado al servicio del beligerante antes del inicio de la guerra; xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto; xvii) Emplear veneno o armas envenenadas; xviii) Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogos; xix) Emplear balas que se ensanchan o aplasten fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones; xx) Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que, sobre el particular, figuran en los artículos 121 y 123; xxi) Cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; xxii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que también constituya una infracción grave de los Convenios de Ginebra; xxiii) Utilizar la presencia de una persona civil u otra persona protegida para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de operaciones militares; xxiv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios, y contra personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional; xxv) Hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra; xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades; c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa: i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ii) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; iii) La toma de rehenes; iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables. d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional, y por consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos. e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades; ii) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios y contra el personal que utilicen los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional; iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados; iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias

de la comunidad internacional una sanción de los responsables ante su carácter de imprescriptibles, previéndose por ello que habrá impunidad y que a la vez, como los agentes del Estado que pueden estar comprometidos tienen la potestad de acogerse a esta justicia, igual situación cobijará a los crímenes que ejecutaron, especialmente los que tienen que ver con falsos positivos, así denominadas aquellas ejecuciones de personas civiles que fueron ultimados por el ejército para hacer creer que yacieron en combate, cuando al contrario se trataba de personas protegidas por el DIH.

José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch, no obstante admitir que el Acuerdo es una oportunidad para Colombia, considera que tiene “graves defectos” que hay que corregir, porque castigar a criminales de guerra a realizar servicios para la comunidad es “grotescamente desproporcionado”. En su sentir es un retroceso en materia de defensa de los derechos humanos en el mundo. Pero va más allá y sustentó que a través de ese Acuerdo lo que se buscaba era proteger a los altos mandos de ambas partes, comandantes guerrilleros y generales del ejército que puedan haber cometido delitos durante el conflicto armado⁴⁸¹.

Teniendo en cuenta que el estudio va direccionado a analizar el derecho al plazo razonable en las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos

o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares; v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto; vi) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra; vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades; viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas; ix) Matar o herir a traición a un combatiente adversario; x) Declarar que no se dará cuartel; xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud; xii) Destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo; f) El párrafo 2 e) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional, y, por consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos. Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos. 3. Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y e) afectará a la responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener o restablecer el orden público en el Estado o de defender la unidad e integridad territorial del Estado por cualquier medio legítimo.

⁴⁸¹ <http://www.elsalvador.com/articulo/internacional/human-right-watch-critica-que-acuerdo-paz-entre-colombia-las-farc-generara-impunidad-123593>. Consultado 8 de noviembre de 2016.

en que incurrieron las FARC-EP, debemos señalar que a través de la Jurisdicción de Paz se logrará, si se cumple estrictamente lo acordado, hacer realidad sus objetivos respecto al esclarecimiento de un sinnúmero de crímenes catalogados de lesa humanidad o crímenes de guerra, dejando de manifiesto que en Colombia, pese a todo el tiempo transcurrido, no ha sido viable esclarecerlos, ni se ha podido condenar y llevar a prisión a los máximos responsables de esa organización, además que son pocas las condenas proferidas⁴⁸², pues se trata de más de cincuenta años de conflicto armado, con innumerables violaciones graves de derechos humanos e infracciones al DIH. Contrario sensu, la realidad demuestra que muchos de ellos han caído en combate o han muerto por causas naturales como ocurrió con su fundador -Manuel Marulanda-, denotándose la negligencia e ineficacia del Estado en controlar, combatir y sancionar sus responsables, ello en buena parte porque tienen un extenso control territorial, que ejercen mediante el uso de las armas y conductas delictivas relacionadas con el terrorismo, el secuestro, reclutamiento de menores, el control de los cultivos ilegales, etc., así que no solo tienen dominio territorial, el uso de las armas, sino mucho poder económico, que han ejercido mediante prácticas como el narcotráfico y los secuestros.

Por tanto, en estas investigaciones relacionadas con los crímenes cometidos por las FARC-EP, por estar en la impunidad en su mayoría, o porque las condenas dictadas no han comprendido a todos los responsables, especialmente a los máximos exponentes, el derecho al plazo razonable para las víctimas y victimarios no se ha hecho efectivo, de tal suerte que lograr que pueda establecerse la verdad, que haya justicia y reparación integral, con la garantía de no repetición, con penas que no van a ser superiores a ocho años, es una forma de compensar la violación al derecho al plazo razonable, y viene a constituir una sanción a la misma inoperatividad del Estado, en consonancia con lo invocado como solución cuando se ha presentado la lesión a este derecho, lo que nos lleva a señalar que se trata de una **atenuante**, por lo que comparte totalmente que pueda pactarse esta pena.

Ahora bien, la controversia respecto a que esa pena, además de ser atenuada no se cumpla en centro carcelario, sino con trabajo restaurativo, es otra discusión, que igual podría ser valorada como parte de esa sanción que recibe el Estado por el no cumplimiento de las obligaciones impuestas en el artículo 8.1 de la

⁴⁸² “Según informe de la Fiscalía General de la Nación en los últimos tres años se han proferido 1.500 condenas contra esa organización, 157 contra el secretariado, por delitos como homicidios, secuestro, desaparición y tortura, indicándose que no hay impunidad y que son cifras significativas que no existen en otro país con conflicto armado”. <http://www.noticiasrcn.com/nacional-justicia/informe-fiscalia-senala-condenas-contras-farc-signo-no-hay-impunidad> consultado noviembre 16 de 2016.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tal como también se planteó al estudiar la atenuante, tendrá que revisarse caso por caso en aras a determinar si la pena no es necesaria porque cumplió ya con el fin de rehabilitación, lo que debe ser una situación muy excepcional, pero si se opta por el trabajo restaurativo sustitutivo de la prisión, ello debe ser evaluado de manera particular, no puede generalizarse, y además que se contemple que la garantía de su cumplimiento se adopte con medios electrónicos que permitan hacer un seguimiento de cada una de estas personas.

Es menester recordar que la Ley de Justicia y Paz⁴⁸³, expedida en un proceso transicional con un grupo de personas que se organizaron ilegalmente para combatir a las FARC-EP u otras organizaciones criminales con las mismas políticas, conocidas como paramilitares o AUC, igualmente prevé una pena alternativa de cinco a ocho años, para quienes al igual que las FARC-EP han cometido crímenes de igual entidad y magnitud⁴⁸⁴, por tanto, en aras de que haya igualdad de trato para

⁴⁸³ “La justicia transicional se entiende como las medidas excepcionales y transitorias desarrolladas por los Estados para enfrentar graves violaciones de derechos humanos, originadas en el marco de un conflicto o estado de excepción. [...] En el contexto nacional, el concepto de justicia transicional se introdujo en las discusiones legislativas que dieron origen a la Ley 975 de 2005, denominada de Justicia y Paz. Con anterioridad se desarrollaron políticas de desmovilización, desarmes y procesos de paz, que si bien introducían medidas excepcionales para lograr sus objetivos, no se fundamentaban en un proceso de justicia transicional”. ABUCHAIBE, Heidi. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la justicia transicional en Colombia”. Artículo. Revista de la Universidad Externado de Colombia. P, 24. http://portal.uexternado.edu.co/pdf/5_revistaZero/ZERO%2026/HeidiAbuchaibe.pdf, consulta noviembre 18 2016. Para el Secretario General de Seguridad de Naciones Unidas, en el informe 3 de agosto de 2004 - Consejo de Seguridad Naciones Unidas S/2004/616/3 de agosto de 2004, presenta una definición justicia de transición así: “Aquella que abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad en resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuenta de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por completo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos”.

⁴⁸⁴ “Durante los últimos quince años, los actores en el conflicto armado interno —en particular las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las FARC-EP— han empleado la comisión de masacres como estrategia contra miembros de los sectores más vulnerables tales como los pueblos indígenas, las comunidades afro descendientes y los desplazados; y la comisión de asesinatos selectivos y desapariciones forzadas como estrategia contra defensores de derechos humanos, operadores de justicia, líderes sindicales y sociales, periodistas y candidatos a cargos de elección popular quienes han sido repetidamente declarados como objetivos militares, principalmente por las AUC. Por su parte, los grupos armados disidentes —principalmente las FARC-EP— también han empleado como estrategia la comisión de atentados con explosivos en forma indiscriminada y de secuestros, en violación de los principios más básicos del derecho internacional humanitario, causando numerosas víctimas entre la población civil”. La CIDH ha expresado en forma reiterada su preocupación por la falta de esclarecimiento judicial de la abrumadora mayoría de estos hechos. En los casos en los

todos, no debería reconocerse la pena restaurativa, porque dicha ley no la previó, y además esa pena alternativa está sujeta al cumplimiento de una serie de compromisos, situación avalada por la Corte Constitucional en su sentencia C-370 de 2006⁴⁸⁵; por consiguiente, sería una salida a las críticas propuestas por muchos

cuales resulta posible para los órganos del sistema interamericano ejercer su jurisdicción –vale decir, por ejemplo, casos en los cuales se alega la responsabilidad de agentes del Estado por acción u omisión en el fallecimiento fuera de combate de personas que no pueden ser consideradas como blanco militar legítimo— la CIDH ha tramitado peticiones sobre la alegada violación a los derechos humanos protegidos en la Convención Americana. Un importante número de reclamos ha sido resuelto por la Comisión y otros por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación y alcance de la ley de justicia y paz en la república de Colombia*. Puntos 5 y 6.

⁴⁸⁵ “El método de ponderación es apropiado para la resolución de los problemas que plantea este caso, por cuanto no es posible materializar plenamente, en forma simultánea, los distintos derechos en juego, a saber, la justicia, la paz, y los derechos de las víctimas. El logro de una paz estable y duradera que sustraiga al país del conflicto por medio de la desmovilización de los grupos armados al margen de la ley puede pasar por ciertas restricciones al valor objetivo de la justicia y al derecho correlativo de las víctimas a la justicia, puesto que de lo contrario, por la situación fáctica y jurídica de quienes han tomado parte en el conflicto, la paz sería un ideal inalcanzable. Se trata de una decisión política y práctica del Legislador, que se orienta hacia el logro de un valor constitucional. En ese sentido, la Ley 975 de 2005 es un desarrollo de la Constitución de 1991. Pero la paz no lo justifica todo. Al valor de la paz no se le puede conferir un alcance absoluto, ya que también es necesario garantizar la materialización del contenido esencial del valor de la justicia y del derecho de las víctimas a la justicia, así como los demás derechos de las víctimas, a pesar de las limitaciones legítimas que a ellos se impongan para poner fin al conflicto armado”. (...) “Esta configuración de la denominada pena alternativa, como medida encaminada al logro de la paz resulta acorde con la Constitución en cuanto, tal como se deriva de los artículos 3° y 24, no entraña una desproporcionada afectación del valor justicia, el cual aparece preservado por la imposición de una pena originaria (principal y accesoria), dentro de los límites establecidos en el Código Penal, proporcional al delito por el que se ha condenado, y que debe ser cumplida si el desmovilizado sentenciado, incumple los compromisos bajo los cuales se le otorgó el beneficio de la suspensión de la condena. Sin embargo, considera la Corte que algunas expresiones de los artículos 3°, 20 y 29, merecen especial consideración en cuanto pueden contener medidas que, no obstante estar orientadas al logro de la paz, podrían entrañar una desproporcionada afectación del valor justicia y particularmente del derecho de las víctimas. Así acontece con la expresión del artículo 3° que condiciona la suspensión de la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, a la “colaboración con la justicia”. Esta exigencia formulada en términos tan genéricos, despojada de contenido específico, no satisface el derecho de las víctimas al goce efectivo de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. La alternatividad penal parecería una afectación desproporcionada de los derechos de las víctimas si la “colaboración con la justicia” no comprendiera la integralidad de los derechos de tales víctimas, y si no exigiera de parte de quienes aspiran a acceder a tal beneficio acciones concretas encaminadas a asegurar el goce efectivo de estos derechos. En consecuencia la Corte declarará la constitucionalidad del artículo 3°, en el entendido que la “colaboración con la justicia” debe estar encaminada al logro efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”. (...) Advierte la Corte que el inciso quinto del artículo 29, orientado a regular los supuestos de revocatoria de la libertad a prueba y del beneficio de alternatividad penal, emplea una expresión demasiado amplia, v.gr., “cumplidas estas obligaciones”. Tales obligaciones pueden ser las del inciso inmediatamente anterior, lo cual dejaría completamente desprotegido el derecho de las víctimas a la verdad. En cambio, el inciso segundo de dicho artículo alude a “las condiciones previstas en esta ley”, lo cual comprende múltiples requisitos, sin especificar cuáles. Esto es especialmente importante en lo que respecta al derecho a la verdad, que sería

colombianos y organismos internacionales, que tendrán que acogerse con el propósito de firmar un nuevo Acuerdo de Paz.

La propuesta sería copiar la reglamentación prevista en la Ley 795 de 2005, para que no haya desequilibrio; que sea una ley proporcional y consecuente con las exigencias de la comunidad internacional, porque no puede desconocerse que ambas organizaciones han causado demasiada violencia y graves violaciones a los derechos humanos, recomendándose en este trabajo que se parta de esa pena de cinco a ocho años, pero que sea alternativa, por tanto, sujeta al cumplimiento de los requisitos de esclarecer la verdad, entregar los bienes, entregar las fosas, las armas, las personas secuestradas, los niños reclutados, que se haga el desminado, etc., cumpliendo así las recomendaciones y exigencia de la Corte Constitucional en la ley que ya es un precedente para Colombia, pues también se expidió en el marco de un proceso transicional, teniendo como fundamento el derecho a la paz, lo que de contera significa que no se vuelvan a cometer estos delitos, pero sin que se autorice la posibilidad de conceder penas restaurativas a los máximos responsables, ni a los responsables de estas graves violaciones, incluyéndose ahí a agentes del Estado.

De igual modo, no puede desconocerse que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizó una interpretación de la Ley 975 de 2005, y en una de sus conclusiones destacó lo siguiente:

“La decisión de la Corte Constitucional mejora de manera sustancial el balance originalmente establecido en la Ley de Justicia y Paz entre el sistema de incentivos legales para la desmovilización a través de la morigeración de penas, y los principios de verdad, justicia y reparación que hacen parte de las obligaciones internacionales del Estado. La decisión precisa los requisitos para acceder a la pena alternativa y para preservarla en el futuro sin

burlado si el condenado pudiera mantener el beneficio de la pena alternativa a pesar de que se descubra, algún delito cometido con ocasión de su pertenencia al grupo armado específico, imputable al beneficiario y que éste hubiere ocultado en su versión libre. Según esta interpretación, el beneficiario de la alternatividad continuaría gozando de la pena alternativa a pesar de haber ocultado, no cualquier delito, sino uno en el cual hubiere participado como miembro del bloque o frente al cual pertenecía. Cuando dicho delito ocultado estuviere, además, relacionado directamente con su pertenencia al grupo específico desmovilizado, o del cual individualmente decidió separarse para desmovilizarse, admitir que el condenado conserve el beneficio resulta manifiestamente desproporcionado. En efecto, esta interpretación tornaría la alternatividad inoperante e ineficiente frente a los fines de la justicia, y afectaría en exceso el derecho a la verdad. Por estas razones la Corte declarará exequible el inciso 5º del artículo 29 en el entendido de que también se revocará el beneficio de alternatividad cuando el beneficiario haya ocultado en la versión libre su participación como miembro del grupo en la comisión de un delito relacionado directamente con su pertenencia al grupo”.

exponerse a su revocación. Desincentiva el ocultamiento de información y promueve que las confesiones sean veraces y completas. También mejora las condiciones para que la Fiscalía pueda investigar adecuadamente los hechos, y amplía la posibilidad de que las víctimas puedan participar en los procedimientos y obtener reparación. Consecuentemente, la decisión de la Corte constituye una herramienta esencial para que el marco legal pueda ser implementado en concordancia con las obligaciones internacionales del Estado.

Entre los aspectos principales de la decisión de la Corte Constitucional, que deben ser materia de estricto cumplimiento por parte de las instituciones del Estado involucradas en la implementación de la Ley 975, corresponde destacar los detallados a continuación.

La versión libre rendida por quienes se acojan a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz debe ser completa y veraz, y debe incorporar el derecho a conocer las causas y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los crímenes fueron cometidos, a fin de asegurar el derecho a la verdad.

El derecho de las víctimas a participar en todas las diligencias procesales establecidas en la Ley de Justicia y Paz.

El deber de quienes se acojan a la Ley de Justicia y Paz el revelar el paradero de los desaparecidos; y reparar a las víctimas con su propio patrimonio, incluyendo el patrimonio legal, respecto del cual proceden medidas de tipo cautelar.

Los miembros del grupo armado desmovilizado responderán en forma solidaria a fin de reparar a las víctimas de los crímenes perpetrados cuando así lo decidan los tribunales.

Quienes se beneficien de la pena alternativa prevista en la Ley 975 perderán dicho beneficio en caso de volver a delinquir o incumplir las obligaciones impuestas durante el tiempo que dure su sentencia⁴⁸⁶.

Con base en estas argumentaciones la propuesta de trabajo apunta a que el Gobierno y las FARC-EP, en las nuevas negociaciones que tienen como pretensión un nuevo Acuerdo de Paz, recojan las decisiones de la Corte Constitucional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se han corregido los errores que tuvo en principio la Ley 975 de 2005, ajustándola a estándares

⁴⁸⁶ Puntos 57 y 58 ibídem.

internacionales, en beneficio no solo de los actores armados, sino de la efectividad de los derechos de las víctimas.

Es de destacar que la Ley 975 de 2005 prevé unos términos procesales para llevar a cabo las investigaciones, lo que se compadece igualmente con las propuestas señaladas en este trabajo, porque sirve como un mecanismo para prevenir la lesión al derecho al plazo razonable, aunque como ya se ha indicado en la mayoría de esas investigaciones el derecho al plazo razonable ya está vulnerado. El Acuerdo determina que se fijarán términos para realizar las investigaciones en que incurrieron directa e indirectamente las personas comprometidas con el conflicto armado interno que vivió el país.

Es de anotar finalmente que la Comisión manifestó su preocupación por el cumplimiento de los términos de la Ley 975 de 2005, dada la complejidad de las investigaciones. Hoy en día, como bien se conoce, esos plazos no se han podido cumplir. Este punto debe ser tenido en cuenta en la nueva ley que reglamente dichas investigaciones, para que tal como se propone en este estudio, los plazos, por la complejidad de los casos, tengan la posibilidad de prorrogarse si se demuestra, antes de su vencimiento, la imposibilidad de cumplirlos.

12.3 ACUERDO FINAL 11 de noviembre 2016

Afortunadamente se consolidó un nuevo Acuerdo de Paz el día 11 de noviembre de este año 2016, por lo cual enfocaremos el estudio en lo que tiene que ver con el **derecho al plazo razonable** de esas graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno colombiano.

Es importante destacar que el preámbulo es un escenario muy importante para el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en cuanto reconoce derechos reivindicados en varios Instrumentos Internacionales, como son: el PIDCP, PIDESC, CADH, entre otros, lo que significa que comprenda derechos políticos, sociales, económicos, religiosos, culturales, colectivos, el derecho a la paz, del medio ambiente, derechos de los niños, niñas, adolescentes, de los indígenas, comunidad afro, LGTBI, de los campesinos.

De otra parte, es supremamente trascendental que se tenga en cuenta, para la efectividad de esos derechos, el enfoque diferencial, de género, a las personas discapacitadas, desplazados por el conflicto, los derechos de las personas adultas mayores, la garantía del derecho a la igualdad y no discriminación, la tolerancia, pero reconociendo que la tolerancia consiste en “la armonía con la diferencia”. Este punto se condensaba en el primer Acuerdo pero en el segundo se ratifica con más precisión.

Recoge otros Instrumentos Internacionales del Derecho Internacional Humanitario, del Estatuto de Roma, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las mismas normas de la Constitución Política, con el compromiso de terminar el conflicto armado interno, destacándose en este tópico el artículo 3 común a los acuerdos de Ginebra de 1949, para los efectos de su vigencia internacional.

Este nuevo Acuerdo se suscribirá por parte de las FARC-EP y el Gobierno Nacional, teniendo como objetivo primordial la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz duradera y estable. Ya en esta oportunidad será el Presidente de la República, como Jefe de Estado, quien se encargará de suscribir y ratificar los Acuerdos de Paz, contrariamente a lo que ocurrió con el anterior, en que se le dio la oportunidad al pueblo de aprobarlos o no, con los resultados ya conocidos.

Lo anterior hace confiar que se firmará el Acuerdo. No obstante, se indica ya no en el preámbulo, sino en la introducción, (donde se ratifican igualmente los

anteriores derechos y compromisos) que una vez realizado el procedimiento de refrendación, con el ánimo de consolidar aún más las bases para consolidar la paz y la reconciliación nacional, se convocará a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran **ACUERDO POLÍTICO NACIONAL**, encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social.

En mi sentir, el solo preámbulo será vinculante para el país y significará un desarrollo a corto y largo plazo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos aparejando la consolidación de una paz duradera y estable, porque se trata de un desarrollo integral de los derechos humanos reivindicados desde hace muchos años por la comunidad internacional, que a pesar de tener en el país su reconocimiento en la Constitución Política, y la ratificación de los Instrumentos de Derechos Humanos que así lo prevén, haciendo parte del bloque de constitucionalidad, no han podido hacerse efectivos y desarrollarse de manera satisfactoria, como consecuencia en gran parte del conflicto armado interno de Colombia.

A eso le apostamos, porque eso redundará igualmente en pro del derecho al plazo razonable, especialmente porque se robustece aún más el componente de la justicia en el desarrollo del Acuerdo, a través de mecanismos más especializados; la exigencia de que los Magistrados y personal adscrito tenga estudios en derechos humanos y DIH, siendo éste uno de los presupuestos para que los funcionarios direccionen efectivamente las investigaciones y se corrijan falencias reiterativas del pasado, por ese motivo esta era una propuesta que se reclamaba en este trabajo.

Por otra parte, el hecho de que se logre someter a las organizaciones criminales más grandes y representativas del país, como la FARC-EP, ya significa que se augure que las graves violaciones de derechos humanos al menos se reduzcan mínimamente, pero lo mejor, con la posibilidad que más adelante otras organizaciones criminales puedan también someterse. Minimizar las graves violaciones de derechos humanos es un gran reto, y es bueno que a futuro el derecho al plazo razonable se prevenga y aplique, pero no para graves violaciones de derechos humanos.

En el nuevo Acuerdo se condensan los siguientes tópicos: (i) "Reforma Rural Integral"; (ii) "Participación Política: apertura democrática para construir la paz"; (iii) "Cese al Fuego y de Hostilidad Bilateral y Definitivo y de la Dejación de las Armas"; (iv) "Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo a sus intereses"; (v) "Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres que atacan

contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”; (vi) “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”; (viii) “Víctimas”; (viii) “Mecanismos de Implementación y Verificación”, donde se crea una “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final”.

Abordaremos a continuación algunos de ellos:

1. **Medidas de Seguridad para los líderes y lideresas⁴⁸⁷ de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos.** Es un nuevo tema en el acuerdo, que brinda muchos aportes al derecho al plazo razonable, trascendentales para la prevención de graves crímenes de derechos humanos, y de contera, estaría en consonancia con propuestas que se hicieron en este estudio, como medidas preventivas para evitar la vulneración del derecho al plazo razonable; por eso destacamos las siguientes: (i) Fortalecimiento de las capacidades investigativas y de judicialización contra los que atenten contra líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. (ii) Fortalecer el programa de protección individual y colectiva de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo. (iii) Un comité de impulso a las investigaciones por delitos en contra de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. En lo concerniente a la desmovilización de los miembros de las FARC-EP, se destaca lo relacionado con los menores de edad, para quienes se determina que serán objeto de especial protección y serán tenidos como víctimas del conflicto.
2. En el punto relacionado con **“Garantías de seguridad y lucha contra organizaciones y conductas responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus**

⁴⁸⁷ El acuerdo hace el énfasis en el enfoque de género en esta clasificación.

redes de apoyo”, se destaca del Acuerdo los siguientes aportes tan valiosos: (i) Se implementarán medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. (ii) Aplicará normas de persecución penal contra las organizaciones criminales y conductas criminales objeto del Acuerdo. (iii) Observará las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos-DIDH. (iv) Solo el Estado ostentará el monopolio del uso de las armas.

3. Igualmente cumpliendo las medidas ya señaladas se prevé nuevamente la creación de una **“Unidad Especial para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”**. Estará encargada de la investigación, persecución y acusación de las organizaciones responsables de esos homicidios y masacres contra las personas antes enunciadas, cumpliendo los objetivos de la Ley de Justicia y Paz.
4. Algunas de las características de esta Unidad son: (i) No hace parte de la Jurisdicción de Paz. (ii) Tendrá autonomía para decidir líneas de investigación. (iii) Investigará, acumulará casos de su competencia, y de ser procedente presentará imputaciones y acusaciones ante la jurisdicción ordinaria o ante la de Justicia y Paz. (iv) Estará coordinada y articulada con otras unidades de la Fiscalía. (v) Se le exige al Director/a además de ser jurista haber demostrado resultado en la lucha contra el crimen organizado. (vi) La capacidad investigativa debe tener un enfoque territorial, diferencial y de género, priorizando investigaciones de crimen organizado. (vii) Contará con una unidad de especial de policía judicial, especializada en distintas materias, especialmente en organizaciones contra el crimen organizado, que deben tener conocimiento en violencia y justicia de género. (ix) La Unidad tendrá como base de funcionamiento la articulación de un enfoque

investigativo multidimensional que se ocupe de toda la cadena criminal de las organizaciones y conductas, incluyendo las que afecten a niños, niñas y adolescentes. (x) Se garantiza para su funcionamiento recursos y presupuesto suficiente para su funcionamiento. (xi) Trabaja con la Unión Europea para su acompañamiento en aras de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y asegurar la adopción de mejores prácticas internacionales. (xii) Tendrá acceso a toda la información judicial que requiera. (xiii) La integrará un número suficiente de profesionales expertos en distintas ramas del derecho, entre ellos con énfasis en conocimiento en DH y DIH.

5. Como principios orientadores a destacar a esos fines y para este trabajo, tenemos: (i) Respeto, Garantía, Protección y Promoción de los Derechos Humanos. (ii) Fortalecimiento de la administración de Justicia. (iii) Enfoque de género. (iv) Garantías de No Repetición. Estas medidas, de seguro que contribuirán en pro del derecho al plazo razonable, dado que debe haber un ataque a las organizaciones criminales que son las que cometen las graves violaciones de derechos humanos, pero unido a ello, de manera integral, se requiere ese respecto garantía, promoción de los derechos humanos y especialmente, el fortalecimiento de la administración de justicia, pues se deben tomar medidas de todo orden, de acuerdo con la jurisprudencia del TEDH y de la Corte Interamericana, para garantizar una justicia que pueda cumplir con el derecho al plazo razonable, porque la congestión, los problemas logísticos o de otro tipo no justifican su vulneración.

Lo que se echa de menos en este tema es que no se exija como requisito indispensable, que tanto al Director/a, como Fiscales y cuerpo élite de Policía Judicial tengan conocimientos especializados en materia de derechos humanos y DIH, por cuanto debió ser un presupuesto sine qua non para las personas que van a dirigir estas investigaciones, garantizando así que las líneas investigativas cumplan los requisitos propuestos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, eso es, la investigación y sanción de los responsables.

Para fortalecer las garantías ya mencionadas se presentará un proyecto de ley tendiente a someter a la justicia a las organizaciones criminales para las cuales se crean los mecanismos de justicia a que nos hemos referido. Este punto es importante con el fin de que todas las organizaciones se sometan a la justicia y puedan esclarecerse las graves violaciones de derechos humanos que han ejecutado, lográndose así resolver también lo relacionado con el derecho al plazo razonable para víctimas y victimarios.

En el Acuerdo sobre las víctimas del conflicto debemos detenernos, pues ellas igual gozan del derecho a ser oídas y que sus derechos a verdad, justicia, reparación integral, se cumplan a cabalidad.

En los puntos a destacar en este tópico tenemos: (i) El reconocimiento de las víctimas del conflicto y su condición de ciudadanos con derechos. (ii) Satisfacción de los derechos de las víctimas. (iii) La participación de las víctimas. (iv) La reparación de las víctimas. (v) Las garantías de protección y seguridad. (vi) La garantía de no repetición. (vi) Principio de reconciliación y (vii) enfoque de derechos.

Este nuevo Acuerdo es más beneficioso para las víctimas, no solamente reconociendo sus derechos internacionales de verdad, justicia y reparación integral, y destacando la No Repetición, sino que es importante que para la efectividad de todos sus derechos, se les ofrezcan garantías de protección y seguridad, componente de seguridad que va ligado a su vez con el de justicia como pasa a examinarse.

En el tema de víctimas se mantiene la estructura del **“Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición - SIVJRNR”** previsto en el anterior Acuerdo, miremos: (i) “La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición-CEVCNR; (ii) “la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto”; (iii) “La Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas específicas de reparación”.

Otras medidas están dadas en la firma de medidas y protocolos para adelantar los programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE), o restos explosivos de guerra (REG); medidas inmediatas de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto.

La integralidad del “Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, tal como lo predica el Acuerdo, será una medida que contribuirá de manera eficaz a ser realidad los derechos de las víctimas, por tal motivo, será una herramienta valiosa igualmente en pro del derecho al plazo razonable.

El Sistema Integral no tiene muchas variaciones en lo fundamental, sino adiciones que redundan en un mejor desarrollo de las víctimas, que es importante señalar. Estará compuesto por cinco mecanismos y medidas:

1. **“Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y no Repetición”**, tendrá un carácter extra-judicial que buscará conocer la verdad de lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones, promover el reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades de los que participaron directa e indirectamente, explicar a la sociedad la complejidad del conflicto, promover la convivencia para garantizar la no repetición. Será un mecanismo imparcial e independiente, con carácter transitorio (3 años), habrá participación amplia, pluralista y equilibrada de varias voces; tendrá enfoque territorial para promover el proceso de construcción de verdad y garantía de no repetición. Enfoque diferencial y de género, entre otros.
2. **“Unidad Especial para la Búsqueda de las Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto”**. Encargada de recolectar toda la información para establecer el universo de personas desaparecidas. Fortalecer los procesos para identificación de restos humanos. Coordinar y adelantar los procesos de búsqueda, para lo cual le fija algunas pautas de trabajo. Podrá tener acceso a bases de datos y suscribir convenios con organizaciones de víctimas, entre otras funciones.
3. **“La Jurisdicción Especial para la Paz”**. Se determinan los principios básicos y entre ellos destacamos los siguientes: (i) Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, verdad y protección de los derechos. (ii) Adoptar decisiones contra quienes participaron de manera directa e indirecta en el conflicto que supongan graves infracciones al DIH y graves violaciones a los Derechos Humanos. (iii) Se tendrá en cuenta el daño sufrido por las víctimas de esas graves violaciones ya referidas, de ahí que uno de los componentes del sistema integral de justicia sea el de la aplicación de una justicia restaurativa, que atenderá prioritariamente las necesidades y la dignidad de las víctimas y se aplicará con un enfoque integral que garantizará la verdad, la justicia y la no repetición. (iv) Se tendrá en cuenta el enfoque diferencial cuando recaen las violaciones en mujeres, grupos más vulnerables, entre ellos indígenas, población afrodescendiente, grupos étnicamente diferenciados, comunidades religiosas, campesinos, personas más pobres, discapacitados, desplazados, refugiados, niños, niñas, adolescentes, población LGTBI, personas de la tercera edad. (v) Tendrá una duración inicialmente de diez años. (vi) Se reconocen todos los derechos procesales relacionados con el debido proceso. (vii) Tendrá autonomía presupuestal y un componente especial de justicia.

4. Las Medidas de Reparación Integral para la Construcción de la Paz.
5. Garantías de No Repetición.

Se prevén los siguientes presupuestos para acceder a la JEP: Aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

Para la **concesión de Amnistías e Indultos** se establecen varios puntos, entre los que se destacan los siguientes:

1. **La Amnistía está condicionada conforme al DIH** a la finalización de las hostilidades, momento en el cual el Estado colombiano puede otorgar la Amnistía “más amplia posible”.
2. Se reconoce que la Constitución Política prevé este mecanismo de la Amnistía e Indulto para delitos de rebelión y otros políticos conexos.
3. **No concesión de Amnistías para los crímenes de lesa humanidad, ni para otros crímenes definidos en el Estatuto de Roma**, dejando claro en este tópico que ninguno de los Crímenes que establece este instrumento internacional pueden ser objeto de Amnistía, lo que resultaba pertinente para no dejar el Acuerdo a futuras interpretaciones y vacíos jurídicos.
4. Reitera este Acuerdo el deber de contribuir al esclarecimiento de la verdad a pesar de la concesión de uno de estos beneficios.
5. Que el grado de **contribución voluntaria o colectiva de verdad** estará relacionado con el tratamiento a recibir en el componente de justicia. Este punto faltaba que se incluyera y se recoge de la Ley 975 de 2005, de Justicia y Paz.
6. Que los delitos “**no Amnistiables ni Indultables**” deben ser objeto del componente de Justicia del Sistema Integral.
7. **Agentes del Estado**. Aplicará a los que de manera directa e indirecta participaron en el conflicto, incluidos agentes del Estado, a quienes se les asegura un trato diferenciado, incluyéndose en este Acuerdo la posibilidad de que si hay información que comprometa a una persona que fue Presidente de la República, esa información será remitida a la Cámara de Representantes para lo de su competencia.
8. Tendrá **carácter prevalente** sobre las actuaciones penales, administrativas, disciplinarias en relación directa e indirecta con el conflicto armado.

9. Se invoca como punto nuevo la aplicación del artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual es parte Colombia, respecto a que “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía lo más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o se encuentren privadas de la libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”.
10. **Responsabilidad de Mando.** Es importante la precisión respecto de la responsabilidad de mando que tenían los agentes del Estado, en cuanto se señala que en ningún caso la responsabilidad de mando podrá fundarse exclusivamente en el rango, la posición, jerarquía o el ámbito de jurisdicción. Concreta entonces que la responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenir, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes. Se trae a propósito lo previsto por el Estatuto de Roma, artículo 28, que indica lo siguiente: “Se entiende por control efectivo de la respectiva conducta, la posibilidad real que el superior tenía de haber ejercido un control apropiado sobre sus subalternos, en relación con la conducta delictiva”.
11. Establece procedimientos básicos, órganos y sanciones del componente de justicia.
12. **Procedimientos.** Delega a los Magistrados elaborar las normas procesales que regirán los procedimientos, a partir de unos principios fundamentales, para ser presentadas como proyectos de ley ante el Congreso. A partir de ahí esperamos que en esas normas se incluyan los plazos que deben cobijar cada una de las etapas procesales, pero especialmente, como siempre se ha predicado, habrá que tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana relacionada con la complejidad de estos asuntos, a la vez que la normatividad prevea la necesidad de prorrogarlos, siempre y cuando exista necesidad para ello, previa justificación ante un Juez, en este caso que definan quien asumiría dicha competencia.
13. Se reproduce casi en su totalidad las funciones del Tribunal Especial de Paz.
14. Instaure las **Funciones de la Unidad de Investigación y Acusación**, entre las que se resaltan: (i) investigar y de existir mérito para ello acusar ante el Tribunal para la Paz a las personas cuyos casos remitió la Sala de

reconocimiento de verdad y responsabilidad. (ii) Solicitar protección para víctimas, testigos y demás intervinientes. (iii) Solicitud ante la Sala de Primera Instancia del Tribunal de Paz, medidas de aseguramiento y cautelares. (iv) Integrar comisiones de trabajo, acumular casos semejantes, adoptar criterios de selección y descongestión. Esta Unidad estaba integrada en el anterior Acuerdo pero no se habían delimitado sus funciones. Es pertinente a los fines que investigue y acuse, y los Magistrados de Paz serán los que juzguen y profieran la respectiva sentencia, esperándose que el trabajo de la Unidad de Investigación y Acusación, que va a contar con todo un equipo de Fiscales e Investigadores calificados, dé cumplimiento de manera estricta a los plazos procesales, para que también los Magistrados profieran las sentencias y resuelvan los recursos de ley en un plazo razonable.

15. **Acción de tutela.** Implementa la posibilidad de que se pueda ejercer la acción de tutela, o de amparo como es conocida en otras legislaciones, con el fin de tutelar acciones u omisiones que hayan violado o amenacen los derechos fundamentales. Este mecanismo es muy importante como garantía o de la protección del derecho al plazo razonable, que en Colombia es un derecho fundamental, contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política, en el marco de las garantías del debido proceso.
16. **Responsabilidad de mando de las FARC- EP.** Oportuno y necesario que se precisará también la responsabilidad de los mandos de la FARC-EP, porque este tópico no estaba claro en el otro Acuerdo. Determina que tenía que fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta y reitera los mismos requerimientos que para los agentes del Estado, invocando igualmente el artículo 28 del ER, lo que significa que tanto cabecillas de las FARC-EP como altos mandos del ejército serán responsables conforme a los lineamientos de los Instrumentos Internacionales.
17. **Sanciones.** Habrá una pena alternativa de 5 a 8 años, que incluirá sanciones efectivas de la libertad como cárcel y prisión y/o cualquier medida de aseguramiento. En este punto hubo un avance, porque se optó por la misma regulación que existe en la Ley de Justicia y Paz, aunque estaría pendiente que se determinen las causas que pueden generar que se revoque esta pena alternativa. Avanza en este tópico al considerar la posibilidad de que las penas puedan ser controladas cuando no haya restricción de la libertad con medios electrónicos.

18. **No extradición.** Prohibición de extraditar por cualquier conducta antes de la firma del Acuerdo Final a los integrantes de las FARC y personas acusadas de hacer parte de la organización.
19. **Jurisdicción indígena.** Reitera la posibilidad que la Justicia Indígena conocerá de las conductas de su competencia, punto importante al reconocerles su jurisdicción, pero ahí será necesario que se desarrollen mecanismos de fortalecimiento de la misma, de presupuesto, a la misma vez que la justicia ordinaria, lo que no prevé el Acuerdo y que es necesario, que las víctimas de esa jurisdicción o victimarios puedan hacer efectivos todos los derechos relacionados con el Sistema Integral de Justicia señalado para la ordinaria, y entre ellos el derecho al plazo razonable.
20. **El fin de la sanción es garantizar la No Repetición.** Las sanciones a quienes reconozcan la verdad exhaustiva, detallada y plena de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidades, tienen un contenido restaurativo-reparador, pero también restricciones de la libertad de residencia y movimiento necesarias para su ejecución.
21. **Proyectos de Trabajo.** Nuevamente se consagra la posibilidad de que la sanción sea compensada con la ejecución de proyectos de trabajo.
22. **Sanción Alternativa.** En cuanto a la sanción alternativa de 5 a 8 años está contemplada para conductas muy graves cuando se cumplen ciertos requisitos, pero de todas maneras deja dudas que deberán despejarse posteriormente teniendo como referente, entre otras, la Ley de Justicia y Paz y las decisiones de la Corte Constitucional, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Superiores Salas de Justicia de Paz.
23. **Libertad.** Como beneficio para las personas amnistiadas o indultadas, se concederá el derecho a la libertad, pero sujetas a cumplir unos requisitos ante el TEJ.

Otros desarrollos del Acuerdo Final que debemos enfatizar, en cuanto que permiten prevenir y desarrollar el derecho al plazo razonable, son:

1. **Actos tempranos de responsabilidad colectiva.** Se incluye la posibilidad de que después de la firma de paz, de manera colectiva o individual, realicen actos de contrición, donde el Gobierno, las FARC-EP, y diferentes sectores de la sociedad que puedan tener responsabilidad en el conflicto, la reconozcan de manera colectiva por el daño causado y pidan perdón,

asumiendo cada uno lo que le corresponde, como expresión de voluntad de contribuir a un definitivo Nunca Más. También que esos espacios sirvan para la manifestación de un compromiso de contribución con acciones concretas a la reparación integral a las víctimas, a la convivencia, a la no repetición y en general a la construcción del proceso de paz.

- 2. Acciones concretas a la reparación.** Habrá acciones de reparación, entre ellas que los mismos actores que causaron los daños realicen programas para contribuir a la reparación, no solo individual sino colectiva, y se desarrollen los planes de participación y las medidas de rehabilitación, satisfacción y no repetición a favor de las víctimas.
- 3. Prioridades para la implementación normativa.** Estipula que el Acuerdo Final se incorporará conforme a las normas constitucionales, para lo cual se tramitarán de manera urgente y prioritaria varios proyectos normativos conforme al procedimiento establecido en el acto legislativo 1 de 2016 u otro acto si éste ya no está vigente, entre ellos: (i) La ley de Amnistía y Acto Legislativo de incorporación de la Jurisdicción Especial para la Paz, según Acuerdo del 7 de noviembre de 2016. (ii) Ley o acto administrativo para la creación de la Unidad para la Investigación y Desmantelamiento de organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. (iii) Leyes necesarias para la aprobación de las normas procesales que regirán los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz, determinándose que debe observar entre otros principios: “un sistema adversarial,” “respetará el debido proceso” y “el principio de imparcialidad”, “la debida publicidad,” “el principio de contradicción y valoración de la prueba y la defensa”, “la doble instancia”, entre otros. (iv) Acto Legislativo y normas sobre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. (v) Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con cultivos ilícitos, etc.
- 4. Acompañamiento Internacional para fin del conflicto.** Trascendental y necesario, porque tendrá a su cargo el apoyo directo o indirecto de las organizaciones, países y agencias, a través de recursos materiales y/o humanos, al diseño, ejecución y monitoreo de la implementación del Acuerdo, como también ahí se incluirá que el acompañamiento sea en materia de articulación y asistencia judicial para desarrollar estrategias investigativas con el fin de desarticular organizaciones criminales.
- 5. Refrendación.** Implanta la posibilidad que el Acuerdo sea refrendado mediante mecanismos de participación ciudadana, como plebiscito, iniciativa

legislativa, la consulta, el cabildo abierto y otros. Esto constituirá un mecanismo que comprometa a todos los sectores del país, teniendo en cuenta los deberes y derechos señalados en la Carta Política; por ello, no solo el Acuerdo compromete al Gobierno y a las FARC-EP, sino a la sociedad en general, empresarios, la academia, organizaciones de derechos humanos, etc., por esto cada uno desde su posición tiene compromisos y derechos para contribuir a ser realidad una paz duradera y estable. **Es un compromiso y derecho de todos.**

6. **Protocolos.** En el Acuerdo se elaboran varios protocolos necesarios para la implementación, especialmente relacionados con la seguridad de las personas que se someterán, entrega de armas, desminado, etc.
7. **Ley de Amnistía.** Contempla una ley de Amnistía en donde se definen claramente cuáles son los delitos políticos y conexos que puede cobijar.

12.4 CONSIDERACIONES

Establecidos los principales puntos que comprende el Acuerdo Final de Paz en materia de Seguridad” y “Víctimas” y dentro de este último componente todo lo que será el “Tribunal Especial de Paz-TEP”, se observa que se toman medidas preventivas que van a generar un desarrollo efectivo del derecho al plazo razonable, porque si bien, como ya se ha expresado, en muchas de las graves violaciones que se van a investigar por esta jurisdicción, los plazos razonables se han vulnerado por el transcurso del tiempo, y que de por sí ya tendríamos que reconocer la vulneración, no podemos olvidar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ha hecho un desarrollo muy importante del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en donde de manera reiterada se reclama una y otra vez la obligación de los Estados de investigar estas graves violaciones de derechos humanos, a pesar de ese transcurso del tiempo.

Se observan medidas preventivas en favor del derecho al plazo razonable relacionadas con la creación de una jurisdicción especial para investigar estas graves violaciones.

De la misma manera era necesario que para la selección de Jueces y Fiscales haya como exigencia que cuenten con estudios en DH y DIH. Mediante funcionarios expertos en estos temas se descartarán las dificultades y obstáculos

investigativos que la Corte Interamericana observó en muchas sentencias, relacionadas con el mal direccionamiento de los casos con la falta de fundamento de las líneas investigativas. El compromiso es que en la selección para designar estos funcionarios se cumpla con este requisito, pero también que se examinen los perfiles de los candidatos, la interiorización que tienen de los compromisos nacionales e internacionales respecto de estas investigaciones, como también que sean personas que tengan experiencia en este tipo de investigaciones.

Un aspecto importante es el relacionado con la vulnerabilidad de las víctimas, de los funcionarios encargados de estas investigaciones, así que se establece que gocen de la debida protección, dedicándole todo un punto que se desarrollará en pro de la garantía de su seguridad. Es un acierto pues en estas investigaciones, por la entidad de las mismas, y por la calidad de los actores, corren riesgos, que el Acuerdo busca evitar.

Los problemas estructurales que generan vulneración al derecho al plazo razonable se tratan de obviar, como son: (i) Falta de personal humano, (ii) logístico, (iii) presupuestal (iv) capacitación, entre otras cosas, también se busca corregir, dotando no solo a la JEP de personal, presupuesto propio, sino que también se crean otras Unidades investigativas que van a fortalecer al ente investigador, en este caso la Fiscalía, mediante la Unidad para dismantelar organizaciones criminales que atentan contra líderes/as, defensores/as de derechos humanos, la unidad de búsqueda de personas, que no solo tendrán presupuesto para funcionar, sino que se crean cargos de funcionarios, dotados también de capacidades intelectuales y competencias para esos fines, para los que igual se solicita esa capacitación en DH y DIH, la interiorización de los compromisos nacionales e internacionales para adelantar estas investigaciones y que tengan experiencia en este tipo de investigaciones.

La creación de cuerpos de élite de Policía Judicial para conformar cada una de estas unidades es otra de las medidas que se hacían necesarias para realizar estas investigaciones en un plazo razonable, principalmente que sean expertos en temas de DH y DIH, pues las falencias sobre este tópico han generado retrasos e impunidad en las investigaciones. Se considera fundamental que haya unidades especiales para estas investigaciones, porque por la complejidad de los delitos, de los actores, especialmente cuando hay agentes del Estado, hay muchas dificultades para recoger los EMP, generándose por tanto dilaciones e iniciándose una investigación desde el principio con falencias estructurales.

Pues bien, el objetivo de la JEP, dada su competencia para conocer graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al DIH que se han generado en un conflicto armado interno, es conocer la verdad, la justicia, lograr una reparación integral y la no repetición de los hechos, teniendo la posibilidad de acceder a bases de datos, información de Estado, etc., tal como lo ha reclamado la Corte Interamericana, en este tipo de investigaciones.

También se determina que los Magistrados tendrán la misión de hacer el proyecto de las normas procesales que compondrán esta JEP, por lo que se espera que ahí se determinen plazos para todas las etapas del proceso, los que a su vez deberán tener en cuenta la complejidad de los asuntos de acuerdo a las circunstancias de hecho y de derecho que se han especificado en este estudio, teniendo en cuenta las sentencias de la CIDH, que es la vinculante para el Estado colombiano.

No obstante lo anterior, tendrá que admitirse la posibilidad de una prórroga de esos plazos de avizorarse que por la misma complejidad de algunos casos de “extrema complejidad” sea imposible el cumplimiento estricto de los mismos.

El Acuerdo tiene en cuenta la normatividad internacional que impide aplicar amnistías e indultos para los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, así que por ello se ha reconocido la imprescriptibilidad de estos crímenes y para más claridad se mencionan cada uno de ellos.

En este punto se siguen las orientaciones de la Corte Interamericana, que se esfuerza en luchar para que los Estados no hagan uso de estas figuras en graves violaciones de derechos humanos, al punto que considera que las leyes que así se expiden van en contravía con la CADH, exigiendo que los funcionarios judiciales realicen el control de convencionalidad, para que no sean aplicadas.

El Acuerdo establece que la pena para esas graves violaciones de derechos humanos será de 5 a 8 años, que será una pena alternativa, que se fijará teniendo en cuenta el grado de colaboración en el esclarecimiento de la verdad, reparación, etc. Estamos de acuerdo con esa pena a pesar de la gravedad y cantidad de los crímenes cometidos, primero porque se trata de un proceso de transición en busca de la paz. Segundo por la necesidad que haya verdad, justicia, reparación integral y no repetición. Tercero porque el Acuerdo de Paz busca la terminación de un conflicto armado interno de más de cincuenta años, en donde se probó la ineficacia del Estado en combatir a la organización FARC-EP, constituyendo en este momento una opción para resolver no solo el conflicto armado interno, sino que las víctimas de estos crímenes hagan efectivos sus derechos.

Así las cosas, se trata por decirlo de alguna forma de una sanción que debe operar como consecuencia de la vulneración del derecho al plazo razonable, **una atenuante** para compensar la lesión al derecho al plazo razonable para los actores, quienes también debían ser investigados, juzgados y sancionados en un plazo razonable.

Esta **atenuante** de ninguna manera puede constituir una vulneración a los derechos de las víctimas, porque el hecho de que no se establezcan penas ordinarias que superen los veinte años de prisión, sino que oscilen entre cinco y ocho años, de por sí no significa que se hagan nugatorios sus derechos, porque ellos van encaminados a que en este nuevo proceso de transición de la justicia para este grupo de las FARC-EP, las víctimas conozcan toda la verdad, que haya justicia, una reparación integral que correrá a cargo de esa organización o del Estado, la garantía de No Repetición, e incluida en ella tendrá la asistencia psico- social, de rehabilitación y satisfacción que reclama. Por tanto, la pena o sanción, como medida rehabilitadora que opera en contra de los actores del delito, hace parte del derecho de justicia, de modo que el Acuerdo lo que incluye es una respuesta integral a la efectividad de sus derechos conculcados.

La lesión al derecho al plazo razonable debe tener unas sanciones para el Estado, y la propuesta es que en casos de graves violaciones de derechos humanos, ante el imperativo de investigarse y sancionarse a los actores, la compensación que deben recibir por esa vulneración al derecho al plazo razonable, debe ser la **atenuante de la pena**, no otra opción se advierte en este trabajo.

El Acuerdo determina que la Jurisdicción Indígena conocerá los casos de su competencia, pero deja a esta jurisdicción totalmente desprotegida, en la medida que no determina de qué manera el Gobierno y las FARC-EP van a contribuir a que ello sea una realidad. Tendría que dotarla de un presupuesto para que implemente mecanismos para que pueda funcionar, que podrían en algunos casos ser similares a los previstos para la JEP. Tampoco menciona que vaya a ser acompañada por la comunidad internacional, ni se indica si tendrá asistencia judicial para poder adelantar las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas en su territorio. No puede desconocerse que tienen autonomía con sus autoridades para resolver sus conflictos según sus normas y procedimientos en cada comunidad, pero no significa que puedan ser las grandes olvidadas, porque a pesar de que tiene que existir una armonización entre las dos jurisdicciones, hoy en día vemos que la armonización no está acompañada de los requisitos necesarios que brinden a su justicia un acompañamiento en presupuestos, así que por ello, si en la ordinaria los problemas estructurales son

graves, en esta jurisdicción ni que decir. En consecuencia, este punto deberá tenerse muy en cuenta, de lo contrario, es muy poco lo que esta jurisdicción podrá avanzar a favor de los derechos de las víctimas de estas graves violaciones que se cometieron en sus territorios, porque además de la verdad, debe revisarse cómo se fortalece a esta jurisdicción en las medidas que tomarán respecto a la sanción y reparación⁴⁸⁸.

En definitiva, deberá tenerse en cuenta a esta Jurisdicción Indígena, porque de no ser así, desde ya se advierte la discriminación resultante, no se cumpliría con el enfoque diferencial y territorial que predica el Acuerdo, lo que no sería justo, pues el pueblo indígena colombiano en las diferentes partes del territorio es uno de los más afectados por este conflicto armado interno, ya que en sus territorios se han presentado graves violaciones a los derechos humanos, y son los que además han colocado el número más grande de niños reclutados por la guerrilla de las FARC, especialmente en el departamento del Cauca.

⁴⁸⁸ “En la providencia T-552 de 2003, la Corte Constitucional abordó una nueva dimensión de la jurisdicción especial indígena, relacionada con el papel de las víctimas en el proceso penal y el alcance del debido proceso del acusado. A partir de este fallo se evidencia también que la jurisdicción especial indígena y el fuero indígena tienen una profunda relación de complementariedad pero no poseen el mismo alcance y significado. El fuero es por una parte un derecho subjetivo que tiene como finalidad proteger la conciencia étnica del individuo y garantizar la vigencia de un derecho penal culpabilista; y por otra, una garantía institucional para las comunidades indígenas en tanto protege la diversidad cultural y valorativa, y permite el ejercicio de su autonomía jurisdiccional. La jurisdicción especial indígena, entretanto, es un derecho autonómico de las comunidades indígenas de carácter fundamental; para su ejercicio deben atenderse los criterios que delimitan la competencia de las autoridades tradicionales de acuerdo con las jurisprudencia constitucional. Entre esos elementos, el fuero indígena ocupa un papel de especial relevancia, aunque no es el único factor que determina la competencia de la jurisdicción indígena, puesto que esta se define (también) en función de autoridades tradicionales, sistemas de derecho propio, y procedimientos conocidos y aceptados por la comunidad. Es decir, en torno a una institucionalidad. Esa institucionalidad es un presupuesto esencial para la eficacia del debido proceso –límite infranqueable para la autonomía de los pueblos originarios- y para la eficacia de los derechos de las víctimas. Este elemento permite también conservar la armonía dentro de la comunidad, pues de la aceptación social y efectiva aplicación de las sanciones internas, y de la idoneidad de las medidas de protección y reparación de las víctimas depende que se restaure el equilibrio interno de la comunidad y que no se produzcan venganzas internas entre sus miembros o familias”. [...] “Los derechos de las víctimas deben ser protegidos en la jurisdicción indígena, pues hacen parte también del debido proceso, y porque así lo disponen distintos compromisos constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos. Estos derechos comprenden la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es importante señalar, sin embargo, que estos derechos deben ser entendidos también en “clave” de diversidad cultural. Eventualmente las sanciones de una comunidad pueden resultar inocuas para la sociedad mayoritaria, acostumbrada a la pena de prisión para todas las faltas graves. Sin embargo, la pena de prisión puede ser incompatible con los procesos de armonización que utilizan algunas comunidades indígenas, especialmente si esta no permite la armonización de las relaciones entre familias, aspecto que suele ser uno de los principales objetivos de la justicia indígena”. Sentencia 463/14 Corte Constitucional, M.P. María Victoria Calle Correa.

12.5 CONCLUSIONES

1. El Acuerdo Final constituye el pilar fundamental a través del cual se permitirá en lo sucesivo un desarrollo integral del DIHH, en la medida que si bien esa gama de derechos reconocidos en el documento final están consagrados en la Carta Política, ya sea de manera directa o por hacer parte del bloque de constitucionalidad, es una realidad que no todos los habitantes del país tienen la posibilidad de gozarlos, de ejercerlos, de reclamarlos, de tener protección, sino que un número no identificado de personas han sido víctimas de la negación absoluta de sus derechos, de la limitación, de la conculcación. Por consiguiente, el Acuerdo busca la inclusión de todas las personas colombianas, niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad, indígenas, afrodescendientes, discapacitados, personas de la población LGTBI, desplazados, etc., a través de medidas que conducirán a la terminación del conflicto armado interno que por más de cincuenta años vivió el país, y que por tal motivo una parte de la población sufrió las consecuencias nefastas de violación de sus derechos fundamentales.
2. Esa inclusión de todos los habitantes colombianos tiene como finalidad la consolidación de una paz estable y duradera, por ello no solo se reglamenta todo lo concerniente con las medidas que se establecerán a favor de las víctimas de esas graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, sino que el Acuerdo reglamenta a corto y largo plazo un desarrollo integral de los derechos políticos, sociales, culturales, ambientales, colectivos.
3. Visibiliza los problemas estructurales de la administración de justicia que busca corregir mediante dos componentes muy estructurados y complejos como son: (i) Un Sistema de “Garantías de seguridad y lucha contra organizaciones y conductas responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” y (ii) “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición - SIVJRNR”.

4. Cada uno de estos componentes aporta valiosos elementos en pro de la prevención del derecho al plazo razonable como son:
- a. Crea inicialmente la JEP solo para conocer graves violaciones de DH e infracciones al DIH, lo que es totalmente necesario para lograr el esclarecimiento y sanción de los responsables.
 - b. El tema de seguridad para las víctimas, testigos, Magistrados, Fiscales, Investigadores es necesario que sea una realidad en este tipo de investigaciones, y a través del Acuerdo se le apuesta a ello.
 - c. Dota a esta justicia de presupuesto, personal y logística para poder funcionar.
 - d. Reclama para sus funcionarios un proceso de selección, que esperamos cumpla la rigurosidad del caso en cuanto como lo predica el Acuerdo deben tener conocimientos en materia de DH y DIH; si esto no se verifica estaríamos incurriendo en falencias en perjuicio de víctimas y victimarios.
 - e. En la selección tendrá que tenerse en cuenta que no es suficiente que el personal tenga conocimientos en DH y DIH, sino que será decisivo contar con el perfil, o sea, la voluntad y entrega en el cumplimiento de las tareas impuestas; por ello, tendrá que contarse con un personal muy humanizado, que tenga muy interiorizados los compromisos nacionales e internacionales que asume y que especialmente tenga experiencia en este tipo de investigaciones.
 - f. Es enormemente importante que para robustecer la administración de justicia tener en cuenta que las graves violaciones de DH no solo las han generado las FARC-EP sino también otras organizaciones criminales; por ello se crean unidades especializadas en varias materias encargadas de la investigación y juzgamiento, que se complementen y trabajen armónicamente con todo el componente de JEP.
 - g. Crea cuerpos élites de policía judicial para acompañar a cada una de las unidades especiales de investigación
 - h. Importante el acompañamiento internacional para ayudar a los funcionarios y personal en conocer nuevas metodologías y técnicas de trabajo, siendo importante que se aproveche esta oportunidad para que haya retroalimentación constante y permanente en temas de DH y DIH.

- i. El Acuerdo establece el número de Magistrados y Fiscales que componen la JEP, en cada uno de sus componentes, pero con relación a las nuevas unidades que crea para la Fiscalía no prevé que surge la necesidad de intensificar el número de Jueces y los Asistentes que esto demandará, si como se dice en el Acuerdo es un sistema adversarial.
 - j. La Jurisdicción Indígena en este componente solo aparece en el papel, pero no se le dota y robustece como a la JEP para que pueda ejercerse, especialmente porque sus integrantes han sufrido graves violaciones a los DH e infracciones al DIH.
 - k. Importante los enfoques de género, diferencial, que deben tener estas investigaciones para su efectividad.
5. En cuanto a lo relacionado ya directamente con la violación del derecho al plazo razonable de estas graves violaciones de DH y DIH que han sufrido las víctimas, debemos señalar que el Acuerdo pretende en su integralidad restablecer los derechos a verdad, justicia, reparación integral y la garantía de no repetición de hacerse realidad todos los compromisos asumidos, destacando que el hecho de reconocer que para los perpetradores de esas graves violaciones la pena pueda ser alternativa, comprendida entre cinco y máximo ocho años, sin tener en cuenta el número, la cantidad y gravedad de las conductas criminales, se compadece con los mismos beneficios que la Ley de Justicia y Paz (Ley 975/2005 expedida en el marco de un proceso transicional, con la finalidad de lograr la paz) impuso a los paramilitares, y cuya constitucionalidad fue aprobada por la Corte Constitucional en la sentencia C- 370 de 2006, pero bajo ciertos condicionamientos y requisitos, pasando igualmente esta ley por el filtro de la Comisión Interamericana, quien encontró muy ajustados los reparos y exigencias que la Corte Constitucional elevó.
6. Por ese motivo, señalamos que la pena es proporcional y debe ser aplicada a los ex-miembros de las FARC-EP, siempre condicionada a unos requisitos y presupuestos que ahora tendrán que demandarse igualmente para estas personas en la ley que se firme para tal fin.
7. Esta pena alternativa de cinco a ocho años viene a ser, conforme a lo planteado en este estudio, una forma de contraprestación que deben recibir los que resultaren condenados, como forma de reparación a cargo del Estado como consecuencia de su inoperatividad, por no haber cumplido con las obligaciones internacionales impuestas por el PIDCP y la CADH,

relacionadas con investigar, acusar y sancionar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos en un plazo razonable. Por ello concluimos que es una **atenuante**, que tiene que operar para restablecer el derecho conculcado, ya que en este evento no puede hablarse de una reparación económica a cargo del Estado.

8. El Acuerdo habla de plazos razonables para llevar a cabo estas investigaciones, pero a pesar de ello ya es claro que en la mayoría de los casos el plazo razonable está más que vencido. No obstante ello, es necesario que para iniciar y concluir las investigaciones en todas sus etapas se establezcan esos plazos, quedando entonces la tarea a los Magistrados de la JEP, a quienes el Acuerdo les delega la facultad de elaborar los proyectos de procedimiento, partiendo de unos principios básicos, como garantía en pro del derecho al plazo razonable, atendiendo para ello a la jurisprudencia de la CIDH, que es muy rica en fijar directrices y lineamientos en estas investigaciones de graves violaciones de DH.
9. No podemos dejar de resaltar, porque es un imperativo, que en estas investigaciones, siguiendo los lineamientos de la CIDH, tendrá que partirse del contexto de la organización/es criminales a investigar, para establecer las líneas investigativas que lleven a la sanción de los responsables. Por este motivo se propone que esta circunstancia se contemple en los proyectos de ley que se presenten para establecer el procedimiento.
10. De igual forma resaltar, el proyecto a presentar por los Magistrados tendrá que tener en cuenta la complejidad de estas investigaciones y por ello tendrán que estar presentes las circunstancias de hecho y de derecho previstas por la CIDH para establecer los plazos razonables del procedimiento, como también la posibilidad de prorrogar esos plazos, si existe la necesidad de preverse para asuntos de “complejidad extrema”.
11. El Acuerdo se constituye como una garantía en pro del plazo razonable de las investigaciones de violaciones de DH y DIH en la medida en que avanza reconociendo no solo procedimientos especiales de investigación, fortalecimiento de la administración de justicia, sino que igualmente reclama tener en cuenta los Instrumentos Internacionales de DH y DIH, por ello descarta de plano la concesión de Amnistías e Indultos; determina cuáles delitos pueden ser objeto de amnistía; clarifica todo lo concerniente con la responsabilidad de mando, que puede ofrecer no pocas dificultades; e impone a los Magistrados, Fiscales, policía judicial retos que deben cumplir.

12. Finalmente aplaudir que se firme este Acuerdo porque constituye una especie de Instrumento Adicional a la Carta Política, para que conformen un solo cuerpo, en cuanto se complementan en el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales del pueblo colombiano.
13. Esperamos que en el futuro el derecho al plazo razonable solo tengamos que aplicarlo para investigaciones de violaciones de derechos humanos, pero nunca más para graves violaciones de Derechos Humanos ni graves infracciones al DIH.

CONCLUSIONES DEL TRABAJO

1. A partir del tema en cuestión podemos evidenciar que el derecho a ser oído en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas o injustificadas no se ha logrado definir por el TEDH ni por la CIDH.
2. El TEDH reconoce la dificultad del concepto, desarrollando unos criterios que le permiten sentar las bases para definir la razonabilidad o no del derecho al plazo razonable. A igual conclusión llegó la CIDH copiando los criterios que el TEDH tomó en esta materia.
3. Es por tanto un concepto indeterminado para ambos Tribunales, porque ambos sustentaron la imposibilidad de definirlo, al indicar “que no se puede señalar en días, meses, semanas, años”; de ahí que el TEDH comienza desarrollando los criterios de complejidad, actividad del interesado, comportamiento de las autoridades, análisis global, así como el interés que está en juego para el interesado.
4. La CIDH parte de estos parámetros, a los cuales agregará otros como el criterio de efectividad de las investigaciones y la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, que sirven para analizar si se ha violado o no el derecho al plazo razonable. Ello implica que en la praxis este derecho esté sometido a la subjetividad del funcionario judicial encargado de establecer su razonabilidad o no, lo que lo torna en incierto, inseguro, al ser examinado en cada caso, lo que se conoce en la práctica como la doctrina del no plazo.
5. A partir de este trabajo nos atrevemos a definirlo como “*el plazo establecido por cada Estado para resolver un asunto de naturaleza civil, laboral, penal, administrativo, etc., como garantía de cumplimiento del derecho al plazo razonable dentro de la respectiva actuación judicial*”. De igual forma, tras

revisar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, podría definirse el derecho al plazo razonable como *“la adopción de una sentencia definitiva o en firme contra el responsable (s) de las violaciones de derechos humanos, para de esta forma posibilitar los derechos de las víctimas y/o familiares, de conocer la verdad de lo que sucedió, sanción a los responsables, efectivizando el derecho señalado en la Convención Americana, de ser oídas y que en un plazo adecuado, justo, de conformidad con las complejidades del caso, las autoridades lo hayan resuelto de manera definitiva, lo que presupone por tanto la posibilidad de acceder a la justicia e interponer los recursos de ley”*.

6. Aplica para toda clase de actuaciones civiles, penales, laborales, administrativas, pero existiendo claras diferencias con respecto al proceso penal, dada su connotación e intereses en juego. Las otras se caracterizan por ser una justicia “rogada o de partes”, pero donde igualmente debe prevalecer el derecho al plazo razonable, en aras de la efectividad de la justicia.
7. Es un derecho a favor del indiciado, imputado o acusado, pero también reconocido para las víctimas, para la efectividad de sus derechos de verdad, justicia y reparación integral. Este derecho hace parte de las garantías establecidas en el debido proceso.
8. El TEDH no se detiene a examinar si existen plazos procesales como base para sustentar la vulneración del plazo derecho al razonable. En algunas sentencias lo ha realizado la CIDH, pero no ha sido enfática, contundente en reclamar su aplicación, ni parte de estos plazos como criterio de evaluación sobre la vulneración o no del derecho al plazo razonable.
9. No exigen ninguno de los dos Tribunales la reglamentación de los plazos procesales como una medida que permita partir de ese presupuesto para estimar si hubo dilación o vulneración de ese plazo razonable por parte de las autoridades o por el interesado, pese a que la CIDH es más decidida en

imponerle a los Estados Partes obligaciones, partiendo para ello de las exigencias del artículo 1.1 y 2 de la CADH.

10. Por la connotación del proceso penal, en especial por la afectación que genera cuando una persona está privada de la libertad, existe un mayor reclamo de realizar las investigaciones de manera razonable, por lo cual se reconoce por ambos Tribunales como medida excepcional mantener a una persona privada de la libertad. En el TEDH se examinan contenidos constitucionales como la necesidad de imponer la medida y así mismo la justificación para mantenerla en el tiempo. La CIDH tiene en cuenta los parámetros de necesidad para imponerla. El TEDH no tiene como base para examinar su razonabilidad los términos previstos por la ley, así que cuando no existen no echa de menos esa circunstancia, ni menos se pide que sean reglamentados para seguridad y confianza del acusado. La CIDH por el contrario tiene en cuenta dicha circunstancia, aunque no como factor determinante para considerar la vulneración del derecho, porque al igual que el TEDH reclama examinar la necesidad y proporcionalidad de mantener la medida cautelar hasta que se dicte sentencia.
11. En esta nueva perspectiva, por un lado en el proceso penal se distinguen por el TEDH y la CIDH dos plazos, uno el relacionado con la libertad provisional, más estricto en cuanto a su cumplimiento por el bien que está en juego (la libertad), y otro el plazo relacionado con la duración de todo el procedimiento. Estos plazos no necesariamente deben coincidir para ambos Tribunales.
12. El criterio de complejidad que ambos han desarrollado, relacionado con cuestiones de hecho o de derecho, es muy valioso, muy enriquecedor para cada Estado, y debe ser tenido como una pauta orientadora a la hora de definir los plazos en cada legislación.
13. En efecto, en el desarrollo jurisprudencial tanto del TEDH y CIDH se llega a la conclusión, y en ello se comparte la posición de los dos Tribunales, acerca de que la preocupación de los Estados Partes no debe ser la de resolver los asuntos aceleradamente; ahí debe regir un test de proporcionalidad, que se

puede resolver en un procedimiento para los delitos menores, que nunca podrán resolverse en el plazo que toma una investigación compleja, y nos remitimos nuevamente a los valiosos desarrollos jurisprudenciales de estos tribunales. Cada Estado Parte tiene que buscar que las autoridades utilicen el plazo estrictamente necesario, pero también pidiendo su reglamentación, conforme a los criterios de complejidad estudiados, para que el centro de atención del derecho al plazo razonable se enfoque más en la eficacia o recta administración de justicia, donde resultan favorecidos los intereses de los sujetos procesales, víctima y victimario.

14. Evidenciado que el interesado puede entorpecer los plazos procesales o dilatar la actuación, se busca rescatar los lineamientos trazados por ambos Tribunales, pues son importantes a tener en cuenta a la hora de efectivizar el derecho. Las legislaciones tienen que hacer valer estas exigencias, requiriendo de las autoridades que hagan uso de las facultades que la ley concede para impedir el comportamiento de los sujetos procesales que tienden a dilatar los plazos judiciales y a obstruir el normal desarrollo de la investigación. En el caso de la CIDH específicamente exige que las autoridades realicen en un plazo razonable la respectiva investigación en donde resulten funcionarios acusados de irregularidades en el proceso, y tras un debido proceso les aplique las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables.
15. Aportan estos Tribunales excelentes contribuciones a tener en cuenta por las autoridades judiciales que, de aplicarse rigurosamente o estrictamente, garantizarían el derecho a un plazo razonable, pues en su jurisprudencia se develan cantidades de fallas imputables a ellos, relacionadas con la falta de diligencia, eficacia, direccionamiento o negligencia. Por tanto, tendrán que revisarse los métodos de ingreso del personal, sus competencias, habilidades, destrezas, perfil, pero sobre todo si gozan de calidades humanas para realizar este trabajo, y además si tienen conocimientos de las obligaciones y deberes que les imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos. En el caso colombiano poca atención se presta a estas situaciones en los concursos judiciales que se han presentado en la judicatura, como tampoco existen mayores capacitaciones en este tema, a pesar de los requerimientos de la CIDH.

16. También la jurisprudencia de estos organismos debe ser obligatoriamente atendida por los Estados para resolver los problemas estructurales relacionados con falta de jueces, peritos, investigadores, medios logísticos, etc., pues estas fallas se traducen en una falta de prevención y garantía del derecho al plazo razonable. Igualmente, y como elemento importante en el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos, como lo ha reclamado la CIDH, hay que facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas para evitar el entorpecimiento del proceso. No se previene la vulneración tomando medidas adecuadas, y hay una ausencia de compromiso de las obligaciones internacionales adquiridas al ratificar el respectivo convenio.
17. También este estudio rescata otros aportes del TEDH y del CIDH, relacionados con medidas que permitan simplificar los procedimientos, y hacerlos más expeditos. Se desarrolla el criterio de prioridad, importante herramienta, especialmente en materia penal, pero que tiene importancia en otras materias civiles, laborales o administrativas, conforme a los intereses que están en juego para el interesado. Ambos Tribunales tienen en cuenta también el contexto en que se desarrollan los hechos como factor de complejidad, pero en el caso de la CIDH este factor lo desarrolla de manera amplia, haciendo valiosos aportes en torno a su aplicación y desarrollo en las investigaciones de violaciones de derechos humanos y de graves violaciones de derechos humanos, constituyéndose en una herramienta que posibilita la efectividad del derecho en un plazo razonable, hoy en día manejada y desarrollada por la Fiscalía General de Nación, a través de la Directiva 01 de 2012.
18. Igualmente son muy rescatables todos los parámetros que la CIDH reclama aplicar cuando se avoca una investigación relacionada con la aplicación de protocolos internacionales cuando comprometan violaciones graves de derechos humanos, como el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de las Naciones Unidas; el protocolo de Estambul; las directrices a tener en cuenta en crímenes de género, pues la investigación debe comprender esta perspectiva, además de pedir que sean asumidas por personal capacitado

en esta materia, unido al hecho que el Estado Parte debe cumplir las obligaciones derivadas en la Convención de Belém do Pará.

19. Es trascendental el avance que ha realizado en el estudio de crímenes internacionales, como el de lesa humanidad; muchos casos aislados que han llegado a su conocimiento los ha caracterizado así, atendiendo el contexto en que se desarrollaron los hechos.
20. Como propuesta de trabajo se plantean varios tópicos que se desarrollan en estas conclusiones. Una de ellas va encaminada a que cada Estado Parte establezca plazos procesales en todas las etapas de los diferentes procedimientos, hablamos especialmente del colombiano. Se propone como primera medida que se implemente la regulación de plazos procesales para todas las etapas del proceso, reclamándose en forma urgente para la etapa del juicio. Para ello deberá atender cuidadosamente el legislador a la jurisprudencia de la CIDH, y habrá que clasificar los procedimientos, planteando que existan tres clases de procedimientos: (i) procedimiento para causas menores o de mínima trascendencia social, (ii) procedimiento para investigaciones de violaciones de derechos humanos (iii) procedimiento para investigaciones de graves violaciones de derechos humanos.
21. En esos procedimientos se establecerán plazos muy cortos y de perentorio cumplimiento para casos menores o de poca relevancia o trascendencia social. En caso de violaciones de derechos humanos y graves violaciones de derechos humanos, los dos procedimientos propuestos deberán consagrar plazos que atiendan la jurisprudencia de la CIDH, que es la vinculante, especialmente en el tópico de la complejidad, pero con la posibilidad de ser ampliados o prorrogados, fijándose un límite para ello, cuando el Fiscal demuestre ante el JCG la necesidad o justifique su ampliación o prórroga. Así las cosas, el plazo razonable en una investigación penal no significa que en todos los casos sea corto o muy rápido, pues ello está condicionado a la clase de delito, naturaleza, número de indiciados, etc., o factores que condicionan su complejidad como han indicado los tribunales internacionales.

22. En este contexto, cuando ambos Tribunales han detectado la violación del derecho al plazo razonable se ha impuesto la resolución inmediata o urgente del proceso, considerándose de por sí como parte de la reparación, además de la posibilidad de reparación económica, evidenciándose siempre la preocupación especialmente de la CIDH cuando esta violación afecta violaciones de derechos humanos o graves violaciones de derechos humanos, pues además de reclamar la resolución definitiva del asunto como lo hace su homóloga, se detiene especialmente a considerar los intereses de las víctimas y a rechazar los instrumentos jurídicos que en un momento dado impiden la efectividad del derecho. Ante ello, muy importante valorar sus consideraciones: (i) Las prohibiciones que fija en torno a las amnistías, indultos o prescripciones. (ii) El desarrollo de otros criterios relacionados con el concepto de cosa juzgada fraudulenta. (iii) La obligación de colaboración entre los Estados Partes cuando se presentan casos de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas la de aplicar la extradición no obstante no exista tratado, dejando claro que la soberanía de los Estados no es absoluta en este tipo de criminalidad. (iv) La prohibición de prescripción cuando el caso está sometido a la revisión de un organismo internacional. (v) La no aplicabilidad del fuero militar ni la posibilidad de que estas conductas sean investigadas por la justicia militar, ni que puedan existir secretos de Estado para acceder a documentos y otros EMP que se requieran en este tipo de investigaciones. (vi) Control convencional, obligando que cuando se expiden leyes que vayan en contra de la Convención los funcionarios judiciales no las puedan aplicar. (vii) La aplicación de la jurisdicción universal. (ix) La relativización del “*el principio ne bis in ídem*”. Esta jurisprudencia ha enriquecido la actividad judicial en Colombia y deben quedar señalados o consagrados en la ley de procedimiento penal, ya que en la práctica muchos funcionarios la acogen, pero otros todavía no la conocen.

23. Frente al tema relacionado con la vulneración del derecho se tuvo en cuenta la jurisprudencia del TEDH y de la CIDH, pero también se pudo establecer que se plantean otras soluciones relacionadas con la *atenuante de la pena, el indulto, preclusión, sobreseimiento, prescripción, nulidad, decisión definitiva y reparación*.

24. De las propuestas se plantea principalmente la prevención de la lesión, pero cuando ya se ha producido, dado que no es posible una reparación in natura, se plantea lo siguiente: (i) Que la atenuante de la pena es una fórmula de reparación en caso de violaciones de derechos humanos o de graves violaciones de derechos humanos, por lo cual debería ser reglamentada en el código penal como una causal que atenúa la pena, planteándose que el Código Penal colombiano adicione el numeral 11 del artículo 55, relacionado con las circunstancias de menor punibilidad, en donde prevea: 11. La reducción de la pena a quien sufrió violación del derecho a ser oído en un plazo razonable en casos de violaciones de derechos humanos o graves violaciones de derechos humanos por causas no atribuibles a él. El Juez tendrá en cuenta los criterios establecidos en el artículo 60, para determinar esta reducción. (ii) Cuando la lesión se presente en estos eventos y la decisión final sea una sentencia absolutoria se impone para el Estado la indemnización reforzada para el acusado y para las víctimas, y la obligación de continuar la investigación de los verdaderos responsables para efectivizar los derechos de las víctimas de verdad, justicia, porque la indemnización tendrá que correr por parte del Estado como una sanción a la vulneración del derecho. (iii) En casos que se relacionen con asuntos de poca trascendencia jurídica, que no tengan la calidad de violaciones de derechos humanos, la reparación hacia el inculpado o acusado debe ser la terminación del proceso, en la investigación, acusación o juicio, como sanción al Estado por no cumplir con la obligación de garantizar el derecho al plazo razonable. (iv) En estos casos, la contraprestación a cargo del Estado tendrá que ser la reparación económica a favor de la víctima (s).

25. El indulto no constituye una solución para crímenes de violaciones de derechos humanos o graves violaciones de derechos humanos, es prohibido por el DIDH y la jurisprudencia de la CIDH. La prescripción tampoco es una propuesta para este tipo de criminalidad, ni para delitos menores, porque sujeta a los afectados a esperar que se cumpla el término máximo señalado en la ley.

26. En torno al derecho al plazo razonable cuando una persona está privada de la libertad, la propuesta va dirigida a que se establezca el plazo que una persona debe estar privada de la libertad en instrucción y juicio, que deben

cumplirse de manera estricta, sin posibilidad de ampliarlos, pero para establecerlos se tendrá en cuenta el criterio de complejidad desarrollado por los tribunales, aunque esta medida restrictiva debe estar reservada para casos de violaciones de derechos humanos y/o cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos, y/o delitos graves que requieren la medida cautelar. En caso de violación del plazo razonable por prolongación indebida de la libertad debe inmediatamente restablecerse este derecho y que exista una reparación económica a cargo del Estado. En este punto se reconoce el avance que el Congreso de Colombia hizo, tras el requerimiento de la Corte Constitucional, mediante la expedición de la ley 1760 de 2015.

27. Finalmente señalar que debe hacerse un reconocimiento a los avances que en materia del derecho al plazo razonable ha realizado la Corte Constitucional colombiana, especialmente en la sentencia C- 390 de 2014, al considerar que la no estipulación de los plazos por el constituyente y la indefinición de términos en materia de libertad personal del procesado, resulta inconstitucional. Le apuntamos a que este mismo concepto sea aplicado a la indefinición de los términos en todas las etapas del proceso penal.

BIBLIOGRAFIA

ACOSTA ALVARADO, Paola Andrea. *El derecho de acceso a la justicia en la jurisprudencia interamericana.* Instituto de estudios constitucionales. Madrid. 2007.

AGUILAR CAVALLO, Gonzalo y AGUILERA PORTALES, Rafael Enrique. Coordinador. *Nuevas Perspectivas De Los Derechos Humanos.* Universidad Nacional Autónoma de México. México. 2011.

AGUADO RENEDO, C. *Problemas constitucionales del ejercicio de la potestad de gracia.* Ed. Civitas. Madrid. 2001. Citado por TUR AUSINA, Rosario. Garantía De Derechos Y Jurisdicción Constitucional. *Efectividad Del Amparo Tras La Sentencia Estimatoria.* Ed. Tirant. Valencia.

AMBOS Kai “y otros”. *Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y del derecho penal internacional.* Tomo II Ed. Konrad. Montevideo. 2011.

ARNALDO BRUERA, Hugo y BRUERA, Matilde Marina. *Derecho Penal y Garantías Individuales.* Ed. Juris. Argentina. 1997.

ARROYO ZAPATERO, Luis y NIETO MARTÍN, Adán. *El Principio de ne bis in ídem en el Derecho Penal europeo e internacional.* Coordinadores: Ediciones de la Universidad Castilla - la Mancha. Castilla. 2007.

ASÚA, BATARRITA. A. “Causas de exclusión o restricción de la punibilidad de fundamento constitucional”, *En el Nuevo Código Penal: Presupuestos y*

Fundamentos. Libro homenaje al profesor Dr. D. profesor. Ángel Torío López. Ed. Comares. Granada. 1999.

AVELLA FRANCO, Pedro Oriol. *Programa metodológico en el sistema penal acusatorio*. Fiscalía General de la Nación. Bogotá. 2007.

BACIGALUPO, Enrique. *El debido proceso penal*. Ed. Hammulabi. Buenos Aires. 2005.

BECCARIA, Cesare. *De los delitos y las penas*, trad. De Francisco Tomás y Valiente. Ed. Aguilar Madrid. 1982.

BOBBIO, Norberto. *El tiempo de los derechos*. Madrid. Editorial Sistema. 1991.

CABEZA OLMEDA, Araceli Manjón. *La atenuante analógica de dilaciones indebidas*. Ed. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad. Madrid. 2007.

CAFFERATA NORES, José I. *Proceso penal y derechos humanos. La influencia de la normativa supranacional sobre derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal argentino*. 2ª edición. Editores del Puerto. Argentina. 2008.

CARNELUTTI Francisco. *“Como se hace un Proceso”*, 3ra reimpresión, trad. Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redin, Ed. Legis, Bogotá, 2002.

CASTILLEJO MANZANARES, Raquel. *Hacia un nuevo proceso penal. Cambios necesarios*. Ed. La ley. Madrid. 2010.

CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio. *Individualización judicial de la pena.* Ed. Colex. Madrid. 1997.

COBO DEL ROSAL, Manuel. QUINTANAR DÍEZ, Manuel; ZABALA LÓPEZ-GÓMEZ, Carlos. *Derecho Procesal Penal Español.* Ed. Cesej. Madrid. 2006.

CNMH. *Archivos de graves violaciones a los DD.HH., infracciones al DIH, memoria histórica y conflicto armado. Elementos para una política pública.* Bogotá. CNMH. 2014. Se puede consultar en: <file:///E:/Archivos%20de%20graves%20violaciones%20a%20los%20DDHH,%20infracciones%20al%20DIH,%20memoria%20histórica%20y%20conflict%20armado%20-%20CNMH.pdf>

COLUMNA HERRERA, Luis Miguel. *Juicios rápidos por delitos y faltas.* Ed. Instituto de Estudios Almerienses. Almeria. 2004.

CORDÓN MORENO, Faustino. *Las Garantías Constitucionales del Proceso Penal.* 2ª edición. Ed. Aranzadi. Navarra. 2001.

DE DIEGO DÍEZ, LUIS ALFREDO. *Justicia Criminal Consensuada.* Ed. Tirant Monografías. Valencia. 1999.

DE LA HERA OCA, MANUEL *Los principios del proceso penal. Cuadernos de derecho judicial.* Ed. Consejo general del poder judicial. Madrid. 1992.

DE LA OLIVA SANTOS, Andrés. Director. **AGUILERA MORALES, Marien; CUBILLO, Ignacio.** Coordinadores. *La Justicia y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.* Ed. Colex. Madrid. 2008.

DELGADO MARTÍN, Joaquín. *La reforma a la justicia. La protección de la víctima por el sistema penal.* Coordinadores. Coral Arangüena. Ed. Lex Nova. Valladolid. 2008.

ESPARZA LEIBAR, Iñaki. *El principio del debido proceso.* Editorial J.M. Bosch Editor, S.A. Madrid. 1995.

FERRAJOLI, LUIGI. *Derecho y razón, Teoría del garantismo penal.* Ed. Trotta, Madrid. 1997.

FERRAJOLI, LUIGI. *Derechos y garantías.* Ed. Trotta. Madrid. 1999.

FERREIRA, Marcelo; PÉREZ SOLLA, María Fernanda; TAMBUSI, Carlos E. *Derechos Humanos.* Ed. Fundación de derecho administrativo. 4º edición. Buenos Aires. 1999.

FERRER MAC- GREGOR, Eduardo y HERRERA GARCÍA, Alfonso. Coordinadores. *Dialogo jurisprudencial en Derechos Humanos entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales.* Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2013.

FERNÁNDEZ Manuel Ayo. *Jurisprudencia Constitucional Penal Del Artículo 24 De La Constitución Española.* Colección doctrina y jurisprudencia. Madrid. 1997

FORER, Andreas y LÓPEZ DÍAZ, Claudia. *Selección y priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes internacionales.* Un estudio comparado. Ed. GAUG. Montevideo. 2011.

GALDÁMEZ ZELADA, Liliana. *El deber de prevenir, juzgar y sancionar violaciones de Derechos Humanos: el caso chileno.* Ed. Universidad Deusto. Bilbao. 2011.

GARCÍA ROCA, Javier, “y otros”. *El dialogo entre los sistemas europeo y americano de derechos humanos.* Ed. Civitas. Pamplona. 2012.

GARCIA, Paloma “y otros”. *Garantías fundamentales del proceso penal en el espacio judicial europeo.* Ed. Colex. 2007.

GIMENO SENDRA, Vicente. *Manual de Derecho Procesal Penal.* Ed. Colex. Madrid. 2008.

GÓMEZ SANTAMARIA, Ma. De Los Ángeles. *La reforma del proceso penal. II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas como garantía fundamental en el proceso penal.* Ed. Ministerio de Justicia. Madrid. 1989.

GONZÁLEZ MORALES, Felipe. *Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Transformaciones y Desafíos.* Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2013.

GROS ESPIELL, Héctor. *Derechos Humanos y Vida Internacional.* Ed. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 1993.

HERNÁNDEZ GARCÍA; J. Bach, FABREGÓ, R; SUÁREZ, JP Yllanes: *“Jurisprudencia procesal- penal del Tribunal Supremo (un análisis crítico). (Monografía. Revista Aranzadi de Derecho y Procesal y Penal).* Madrid. 2007.

HERRENDORF, Daniel E. *Los Derechos Humanos ante la justicia. Garantía de la libertad innominada.* Ed. Abeledo – Perrot. Buenos Aires. 1998.

HUERTAS DÍAZ, Omar; TRUJILLO LONDOÑO, Francisco Javier; LOZANO PACHECO, Luis Gonzalo y SANABRIA RINCÓN, José Alfredo *El Derecho Al Debido Proceso Y A Las Garantías Judiciales En la Dimensión Internacional de los Derechos Humanos.* Ed. Ibañez. Bogotá. 2004.

LANDA ARROYO, César. *El derecho al debido proceso en la jurisprudencia: Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Tribunal Constitucional de Perú. Corte Interamericana de Derechos Humanos.* Volumen I. Ed. Colección Cuadernos de la Jurisprudencia. Perú. 2012.

LANZAROTE MARTÍNEZ, PABLO. *La vulneración del plazo razonable en el proceso penal.* Ed. Comares. Granada. 2005.

LÓPEZ MUÑOZ, Riánsares. *Dilaciones indebidas y responsabilidad patrimonial de la administración de justicia.* Ed. Comares. Granada. 1996.

MANCILLA OVANDO, Jorge Alberto. *Las garantías individuales y su aplicación en el proceso penal.* Ed. Porrúa. México. 2000.

MELERO BOSCH, Lourdes V. Director. REVERON PALENZUELLA, Benito *La agilización del proceso penal y las garantías de defensa del imputado en la instrucción de los juicios rápidos.* Ed. Universidad de la Laguna. Tenerife. 2006/07.

MEZGER, Edmund *Derecho penal. Parte General,* (Conrado A. Finzi, Traduc.), Ed. Bibliográfica de Buenos Aires, 6ta. Edición alemana, Buenos Aires. 1958

MIR PUIG, Santiago. *Derecho Penal. Parte General.* Ed. Reppertor, Barcelona. Sexta edición. 2002.

MIR PUIG, Santiago. *Introducción a las bases del derecho penal* ,2ª edición. Ed. IBdef, Montevideo – Buenos Aires. 2003.

MORELLO, Augusto M. *El proceso justo, del garantismo formal a la tutela efectiva de los derechos.* Ed. Librería Platense. Argentina. 1995.

MORENO CATENA, VÍCTOR. *El proceso penal español. Algunas alternativas para la reforma. Sistemas penales europeos.* Escuela judicial. 2002.

MORENO CATENA, VÍCTOR. *Los nuevos procesos penales (I). El procedimiento abreviado.* Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. 2004.

O'DONELL, DANIEL. *Derecho internacional de los derechos humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano.* Editado por Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 1ª Edición. Bogotá, 2004.

O'DONIELL, Daniel, UPRIMY, Margarita Inés y VALENCIA VILLA, Alejandro. *Compilación de jurisprudencia y doctrina nacional e internacional.* Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 3ª edición, V.I. Bogotá, 2003.

OFICINA EN COLOMBIA ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. *Compilación de*

Jurisprudencia y Doctrina Nacional e Internacional. Segunda edición. Bogotá. Vol. I. 2002.

OLÁSOLO, Alonso Héctor y GALAIN PALERMO, Pablo. *Dialogo jurisprudencial en Derechos Humanos. Entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2013.

PASTOR, DANIEL R. *El plazo razonable en el proceso del estado de derecho*. Ed. AD- HOC. 1ª Edición. Argentina. 2002.

PEDRAZ PENALVA, Ernesto. *Constitución, jurisdicción y proceso*. Ed. Akal, S.A. Madrid, 1990

PEDRAZ PENALVA, Ernesto. *Derecho Procesal Penal. Tomo I. Principios de derecho procesal penal*. Ed. Colex. Madrid. 2000.

PÉREZ, C., Granados. *Acuerdos del pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremos para unificación de la jurisprudencia. Años 1991 – 2008*. Tirant lo Blanch. Valencia. 2008.

PICAZO GIMÉNEZ, IGNACIO DíEZ “y otros” Dirigidos por ALZAGA VILLAAMIL, Oscar. *Comentarios A La Constitución Española De 1978*. Tomo III. Artículos 24 a 38. Editoriales de derecho reunidas. Madrid.1996.

PICÓ I JUNOY, Jhoan. *Las garantías constitucionales del proceso*. Ed. Bosh. Barcelona. 2012.

PUYOL MONTERO Francisco Javier. *Enjuiciamiento criminal. Ley y legislación complementaria. Doctrina y jurisprudencia*. Ed. Edigrafos. Madrid. 1998.

QUERALT JIMÉNEZ, Argelia. *La interpretación de los derechos: del Tribunal de Estrasburgo al Tribunal Constitucional.* Ed. Centro de estudios políticos y constitucionales. Madrid. 2008.

QUISPE REMÓN, Florabel y BUSTAMANTE Alarcón Reynaldo. Coordinadores. *Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad. El caso Fujimori.* Ed. Dykinson S.L. Perú. 2011.

REY CANTOR, Ernesto. *Control De Convencionalidad De Las Leyes Y Derechos Humanos.* Ed. Pórrua. Argentina. 2008.

ROBERT, Alexis. *Sistemas jurídicos, principios jurídicos y razón práctica.* Ed. Universidad de Alicante. 1998.

RODÉS MATEU, Adriá. *El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Estudio de su configuración constitucional y de su restablecimiento en el ordenamiento jurídico español.* Ed. Atelier. Barcelona. 2009.

RUIZ VADILLO, Enrique. *Algunas breves consideraciones sobre las dilaciones indebidas en el proceso penal español.* Boletín de información del Ministerio de Justicia, No 1690, Madrid. 1993.

RUIZ VADILLO, Enrique. *El Derecho Penal Sustantivo y el Proceso Penal. Garantías Constitucionales Básicas En La Realización De La Justicia.* Ed. Colex. Madrid. 1997.

SALINAS ALCEGA, Sergio. *El Sistema Europeo De Protección De los Derechos Humanos En El Siglo XXI.* Editorial Iustel. 1ª edición. Madrid. 2009.

SALMÓN, Elizabeth y BLANCO Cristina. *El derecho al debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Instituto de democracia y derechos humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.* 1º edición. Perú. 2012.

SARMIENTO DANIEL; MIERES MIERES, Luis Javier Y PRESNO LINERA, Miguel. *Las sentencias básicas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estudio y jurisprudencia.* Ed. Thomson Civitas. Madrid. 2007.

TRILLO NAVARRO, Jesús Pórfilo. *El fiscal en el nuevo proceso penal. Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal- reforma 2007.* Ed. Comares. Granada. 2008

TUR AUSINA, Rosario. *Garantía De Derechos Y Jurisdicción Constitucional. Efectividad Del Amparo Tras La Sentencia Estimatoria.* Ed. Tirant. Valencia. 2008.

VALDÉS GARCIA, Carlos “y otros”. *En estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat.* Ed. Edisofer. Madrid. 2008.

FERNÁNDEZ –VIAGAS BARTOLOMÉ, Plácido. *El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.* Ed. Civitas. Madrid. 1994.

ZAFFARONI, Alagia, Slokar. *Derecho Penal. Parte General, “La violación del principio de inocencia avanza con la duración del proceso”.* 2º edición, ed. Ediar. Buenos Aires. 2002.

ARTÍCULOS

ABUCHAIBE, Heidi. *La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la justicia transicional en Colombia*. Universidad Externado de Colombia. http://portal.uexternado.edu.co/pdf/5_revistaZero/ZERO%2026/HeidiAbuchaibe.pdf

AGUILAR CAVALLO, Gonzalo. *Crímenes internacionales y la imprescriptibilidad de la acción penal y civil: caso chileno*. Revista Ius et Praxis, v. 14. No. 2. 2008. Disponible en: <http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v14n2/art06.pdf>

AGUILERA, Mario. *Refundemos la Nación: Perdonemos a delincuentes políticos y comunes*. Análisis político No. 76. IEPRI Universidad Nacional de Colombia. 2012. Disponible en: <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/rt/printerFriendly/43493/44782>

AMADO RIVADENEIRA, Alex. *El derecho al plazo razonable como contenido implícito del debido proceso: desarrollo jurisprudencial a nivel internacional y nacional*. Revista internautica de práctica jurídica. Número 27, año 2011. Disponible en: https://www.uv.es/ajv/art_jcos/art_jcos/num27/2Derecho%20al%20plazo%20razonable.pdf

ARDILA TRUJILLO, Mariana. *La prohibición de dilaciones injustificadas en la jurisprudencia constitucional*. Revista derecho el Estado No 23. 2009. Disponible en: <https://www.minjusticia.gov.co/InvSocioJuridica/>

CARBALLO CALERO, R. Fernández *Dilaciones indebidas en el proceso penal y atenuante analógica del artículo 21.6 del cuerpo punitivo*. Revista del poder judicial No 86. 2007.

CATALATA I BAS, Alexandre H. La Jurisprudencia del TEDH Sobre El Derecho A Un Proceso Sin Dilaciones Indebidas Y Su Recepción Por El Tribunal Constitucional. *Dereito*. Vol. 11. No. 1: 25-60, 2002.

FERRAJOLI, Luigi. *Garantismo Penal*. Estudios jurídicos No 34. Universidad Nacional Autónoma de México. 2006. Disponible en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/9/4122/1.pdf>

GARCÍA - MALTRÁS DE BLAS, Elsa. *Dilaciones indebidas y duración de los procesos en el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: del tiempo razonable al tiempo óptimo y previsible*. Indret. Revista para el análisis del derecho. 2007. Disponible en: <http://www.indret.com>

JUECES Y POLICÍAS. *Algunas razones de una relación disfuncional*. Revista del poder judicial No. 88. Consejo General del Poder Judicial. 2010. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1214>

PASTOR, Daniel R. *Acerca del derecho fundamental al plazo razonable de duración del proceso penal*. Revista Jueces para la Democracia. No 49. 2004. Disponible en: http://www.derecho.uchile.cl/cej/recej/recej4/archivos/Articulo%20sobre%20plazo%20razonable%20Pastor_10_.pdf

PERELLO DOMENECH, Isabel. *Revista Jueces para la democracia*. No 28. 1977.

PÉREZ CRUZ, Agustín y RODRÍGUEZ GARCÍA, Nicolás *Proceso penal sin dilaciones indebidas: De la atenuante analógica a la atenuante específica del Código Penal*. AFDUC 15, 2011.

PHILIPPE, Xavier. *Los principios de jurisdicción Universal y complementariedad: su interconexión.* Revista Internacional Review. 2006. No 862. Disponible en:

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/irrc_862_philippe.pdf

RAMÍREZ ORTIZ, José Luis. *Derechos Fundamentales y Derecho Penal: La circunstancia Atenuante de las Dilaciones Indebidas.* Revista Derecho y Proceso Penal No. 27. Ed. Aranzadi S.A. 2012. Disponible en: <http://www.juecesdemocracia.es/pdf/dilacionesindebidasJos%C3%A9LuisRam%C3%ADrez.pdf>

RAMÍREZ ORTIZ, José Luis. “Jueces y Policías. “*Algunas razones de una relación disfuncional*”. Revista del poder judicial No. 88. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2010.

VEGA GONZÁLEZ, Paulina. *El papel de las víctimas en los procedimientos ante la Corte Penal Internacional: sus derechos y las primeras decisiones de la Corte.* Revista Internacional de Derechos Humanos No 5. 2006. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r23476.pdf>

VIDAL FUEYO, Camilo. *El principio de proporcionalidad como parámetro de constitucionalidad de la actividad del juez.* Revista Anuario de derecho constitucional latinoamericano. 2005. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/R21745.pdf>

SENTENCIAS TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

CASO WEMHOFF VS. ALEMANIA. Sentencia de 27 de junio de 1968.

CASO NEUMEISTER VS. AUSTRIA. Sentencia de 27 de junio de 1968.

CASO STÖGMÜLLER VS. AUSTRIA. Sentencia de 10 de noviembre de 1969.

CASO REINGEISEN CONTRA AUSTRIA. Sentencia de 16 de julio de 1971.

CASO KÖNIG VS. ALEMANIA. Sentencia de 28 de junio de 1978.

CASO BUCHHOLZ VS. ALEMANIA. Sentencia de 6 de mayo de 1981.

CASO ECKLE VS ALEMANIA. Sentencia de 15 de julio de 1982.

CASO FOTI Y OTROS VS. ITALIA. Sentencia de 10 de diciembre de 1982.

CASO ZIMMERMANN Y STEINER VS. SUIZA. Sentencia de 13 de julio de 1983.

PRETTO VS. ITALIA. Sentencia de 24 de octubre de 1984.

CASO H. VS. FRANCIA. Sentencia de 24 de octubre de 1984

CASO DEUMELAND VS. ALEMANIA. Sentencia de 29 de mayo de 1986.

CASO MILASI VS. ITALIA. Sentencia de 25 de junio de 1987.

CASO BAGGETA VS. ITALIA. Sentencia de 25 de junio de 1987.

CASO UNIÓN ALIMENTARIA SANDERS S.A VS. ESPAÑA. Sentencia de 7 de julio de 1989.

CASO B. VS. AUSTRIA. Sentencia de 28 de marzo de 1990.

CASO OBERMEIER VS. AUSTRIA. Sentencia de 28 de junio de 1990.

CASO MOREIRA DE AZEVEDO VS. PORTUGAL. Sentencia de 23 de octubre de 1990.

CASO ABDOELLA VS. PAISES BAJOS. Sentencia de 25 de noviembre de 1992.

CASO RUIZ MATEOS VS. España. Sentencia de 23 de junio de 1993.

CASO SCOPELLITI VS. ITALIA. Sentencia de 23 de noviembre de 1993.

CASO KARAKAYA VS. FRANCIA. Sentencia de 26 de agosto de 1994.

CASO KATTE KLITSCHKE DE LA GRANDE Vs. ITALIA. Sentencia de 27 de octubre de 1994.

CASO BEAUMARTIN VS. FRANCIA. Sentencia de 24 de noviembre de 1994.

CASO ACQUAVIVA VS. FRANCIA. Sentencia de 21 de noviembre de 1995.

CASO YAGGI Y SARGIN VS. TURQUIA. Sentencia de 8 de junio de 1995.

CASO ALLENET DE RIBEMONT VS. FRANCIA. Sentencia de 10 de febrero de 1995.

CASO A Y OTROS VS. DINAMARCA. Sentencia de 8 de febrero de 1996.

CASO PASKHALIDIS Y OTRS VS. GRECIA. Sentencia de 19 de marzo de 1997.

CASO RICHARD VS. FRANCIA. Sentencia de 22 de abril de 1998.

CASO MINJAT VS. SUIZA. Sentencia de 28 de octubre de 2003.

CASO BENDAYAN AZCANTOT Y BENALAL BENDAYAN VS. ESPAÑA. Sentencia de 9 de junio de 2009.

CASO ORTUÑO ORTUÑO VS. ESPAÑA. Sentencia de 27 de septiembre de 2011.

CASO SERRANO CONTRERAS VS. ESPAÑA. Sentencia de 20 de marzo de 2012.

CASO HOHOLM VS. SLOVAKIA. Sentencia de 13 de febrero de 2015.

CASO BUJKOVIĆ VS. MONTENEGRO. Sentencia de 10 de marzo de 2015

CASO MENENDEZ GARCÍA Y ÁLVAREZ GONZÁLEZ VS. ESPAÑA. Sentencia de 15 de marzo de 2016.

CASO ELEFTHERIOS G. KOKKINAKIS - DILOS KYKLOFORIAKI A.T.E. VS. GRECIA. Sentencia de 20 de octubre de 2016.

SENTENCIAS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ VS. HONDURAS. Sentencia de 29 de julio de 1988.

CASO GODÍNEZ CRUZ VS. HONDURAS. Sentencia de 20 de enero de 1989.

CASO CABALLERO DELGADO Y SANTANA VS COLOMBIA. Sentencia de 8 de diciembre de 1995.

CASO GARRIDO Y BAIGORRIA VS. ARGENTINA. Sentencia de 2 de febrero de 1996.

CASO GENIE LACAYO VS. NICARAGUA. Sentencia de 29 de enero de 1997.

CASO SUÁREZ ROSERO VS. ECUADOR. Sentencia de 12 de noviembre de 1997.

CASO “NIÑOS DE LA CALLE” (VILLAGRÁN MORALES Y OTROS) VS. GUATEMALA. Sentencia de 19 de noviembre 1999.

CASO TRUJILLO OROZA VS. BOLIVIA. Sentencia de 26 de enero de 2000.

CASO BARRIOS ALTOS VS. PERÚ. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001.

CASO LAS PALMERAS VS. COLOMBIA. Sentencia de 6 de diciembre de 2001.

CASO CANTOS VS. ARGENTINA. Sentencia de 28 de noviembre de 2002.

CASO JUAN HUMBERTO SÁNCHEZ VS. HONDURAS. Sentencia de 7 de junio de 2003.

CASO BULACIO VS. ARGENTINA. Sentencia de 18 de septiembre de 2003.

CASO MACK CHANG VS. GUATEMALA. Sentencia de 25 de noviembre de 2003.

CASO 19 COMERCIANTES VS. COLOMBIA. Sentencia de 5 de julio de 2004.

CASO HERMANAS SERRANO CRUZ VS. EL SALVADOR. Sentencia de 1 de marzo de 2005.

CASO GUTIÉRREZ SOLER VS. COLOMBIA. Sentencia de 12 de septiembre de 2005.

CASO MASACRE DE MAPIRIPÁN VS. COLOMBIA. Sentencia de 15 de septiembre de 2005.

CASO XIMENES LOPES VS. BRASIL. Sentencia de 4 de julio de 2006.

CASO MASACRE DE PUEBLO BELLO VS. COLOMBIA. Sentencia de 31 de enero de 2006.

CASO COMUNIDAD MOIWANA VS. SURINAM. Sentencia de 15 de junio de 2005.

CASO BALDEÓN GARCÍA VS. PERÚ. Sentencia de 6 de abril de 2006.

CASO MASACRES DE ITUANGO VS. COLOMBIA. Sentencia de 1 de julio de 2006.

CASO MONTERO ARANGUREN Y OTROS (RETÉN DE CATIA) VS. VENEZUELA. Sentencia de 5 de julio de 2006.

CASO SERVELLÓN GARCÍA Y OTROS VS. HONDURAS. Sentencia de 21 de septiembre de 2006.

CASO GOIBURÚ Y OTROS VS. PARAGUAY. Sentencia de 22 de septiembre de 2006.

ALMONACID ARELLANO Y OTROS VS CHILE. Sentencia de 26 de septiembre de 2006.

CASO PENAL MIGUEL CASTRO CASTRO VS. PERÚ. Sentencia de 25 de noviembre de 2006.

CASO LA CANTUTA VS. PERÚ. Sentencia de 29 de noviembre de 2006.

CASO MASACRE DE LA ROCHELA VS. COLOMBIA. Sentencia de 11 de mayo de 2007.

CASO BUENO ALVES VS. ARGENTINA. Sentencia de 11 de mayo de 2007.

CASO ESCUÉ ZAPATA VS. COLOMBIA. Sentencia de 4 de julio de 2007.

CASO BAYARRI VS. ARGENTINA. Sentencia de 30 de octubre de 2008.

CASO TICONA ESTRADA Y OTROS VS. BOLIVIA. Sentencia de 27 de noviembre de 2008.

CASO VALLE JARAMILLO Y OTROS VS. COLOMBIA. Sentencia de 27 de noviembre de 2008.

CASO KAWAS FERNÁNDEZ VS. HONDURAS. Sentencia de 3 de abril de 2009.

CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO ALGODONERO”) VS. MÉXICO. Sentencia de 16 de noviembre de 2009.

CASO MASACRE DE LAS DOS ERRES VS. GUATEMALA. Sentencia de 24 de noviembre de 2009.

CASO MANUEL CEPEDA VARGAS VS. COLOMBIA. Sentencia de 26 de mayo de 2010.

CASO COMUNIDAD INDÍGENA XÁKMOK KÁSEK VS. PARAGUAY. Sentencia de 24 de agosto de 2010.

CASO FERNÁNDEZ ORTEGA Y OTROS. VS. MÉXICO. Sentencia de 30 de agosto de 2010.

CASO IBSEN CÁRDENAS EIBSEN PEÑA VS. BOLIVIA. Sentencia de 1º de septiembre 2010.

CASO GOMES LUND Y OTROS VS. BRASIL. Sentencia de 24 de noviembre de 2010.

CASO GELMAN VS. URUGUAY. Sentencia de 24 de febrero de 2011.

CASO TORRES MILLACURA Y OTROS VS. ARGENTINA. Sentencia de 26 de agosto de 2011.

CASO FORNERON E HIJA VS. ARGENTINA. Sentencia de 27 de abril de 2012.

CASO RESTREPO VÉLEZ Y FAMILIARES VS. COLOMBIA. Sentencia de 3 de septiembre de 2012.

CASO MASACRE DE SANTO DOMINGO VS. COLOMBIA. Sentencia de 30 de noviembre de 2012.

GARCÍA LUCERO Y OTRAS VS. CHILE. Sentencia de 28 de agosto de 2013.

CASO COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DESPLAZADAS DE LA CUENCA DEL RÍO CACARICA (OPERACIÓN GÉNESIS) VS. COLOMBIA. Sentencia de 20 de noviembre de 2013.

CASO VELÁSQUEZ PAIZ Y OTROS VS. GUATEMALA. Sentencia de 23 de noviembre de 2015.

CASO QUISPIALAYA VILCAPOMA. Sentencia de 19 de noviembre de 2015.

CASO HERRERA ESPINOZA Y OTROS VS. ECUADOR. Sentencia de 1 de septiembre de 2016.

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA – TJUE

CASO T- 73/95. Sentencia de 19 de marzo de 1997.

CASO T-213/95 y T- 18/96. Sentencia de 22 de octubre de 1997.

CASO T- 190/00. Sentencia de 27 de noviembre de 2003.

CASO T- 144/02. Sentencia de 5 de octubre de 2004.

CASO T- 347/ 03. Sentencia de 30 de junio de 2005.

CASO T-95/03. Sentencia de 12 de diciembre de 2006.

CASO C-385/07. Sentencia de 16 de julio 2009.

CASO F-124/05 Y F-96/06. Sentencia de 13 de enero de 2010.

CASO T- 214/12. Sentencia de 5 de junio de 2012.

CASO T- 267/07. Sentencia de 7 de junio de 2013.

CASO C-243/12. Sentencia de 19 de junio de 2014.

CASO T-47/10. Sentencia de 15 de julio de 2015.

CASO T- 461/13. Sentencia de 26 de noviembre 2015.

SENTENCIAS CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA

Colombia. Sala Octava de Revisión. Sentencia del 31 de octubre de 2002.
Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis. Sentencia Número T-924-02.

Colombia. Sala Plena de la Corte. Sentencia del 27 de octubre de 1999.
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz. Sentencia Número. C-846-99.

Colombia. Sala Tercera de Revisión. Sentencia del 24 de junio de 1992.
Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero & Fabio Morón Díaz.
Sentencia. Número T-431-92.

Colombia. Sala Quinta de Revisión. Sentencia del 27 de abril de 1995.
Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Sentencia.
Número T-190-95.

Colombia. Sentencia del 16 de mayo de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Fabio
Morón Díaz. Sentencia. Número C-218 – 96.

Colombia. Sala Primera de Revisión. Sentencia del 15 de octubre de 1998.
Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra. Sentencia. Número T-577-
98.

Colombia. Sentencia del 10 de mayo de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Jose
Gregorio Hernández Galindo. Sentencia. Número T-292-99.

Colombia. Sentencia del 31 de julio de 2000. Magistrado Ponente: Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia. Número T-966-00.

Colombia. Sala Segunda de Revisión. Sentencia del 14 de noviembre de 2002. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra. Sentencia. Número T-986-02.

Colombia. Sala Novena de Revisión. Sentencia del 10 de julio de 2003. Magistrado Ponente: Dr. Clara Inés Vargas Hernández. Sentencia. Número T-558-03.

Colombia. Sentencia del 10 de febrero de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Martha Victoria Sáchica Méndez. Sentencia. Número C-067 -03.

Colombia. Sala Séptima de Revisión. Sentencia del 17 de julio de 2003. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynett. Sentencia. Número T-589-03.

Colombia. Sala Plena. Sentencia del 30 de septiembre de 2003. Magistrado Ponente: Dr. Héctor Enrique & Quiroga Cubillos Dary Jazmín Hernández Navarro. Sentencia. Número C-874-03.

Colombia. Sala Novena de Revisión. Sentencia del 24 de octubre de 2003. Magistrado Ponente: Dr. Clara Inés Vargas Hernández. Sentencia. Número T-997-03.

Colombia. Sala Plena. Sentencia del 15 de noviembre de 2005. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia. Número C- 1154 de 2005.

Colombia. Sala Plena. Sentencia del 9 de junio de 2005. Magistrado Ponente: Dr. Clara Inés Vargas Hernández. Sentencia. Número C- 591 de 2005.

Colombia. Sala Plena. Sentencia del 9 de junio de 2005. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis. Sentencia. Número C- 592 de 2005.

Colombia. Sala Plena. Sentencia del 10 de mayo de 2006. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería & Clara Inés Vargas Hernández. Sentencia. Número C- 355 de 2006.

Colombia. Sala Octava de Revisión. Sentencia del 7 de marzo de 2006. Magistrado Ponente: Dr. Clara Inés Vargas Hernández. Sentencia. Número T-171-06.

Colombia. Sala Plena. Sentencia del 21 de marzo de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia. Número C-209 de 2007.

Colombia. Sala Plena. Sentencia del 21 de marzo de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sentencia. Número C-210-07.

Colombia. Sala Plena. Sentencia del 10 de septiembre de 2008. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia. Número C-879/08.

Colombia. Sala Plena. Sentencia del 4 de diciembre de 2008. Magistrado Ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Sentencia. Número C-1198-08.

Colombia. Sala Plena. Sentencia del 3 de marzo de 2010. Magistrado Ponente: Dr. Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia. Número C-144-2010.

Colombia. Sentencia del 22 de marzo de 2012. Magistrado Ponente: Dr. Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia. Número C-239-2012.

Colombia. Sala Plena. Sentencia del 26 de junio de 2014. Magistrado Ponente: Dr. Alberto Rojas Ríos. Sentencia. Número C-390-2014.